

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA**



**TESIS DOCTORAL**

**Hacia una ecología política de las fronteras.**  
**El caso de Esmeraldas en Ecuador**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA**  
**PRESENTADA POR**

**Martha Cecilia Moncada Paredes**

**Directora**

**María Dolores Lois Barrio**

**Madrid**

# HACIA UNA ECOLOGÍA POLÍTICA DE LAS FRONTERAS. EL CASO DE ESMERALDAS EN ECUADOR

Memoria para optar al título de Doctora presentada por

Martha Cecilia Moncada Paredes

Directora: María Dolores Lois Barrio

Programa de Doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración y  
Relaciones Internacionales  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  
Universidad Complutense de Madrid



Para Juan, mi soporte, mi amigo y mayor estímulo

Para Tania y Juan Andrés, mi inspiración y fuente  
de aprendizaje

Para el pueblo afroesmeraldeño del norte de  
Esmeraldas que pese a todas las adversidades sigue  
tejiendo esperanzas

## Agradecimientos

Escribir una tesis doctoral es siempre una decisión individual motivada por alguna manifestación de la realidad que moviliza pensamientos, reflexiones y también emociones. Esta decisión personal a menudo flaquea, retrocede, vacila, interroga. Más allá de la necesaria dosis de voluntad que requiere cumplir y comprometerse con la decisión asumida, en el largo y complejo camino de iniciar, continuar, insistir, y terminar una tesis doctoral, hay una constelación de personas que han participado de los altos y bajos de este trajinar, que pacientemente han sabido escuchar; otras quienes sin condicionamientos compartieron sus experiencias y realidades, y otras más que tuvieron la generosidad de orientar y acompañar.

Al cabo de años tan largos e intensos difícilmente podría retener en la memoria todos los apoyos recibidos y sería injusto no consignar cada uno de los nombres y expresarles mi agradecimiento. Por eso opto por exteriorizar mi gratitud a amigas y amigos en mi país y en España que me estimularon a continuar, que estuvieron atentas y atentos a la evolución de esta tesis y que en muchas ocasiones fueron un apoyo en la búsqueda y entrega de documentos, referencias y contactos.

Este agradecimiento no podría sin embargo dejar de señalar de manera explícita ciertos nombres que estarán presentes por su compromiso intelectual, político o afectivo con las reflexiones y contenidos desarrollados en esta tesis. Y en ese orden, mi gratitud a María Lois, directora y tutora de esta tesis, quien no solo con lucidez y sabiduría me orientó y contribuyó a mejorar mi formación académica, sino que me entregó seguridad y confianza a lo largo de este esfuerzo; a Joan Martínez-Alier, cuyo pensamiento e ideas compartidas siempre fueron una guía para reorientar, aclarar y complementar la redacción de esta tesis; a Juan García, que aunque ya no está, me entregó la visión de una “otra” Esmeraldas; a Rocío Peralvo, incansable defensora de la vida, por siempre abrirme puertas; a todas las personas que pacientemente respondieron a las entrevistas en diversos lugares de Esmeraldas, en Quito, en Madrid y de manera virtual; a Juan, otra vez, por acompañarme, por leer borradores inoficiosos, por enseñarme lo que no aprendí a tiempo ... por estar, y a mi madre, quien más allá de regalarme documentos históricos valiosos, me dio las raíces que explican mi interés por el primer territorio libre de la diáspora africana en el continente americano.



## Tabla de contenidos

Resumen.....	9
Lista de tablas.....	9
Lista de mapas .....	9
Lista de figuras y gráficos .....	10
Acrónimos .....	19
Introducción.....	22
1. Marco conceptual y analítico.....	27
2. Problema de la investigación .....	38
3. Preguntas de la investigación.....	39
4. Objetivos de la investigación .....	40
5. El universo de estudio.....	41
6. Metodología y diseño de la investigación.....	45
7. Estructura de la investigación .....	54
Capítulo 1. Marco Teórico .....	57
1.1. ¿Qué son las fronteras? .....	58
1.2. Fronteras, soberanía y manifestaciones de una tensión .....	60
1.3. Las fronteras, de líneas fijas a engranajes complejos .....	66
1.4. Viejas y nuevas cartografías .....	74
1.4.1. Estado y territorio, no siempre fue así ... y quizá no siempre será .	74
1.4.2. Otras territorialidades inferiorizadas.....	80
1.4.3. Una nación de naciones: el Estado Plurinacional .....	85
1.4.4. Dificultades para imaginar y construir un “otro” Estado .....	92
1.5. Regiones fronterizas, fronteras extractivas y colonialidad .....	97
1.5.1. Dependencia, reprimarización y extractivismo .....	97
1.5.2. “Acumulación por desposesión” y fronteras extractivas: dos nociónes complementarias sobre la continuidad del saqueo .....	111
1.5.3. Conflictos socio-ambientales, justicia ambiental y territorios racializados.....	116
Capítulo 2. Fronteras extractivas y fronteras de seguridad .....	127
2.1. La resignificación de las fronteras o el paso de territorios subalternos a áreas de interés estratégico .....	128
2.2. La renovada importancia de las fronteras y la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA).....	134

2.2.1.	IIRSA: iniciativa de internacionalización de espacios subalternizados .....	134
2.2.2.	Desintegración social de las fronteras.....	142
2.3.	Securitización y control en las fronteras .....	145
2.4.	El doble proceso de fronterización/desfronterización .....	160
<b>Capítulo 3. La construcción de las fronteras en Ecuador .....</b>		<b>162</b>
3.1.	Fronteras y construcción de un proyecto nacional único .....	163
3.2.	La invención de un país.....	171
3.2.1.	Un territorio, un Estado, ¿una nación? .....	181
3.2.2.	Consolidación territorial y fronteras internas .....	192
3.2.3.	El capitalismo avanza y el Estado se fortalece .....	195
3.2.4.	¿Estado-país o Estado-nación? Ecuador en los últimos cincuenta años	200
<b>Capítulo 4. La realidad de las fronteras del norte del Ecuador .....</b>		<b>208</b>
4.1.	Tres fronteras y un solo límite territorial.....	209
4.2.	La población de las fronteras del norte del Ecuador .....	218
4.2.1.	Organizaciones sociales y fronteras .....	222
4.3.	Dinámica económica fronteriza.....	225
4.4.	Frontera norte y conflicto colombiano .....	231
4.5.	Movilidad humana en la frontera norte .....	235
4.5.1.	Refugio y frontera norte.....	235
4.5.1.1.	La respuesta del Estado ante el refugio y la movilidad humana internacional.....	239
4.5.1.2.	Prácticas discriminatorias e imaginarios respecto al refugio y la inmigración.....	242
4.5.2.	Desplazamiento interno y refugiados ambientales .....	249
4.6.	Desorganización de los territorios fronterizos .....	258
4.6.1.	La frontera a los ojos del Estado .....	258
4.6.1.1.	La región fronteriza del norte del Ecuador – Zona 1.....	259
4.6.1.2.	La visión de la frontera desde las provincias .....	263
4.6.1.3.	La visión de la frontera desde los gobiernos autónomos descentralizados: municipios y parroquias .....	265
4.6.1.4.	Otros instrumentos de planificación y ordenamiento territorial con implicaciones sobre la frontera norte .....	269
4.6.2.	Cinco décadas de integración fronteriza .....	271
4.6.3.	Nuevos enfoques, viejas prácticas: Plan Ecuador.....	278
4.6.4.	Una fortaleza en el norte de Ecuador .....	282
4.6.5.	Centralismo y excepción .....	289

<b>Capítulo 5. Colonialidad, racismo y extractivismo en el norte de Esmeraldas (estudio de caso) .....</b>	<b>294</b>
<b>5.1. Del “reino de la libertad” a la integración de Esmeraldas .....</b>	<b>297</b>
5.1.1. El poblamiento de Esmeraldas .....	297
5.1.2. De las minas a la compra de libertad, la autonomía y el territorio	300
5.1.3. El “descubrimiento” de Esmeraldas: el paso de lo invisible a lo útil	305
5.1.4. La gravitación del mercado mundial en la organización del espacio	311
5.1.5. Integración territorial y desintegración del espacio habitado .....	316
<b>5.2. La palma aceitera en el norte de Esmeraldas .....</b>	<b>322</b>
5.2.1. ¿Un programa agroindustrial para el progreso de la región fronteriza? .....	322
5.2.2. Tierras ocupadas, territorios vacíos .....	329
5.2.3. La palma aceitera y sus impactos: “proyectos contra la vida” .....	338
5.2.4. Y el progreso ... ¿llegó? .....	347
5.2.5. Un nuevo comienzo para la palma aceitera y la historia se repite.	354
5.2.6. Eje regional para la producción de agrocombustibles .....	359
5.2.7. El difícil camino de la resistencia .....	363
<b>5.3. Minería i-legal .....</b>	<b>368</b>
5.3.1. Reingreso de la minería en el norte de Esmeraldas .....	368
5.3.2. Minería, seguridad y violencia .....	369
5.3.3. El desastre ambiental y social ocasionado por la minería .....	372
5.3.4. La riqueza se va, las “sobras” son para los que se quedan .....	375
5.3.5. La minería continúa en medio de medidas cautelares y estados de excepción .....	377
5.3.6. Un modelo minero para el norte de Esmeraldas .....	383
5.3.7. La resistencia frente a la minería .....	388
<b>5.4. Visiones “otras” sobre la organización del espacio fronterizo .....</b>	<b>391</b>
5.4.1. El Territorio Región de El Pacífico .....	392
5.4.2. Territorios ancestrales, binacionales y de paz .....	398
<b>Capítulo 6. Reflexiones finales .....</b>	<b>403</b>
<b>Bibliografía .....</b>	<b>424</b>
<b>Anexos .....</b>	<b>456</b>
<b>Anexo 1. Cuestionario para entrevista a profundidad .....</b>	<b>457</b>

## **Lista de tablas**

Tabla 1. Instrumentos de planificación analizados según cobertura geográfica ...	49
Tabla 2. Detalle de las entrevistas realizadas .....	51
Tabla 3. Proyectos IIRSA con incidencia sobre la frontera norte del Ecuador .....	136
Tabla 4. Conflictos socio-ambientales en áreas fronterizas en América del Sur ..	143
Tabla 5. Gasto militar como porcentaje del PIB en los países de América del Sur (2005-2014) .....	149
Tabla 6. Conflictos fronterizos latentes en América Latina y el Caribe en 2016 .	154
Tabla 7. Población de la frontera norte ecuatoriana según auto-identificación (2010) .....	216
Tabla 8. Principales indicadores de la frontera norte y a nivel nacional (2014)	219
Tabla 9. Cantones y parroquias de la frontera norte .....	266
Tabla 10. Normativa para la frontera norte ecuatoriana .....	289
Tabla 11. Principales usos del territorio. Información parroquial .....	342

## **Lista de mapas**

Mapa 1. Ubicación geográfica del Ecuador.....	42
Mapa 2. Mapa de Esmeraldas por cantones .....	44
Mapa 3. Fronteras del norte del Ecuador. Distribución política-administrativa ...	209
Mapa 4. Conflictos y problemas en la frontera norte ecuatoriana.....	217
Mapa 5. Área de tratamiento preferencial de 40 km en la frontera norte ecuatoriana .....	258
Mapa 6. Áreas protegidas de la frontera norte ecuatoriana.....	269
Mapa 7. Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia .....	276
Mapa 8. Dispositivo militar en la frontera norte ecuatoriana. Situación 2009.....	282

Mapa 9. Ubicación de la provincia de Esmeraldas y división política por cantones .....	294
Mapa 10. Distribución espacial de cultivos de palma y de explotaciones mineras en Esmeraldas.....	319
Mapa 11. Ubicación de los cultivos de palma aceitera en el norte de Esmeraldas	324
Mapa 12. Ubicación de la actividad minera ilegal en Esmeraldas .....	368

## **Lista de figuras y gráficos**

Figura 1. Organización del espacio norte del Tahuantinsuyo.....	75
Gráfico 1. América Latina y el Caribe: exportaciones de productos primarios según su participación en el total (2000-2017) (Porcentaje del valor total de las exportaciones FOB de bienes) .....	98
Figura 2. Estado ecuatoriano y espacio .....	178
Gráfico 2. Distribución de la población refugiada reconocida y de la población solicitante de asilo en la frontera norte ecuatoriana .....	236
Gráfico 3. Evolución de la superficie dedicada al cultivo del banano en Esmeraldas (en hectáreas) .....	311
Gráfico 4. Evolución de la superficie y de la producción de palma aceitera a nivel nacional y en Esmeraldas (2002-2014) .....	322
Gráfico 5. Distribución de la superficie de palma aceitera en Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo según el Censo Palmero .....	329
Gráfico 6. Distribución de la tierra en el área de concentración de las plantaciones de palma aceitera .....	332

## Resumen

Las fronteras se han resignificado. Diversos estudios llevados a cabo en la última década dan cuenta de la importancia que éstas han adquirido. Si bien esta tesis se enmarca en esa tendencia, se distingue porque se concentra en el estudio de una frontera fundamentalmente conocida por el conflicto que vive Colombia y que ha tenido repercusiones en los países vecinos: se trata de la frontera norte ecuatoriana, de la provincia de Esmeraldas en el extremo occidental del Ecuador adyacente a Colombia y el Pacífico. Aunque la tesis examina los efectos del conflicto colombiano sobre este territorio fronterizo, su énfasis es comprender el sentido y carácter de las políticas definidas para promover su integración a su contenedor político, el Estado ecuatoriano en la perspectiva de contribuir en la generación de un marco interpretativo y analítico para comprender las dinámicas suscitadas en la incorporación de zonas fronterizas que históricamente han permanecido rezagadas, olvidadas, subalternizadas. De ahí el título de la tesis, “Hacia una ecología política de las fronteras. El caso de Esmeraldas en Ecuador”.

Para alcanzar este propósito central la tesis se plantea, como objetivos específicos, estudiar el proceso de construcción de las fronteras en el Ecuador y desentrañar las continuidades y rupturas entre el pasado y la realidad contemporánea; entender el ejercicio de la territorialidad de pueblos indios y negros que viven en la región fronteriza de Esmeraldas, los cambios operados en su territorialidad a lo largo del tiempo y sus actuales manifestaciones a la luz de la definición de Ecuador como un Estado Plurinacional; estudiar la articulación existente entre soberanía y territorialidad de cara a los actuales procesos de reorganización del capital a escala mundial y del papel que desempeña el Ecuador dentro de este patrón global de poder y dominación y su incidencia sobre Esmeraldas como provincia fronteriza, su población y su territorio y examinar y discutir las aproximaciones entre la ecología política y la perspectiva decolonial para la lectura de territorios fronterizos a partir del análisis de la problemática de Esmeraldas.

En esta trayectoria investigativa, esta tesis transita entre dos conceptos de frontera -el concepto de frontera proveniente de la geografía y el de fronteras extractivas que se deriva de la ecología política. La intención al poner en diálogo estos dos conceptos, y los marcos teóricos que los contienen, apunta a comprender cómo la riqueza natural de un lugar moldea y es moldeada por la expansión socio-espacial del capital y a capturar, de ese modo, las consiguientes transformaciones sociales y ecológicas asociadas a los

procesos de integración política y económica de los espacios fronterizos subalternizados. En la medida en que el avance de las fronteras extractivas sobre espacios revalorizados por el capital ha hecho posible entender que la división del trabajo no pasa únicamente por la geografía y por la disponibilidad de riqueza natural, sino también por fronteras raciales, los contenidos de la tesis se nutren también de los conceptos y enfoques de la perspectiva decolonial en tanto campo de pensamiento que abona en la comprensión de las asimetrías sociales, culturales, epistemológicas y económicas vigentes en la región.

La investigación documental y bibliográfica llevada a cabo, incluyendo fuentes teóricas y empíricas, políticas institucionales, normativa nacional regional y local, agendas y pronunciamientos de colectivos sociales; el trabajo de campo y particularmente la realización de entrevistas semi-estructuradas a un conjunto de actores pertenecientes a diversos intereses y experiencias con incidencia sobre el territorio y el análisis y procesamiento de información estadística, con el ánimo de lograr un balance entre información cualitativa y cuantitativa, posibilitaron la reconstrucción de la forma en cómo se fue moldeando el territorio sobre el que se levantó el Estado ecuatoriano, con una mirada detenida sobre la provincia de Esmeraldas. El análisis del discurso de estas fuentes permitió conocer las distintas visiones y relatos que existen y se han tejido sobre la frontera, particularmente sobre el segmento fronterizo de la denominada “provincia verde”, catalogada hasta bien avanzado el siglo XVII como “reino de la libertad”; el impacto de las políticas de integración regional que se promovieron desde el decenio de los 70 del siglo pasado y sus manifestaciones actuales, con énfasis en aquellas políticas con clara incidencia sobre la conformación de las fronteras como las vinculadas con la integración de la infraestructura y la securitización de los espacios fronterizos. En este marco, la tesis desemboca en un análisis acerca de la realidad actual de la frontera norte ecuatoriana y de sus principales fenómenos sociales, políticos e institucionales para centrarse luego en el estudio de caso referido al norte de Esmeraldas donde se concede una particular atención a dos de los conflictos más acuciantes de la actualidad: la ampliación del cultivo de palma aceitera y la minería aurífera.

El estudio realizado revela que Esmeraldas se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX escasamente integrada al resto del espacio político ecuatoriano, con el único interés por parte de las élites detentadoras del poder de utilizar su territorio o bien para disponer de su riqueza natural, para aprovecharlo por su ubicación geográfica o de manera instrumental para conservar la integridad del resto del territorio, como lo acontecido cuando parte de la superficie de Esmeraldas, sus habitantes y bienes naturales, fueron

entregados a una empresa inglesa para saldar una porción de la deuda por la independencia. Esta historia, que cubre desde el poblamiento de Esmeraldas (hacia la mitad del siglo XVI) hasta mediados del siglo XX, demuestra el escaso interés del Estado ecuatoriano por impulsar políticas encaminadas a extender la ciudadanía a esta parte del país.

La segunda mitad del siglo XX significó un nuevo momento para Esmeraldas. Luego del establecimiento y operación de un enclave de producción de banano que supeditó a buena parte de la provincia a la autoridad de una empresa estadounidense, sería recién con el inicio de la explotación petrolera que se dio paso a una mejora sustantiva en la comunicación e interconexión de Esmeraldas con el resto del país. Esta no fue la única consecuencia del petróleo, de manera paralela surgieron nuevos problemas ambientales y sociales derivados de la construcción y posterior operación de la única refinería que tiene Ecuador ubicada en la capital de la provincia, de la exportación de petróleo por el puerto de Balao y, de la irrupción de nuevos regímenes extractivos ligados con la explotación forestal y el cultivo de camarón y que simbolizarían la toma del territorio por parte de capitales de la sierra y la costa, respectivamente. A partir del decenio de los 90 la instalación y expansión de cultivos de palma aceitera y, desde años más recientes, el establecimiento de explotaciones de minería aurífera, sellarían el carácter instrumental bajo el que el Estado se ha relacionado con Esmeraldas, el privilegio concedido, a través de políticas estatales, a la consecución de ingresos para empresas y reducidos grupos de poder entre los que se encuentran capitales extranjeros, y la escasa atención para mejorar el bienestar de población.

Si bien la justificación para respaldar cada uno de estos momentos de ampliación de la frontera extractiva se ha asentado en discursos que enaltecen el patriotismo, la promoción del desarrollo y la seguridad, la realidad se obstina en preservar para Esmeraldas no solo bajos indicadores sociales en relación con el resto del país, sino un proceso generalizado de empobrecimiento, sobre todo de las poblaciones que habitan en las áreas rurales de la provincia, una tendencia a la cada vez mayor concentración de tierras, la pérdida de medios de vida de los habitantes históricamente asentados en el territorio y su desterritorialización. A esta realidad deben añadirse los efectos del conflicto colombiano no solo sobre el acrecentamiento de la violencia e inseguridad, sino sobre el surgimiento de economías ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, al contrabando de productos, al comercio ilegal de armas y al tráfico y trata de personas, y que han



actuado como elementos centrales para justificar la cada vez mayor militarización de la frontera norte y de Esmeraldas en particular.

El estudio de estas distintas fases de extracción lleva a concluir que la presencia del Estado en Esmeraldas ha sido consistente con un régimen de intervención que ha concedido mayor importancia a las cosas que a las personas. Para el mantenimiento de este régimen, el Estado ha debido poner en marcha una política de coerción que no solo genera el marco para el aprovechamiento de la riqueza natural del territorio fronterizo, sino que exige al mismo tiempo la salida de las personas históricamente ahí asentadas, y la puesta en marcha de una estrategia de emasculación del Estado al que se aprecia como ausente, débil o inexistente, mientras el capital toma control del espacio y usufructúa de procesos que toman lugar en la frontera como los flujos de población migrante de Colombia y Venezuela o la presencia de bandas armadas que manejan diversas economías ilícitas y resultan funcionales a la operación de actividades económicas formales.

Esmeraldas se erige así como el producto de dos procesos de fronterización interrelacionados y aparentemente contradictorios: el fortalecimiento de las políticas de seguridad de las fronteras, por un lado, a tono con un discurso hegemónico, y, por otro lado, la ampliación de la frontera extractiva, en donde la implementación de la IIRSA desempeña un papel central, haciendo eco de las crecientes necesidades de recursos que demanda la economía global para su funcionamiento (*space-of-flows*) y la consecuente incorporación de nuevas áreas (*space-of-places*).

Frente a esta realidad pierden piso los discursos de la defensa de la soberanía, de la consolidación de “fronteras vivas”, el pago de una deuda histórica hacia la frontera norte, y más aún la construcción de un Estado Plurinacional entre cuyas premisas podría identificarse alternativas para un manejo diferente de las fronteras.

## **Abstract**

Borders have changed their meaning. The borders have been reassigned. Several studies that have been carried out in the last decade show the importance they have acquired. This thesis follows that trend but it may be distinguished as it focuses on the study of a border that is fundamentally known for the Colombian conflict and its repercussions in neighboring countries: the northern Ecuadorian border of the province of Esmeraldas, located in the western end of Ecuador adjacent to Colombia and the Pacific. Although the present thesis examines the effects of the Colombian conflict on this border territory, its emphasis is to understand the meaning and guidance of policies oriented to promote the integration of Esmeraldas into its political container, the Ecuadorian State. This approach strives to generate an interpretive and analytical framework to understand the dynamics aroused in the incorporation of border areas that historically have fallen behind and remained forgotten and subalternized. Hence the title of the thesis, “Towards a political ecology of borders. The case of Esmeraldas in Ecuador”.

In order to achieve the main focus, this thesis proposes as specific objectives to study the process of building borders in Ecuador and unravel the ruptures, as well as continuities between the past and contemporary reality; to understand the exercise of the territoriality of Indian and black people living in the border region of Esmeraldas, the changes territoriality has faced over time and its current manifestations in light of the definition of Ecuador as a Plurinational State; to study the articulation between sovereignty and territoriality in the face of the current processes of reorganization of capital on a global scale, and the role that Ecuador plays within this global pattern of power and domination. Last but not least, the thesis pursues to study the impact of these dynamics on Esmeraldas as a border province, as well as its population and its territory in order to examine and discuss the approaches between political ecology and the decolonial perspective for reading border territories.

During this investigative trajectory, this thesis explores two concepts of borders – one concept coming from geography and the extractive concept derived from political ecology. The intention that arises by starting a dialogue between both concepts, and the theoretical frameworks each contain, aims to understand how natural wealth can mold and be molded by the socio-spatial expansion of capital, as well as to capture the consequent social and ecological transformation associated with the processes of political and economic integration of subalternized border spaces. Considering that the expansion

of extractive borders over revalued spaces has made it possible to understand that the division of labor does not only happen because of geography and the availability of natural wealth, but also through racial borders, the contents of this thesis are also nourished by the concepts and approaches of the decolonial perspective as a field of thought that contributes to understanding about the social, cultural, epistemological and economic asymmetries currently active in the region.

The documentary and bibliographic investigation carried out, including theoretical and empirical sources, institutional policies, regional and local national regulations, agendas and pronouncements of social groups; field work and particularly the conduct of semi-structured interviews with a group of actors belonging to various interests and experiences with an impact on the territory; the analysis and processing of statistical information, with the aim of achieving a balance between qualitative and quantitative information have made the reconstruction of the way in which the territory on which the Ecuadorian State was built and molded possible, with a careful look upon the province of Esmeraldas. The discourse analysis of these sources allowed to understand the different visions and speeches that exist and have been woven about the border, particularly about the border segment of the so called “green province”, cataloged well into the seventeenth century as “kingdom of freedom”; the impact of regional integration policies that were promoted since the seventies of the past century and their current manifestations, with emphasis on those policies with a clear impact on the conformation of borders, such as those linked to the integration of infrastructure and securitization of border spaces. Within this framework, this thesis presents an analysis of the current reality of the northern Ecuadorian border and its main social, political and institutional phenomena, in order to then lead to the case study referring to the north of Esmeraldas where particular attention is given to two of the most pressing conflicts of today: the expansion of palm oil cultivation as well as gold mining.

The study carried out reveals that Esmeraldas remained barely integrated into the rest of the Ecuadorian political space well into the twentieth century, with the sole interest by the elites who held power to use their territory or to dispose of their natural wealth in order to take advantage of it regarding its geographical location. Moreover, on other occasions, Esmeraldas was instrumental on maintaining the integrity of the rest of the territory. This happened when part of the surface of Esmeraldas, its inhabitants and natural assets were delivered to an English company in order to pay off a debt for independence. This story, which covers from the settlement of Esmeraldas (mid-16th

century) until the middle of the 20th century, demonstrates the low interest of the Ecuadorian State in promoting policies aimed at extending citizenship to this part of the country.

The second half of the twentieth century meant a new moment for Esmeraldas. After establishing an enclave in the production of banana which subjected the province to the authority of an international company, it would be just with the start of the oil exploitation where there was a substantial improvement in the communication and interconnection between Esmeraldas and the rest of the country. This was not the only consequence of oil, in parallel new environmental and social problems arose from the construction and subsequent operation of the only refinery that Ecuador has located in the capital of the province, from the export of oil through the port of Balao and, the emergence of new extractive regimes linked to logging and shrimp farming that would symbolize the seizure of territory by capitals of the Sierra and the coast, respectively. Since the nineties the installation and expansion of palm oil crops and, since more recent years, the establishment of gold mining exploitations would seal the instrumental character under which the state has been related to Esmeraldas, the privilege granted through state policies to the achievement of income for companies and small groups of power among which are foreign capitals, and the little attention to improve the welfare of the population.

Although the justification to support each of these moments of expansion of the extractive frontier has been based on speeches that exalt patriotism, the promotion of development and security, the reality is stubborn in preserving for Esmeraldas not only low social indicators in relation to the rest of the country, but a generalized process of poverty, especially of the populations that inhabit the rural areas of the province. This, as well as a tendency to the increasing concentration of land, the loss of livelihoods of the inhabitants historically settled in the territory and its de-territorialization. The effects of the Colombian conflict must be added to this reality, which not only increase violence and insecurity, but also cause the emergence of illicit economies linked to drug trafficking, product smuggling, illegal arms trade as well as human smuggling and trafficking. These effects have acted as central elements to justify the increasing militarization of the northern border and of Esmeraldas in particular.

The study of these different phases of extraction leads to the conclusion that the presence of the state in Esmeraldas has been consistent with an intervention regime that has given greater importance to things than to people. For the maintenance of this regime,

the State has had to set a policy of coercion in motion that not only generates the opening for the use of the natural wealth of the border territory, but also requires the exit of the people historically settled there, and the implementation of a strategy of emasculation of the State that is seen as absent, weak or non-existent, while capital takes control of space and uses processes that take place at the border such as the flows of migrant population from Colombia and Venezuela or the presence of armed gangs that handle various illicit economies and are functional to the operation of formal economic activities.

Esmeraldas stands as the product of two interrelated and seemingly contradictory border processes: on one hand the strengthening of border security policies in tune with a hegemonic speech, and on the other hand, the expansion of the extractive border. The implementation of the IIRSA plays a central role in this expansion, echoing the growing resource needs demanded by the global economy for its operation (*space-of-flows*) and the consequent incorporation of new areas (*space-of-places*).

Faced with this reality, some dimensions lose grounds: the speeches of the defense of sovereignty, of the consolidation of “living borders”, the payment of a historical debt towards the norther border, and even more the building of a Plurinational State among whose premises could identify alternatives for a different management of the borders.

## Acrónimos

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ALALC	Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
ALBA-TCP	Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos
ALCA	Área de Comercio de las Américas
ANCUPA	Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera
BACRIM	Bandas Criminales
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CARIFTA	Asociación de Libre Comercio del Caribe
C-CONDEM	Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema del Manglar
CDS	Consejo de Defensa Suramericano
CEBAF	Centro Binacional de Atención Fronteriza
CELAC	Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CENAF	Centro Nacional de Atención de Frontera
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPESIU	Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial
CI	Conservación Internacional
CIJ	Corte Internacional de Justicia
CODAE	Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano
CODENPE	Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
COOTAD	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
COSEPE	Consejo de Seguridad Pública y del Estado
COSIPLAN	Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
CONVEMAR	Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
COVIEC	Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriana-Colombiana
CRS	Catholic Relief Service

CTI	Circunscripción Territorial Indígena
DINEIB	Dirección Nacional de Educación Bilingüe
EJAtlas	Environmental Justice Atlas
ECOLEX	Corporación de Gestión y Derecho Ambiental
ECUARUNARI	Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
ELN	Ejército de Liberación Nacional
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FECCHE	Federación Provincial Chachis de Esmeraldas
FEDAPAL	Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FORCCOFES	Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
IERAC	Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización
IIRSA	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
ILV	Instituto Lingüístico de Verano
INCRAE	Instituto Nacional de Colonización de la Región Amazónica
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INREDH	Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
MAE	Ministerio del Ambiente de Ecuador
MCDS	Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
MCCA	Mercado Común Centroamericano
MCPEC	Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MICSIE	Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa
NAESE	Nacionalidad Épera Siapidara de Esmeraldas
OACDH	Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
OCAME	Organizaciones Campesinas de Muisne y Esmeraldas
OCP	Oleoducto de Crudos Pesados

OEA	Organización de Estados Americanos
OIM	Organización Internacional de Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo
PBC	Pasta Base de Cocaína
PC	Pudrición del cogollo
PDOT	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
PIFEC	Plan de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia
PNBV	Plan Nacional del Buen Vivir
PRAS	Programa de Reparación Ambiental y Social
PUCESE	Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Sede Esmeraldas
REDCONE	Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas
SENAGUA	Secretaría Nacional del Agua
SENPLADES	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SETECI	Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
TIAR	Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
UASB	Universidad Andina Simón Bolívar
UDENOR	Unidad Ejecutora de Desarrollo del Norte
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UONNE	Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeralda
ZEDE	Zonas Especiales de Desarrollo Económico
ZIF	Zona de Integración Fronteriza
ZIFEC	Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia



## **Introducción**

---

Pese a la multiplicidad de significados, connotaciones y aproximaciones, el concepto de frontera alude por lo general a dos acepciones. Desde un punto de vista jurídico, prima la identificación de frontera como borde o límite territorial de un Estado, mientras que la frontera entendida como zona, como territorios de dimensiones variables adyacentes a la división limítrofe internacional, como un proceso de construcción social con historicidad y particularidades propias, es más bien parte de la tradición de la geografía crítica y de consideraciones sociales, culturales y económicas (Fernández Carrión, 2008). Es esta segunda acepción de frontera, la que se utilizará a lo largo de esta tesis, la que parecería encontrar en la actualidad una renovada resignificación. La difusión de una vasta literatura alrededor de las fronteras; la realización de conferencias y exposiciones centradas en las fronteras; la publicación de notas de prensa, reportajes y propuestas cinematográficas; la definición de políticas públicas y las recurrentes declaraciones de dirigentes políticos y funcionarios gubernamentales que subrayan la relevancia de resguardar, fortalecer el control o garantizar el papel defensivo de las fronteras dan cuenta de la mayor importancia concedida a esta noción en los últimos años.

Lejos de las predicciones que para inicios del siglo vaticinaban la desaparición de las fronteras<sup>1</sup> y anunciaban su defunción como paso indispensable para facilitar la libre movilidad de capitales, éstas no solo que se han fortalecido –y fortificado en el sentido literal del término– (Sassen, 2007), sino que se han multiplicado, se han tornado más complejas y se han convertido en nociones multidimensionales (Lois, 2014). Las fronteras han proliferado y se han heterogeneizado, como señalan Mezzadra y Neilson (2013: 21).

El estudio de los complejos cambios por los que han atravesado las fronteras ha merecido un eco particular en aquellos países más influyentes en el concierto internacional por el tamaño de su economía y por las repercusiones de sus políticas fronterizas sobre los países y territorios vecinos. Menos interés ha sido concedido a la investigación de los cambios que toman lugar en aquellas fronteras ubicadas en países del sur donde, como sucede en todas las regiones fronterizas, conviven zonas más o menos consolidadas, más o menos dinámicas, con otras que ocupan un lugar secundario dentro de las políticas públicas en términos cobertura de servicios básicos y presencia institucional. Pese a la menor importancia investigativa frente a estas fronteras olvidadas,

---

<sup>1</sup> Para una profundización de estos enfoques ver, entre los planteamientos más representativos, Ohmae (1990) y Fukuyama (1992).

marginalizadas y subalternizadas,<sup>2</sup> estas son zonas que igualmente atestiguan profundas transformaciones, tanto a la luz de la visión dominante que empuja a la fortificación de las fronteras (Brown, 2015; Sassen, 1996, 2007; Amoore, 2006), como debido a las crecientes presiones por acceder a recursos naturales, lo que ha determinado la expansión de las fronteras de extracción *-commodity frontiers-* (Moore, 2003) hacia áreas de gran valor ecológico o a territorios ocupados por poblaciones carentes de poder, usualmente habitados por pueblos indios o negros.

Esta tesis, por tanto, transita entre dos conceptos de frontera -el concepto de frontera proveniente de la geografía y el de fronteras extractivas que se deriva de la ecología política. La intención al poner en diálogo estos dos conceptos, y los marcos teóricos que los contienen, apunta a generar un marco explicativo para entender la integración de territorios fronterizos subalternizados a su contenedor político, el Estado-nación que los abarca, por un lado, y comprender, por otro lado, cómo la riqueza natural de un lugar moldea y es moldeada por la expansión socio-espacial del capital. El encuentro de estos dos conceptos facilitará capturar de ese modo las consiguientes transformaciones sociales y ecológicas asociadas a los procesos de integración política y económica de los espacios fronterizos subalternizados.

Son aún relativamente pocos los estudios que ponen en diálogo a estos dos conceptos. Mientras en el estudio de las fronteras (territoriales) sigue primando la perspectiva de la geografía política o las relaciones internacionales, en la ampliación de las fronteras extractivas, por su parte, poca atención se ha concedido respecto a su ocurrencia en los “confines del Estado”. Aunque la gran mayoría de los estudios reconocen que las fronteras extractivas están estrechamente atadas a la división internacional del trabajo y la particular organización del sistema-mundo (Wallerstein, 1974, 1979, 1980; Moore, 2000; Martínez-Alier, 2011; Machado-Aráoz, 2010; Alimonda, 2011), menor ha sido la importancia concedida a la comprensión de las características de los espacios donde estos procesos toman lugar. El avance de las fronteras extractivas sobre espacios revalorizados por el capital ha hecho posible entender que la división del trabajo no pasa únicamente por la geografía y por la disponibilidad de riqueza natural, sino también por fronteras raciales, donde las discusiones y marcos interpretativos que se desprenden de los estudios decoloniales requieren establecer conexiones más sostenidas con otras disciplinas y marcos del conocimiento.

---

<sup>2</sup> El concepto de áreas subalternizadas se desarrolla en la sección 2.1 de esta tesis.

La tesis persigue de este modo incitar un diálogo entre conceptos y categorías que poca permeabilidad han tenido entre sí en la perspectiva de contribuir a enriquecer el debate para comprender la condición de territorios subalternizados, marginalizados y olvidados a partir de la constatación de que la expansión de las fronteras del capital y la proliferación de los límites, nos enfrenta “a una disrupción geográfica, a un continuo proceso de cambio y reorganización. A este proceso le corresponde un espacio global profundamente heterogéneo, respecto del cual la frontera nos provee un ángulo de perspectiva particularmente efectivo, desde el que resulte posible investigar su desarrollo” (Mezzadra y Neilson, 2013: 24).

Tal realidad es especialmente evidente en la frontera norte ecuatoriana, y en determinados segmentos de esta región como la provincia de Esmeraldas, actual escenario de graves problemas sociales y ambientales. La deforestación de extensas superficies boscosas, la contaminación de ríos y acuíferos, los incontenibles procesos de movilidad humana y colonización espontánea, la deficiencia en la dotación y mantenimiento de servicios públicos, el desempleo y el empleo de mala calidad, la precariedad en la tenencia de la tierra, la desestructuración de pueblos históricamente asentados en estas áreas como consecuencia del deterioro o pérdida de sus territorios y medios vida, y las manifestaciones de violencia que alteran la vida cotidiana, configuran algunos de los elementos que describen la crítica situación de la región.

Estos problemas, presentes hace muchos años, comenzaron a despertar la atención de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto por la intensificación de algunas de sus manifestaciones. Resultaba imposible no prestar atención, por ejemplo, al ingreso de miles de seres humanos que huían de la violencia generada en el marco del conflicto colombiano. Tampoco podía seguir obviándose la sucesión de una serie de episodios armados, los impactos de las fumigaciones aéreas sobre comunidades ecuatorianas realizadas por Colombia para combatir el cultivo de coca, ni seguir desconociendo las recurrentes expresiones de malestar de la población fronteriza ante la desatención del Estado, la desvalorización de sus necesidades o su descontento frente a la imposición de políticas definidas sin escuchar su voz.

A la luz de este escenario, el imaginario social construido alrededor de la frontera norte se ha concentrado en retratar facetas que alimentan la alarma y el desconcierto, la inseguridad cotidiana y el miedo, sin dejar a un lado un manejo superficial y prejuicioso respecto a los supuestos efectos perniciosos ocasionados por la presencia de un alto contingente de población colombiana -y en la actualidad también venezolana-, lo que ha

contribuido a acentuar prácticas y conductas discriminatorias y xenofóbicas. Para ahondar más en este imaginario, en el 2010 durante la visita de Hillary Clinton a Sudamérica, se llegó a hablar de la frontera colombo-ecuatoriana como un “espacio sin ley”, “un lugar infernal en términos de seguridad, (que) el Estado ecuatoriano simplemente no controla” (Wildman, 2010, citado por Carrión y Llugsha coord., 2013: 101), una afirmación similar a la que en el 2017 apareciera en el diario español ABC que advertía a potenciales turistas no viajar por la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, “salvo que sea imprescindible” si se viaja por carretera.<sup>3</sup>

El cúmulo de problemas presentes en la frontera norte ecuatoriana ha contribuido en todo caso a que en el transcurso de la última década hayan surgido en el país serios esfuerzos investigativos y documentales orientados a ahondar el conocimiento sobre esta región, su realidad social, económica, cultural, ambiental y organizativa. En esta dirección destacan diagnósticos regionales como *Las Fronteras con Colombia* (2008) de Roque Espinoza que constituye un recuento etnográfico y un trabajo de interpretación para conocer la realidad fronteriza y *Frontera Norte Ecuatoriana. Desafío de la gobernabilidad* (2004) de Galo Ramón y Víctor Hugo Torres que se centra en el análisis de los municipios fronterizos; estudios sobre las relaciones colombo ecuatorianas como el libro coordinado por Grace Jaramillo, *Construyendo puentes entre Ecuador y Colombia* (2009) y las investigaciones conducidas por Socorro Ramírez (2009) y por Ramírez y Montúfar (2007). Junto a los estudios regionales, los últimos años han atestiguado la emergencia de innumerables estudios de carácter más local referidos a una provincia o a territorios particulares y la ejecución de programas de investigación vinculados a universidades que tienen como propósito alcanzar un conocimiento más sostenido de la realidad fronteriza como el de gobernanza de la seguridad ciudadana en las poblaciones de la frontera norte ecuatoriana desarrollado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO-Sede Ecuador. Otros estudios sobre la frontera norte han derivado en la descripción y análisis de ámbitos temáticos específicos referidos a la movilidad humana (Rasmussen Crespo, 2012), el tráfico y trata de personas (Cruz, 2007; Moncayo, 2012), la seguridad, el conflicto y la violencia (Llugsha, 2012; González Carranza, 2011; Donoso, 2011; Amaya, 2014; Montagna, 2016).

Desde las esferas gubernamentales, la agudización de los problemas fronterizos en los últimos años significó la estructuración de un discurso renovado fundamentado en

---

<sup>3</sup> Tal información publicada el 01.01.17 aparece bajo el título “Conoce los países a los que no se recomienda viajar” en: [http://www.abc.es/internacional/201706011344\\_noticia.html](http://www.abc.es/internacional/201706011344_noticia.html), acceso el 06.06.17.

la pronta solución de las más acuciantes necesidades de la población, la reorganización de la seguridad en la frontera norte y la consolidación de un enfoque de soberanía que parecía distar de la acepción hasta entonces adoptada por el Estado: de la garantía de la integridad territorial como eje de la soberanía se difundió la idea de robustecer la presencia del Estado en la región, a tono con la introducción de contenidos constitucionales que subrayan la importancia de las fronteras y que se tradujo en nuevos arreglos institucionales particularmente orientados a la frontera norte, la oferta de flujos de recursos económicos para superar las dificultades presentes y una renovada presencia de las fuerzas de seguridad.

La mayor importancia concedida a la frontera norte ecuatoriana coincide con el proceso de resignificación que en el ámbito mundial han adquirido estas áreas. Mientras en algunos contextos y países, vertiginosamente se levantan muros, alambradas o vallas para “proteger” la indeseable presencia de extraños y detener el flujo de un tránsito ilegal de personas y armas, en otras realidades las fronteras, áreas históricamente subalternizadas, hoy han pasado a ser consideradas regiones estratégicas. Es el caso de América Latina donde diversos países han regresado a ver a las fronteras y otras áreas tradicionalmente marginalizadas con una preocupación creciente, extendiendo la presencia del Estado a lugares que durante largos períodos históricos se caracterizaron por una escasa presencia institucional y su impermeabilidad a los intentos de integración.

## **1. Marco conceptual y analítico**

Esta investigación apunta a forjar un marco analítico que combine miradas complementarias de diversas disciplinas pues no solo que no existe una única teoría de las fronteras, sino que con frecuencia hemos tendido a mirar la realidad de los Estados latinoamericanos y de sus correspondientes arreglos territoriales e institucionales con los prismas del modelo europeo (Quijano 2014c [2000], 2014a; Mignolo, 2007). En este como en otros ámbitos sociales, económicos, culturales, ambientales o políticos, ha tenido un peso sustantivo la imitación y difusión de conceptos y teorías generados en otras latitudes que tienen el poder para definir qué es y qué no es posible en el mundo en cualquier tiempo y en cualquier lugar (Santos, 2011; Grosfoguel, 2014). Con el propósito de contar con lenguajes *recreados* desde lugares de enunciación que no son solamente “objetos de estudio”, esta investigación se afianzará en el marco conceptual propuesto por el pensamiento decolonial y la ecología política en la medida en que al erigirse como

enfoques críticos aportan en la comprensión de la heterogeneidad histórico-estructural en la que se inscriben los Estados latinoamericanos (Quijano, 2014d [1993]).

Antes de situar los planteamientos centrales del pensamiento decolonial, conviene precisar algunos antecedentes. Esta vertiente de pensamiento tiene sus antecedentes en las teorías poscoloniales desarrolladas por pensadores asiáticos y africanos hacia finales del siglo XX. Teóricos provenientes de las ex-colonias europeas en Asia y el Medio Oriente como Said, Bhabha, Spivak, Prakash, Chatterjee, Guha y Chakrabarty, demostraron que el colonialismo y la colonialidad no son solo fenómenos económicos o políticos, sino profundamente epistémicos, rompiendo de esta forma con los macrorelatos sustentados en la esfera económica entendida como único soporte de la consolidación del capitalismo a nivel mundial. Frantz Fanon (1925-1961) equilibró el discurso con una atención a la realidad que esa representación ignoraba o excluía, en términos de la experiencia subjetiva de los efectos del colonialismo y la dominación (Young, 2006).

El pensamiento poscolonial reconoce que el colonialismo no es solo un fenómeno económico o político; es ante todo un proceso profundamente epistémico que posibilitó legitimar el poder colonial y generar identidades de colonizados y colonizadores. El dominio representacional es de tal magnitud que la realidad que se impone se objetiva en leyes y reglamentos, instituciones, programas educativos y científicos, así como en lenguaje, al tiempo que se tildan de primitivas, atrasadas, simples objetos de conocimiento o, en el mejor de los casos, elementos del folklore popular, otras racionalidades distintas a aquellas impuestas por Europa. El fin de la colonización no hizo desaparecer esta lógica representacional; la colonialidad que perduró mantuvo esta “*expropiación epistémica* que condenó a los conocimientos producidos en (las colonias) a ser tan sólo el ‘pasado’ de la ciencia moderna” (Castro-Gómez, 2005: 47, las itálicas son del autor).

La importancia concedida por los estudios poscoloniales provenientes de Asia, África y luego de América Latina a la epistemología, el lenguaje, a la cultura y, en general, a la representación narrativa, eclipsó de alguna manera la crítica a la economía política y un abordaje más sistemático de la relación entre sociedad y naturaleza. Este sesgo teórico y metodológico ha motivado el cuestionamiento de investigadores adscritos al marxismo y a disciplinas científicas diversas (antropología, política), quienes consideran la mistificación de la cultura por parte de los estudios poscoloniales y la consiguiente baja valoración acerca de las implicaciones de la acumulación originaria y la consolidación del capitalismo como factores que están en la base de la explicación del

dominio colonial.<sup>4</sup> Este supuesto vacío en las teorías poscoloniales de África y Asia se explicaría por la forma de implantación del capitalismo en estas regiones que, como lo reconocen varios autores, actuó con bastante menos eficacia e impunidad que lo sucedido en América Latina (Santos, 2002).

Quienes desde América Latina han incorporado el discurso poscolonial coinciden en sus diversos enfoques en el peso que adquirió la dimensión epistemológica en la configuración de la hegemonía occidental. Sin embargo, en contraste con los primeros exponentes del pensamiento poscolonial, en América Latina quienes se han adscrito a sus postulados reafirman el papel fundamental que desempeñaron la naturaleza y su población en la conquista y colonización, a la vez que ponen el acento en cómo la explotación del trabajo y la riqueza natural del continente contribuyeron a la consolidación del capitalismo europeo, dando paso a la corriente que se afianza bajo el nombre de crítica decolonial.<sup>5</sup>

El pensamiento decolonial se enriqueció con los planteamientos de la crítica deconstructivista de Francia y el desarrollo de los estudios subalternos, para desembocar en diversos proyectos teóricos distintivos y complementarios poscoloniales y decoloniales que dan cuenta de las diversas historias coloniales en el mundo, de las diferentes perspectivas y geografías de la razón (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Grosfoguel, 2014). Una de estas vertientes dentro de los proyectos decoloniales es la propuesta de modernidad/colonialidad que emergió con fuerza en América Latina a través de intelectuales como Edgardo Lander, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Catherine Walsh, Javier Sanjinés, Fernando Coronil, Ramón Grosfoguel, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Nelson Maldonado y Santiago Castro-Gómez y que se consolidó con el grupo de investigación “Proyecto latino/latinoamericano modernidad/colonialidad” (Castro-Gómez y Grosfoguel comp., 2007) y con textos que marcaron hitos como *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (1993) editado por Lander y *Pensar (en) los intersticios: teoría y práctica de la crítica pos colonial* (1999) que contó con la participación de varios intelectuales de la región.

---

<sup>4</sup> Ver para un exhaustivo desarrollo al respecto el libro de Castro-Gómez *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*, así como la crítica que realiza Ella Shohat en su artículo *Notas sobre lo “poscolonial”* (2008) que consta en el libro *Estudios Poscoloniales. Ensayos fundamentales*.

<sup>5</sup> La categoría de decolonialidad fue originalmente desarrollada por el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado-Torres (2008).



Esta vertiente tiene sus antecedentes en obras pioneras como las de José Martí a fines del siglo XIX, José Carlos Mariátegui en Perú y sus reflexiones en torno a la cultura y el agro, Pablo González Casanova en México y su defensa a la identidad de los pueblos indios, Darcy Ribeiro en Brasil y sus aportes a la antropología, los teóricos de la dependencia en la segunda mitad del siglo anterior (Raúl Prébish, Theotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Rui Mauro Marini, Celso Furtado, entre los principales) y la filosofía de la liberación desarrollada por el filósofo argentino Enrique Dussel en la década de 1970 (Restrepo y Rojas, 2010; Santos, 2014). Este origen posibilitó que las perspectivas decoloniales combinen economía política y cultura sin enfatizar, como lo hace la tradición poscolonial, en ésta última, en las significaciones culturales.

Sobre la base de esta importante producción académica, la crítica decolonial en América Latina se distingue, en primer lugar, por la genealogía del origen de la historia colonial. Mientras la literatura poscolonial traza su inicio a mediados del siglo XVIII en adelante, cuando el colonialismo británico se impone sobre la India (Bhabha, 1983, 1984, 1990; Spivak, 1990, 1999) o en el siglo XIX cuando la historia colonial británica y francesa comienza en el Medio Oriente (Said, 1978, 1983; Wallerstein, 1974, 1979), los estudios decoloniales en América Latina fijan el inicio de la historia colonial en 1492 cuando toma lugar la conquista y colonización española (Dussel, 1992; Mignolo, 2003; Quijano, 2000). Las implicaciones teóricas, políticas y epistemológicas que se derivan de esta distinta genealogía marcan una segunda diferencia entre los estudios poscoloniales y los decoloniales. En el primer caso, la modernidad y la colonialidad no solo que aparecen como fenómenos simultáneos, sino que la modernidad sería entendida como una crítica emancipatoria tanto al interior de Europa como en los territorios coloniales que emerge, por lo tanto, con independencia de la historia colonial. El pensamiento decolonial, en cambio, considera que la modernidad y la colonialidad son mutuamente constitutivos uno del otro.

“La Modernidad, como nuevo ‘paradigma’ de vida cotidiana, de comprensión de la historia, de la ciencia, de la religión, surge al final del siglo XV y con el dominio del Atlántico. El siglo XVII es ya el fruto del siglo XVI; Holanda, Francia, Inglaterra, son ya desarrollo posterior en el horizonte abierto por Portugal y España. América Latina entra en la Modernidad (mucho antes que Norte América) como la ‘otra cara’ dominada, explotada, encubierta. // Si la Modernidad tiene un núcleo racional ad intra fuerte, como ‘salida’ de la Humanidad de un estado de inmadurez regional, provinciana, no planetaria; dicha Modernidad, por otra parte ad extra, realiza un proceso irracional que se oculta a sus propios ojos. Es decir, por su contenido secundario y negativo

mítico, la ‘Modernidad’ es justificación de una praxis irracional de violencia” (Dussel, 2000: 29, las comillas son del autor).

Grosfoguel argumenta que si se considera que la modernidad y la colonialidad no son dos caras de la misma moneda, entonces es posible pensar, como lo hace Habermas (1989) que la emancipación se encontraría en la profundización de la modernidad o en las modernidades plurales, tornando invisible el hecho de que la modernidad es sobre todo un proyecto civilizatorio generador de violencia y destrucción. De ahí la propuesta de utilización de la noción de “‘sistema mundo-europeo / euro-norteamericano capitalista / patriarcal moderno / colonial’ (Grosfoguel, 2005) y no sólo del ‘sistema mundo-capitalista’, porque con ello se cuestiona abiertamente el mito de la descolonización y la tesis de que la posmodernidad nos conduce a un mundo ya desvinculado de la colonialidad” (Castro-Gómez y Grosfoguel eds., 2007: 13-14).

La segunda implicación de no concebir a la modernidad como un proyecto civilizatorio está ligada al canon de pensamiento y el privilegio de ciertos lugares de enunciación que otorgan a otros lugares solo el papel de objetos de estudio. Son estas relaciones asimétricas de poder las que dan lugar a que desde el enfoque decolonial se proponga el concepto de “colonialidad del poder” (Quijano, 1992, 1997) para evidenciar la complejidad y diversidad de los procesos de acumulación capitalista que desde la conquista y colonización fueron legitimados por supuestas diferencias que otorgaban al colonizador la razón y al colonizado lo ubicaban en un estadio de barbarie a partir de una jerarquía racial/étnica. La noción de raza ha persistido como la principal forma de dominación tras la independencia de América Latina en la medida en que sigue delimitando la ubicación de cada pueblo en las relaciones de poder globales. “La colonialidad, dice Quijano, es aún el modo más general de dominación en el mundo actual, una vez que el colonialismo como orden político explícito fue destruido. Ella no agota, obviamente, las condiciones, ni las formas de explotación y de dominación existentes entre las gentes” (Quijano, 1992: 14).

El pensamiento decolonial ha logrado demostrar así que el capitalismo no es solo un sistema económico sino una “red global de poder integrada por procesos económicos, políticos y culturales, cuya suma mantiene todo el sistema” (Castro-Gómez y Grosfoguel eds., 2007: 17) y que los Estado-nación de América Latina a pesar de considerarse modernos e independientes perpetúan el hecho de ser sociedades coloniales por las diferencias raciales al interior de cada país. De este reconocimiento surge el concepto de giro des-colonial que

“en su expresión más básica busca poner en el centro del debate la cuestión de la colonización como componente constitutivo de la modernidad, y la descolonización como un sinnúmero indefinido de estrategias y formas contestatarias que plantean un cambio radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser y conocer” (Maldonado-Torres, 2008: 66).

La ecología política, por su parte, es un campo epistémico relativamente reciente. Algunos autores sitúan su origen entre 1980 y 1990 (Delgado, 2013), otros señalan que se habría comenzado a hablar de ecología política en la década de los años 70 del siglo anterior (Alimonda, 2006; Palacio, 2006) o incluso antes:

“Sostenemos que el estereotipo del ‘mito de origen’ de la ecología política (al menos en lo que respecta a la tradición de la geografía anglófona) y que sitúa su origen hacia los primeros años del decenio de 1980 a partir de la ecología cultural, del estudio de los riesgos y de la ecología política agrícola y fuertemente influenciada por las obras de Piers Blaikie, Harold Brookfield y Michael Watts, no solo que es estrecho, sino que excluye la diversidad de aportes provenientes tanto de la academia como fuera de ella. (...) Consideramos que las raíces de la ecología política son más profundas y amplias de lo que comúnmente se reconoce y que el campo es una manifestación de un repensar crítico de la naturaleza y de las relaciones naturaleza-sociedad (...) y que encuentra su sustento en el espíritu político e intelectual de finales de los años sesenta e inicios de los setenta” (Bryant, 2015: 4).

Hacia la última cuarta parte del siglo XX cuando el concepto de ecología política comenzó a sonar en el mundo académico<sup>6</sup>, su desarrollo coincidió con algunos procesos que tuvieron gravitación mundial: la magnitud e intensidad de los impactos provocados por desastres ambientales<sup>7</sup>, la difusión de investigaciones e informes relativos a la situación ambiental global que subrayaban los límites finitos del planeta ante un crecimiento cada vez más exponencial de la producción, el consumo y la generación de desechos<sup>8</sup>, la realización de conferencias mundiales que por primera vez consideraban la centralidad del ambiente como soporte de la vida, así como problemas económicos que afectaron al conjunto de la economía mundial como la primera crisis del petróleo.

---

<sup>6</sup> El concepto de ecología política se atribuye al antropólogo e historiador estadounidense Eric Wolf quien lo habría utilizado en 1972 en su *Ownership and Political Ecology*.

<sup>7</sup> Entre los desastres que mayor repercusión tuvieron cabe recordar el naufragio del buque petrolero Exxon Valdez en Alaska en 1989; la explosión de la planta química ICMESA en Seveso, Italia, en 1976; la fuga, en 1984, de un compuesto orgánico utilizado para la fabricación de pesticidas en la fábrica de Union Carbide en Bhopal, India, que provocó la muerte de un número de personas que fluctúa entre 8.000 y 25.000 y los accidentes nucleares de Three Mile Island en Pennsylvania, Estados Unidos en 1979 y de Chernobyl en Ucrania en 1986.

<sup>8</sup> Destaca en particular el informe que el Club de Roma encargó al *Massachusetts Institute of Technology* - MIT-, *Los límites del crecimiento*, publicado en 1972. Aunque el informe no cuestionaba el modelo dilapidador de recursos e identificaba en el crecimiento poblacional uno de los más serios problemas, las conclusiones del MIT se acercaron a lo que el economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen advirtiera por esos mismos años respecto a la imposibilidad de crecer indefinidamente.

La complejidad de los problemas ambientales y sociales que subyacían en el contexto del surgimiento de este nuevo campo de estudio, determinó que la ecología política se configure como el encuentro de diversas disciplinas (geografía crítica, ecología, economía política, sociología, antropología, economía ecológica), al mismo tiempo que se desarrollaba al abrigo de diversas perspectivas teóricas: el neo-marxismo, la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, especialmente el pensamiento dependentista; el ambientalismo y el pos-estructuralismo.

De ahí que dentro de la ecología política se puedan identificar diversas visiones, desde las posiciones cercanas a la economía ambiental que considera que el capital económico puede intercambiarse con el llamado “capital natural”, hasta visiones críticas algunas cercanas al marxismo y otras decoloniales. Gian Carlo Delgado (2013) identifica, en esta dirección, una ecología política marxista en la que sobresalen autores como James O'Connor (2001), André Gorz (1994), Michael Löwy (2011), John Bellamy Foster (2004, 2009, 2010); una ecología política social y crítica al desarrollismo donde Martínez-Alier (2003) tiene un papel destacado, así como una ecología política vinculada al pensamiento decolonial y representada entre otros autores por Arturo Escobar (2011), Horacio Machado-Aráoz (2009, 2010, 2015), Héctor Alimonda (2002, 2006) y Enrique Leff (1995, 2004).

Desde otro punto de partida, Martín y Larsimont (2016) en un reciente trabajo determinan tres trayectorias en la ecología política: la anglófona producida fundamentalmente desde Estados Unidos e Inglaterra basada en los estudios de ecología humana y los estudios culturales; la francesa, que se soporta en la geografía, la antropología y la economía regional; y, la latinoamericana que se alimenta de la tradición hispano-lusófona. Aunque los autores anotan especificidades que caracterizarían la “regionalización” del campo de la ecología política y abonan por la construcción de una ecología cosmo-política en la que confluyan lo mejor de cada una estas tradiciones, en su tipología no estarían plenamente representados otros exponentes provenientes de la Europa continental ni los estudios desarrollados en Asia del Sur (Shiva, 1988; Guha, 1989, entre los principales).

Un acercamiento diferente a los anteriores es el propuesto por Paul Robbins. En su libro *Political Ecology*, Robbins (2012 [1967]: 25-35) explora la forma en como las distintas vertientes de la ecología, desde el determinismo ambiental, los planteamientos teóricos desarrollados por el geógrafo, naturalista y pensador Piotr Kropotkin que defendía la importancia de la cooperación como factor clave en la evolución, los aportes

de la geografía (Humboldt, Reclus, Wallace y Sommerville) y del ambientalismo crítico vinculado al pragmatismo hacia finales del siglo XIX, hasta las investigaciones sobre los riesgos a inicios del XX y la llamada ecología cultural, junto con enfoques críticos de la economía política, la historia y el feminismo, fueron dando cuerpo al nuevo campo de debate, reflexión y pensamiento: la ecología política. Este nuevo cuerpo de pensamiento se diferenciaría de la ecología con enfoque apolítico que estudia los sistemas ecológicos al margen de las relaciones de poder y que en nombre de la objetividad no desarrolla una lectura crítica de las fuerzas políticas en juego.

“Desde los mismos orígenes de la teoría de la evolución, hacia la era de urbanización y tecnocracia, los investigadores han continuado articulando un programa relativamente coherente de investigación en ecología política. Este trabajo, desde el anti-autoritarismo y anti-comercialismo de Kropotkin y Sauer al racionalismo local de White y Netting, ha interrogado consistentemente la lógica de la producción local, el valor del conocimiento local, los costos ambientales del intercambio regional y global, y el impacto de los cambios ambientales” (Robbins, 2012 [1967]: 48).

La multiplicidad de disciplinas que alimentan la ecología política y sus diversas categorizaciones explican de alguna manera la dificultad de establecer una definición de consenso sobre su significado. Entre los conceptos más frecuentemente citados sobre lo que es ecología política, destaca el de Bebbington que la considera como “una suerte de paraguas bajo el cual conviven varias tradiciones y líneas de investigación política y ecológica que comparten ciertas preocupaciones ético-políticas e intelectuales (...) no es una teoría sino un campo común de reflexión y análisis” (2007: 26, 41, citado por Alimonda 2006: 41). Frente a la amplitud de este concepto, Martínez-Alier (2004), en el otro extremo, circunscribe a la ecología política al campo de estudio de los conflictos ecológico distributivos donde están presentes los diferentes lenguajes de valoración y variados procesos de negociación. Alain Lipietz (2002), por su parte, señala que la ecología humana se torna política como consecuencia de la existencia de la adopción de decisiones de dominación y consenso alrededor de qué producir, cómo organizar los procesos de trabajo, cómo distribuir el excedente y a qué fines destinarlo. La ecología política es para el colombiano Arturo Escobar, “el estudio del conjunto de articulaciones entre la historia y la biología y de las mediaciones culturales a través de las cuales se establecen esas articulaciones” (1999: 3) mientras que Enrique Leff la califica como un debate filosófico alrededor del ser, la existencia, “entre los mundos de las personas y el mundo globalizado” (2006: 22). En todos los casos, las diversas visiones parecen tener

en común el estudio de las conexiones entre sociedad y ambiente; de los patrones de acceso, uso, usufructo de los territorios; y, de los significantes y manifestaciones que los seres humanos han otorgado a su entorno a lo largo del tiempo, lo que finalmente alude al poder y a las formas de apropiación de la naturaleza. Por eso tomo entonces el concepto propuesto por Germán Palacio:

“La ecología política es un campo de discusión inter y transdisciplinario que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno a la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación y control por parte de diferentes agentes socio-políticos (...), la ecología política no piensa la política solo como los asuntos ambientales de las políticas gubernamentales, sino de manera más amplia, las jerarquías y asimetrías de diferentes campos de relaciones de poder en torno a la naturaleza, ya sean de clase, de género, étnicas o electorales; pueden ser también locales, regionales, nacionales, internacionales o basadas en otra categoría con relevancia o implicaciones políticas. La ecología política discute los aspectos de la fabricación, construcción o sistematización social de la naturaleza no solo en cuanto a los asuntos materiales, como tales, sino a su construcción imaginaria o simbólica” (Palacio, 2006: 147).

En América Latina no solo los problemas ambientales fueron tomados en cuenta en el proceso de estructuración de este nuevo campo de pensamiento. En esta región, la ecología política está fuertemente asociada a los conceptos de la economía política crítica y a la trayectoria histórica de la región.

“(D)esde fines de los años noventa se ha venido configurando una perspectiva diferenciada para el abordaje de las relaciones sociedad-naturaleza en la región. Probablemente, lo diferencial en esta perspectiva sea su pretensión de hacerlo desde un ‘lugar de enunciación’ latinoamericano. Esto implica reconocer los ámbitos teóricos y territoriales ajenos a las grandes tradiciones consolidadas de la geopolítica del pensamiento occidental. (...) El argumento central es que la marca de origen de lo latinoamericano se asienta en el trauma catastrófico de la conquista y la integración subordinada y colonial en el sistema internacional” (Alimonda, 2017: 41).

Junto a los dos soportes teóricos reseñados, el pensamiento decolonial y la ecología política latinoamericana, en el transcurso de esta investigación, el tema analizado demandó la utilización de lo que se conoce como estudios de frontera. De acuerdo a Albuquerque, “se trata de un campo de estudio en formación y que permite una gran amplitud de lecturas, investigación, imaginación sociológica y creatividad” (2014: 61). Su desarrollo ha estado a cargo de autores provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, y en menor medida de los países latinoamericanos donde los estudios de frontera, con excepción de Argentina y Brasil, no han constado dentro de las preocupaciones fundamentales de las ciencias sociales. De ahí la valía de las

investigaciones desarrolladas por Alejandro Grimson (2005), Eric Gustavo Cardin (2004); Ernelo Schallenger (2004), Pedro Navarro Floria (2011) y Viviana García Pinzón (2014) que, aunque referidos fundamentalmente a los países del Cono Sur, fueron un aporte valioso en términos de conceptos y miradas analíticas para los propósitos de esta tesis.

Para comprender la evolución conceptual de la noción de fronteras, los aportes de James Anderson y Liam O'Dowd (1999), José Lindomar Albuquerque (2004), María Lois (2014) resultaron de especial relevancia para precisar su significado y su variabilidad en función de las narrativas dominantes, mientras que las obras de Eric Hobsbawm (1990, 2010), Benedict Anderson (1993) y John Agnew (2008) contribuyeron a situar dentro de una perspectiva histórica a las fronteras y los procesos de consolidación del Estado-nación.

En el contexto de esta investigación, hay dos ámbitos en los que los estudios de frontera se articulan y complementan con los dos marcos analíticos priorizados. Desde inicios de este siglo, las fronteras pasaron de ser consideradas líneas fijas para evidenciarse como procesos, prácticas, discursos, símbolos, instituciones o redes a través de las cuales actúa el poder. Esto significa que las fronteras solo pueden teorizarse como parte de la producción y reproducción de la territorialidad, el poder y la gestión estatal (Johnson, et al., 2011), guardando paralelismo con la relación que establece la ecología política entre el poder y la naturaleza. Mientras los estudios de frontera exploran la construcción y los efectos de la territorialización, revelando la estructura y el carácter del Estado, la ecología política devela cómo el poder incide sobre el ambiente, lo cual abre las puertas para un mutuo aprendizaje (Robbins, 2008). De la misma manera, al reconocer que las fronteras pueden cambiar y de hecho se han modificado a lo largo de la historia, lo que ha conducido a que las verdades sobre las que se levantó el Estado territorial – soberanía, identidad, nación-, hayan comenzado a ser discutidas por los estudios de frontera, es posible establecer un paralelismo con las preocupaciones levantadas por la crítica decolonial y su llamado a iniciar un proceso de descolonización cultural (deconstrucción) en la perspectiva de abrirse a otras epistemologías y saberes.

Antes de concluir esta sección es preciso señalar que abordar esta investigación a partir de estas dos vertientes de pensamiento, la ecología política y la crítica decolonial, supone desatar una perspectiva analítica aún poco explorada alrededor del estudio de la

realidad fronteriza dentro del contexto latinoamericano contemporáneo.<sup>9</sup> La articulación de este marco analítico interdisciplinario apunta a ampliar la complementariedad conceptual y la discusión de una visión integral e integradora respecto a las fronteras. Mientras la ecología política en tanto uno de los marcos analíticos más potentes para la comprensión de los problemas socio-territoriales (Robbins, 2012) permitirá entender la dialéctica del cambio entre sociedad y naturaleza, así como la dinámica entre los sectores sociales (Blaikie y Brookfield, 1987), el análisis de la construcción de las fronteras y sus diferentes reconfiguraciones a lo largo de la historia de constitución del Estado ecuatoriano, supuso la incorporación de otros conceptos para entender la pervivencia de categorías que parecen inmutables y naturales y que provienen de la crítica decolonial. Este campo teórico fue el soporte para abordar y contextualizar el establecimiento de las fronteras y para comprender este proceso como parte integral de un devenir histórico de mayor envergadura. Parafraseando a Mignolo (2003: 36), las fronteras geográficas son, en última instancia, la expresión material y también móvil de dos principios clave de la articulación conceptual e ideológica del mundo moderno/colonial: la diferencia colonial y la diferencia imperial. “Las diferencias coloniales e imperiales se trazaron en conjunción con la creación del ‘territorio’” y aunque Mignolo no se refiere exclusivamente al “territorio geográfico”, sino al “conceptual, filosófico, religioso, ético, político, económico de la cristiandad” (Ibid.: 39), es válido incluir en este acto fundacional el territorio geográfico pues la conquista y la colonización generaron simultáneamente una división del mundo que inferiorizó las vidas existentes, que se aprovechó de su riqueza natural y que instauró un orden de cosas asimétrico para la mayor parte de la población.

Por otro lado, el esfuerzo de poner en diálogo a estos dos cuerpos analíticos responde a las afinidades existentes entre uno y otro en la deconstrucción de categorías y nociones hegemónicas alrededor del modelo económico, social y cultural vigente y en la concordancia entre ecología política y pensamiento decolonial para explorar raíces y causas comunes en el sometimiento de la naturaleza y en el sometimiento de las formas de ser, existir y pensar de ciertos seres humanos. Ambos ponen de relieve las prácticas y

---

<sup>9</sup> Entre las más recientes aproximaciones que vinculan ecología política y estudios de frontera destaca el trabajo de David Rossiter (2011) que a partir de la producción y comercialización de limones en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, explora la interacción de la política, la economía y la naturaleza en la frontera. Existe también una importante literatura difundida a través del *Journal of Political Ecology* respecto a la utilización y control de bienes naturales ubicados entre dos fronteras, como el caso del agua entre México y Estados Unidos (Walsh, 2014) o la caza furtiva de elefantes en el Parque Nacional Garamba, ubicado en el noreste de la República Democrática del Congo, en el límite con Sudán del Sur (White, 2014).



los sujetos que sistemáticamente han sido devaluados por la forma de organización de la vida impuesta por el capitalismo, desconociendo la interdependencia que mantenemos con la naturaleza y afianzando, en su lugar, una mirada opuesta a ella, así como tornando invisibles otras formas de lo político, social y cultural que provienen de entramados comunitarios de reproducción de la vida.

## **2. Problema de la investigación**

La investigación busca comprender el alcance y dinámica de los actuales procesos de revalorización y resignificación de áreas fronterizas que históricamente se han mantenido al margen de las prioridades políticas del Estado y analizar la incidencia de los cambios que están tomando lugar, producto de esta renovada importancia, sobre las poblaciones ahí asentadas, sus particulares formas de organización y producción y la configuración socio territorial del espacio habitado.

En el caso del Ecuador y atendiendo a la presión social proveniente de los territorios fronterizos, la Constitución del 2008 incorporó un tratamiento preferencial a los cantones asentados en la franja fronteriza de 40 km próximos a los límites territoriales (Art. 249), la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones fronterizas y de población refugiada (Art. 423, § 5) y el mantenimiento y desarrollo de relaciones de cooperación entre los pueblos divididos por fronteras internacionales (Art. 57, § 18). La inclusión de estos artículos perseguía revertir la realidad de aquellos territorios fronterizos que mayores dificultades sociales y económicas enfrentan y subrayar la importancia de que la institucionalidad estatal atienda de manera consistente y firme la realidad de los territorios ubicados en los confines del Estado, sobre todo a la luz del conflicto colombiano que para ese entonces atravesaba una fase de alta intensidad.

Junto a los cambios constitucionales, Ecuador ha impulsado desde hace aproximadamente una década atrás e incluso antes, una serie de políticas orientadas a promover la integración territorial y que contemplan desde la construcción de carreteras y vías de comunicación, la ampliación de la cobertura de los servicios públicos, hasta políticas de fomento de diversas actividades económicas que, en el caso de la frontera, eran apreciadas como una oportunidad para generar ingresos y empleo a favor de la población fronteriza, y como apoyos para el progreso y desarrollo de la región. En lo fundamental, la definición y ejecución de tales políticas no ha considerado la opinión y

concepción de la población local respecto a cómo organizar sus propios territorios (Escobar, 2018; Gudynas, 2009).

En este contexto, esta tesis intenta comprender cómo operan en aquellos territorios que se han mantenido por largo tiempo en una condición periférica respecto a su contenedor político, el Estado ecuatoriano, las recientes políticas de fronterización impulsadas desde el poder estatal. Considerando que en los territorios subalternizados, el poder capitalista del moderno Estado ecuatoriano ha exhibido siempre un carácter más colonial que capitalista, esta tesis persigue desentrañar si la impregnación de poder colonial continua o no reproduciéndose aún en la actualidad. En otras palabras, aunque es evidente que los cambios y políticas introducidas por el Estado ecuatoriano están empujando la incorporación de territorios fronterizos hasta hace poco marginalizados, queda abierto el contenido y sentido de ese impacto.

Si como dice Alejandro Grimson, “los procesos fronterizos constituyen una entrada estratégica para la comprensión de los procesos socio-culturales contemporáneos” (2005b: 127), esta investigación persigue contribuir en la construcción de un marco de interpretación para entender y analizar otros territorios fronterizos que, como el estudiado en esta tesis, atravesase una problemática similar, lo que tiene validez en un momento en que las fronteras de extracción se aproximan a las fronteras divisorias de los Estados, áreas antes abandonadas. A esta intencionalidad se suma otra de carácter teórico y que apunta a identificar adicionales puntos de encuentro entre la ecología política y el pensamiento decolonial para el abordaje de los territorios fronterizos y de las relaciones y dinámicas que ahí se establecen.

### **3. Preguntas de la investigación**

A partir del contexto descrito, la presente investigación propone dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿En qué elementos se fundamenta el renovado interés por aquellas fronteras que hasta hace poco tiempo atrás eran apenas consideradas como límites territoriales que dividen a los Estados? (Capítulo 2)

¿Cuál fue la trayectoria histórica en la constitución de las fronteras en América Latina y el Ecuador en particular y, a partir de ese recorrido, cuáles han sido las continuidades y rupturas en relación a la realidad contemporánea? (Capítulo 3)

¿En qué medida han contribuido a la construcción de las fronteras y al desarrollo fronterizo los procesos de integración latinoamericana y cómo se expresa la experiencia de integración fronteriza en el caso de provincias limítrofes como Esmeraldas en Ecuador? (Capítulos 3 y 4)

¿Cómo entender y caracterizar el supuesto abandono del Estado respecto a ciertas regiones fronterizas que como en el caso de Esmeraldas han terminado por objetivar su condición de marginalidad? (Capítulo 4)

¿Cuáles serían los elementos que marcarían la especificidad de los conflictos socio-ambientales suscitados en regiones de frontera?; y, ¿en qué medida el estudio del caso de Esmeraldas contribuye a generar claves para entender e interpretar las particularidades del extractivismo, o de manera más amplia, de la ecología política en las regiones fronterizas? (Capítulo 5)

¿Cómo la reorganización fronteriza que está tomando lugar se articula con los postulados del Estado Plurinacional que no solo ha sido una reivindicación histórica de movimientos indios y afrodescendientes sino que representa un reconocimiento explícito volcado en la actual Constitución del Ecuador? (Capítulo 5).

#### **4. Objetivos de la investigación**

En línea con las preguntas formuladas, el objetivo central de esta investigación es comprender el sentido y orientación de las políticas definidas para promover la integración de un territorio fronterizo que históricamente se ha mantenido rezagado, olvidado y subalternizado respecto a su contenedor político, indagando las razones que explicarían el renovado interés sobre estas áreas. En este proceso interesa identificar las continuidades y rupturas en la constitución y consolidación de las fronteras entre la trayectoria histórica y la realidad contemporánea, analizar el papel desempeñado por la integración latinoamericana y las experiencias de integración fronteriza en la construcción de las fronteras, y entender el significado de áreas fronterizas a la luz de los actuales marcos de acumulación del capital y de las nuevas modalidades de organización territorial como el Estado Plurinacional. En la consecución de este objetivo general, la investigación doctoral se centrará en la provincia de Esmeraldas en la frontera norte ecuatoriana, límite con Colombia, como estudio de caso.

A este objetivo central se suman cuatro objetivos específicos:

1. Estudiar el proceso de construcción de las fronteras en el Ecuador, tomando en cuenta tanto el juego de articulaciones y alianzas al interior del país, como los condicionantes externos, con énfasis en las particularidades de Esmeraldas como provincia fronteriza y territorio racializado.
2. Analizar el ejercicio de la territorialidad de pueblos indios y negros que viven en la frontera, particularmente de aquellos asentados en la provincia de Esmeraldas, los cambios operados en su territorialidad a lo largo del tiempo y sus actuales manifestaciones a la luz de la definición de Ecuador como un Estado Plurinacional.
3. Estudiar la articulación existente entre soberanía y territorialidad de cara a los actuales procesos de reorganización del capital a escala mundial y del papel que desempeña el Ecuador dentro de este patrón global de poder y dominación y su incidencia sobre Esmeraldas como provincia fronteriza, su población y su territorio.
4. Examinar y discutir las aproximaciones entre la ecología política y la perspectiva decolonial para la lectura de territorios fronterizos a partir del análisis de la problemática de Esmeraldas.

## **5. El universo de estudio**

Ecuador está localizado en el nororiente de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, limitando al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y con el Océano Pacífico en el oeste (Mapa 1). Tiene una población de 17.207.307 habitantes (INEC, 2016) y una superficie territorial de 283.370 km<sup>2</sup>, aproximadamente la mitad del territorio de España (509.935 km<sup>2</sup>) (<https://datos.bancomundial.org>), lo que lo convierte en el país más densamente poblado de América del Sur, con 66,94 personas por kilómetro cuadrado, 20 personas más por unidad territorial que Colombia, que le sigue, cuya densidad poblacional es de 44,22 (Ibid.).

En relación a su extensión territorial, Ecuador tiene más número de especies por unidad de área que cualquier otro país del planeta, una importante variedad de ecosistemas terrestres y una alta diversidad de especies en cada uno de los grupos taxonómicos, lo que lo ubica como uno de los 17 países más biodiversos del mundo (MAE, 2016: 87). Esta singularidad es producto de la ubicación geográfica del país en la zona ecuatorial, la influencia de las corrientes marinas, la circulación atmosférica con

influencia del Océano Pacífico y de la cuenca amazónica y la presencia de los Andes y la Cordillera de la Costa.

**Mapa 1. Ubicación geográfica del Ecuador**



Tomado de: <https://mapamundi.online/americadel-sur/ecuador/>

Geográficamente está constituido por cuatro regiones con características ecológicas distintivas: la costa, junto al Pacífico; la sierra, que cubre todo el callejón interandino; la amazonía, desde las estribaciones orientales de los Andes hasta el límite con el Perú y el archipiélago de Galápagos, único por la flora y fauna que cobija.

En términos administrativos, Ecuador se divide en 24 provincias a cargo de gobernaciones designadas por la presidencia de la república y prefecturas nominadas por votación popular. Las provincias se dividen en 221 cantones y en más de 1.500 juntas parroquiales (INEC, 2016).

Ecuador es un país que también se caracteriza por su diversidad cultural. El Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE, 2016), reconoce la presencia de 14 nacionalidades y 18 pueblos, además de población afrodescendiente que, en conjunto representan un poco más del 14,2% del total de la población ecuatoriana.

En la costa ecuatoriana, Esmeraldas, provincia ubicada en el extremo noroccidental del país, junto al océano Pacífico, es una de las tres provincias que conforman la frontera con Colombia, además de Carchi, en la Sierra y Sucumbíos en la Amazonía. Su posición es estratégica en términos de su cercanía con Colombia y la disponibilidad de puertos marítimos.

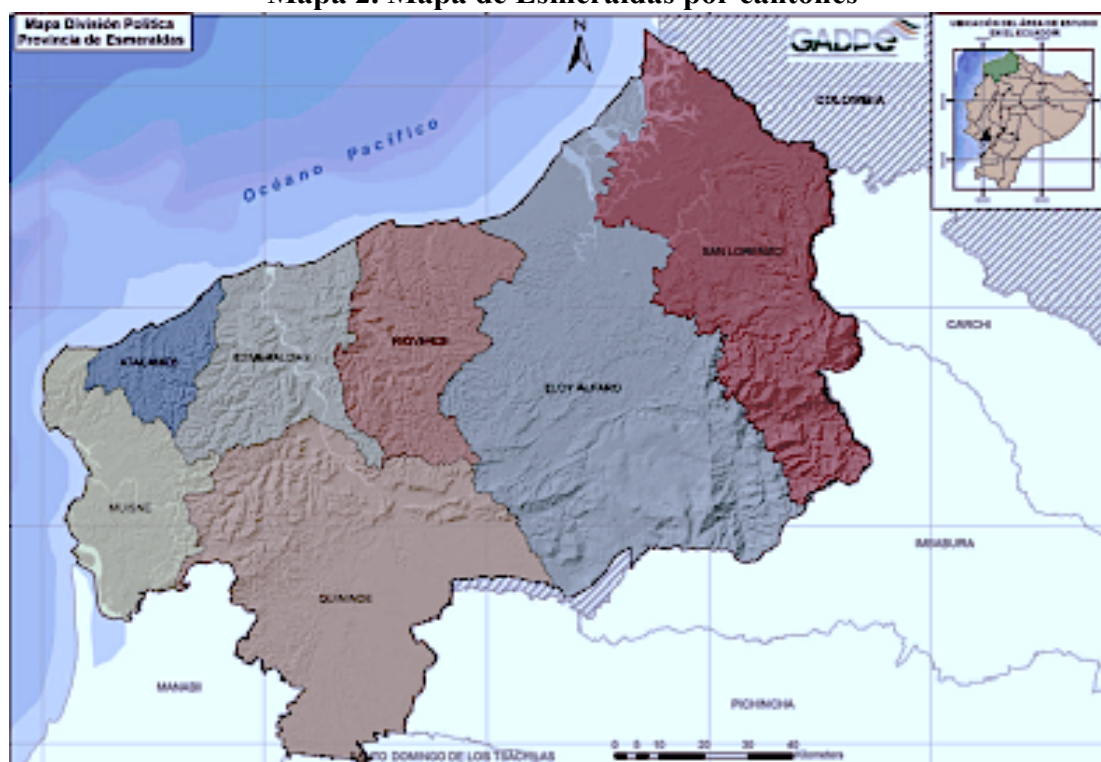
Esmeraldas se mantuvo relativamente autónoma del resto del Estado ecuatoriano hasta bien entrado el siglo XX, cuando la economía del banano, primero y del petróleo, después, consolidaron su integración al espacio político único. A partir de entonces Esmeraldas experimentó notables cambios en la organización espacial pese a lo cual aún el 52% de la superficie provincial está cubierta de bosques (GADPEsmeraldas, 2015: 18).

Esmeraldas tiene una población total de 617.851 habitantes que al contrario de lo que sucedía hasta mediados de los años 70, en la actualidad se asienta fundamentalmente en las áreas urbanas (51,93%) (INEC, 2010: s/p). La población de Esmeraldas refleja un mosaico cultural y es la provincia del país donde habita el mayor número de población afrodescendiente. Además de población mestiza (45%) y afrodescendiente (44%), la población en Esmeraldas se auto identifica como blanca (6%), indígena (3%) y montubia (2%) (Ibid.).

De acuerdo a datos oficiales, la provincia tiene uno de los más altos valores de incidencia de pobreza en el país, lo que explica que en el período 2006-2016 este indicador haya superado el 50% en el agregado provincial (MCDS, 2017: 22), arrastrando problemas de larga data y una serie de carencias aún no resueltas a lo que se suma en los últimos años la ocurrencia de conflictos y el incremento de la violencia, con repercusiones negativas para la población.

Dentro de Esmeraldas, el territorio de estudio se encuentra ubicado hacia el noroccidente, cubriendo los tres cantones más próximos al Departamento de Nariño en Colombia: San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde (Mapa 2). Estos tres cantones cubren un territorio de 9.271,11 km<sup>2</sup>, lo que representa el 58,5% del total de la superficie de la provincia y cobijan a 109.094 habitantes, un 20,4% del total de la población de Esmeraldas (INEC).

**Mapa 2. Mapa de Esmeraldas por cantones**



Tomado de: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas 2015-2025

La selección de estos tres cantones obedece a cinco denominadores comunes que los atraviesan. El primer rasgo en común es que estas tres unidades territoriales están dentro de la franja de 40km desde el límite internacional con Colombia lo que les otorga, de acuerdo a la Constitución del 2008 (Art. 249), un tratamiento preferencial. En términos ambientales, una segunda característica compartida por estos cantones es su pertenencia a la región del Chocó<sup>10</sup>. Un tercer elemento presente en los tres casos es que se trata de los cantones dentro de la provincia de Esmeraldas que comparten raíces históricas que han moldeado el sentido, las expresiones y prácticas sociales y culturales de esta micro-región. De hecho, se trata de los cantones donde mayoritariamente vive población afrodescendiente, además de ser el territorio de pueblos Chachi, Awá y Épera. La cuarta marca distintiva es la presencia, con variados grados de intensidad, de cultivos extensivos de palma aceitera y de explotaciones mineras. Estas actividades son generadoras de una serie de pasivos ambientales y sociales, de conflictos y de diversas expresiones de resistencia a lo que se suma, como un quinta manifestación una realidad marcada por la violencia y la inseguridad, atribuible a la imposición de un modelo extractivo en el

<sup>10</sup> El biocorredor del Chocó es un área de aproximadamente 200.000 km<sup>2</sup> que contiene una gran riqueza biológica localizada entre Panamá, en la región del Darién, pasando por las estribaciones occidentales de los Andes de Ecuador y Colombia, hasta llegar a la región tumbesina del norte del Perú (Rodríguez et al., 2005).



territorio y a la presencia de grupos armados irregulares que compiten por el control del territorio y la consecuente puesta en marcha de un conjunto de actividades ilegales (trata y tráfico de personas, comercio de armas, narcotráfico). Estos cinco rasgos singulares serán abordados a lo largo de la tesis y otorgan a esta investigación una connotación propia en la medida en que, a diferencia de otros estudios, el territorio analizado comprende tres cantones cuando la mayoría de estudios sobre la región norte de Esmeraldas se enfocan básicamente en San Lorenzo y Eloy Alfaro, como lo reflejan a manera de ejemplo, el trabajo de Pablo Minda (2004, 2011) sobre deforestación o el reciente estudio de Lapierre y Macías (2019) sobre extractivismo y crimen organizado. Las continuidades y paralelas sociales, culturales y económicas detalladas me condujeron a incorporar a Rioverde en el estudio.

## **6. Metodología y diseño de la investigación**

El diseño de la investigación contempla el estudio de caso como estrategia metodológica a partir de la elección intencional de un territorio sobre el que se concentrará el trabajo investigativo: el segmento de la frontera norte ecuatoriana que corresponde a la provincia de Esmeraldas y dentro de este territorio, los tres cantones más cercanos a Colombia. La selección de este territorio responde al conocimiento previo de esta realidad y al hecho de que éste encierra rasgos paradigmáticos que podrían proporcionar la base empírica para el desarrollo de un estudio crítico que sirva de mediación para comprender un fenómeno más amplio asociado a una doble tensión territorial: la pertenencia a una frontera geográfica y a una frontera extractiva en expansión.

La selección de un estudio de caso como opción metodológica ha sido validada por diversos estudios y es cada vez más reconocida como un método de investigación potente para orientar un análisis profundo de los significados de una realidad particular y como un instrumento a través del cual el caso investigado y estudiado puede contribuir a ilustrar y evidenciar características de un fenómeno o teoría (Stake, 1994; Liphart, 1991; Flyvbjerg, 2004).

“La investigación de estudios de caso camina por el fino límite entre lo particular y lo abstracto. Este acto de equilibrio es posible porque precisamente el caso en el estudio de caso sugiere que el ‘fenómeno bajo investigación (...) puede encontrarse en otras partes. El caso puede ser único pero no es singular (*The case may be unique but is not singular*)’ (Castree, 2005: 541). La relación iterativa entre lo concreto y lo abstracto, entre los datos empíricos y los conocimientos teóricos, no solo es una característica que define al enfoque, sino la fuente de su fortaleza analítica” (Benner y Pastor, 2015: 56).



Los estudios de caso no son habitualmente comparativos, no obstante, pueden serlo si, como sucede en esta investigación, a través del análisis a profundidad de una problemática, que corresponde al análisis del proceso de integración de la provincia fronteriza de Esmeraldas al espacio nacional, el estudio busca valorar los discursos y narrativas desarrolladas en diferentes períodos históricos respecto a las políticas fronterizas y de integración, la organización territorial de los espacios de frontera en el marco del proceso de construcción del Estado-nación y sus efectos tanto en lo material como en lo simbólico. Al abordar el estudio de caso desde esta perspectiva se estaría entonces hablando de un estudio diacrónico y “comparativo” en distintos momentos de la historia (Marsh y Stoker eds., 1997) en la perspectiva de identificar las posibles continuidades y rupturas a lo largo de la trayectoria de integración de Esmeraldas al espacio político que la contiene: el Estado ecuatoriano.

Tanto para profundizar en el análisis del caso como en virtud del enfoque multidisciplinario de la tesis, durante el desarrollo de este proceso investigativo fue necesario conjugar varios métodos y técnicas que se intercalaron a lo largo de todo el desarrollo del estudio con el propósito de lograr un balance entre información cuantitativa y cualitativa.

En el primer ámbito, la información proveniente de fuentes oficiales, especialmente los datos censales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) y, de esta misma fuente, los datos generados a partir de las encuestas nacionales de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) que se encuentran en la página web del INEC, resultaron de importancia para caracterizar la realidad de la provincia de Esmeraldas y de la región norte que se estudia en esta tesis y para comparar los indicadores existentes con aquellos del resto del país.

Los datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales del Ecuador se complementaron con información cuantitativa provenientes del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas, por sus siglas en inglés) y las bases de datos del Banco Mundial, de la CEPAL, de la FAO y de COSIPLAN-IIRSA.

La información cualitativa provino de diversas fuentes. El análisis del discurso, considerado como el estudio de prácticas sociales, políticas e institucionales, se utilizó para identificar las nociones y conceptos que explican la construcción de las fronteras ecuatorianas y particularmente del segmento de la frontera norte correspondiente a Esmeraldas, reconociendo las regularidades discursivas y, de ser el caso, también las

rupturas, con el objeto de desentrañar el campo de significado más amplio en el que se situaría este segmento fronterizo. Este análisis si bien contempla un dilatado marco histórico-temporal, se centrará en los últimos 70 años aproximadamente, a partir de la integración total de Esmeraldas a su contenedor, el Estado ecuatoriano, en la perspectiva de proyectar una visión histórico-comparativa de la intervención estatal en el proceso de la integración de Esmeraldas y la construcción de este sector de la frontera norte ecuatoriana. Es por tanto un esfuerzo de larga duración para establecer las continuidades y discontinuidades de la relación de la frontera norte de Esmeraldas con el Estado ecuatoriano, expresadas a través de sus discursos y los hechos históricos que la acompañan.

Como se conoce, el análisis de discurso no está circunscrito a lo textual y lo lingüístico, sino que se relaciona con cuerpos regulares de ideas y de conceptos para explicar y actuar sobre una determinada realidad social y en tal virtud resulta de particular utilidad para la estructuración de diseños cualitativos de investigación (Howarth, 1997). Tampoco se refiere al análisis de actos individuales sino que son entendimientos y lecturas colectivas que responden a determinadas correlaciones de fuerza.

“Por discurso no debe entenderse (...) aquello vinculado a lo dicho o a lo escrito, sino que abarca lo lingüístico y extralingüístico, pues su característica es la capacidad de producir y asignar sentido. No cabe hablar, desde esta perspectiva, de elementos (actores, circunstancias, datos, ámbitos sociales) a priori, pre-discursivos, sino que estos existen y cobran sentido en tanto adquieren significado. Un discurso no es la expresión discursiva de un movimiento real que se encuentra constituido al margen del discurso, sino que, por el contrario, ese discurso es y actúa como una fuerza real, que contribuye a moldear y constituir las relaciones sociales. El discurso así entendido, en sentido amplio y estrecho, es donde se constituye la ‘realidad social’ como tal” (Franzé, 2015: 152).

Desde esta perspectiva fue de gran utilidad la lectura y análisis de normativa (leyes, decretos, acuerdos y políticas) nacional y regional con repercusión sobre la frontera norte ecuatoriana y el seguimiento a noticias de prensa, principalmente de los diarios de mayor circulación nacional (El Comercio y El Universo), así como de diarios digitales (Ecuadorinmediato), con énfasis en los pronunciamientos y declaraciones de autoridades del gobierno. Ambas fuentes son puntales para entender cómo desde la centralidad se construye y moldea la realidad de la frontera norte del Ecuador.

En la reconstrucción histórica de la conformación de las fronteras en el Ecuador y especialmente en Esmeraldas, fue necesario la utilización de una copiosa literatura analizada desde la mirada de la construcción del espacio, el territorio y la fijación de las

fronteras en tanto límites territoriales. Particularmente valioso al respecto fueron las contribuciones de Jean Paul Deler (1987) y del mismo autor junto con Nelson Gómez y Michel Portais (1983), así como de las numerosas contribuciones de pensadoras y pensadores del Ecuador (Enrique Ayala, Rafael Quintero, Erika Sylva, Pablo Ospina, Carlos Larrea, Juan Maiguashca) en la comprensión de como fue tomando forma el “Estado-país” (Moreano, 1991) y la integración de Esmeraldas a dicho contenedor (Rocio Rueda, Evan León).

Para el análisis del contexto regional, fueron necesarias la revisión y estudio de numerosos documentos del denominado nuevo regionalismo latinoamericano, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -ALBA-TCP-, la Unión de Naciones del Sur –UNASUR-, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, especialmente de aquellos orientados a la integración y la seguridad y de los contenidos vinculados al significado que otorgan tales instituciones a la frontera. Aunque a la luz del cambiante escenario político, social y económico de América Latina, estos tres organismos regionales o bien han dejado de estar activos (ALBA y CELAC) o parecerían próximos a desaparecer (UNASUR), el análisis de lo que hicieron o dejaron de hacer mientras estuvieron vigentes es una reflexión válida y un análisis necesario para identificar rupturas y continuidades en relación al papel que otorgado por la integración latinoamericana a las fronteras.

En la perspectiva de comprender el sentido de la frontera norte desde las instituciones y la gente que vive en dicho territorio, una fuente sustantiva fue el análisis de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en sus distintos niveles (binacional, zonal, provincial, cantonal y parroquial) (ver Tabla 1). Además de contener un diagnóstico y bosquejar las principales estrategias hacia el futuro para cada nivel territorial, los planes reflejan la voz de las principales instituciones públicas de cada jurisdicción y consideran de alguna manera la opinión de sectores sociales en la medida en que de acuerdo a las disposiciones legales, su construcción debe descansar en niveles de consulta y participación de la población. Si bien es cierto que este proceso no siempre fue adecuadamente conducido,<sup>11</sup> los planes existentes constituyen de todas maneras una referencia importante para entender la realidad actual y las proyecciones que la población

---

<sup>11</sup> En las entrevistas realizadas varias personas señalaron su inconformidad con la forma en la que se llevó a cabo la planificación y socialización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los resultados alcanzados.

otorga a su territorio y su vida y fueron de particular utilidad para situar la imagen construida sobre la frontera desde los propios territorios.

**Tabla 1. Instrumentos de planificación analizados según cobertura geográfica**

Cobertura	Número
Binacional	2
Regional	1
Provincial	1
Cantonal	3
Parroquial	34
Total	41

El análisis de discurso como metodología de trabajo también se aplicó a las entrevistas a informantes calificados durante el trabajo de campo, el mismo que se distribuyó en tres distintos momentos. El primer momento tomó lugar en enero del 2016 cuando viajé a Esmeraldas con el doble objetivo de explorar, por un lado, el área geográfica de investigación y de mantener un diálogo con uno de los más importantes pensadores del norte de Esmeraldas, el historiador Juan García.

El recorrido por la región me permitió re-establecer y en ocasiones abrir contacto con dirigentes y entablar una serie de conversaciones informales con diversos actores. Utilizo “re-establecer” porque conozco Esmeraldas y la zona norte hace muchos años. No solo que tengo raíces familiares que me vinculan al área, sino que a lo largo de mi vida laboral he tenido la oportunidad de adentrarme en su realidad, conocer su gente y sus problemáticas. Quizá lo más relevante al respecto fue mi papel como Secretaria Técnica de Plan Ecuador durante 2009-2011, una política gubernamental para la región fronteriza del norte de Ecuador que no solo me hizo posible trabajar más de cerca con la población, tomar conciencia de las distancias entre la realidad local y los relatos institucionales, sino que en gran parte me motivó a profundizar en la comprensión de la complejidad de la frontera norte a través de la realización de esta tesis.

La conversación con Juan García, por su parte, tenía la intencionalidad de conocer, desde la voz de un protagonista directo, la propuesta de territorialidad de los pueblos afrodescendientes del norte de Esmeraldas. Juan García fue quizá el intelectual afroesmeraldeño que mayor dedicación concedió a la elaboración de una propuesta de autonomía para el norte de la provincia, sustentada en la identidad del pueblo negro. Estudioso de la realidad negra de Esmeraldas, fue historiador por la John Hopkins

University, propulsor del Fondo Documental Afro-Andino que reposa en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito -UASB-, compuesto por más de 50.000 documentos y autor de más de 30 libros sobre el pueblo afroecuatoriano entre los que destacan *Cuentos y décimas esmeraldeñas* (1992), *Papá Roncón, historia de vida* (2011) y *Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón* (2017), que escribió junto con Catherine Walsh. En el año 2011, fue nombrado profesor honorario de la UASB.

Probablemente fui una de las últimas personas que tuve el privilegio de mantener una larga conversación con Juan García en su casa, en la ciudad de Esmeraldas. Murió en Quito el 18 de julio de 2017. Es por eso que a lo largo de la tesis, y en especial en el último capítulo, la voz de Juan García esté siempre presente. No fue un intelectual más ni es reconocido únicamente como un dirigente, investigó por más de 30 años las comunidades ribereñas y vecinas al Pacífico a ambos lados de la “raya”, como definen la frontera las poblaciones del norte de Esmeraldas, documentando a su paso la memoria colectiva. Para entender quien fue este pensador, parece importante traer a colación las palabras de Catherine Walsh, una de las personas que mayor cercanía y trabajo conjunto mantuvo con Juan García:

“Nunca se identificó con la ‘academia’, y la ‘academia’ -particularmente la ecuatoriana- tampoco se identificó con él. El maestro Juan incomodó tanto a la institución académica como a sus académicos cómodos (algo que también hicieron en su tiempo Aimé Cesaire y Frantz Fanon). Con su pensamiento cimarrón, su filosofía ancestral de vida y re-existencia y sus estudios históricos que revelaba lo que ‘La Historia’ y ‘Los Historiadores’ han venido ocultando, borrando y negando por siglos -que son historias protagonizadas por el pueblo negro- Juan era como piedra en el zapato de los que dicen que saben; era provocación a la hegemonía blanca-blanqueada-occidentalizada y al sistema racista, patriarcal y aún colonial, hegemonía y sistema que siguen rigiendo, estructurando y organizando el conocimiento y la universidad ecuatoriana y latinoamericana” (Padilla y Montaña comp., 2018: 10-11).

Un segundo momento del trabajo de campo lo llevé a cabo entre enero y febrero del 2018 en las ciudades de Quito, Esmeraldas, Rioverde y Borbón. El atentado de un coche bomba en la ciudad de San Lorenzo, el mismo día en que pretendía viajar hacia San Lorenzo (28 de enero), me impidió avanzar más al norte debido al cierre de las vías por la presencia militar. Solo pude llegar hasta Borbón. Pese a la limitación de movilización, pude realizar varias de las entrevistas planificadas en la provincia de Esmeraldas.

El tercer momento del trabajo de campo fue entre junio y agosto del 2018 donde pude recorrer los tres cantones del norte de Esmeraldas, complementar algunas

entrevistas adicionales y participar en un encuentro entre las organizaciones del norte de Esmeraldas y la Defensoría del Pueblo.

El trabajo de campo directo, como fuente básica para la recolección de información primaria, lo intercalé con la realización de entrevistas virtuales (Skype) dada mi estadía en España. Estas entrevistas se llevaron a cabo durante noviembre y diciembre del 2017 y en algunos casos fue posible modificarlas por entrevistas presenciales en virtud de viajes oficiales de autoridades ecuatorianas a España.

En la identificación de las personas entrevistadas consideré la representatividad de actores, buscando un balance entre los sectores sociales, privados y públicos, así como intentar capturar la diversidad étnica y el género, de modo de contar con percepciones del más amplio espectro posible. De este modo, hay nueve entrevistas al sector privado, incluyendo diversas ONG y tres representantes del sector palmicultor; diez entrevistas a autoridades de instituciones públicas tanto a nivel nacional como regional y local; trece entrevistas en las que participaron dirigentes sociales del norte de Esmeraldas; dos a instituciones de la Iglesia local y dos a técnicos de organismos internacionales. En todos los casos, opté por la realización de entrevistas semi-estructuradas a partir de un cuestionario temático que se adjunta como Anexo 1 a la tesis. La Tabla 2 detalla las entrevistas realizadas y el lugar donde se llevaron a cabo.

**Tabla 2. Detalle de las entrevistas realizadas**

	<b>Institución/organización/territorio</b>	<b>Función</b>	<b>Lugar de la entrevista</b>	<b>Fecha de la entrevista</b>
1	Corporación de Gestión y Derecho Ambiental -ECOLEX-	Técnico	Virtual	16.12.2017
2	Pontificia Universidad Católica, Sede Esmeraldas -PUCESE-	Director de Investigaciones	Virtual	17.12.2017
3	Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador	Asesora	Madrid	20.12.2017
4	Secretaría Nacional de Gestión de la Política	Ministro	Madrid	21.12.2017
5	Servicio Jesuita para Refugiados	Director	Virtual	27.12.2017
6	Ministerio de Minas y Petróleo	Subsecretario de Minas Región 1	Virtual	28.12.2017
7	Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES-	Subsecretario Región 1	Virtual	15.01.2018
8	Acción Ecológica	Técnica	Quito	19.01.2018

	<b>Institución/organización/territorio</b>	<b>Función</b>	<b>Lugar de la entrevista</b>	<b>Fecha de la entrevista</b>
9	Defensoría del Pueblo	Adjunto Derechos Humanos y de la Naturaleza	Quito	19.01.2018
10	Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional - FEDAPAL-	Presidente	Quito	23.01.2018
11	Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera -ANCUPA-	Director Ejecutivo	Quito	25.01.2018
12	Parroquia de Maldonado	Pobladora	Rioverde	26.01.2018
13	Pastoral Social	Coordinadora	Esmeraldas	28.01.2018
14	Programa Buen Vivir para el Norte de Esmeraldas, Ministerio de Agricultura y Ganadería	Coordinador	Esmeraldas	29.01.2018
15	Gran Comarca del Norte de Esmeraldas	Palenquera Mayor	Rioverde	30.01.2018
16	Empresa palmicultora	Técnico	Rioverde	30.01.2018
17	Movimientos sociales	Activista derechos humanos	Esmeraldas	31.01.2018
18	Seguro Social Campesino	Técnica	Esmeraldas	31.01.2018
19	San Lorenzo	Dirigente	Esmeraldas	02.02.2018
20	Comuna Río Santiago Cayapas	Presidente	Borbón	03.02.2018
21	Ministerio del Ambiente	Director Provincial	Borbón	03.02.2018
22	Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial - CEPESIU-	Directora	Esmeraldas	04.02.2018
23	Asamblea Nacional Ambiental	Dirigente	Esmeraldas	05.02.2018
24	Conservación Internacional	Técnico	Virtual	15.02.2018
25	Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA.	Oficial de proyectos	Borbón	08.07.2018
26	Comuna Río Santiago Cayapas	Dirigente	Borbón	09.07.2018
27	Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema del Manglar C-CONDEM	Dirigente	Borbón	09.07.2018
28	Gobierno Autónomo Municipal Rioverde	Técnica	Rioverde	09.07.2018
29	Grupo de Mujeres de Colón Eloy	Dirigente	San Lorenzo	10.07.2018

	<b>Institución/organización/territorio</b>	<b>Función</b>	<b>Lugar de la entrevista</b>	<b>Fecha de la entrevista</b>
30	Gobierno Autónomo Municipal de Eloy Alfaro	Técnica	Borbón	14.07.2018
31	Iglesia de Borbón	Párroco	Borbón	15.08.2018
32	Ciudad de Borbón	Pobladora	Borbón	15.08.2018
33	Ciudad de San Lorenzo	Poblador	San Lorenzo	17.08.2018
34	Asociación de Refugiados Colombianos-San Lorenzo	Dirigente	San Lorenzo	17.08.2018
35	Comunidad La Chiquita	Dirigente	San Lorenzo	18.08.2018
36	Nacionalidad Awá	Dirigente	San Lorenzo	18.08.2018
37	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR-	Coordinador	Esmeraldas	19.08.2018
38	Mancomunidad del Norte	Coordinadora Técnica	Quito	22.08.2018

Para el abordaje de ciertos temas, realicé además consultas a expertas/os que tuvieron la apertura y generosidad de entregarme información y compartir sus experiencias. El detalle de cada una de estas consultas, en temas legales, forestales, de expansión de la frontera agrícola, consta en el texto.

Merece explicitarse que esta investigación, a tono con la perspectiva decolonial adoptada, ha otorgado un lugar central al pensamiento generado en y desde América Latina, así como de obras producidas por intelectuales africanos y asiáticos, tratando en cada caso de contrastar o complementar los conceptos con el conocimiento producido en Europa o Estados Unidos. No en vano, la investigación es un esfuerzo por “escuchar” la voz de quienes con frecuencia son silenciados, como los pueblos negros e indios de Esmeraldas. De ahí que a lo largo de la tesis se haya concedido una alta importancia a los documentos (informes, memorias, demandas legales, cartillas) producidos por los movimientos negro e indio.

Dos aclaraciones, más pragmáticas e instrumentales pero necesarias, consisten en señalar a los y las lectoras de esta investigación que, para fines de claridad expositiva, opté por traducir los textos citados cuando sus versiones originales están escritas en inglés o portugués y remitir, siempre que sea posible, la referencia completa de los enlaces virtuales consultados, a la bibliografía.



## 7. Estructura de la investigación

La tesis está organizada en cinco capítulos además de la introducción. El marco teórico que apuntala los contenidos de la investigación corresponde al **Capítulo 1**. Inicia con la comprensión de uno de los conceptos centrales de la geografía política, la noción de fronteras, estrechamente ligada a la territorialidad del Estado-nación. Al problematizar la naturalización con que se asume este concepto, el capítulo introduce la discusión sobre otro tipo de territorialidades que han existido a lo largo de la historia y de modelos de organización que, como el Estado Plurinacional, representan elaboraciones alternativas al modelo territorial hegemónico.

En función de las preguntas de investigación planteadas para esta tesis, este capítulo también desarrolla el sustento teórico proveniente de la ecología política, desmenuzando conceptos como extractivismo, fronteras extractivas, acumulación por desposesión y conflictos ecológico distributivos, que contribuyen a explicar las implicaciones en el paso de ciertas áreas fronterizas de territorios subalternos hacia áreas de interés estratégico.

El **Capítulo 2** aborda la pregunta de investigación ¿En qué elementos se fundamenta el renovado interés por las fronteras que hasta hace poco tiempo atrás eran apenas consideradas como límites territoriales que dividen a los Estados? En esta dirección, sus contenidos están volcados a la comprensión de las dinámicas contemporáneas que están tomando lugar en las fronteras de América Latina a partir de la discusión de las políticas de seguridad y de las de integración, en especial de aquellas que se derivan de la Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

A partir de la discusión de lo regional, la tesis pasa desde el **Capítulo 3** a enfocarse en el Ecuador. De ahí que en este capítulo se aborde la tercera pregunta de investigación, ¿cuál fue la trayectoria histórica en la constitución de las fronteras en América Latina y el Ecuador en particular y, a partir de ese recorrido, cuáles han sido las continuidades y rupturas en relación a la realidad contemporánea? Los contenidos de este capítulo supusieron la reconstrucción de un marco histórico que se extiende desde el siglo XVIII, cuando el espacio se organizó en función de los intereses de la Corona española, para llegar a entender lo sucedido en los últimos 50 años donde la inestabilidad política y las crisis económicas que soportó en Ecuador hacia finales del siglo XX e inicios del actual

cedieron paso a un régimen que apostó por recobrar la centralidad de la acción del gobierno y el control del espacio.

Un nuevo salto de escala espacial se plantea con el **Capítulo 4** donde se analiza el territorio fronterizo del norte del Ecuador distinguiendo, en consonancia con lo señalado por Albuquerque (2014), las discontinuidades que emergen en un espacio aparentemente continuo, y situando los problemas más relevantes que atraviesan a la región en la perspectiva de dar respuesta a dos interrogantes: ¿en qué medida han contribuido a la construcción de las fronteras y al desarrollo fronterizo los procesos de integración latinoamericana y cómo se expresa la experiencia de integración fronteriza en el caso de provincias limítrofes como Esmeraldas en Ecuador? y, ¿cómo entender y caracterizar el supuesto abandono del Estado respecto a ciertas regiones fronterizas que como en el caso de Esmeraldas han terminado por objetivar su condición de marginalidad?.

A partir del desarrollo anterior, el **Capítulo 5** se concentra en el estudio de caso, el territorio fronterizo de Esmeraldas, al norte de Ecuador. La narrativa explicativa regional y nacional utilizada en los capítulos anteriores se adecúa para abordar desde una perspectiva histórica, el proceso de integración de Esmeraldas al Estado ecuatoriano. En la perspectiva histórica construida alrededor de Esmeraldas, la tesis se concentra en un análisis temporal que comprende los últimos 30 años a través del estudio de dos de los conflictos socio-territoriales y ambientales de mayor repercusión en esta área: el cultivo de palma aceitera y la minería. A través de la lectura de esta conflictividad se intenta dar respuesta a las preguntas de investigación que buscan reconocer las especificidades de los conflictos socio-ambientales suscitados en regiones de frontera y generar un marco interpretativo para entender la ecología política en las regiones fronterizas. Al tratarse de una zona en la que está presente un mosaico de culturas, el capítulo también intenta dar respuesta a cómo la reorganización fronteriza que está tomando lugar se articula con los postulados del Estado Plurinacional que no solo ha sido una reivindicación histórica de movimientos indios y afrodescendientes, sino que representa un reconocimiento explícito volcado en la actual Constitución del Ecuador.

El **Capítulo 6** recoge las conclusiones más sobresalientes y plantea los términos - en clave de ecología política- a través de las cuales considero se debe leer la incorporación de territorios fronterizos subalternizados, como Esmeraldas, a los espacios políticos únicos. En este caso parecería ser que la gravitación de las variables internacionales (flujos de comercio y mercancías) no puede minimizar el peso de factores sociales,

económicos, políticos y culturales fuertemente arraigados en la construcción del país y sus fronteras.

## **Capítulo 1. Marco Teórico**

---

*“El límite debe ser fijado y asumido libremente. Pero ¿cuál será la instancia habilitada para hacerlo? Al término de la odisea de la destrucción de toda norma impuesta por la trascendencia, la revelación o la tradición, la única autoridad razonable que queda es sin dudas el demos, o sea, los seres humanos emancipados que asumen su autonomía y se dan fronteras entre ellos y para ellos, constitutivas de un mundo común que contiene varios mundos comunes (...) recrear los límites y las fronteras es necesario no sólo para conjurar el colapso, sino también para reencontrar un mundo común”. Serge Latouche (2014: 135).*

Este primer capítulo plantea un recorrido por los fundamentos teóricos de la territorialidad estatal, como forma dominante de la organización política, incluyendo los conceptos de frontera, Estado y soberanía, para llegar a un acercamiento a los principales debates contemporáneos que problematizan e interpelan la “naturalidad” con la que se han manejado tradicionalmente estas nociones. El interés al situar estos conceptos es precisar el campo en el que se desarrollará esta tesis y que alude a la forma en que ha tomado y toma lugar la integración de un territorio fronterizo, tradicionalmente considerado como subalterno, y explorar las implicaciones y manifestaciones de una territorialidad que hoy ha sido resignificada.

### **1.1. ¿Qué son las fronteras?**

El término frontera resulta complejo definir pues es una noción que proyecta de manera simultánea significados dispares y aparentemente contradictorios. Las fronteras pueden remitir a la separación y confrontación, al mismo tiempo que evocar el intercambio y la interdependencia; pueden asociarse a los territorios que pertenecen a los confines del Estado y, de manera simultánea, entenderse como un puente de encuentro entre culturas y constitucionalidades distintas (Agnew, 2008).

Dentro de la variabilidad de significados asignados a las fronteras, su papel como barreras de protección y resguardo de los Estados y su vinculación con la soberanía territorial, es quizá la más difundida y tradicional. Por eso Wendy Brown, citando a Heidegger, recuerda que “la frontera no es aquello en lo que termina algo, sino como sabían ya los griegos, aquello a partir de donde *comienza a ser lo que es* (comienza su esencia)” (2015: 172, los paréntesis y las cursivas son de la autora). Esta acepción de la frontera en tanto límite (del inglés *border*), tiene una mayor repercusión en ámbitos jurídicos, generalmente ligados a acuerdos y tratados suscritos por países limítrofes y por lo mismo, remite por lo general a una construcción de los Estados para establecer la separación entre unidades políticas, posibilitando de tal forma el consiguiente ejercicio

de una soberanía dentro de un territorio delimitado. “Hablar de fronteras estatales, -dice Cairo-, es tanto como hablar de mapas” (2011: 29).

El trazo de cualquier frontera representa una arbitrariedad y una simplificación de realidades sociales y de conflictos políticos y geopolíticos complejos subrayando una genealogía poco democrática<sup>12</sup> en torno a su creación. Al ser el producto de sistemas estatales centrales diversos, imperfectos y contradictorios, las fronteras raras veces, si es que alguna vez lo hacen, coinciden con variables económicas, políticas y culturales o con marcas naturales divisorias. De ahí que incluso los límites fronterizos, pese a tener un trazo preciso en los mapas, no “solo son líneas territoriales duras -son instituciones que resultan de las políticas de frontera-. Tienen que ver con la gente y con la exclusión e inclusión en la medida en que están tejidas de variadas tesituras culturales, económicas y políticas” (Brunet-Jailly, 2011: 3).

La particular relación entre estas variables, puede ser transitoria o durable (Anderson y O’Dowd, 1999), y se concreta en líneas divisorias, muy pocas veces naturales y casi siempre construidas que dividen y fragmentan espacios continuos y relaciones sociales y culturales comunes. Muros, alambradas o zanjas suelen marcar los 247.000 km de fronteras que existen en el mundo (Bréville, Glissant, Razac, et al., 2013: 4), los 52.752 km de fronteras que se extienden a lo largo del continente americano (Bernecker, 2004: 81) y los 2.115 km de fronteras territoriales que circulan al Ecuador (www.inocar.ec), levantando obstáculos simbólicos, y otros concretos y reales para el libre movimiento de las personas de un lado al otro del límite internacional.

Distante a la acepción de límite o línea fija en un mapa, un segundo significado de frontera, más vinculada a perspectivas geográficas y culturales, habla de las regiones fronterizas (*borderlands* en inglés), de “aquellas zonas en las que las comunidades políticas se interpenetran mutuamente, y en las que sus habitantes, de uno y otro lado, comparten vivencias, tienen frecuentes contactos e incluso forjan lazos familiares” (Cairo, 2011: 33). Desde este significado, es más claro entender que éstas son el resultado de procesos sociales o, como lo dice Agnew, como “creaciones humanas complejas que están perpetuamente abiertas a la interrogación” (Agnew, 2008: 176), aludiendo en tal virtud a un proceso de construcción social con historicidad y particularidades propias. La frontera así entendida, es un “concepto vivo” que surge y se moldea, a partir de la relación, el encuentro, la interacción de dos sociedades con similitudes y diferencias entre sí,

---

<sup>12</sup> En el sentido de consulta o participación de las poblaciones asentadas en los territorios fronterizos en la definición del curso de las fronteras.

llegando a hablar de regiones, zonas o espacios fronterizos de extensión variable<sup>13</sup>. Es en virtud de estas dos acepciones, que Renard concluye la necesidad de distinguir entre dos tipos de fronteras:

“las fronteras lineales, que representan los límites de los territorios nacionales o que internamente separan los estados (en el caso de organizaciones de carácter federal) o sociedades (culturalmente diversas); y, los espacios fronterizos, en el sentido norteamericano de la palabra *frontier*, es decir, los márgenes territoriales en curso de conquista e integración donde el crecimiento, la estructura y comportamiento de la población pueden tener especificidades en comparación con el ‘núcleo’ de los territorios” (Renard, 1992: 169).

Es precisamente esta última acepción de frontera, la región fronteriza (o región de frontera) la que se utilizará en esta tesis y que Grimson caracteriza como “espacios liminales donde se producen a la vez identidades transnacionales, así como conflictos y estigmatizaciones entre grupos nacionales. Como zonas de expansión y de límite, se reconfiguran para cumplir nuevas funciones en el nuevo orden global y regional” (Grimson, 2005a: 96). Si bien en teoría existe una relación entre límites y regiones fronterizas, no todos los límites fronterizos dan paso a que existan relaciones, contactos, intercambios e interdependencias. En muchos casos, el peso del límite es de tal magnitud que niegan la condición de posibilidad de las regiones fronterizas (Cairo, 2011).

## **1.2. Fronteras, soberanía y manifestaciones de una tensión**

La concepción original en el trazado de líneas fronterizas ha seguido representando, como dice Cairo, “una parte fundamental de la construcción del Estado-nación moderno (pues) no se puede entender el mismo sin la conformación de un espacio homogéneo perfectamente delimitado” (Cairo, 2001: 34). Con el advenimiento del Estado moderno se consolidó también la noción de soberanía, término cuyo origen se atribuye al filósofo político francés Jean Bodin (1530-1596).

La noción de soberanía tiene distintas acepciones y énfasis que han cambiado a lo largo del tiempo. En un inicio, el término soberanía aludía al orden interno y al poder

---

<sup>13</sup> En *Territorialidad y fronteras del estado-nación: Las condiciones de la política en un mundo fragmentado*, Heriberto Cairo (2011: 33) identifica tres significados de frontera: (1) la región de frontera que “hace referencia a una área de transición entre lo conocido y lo desconocido” y que terminan siendo incorporadas al sistema mundial; (2) el límite fronterizo en tanto “línea exacta en el mapa que sirve para marcar la distinción entre dos entidades políticas; y, (3) las zonas fronterizas o *borderlands*, “que serían aquellas zonas en las que las comunidades políticas se interpenetran mutuamente, y en las que sus habitantes, de uno y otro lado, comparten vivencias, tienen frecuentes contactos e incluso forjan lazos familiares”.

atribuido a un individuo o, dicho en otras palabras, las voluntades individuales convergían, según lo postulaba Hobbes, en la voluntad del soberano quien ejercía la función de representación. En ese proceso se establecía un contrato implícito de asociación que al mismo tiempo era de subyugación (Hardt y Negri, 2000).

Las revoluciones burguesas de 1783 y 1789 sentaron las condiciones para pasar de la soberanía a la soberanía nacional. Siguiendo a Hobsbawm (2012 [1990]), con las revoluciones no solo que los súbditos se convirtieron en ciudadanos, sino que la soberanía se habría vinculado con la “nación”. Desde entonces el conjunto de personas que se consideraban “nación” reivindicó el derecho a la autodeterminación, así como raíces vinculadas a la etnicidad y la lengua. Es la época que atestigua el surgimiento del Estado moderno. La nación fue así considerada como “el conjunto de ciudadanos cuya soberanía colectiva los constituía en un Estado que era su expresión política” (Hobsbawm, 2012 [1990]: 27), y cuya unidad, además de un sentimiento nacional compartido, demandaba de un gobierno capaz de brindar protección y autonomía, como lo añadió John Stuart Mill, un gobierno que representara el interés común por sobre los intereses particulares.

Cercano al planteamiento de Hobsbawm, Agamben subraya que el nacimiento en un territorio, y por tanto, la pertenencia a un Estado, contribuyó a forjar la noción de soberanía, como lo recoge la Declaración de los Derechos y del Ciudadano de 1789. “Estado-nación significa: Estado que hace del hecho de nacer, del nacimiento (es decir de la vida humana), el fundamento de la propia soberanía” (Agamben, 2010: 25). Nación, nacimiento y soberanía se constituyen así en un todo cerrado.

No todos los pensadores clásicos entendían a la soberanía como la expresión de la voluntad popular. El filósofo alemán Carl Schmitt, por ejemplo, parte de premisas distintas. Para él, la toma de un territorio es “el primer título jurídico en el que se basa todo derecho ulterior” (2005: 25, citado por Brown, 2015: 65-66), es decir, la toma de la tierra y el vallado de la misma dentro de una línea de demarcación del espacio da lugar a la soberanía, lo que implica en palabras de Brown que “fue vallando el espacio como nació la soberanía” (Ibid.: 66) o, en otras palabras, la soberanía se entendió como la “forma final, absoluta y centralizada del poder político investido en el Estado territorial” (Mezzadra y Neilson, 2013: 222). A partir de esta acción, se construye un poder que no tiene vigencia fuera del límite marcado. La soberanía surgiría así a partir del control de un territorio y del consecuente poder y autoridad sobre las personas y cosas dentro de ese territorio, teniendo en cuenta un conjunto de acuerdos sociales y jurídicos definidos en función de regular el funcionamiento y la organización al interior de ese espacio. Desde



el enfoque de Schmitt, la soberanía por tanto no se construye, pues parte del acto del dominio y en este contexto, el orden requerido no solo sería condición para el funcionamiento de la soberanía, sino la garantía de su cumplimiento.

Sea a partir de una visión más ligada al territorio, o más inclinada a pensarse como el resultado de la voluntad general y de la representación de los intereses del conjunto de una sociedad, la combinación Estado-nación/territorio/soberanía se ha constituido en el eje alrededor del cual se levantó la organización del espacio planetario desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Murphy da cuenta que hacia 1950 la mayor parte de los científicos sociales utilizaban el término Estado-nación para referirse a cualquier estado soberano, independientemente de lo culturalmente heterogéneo que éste fuera.

“Los dos más grandes conflictos del siglo XX dejaron claro que un orden mundial estable no podía ser construido sobre una ambición etnonacionalista territorial desenfrenada o sobre una visión completamente anárquica de la soberanía estatal. Lo que quedó fue el estado territorial y el mapa político que se reconstituyó a finales de la década de 1940 se convirtió en la estructura alrededor de la cual debía entenderse y organizarse la sociedad humana. Lo que importaba en este nuevo orden eran los Estados existentes. Las naciones, en el sentido clásico, se percibían como derivadas del Estado y la soberanía se convirtió en un poco más que en un sinónimo de Estado territorial, independientemente de su real nivel de autonomía”. (Murphy, 1996: 102).

La centralidad concedida desde entonces al Estado-nación y al territorio ha tenido tres grandes consecuencias: una dificultad para imaginar otros arreglos territoriales posibles, una comprensión de la soberanía como un orden casi inamovible, y un entendimiento según el cual Estado, nación y soberanía representan una trilogía inseparable (Doty, 1996 y Murphy, 1996).

Teóricamente, esta realidad ha sido respaldada por el pensamiento realista y neorrealista que, con matices entre sí, defienden al Estado como una entidad dada y sostienen la importancia de la soberanía para el mantenimiento del orden internacional. Los exponentes de este pensamiento defienden a la soberanía como una regla de coexistencia social dentro del sistema estatal para que los distintos países puedan actuar en el terreno internacional, afianzando al mismo tiempo la construcción de los Estados (Biersteker y Weber, 1996; Doty, 1996).

Distante a una visión casi naturalizada del Estado y de la soberanía, dentro de la ciencia política han surgido también otros enfoques sustentados en el carácter histórico contingente de tales nociones. En esta dirección Biersteker y Weber (1996) identifican que si bien la literatura alrededor de la soberanía coincide por lo general que ésta está

constituida por población, reconocimiento, autoridad y territorio, no existe consenso en torno al alcance e implicaciones actuales de la soberanía a la luz de los cambios acontecidos en la realidad social vinculados con la cada vez mayor interdependencia económica, el predominio de fenómenos transnacionales o la relevancia de tratados y acuerdos internacionales que inciden sobre el orden interno, como sucede con el marco conceptual e instrumental de los derechos humanos.

Alrededor del decenio de 1980, pensadores como F. H. Hinsley y R. Jackson, si bien admitían que la soberanía enfrentaba algunos desafíos, no solo que no descartaron la validez del concepto, sino que introdujeron ajustes para dar cuenta del nuevo escenario. “No existe una autoridad final y absoluta en ningún lado” (Hinsley y Jackson 1986: 86, citado por Biersteker y Weber, 1996: 8) señalaba Hinsley para relativizar el supuesto debilitamiento de la soberanía mientras que Jackson (1983) hablaba de la presencia en el escenario mundial de “cuasi-estados”, para denotar a aquellos Estados cuya soberanía es más jurídica que empírica.

Entre las escuelas de pensamiento que problematizan la noción de soberanía, los dependentistas hablan de la pérdida del poder por parte de los Estados nacionales como consecuencia de su situación de subordinación (dependencia) que soportan. En el análisis de la historia económica de los países latinoamericanos, Cardoso y Faletto identifican que si bien el Estado nacional puede manejar una serie de instrumentos políticos, “los mecanismos de control de la economía nacional escapan parcialmente del ámbito interno en la medida en que ciertas normas universales del funcionamiento de un sistema productivo moderno impuestas por el mercado universal no permiten alternativas: la unificación de los sistemas productivos lleva a la pautaación de los mercados y a su ordenamiento supranacional” (Cardoso y Faletto, 1977: 60). El carácter dependiente de la economía latinoamericana tendería de esa manera a restringir el ámbito y la autonomía de las sociedades.

Abordajes más recientes también ponen en duda la estabilidad de la trilogía Estado-territorio y soberanía. Saskia Sassen defiende la tesis de que “la globalización ha implicado una desnacionalización parcial del territorio nacional y un trasvase, también parcial, de algunos componentes de la soberanía del Estado a otras instituciones, a entidades supranacionales y al mercado global de capitales” (Sassen, 2001: 16). Siguiendo a la misma autora, tales cambios lejos de vaticinar la desaparición de los Estados, advierten de nuevos ensamblajes de poder en los que los Estados comparten su poder con agentes locales, transnacionales e internacionales:

“(s)e está volviendo evidente que la soberanía del Estado articula tanto sus condiciones y normas propias como externas. La soberanía sigue siendo una propiedad sistémica pero su inserción institucional y su capacidad de legitimar y absorber todo poder legítimo, de ser la fuente del derecho, se ha vuelto inestable. Las políticas de las soberanías contemporáneas son mucho más complejas que lo que las nociones de territorialidades mutuamente exclusivas pueden capturar” (Sassen, 2006: 415, citada por Mezzadra y Neilson, 2013: 230).

El filósofo postmarxista Bolívar Echeverría señalaba que el hecho histórico más evidente después de concluida la Guerra Fría es la pérdida de soberanía de los Estados nacionales, entidades que han cedido gran parte de las decisiones que tomaban en el pasado a una “entidad estatal transnacional en ciernes”, incompleta pero ya efectiva, en la que se articulan, entre otras, de manera todavía incoherente, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio” (Echeverría, 2010 [2006]:143).<sup>14</sup>

Para Hardt y Negri, la “hipótesis básica consiste en que la soberanía ha adquirido una forma nueva, compuesta por una serie de organismos nacionales y supranacionales unidos por una única lógica de dominio. Esta nueva forma global de soberanía es lo que llamamos ‘imperio’” (Hardt y Negri, 2000: 14). Desde esta perspectiva, la soberanía de los Estados-nación habría sido sustituida por el imperio global.

Giorgio Agamben, por su parte, desarrolla una visión complementaria a lo que argumentan los pensadores antes citados. Más que identificar que la erosión de la soberanía obedece al influjo de la dinámica del capital, su argumento apunta a la pérdida del papel de la soberanía en tanto expresión de la voluntad general como lo propuso Rousseau (1770). De acuerdo a su argumento, a partir del estado de excepción, actualmente normalizado en todas partes, la soberanía ha fortalecido su papel en el control de la vida, de la vida separada del modo de vivir, de la posibilidad y potencia de vivir. La soberanía se habría convertido por tanto en un impedimento para alcanzar la vida política.

---

<sup>14</sup> Echeverría va incluso más allá al afirmar que no solo la soberanía estaría en cuestión, sino la pervivencia del propio Estado que parecería ya no responder a las nuevas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Echeverría anota que la unificación planetaria del proceso de trabajo como consecuencia de la interconexión técnica, tornaría innecesaria, por un lado, la fragmentación del capital en muchos conglomerados, lo que hace prescindible la base técnico-económica de los Estados nacionales. Por otro lado, la tecnología al potenciar la productividad del trabajo y anular consecuentemente las ventajas comparativas otorgadas por la productividad de un territorio o una población determinados, relativizarían el “sustento ‘nacional’ de la empresa histórica estatal” (Echeverría, 2010 [2006]: 149). Para una profundización de este debate véase su obra *Vuelta del Siglo*, que discute como la marcha del progreso, esta “modernidad realmente existente”, nos conduce inexorablemente a la barbarie.

“(E)l poder no tiene hoy otra forma de legitimación que la situación de peligro grave a la que apela en todas partes de forma permanente y que al mismo tiempo se esfuerza en reproducir secretamente (...), sino también, y sobre todo, porque entretanto la nuda vida, que constituía el fundamento oculto de la soberanía, se ha convertido en todas partes en la forma de vida dominante. En un estado de excepción que ha pasado a ser normal, la vida es la nuda vida que separa en todos los ámbitos las formas de vida de su cohesión en una forma-de-vida” (Agamben, 2010, [2001]:15-16).

Según Agamben, por tanto, en la actualidad en la noción de soberanía se habría difuminado la idea entre nosotros y el enemigo externo en la medida en que la ciudadanía y el orden legal, por muy precario que fuera, estarían sujetos a un estado de excepción permanente.

Es posiblemente Wendy Brown quien elabora una síntesis que articula los diversos planteamientos alrededor de la crisis de la soberanía y de la transformación de las fronteras. Su argumento sostiene que, en la actualidad, la noción de soberanía atravesaría dos tensiones que no implican necesariamente un debilitamiento del Estado, sino un alejamiento entre Estado y soberanía. La primera tensión, de carácter eminentemente político, alude a la contradicción entre soberanía en tanto poder irrevocable e indivisible y el “gobierno por el *demos*”:

“La relación entre democracia y soberanía se plantea en la actualidad como una cuestión que deriva de la de-constitución parcial y desigual del Estado nación soberano en la tardomodernidad, una de-constitución que es consecuencia de los flujos de poder económico, moral, político y teológico sin precedentes que atraviesan las fronteras de las naciones. Es una cuestión planteada también por la conducta abiertamente imperial, durante la Guerra Fría y en la época siguiente, de la más antigua democracia ininterrumpida del mundo, cuyo objetivo -la democracia universal que la legitimaba- ha supuesto paradójicamente tanto la subversión interna de la democracia como el hecho de hacer caso omiso de las soberanías de otros Estado nación” (Brown, 2015: 72-73).

La segunda tensión guarda relación con los flujos de poder económicos, culturales, políticos y militares que, al atravesar las fronteras de las naciones, menguan el poder soberano de los Estados o, como ella lo afirma:

“La soberanía del Estado nación se ha visto socavada por la mentalidad neoliberal, que no reconoce ninguna soberanía que no sea la de los que toman las decisiones en las empresas (...), que sustituye los principios de la legalidad de la política (en especial los compromisos liberales con la inclusión, la igualdad y la libertad universales y el Estado de derecho) por criterios de mercado, y que degrada la soberanía policial a un estatus de mera gestión. La soberanía del Estado nación ha sido erosionada por el constante crecimiento e importancia de instituciones de gobernanza y economía internacional (...) y se ha visto cuestionada por un cuarto de siglo de reafirmaciones posnacionales e

internacionales de leyes, de derechos y de autoridad, que a veces tienden a subvertir o a sustituir abiertamente la soberanía de los Estados” (Brown, 2015: 31-32).

Frente estas tensiones, la respuesta ha sido no solo la creciente militarización y fortificación de las fronteras a partir de un sofisticado andamiaje tecnológico y la construcción de muros aparentemente infranqueables, sino la profundización de un discurso que pretende interiorizar sentimientos de protección y seguridad, activando simultáneamente el racismo y el nacionalismo. La afirmación de Brown respecto a que la “escenificación de integridad, orden y fuerza soberanos frente al declive de la soberanía recurre, intensificando, al sentimiento nacionalista xenofóbico entre los ciudadanos de una nación” (Ibid.: 137), podría complementarse para entender el resurgir de discursos nacionalistas en un momento en que paralelamente los Estados, particularmente en América Latina, han demostrado un creciente interés para integrar territorios, que como ciertas zonas fronterizas, habían estado ausentes de las preocupaciones centrales y de la construcción de lo “nacional”. La integración de estos territorios “olvidados”, como se discutirá más adelante, se ha sustentado, en gran parte, en las potencialidades y riquezas que encierran, lo que implica la utilización económica de sus recursos, muchas veces en manos de corporaciones privadas en las que participan capitales externos que generalmente imponen ciertas condiciones o reclaman arreglos institucionales particulares para su funcionamiento. De ahí que siguiendo la lógica de Brown, sería posible señalar que la escenificación y narrativas de progreso, desarrollo y bienestar que corresponden al Estado soberano recurren, frente al declive de la soberanía que implica “ceder” parte del territorio a intereses privados, a los sentimientos nacionalistas entre los ciudadanos de una nación. La incorporación de las fronteras a la dinámica económica mundial operaría por tanto, en paralelo a la recreación de un discurso que apela a los sentimientos e intereses nacionales respecto a la explotación de bienes naturales, aún cuando estos se entreguen a la administración de corporaciones privadas, o impliquen una violenta irrupción en la vida de quienes históricamente ocuparon territorios hoy resignificados por la dinámica del capital.

### **1.3. Las fronteras, de líneas fijas a engranajes complejos**

La literatura que examina la genealogía del concepto de frontera da cuenta que desde finales del siglo XIX y principios del XX, durante el largo proceso de consolidación del Estado moderno, habría primado la dimensión defensiva en el concepto de frontera y su

vinculación con la soberanía territorial de los Estados. Este enfoque se sustentó en las premisas del geógrafo y etnógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1904) quien consideraba a la frontera como parte consustancial del cuerpo político, del *Lebensraum* o espacio vital, como lo enuncia en su cuarta ley de crecimiento espacial de los Estados: “La frontera es el órgano periférico del Estado, el portador de su crecimiento así como su fortaleza, y participa en todas las transformaciones del organismo del Estado” (Ratzel, 2011 [1896]: 147), estableciendo una relación directa entre Estado y territorio, independientemente del régimen político existente a su interior. Las fronteras eran entendidas como la membrana que sustentaba el crecimiento del Estado, el que como muestra de su cultura, poder y progreso debía propender a la anexión de territorios cada vez mayores, en línea con los crecientes requerimientos materiales de una economía en expansión como la alemana en la que Ratzel escribió su geografía política: “a medida que el territorio de los Estados se hace mayor, no es sólo el número de kilómetros cuadrados lo que crece, sino también su fuerza colectiva, su riqueza, su poder y, finalmente, su duración. (...) basta mostrar en la extensión progresiva del territorio de los Estados, un carácter esencial y, al mismo tiempo, un poderoso motor de progreso histórico” (Ratzel, 1982 [1898]: 203).

Al estructurarse sobre la base del control territorial, el Estado que se fue construyendo junto a la expansión del capitalismo, en el período de liberalismo burgués (1830-1880), definió al territorio como el fundamento central de la organización del espacio. Hobsbawm explica al Estado característico de este período hasta el último tercio del siglo XIX como un

“territorio (preferiblemente continuo e ininterrumpido) sobre la totalidad de cuyos habitantes gobernaba, y que fronteras o límites muy claros separaban de otros territorios parecidos. Políticamente gobernaba y administraba a (sus) habitantes de modo directo en lugar de mediante sistemas intermedios (...) debía tomar nota de la opinión de sus súbditos o ciudadanos, porque sus sistemas políticos les daban voz” (Hobsbawm, 2012 [1990]: 89).

Anderson y O’Dowd señalan que esta forma de ver las fronteras no se habría modificado sustancialmente hasta bien avanzado el siglo XX, con ligeros matices en respuesta a los cambios económicos, políticos y culturales que tomaban lugar en el mundo. Así, los autores identifican que hasta la Primera Guerra Mundial, las fronteras habrían desempeñado un papel importante en la construcción de los nacionalismos, en coincidencia con el declive de los grandes imperios europeos y de la hegemonía de Gran Bretaña. En el período entre guerras (1918-1939), las fronteras habrían fortalecido su

papel de barreras en función de las crecientes preocupaciones por el desarrollo nacional y de la vigencia del proteccionismo como la política más idónea para favorecer el crecimiento. Este papel se habría consolidado durante el período 1939-45 en respuesta a la depresión económica mundial que estalló en 1929 y a la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, e independientemente de la entrada en vigor de las regulaciones de Bretton Woods (1944) que impulsaron al libre cambio como principal política de relación internacional entre los Estados, las fronteras actuaron como elemento de contención y seguridad, incluso hasta los primeros años del decenio de 1970. Su importancia, entonces, era la protección en la construcción de los llamados “Estados de Bienestar”:

“Con el incremento del ‘poder infraestructural’ de los estados, el efecto neto fue que las fronteras estatales mantuvieron el significado construido en la fase anterior. Con sistemas de bienestar en lo educativo, sanitario y social que diferenciaban poblaciones adyacentes a uno y otro lado de las fronteras estatales y a pesar del continuo crecimiento de las corporaciones multinacionales, las economías nacionales continuaron siendo los ladrillos de la economía mundial. (...) Las fronteras estatales, por tanto, seguían siendo históricamente fuertes los primeros años de 1970” (Anderson y O’Dowd, 1999: 601).

De ahí que pese a los matices identificados a lo largo del siglo, del mayor o menor proteccionismo existente, del mayor o menor interés por el desarrollo nacional, es posible generalizar, como lo hacen Anderson y O’Dowd, que durante el período posterior a la Primera Guerra Mundial, hasta bien avanzado el siglo XX, las fronteras se caracterizaron por su proliferación y consolidación de la mano con el desarrollo de la doctrina de la autodeterminación.

El cambio de énfasis en las fronteras, como elementos defensivos o protectoras de externalidades a elementos de contención para los estados de bienestar condujo a desarrollar nuevas variables. Al decir de Lois (2014), es a partir de mediados del siglo XX cuando el estudio de las fronteras se conecta con la relación entre espacio y poder, ámbito en el que la academia francesa tuvo un papel destacado a partir de los años 70 del siglo anterior (Lois y Cairo, 2011). Tal cambio daría lugar a que las fronteras, según lo expresa Anssi Paasi, comenzaran a ser estudiadas antes de terminar el siglo XX, a través de diversas disciplinas, guardando conexión con los nuevos temas que emergían con la globalización:

“espacio de flujos, des/re-territorialización, movilidad, hibridez, posmodernidad, neoliberalismo, parecían desafiar la aparente rigidez que caracterizó al mundo de la investigación sobre fronteras durante el período de la guerra fría. En lugar de líneas fijas, las fronteras eran apreciadas como

procesos, prácticas, discursos, símbolos, instituciones o redes a través de las cuales operaba el poder” (Johnson et al., 2011: 62).

Este giro implicó dejar de ver las fronteras solo como el resultado de tratados o como la expresión de determinadas características físicas, sino como “una construcción socio-territorial que refleja los discursos y prácticas de la identidad nacional y, en algunos casos, del papel de la fronterización en condiciones de globalización” (Agnew, 2008: 177).

Al conjugar espacio y poder, Agnew (2008) identifica que las fronteras tienen un doble propósito: un fin instrumental, demarcando la presencia institucional y los bienes públicos de un Estado, y un fin político, para contener una determinada y particular constitucionalidad. Como elementos instrumentales, las fronteras actuarían como una barrera de defensa de los derechos de propiedad. Como contenedores políticos, las fronteras contribuirían a fijar la identidad política de un Estado a través de tres principios. El primero, y más tradicional, es la reivindicación de la soberanía, presente desde el siglo XVIII, entendida como “la autoridad para establecer lo que manda la ley (...) dentro de un territorio” (Rabkin, 2004, citado por Ibid.: 179). El segundo principio descansaría en la existencia de metas y aspiraciones sociales al interior de un territorio (disminución de la pobreza, generación de empleo, acceso a la educación y salud, etc.), contribuyendo a despertar un sentimiento de solidaridad nacional. El tercer principio sería el papel asignado a las fronteras y las políticas asociadas a su gestión, para controlar quién está dentro y quién “fuera” del Estado.

Newman y Paasi (1998), por su parte, señalan que las fronteras reflejan dos tipos de políticas: por un lado, aquellas vinculadas a la delimitación de lugares y la clasificación de personas, cosas, artefactos y flujos, y por otro lado, las políticas de representación y de identidad, vinculadas con narrativas de poder sustentadas en algún tipo de nacionalismo. Desde esta perspectiva, el lugar de la frontera no sería por tanto solo la línea limítrofe, sino el complejo proceso de construcción de la nación y de sus prácticas nacionalistas.

Los cambios mundiales ocurridos en la década de los años 90 del siglo pasado, vinculados a la consolidación del capitalismo a escala mundial, dieron lugar a pensar en el debilitamiento y paulatina desaparición de las fronteras y de la territorialidad. En esta dirección autores como Ohmae (1990) y Fukuyama (1991) defendían la defunción de las



fronteras como paso indispensable para facilitar la libre movilidad de capitales.<sup>15</sup> Su visión, parte de lo que Anderson y O'Dowd califican de globalización “fuerte” (1999: 599), se soportaba en el argumento de que las fronteras se presentan como un obstáculo a un “mundo de flujos que reemplaza a un mundo de lugares” (Agnew, 2008: 183). La irrelevancia de las fronteras era una postura que provenía también de posiciones militaristas como la expresada por Shimon Peres, ex Primer Ministro israelí, quien afirmó que en un mundo de misiles balísticos que pueden alcanzar un objetivo con precisión a miles de millas de distancia, la existencia de fronteras no tiene ninguna trascendencia (Peres, 1994 citado por Newman y Paasi, 1998).

El predominio de grandes corporaciones económicas y financieras y la importancia creciente de los flujos de información y comunicación, ha sido también motivo de que autores críticos al capitalismo, sostengan la irrelevancia de los Estados en el mundo contemporáneo y, por consiguiente, de las fronteras como sus contenedores. Michael Hardt y Antonio Negri afirman en *Imperio*, que vivimos en un régimen de soberanía imperial donde los Estados-nación están en curso irremediable de desaparición. “El espacio de la soberanía imperial es liso”, sostienen, y “en este espacio liso del Imperio no hay un lugar de poder -está tanto en todas partes como en ninguna. El Imperio es realmente una ou-topia, o un no-lugar” (Hardt y Negri, 2000: 159). Manuel Castells (2001) propone la noción de “espacio de flujos” de la sociedad en red para ilustrar una nueva forma espacial que tendría una relevancia similar a la de los ferrocarriles en la definición de mercados nacionales o de la ciudadanía en la configuración de las ciudades, “en esta red, ningún lugar existe por sí mismo, ya que las posiciones se definen por los intercambios de flujos en la red. (...) la red de comunicación es la configuración espacial fundamental: los lugares no desaparecen, pero su lógica y su significado quedan absorbidos en la red” (Castells, 2001: 434-435).

A la luz de las inevitables transformaciones ocurridas a propósito de la cada vez mayor internacionalización del capital, varios autores proponen una suerte de adecuación de los territorios y de las fronteras a la nueva realidad (Newman y Paasi, 1998; Giddens, 1999; Anderson, 1995; Guehenno, 1995; Sassen, 1996). El debate al respecto, que se inscribe en la denominada globalización “débil”, recurre a la existencia de marcos nacionales o esquemas macro-regionales como la Unión Europea, la internacionalización

---

<sup>15</sup> Para una profundización de estos enfoques véase entre los planteamientos más representativos de este enfoque, *The borderless world: power and strategy in the interlinked economy* (1990) de Kenichi Ohmae y *El fin de la historia y el último hombre* de Francis Fukuyama (1992).

de las élites estatales y aún de una parte del aparato estatal y la transformación del significado de las fronteras estatales en función de los diversos procesos sociales o económicos (Hirst y Thompson, 1995; Mann, 1997; Weiss, 1998).

A inicios del siglo XXI, las fronteras no han desaparecido. Luego de la declaración de la “guerra contra el terrorismo” embanderada por los Estados Unidos a raíz de los atentados que sufriera la ciudad de New York en el 2001, las fronteras parecerían haberse convertido en los lugares por excelencia para poner en marcha diversos y sofisticados dispositivos y mecanismos de securitización (Amoore, 2006). Muros, barreras, alambradas, se levantan atropelladamente en los límites internacionales de los Estados bajo el pretexto de protección ante las amenazas externas (Brown, 2015), de manera paralela al reforzamiento de la presencia y control militar de las regiones fronterizas y la aplicación de políticas de emergencia y restricción de derechos y libertades individuales (Agamben, 2010), lo que podría evocar el papel de contención y resguardo otorgado originalmente a las fronteras.

Wendy Brown (2015) demuestra como las fronteras se han vuelto cada vez más militarizadas y fortificadas. Ya no son instrumentos de protección -en el sentido clásico- contra otros Estados, sino que se han convertido en uno de los más importantes elementos de contención para detener el ingreso de agentes no estatales transnacionales (redes de narcotráfico, trata de personas, comercio de armas). En la misma línea, tanto Agnew (2005, 2008) como Newman y Paasi (1998) coinciden en afirmar que el colapso de la ex Unión Soviética, los atentados ocurridos el 9/11, el resurgimiento de movimientos separatistas a lo largo del mundo y el incremento de las inmigraciones, sustentaron un marco global que redefinió el concepto de fronteras en la perspectiva de robustecer los sistemas de control y de seguridad en estas áreas, y de acentuar su papel como un dispositivo para fortalecer el nacionalismo y la identidad. Al decir de Paasi, estas dos dimensiones alrededor de la frontera, la seguridad y el control, por un lado, y la dimensión discursiva/emocional, por otro,

“son utilizadas tanto para movilizar como para fijar la territorialidad, la seguridad, las identidades, emociones, la memoria social, el eje pasado-presente-futuro, y la socialización nacional. Estas dimensiones operan en última instancia en la misma dirección: para fortalecer al espacio estatal como una ‘unidad delimitada’, por muy porosa que sea, tenga límites físicos definidos o fronteras borrosas” (Johnson, et al., 2011: 63).

El fortalecimiento de la dimensión defensiva de las fronteras no es el único cambio acaecido a inicios del siglo XXI. Las fronteras simultáneamente se han tornado en

nociones multidimensionales, complejas y aún en un concepto “particularmente equívoco”, como lo califica Balibar (1998: 218 citado por Lois, 2014: 245); de perpetua inestabilidad, en palabras de Agnew (2008: 199), o, en un concepto inherentemente ambiguo y contradictorio, según lo describen Anderson y O’Dowd (1999: 594). Su estudio implica entender su alto dinamismo, las modificaciones que toman lugar en función de coyunturas particulares, los cambios en la correlación de fuerzas, y el peso que en determinado momento adquieren las dimensiones políticas, jurídicas, económicas, culturales o simbólicas. De ahí que Cardin (2014: 54) argumente que el estudio de fronteras sea “elíptico y flexible”; no se manifiesta de forma plena en una misma unidad temporal y espacial, sino de manera confusa y amorfa. Esto responde, según su análisis, a que es usual que ninguna dimensión tenga hegemonía dentro del concepto de frontera, lo que determina que algunos contextos de frontera se aprecien como caóticos. Su denominador común parece ser siempre la amalgama cultural, el contacto de los entramados sociales y políticos de los Estados, y un equilibrio siempre inestable entre alianza y conflicto social y político.

Partiendo del reconocimiento de que cada frontera es única, que es un proceso históricamente contingente, es posible afirmar que no solo que hay una multiplicidad de fronteras desde el punto de vista de su conformación y especificidades sociales, culturales e históricas, sino que éstas pueden extenderse más allá de los límites de un Estado y adquirir una serie de manifestaciones (lenguaje, cultura, mitos, política, legislación, economía) (Johnson et al, 2011). En palabras de Margarita Serje, la noción de fronteras no se ha visto aplicada únicamente a los límites nacionales sino también a los culturales, “llegando a asociar territorios étnicos con unidades biogeográficas” (Serje, 2011: 148). Ya Said advertía en *Orientalismo* que “a las fronteras geográficas le siguen las sociales, étnicas y culturales de manera previsible” (Said, 2008 [1997]: 87), de lo que se desprende que la fijación de los límites externos tiene también que ver con los internos y con otras fronteras (étnicas, lingüísticas, religiosas). Esta multiplicidad de fronteras ha transformado el cuerpo de las naciones (Winichakul, 1997).

La multidimensionalidad y elasticidad de las fronteras es tal que hoy se reconoce que éstas pueden dislocarse espacialmente, dilatarse en el tiempo o aludir, por las múltiples ubicaciones de las fronteras, a un cambio desde las fronteras a la fronterización (Lois, 2014; Agnew, 2008; Johnson et al., 2011). “Como representaciones sociales, las fronteras estarían en constante producción y recreación en términos materiales,

discursivos y prácticos. Más que ante límites fronterizos estables, nos encontramos con procesos de fronterización en evolución cambiante” (Lois y Cairo, 2011: 11).

En medio de esta complejidad, desde inicios del presente siglo una de las pocas certezas alrededor de las fronteras es que éstas ya no se consideran meros mecanismos de delimitación. En términos de espacio, la frontera no es solo la línea divisoria. Existen de manera paralela marcos institucionales y dispositivos de distinto tipo con capacidad y poder para ampliar las políticas de fronterización<sup>16</sup>, de lo que se desprende que el poder no descansa solo en los recursos materiales sino que se ejerce culturalmente a través de prácticas de representación, discursos, simbologías, alterando el orden espacial de la geopolítica convencional:

“Los plazos de solicitud de una certificación notarial, la virtualización de la emisión de visas, la creación de fronteras supraestatales, o las narrativas, experiencias y visiones de individuos y colectivos remiten a procesos de fronterización alejados del límite fronterizo, que han de formar parte necesariamente de un marco de referencia donde el tiempo y el espacio frontera son elásticos. La frontera se disloca espacialmente (e.g., en oficinas policiales, aeropuertos, oficinas de emisión de visados, terceros países, etc.) y se dilata temporalmente, en un proceso que va más allá de la inmediatez del cruce del límite fronterizo” (Lois y Cairo, 2011: 14-15).

Es precisamente el concepto de heterotopia –desarrollado por Foucault-, el que da cuenta que las fronteras se encuentran en espacios más allá de los límites fijados en el mapa (Agnew, 2008: 184) o, como dice Sandro Mezzadra, es su “proliferación y heterogeneización lo que pone en entredicho y difumina la distinción clara entre ‘dentro’ y ‘fuera’” (2016: 21).

Desde la lógica temporal, la frontera no se agota el cruce del límite fronterizo, sino que abarca procesos de mayor duración en el tiempo. El “*biometric border*”, siguiendo la denominación propuesta por Louis Amoore (2006: 336-337) al hablar de los nuevos sistemas de seguridad e información para controlar la movilidad humana, ha posibilitado por ejemplo, concretar las prácticas de fronterización más allá de los límites entre dos Estados, al punto de convertir los cuerpos de los inmigrantes y viajeros en

---

<sup>16</sup> Grimson señala que la fronterización daría cuenta de los “procesos históricos a través de los cuales los diversos elementos de la frontera son construidos por los poderes centrales y por las poblaciones locales” (2003: 18), sin otorgar en esta definición, ningún papel a la incidencia que en la configuración y los arreglos fronterizos podrían tener otros países o dinámicas internacionales. De ahí que la definición propuesta por Brunet-Jailly se presenta como más completa cuando dice que las políticas de fronterización hacen alusión a “las actividades de los distintos niveles de gobierno, (...) y, particularmente, de los sistemas de gobernanza multinivel (...), y de organizaciones específicas del sector público y privado que no están delimitadas territorialmente” (2011: 2), lo que implica que en su construcción no solo intervienen actores nacionales ni únicamente la institucionalidad pública.

lugares de codificación de límites. Siguiendo su razonamiento, el cuerpo se convierte en el portador de la frontera en la medida en que está inscrito a múltiples límites codificados de acceso. La frontera, en sus palabras, “(...) se convierte en una condición de ser que siempre se hace a sí misma, nunca es enteramente cruzada, sino que se erige, en su lugar, como una demanda constante para probar el estatuto de legitimidad” (Ibid.: 348).

El recuento realizado en las páginas anteriores evidencia que los cambios en las fronteras, desde mecanismos de delimitación hasta complejos engranajes de control, seguridad, identidad y poder, responden a las modificaciones ocurridas en la territorialidad<sup>17</sup> en los últimos tres siglos (Anderson y O’Dowd, 1999), lo que será abordado con más detalle en las siguientes secciones.

## 1.4. Viejas y nuevas cartografías

### 1.4.1. Estado y territorio, no siempre fue así ... y quizá no siempre será

El enfoque realista popularizó la idea del Estado territorial, fortaleciendo la legitimidad del Estado y consecuentemente la noción de soberanía. La difusión de este modelo a lo largo del mundo se impuso no exento de conflictos una vez que se fracturaron los imperios europeos y finalizaron los regímenes coloniales. Como lo señala Agnew:

“Sea como ideal político o como conjunto de prácticas sociopolíticas, la imagen del estado territorial descansa en la imitación y difusión de modelos políticos establecidos que definen lo que es y lo que no es posible en el mundo en un momento particular y en cualquier lugar en particular.

La hegemonía cultural europea (y más tarde la de Estados Unidos) ha escrito así el guión para el crecimiento y la consolidación de un sistema global de Estados-nación. El modelo de Estado ha tenido como su momento geográfico central a la imposición de fronteras fijas entre las unidades estatales (imaginadas como *Estado-nación*, más allá de las escasas probabilidades de que así sea) y sus vecinos. En la historia del mundo, un amplio rango de políticas co-existieron -imperio, ciudad-estado, redes nómadas, estado dinámico o política religiosa- sin que ninguna ostente el modelo de ‘mejor práctica política’. Es solo con el predominio europeo que el idealizado estado territorial se convirtió en el arquetipo global (...)” (Agnew, 2008: 180-181, las cursivas son del autor).

---

<sup>17</sup> Anderson y O’Dowd definen a la territorialidad como “una estrategia espacial para afectar, influir o controlar recursos y personas, mediante el control de un área” (1999: 598). Aunque según este concepto la territorialidad no solo es la ocupación de un espacio determinado, Cairo (2001) recoge otras aproximaciones que contribuyen a una comprensión más integral de su significado. En esta dirección, rescata a Soja (1971) quien identifica a la territorialidad como un sentido de identidad espacial, de exclusividad y de compartimentación de la interacción humana en el espacio, y cita la importancia concedida por Sack (1986) a la territorialidad como contenedor espacial de hechos y actitudes.

Al considerar que el territorio es la base sobre la que se erige el Estado, como algo externo a las relaciones sociales que toman lugar en dicho territorio, la consecuencia fue que se naturalizó el concepto y la unidad Estado-territorio, prescindiendo del hecho de que los territorios son contruidos por sujetos históricos a partir de un conjunto de relaciones sociales y económicas y prácticas culturales. Basta citar la organización territorial mantenida antes de la conquista española en el Tahuantinsuyo (ver Figura 1). Este orden político-cultural vigente en la región andina de América del Sur (Dussel, 2014) se caracterizó por un manejo altamente centralizado en manos de los Incas y por una organización territorial donde las fronteras tenían una utilización muy distinta a la actual:

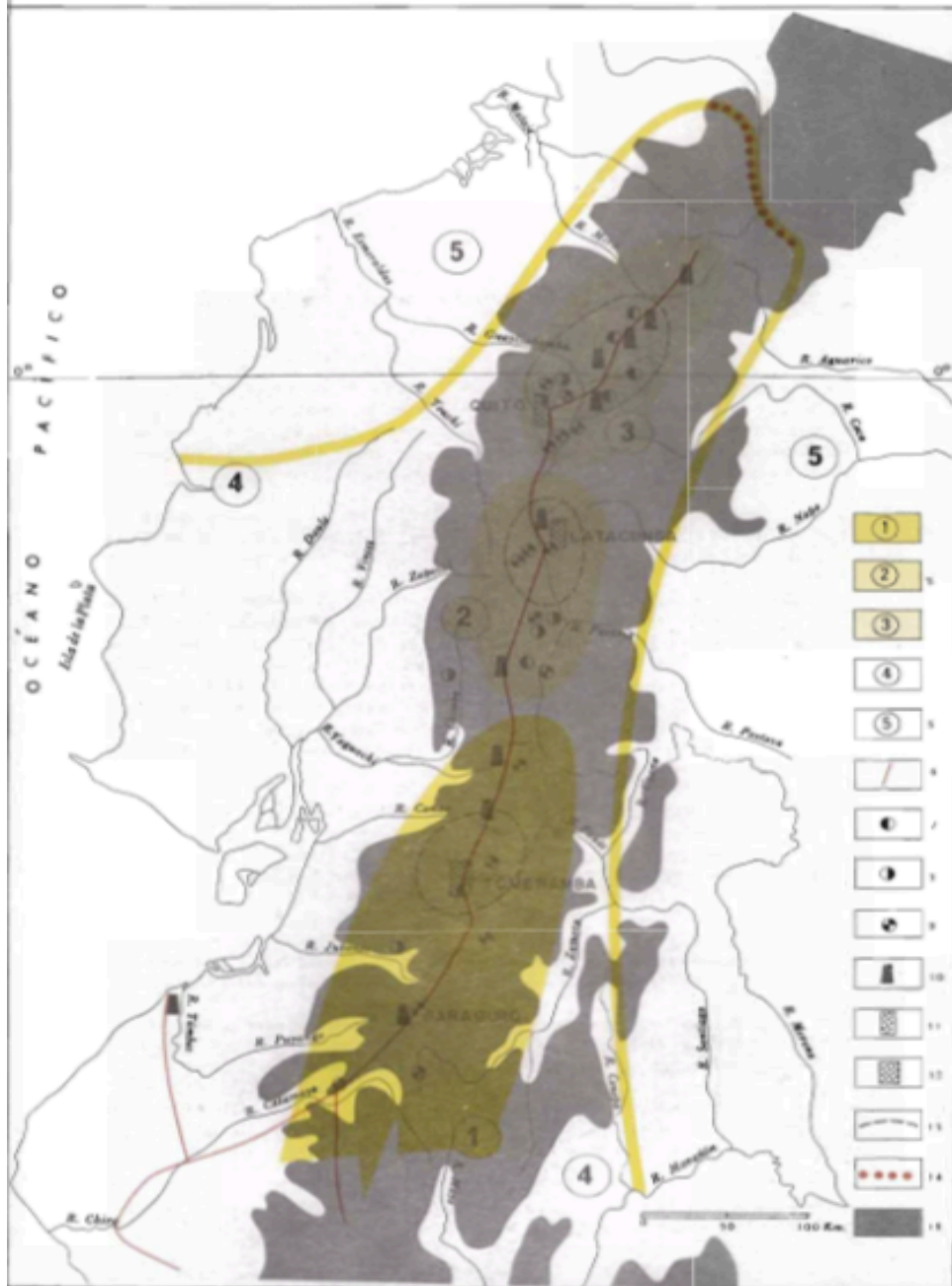
“el tipo de expansión del imperio nos sugiere que los Incas tenían un criterio muy distinto al que conocemos a partir del siglo XIX. La integración al Tahuantinsuyo y a su sistema estatal, aún en el caso de victorias militares, como sucedió en el Norte, se hacía de manera progresiva, por ósmosis. Las conquistas militares no tenían por objeto ampliar o cerrar la frontera sino proteger y reforzar la integración de los señoríos situados río arriba, para así controlar un conjunto completo de recursos, permitiendo al mismo tiempo cierta continuidad de los intercambios, lo mismo que una difusión de las ideas incaicas y del idioma quechua, que precedía a los ejércitos conquistadores” (Deler, Gómez y Portais, 1983: 63-64).

La naturalización del estado territorial es problematizada por exponentes de los estudios de fronteras (Agnew, 1999; Kuus y Agnew, 2008, Häkli, 2008) y del pensamiento decolonial (Escobar, 2011) quienes están discutiendo estas “verdades” y abordando el debate sobre formas emergentes de territorialidad y espacialidad, sobre espacio y política. Esto se torna particularmente importante en momentos en que las nociones de soberanía y fronteras están vinculadas a las reivindicaciones de varios grupos sociales para definir y redefinir las relaciones entre lo social y el espacio físico (Newman y Paasi, 1998), y es todavía más elocuente en un contexto como el latinoamericano que tiene el desafío de construir y dar cabida a la plurinacionalidad, lo que se explorará más adelante con mayor detalle.

Desde la geografía política Peter Taylor propone pensar en “espacios comunes y de multi-identidad” como una alternativa a los espacios separados y a la identidad nacional, “uno de los arreglos sería que la población reciba automáticamente la ciudadanía de los países adyacentes al de su nacimiento” (1997: 11), mientras que Driver (1991) sugiere reconsiderar la forma en que se han trazado las líneas fronterizas. En el campo de la filosofía, Shapiro y Alker (1996) afirman que el trazado de las fronteras debe reexaminarse con el propósito de superar la afectación que soportan los grupos sociales e

identidades políticas como consecuencia de la hegemonía de los Estados; de la misma manera que pensadores ligados a la teoría de las relaciones internacionales cuestionan el carácter inamovible de categorías como soberanía, territorialidad y límites atribuidas a la centralidad del Estado (Newman y Paasi, 1998: 191-192).

**Figura 1. Organización del espacio norte del Tahuantinsuyo**



Tomado de: Deler, Jean Paul, Nelson Gómez y Michel Portais. *El manejo del espacio en el Ecuador. Etapas claves*. Tomo I. 1983: 63.

**Simbología de la figura:**

Región más integrada al Tahuantinsuyo (1)

Región en proceso de integración (2)

Control directo de la administración Inca, pero de corta duración (30 hasta 40 años) (3)

La construcción de una mirada renovada propone romper con el viejo paradigma del Estado-nación con base territorial y sobrepasar la “trampa territorial”<sup>18</sup>, término acuñado por Agnew (2005, 2008) para interpelar la centralidad del Estado en la gestión del territorio. La posibilidad para advertir estos cambios se sostiene en la idea de que Estado, soberanía y fronteras son construcciones históricamente específicas que por lo mismo pueden modificarse a lo largo del tiempo. Kuus y Agnew (2008) sostienen que la base territorial tiene mucho que ver con el éxito de la soberanía. Si base territorial y soberanía no se entendieran como parte de una sola unidad, la soberanía –en el sentido de prácticas socialmente construidas de autoridad política- podría ejercerse sobre una base no-territorial, en puntos dispersos conectados por flujos, conformando una red distribuida en el espacio. Aunque estos puntos o nodos pueden tener un orden jerárquico o carecer de un nodo central, darían cabida a que todas las formas de expresión política o de organización copen el lugar. Bajo este ordenamiento, los Estados pueden seguir siendo el principal locus de la autoridad política, aún cuando su poder se despliegue a través de flujos con capacidad de incidir sobre estructuras nominalmente soberanas (basta pensar, por ejemplo, cómo los Estados supervisan las amenazas a la seguridad en lugares distantes). La soberanía, por su parte, pasaría de ser centralizada, ejercida a base del mandato, la obediencia y la dominación, para convertirse en una soberanía difusa, resultante de patrones asociativos y de la interacción de grupos.

En la misma línea Agamben afirma que la recuperación de la vida política, la que persigue la posibilidad de vivir y la potencia, el encuentro de la felicidad, el sentido de ser y hacer como individuo y como grupo, supondría una ruptura con respecto a la soberanía: “Una vida política, es decir orientada según la idea de felicidad y que se aglutina en una forma-de-vida, sólo es posible a partir de la emancipación de aquella escisión, del éxodo irrevocable de cualquier soberanía” (Agamben, 2010 [2001]: 18). De este modo, Agamben entiende que la soberanía estatal se afirma separando la “nuda vida” de sus formas.

Agamben propone en esta dirección pensar en espacios no solo extraterritoriales sino aterritoriales, citando para el caso la ciudad de Jerusalem regulada bajo un régimen

---

<sup>18</sup> La trampa territorial se sostiene sobre tres supuestos: la soberanía del Estado moderno requiere de espacios territoriales claramente delimitados, hay oposición entre asuntos internos y externos y el territorio estatal es el contenedor geográfico de la sociedad (Agnew, 2005: 60).



internacional especial que la sitúa como capital de dos Estados diferentes. “En lugar de dos Estados nacionales separados por fronteras inciertas y amenazadoras, sería posible imaginar dos comunidades políticas instaladas en una misma región y en situación de mutuo éxodo, articuladas entre ellas por una serie de extraterritorialidades recíprocas, en que el concepto-guía no sería ya el *ius* del ciudadano, sino el *refugium* del individuo” (Agamben, 2010 [2001]: 29).<sup>19</sup>

Aunque Jerusalem no sea posiblemente el mejor ejemplo de paz ni de respeto de resoluciones internacionales por la política expansionista que ha mantenido el Estado judío, la idea de Agamben apunta no solo a borrar las fronteras, sino a considerar los territorios de una región como espacios de libre movilidad, de éxodo constante y por supuesto también de inmovilidad, estableciendo la necesaria separación entre el nacimiento y la nación y dando paso a que el “viejo concepto de pueblo (...) podría volver a encontrar un sentido político” (Ibid.). Los espacios aterritoriales no coincidirían con ningún territorio nacional ni con su suma, sino que actuarían sobre todos ellos.

También Agnew (2008: 187) propone re-conceptualizar el espacio territorial nacional como un “lugar de vivienda”, para hacer frente a un mundo colmado de flujos migratorios cuyo dinamismo es irreversible. Al asumir el espacio territorial nacional como un “lugar de vivienda” para las poblaciones asentadas en un territorio determinado, Agnew sostiene que nos alejaríamos de las narrativas nacionalistas que cultivan la creencia de que el territorio es una forma de propiedad. Gudynas (2007), en referencia a

---

<sup>19</sup> El *refugium* representa una categoría central en el pensamiento de Agamben. Dentro del proceso por él identificado de decadencia del Estado-nación, “el refugiado es quizá la única figura pensable del pueblo en nuestro tiempo y (...) la única categoría en la que hoy nos es dado entrever las formas y los límites de la comunidad política” (Agamben, 2010, [2001]: 21-22). La noción de población refugiada podría encerrar las claves para repensar y otorgar nuevos significantes a la soberanía, los derechos humanos, los derechos colectivos, así como la propia organización de los territorios. En el ámbito de los derechos, Agamben considera que “el orden político del Estado-nación no reserva para algo como el puro hombre en sí (es decir, para la población refugiada internamente o como consecuencia de conflictos más allá de sus fronteras) ningún espacio autónomo (ningún tipo de derecho asociado a su particularidad)” (Ibid.: 25, los paréntesis son añadidos). La separación entre refugiados y derechos humanos, debería empujar, siguiendo a Agamben, a una resignificación y renovación de los conceptos y categorías en torno al Estado-nación. Un gran número de Estados tiene en sus territorios, lo que él denomina “masa residente estable de no ciudadanos” (Ibid.: 28), que no pueden ni quieren ser naturalizados ni repatriados, o que deben reorganizar su vida en un lugar lejano y distinto a su territorio, donde no quieren estar ni conocen (como los miles de desplazados o refugiados ambientales). El tercer aspecto discutido por Agamben es la necesidad de re-centrar las categorías en las que hasta hoy se ha asentado la teoría política. A la luz del fenómeno del refugio, tanto la soberanía como el Estado-nación, han mostrado sus límites para representar a cada vez mayores proporciones de seres humanos desplazados y desprotegidos por guerras, problemas económicos o ambientales. La ruptura que evidencia la noción de refugiado con la soberanía y el Estado-nación, desplazaría a la población refugiada hacia una centralidad renovada en el campo político y legal: “en cuanto quebranta la vieja trinidad Estado-nación-territorio, el refugiado —esta figura aparentemente marginal— merece ser considerado como la figura central de nuestra historia política” (Ibid.: 26-27).

la experiencia de la zona trinacional de Acre, Pando y Madre de Dios compartida entre Brasil, Bolivia y Perú, habla de la idea de “florestanía” como un paso adicional al concepto de ciudadanía. Esta noción ya no estaría pensada desde los derechos y garantías para los ciudadanos de un país, sino en el sentido de bien común, tanto de las demandas de calidad de vida como de protección ambiental. Dora Kostakopoulou (2006, citado por Agnew, 2008: 187) profundiza esta mirada al proponer la vigencia de un “registro cívico” que contemple, como única condición para la residencia, demostrar la voluntad para vivir de acuerdo a reglas democráticas, el cumplimiento de algunos requerimientos formales y la ausencia de un historial delictivo serio. Gran parte de estos planteamientos se inspiran en la geografía política crítica que, al decir de Cox, Low y Robinson (2008), tiene sus orígenes en pensadores anarquistas del siglo XIX como Élie Reclus y Peter Kropotkin. Ambos rechazaron la estructura jerárquica de poder del Estado, a la que consideraban responsable de la guerra y en su lugar propugnaban una sociedad descentralizada construida sobre una federación de comunidades cooperativas pequeñas e independientes.

Las propuestas en torno a nuevas territorialidades confrontan la idea de que existe una única narrativa de formación del Estado y problematizan, como advierte el intelectual indú Shiv Visvanathan (2007), la complejidad de concretar en la realidad la congruencia entre gente, historia y territorio. De ahí que en Joe Painter concluya que

“la democracia liberal occidental no debe ser vista como el punto final de una evolución histórica, sino como una entre otras posibles. Otros tipos de Estado no son desviaciones fallidas de la norma occidental, ni son versiones atrasadas y subdesarrolladas del ideal de Estado. Deben ser entendidas como el producto de un conjunto específico de prácticas, con una variedad de futuros posibles” (Painter, 2008: 64).

Los cuestionamientos a la territorialidad han provocado que en varios países afloren expresiones autonomistas o separatistas, de tinte eminentemente liberal algunos y otros que apelan a reivindicaciones étnicas, identitarias o a derechos colectivos y territoriales. Citando a Rapaport (1996), Newman y Paasi afirman que en el mundo contemporáneo existen 800 movimientos nacionalistas y miles de culturas entre las que florecen (o pueden florecer) preocupaciones sobre la identidad social y territorial (Newman y Paasi, 1998: 198). Tal como lo advirtió Hobsbawm (2012 [1990]: 55), los sentimientos de pertenencia colectiva, denominados por él como protonacionales, parecerían florecer por la intervención de factores adicionales que podrían actualmente acechar su continuidad histórica como pueblos.

### 1.4.2. Otras territorialidades inferiorizadas

Santos (2014) sostiene que el pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal que ha dividido la realidad en dos universos: el del ser y el del “no ser”. Mientras el primero se caracteriza por la tensión entre regulación y emancipación social que se aplica sobre las sociedades metropolitanas, en el universo del “no ser” se aplica la dicotomía apropiación/violencia. Este último universo no solo que es producido como no existente, sino que es permanentemente excluido porque no es posible aceptar su co-presencia.

Al negar o inferiorizar otros pensamientos y conocimientos (populares, campesinos o indígenas), siguiendo el argumento de Santos, se ha concedido a la ciencia la capacidad de calificar y distinguir entre lo verdadero y lo falso y juzgar otras visiones como magia, superstición o creencia. Frente al menosprecio de otras formas de ver el mundo surge el pensamiento postabismal que “implica una ruptura radical con los modos occidentales modernos de pensar y actuar (...) significa pensar desde la perspectiva del otro lado de la línea” (Santos, 2014: 40-41). El pensamiento postabismal descansa sobre la idea de la diversidad epistemológica del mundo y del consiguiente reconocimiento de que existe una pluralidad de saberes.

En esa misma tónica, Mignolo afirma que será fuera de la modernidad, en las diferencias coloniales, ahí donde existe un diferencial de poder, donde surgirán “paradigmas otros”, que contribuyan a construir espacios de esperanza “en los que se mantenga y reproduzca la vida” (Mignolo, 2003: 10). Estos paradigmas otros no solo hacen relación a la diversidad de formas de pensamiento, sino que implican abrir nuevos caminos en oposición al postmodernismo y al postmodernismo oposicional. Por tal razón no son caminos de transición sino de disrupción que emergerán en y desde las perspectivas de las historias coloniales.

“Llamo ‘paradigma otro’ a la diversidad (y diversalidad) de formas críticas de pensamiento analítico y de proyectos futuros asentados sobre las historias y experiencias marcadas por la colonialidad más que por aquellas, dominantes hasta ahora, asentadas sobre las historias y experiencias de la modernidad. El ‘paradigma otro’ es diverso, no tiene un autor de referencia, un origen común. Lo que el ‘paradigma otro’ tiene en común ‘el conector’, lo que comparten quienes han vivido y aprendido en el cuerpo el trauma, la inconsciente falta de respeto, la ignorancia (...) de cómo se siente en el cuerpo el ninguneo que los valores de progreso, de bienestar, de bien-ser, han impuesto a la mayoría de habitantes del planeta (...)”. (Ibid.: 20).

Si bien Mignolo, tanto como Santos, asumen que las respuestas a los problemas que enfrenta la humanidad no se desprenderán de la modernidad, Mignolo cuestiona que Santos realice una crítica no eurocéntrica al eurocentrismo desde el sur de Europa y defiende en ese sentido el pensamiento fronterizo que corresponde “al lugar de enunciación fracturado desde una perspectiva subalterna” (Mignolo, 2003: 8), al pensamiento que se construye “no ya desde la modernidad sino desde la colonialidad como proceso permanente de descolonización” (Ibid., 58), que se construye en los márgenes y desde la subalternidad. Desde esta perspectiva, Mignolo toma distancia no solo con el diálogo de saberes, con la ecología de saberes, sino incluso pone en duda la amplitud de la “diversalidad” que el mismo defiende en la medida en que serán únicamente los “desheredados”, los “de los cuerpos y mentes sojuzgadas” los que puedan generar este pensamiento.<sup>20</sup>

Como bien lo anota Grosfoguel, no se puede asumir de manera mecánica que el conocimiento producido “desde abajo” sea automáticamente un “conocimiento epistémico subalterno” (2014: 377). En otras palabras, no se trata de equiparar ubicación epistémica con ubicación geográfica, sino situar al conocimiento del lado dominante o subalterno de las relaciones de poder pues según dice este autor,

“el hecho de que se esté ubicado socialmente en el lado oprimido de las relaciones de poder, no significa automáticamente que se esté pensando epistémicamente desde una posición epistémica subalterna o descolonial. Precisamente, el éxito del ‘sistema-mundo moderno/colonial occidentalocéntrico/cristianocéntrico capitalista/patriarcal’ consiste en hacer que sujetos socialmente ubicados en el lado oprimido de la diferencia colonial piensen epistémicamente como los que se encuentran en las posiciones dominantes” (Grosfoguel, 2014: 376-377).

Aceptando la existencia de una pluralidad de saberes, Arturo Escobar (2018) identifica dos vertientes del pensamiento crítico latinoamericano ligadas a la recuperación de pensamientos “otros”. La primera vertiente es la que él denomina del “pensamiento autonómico”, encarnada en expresiones como el zapatismo o los planteamientos de las comunidades negras del Pacífico, que al defender la tierra ante las amenazas del capital global y abogar por la defensa de otros modelos de vida, ha reubicado en la centralidad de la discusión las categorías de autonomía, comunalidad y territorialidad. La segunda vertiente está encarnada en lo que Escobar cataloga como el “pensamiento de la Tierra”,

---

<sup>20</sup> Mignolo reconoce al mismo tiempo la existencia de un pensamiento fronterizo “débil” que surge no “del dolor y la furia de los desheredados mismo, sino de quienes no siendo desheredados toman la perspectiva de éstos” (Mignolo, 2003: 28).

proveniente de comunidades rurales que reconocen que la reproducción de su vida está estrechamente ligada al control de la naturaleza. Esta segunda vertiente estaría más cercana al movimiento de ecología popular,<sup>21</sup> que aglutina expresiones sociales que sin declararse ecologistas, defienden su relación vital con la Tierra y con los otros seres que habitan el territorio en donde viven.

Pensadoras ligadas a la sociología (Svampa, 2003, 2008, 2009, 2015; Gutiérrez, 2009; 2016; Gutiérrez, Escárzaga, et al., 2005, 2006, 2014) y a la ecología política (Navarro y Pineda, 2009; Composto y Navarro comp., 2014; Navarro, 2012, 2013), han posicionado la relevancia adquirida desde la década del noventa por diversos movimientos sociales que a lo largo de la región, vinculados a la tradición comunitaria e indígena de América Latina, están defendiendo “lo común” entendido como una

“acción colectiva de producción, apropiación y reapropiación de lo que hay y de lo que es hecho, de lo que existe y de lo que es creado, de lo que es ofrecido y generado por la propia Pachamama y, también, de lo que a partir de ello ha sido producido, construido y logrado por la articulación y el esfuerzo común de hombres y mujeres situados histórica y geográficamente” (Gutiérrez, 2017: 75).

Independientemente de la denominación que se otorgue a estos pensamientos y prácticas “otras”, estas expresiones, provenientes de sectores sociales ubicados en el universo del “no ser” como lo califica Santos, comparten al menos tres elementos en común. El primer rasgo compartido es su distancia con la visión hegemónica de la naturaleza entendida en tanto objeto de explotación y el consiguiente reconocimiento de que entre seres humanos y naturaleza existe una unidad. Al respecto cabe recordar que si bien la separación entre espíritu y materia se remonta a la tradición filosófica griega, es con el movimiento de la Ilustración a lo largo del siglo XVIII, que se habría afianzado la idea de separación entre naturaleza-seres humanos. La centralidad que otorgó la Ilustración a la liberación/emancipación humana, a la auto realización y a la consiguiente exaltación de la individualidad -separada de las cosas-, habría coadyuvado, de acuerdo a David Harvey (1996), a acentuar la noción de dominación de la naturaleza. Siguiendo el argumento de Harvey, la fijación de una visión dualista se habría profundizado,

---

<sup>21</sup> El historiador peruano Alberto Flores Galindo, el economista Joan Martínez-Alier y el historiador y escritor Ramachandra Guha, comenzaron a hablar de ecologismo popular en la última década del siglo pasado para denominar a aquella corriente del ambientalismo que “no profesa una reverencia sagrada a la Naturaleza, sino que representa un interés material por el ambiente como fuente y soporte para el sustento; no tiene un interés particular por los derechos de otras especies y de las futuras generaciones de seres humanos, sino una preocupación por las poblaciones pobres de hoy. (...) Su ética proviene de una demanda por justicia social entre los seres humanos” (Martínez-Alier, 2002: 11).

posteriormente, a partir de los planteamientos de la economía política clásica (Locke, Hume, Smith, Ricardo y Stuart Mill), corriente que identificó a la naturaleza como el medio idóneo para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas y que introdujo la visión según la cual el aumento de la productividad no solo liberaría a la sociedad de necesidades y demandas, sino que sería el soporte para alcanzar la realización individual. Bajo esta concepción se desarrolló una visión instrumental de la naturaleza, entendiéndola únicamente como un activo -recursos- disponible para la explotación humana.<sup>22</sup>

Reñida con la visión instrumental de la naturaleza, los movimientos sociales que defienden lo común o que están al lado del “no ser”, subrayan que la preservación de repertorios de biodiversidad o el mantenimiento de áreas forestales prístinas, no es una dádiva que responda a condiciones ambientales especiales. La conservación de esta diversidad biológica únicamente puede entenderse como el resultado de un proceso de co-evolución de poblaciones indias y campesinas con la naturaleza en la medida en que tal diversidad, en tanto categoría relacional y contextual, implica la interrelación y mutua dependencia entre las especies (Shiva, 1992). Para estos movimientos, que recrean la visión de los pueblos indios de América Latina, lo humano y lo natural constituyen una sola unidad sustentada en una concepción holística de la vida (persona-sociedad-naturaleza) y en los principios de dualismo-complementariedad, relacionalidad, reciprocidad y proporcionalidad.<sup>23</sup>

Ligado a lo anterior, un segundo elemento común a estas expresiones y pensamientos “otros” es la interpelación a un modelo de crecimiento económico que amenaza la subsistencia de pueblos indios y campesinos, anteponiendo la utilidad económica por sobre la extensión y reproducción de la vida. Son expresiones que a lo largo de la región están surgiendo en rechazo a la generalización y profundización de regímenes extractivistas que han situado la centralidad de las luchas en el territorio y el ambiente.

---

<sup>22</sup> La centralidad de la noción de dominio de la naturaleza para el modelo civilizatorio de occidente -la naturaleza como objeto colonial-, convivió con corrientes de la filosofía idealista que expresaban posturas con diferentes matices y una relación más cercana entre seres humanos y naturaleza (este punto está desarrollado más en detalle en mi artículo *Naturaleza, culturas y territorios: lecturas paralelas entre la ecología política y el pensamiento poscolonial* publicado en la revista Debates CESCONTEXTO en 2014). No obstante, la expansión y consolidación del capitalismo a raíz de la conquista y colonización de América supuso acentuar la concepción de dominio sobre la naturaleza. Esta se convirtió desde entonces en objeto de la ciencia y de la producción, un elemento a merced de quienes pudieran explotarla.

<sup>23</sup> Los principios anotados que corresponden a la visión de los pueblos indios frente a la naturaleza son parte de lo que Nina Pacari, intelectual ecuatoriana, resalta en el prólogo al libro *Refundación del Estado en América Latina* (Santos, 2010).

La tercera característica compartida es la dimensión territorial, la apropiación comunitaria del territorio como condición para la reproducción de la vida, lo que lleva a que varios autores califiquen a los movimientos sociales latinoamericanos como socio-territoriales (Santos, 2010; Porto Gonçalves, 2004; Zibecchi, 2013, 2015, 2017) o como movimientos de “reapropiación de la naturaleza y de autogestión de sus recursos productivos”, para usar la denominación utilizada por Enrique Leff (2004: 419). En efecto, siguiendo a Svampa,

“(e)n la actualidad, parecería haber un consenso implícito entre diferentes analistas latinoamericanos (...) acerca de que una de las dimensiones constituyentes de los movimientos sociales latinoamericanos es la *territorialidad*. En términos generales, tanto en los movimientos urbanos como rurales, el territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales” (Svampa, 2006: 13, las cursivas son de la autora).

De manera particular, varios autores identifican a los pueblos indios como portadores de nuevas reivindicaciones territoriales:

“desde las exigencias de autonomía territorial de tojolabales, tzotziles, tzetzales y otros pueblos del norte del continente americano, hasta la lucha de los mapuches por el control de sus tierras ancestrales al Sur, hay muchos y diversos procesos de disputas territoriales, que hoy en día tienen consecuencias más importantes que las interestatales. Sus reivindicaciones de autonomía geográfica, en unos casos, su deslegitimación de las fronteras actualmente existentes, en otros, o la desigual construcción de nuevas territorialidades, son temas muy relevantes de la agenda geopolítica de la región” (Cairo y Lois, 2014: 47).

La centralidad del territorio en las luchas de pueblos indios, poblaciones afrodescendientes y comunidades campesinas y la presión por garantizar el cumplimiento de sus derechos colectivos no puede entenderse al margen del valor material y simbólico que representa el territorio y de los vínculos entre éste y los pueblos que lo habitan pues como dice Porto-Gonçalves,

“La sociedad y el territorio (...) son indisociables. Toda sociedad al constituirse lo hace constituyendo su espacio, su hábitat, su territorio. Al contrario del pensamiento disyuntivo que opera por dicotomías, como quiere hacer creer el todavía hegemónico pensamiento eurocéntrico moderno, no tenemos primero la sociedad (o el espacio) y después el espacio (o la sociedad) - sociedad *es* espacio. En verdad, sociedad *es* espacio, antes que todo, porque está constituida por hombres y mujeres de carne y hueso que en su materialidad corporal no pueden prescindir de agua, de tierra, de aire y de fuego. El hecho de que los hombres y mujeres sean seres que hacen Historia y Cultura, que sean animales simbólicos, no los deja de ser materia viva. Toda apropiación material es, al mismo tiempo, y no antes o después, simbólica. Después de todo, no nos

apropiamos de nada que no tenga sentido, que no tenga *sign*-ificado. El concepto de territorio pensado más allá de los dualismos nos obliga a abandonar uno de los pilares del pensamiento eurocéntrico que es la separación de sociedad y naturaleza” (Porto-Gonçalves, 2006: 163).

### **1.4.3. Una nación de naciones: el Estado Plurinacional**

Posiblemente una de las nociones que con mayor fuerza confronta la visión de un estado territorial homogéneo, con implicaciones en la reconfiguración territorial y la organización social y política de sus sociedades y sus fronteras, la soberanía y la nación, es la de Estado Plurinacional que, para el caso de América Latina, es un planteamiento constitutivo del repertorio de los pueblos indios.<sup>24</sup> La plurinacionalidad, según Schavelzon (2015: 71), surge en América Latina no solo como una crítica a la multiculturalidad sino también como un concepto que discute el proceso de formación del Estado y abre el debate respecto a otras formas de organización y territorio. Para Boaventura de Sousa Santos (2010: 102), la plurinacionalidad va de la mano con un proceso de refundación del Estado que implica, por un lado, tomar distancia respecto al Estado constituido a partir de la tradición eurocéntrica y que supone, por otro lado, la destrucción de dos grandes sistemas de explotación y opresión: el capitalismo y el colonialismo.

En el caso de Ecuador, la plurinacionalidad apareció por primera vez en 1988 en el anteproyecto de ley de las nacionalidades indígenas que en su artículo 1 señalaba: “La República del Ecuador, es un Estado Plurinacional en el que participan los pueblos indígenas con su cultura, organización y derechos, especialmente el de la autodeterminación que esta ley garantiza y norma” (CONAIE, 1991: 202). Más adelante este mismo proyecto de ley precisaba (Art. 11): “Las nacionalidades indígenas del Ecuador tienen derecho a su territorio, no solamente como condición para su subsistencia, sino como el espacio de desarrollo de su cultura, y garantía de la conservación de las riquezas naturales del Ecuador” (Ibid.: 205).

Plurinacionalidad y territorio se presentan, así, como dos elementos indisolubles de la demanda política de las nacionalidades indígenas. La comprensión del territorio, lejos de ser un bien transable, es para la CONAIE la base insustituible para el desarrollo de su cultura, el sustento de su espiritualidad y de sus formas de vida, y es el fundamento

---

<sup>24</sup> La existencia de Estados plurinacionales en ciertos países de América Latina no es aislada. A lo largo del mundo existen varios países que se autodesignan como Estados plurinacionales: desde algunos altamente industrializados como Canadá, Bélgica, Suiza, Finlandia y Nueva Zelanda (Santos, 2010), incluyendo otros que vivieron procesos de descolonización como India, Malasia, Nigeria y Sudáfrica (Walsh, 2009: 111).



imprescindible sobre el que se debería construir la plurinacionalidad. El *Proyecto Político de la CONAIE* señala al respecto:

“El territorio es la base para la construcción de la identidad cultural (...) No se puede concebir una colectividad indígena sin un territorio en el que pueda practicar, conservar, revitalizar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales, jurídicos, religiosos y culturales. Su carencia podría afectar el derecho a la identidad, autonomía y la propia sobrevivencia de los pueblos y naciones originarias, llevando inclusive hacia el genocidio. Desde la perspectiva de los pueblos y naciones originarias, el concepto de tierra y territorio es integral.

Para los pueblos, nacionalidades y naciones originarias, los territorios forman parte del territorio del Estado plurinacional e intercultural, los territorios tienen vinculación espiritual; por ello se consideran como Pacha Mama (madre tierra) y el ser humano forma parte de ella, al igual que los recursos naturales y biodiversidad” (CONAIE, 2012: 12).

El territorio representa, en términos políticos, una de las reivindicaciones de más larga data, constituyéndose en uno de los más importantes núcleos del repertorio del movimiento indígena ecuatoriano a partir del decenio de 1980 cuando los pueblos indios se posicionaron en la escena política. La centralidad de la lucha por la tierra desde los años 1990, a raíz del histórico levantamiento del Inti Raymi (Coéllar, 2012; Almeida, 2012; Cordero, 2017), fue coincidente con las discusiones sobre derecho indígena que para aquella época tenían lugar en Naciones Unidas y la aprobación en 1989 del Convenio 169 de la OIT. Fruto de esta lucha, los pueblos y nacionalidades aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) consiguieron, hacia fines del decenio de 1980 la creación de instituciones como la Dirección Nacional de Educación Bilingüe (DINEIB) y una década más tarde, en 1998, del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE). La creación de estas instituciones fue complementario al reconocimiento y legalización por parte del Estado ecuatoriano de 1.115.000 hectáreas en posesión ancestral bajo el gobierno de Rodrigo Borja en 1992. El proceso representa un tema aún inacabado y abierto a múltiples interrogantes. Fue inacabado en la medida en que el reconocimiento de tierras no significó, de manera paralela, sancionar otra territorialidad, ni puso en duda que la construcción del Estado-nación significó arrasar con otras visiones de territorialización que subsisten en una condición subalterna y marginal (Santos, 2010; Escobar, 2018). Quedó también pendiente resolver la territorialidad de muchos pueblos pues mientras algunos aún conservan parte de sus territorios ancestrales, otros, fundamentalmente los pueblos asentados en la Sierra, carecen de territorio. En efecto, mientras en la Amazonía

ecuatoriana, los pueblos Kichwa, Waorani, Zápara, Achuar y Shuar tienen superficies que superan las 400 mil hectáreas (el territorio Kichwa supera los dos millones de hectáreas), otros pueblos y nacionalidades como los Cofán, Andoa y Shiwiar, tienen territorios entre 60 mil y más de 100 mil hectáreas y existen, en el otro extremo, pueblos con territorios de menor extensión dentro o en zonas aledañas a áreas naturales protegidas como los Siekopai y Siona en la provincia amazónica de Sucumbíos, que viven en comunidades dispersas unas de otras, asediados por petroleras, plantaciones de palma y asentamientos colonos que amenazan su continuidad como pueblos (Moncada, 2011).

La lucha por la territorialidad tiene, además, otras dimensiones. Siguiendo a la CONAIE (1996; 2012), esta lucha va de la mano a un necesario proceso de descentralización del Estado y de reorganización del territorio, la autonomía y la autodeterminación.<sup>25</sup> Estas son, desde su punto de vista, las únicas vías para garantizar la correspondencia entre heterogeneidad socio-cultural de la población ecuatoriana, el cumplimiento de derechos individuales y colectivos y los intereses de poblaciones culturalmente diversas e implicarían, entre otros aspectos, el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de las autoridades de justicia indígena para solucionar todo conflicto o problema dentro de sus tierras y territorios; la elección de su propio sistema político y modelo de desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico y el derecho a controlar las tierras y territorios ancestralmente ocupados, incluyendo el derecho al uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se encuentren en dichos espacios, así como el derecho a ser consultados a fin de obtener su derecho libre e informado respecto a cualquier actividad que genere impactos sobre sus territorios.<sup>26</sup>

Por tanto, más allá de la lucha por el acceso al territorio, en la plurinacionalidad está presente un proyecto que cuestiona la hegemonía de un Estado nacional único, que perpetúa la colonialidad del ser, del saber y del poder y la consecuente necesidad de

---

<sup>25</sup> Es interesante traer a colación que Ileana Almeida, una investigadora ecuatoriana dedicada al estudio del pensamiento indígena, considera que “a través de la historia, la comunidad indígena rural ha conservado una autonomía de hecho, que se manifiesta todavía en la propiedad comunal de la tierra, en la vida social colectiva, en el ejercicio de autoridad propia, en la cultura y en la lengua” (2012: 121).

<sup>26</sup> Los mecanismos de consulta no deberían agotarse, según la CONAIE, en lo relativo al aprovechamiento de recursos naturales sino abarcar cualquier política que incida sobre sus territorios. De ahí que para el caso de las fronteras, su propuesta política señale que “(...) en el espacio territorial donde coincidan franjas de seguridad en zonas de frontera donde habitan pueblos indígenas, el Estado debe dar prioridad para garantizar y respetar los derechos de los pueblos y naciones originarias a través de la consulta previa. En zonas de frontera, requiere (un) nuevo concepto de seguridad, se implementará una nueva forma de relación económica, y comercial, cultural y la integración de los pueblos y naciones” (2012: 48).

pensar una organización social y política distinta a partir de la pluralidad en la perspectiva de refundar un nuevo proyecto de Estado. El siguiente párrafo sintetiza tales ideales:

“El reconocimiento constitucional del Estado intercultural plurinacional, no es simplemente un cambio de nombre. Al contrario, significa una nueva forma de conceptualizar, entender y construir el Estado, una diferente forma de relación de los gobiernos nacionales con los gobiernos comunitarios de los pueblos y naciones indígenas, otra forma de hacer la política, es una oportunidad para establecer una nueva forma de convivencia en diversidad y armonía para consolidar la unidad nacional en la diversidad, y sobre todo para descolonizar la estructura institucional del Estado” (CODENPE, 2011: 19).

Menos visibles que los planteamientos defendidos por pueblos y nacionalidades adscritas a la CONAIE fueron las propuestas de los pueblos negros que expusieron una serie de demandas ligadas a reparaciones históricas y a su particular organización territorial como pueblo transfronterizo. De acuerdo a Catherine Walsh, la propuesta de los pueblos negros,

“parte de la situación y condición históricas y raciales vividas dentro de la nación ecuatoriana, aunque su presencia, (...), es posterior a esta última. Los afrodescendientes no se encuentran unidos por la ‘nacionalidad’ sino por los vínculos constitutivos con la trata negrera y la identidad diaspórica que ésta causó, por las luchas de existencia, las memorias ancestrales -las de la escolarización, del cimarronaje y del territorio como libertad- y por el orden socio-étnico racial vigente” (Walsh, 2009: 144).

Es la particular trayectoria de los pueblos negros la que explica que la interculturalidad, y no la plurinacionalidad, se haya erigido como la demanda central de su planteamiento. La interculturalidad fue entendida como la exigencia de los pueblos negros a un lugar dentro del Estado en el marco de la construcción de un Estado social de derechos, como el goce pleno de derechos, incluidos los colectivos, como primer paso para “destruir el paradigma racista y excluyente que desde la colonia alimenta la identidad y el imaginario social de la nación” (CODAE, 2008: 3). De este modo, y en consonancia con el análisis realizado por Catherine Walsh, la propuesta de la CODAE “parece aceptar la actual estructura estatal, planteando un pluralismo que no rompe con este Estado sino que lo reforma o adecúa” (Walsh, 2009: 140), al tiempo que la interculturalidad parecería asemejarse más a la multiculturalidad que a un proyecto político de transformación del Estado y la sociedad. Al respecto resulta ilustrativa la siguiente cita:

“Los afroecuatorianos consideramos que la Constitución de Ciudad Alfaró-Montecristi debe estar orientada a fortalecer la democracia incluyente e intercultural y consolidar la Nación multiétnica que es. Así mismo, la nueva Constitución debe tener como prioridad básica el fortalecimiento del Estado y

la recuperación de un proyecto de Nación que empodere al ciudadano, fortalezca la participación, legitime la participación plural, recupere la credibilidad del quehacer político y fundamente los valores cívicos, culturales, éticos y morales y combata frontalmente el racismo, la discriminación, la xenofobia y todas formas conexas de intolerancia (...).” (CODAE, 2008: 5).

En relación al territorio, la CODAE (2008) también concedió importancia a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras y territorios comunitarios, que serían inalienables, inembargables e indivisibles, y abogó por la creación de circunscripciones territoriales afroecuatorianas con las correspondientes fuentes de financiamiento.

Los planteamientos de la CONAIE y de la CODAE fueron recogidos por el proceso constituyente de 2007-2008, instaurado luego de años de profunda inestabilidad política como los que atravesó Ecuador desde finales del decenio de 1990. En esta dirección la Constitución del 2008 declaró al Estado ecuatoriano como “constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Art. 1), al tiempo que reconoció 21 derechos colectivos entre los que sobresale la posesión de tierras y territorios ancestrales para pueblos y nacionalidades y para el pueblo afrodescendiente; el derecho a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos; a desarrollar y practicar su derecho consuetudinario; a no ser desplazados de sus tierras ancestrales; a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; así como a desarrollar, proteger y fortalecer su patrimonio cultural histórico y la educación bilingüe (Art. 57). Entre los derechos colectivos y territoriales reconocidos en la Constitución del Ecuador, no se incluye la representación directa para pueblos y nacionalidades que podrían incorporarse a la función legislativa por medio de mecanismos diferentes al voto universal, ni tampoco se dio paso al derecho del consentimiento libre, previo e informado, marcando un distanciamiento con convenios internacionales suscritos por Ecuador como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en 2007 (Cordero, 2017; Chuji, Barraondo y Dávalos, 2009).

En medio de los avances y desencuentros respecto a los derechos colectivos volcados en la Constitución, es claro para diversos autores que ni la denominación de pueblos y nacionalidades (kichwa, shuar, etc.)<sup>27</sup>, ni los reclamos de autonomía y plurinacionalidad implican cuestionar las fronteras del Estado o su soberanía, sino que

---

<sup>27</sup> Varios autores coinciden en señalar (Coéllar, 2012; Almeida, 2012) que hablar de naciones remite a superar la homogeneidad impuesta por el predominio de una sola nación.

conlleven el planteamiento por una mayor democratización (Chuji, Barraondo y Dávalos, 2009; Gutiérrez, 2008; Santos, 2010). La demanda, al decir de Catherine Walsh, no es tampoco por más Estado, sino por otro Estado (Walsh, 2009: 65). En el estudio que realiza Salvador Schavelzon sobre los procesos de Bolivia y Ecuador, el autor afirma que para los pueblos indígenas latinoamericanos, la autodeterminación significa “demanda de sus derechos como unidades subnacionales sin reivindicar independencia. Las parcialidades nacionales no excluyen, así, una nación más amplia. (...) las organizaciones indígenas están alejadas de cualquier proyecto separatista (...) A pesar del uso del término ‘pueblo’ o incluso ‘nación’, está claro que el sentido es la crítica a la tutela y el colonialismo interno, en el marco de un solo Estado” (Schavelzon, 2015: 150). De ahí que no sea casual que en la declaratoria de Estado Plurinacional, tanto la Constitución de Bolivia como la de Ecuador afirmen el carácter unitario del Estado. En el caso ecuatoriano, el artículo 1 de la Constitución de 2008 señala:

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”.

Como política para avanzar en la construcción de ordenamiento territorial que refleje la existencia de diversas naciones dentro del territorio estatal, la Constitución del 2008 mantuvo, como también constaba en la Constitución de 1998, la posibilidad de conformar circunscripciones territoriales indígenas, extendiendo en el nuevo texto constitucional, su alcance para el pueblo negro. Al respecto, el artículo 257 estipula lo siguiente:

“En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, montubios o

ancestrales podrán adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de conformación, funcionamiento y competencias de estas circunscripciones.”

Al decir de algunos autores, los cambios constitucionales del 2008 no significaron profundizar las disposiciones de la Asamblea Constituyente de 1998 que reconoció algunos derechos colectivos pero no el Estado Plurinacional (Chuji, Barraondo y Dávalos, 2009). Lo contrario, aprecian que la inclusión de la plurinacionalidad es una suerte de concesión al movimiento indígena. En esta dirección señalan que

“existe una desconexión entre la enunciación de los derechos y el sistema político y económico. La plurinacionalidad como nuevo deber-ser del Estado debe reflejarse en la construcción del sistema político acogiendo las institucionalidades políticas de los pueblos y nacionalidades, separando al Estado del gobierno, otorgando contenidos diferentes al sistema de representación de tal manera que puedan caber a su interior las formas democráticas de los pueblos y naciones. Sin embargo, nada de esto se produjo. Se utilizó la noción de ‘plurinacionalidad’ como un recurso de la retórica para caracterizar al Estado, en la misma significación que antes tenía como pluricultural y multiétnico. Aparentemente se produjo un avance, pero realmente se dio un retroceso al no asumir en la conformación del sistema de poder y del sistema económico la plurinacionalidad del Estado” (Chuji, Barraondo y Dávalos, 2009: 103).

Tal argumento se evidenciaría en el hecho de que la plurinacionalidad más que una política que atravesase al conjunto del texto constitucional -como sucede en el caso boliviano- (Santos, 2010), se presenta como un enunciado que consta solo en dos de los 444 artículos que componen la Constitución ecuatoriana.

Pese a las anteriores limitaciones, el calificativo de Estado Plurinacional, el reconocimiento explícito de la naturaleza como sujeto de derechos o la definición de un régimen del buen vivir como sustento de un nuevo ordenamiento social y económico, situarían a la Constitución ecuatoriana vigente dentro de lo que la literatura denomina como nuevo constitucionalismo latinoamericano o constitucionalismo posliberal (Zaffaroni, 2011). Este nuevo constitucionalismo se define por su distancia con el constitucionalismo liberal y su influencia en la organización de los Estados contemporáneos a partir de seis elementos diferenciadores: plurinacionalidad, derechos de la naturaleza, régimen del Sumak Kawsay, democracia comunitaria, justicia indígena e interculturalidad (Álvarez et al., 2013: 71).

#### **1.4.4. Dificultades para imaginar y construir un “otro” Estado**

Desde 2008, cuando la Constitución de Montecristi fue aprobada mayoritariamente por medio de una consulta popular, el reconocimiento de los derechos colectivos, de la plurinacionalidad y de la interculturalidad han evidenciado limitaciones para materializarse en políticas concretas. Ni la organización territorial del Estado, ni la aceptación del pluralismo jurídico, para citar solo dos elementos constitutivos de la plurinacionalidad, se han volcado en políticas, leyes o instrumentos de planificación (Coéllar, 2016; Eguiguren, 2011). Por eso en el año 2009, la CONAIE insistió en la titulación de los territorios indígenas, en la asignación de tierras y territorios ancestrales, en la recuperación de las tierras degradadas en la sierra y avanzó en la elaboración de una propuesta de ley para la constitución de jurisdicciones indígenas en las que cada nacionalidad o pueblo administraría con autonomía sus asuntos internos. Estas jurisdicciones son los Gobiernos Territoriales Comunitarios en el lenguaje de la CONAIE o Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI) según la denominación adoptada en la Constitución. A criterio de la CONAIE, ni la Constitución como tampoco el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD– habrían logrado recuperar el espíritu de los planteamientos de pueblos y nacionalidades.

Tal como lo dispone la Constitución y el artículo 94 del COOTAD, el establecimiento de circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas debería atravesar un complejo entramado burocrático: recoger firmas que respalden la realización de la consulta y que, según la legislación vigente, representan el 5% del padrón electoral de la localidad o región donde ésta tomaría lugar; elaborar un estatuto de circunscripción territorial indígena que deberá ser calificado y aprobado por la Corte Constitucional; impulsar la realización de una campaña que finalice con una consulta en la que el 75% de los votos válidos de una jurisdicción aprueben la conformación de este régimen especial. No solo que el procedimiento propuesto no considera las formas de elección y representación propias de los pueblos indios y afroecuatorianos, sino que la división política administrativa del estado liberal se sobrepondría a los territorios ancestrales. En contraste con lo estipulado en la ley, la CONAIE plantea que la consulta debe extenderse a los pueblos y nacionalidades dentro de sus territorios ancestrales a fin de evitar que la propuesta del Estado se constituya en una amenaza a las estructuras organizativas de pueblos y nacionalidades, como sostiene la ECUARUNARI, la confederación indígena más representativa de la sierra (Garbay, 2011, citado por Eguiguren, 2011: 16). Para la

CODAE, el camino para la conformación de circunscripciones territoriales debería ser más directo pues propone su conformación “en aquellos territorios que se caracterizan como ancestrales o asentamientos históricos, con una definida identidad cultural y su cosmovisión” (CODAE, 2008: 12).

A los desencuentros en torno al procedimiento que debería seguirse para la constitución de CTI, se suma la ausencia de coincidencias en relación a las competencias de estos regímenes especiales. Mientras la CONAIE habla del ejercicio pleno de los derechos indígenas dentro de sus jurisdicciones territoriales, el COOTAD (art. 93) señala que las CTI ejercerán las competencias del nivel de gobierno autónomo correspondiente, lo que restringe el alcance más amplio de las competencias propuestas por los pueblos y nacionalidades. Cualquiera sea el escenario, el establecimiento de circunscripciones territoriales implica una tensión y una sobreposición con las formas de gobierno existentes, algo que resulta complejo desactivar frente a un Estado que antes que favorecer procesos de descentralización, ha propendido a la dinámica contraria. La posibilidad de conformar CTI no pone en cuestión la organización territorial existente en la medida en que éstas, en caso de constituirse, se instalarían sobre la división político-administrativa vigente (Cordero, 2017).

Pese a que la constitución de circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas no se ha concretado, las luchas locales y nacionales que toman lugar en diversos puntos de la geografía planetaria han puesto en cuestión el alcance del Estado-nación como categoría inamovible desde los siglos XVI y XVII. El recuento de las diferencias de visión en torno a la comprensión y construcción de la plurinacionalidad, explican no solo los nulos avances en relación a la conformación de circunscripciones territoriales, sino la prevalencia de un Estado que no ha dejado de ser uninacional y monocultural. Al poner en duda la legitimidad de la visión naturalizada de territorio y exigir, concomitantemente, el reconocimiento de nuevas territorialidades, capaces de responder a diversas racionalidades y lógicas en la relación sociedad-naturaleza, es preciso evidenciar que lo que está en cuestionamiento es la colonialidad del poder, del ser y del saber y el surgimiento, en paralelo, de otras epistemes que han enfatizado en la importancia de considerar al territorio y sus sujetos instituyentes, en la perspectiva de desnaturalizar ese concepto (Porto-Gonçalves, 2006: 161). Producto de estas luchas ha sido posible conseguir algunos arreglos territoriales específicos que no solo no están acabados, sino que se asumen como un desafío al ordenamiento vigente y que por lo mismo están sujetos a amenazas que atentan contra su desaparición y que suponen desde



la violación a leyes y derechos reconocidos, así hasta la utilización de medios violentos que obligan a la desterritorialización de pueblos y comunidades. Miguel González (González, Burguete Cal y Mayor, Ortiz, 2010) estudia que al menos seis países han incluido en sus constituciones políticas alguna forma de autonomía territorial: Panamá (1972), Nicaragua (1987), Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), y demuestra las limitaciones que enfrentan estos regímenes autonómicos en el tránsito hacia sus demandas de autodeterminación debido a la falta de cooperación de los gobiernos nacionales.

El reconocimiento de territorios ancestrales ha dado lugar -dicen Agnew y Oslender- “a la aprobación legal de una territorialidad diferencial a nivel subnacional que ha creado autoridades territoriales diferentes del gobierno nacional en el espacio del Estado-nación. Las territorialidades estatales e indígena se superponen de manera muy literal en estas áreas y han creado espacios de soberanía impugnados” (Agnew y Oslender, 2010: 197), lo que lleva a estos autores a introducir la noción de “territorialidades superpuestas”.

¿Cuán diferentes son efectivamente las autoridades que actúan dentro de los territorios ancestrales? González aprecia que

“los regímenes autonómicos legalmente reconocidos por el Estado enfrentan un dilema crucial: pueden contribuir a revigorizar la legitimidad del Estado dado su potencial para mejorar la gobernabilidad democrática (...), pero al mismo tiempo (y paradójicamente) pueden limitar los procesos de empoderamiento de los sujetos de derechos de autodeterminación, dada su interacción con el multiculturalismo neoliberal. Inclusive podría ser el caso que los réditos en gobernabilidad democrática se adjudican al funcionamiento del aparato estatal, y no necesariamente generan formas de empoderamiento para los pueblos indígenas y sus comunidades” (Ibid.: 57).

Walsh (2002) y Porto-Gonçalves (2006), por su parte, consideran que la entrega de territorios ancestrales no ha resuelto los conflictos interculturales, ni tampoco ha trastocado las relaciones de poder. Por el contrario, sugieren que la tensión entre dos racionalidades muchas veces puede acrecentar los niveles de conflictividad y traducirse en una aplicación contradictoria del concepto de territorio dentro de los mismos derechos colectivos, manteniendo latente la tensión entre la aplicación y la realización de estos últimos derechos dentro de un contexto que históricamente ha privilegiado los derechos individuales como fundamento de la ciudadanía. La siguiente cita de Porto-Gonçalves sintetiza este argumento:

“Al otorgar título de propiedad colectiva, el Estado reconoce a los dueños ancestrales. Sin embargo, al dar concesiones territoriales a compañías extractivas (como las petroleras, etc.), define a partir de su propia racionalidad (el interés económico) lo que es y no es territorio. De hecho, al excluir el agua y el subsuelo y limitar el concepto de territorio a la superficie, se rompe con las bases tradicionales y esquemas culturales sobre los cuales supuestamente descansan los derechos colectivos” (Porto-Gonçalves, 2006: 174-175).

De ahí que Raquel Gutiérrez identifique que la principal contradicción para llevar a cabo la construcción de un Estado Plurinacional radique en el auspicio de un modelo extractivista. Mientras los pueblos indios y las comunidades negras persisten en la lucha por conquistar derechos y dominio pleno sobre el territorio que habitan, la decisión política sobre el territorio sigue siendo una prerrogativa del Estado. En el marco de un Estado Plurinacional, la condición de posibilidad de transformar la territorialidad desde lo local, supone atender “a la compaginación de intereses locales diversos (...) respetando la normativa que se inscribió en el propio texto constitucional” (Gutiérrez, 2017: 82), sin que el Estado tenga la prerrogativa de decidir por el “bien de la nación”. En última instancia, lo que se debate son los “términos de inclusión” en la medida en que lo que está en juego son

“lógicas diversas de producción, defensa y reapropiación de lo común con su carga de lucha concreta contra los argumentos y decisiones que se toman desde el llamado ámbito público, que pretende enunciar desde la representación abstracta de una totalidad. Son pues dos formas de política, dos maneras contrapuestas de concebir lo político las que se confrontan: una concreta, plural, centrada en lo común y *generalizable* que no construye modelos abstractos sino que genera y abre caminos de reorganización de la convivencia, que se concreta, además, en la defensa y/o ampliación de las condiciones materiales que garantizan la reproducción de la vida; y otra forma política centrada en lo estatal que no termina de someter a crítica, aunque ahora se pretenda *plurinacional*, una gama amplia de compromisos epistémicos y ontológicos con la herencia de la Modernidad capitalista, en particular, la defensa de la existencia de un lugar totalizante para lo universal afirmativo -el estatal- que es el sitio de enunciación por excelencia de la acumulación de capital en alguna de sus variantes” (Ibid.: 83, las cursivas son de la autora).

Los límites impuestos por el extractivismo en la construcción de los Estados plurinacionales no son los únicos. Estudiosos del nuevo constitucionalismo latinoamericano como Bartolomé Clavero, identifican contradicciones entre el exacerbado presidencialismo y los enunciados respecto a la plurinacionalidad, que a la larga tienden a neutralizar el avance en la construcción de un nuevo Estado.

“Ecuador dio lugar, explica Clavero, a formas de apelación a la ciudadanía cuya activación se encuentra fundamentalmente en manos de la Presidencia de la República y que se trata de procedimientos de toma de decisiones en nombre de

la nación identificada con el Estado, postergándose a las naciones formadas por los pueblos indígenas. No sólo no ayudan a articular la diversidad nacional, sino que pueden fácilmente concurrir a su desestructuración” (Clavero, 2011: 9, citado por Schavelzon, 2015: 120).

El argumento de Clavero conduce a identificar una segunda tensión que se expresa en el desequilibrio entre la unicidad, centralidad y dependencia de decisiones emanadas desde un solo gobierno, como parte de la idea liberal del Estado, y la existencia de múltiples naciones dentro de un mismo Estado, como lo postula la noción del Estado Plurinacional. Raquel Gutiérrez considera que la incompatibilidad entre la producción de decisión política desde horizontes concretos y particulares y las prerrogativas de decisión que se emiten “desde el lugar abstracto y vacío de la universalidad estatal supuestamente abarcadora” (Gutiérrez, 2007: 85) intenta acallar, reduciéndolas a ámbitos restringidos e insignificantes, lógicas de producción de lo común que tienen la

“capacidad de generalización y de desborde, de articulación política y *comunización*. No son pues ni localistas ni particularistas, no son miopes ni minúsculas (...) sino que cobijan la posibilidad y la fuerza para imaginar-producir acciones y horizontes de transformación política y social” (Ibid.: 85-86).

Desde la plurinacionalidad, “el territorio nacional pasa a ser el marco geoespacial de unidad y de integridad que organiza las relaciones entre diferentes territorios geopolíticos y geoculturales” (Santos, 2010: 140); la soberanía se convierte en el factor que posibilita el autogobierno y autodeterminación de unidades geográficas cohesionadas por la identidad étnica y cultural y la nación en el contenedor de varias naciones culturales dentro del mismo espacio geopolítico.

La resolución de esta tensión supondría, según Santos, que no son las naciones y pueblos, “anteriores al Estado moderno, los que deben justificar su autonomía, sino el Estado el que debe justificar los límites que le impone en nombre del interés nacional” (Ibid.), de lo que se sigue que la soberanía estatal tendría que ser re-discutida, algo que Agamben considera políticamente inviable y que Brown señala es teóricamente problemático.

De acuerdo a Salvador Schavelzon, no es tanto la soberanía que la está en cuestión, sino sobretodo el Estado, en la medida que

“(e)l Estado plurinacional, como pluralismo de civilizaciones (...) sería una paradoja que propone un Estado que al mismo tiempo es ‘no Estado’, como punto donde fuerzas de centralización se encuentran con fuerzas centrífugas

inspiradas por la diferencia y la oposición a la unificación, homogeneidad y consenso absoluto. La plurinacionalidad, así, no sería tanto una amenaza a la nación, sino para el Estado, al menos como es entendido por la modernidad política” (Schavelzon, 2015: 167).

Si bien el reconocimiento de territorios ancestrales y los cambios constitucionales introducidos en países como Ecuador y Bolivia son, para varios autores, indicadores de una nueva comprensión del territorio, y del espacio del Estado-nación, la necesaria refundación del Estado parecería advertir, por el momento, una suerte de estancamiento que pone en evidencia el hecho de que la incorporación de las agendas históricas de pueblos y nacionalidades a la institucionalidad y normativa de estados, que aunque se denominen plurinacionales, no han logrado aún descolonizarse. Mientras para Walsh, “la legalización bien puede ser un dispositivo en la tecnología del poder, dominación y domesticación” (2004: 4, citado por Porto-Gonçalves, 2006: 174), para Agnew y Oslander, el “grado de legitimidad y soberanía del Estado puede incrementarse en lugar de socavarse mediante el reconocimiento de la presencia de otras autoridades territoriales dentro del espacio del Estado-nación” (Agnew y Oslander, 2010: 203).

La visión de Schavelzon es más optimista que las anteriores al sostener que “lo que caracteriza al concepto de plurinacionalidad después de las constituciones de 2008 y 2009 en Ecuador y Bolivia, es que propone un nuevo escenario de discusión, donde perspectivas diferentes se encuentran” (Schavelzon, 2015: 170). ¿Son reconciliables y viables ambas perspectivas?

## **1.5. Regiones fronterizas, fronteras extractivas y colonialidad**

### **1.5.1. Dependencia, reprimerización y extractivismo**

En los últimos años, varios estudiosos de la realidad latinoamericana identifican que la región estaría transitando hacia un renovado momento de intensificación de los procesos de acumulación con la concomitante transformación del valor de uso de los bienes comunes<sup>28</sup> contenidos en áreas hasta hace poco olvidadas. Entre la importante producción

---

<sup>28</sup> El concepto de bienes comunes proviene de la tradición anglosajona y señala que la naturaleza es un patrimonio universal imprescindible para la realización de la vida. A partir de tal significación, los bienes comunes no pueden localizarse dentro del ámbito del mercado pues poseen un valor que rebasa cualquier precio. Son bienes que pertenecen al ámbito de la comunidad (Shiva, 1995; Svampa, 2011). El concepto está íntimamente asociado al de territorio y por lo mismo no se trata exclusivamente de una disputa en torno a los “recursos naturales”, sino que entraña un conflicto por la construcción de un determinado tipo de territorialidad basado en la producción de lo común. En este sentido, el concepto de bienes comunes alude a todos aquellos bienes naturales que garantizan y sostienen las formas de vida de una población dentro

académica al respecto, conviene citar los trabajos de Gian Carlo Delgado (2001, 2010), Horacio Machado-Aráoz (2013, 2015), Anthony Bebbington (2007, 2009), Eduardo Gudynas (2009, 2015), Mariestella Svampa (2011, 2013, 2014), Claudia Composto y Mina Lorena Navarro comp. (2012, 2014), Alberto Acosta (2009, 2010, 2011, 2012), entre los principales.

Para graficar este nuevo momento, instaurado con fuerza a partir del último decenio, una de las nociones que mayor aceptación ha ganado es la del “*consenso de los commodities*”, desarrollada por Svampa (2013). Mientras que los “*commodities*”, término popularizado desde la década del 2010, hacen referencia a bienes primarios o materias primas con muy bajo nivel de diferenciación y especialización, así como a ciertas industrias manufactureras (maquilas) sin mayor valor agregado, el “consenso” aludiría al reforzamiento de un proceso de reprimarización de las economías alentado por el incremento relativo de los términos de intercambio experimentado desde inicios de la década del 2000.

La reprimarización de la economía no solo se traduce en una mayor salida de recursos y productos desde América Latina al resto del mundo, sino que supone un aumento de la presión sobre la naturaleza y un reforzamiento de renovadas dinámicas de acumulación, amenazando la seguridad alimentaria de la población al destinar tierras agrícolas para la producción de bienes exportables, poniendo en riesgo la soberanía al depender cada vez más de decisiones extra territoriales y acentuando la dependencia de nuestras economías al comportamiento de mercados foráneos y a los patrones de dominación a nivel global. En lo concreto, la reprimarización significaría un proceso de desacumulación creciente debido a la pérdida de tierras agrícolas, la contaminación de agua o la destrucción de bosques. Al producirse este giro, Svampa advierte que el *consenso de los commodities* habría profundizado la dinámica de desposesión y la consiguiente destrucción y fractura de territorios.

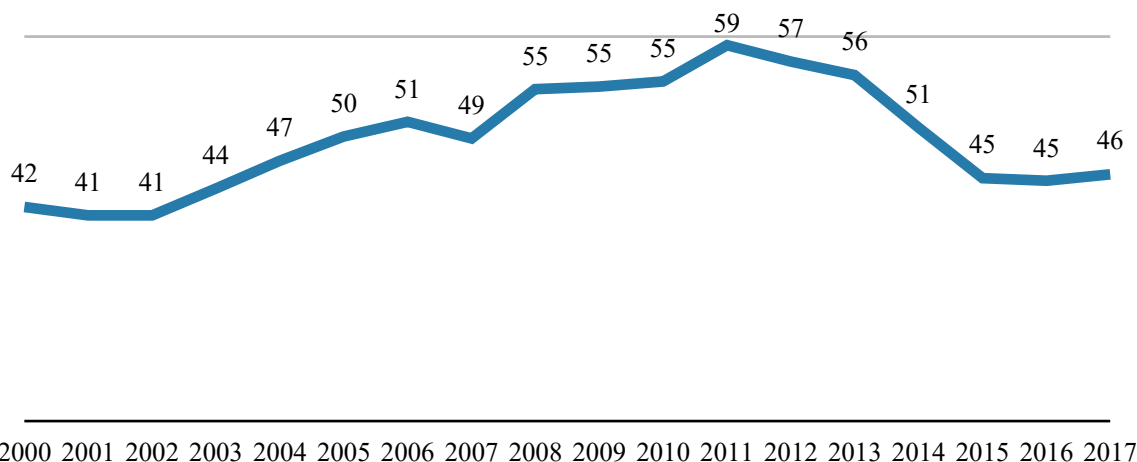
El análisis que realiza Svampa se respalda en datos empíricos en la medida en que si se examina el comportamiento de las exportaciones desde el inicio del presente siglo hasta el 2017, es posible evidenciar que los países de América Latina y el Caribe no solo no han podido desprenderse de la dependencia de materias primas como medio de vinculación con el mercado mundial, sino que la participación de las exportaciones primarias revela una tendencia creciente, contrariando argumentos que apuntan a que los

---

territorio determinado, lo que vincula su acepción con el carácter de inalienabilidad y con lo compartido (Svampa, 2011).

ingresos provenientes de las exportaciones contribuirían a diversificar la matriz productiva de nuestras economías (ver Gráfico 1).

**Gráfico 1. América Latina y el Caribe: exportaciones de productos primarios según su participación en el total (2000-2017)**  
(Porcentaje del valor total de las exportaciones FOB de bienes)



Fuente: CEPAL-CEPALSTAT  
Elaboración: Propia

Según lo advirtieron investigadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el incremento en el precio de los *commodities* iniciaría un descenso a partir del año 2013, con diferencias entre países y rubros exportables (Ocampo, Stallings, Nustillo, Belloso, Frenkel 2014: 28-30). En efecto, luego de una década en la que se experimentó un crecimiento inusitado de los precios de las materias primas, desde los primeros meses del año 2015 éstos comenzaron a caer. El petróleo cuyo precio había fluctuado alrededor de los 30 dólares o menos hacia finales de los años 90 del siglo pasado, inició una escalada alcista desde aproximadamente el año 2003, luego de la invasión a Irak. A partir de entonces, su precio experimentó un crecimiento sostenido hasta llegar a superar, en el año 2008, los 100 dólares por barril de petróleo y aún sobrepasar los 150 dólares a mediados de ese mismo año. Para el 2016 y luego de un errático comportamiento, el precio del petróleo se situó en los mismos niveles anteriores a 2008: menos de 50 dólares por barril. Una tendencia parecida se registró en el precio de los minerales. El oro, por ejemplo, que se mantuvo alrededor de los 400 dólares entre 1993 y 2006, experimentó una impresionante subida desde este último año hasta el 2011, llegando a cotizarse a 1800 dólares la onza de oro, para comenzar nuevamente a caer en los últimos cuatro años, localizándose en la actualidad en alrededor de 1000 dólares la

onza. Comportamientos similares se registraron en otras materias primas que históricamente han sido parte de las exportaciones de América Latina.

A inicios del presente siglo, el consenso de los *commodities* no solo coincidió en América Latina con un panorama alentador en relación a los precios de las materias primas, sino también con regímenes gubernamentales distanciados de los postulados centrales del aperturismo económico a ultranza que llegaron al poder como consecuencia del rechazo que expresaron los movimientos sociales a la implantación dogmática del neoliberalismo.<sup>29</sup> Para estos regímenes, el boom en los precios de las materias primas significó la oportunidad de contar con el financiamiento requerido para el desarrollo de infraestructura social y de servicios y para mantener en funcionamiento los grandes programas sociales de transferencias monetarias y subsidios para atender las necesidades básicas de amplios sectores poblacionales. Estos regímenes, a diferencia de lo sucedido en otras etapas históricas, destinaron gran parte de los ingresos generados por el incremento de los precios de las materias primas a estrategias que contribuyeron al mejoramiento de los indicadores sociales, según lo reconocen organismos internacionales como la CEPAL o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además de apuntalar cierto crecimiento interno, así como la superación de algunos de los más críticos indicadores, varios gobiernos introdujeron medidas de política que hicieron posible recuperar una relativa soberanía sobre los bienes comunes, lo que no es una cuestión menor. En este marco, autores como Gudynas (2011) y Acosta (2012) hablan de neo-extractivismo para denotar no solo el cambio a Asia como principal mercado para América Latina, sino el hecho de que la reprimarización de la economía estaría asociada a la capacidad del Estado de utilizar y dirigir una parte de la renta extraordinaria proveniente de la naturaleza para el financiamiento de políticas sociales. Al respecto Acosta dice:

“Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas, no es suficiente. El real control de las exportaciones nacionales está en manos de los países centrales, aún cuando no siempre se registren importantes inversiones extranjeras en las actividades extractivistas. Perversamente muchas empresas estatales de las economías primario-exportadoras (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto)

---

<sup>29</sup> “El neoliberalismo como doctrina económica se remonta a finales de la década de los treinta” (Harvey, 2003: 124) y es desarrollado en los años posteriores por pensadores como von Hayek, Ludvig von Mises y Milton Friedman. Supone un rechazo a la intervención estatal y una postura en favor de la liberalización del mercado. A partir de la preocupación por el déficit y la deuda, esta escuela de pensamiento económico justifica la adopción de políticas de austeridad para favorecer la disminución de las cargas fiscales (Fontana, 2013).

parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas a las de las transnacionales: la depredación ambiental y el irrespeto social no están ausentes de sus prácticas. En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre, mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial” (Acosta, 2011: 94-95).

Sea bajo la denominación del consenso de los *commodities* o de neo-extractivismo, el proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas estaría deificando el papel que históricamente ha desempeñado la región como proveedora de materias primas. En efecto, si bien la idea de consenso de los *commodities* contribuye a entender la trayectoria que siguió América Latina durante los tres primeros lustros de este siglo, y el neo-extractivismo da cuenta de las especificidades que asumieron las actividades extractivas bajo los denominados gobiernos progresistas<sup>30</sup> que gobernaron la región durante los años del “boom”, una noción menos coyuntural que las dos anteriores para explicar el mantenimiento y reforzamiento de lo que autores como Muradian y Martínez-Alier (2001) han calificado como la “trampa de la especialización”, es decir, la exportación de productos intensivos en naturaleza, sujetos a un constante deterioro de los términos de intercambio, es la de regímenes extractivos o extractivismo. A través de este concepto se potencia la visión de América Latina como lugar de abundancia de recursos naturales y se afirma el lugar asignado a la región en la división internacional del trabajo. Como sostiene Horacio Machado-Aráoz,

*“(e)l extractivismo es la práctica económica-política y cultural que ‘une’ ambas zonas, el modo a través del cual una se relaciona con la otra. Extractivismo es ese patrón de relacionamiento instituido como pilar estructural del mundo moderno, como base fundamental de la geografía y la ‘civilización’ del capital. Pues el capitalismo nace de y se expande a través del extractivismo” (Machado-Aráoz, 2015: 15, cursivas del autor).*

Esta perspectiva marca un paralelismo con las “geografías de la extracción”, de las que habla la socióloga Saskia Sassen (2014) y que aluden a la sobreexplotación de la naturaleza, la orientación exógena de las economías, las asimetrías en la división del

---

<sup>30</sup> Me refiero a los gobiernos que a partir de la ascensión de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, llegaron al poder bajo la auto-denominación de “post-neoliberales”, “progresistas” o de “socialismos del siglo XXI”. Más allá de los calificativos, gobiernos como los de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Uruguay, con ritmos e intensidades variables, iniciaron su gestión con un amplio respaldo social, levantaron enormes expectativas, desarrollaron en algunos casos procesos constituyentes e introdujeron la reconstrucción de los ámbitos sociales a cargo de los Estados.



trabajo y del espacio y el marco de expulsión cada vez más generalizado de los sistemas económico, social y biosférico.

Desde la óptica de los regímenes extractivistas o de las geografías de la extracción, es posible analizar críticamente las modalidades de dependencia y los arreglos neocoloniales de la actualidad y concluir que el extractivismo no es en América Latina un fenómeno reciente pues guardaría relación con el lugar que ocupa la región en la división internacional del trabajo y la consiguiente delimitación entre zonas de aprovisionamiento y otras de consumo. En tanto proceso sustentado en la historia, el extractivismo aludiría, según Machado-Aráoz, a tres dimensiones interrelacionadas. En primer lugar, haría eco de la forma de designación y relacionamiento que la modernidad habría impuesto a la naturaleza, considerada únicamente como objeto de conocimiento y explotación. En segundo lugar, la gestión extractivista explicaría el carácter estructural e intrínsecamente desigual del mundo al constituirse “como el molde fundacional del ordenamiento económico, político y socio-territorial de los Estados ‘nacionales’ de nuestra región” (Machado-Aráoz, 2015: 18) y develaría, en tercer lugar, la emergencia de Occidente como centro geopolítico, económico y cultural como consecuencia de la apropiación desigual de la naturaleza.

La vocación exportadora que fomenta el extractivismo somete a los países a los vaivenes del mercado mundial, lo que supedita su dinámica a los ciclos de la economía mundial y genera una dependencia sistémica. Los regímenes extractivistas impiden, como lo dice Machado-Aráoz, que los países se organicen como “economías en sí y para sí, sino como economías incompletas y dependientes de aquellas a las que destinan sus productos” (Ibid.: 22), acentuando una distribución geopolítica en función de un ordenamiento territorial hegemónico.

Los argumentos desarrollados alrededor de la noción de regímenes extractivos o extractivismo se alimentan de vertientes críticas de la economía política latinoamericana que se formularon en la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo, son los límites identificados en estas corrientes de pensamiento los que posibilitaron a la ecología política avanzar en la construcción de un concepto más comprensivo e integral. En efecto, el estructuralismo cepalino y su visión de centro-periferia (Prébis, Furtado, Pinto, Sunkel), los teóricos de la dependencia en su vertiente estructural-funcionalista (Cardoso y Faletto) y los planteamientos de raíz marxista (Gunder Frank, Theotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Bambirra) ya señalaron las dificultades estructurales impuestas por la división internacional del trabajo y las consecuentes limitaciones para impulsar y

sostener un proceso de acumulación interna, para promover el desarrollo tecnológico y la industrialización o para reactivar la ampliación de los mercados nacionales, enfatizando cómo el carácter primario-exportador de nuestros países contribuyó a fortalecer la integración funcional de las economías latinoamericanas en tanto proveedoras dependientes de los flujos de energías y materiales que precisaba el capitalismo a escala mundial.

Aunque con matices entre cada una de las vertientes del pensamiento dependentista, sin lugar a dudas el centro de las preocupaciones de estos pensadores fue el deterioro de los términos de intercambio, la débil estructura productiva interna; la dependencia comercial, tecnológica, financiera y la transferencia de excedentes, fundamentalmente financieros. En esta dirección, Raúl Prébisch (1949) acuñó el concepto de “términos de intercambio desiguales” para reflejar la presencia de dos tendencias en el comercio mundial: por un lado, un deterioro secular del valor de las exportaciones de los países proveedores de materias primas; y, por otro, la elevación, en el largo plazo, de los precios de las importaciones de los bienes manufacturados, servicios y patentes que realizan esos mismos países. Este doble movimiento explica que en el largo plazo, las economías exportadoras de bienes primarios requieran exportar volúmenes crecientes para financiar la importación de bienes industrializados. Dos Santos (1970), Sunkel y Paz (1970) llamaron *dependencia* a esta forma de inserción en los mercados internacionales y a las asimetrías resultantes entre los centros capitalistas y las economías periféricas (Marini, 1977; Frank, 1976, 1967; Furtado, 1974; Cardoso y Faletto, 1969). En palabras de Dos Santos al referirse al concepto de dependencia:

"La situación internacional se caracteriza por la existencia de una interdependencia creciente entre las economías nacionales a escala mundial bajo la hegemonía de uno o varios centros dominantes que transforman este desarrollo en una acumulación de riqueza y poder para ellos en detrimento de las amplias mayorías mundiales. Esta situación tiene una cara interna en los países dominados. Esta cara interna no es, pues, una consecuencia de factores externos, sino que es su propia manera -el modo dependiente- de participar de este proceso de desarrollo de la economía mundial capitalista. La dependencia es, pues, el modo específico de la producción capitalista en nuestros países. Es, también, la forma en que se estructuran nuestras sociedades" (Dos Santos, 1978: 37).

La teoría del sistema-mundo, entre cuyos exponentes más notables se encuentra Immanuel Wallerstein (2005), expandió el análisis de los teóricos de la dependencia argumentando que desde el siglo XVI se instauró un mercado global que integró a todos los sistemas culturales dentro de un sistema económico mundial caracterizado por una

división mundial del trabajo. Los teóricos del sistema mundo argumentan que el crecimiento de este mercado mundial ha generado diferencias estructurales entre el centro, la periferia y áreas de la semiperiferia. Los estados centrales que dominan económica y políticamente al sistema-mundo se caracterizan por ser sistemas de producción intensivos en capital y la utilización de modernas tecnologías para elaborar bienes manufacturados sofisticados. En el otro extremo, los estados periféricos, donde dominan los sistemas de producción intensivos en fuerza de trabajo, proporcionan al mercado mundial materias primas y bienes agrícolas. Entre estos dos extremos están los estados que constituyen la semi-periferia (Wallerstein, 2005: 47-48).

La escuela dependentista sobre todo en su vertiente desarrollista (Cardoso y Faletto, Sunkel) ha sido criticada por el énfasis económico de sus análisis, lo que contribuyó a eclipsar otras dimensiones presentes en la organización territorial del mundo. Agustín Cueva (2008 [1974]), sociólogo ecuatoriano, se convirtió en un duro crítico de este enfoque al que cuestionó el dualismo de su análisis (centro/periferia, sector tradicional/sector moderno, capitalismo moderno/capitalismo dependiente), lo que propende a borrar la heterogeneidad que caracteriza a toda sociedad; por tender a reemplazar las contradicciones de clase por contradicciones nacionales y regionales, por su sesgo marcadamente nacionalista y por otorgar un papel sustantivo a las denominadas “oligarquías”, dejando a un lado la acción de otros sectores sociales.

También la teoría del sistema-mundo ha sido objeto de similares críticas. Pese a su terminología marxista, su enfoque conceptual se basaría en modelos o tipos ideales en el sentido weberiano del término. Consecuentemente, dicen Greenberg y Park (1994: 7), la teoría del sistema-mundo afirma que una vez que las regiones no capitalistas son incorporadas a la división internacional del trabajo, éstas se tornan capitalistas porque las relaciones de producción que define el centro, definen al mismo tiempo el sistema. En la medida en que la dinámica de la periferia es atender los requerimientos de acumulación del centro, esta suerte de determinismo restaría posibilidades a los procesos políticos y sociales de las áreas subordinadas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pese a estos cuestionamientos, es preciso señalar que economistas ecológicos como Jason W. Moore (2003) reconoce en *'The Modern World-System'. As Environment History? Ecology and the Rise of Capitalism* que su reflexión en torno a las “*commodities frontiers*” se nutrió en gran parte del análisis de Wallerstein sobre la transición del feudalismo al capitalismo y el énfasis que este último autor habría otorgado a la apropiación de áreas periféricas para incorporarlas a la división social del trabajo, a las necesidades de expansión de la economía, a la divergencia entre centro y periferias, y explícitamente entre Europa y América; y, a la transformación agro-ecológica que tomó lugar durante este proceso histórico.

En la medida en que estos dos cuerpos de pensamiento -la escuela dependentista y el sistema-mundo- estaban más interesados en entender cómo el “centro” explota a la “periferia”, no prestaron atención a las reacciones de las poblaciones locales ni tampoco a los procesos de adaptación que debieron ocurrir, “omitiendo explorar el complejo proceso a través del que se penetraba, subordinaba, transformaba o destruía otros modos de producción a medida que entraban en contacto con la economía mundial” (Greenberg y Park, 1994: 7). Habría sido a partir del estudio del antropólogo e historiador Eric Wolf, *Europe and the People Without History* (1982), a quien se le atribuye el concepto de ecología política (Delgado, 2013), cuando se inauguró la posibilidad de explorar las complejas interacciones entre poblaciones locales y la política económica más amplia (incluso global), en la que estos sectores estaban insertos (Greenberg y Park, 1994). Se marcaba así una primera diferencia con la lectura de dependentistas y teóricos del sistema-mundo.

Una segunda diferencia estaría dada porque el sesgo economicista de las teorías de los años 70 minimizó la consideración de que la dominación y explotación se expresan en múltiples dominios. El escaso tratamiento a la heterogénea totalidad histórico-estructural, para usar la conceptualización utilizada por Quijano (1991, 1998, 2000), no permitió ni a dependentistas ni tampoco a la teoría del sistema-mundo, dar cuenta del patrón de poder colonial, de la colonialidad que afecta todas las dimensiones de la existencia y que se traduce en múltiples jerarquías globales de formas de dominación y explotación sexual, política, epistémica, económica, espiritual, lingüística y racial (Grosfoguel, 2014). La ecología política, y la ecología política del extractivismo, retoman los planteamientos decoloniales para afirmar que la mercantilización opera como fuerza coercitiva ligada a un patrón de poder que reestructura, controla y dispone, local y globalmente a las poblaciones como a los territorios, implementando una lógica inherentemente asimétrica, tanto en términos sociales y económicos, como ecológicos. El extractivismo, siguiendo la reflexión de Machado-Aráoz, es la forma que adopta el capital en sus regiones periféricas y espacios coloniales, “da cuenta de los mecanismos epistémicos, jurídicos, económicos, políticos y bélicos a través de los cuales se produce y reproduce la apropiación desigual del mundo”, así como de la “jerarquización de los territorios y la racialización de las poblaciones como condición de la apropiación y consumo diferencial del mundo” (Machado-Aráoz, 2013: 37).

En el extractivismo han cambiado las narrativas y regímenes coloniales. Sin embargo, es posible también identificar continuidades. La violencia es, por ejemplo, una

constante en la apertura de nuevas áreas de extracción, al igual que la disputa por los derechos de propiedad y de la tierra (Mezzadra y Neilson, 2017). Mbembe (2016) señala que los proyectos extractivos implican un disciplinamiento territorial bajo trampas pos-soberanas y la creación de humanidades prescindibles para el funcionamiento del capital pues la apropiación de territorios implica no solo despojar a las personas de sus medios de vida, sino también “implantar una fragmentación del tiempo y una atomización del espacio” (Mbembe, 2016: 31) que viene acompañada de una “militarización de fronteras, la parcelación y segmentación de territorios y la creación, dentro de Estados existentes, de espacios más o menos autómomos, a veces despojados de cualquier forma de soberanía nacional” (Ibid.: 30-31). Las lógicas de violencia y explotación extractiva -que perpetúan dinámicas de racialización y segregación- son lo que Mbembe califica como el “devenir negro del mundo”, un enunciado que en otras palabras, da cuenta de la expansión de la desposesión y consiguiente apropiación de tierras y fuerza de trabajo que reducen drásticamente el campo de lo posible.

Si bien la crítica decolonial ha contribuido a enriquecer el debate propuesto por los dependentistas y la teoría del sistema mundo, es al mismo tiempo indiscutible reconocer que ambas escuelas de pensamiento resultan ineludibles a la hora de entender la realidad latinoamericana y su papel en la organización del “sistema-mundo occidentalocéntrico/cristianocéntrico capitalista/ patriarcal moderno/colonial” como lo califica Grosfoguel (2014: 383) quien, en defensa de esta larga etiqueta argumenta que “capitalismo” remite únicamente a economía y que “sistema-mundo” torna invisibles la multiplicidad de relaciones de poder que están en juego, lo que lleva a la necesidad de calificar en todas sus particularidades a un “patrón colonial de poder” cuya vigencia ha hecho intolerable la vida de millones de seres humanos. En esta consideración no está presente la destrucción que este mismo patrón de poder impone sobre la naturaleza y que es precisamente el tercer elemento que marca un punto de inflexión entre la tradición crítica de la economía política latinoamericana y la teoría del sistema mundo, por un lado, y la ecología política del extractivismo, por otro lado.

En efecto, en línea con la visión económica predominante hacia 1960-1970 (teoría de la modernización de Rostow formulada a principios de la década de los sesenta), los límites en el funcionamiento del metabolismo social pasaron desapercibidos. No se consideró el papel de la naturaleza como reservorio de bienes naturales ni como contenedor de los desechos generados por el funcionamiento de la economía. Su análisis no solo que prescindió de las relaciones socio-metabólicas con la biosfera, sino que

implícitamente concebía a la naturaleza y a la economía como sistemas infinitos, sin restricciones frente a la dinámica económica mundial. A diferencia del pensamiento desarrollado en los años 70, la ecología política, a través de la noción de régimen extractivista, incluye la dimensión ambiental para explicar la asimétrica distribución socio-territorial, contribuyendo en esa dirección a reevaluar lo mejor del pensamiento crítico latinoamericano y a realizar una lectura renovada de la teoría de la dependencia.

Según Bellamy Foster (2007), la relación destructiva del capitalismo con el ambiente –y del extractivismo como una de sus facetas- se basaría en tres argumentos interrelacionados: (1) el denominado círculo vicioso del productivismo que determina un aumento constante de la cantidad de materias primas y energía consumidas para satisfacer la irrefrenable búsqueda de lucro del capital, ejerciendo una presión brutal sobre la tierra; (2) el apareamiento de lo que el economista James O'Connor (1998) calificó como la segunda contradicción del capitalismo que conlleva a la degradación de las condiciones humanas y naturales, elevando el costo global del desarrollo económico y propiciando condiciones para la irrupción de crisis recurrentes que afectan al propio funcionamiento del sistema debido a las implicaciones sobre la oferta; y, (3) la ruptura en el metabolismo entre sociedad y naturaleza, interrumpiendo procesos básicos de reproducción natural. La ruptura o fractura metabólica no solo estaría relacionada con la escala de la economía sino, y de forma más importante, con la manera e intensidad de la interacción entre la naturaleza y la sociedad. Es un fenómeno reconocido que el agotamiento de los “recursos naturales” y de las reservas, con la concomitante dificultad de obtener iguales o mayores volúmenes de minerales y metales en las áreas de fácil acceso, ha empujado a la ampliación de la frontera extractiva, a la aceleración de los ritmos de explotación y a la adopción de técnicas no convencionales, más complejas y de consecuencias inciertas como la explotación de esquistos y el *fracking*, el uso de organismos genéticamente modificados (transgénicos) o la adopción de la minería hidro-química, procesos que acrecientan los riesgos ambientales y amplifican los problemas ecológicos contemporáneos. Además de poner en marcha técnicas de extracción no convencionales, el extractivismo se destaca porque junto a las actividades extractivas tradicionales (explotación de recursos naturales no renovables), desata procesos que en la agricultura, la forestería, la ganadería, la pesca o el turismo pueden inducir al agotamiento de los bienes naturales.

Las exportaciones, particularmente de productos primarios, tienen una mochila ecológica debido a las externalidades que generan. El Wuppertal Institute de Alemania

ha sido una de las instituciones pioneras en contabilizar los flujos indirectos de materiales, lo que se conoce como *total material requirement*. Existen flujos que entran directamente a la economía (inputs materiales directos) y otros denominados “ocultos” que, aunque necesarios para llevar a cabo un proceso productivo determinado, no son contabilizados en el precio. Constituyen, por tanto, aquellos materiales que se pierden al establecer por ejemplo un cultivo o extraer petróleo. Los flujos ocultos pueden estimarse para la producción generada al interior de un país, así como también para la producción importada y que se efectiviza en otras latitudes. En cualquier caso, se trata de materiales que no se exportan físicamente, que no están incorporados en el precio de los productos de exportación, ni que se recogen en la contabilidad económica, pero que sin embargo son necesarios para que el comercio se realice.

Desde esta perspectiva, además del bajo precio que reciben los productos generados en el Sur, y la necesidad de exportar volúmenes cada vez más grandes para mantener el valor adquisitivo y el flujo de divisas, se añaden los costos del deterioro y agotamiento de los bienes naturales: las externalidades que no se valoran ni se compensan. De ahí que sea posible concluir que no solo que los precios de exportación de las materias primas son menores a lo que deberían ser, sino que el Sur estaría transfiriendo riqueza a los países ricos a través de la sub-valoración del trabajo, la salud, la calidad de vida de los pobres, la depredación de la naturaleza, la pérdida de biomasa, de recursos no renovables y de biodiversidad. En contraste, los llamados países desarrollados, estarían trasladando sus costos ambientales al Sur. Es la consecuencia del intercambio ecológicamente desigual que Martínez-Alier (1992, 1998) y la economía ecológica han identificado y que explica el deterioro de los términos de intercambio físicos, como nunca antes en su historia. De acuerdo a cálculos realizados por Falconí y Vallejo para los países andinos, “si en 1970, el desequilibrio físico, medido por la diferencia entre las importaciones y exportaciones en unidades físicas, fue de 89,2 millones de toneladas; en el 2009, este desequilibrio alcanzó 181,6 millones de toneladas” (Falconí y Vallejo, 2012: 62).

La economía ecológica y la ecología política del extractivismo complementaron el análisis iniciado por los teóricos de la dependencia cuyos debates se centraron, en lo fundamental, en las asimetrías resultantes de las transferencias financieras desde la periferia al centro, introduciendo variables ambientales y nociones como el comercio ecológicamente desigual y la categoría de huella ecológica. Pero no solo eso. La ecología política al reconocer, como lo hace también la perspectiva decolonial, que no es suficiente

colocar el énfasis en las relaciones internacionales de intercambio, sino que es necesario explicitar la relación entre política, política económica y ambiente, enfatiza de ese modo la ruptura cultura-naturaleza que inauguró el capitalismo y que relegaría para esta última solo el estatuto de objeto para el conocimiento y la explotación (Moncada, 2015).

Más allá de una inclusión sistemática de lo ambiental en el análisis, lo que no es una cuestión menor, al hablar de extractivismo, desde la mirada de la ecología política y el pensamiento decolonial, se subraya que en contraste al peso que otorgaron los teóricos de la dependencia a las variables económicas, no existe una sola dimensión capaz de moldear el comportamiento de una realidad social, sino que existen procesos múltiples y complejos en los que lo económico, tanto como lo cultural, y la consiguiente jerarquización racial, son elementos constitutivos de un patrón global de poder.<sup>32</sup> Esta mirada más integral permite entender que el extractivismo no es solo un fenómeno “impuesto” sino que está imbricado en la lógica de funcionamiento de la colonialidad. Al respecto resulta central subrayar

“que el extractivismo no solo tiene que ver con la *estructura genética del colonialismo*, sino también -y quizás, más decisivamente-, con la de *la colonialidad*, fenómeno que alude tanto a la normalización/naturalización de las jerarquías coloniales como a la internalización de éstas y a la reproducción de sus modos de explotación por parte de sectores colonizados” (Machado-Araóz, 2015: 17).

Siguiendo a Grosfoguel, la noción de colonialidad aporta, por otro lado, a desarmar la idea de que gracias al control del Estado-nación sería posible transformar el lugar que ocupa un país en la división internacional del trabajo y que despertara, en una coyuntura histórica específica, el entusiasmo de pensadores ligados a la escuela de la dependencia.<sup>33</sup>

“Los dependentistas reprodujeron la ilusión de que la organización y el desarrollo nacionales pueden lograrse a partir del control del Estado-nación.

---

<sup>32</sup> En línea con este argumento, Mezzadra y Neilson argumentan que el extractivismo tampoco es únicamente un fenómeno ambiental de características cada vez más agresivas-“extractivismo literal”, en sus palabras-, sino que involucra una complejidad de procesos que tienen incidencia sobre los más diversos dominios de la vida, lo que los lleva a acuñar el concepto de “operaciones extractivas del capital” (2017:10). Un extenso desarrollo al respecto se puede encontrar en su artículo *On the multiple frontiers of extraction: escalating contemporary capitalism* publicado por la revista *Cultural Studies*.

<sup>33</sup> En *Capitalismo periférico, crisis y transformación*, Raúl Prébish, por ejemplo, argumenta que “es imprescindible que el Estado regule el uso social del excedente, para acrecentar el ritmo de acumulación y corregir progresivamente las disparidades distributivas de carácter estructural” (1981: 47); el Estado también es el llamado a ejercer una acción reguladora que “el mercado no puede conseguir por sí mismo, pero que le permitirán lograr una gran eficiencia económica, social y ecológica” (48), lo que se consigue a través de la planificación que “significa racionalidad colectiva, y esta racionalidad exige que el excedente se destine a acumular y redistribuir, así como a gastos e inversiones del Estado” (Ibid.).



(...) Aunque los dependentistas definieron el capitalismo como un sistema global más allá del Estado-nación, seguían creyendo que era posible desconectarse o romper con el sistema-mundo en el plano del Estado-nación. (...) Como sabemos hoy, es imposible transformar un sistema que opera a escala mundial privilegiando el control/administración del Estado-nación. Ningún control ‘racional’ del Estado-nación alteraría la posición de un país en la división internacional del trabajo. La planificación y el control (...) del Estado-nación contribuye a la ilusión desarrollista de que es posible eliminar las desigualdades de un sistema mundial capitalista desde el plano del Estado-nación” (Grosfoguel, 2014: 391).

En suma, el extractivismo ha estado presente históricamente y es la forma en que el capitalismo ha tomado lugar en América Latina, es la condición de existencia del capital. La propagación de este concepto por parte de la ecología política latinoamericana, lejos de desconocer los aportes de la tradición crítica de la economía política en la región, complementa las lecturas y análisis realizados por dependentistas, estructuralistas y los teóricos del sistema mundo, enriqueciendo el debate con la inclusión de otras perspectivas provenientes de la economía ecológica y la crítica decolonial a fin de capturar las manifestaciones actuales del carácter de la inserción de las economías latinoamericanas al funcionamiento del capitalismo; de ampliar el análisis con la incorporación de nuevas dimensiones y de las afectaciones sobre la vida de quienes habitan territorios que son fuente de provisión de materias primas; y contribuir a la configuración de una lectura más integral para entender no solo las asimetrías económicas, sino también las asimetrías y contradicciones políticas actuales en las que, utilizando las palabras de Boaventura de Sousa Santos,

“parece que la modernidad occidental sólo puede expandirse globalmente en la medida en que viola todos los principios sobre los cuales históricamente se ha fundamentado (...) Los derechos humanos son así violados con objeto de ser defendidos, la democracia es destruida para salvaguardar la democracia, la vida es eliminada para preservar la vida” (Santos: 2014: 33).

La fuerza que ha adquirido hoy la noción de extractivismo, es entonces la respuesta a la ampliación, sin precedentes, de la velocidad e intensidad de la explotación de territorios y cuerpos y de su penetración en las diversas dimensiones y ámbitos de la vida.

### 1.5.2. “Acumulación por desposesión” y fronteras extractivas: dos nociones complementarias sobre la continuidad del saqueo

Marx demostró que el dinero, la mercancía y los medios de producción no son en sí mismos capital. Dinero, mercancía y medios de producción se transformaron en capital bajo determinadas condiciones que tomaron lugar entre los siglos XV y XVIII, durante la constitución del capitalismo y el proceso que se denominó como la acumulación originaria de capital:

“La relación del capital presupone la *escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo*. Una vez establecida la producción capitalista, la misma no sólo mantiene esa división sino que la *reproduce en escala cada vez mayor*. El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro que el proceso de *escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo*, proceso que, por una parte, *transforma en capital* los medios de producción y de subsistencia sociales, y por otra convierte a los productores directos en *asalariados*. La llamada acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el *proceso histórico de escisión entre productor y medios de producción*. Aparece como ‘*originaria*’ porque configura la *prehistoria del capital* y del modo de producción correspondiente al mismo” (Marx, 1980, [1867]: 893, las itálicas son del autor).

Ese primer proceso de acumulación habría convertido a los productores en proletarios y contribuido a constituir activos privados en manos de los capitalistas. Rosa Luxemburgo complementaría este análisis señalando que tal acumulación originaria no se detuvo en el período estudiado por Marx, sino que se habría extendido durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Ella habría identificado que para el mantenimiento y la consolidación de la propiedad privada, el mercado y la plusvalía, eran necesarios recurrentes procesos de acumulación originaria con sus manifestaciones de violencia y despojo hacia territorios periféricos. Sus conclusiones derivaron del estudio del reparto de Asia y África entre las potencias europeas para colegir que la acumulación y la consecuente desposesión que esta conlleva, son procesos constitutivos de la lógica del capital:

“(…) la acumulación capitalista tiene, como todo proceso histórico concreto, dos aspectos distintos. De un lado, tiene lugar en los sitios de producción de plusvalía -en la fábrica, en la mina, en el fundo agrícola y en el mercado de mercancías-. Considerada así, la acumulación es un proceso puramente económico, cuya fase más importante se realiza entre los capitalistas y los trabajadores asalariados, pero en ambas partes, en la fábrica como en el mercado, se mueve exclusivamente dentro de los límites del cambio de mercancías, del cambio de equivalencias. Paz, propiedad e igualdad reinan aquí como formas, y era menester la dialéctica afilada de un análisis científico para descubrir, cómo en la acumulación, el derecho de propiedad se convierte en

apropiación de propiedad ajena, el cambio de mercancías en explotación, la igualdad en dominio de clases. El otro aspecto de la acumulación del capital se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aquí reinan como métodos, la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña” (Luxemburgo, 1967 [1912]: 351).

De acuerdo a Luxemburgo, la conquista de nuevos territorios por parte del capital obedecería a la necesidad de abrir mercados como válvula de escape para enfrentar las crisis de subconsumo, generadas como consecuencia de la reducción de la demanda efectiva para absorber el continuo incremento de la producción capitalista. La expansión del capital hacia otros territorios, tanto a través de la inversión como de la importación de bienes de consumo, contribuiría a la creación de demanda y por consiguiente apuntalaría la estabilización del sistema.

La reflexión iniciada por Luxemburgo ha sido retomada por varios pensadores (Bonefeld y los exponentes del llamado autonomismo; Holloway, Harvey, Bellemey Foster).<sup>34</sup> En particular, el geógrafo británico David Harvey, recupera el debate de la acumulación originaria, resaltando que ésta es un proceso doble, fundacional y continuo y propone la utilización del término “acumulación por desposesión” para diferenciar el proceso de acumulación continuo e inherente al funcionamiento del capitalismo, de la acumulación “primitiva” u “originaria” que tomó lugar en un momento histórico específico. “Dado que no parece muy adecuado llamar ‘primitivo’ u ‘originario’ a un proceso que se halla vigente y se está desarrollando en la actualidad, en lo que sigue sustituiré esos términos por el concepto de ‘acumulación por desposesión’” (Harvey, 2003: 116).

Aunque inspirado en gran parte por el razonamiento de Luxemburgo, en su reflexión sobre la acumulación por desposesión, Harvey introduce dos elementos que escapan al análisis crítico de esta importante teórica de inicios del siglo XX. Al contrario de Luxemburgo quien sostenía que la acumulación, donde reina “la violencia, el engaño, la opresión y la rapiña”, se realiza al exterior del sistema capitalista, “entre el capital y las formas de producción no capitalistas”, Harvey argumenta que la acumulación por desposesión es un proceso generalizado, tanto en los países del sur, en territorios no enteramente capitalistas (según denomina Víctor Toledo a las formas de producción

---

<sup>34</sup> Una lectura actual sobre la perspectiva de pensadores adscritos al autonomismo se encuentra en *Territorios en disputa. Despojo capitalista. Lucha en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*, coordinado por Claudia Composto y Mina Lorena Navarro (2014).

propias de los pueblos indígenas de América Latina), como al interior de las propias economías ricas. La acumulación por desposesión no tendría desde este punto de vista un solo espacio geográfico de actuación sino que correspondería a la dinámica del propio capitalismo, con implicaciones en todos los órdenes y espacios geográficos en los que penetra y domina el capital.

El segundo elemento que añade Harvey, relacionado con el actual funcionamiento del capitalismo y que Luxemburgo no podía apreciar en la época que vivió, es que la acumulación por desposesión no solo ayudaría a resolver las crisis de subconsumo, sino fundamentalmente las crisis de sobreproducción que recurrentemente afectan el funcionamiento del capitalismo y que desde 1973 en adelante están presentes con más fuerza. El argumento de Harvey es el siguiente: la lógica de crecimiento y aumento de la tasa de ganancia provoca excedentes de capital que permanecen ociosos, lo que determina que “(l)a incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable (esté) acompañada por crecientes intentos de acumular mediante la desposesión” (Harvey, 2004: 100). Para que los capitales puedan generar rendimientos y la acumulación no se detenga, existen algunas vías. Harvey reconoce que ya Arendt en 1968 había advertido que el capitalismo siempre requiere un fondo de activos para afrontar sus necesidades de expansión, como tierras “vacías” o nuevas fuentes de materias primas frente al subconsumo, mantener altas tasas de ganancia, el acceso a fuerza de trabajo disponible y a recursos naturales. En línea con el señalamiento de Arendt, Harvey apunta que el capital opta en esta dirección por invertir en activos, generalmente tierra, viviendas, servicios públicos; adquirir materias primas baratas, reduciendo los costos de producción y elevando las ganancias o devaluando activos y fuerza de trabajo.

La conversión de la tierra en mercancía, la conculcación de otras formas de propiedad diferentes a la privada (comunal, colectiva); la mercantilización de la fuerza de trabajo, la destrucción de modalidades de producción y organización no subordinadas al capital; la apropiación de bienes mediante el establecimiento de regímenes coloniales y posteriormente a través de mecanismos más sutiles como el endeudamiento, procesos que tuvieron lugar desde el siglo XV en adelante y que caracterizaron a la denominada acumulación originaria, hoy se combinan, sostiene Harvey, con otras formas de despojo y con viejas estrategias de acumulación revestidas bajo una nueva apariencia. El auge de la teoría neoliberal y su política de privatizaciones constituiría el rasgo más eminente del proceso de acumulación por desposesión. “Con el neoliberalismo, los bienes públicos en poder del Estado fueron lanzados al mercado para que el capital sobreacumulado pudiera

invertir en ellos (...) (U)na vez en movimiento estas iniciativas suscitaron terribles presiones para hallar cada vez más áreas (...) a las cuales poder aplicar la privatización” (Harvey, 2003: 125) que se comprarían a precios por debajo de su valor real como consecuencia de una estrategia de devaluación sistemática de los activos y de la fuerza de trabajo.

En países ricos en naturaleza, la acumulación por desposesión implica la apropiación ilegal y violenta de territorios que se mantienen relativamente fuera del mercado, lo que conlleva a la aplicación de mecanismos extra-económicos (políticos y coercitivos) de expropiación de la tierra, de la riqueza natural y de la fuerza de trabajo para controlar y comercializar los bienes comunes ahí contenidos.

“La producción del espacio, la organización de nuevas divisiones territoriales de trabajo, la apertura de nuevos y más baratos complejos de recursos, de nuevos espacios dinámicos de acumulación de capital y de penetración de relaciones sociales y arreglos institucionales capitalistas (reglas contractuales y esquemas de propiedad privada) en formaciones sociales preexistentes brindan diversos modos de absorber los excedentes de capital y trabajo existentes” (Harvey, 2004: 102).

Esta dinámica es la que se sugiere estaría tomando lugar en las nuevas áreas y regiones que están siendo colonizadas por el capital, que ilustra la expansión de las fronteras extractivas *-commodity frontiers-* (Moore, 2000, 2003, 2010, 2011) sobre nuevos territorios generalmente ricos en biodiversidad y habitados por poblaciones indígenas u otras minorías culturales. En efecto, el concepto de fronteras de *commodities*, acuñado por Jason Moore, contribuye a capturar el proceso de incorporación de áreas subalternizadas a la dinámica del capital y su integración al Estado-nación que las contiene, y a reflejar la ocurrencia de un proceso social, económico y ecológico en la medida en que reflejaría el hecho de que la “producción y distribución de materias primas específicas y de productos primarios en particular, al requerir expandirse cada vez más, reestructuran el espacio geográfico en los márgenes del sistema” (Moore, 2000: 410).<sup>35</sup> El concepto daría cuenta, por tanto, de las crecientes necesidades de recursos *-“space-of-flows”-* que exige el funcionamiento de la economía mundial, así como del avance de los procesos de acumulación sobre cada vez mayores y nuevas áreas geográficas *-“space-*

---

<sup>35</sup> Moore (2000) forjó este concepto a partir del estudio del desarrollo y expansión de la producción y comercio del azúcar entre los siglos XV y XIX demostrando que la dinámica económica que sustentó esta actividad fue de tal magnitud e intensidad que al provocar la devastación ambiental de ciertas áreas, acelerar de deforestación, diezmar poblaciones esclavizadas o forzar el desplazamiento de poblaciones asentadas en las áreas destinadas a este cultivo, fue necesario forzar por la colonización de nuevos territorios para mantener los crecientes niveles de producción que demandaba el comercio del azúcar.

*of-places*”- (Ibid.: 412). Este doble proceso respondería no solamente a la creciente demanda por mayores flujos de materiales y energía, sino que sería al mismo tiempo una suerte de válvula de escape del capitalismo para enfrentar la degradación ambiental en ciertos espacios y la consiguiente necesidad de colonizar nuevas áreas geográficas que serían aprovechadas para extraer petróleo, minerales o biomasa. Desde esta perspectiva, el concepto de fronteras de *commodities* da paso a comprender cómo la producción orientada al mercado da forma y está moldeada por la expansión de la ley del valor, a entender cómo la economía mundial interactúa con los ecosistemas locales para determinar el ritmo de la expansión capitalista, a profundizar sobre el alcance de la división internacional del trabajo y a explorar la articulación que se establece entre la producción en un lugar y la expansión general del espacio capitalista (Ibid.).

La utilización intencional del concepto de *commodity frontiers* y no del de frente pionero, inspirado en los planteamientos desarrollados por Frederick Jackson Turner y volcados en *The Significance of the Frontier in American History* (1893), obedece a algunas razones. La tesis de Turner sostenía que la frontera geográfica representó el factor más importante en la configuración de la identidad de los Estados Unidos y en esa medida, la frontera turneriana actuó como un mito fundacional en la medida en que exaltaba el desarrollo de la iniciativa personal. De hecho, con ligeras modificaciones esta tesis se habría mantenido vigente hasta mediados de los años 70 del siglo pasado cuando historiadores pertenecientes al movimiento *New Western History* develaron que la toma del oeste no fue tan idílica y que junto a la consecución del progreso había un “lado oscuro”. El hecho de que el concepto de frente pionero haya sido utilizado para entender una realidad particular no es la única limitación. Este concepto asume la colonización de tierras hasta entonces vacías o poco pobladas, intentando reflejar el encuentro entre lo civilizado y lo salvaje (Gauchon y Huissoud, comp., 2013), al tiempo que comprende al capitalismo tanto como un proceso natural y a menudo como sinónimo de progreso. La expansión del capital no es un proceso natural, tiene una historicidad propia y por lo general supone la desestructuración y desmantelamiento de las estructuras sociales preexistentes, negando por tanto la anterioridad de la ocupación por otros pueblos, una aseveración que prolonga la colonialidad con la que se aprecia la existencia de relaciones sociales no capitalistas. La expansión del capital y las implicaciones que esto conlleva, estrechamente conectada a las demandas del mercado global, a las profundas transformaciones en las condiciones de la tierra y el trabajo y a la acumulación por

desposesión, está contenida en el concepto proveniente de la ecología política de fronteras de *commodities*, perspectiva dentro de la cual se sitúa esta tesis.<sup>36</sup>

### **1.5.3. Conflictos socio-ambientales, justicia ambiental y territorios racializados**

El crecimiento no está exento de problemas ni beneficia a todos por igual. Hay quienes ganan con la instalación de nuevas industrias, plantaciones de monocultivos, extracción de petróleo o minerales, y quienes soportan los impactos negativos de tales actividades económicas en términos de privación de medios de vida, destrucción de ecosistemas y paisajes agrícolas construidos por comunidades campesinas, contaminación de ríos y pérdida –muchas veces irreversible- de especies de animales y plantas.

Normalmente sucede que la puesta en marcha de una actividad económica particular no cumple con lo que en lenguaje económico se denomina el “óptimo de Pareto”, principio según el cual, al introducir un cambio, en este caso, al iniciar la ejecución de alguna actividad económica, la expectativa es mejorar la situación de un sector social, sin afectar al mismo tiempo la realidad de otros sectores. En un sentido amplio, una mejora de Pareto debería implicar que las “pérdidas” se compensen y así conseguir ganancias netas de la actividad. En la realidad, sin embargo, muy a menudo se registra que tales pérdidas no siempre pueden compensarse y es posible que muchas de ellas no puedan cubrirse ni aún destinando fuertes inversiones. Es frecuente encontrar que la inconformidad de las poblaciones que se sienten afectadas por determinada actividad económica resulte incompatible con los intereses de los sectores que la promueven. Hay poblaciones que soportan impactos mucho más severos por su cercanía a las zonas de extracción de recursos naturales, por la sobrecarga de contaminación que reciben o por la pérdida de valores materiales o simbólicos que garantizan su subsistencia y su identidad

---

<sup>36</sup> A partir de la tradición turneriana, el concepto de frente pionero ha sido utilizado en América Latina para sustentar la construcción de las fronteras en Brasil, Argentina, Paraguay (Ratto, 2001). Una versión menos radical de este concepto que no niega la anterioridad de la ocupación de otros pueblos y sostiene el avance de formas capitalistas sobre otras formas de organización del territorio preexistentes (Barros y Zusman, 2000). puede encontrarse, por ejemplo, en el estudio de Joe Foweraker, *The struggle for land. A political economy of the pionero frontier in Brazil from 1930 to the present day*, publicado en 1981 que analiza el avance de las relaciones capitalistas y la pronta transformación del espacio. En el caso del Perú una suerte de variante del frente pionero ha sido utilizado por Federica Barclay et al. en *Amazonía 1940-1990: el extravío de una ilusión* (1991). En el Ecuador uno de los pocos estudios que alude al uso del “frente pionero” es *Transformaciones agrarias en el frente de colonización de la Amazonía Ecuatoriana* de Nicolás Eberhart, publicado en 1998. El autor, lamentablemente, no argumenta el uso de esta noción. María del Pilar Gamarra toma los conceptos de frente extractivo y productivo desarrollados en el Brasil (Velho, 1972, Sawyer, 1992) para explicar la evolución histórica del territorio amazónico del Ecuador en “*La frontera nómada: frentes y fronteras económicas en el proceso cauchero ecuatoriano (1870-1920)*” publicado en 1996 por la Revista Ecuatoriana de Historia.

como pueblo. Surgen así conflictos de tipología distinta en los que se expresan posiciones, opiniones e intereses diversos y aún contradictorios, según la óptica y perspectiva de cada sector social, según sea su ubicación en el manejo de la actividad económica o en la recepción de sus impactos. Estos son los llamados conflictos ecológico-distributivos, así denominados por Martínez-Alier, o los conflictos socio-ambientales de los que habla la sociología ambiental.<sup>37</sup> Por distribución ecológica se entiende “los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de vida” (Martínez-Alier, 2004: 24). Desde esta perspectiva, los conflictos ecológicos distributivos no solo están relacionados con el metabolismo social de las economías (Fischer-Kowalski y Haberl, 2000), sino que aludirían a la desigual distribución de los bienes y servicios de la naturaleza y a los impactos sociales diferenciados generados por una actividad económica particular, en función del poder político que detentan los sectores sociales involucrados en el conflicto o el control que ejerzan sobre la naturaleza.

Con el propósito de rebasar la mirada sobre los daños ambientales o las afectaciones económicas comúnmente asociada a los conflictos socio-ambientales o, en lenguaje de la economía ecológica, a los conflictos de distribución ecológica, Arturo Escobar sugiere ampliar el alcance de la noción desarrollada por Martínez-Alier e introducir la dimensión cultural para dar cuenta que si toda cultura crea e inventa una idea de lo que es naturaleza, es por tanto imprescindible asociar las dimensiones físico-materiales con las dimensiones simbólicas. En esta dirección Escobar propone el uso de la categoría de conflicto cultural distributivo para evidenciar que la conflictividad no responde únicamente a la distribución de los beneficios y costos de una actividad económica que aprovecha los bienes naturales, sino a la existencia de distintas visiones del mundo.

“¿Cómo definimos los *conflictos culturales distributivos*? Se trata de aquellos conflictos que surgen de las diferencias efectivas de poder asociadas con valores y prácticas culturales específicas. No surgen de la diferencia cultural de por sí, sino de la diferencia en relación con la definición de las normas y estructuras sociales. Este concepto es una forma de señalar, de introducir más directamente la relación entre cultura y poder. Si bien es cierto que el poder habita significados, los significados también son fuente de poder. Lo que está en juego

---

<sup>37</sup> Según Hammer-Dixon (1999) y Robbins (2010), los conflictos pueden clasificarse por la degradación de los recursos; por acceso, uso y usufructo de agua; por acumulación por desposesión o por el uso de la tierra. Martínez-Alier (2008), por su parte, propone una tipología de los conflictos en función del lugar que ocupan en las cadenas productivas: en los lugares de extracción de materia o energía, en las áreas afectadas por el transporte y en las zonas definidas para la disposición de los residuos.



con esta noción son precisamente problemas de redistribución de cultura” (Escobar, 2005: 102, cursivas del autor).

Al proponer el concepto, Escobar reconoce que se trata de una “definición positiva y constructiva”, que no es una “visión asistencialista, caritativa, ni desarrollista”, sino una noción que “trata de comprometerse con una propuesta más radical de la interculturalidad” (Ibid.: 102-103).

Si bien es clave situar la importancia de la cultura en los conflictos actuales, abordar esta problemática solo desde la distribución y por tanto, del diferente peso cultural de los discursos y prácticas hace, como lo sostiene Alimonda, perder la perspectiva de lo político. El argumento de Alimonda señala que la ecología política de Escobar “se ocupa solamente de una de las dimensiones de la distribución” y “que la ecología política queda limitada al análisis de estrategias económicas, y la especificidad del campo político se diluye en el vacío” (Alimonda, 2011: 43).

Para Héctor Alimonda, ni la dimensión de distribución ecológica de Martínez-Alier, ni la dimensión de distribución cultural de Escobar, permiten entender que detrás de los conflictos está presente la producción y reproducción una matriz de colonialidad que subvalora formas de existencia que no son las de la sociedad dominante e inferioriza su realidad. Para él, los conflictos existentes a lo largo de América Latina y de los nuevas “fronteras de extracción” advierten la imposición de una cultura sobre otras, del menosprecio de formas de vida juzgadas como arcaicas y primitivas, del dominio incontrastable de una narrativa afianzada en las nociones de progreso, crecimiento, desarrollo tecnológico y otras tantas “verdades” asimiladas al reino del capital y al predominio de una matriz de colonialidad en la que participan activamente los Estados, sus instituciones y agentes privados de diverso origen. Detrás de los actuales conflictos, dice Alimonda, “subyacen historias demasiado largas de colonialidad, que supusieron genocidio físico y cultural, mecanismos de expropiación y exclusión de los recursos naturales, así como la destrucción o subalternización racista de identidades” (Alimonda, 2011: 45).

La inclusión de la dimensión racial en el análisis de la conflictividad socio-ambiental que atraviesa la región y su examen a partir del patrón de colonialidad que caracteriza el funcionamiento de estas sociedades, ha sido una tendencia poco explorada. La utilización de la noción de racismo ambiental, la misma que ilustra cómo los intereses vinculados al crecimiento económico arrasan sobre el bienestar de sectores sociales pobres, inferiorizados por su pertenencia étnica o su color, se atribuye originalmente a las

expresiones sociales reivindicativas protagonizadas por poblaciones afroamericanas durante el decenio de 1980 en Estados Unidos afectadas por la instalación, en lugares cercanos a sus viviendas, de vertederos de basura, depósitos de materiales tóxicos, incineradores, fundidoras de plomo o plantas petroquímicas. Las poblaciones pobres y minorías étnicas perjudicadas por estas medidas protagonizaron numerosos conflictos apelando a los derechos civiles, sin vinculación directa con los postulados del movimiento ecologista (Cerdeña, 2011), alimentándose más bien de la trayectoria de lucha liderada por Martin Luther King en los años sesenta (Wagner, 2014). Sería unos años después –a partir de 1999- cuando el racismo ambiental evolucionaría hasta constituir el movimiento de justicia ambiental e incluir todo tipo de relaciones desiguales producidas por actividades económicas contaminantes que inciden negativamente y de manera desmedida sobre minorías sociales y comunidades carentes de poder.

El concepto no alude únicamente a los impactos ambientales, sino que reconoce la persistencia de prácticas racistas y de discriminación que afectan deliberadamente o de forma involuntaria a la población negra, india y a minorías culturales, que asumen los costos o pasivos ambientales de la ejecución de políticas públicas y prácticas empresariales que simultáneamente proporcionan beneficios a los sectores sociales dominantes (mestizos y blancos). En palabras de Robert Bullard, considerado como uno de los fundadores del movimiento de justicia ambiental, “el racismo ambiental se refiere a toda política, práctica o regulación que diferencialmente afecte o desfavorezca (sea de manera intencional o no) a individuos, grupos o comunidades por su raza o color” (Bullard, 1993: 23). A partir de una mirada funcionalista, el antropólogo Conrad Phillip Kottak, por su parte, define al racismo ambiental como una “forma de discriminación institucional y estructural en la que los programas, políticas e instituciones niegan la igualdad de derechos y oportunidades, o bien dañan de forma diferencial a miembros de un determinado grupo” (1999, citado por Rodríguez Mir, 2012: 51). Desde una u otra perspectiva, la fuerza de este movimiento radica, fundamentalmente, en la lucha por el derecho a un ambiente seguro y sano para respetar y realizar las identidades individuales y colectivas (Svampa, 2011).

Quizá los límites del movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos radican en su falta de interpelación a un sistema económico, buscando que los derechos de las poblaciones afectadas por actividades económicas se igualen a los de la población “blanca” (Pacheco, 2012), o que los riesgos se distribuyan equitativamente, en lugar de prevenir que estos ocurran (Heiman, 1996; Dobson, 1998). Estas dos reivindicaciones,

aunque necesarias, no son suficientes. La noción de racismo ambiental re-leída desde el enfoque de la colonialidad, permite develar que no sólo están en juego desigualdades y asimetrías por el color de la piel, sino que las injusticias sociales y ambientales tienen un mismo origen: el capitalismo moderno colonial (Grosfoguel, 2014, Quijano, 2014a, 2014c).

El uso del concepto de racismo ambiental ha sido mirado con distancia y recelo por parte de la tradición crítica de la economía política en América Latina, sobre todo de pensadores cercanos al marxismo. Los dependentistas, por ejemplo, no solo que olvidaron al ambiente, sino que no consideraron que la raza, el género, la sexualidad, la espiritualidad y la epistemología son parte constitutiva del patrón mundial que ellos ubicaron como “centro-periferia” (Grosfoguel, 2014).

Si bien la sobredeterminación económica con la que se ha leído la realidad latinoamericana colocó en un lugar secundario a elementos que se ubicarían en la “superestructura”, es también cierto que el traslado mecánico de un concepto como racismo ambiental podría dejar de lado el modelo de acumulación que está en la base de las injusticias que soportan sectores sociales carentes de poder. De ahí que para su utilización en el caso latinoamericano, el concepto de racismo ambiental reclame del marco histórico y del soporte conceptual capaz de explicar su génesis y sus manifestaciones concretas. Martínez-Alier sugiere que apelar al racismo ambiental en otras realidades distintas a la estadounidense, en donde surgió el término, requiere ampliar la escala de los problemas ambientales generados por el capitalismo, trascendiendo los episodios locales de daño ambiental y social, a fin de considerar que tales problemas generalmente afectan no solo a minorías culturales sino a las grandes mayorías conformadas, como en el caso de América Latina, de pueblos indios, afrodescendientes, campesinos pobres y sectores urbanos empobrecidos que reciben el peso de la discriminación y de prácticas racistas.

“El movimiento de justicia ambiental es potencialmente de gran importancia, siempre y cuando hable a nombre no solo de las minorías dentro de Estados Unidos, sino de las mayorías fuera de ese país (que no siempre se definen en términos raciales) y que se involucre, más allá de los problemas locales de contaminación, en aspectos como la biopiratería, bioseguridad y el cambio climático” (Martínez-Alier, 2002: 14).

En otras palabras, Martínez-Alier no solo propone que la justicia ambiental permita entender que los sectores sociales generalmente más afectados por problemas ambientales y conflictos distributivos sean los pueblos indios y afrodescendientes, los

campesinos y los pobladores mestizos urbanos y rurales que viven en la pobreza, sino que su uso no puede ser trasladado acríticamente, pues demanda de un profundo entendimiento del contexto histórico, social y político bajo el que las alteridades y diferencias sociales y étnicas se generaron y dotaron de significado.

El racismo, como lo sostiene el sociólogo peruano Aníbal Quijano (2014b [1992], 2014c [2000]), tiene en 1492 su momento fundacional. Antes de esta fecha, no habría existido ningún sistema social que marcara las clasificaciones a través de la raza. Si bien en épocas anteriores estaban presentes otras formas de discriminación y sojuzgamiento, Quijano afirma que es solo desde finales del siglo XV e inicios del XVI cuando la monarquía católica habría comenzado a usar el concepto de pureza de sangre, al mismo tiempo que difundiría la visión dualista, presente aún en la actualidad, para diferenciar seres humanos de naturaleza.

Hay muchas maneras de construir el racismo. La primera separación racial se estableció a partir de la religión, lo que dio lugar al debate sobre si los indios, los originarios pobladores de América Latina, tenían o no alma. Este debate, uno de los más controversiales, estuvo presente hasta 1552.

“Con la conformación de América se establece una categoría mental nueva, la idea de ‘raza’. Desde el inicio de la conquista, los vencedores inician una discusión históricamente fundamental (...), sobre si los aborígenes de América tienen ‘alma’ o no; en definitiva si tienen o no naturaleza humana. La pronta conclusión decretada desde el Papado fue que son humanos. Pero desde entonces, en las relaciones intersubjetivas y en las prácticas sociales del poder, quedó formada, de una parte, la idea de que los no-europeos tienen una estructura biológica no solamente diferente de la de los europeos; sino, sobretodo, perteneciente a un tipo de un nivel ‘inferior’. De otra parte, la idea de que las diferencias culturales están asociadas a tales desigualdades biológicas y que no son, por lo tanto, producto de la historia (...). Estas ideas han configurado profunda y duraderamente todo un complejo cultural, una matriz de ideas, de imágenes, de valores, de actitudes, de prácticas sociales (...) que no cesa de estar implicado, inclusive cuando las relaciones políticas coloniales ya han sido canceladas. Ese complejo es lo que conocemos como ‘racismo’” (Quijano, 2014b [1992]: 759, las comillas son del autor).

En la medida en que la noción de raza fue incorporada en función del control de la fuerza de trabajo y de las personas y sus recursos, resultaba necesario, para los conquistadores y para los sectores dominantes locales “naturalizar” las diferencias en el color de la piel, en las formas de producción y organización, en el pensamiento y en los más profundos rasgos de la subjetividad, omitiendo siempre que las diferencias obedecen a una historia de poder. El poder colonial no solo que desposeyó a los pueblos de sus identidades históricas (ya no eran mayas, incas, chibchas o cofanes, sino indios, de la

misma manera que los esclavos traídos del África eran todos negros), sino que les negó un lugar en la historia como sociedades capaces de producir conocimientos y cultura. Fueron desde entonces, el pasado, “razas inferiores, capaces solo de producir culturas inferiores” (Quijano, 2014c [2000]: 801).

La construcción ideológica del racismo facilitó la conquista y sirvió también para justificar la apropiación de la tierra y la explotación de la mano de obra durante la colonia. Su uso sin embargo no se agotó en ese proceso histórico. El racismo fue reapropiado y reproducido por los sectores dominantes al interior de los Estados latinoamericanos para mantener la existencia de “un sistema clasificatorio que favorezca la marginación de determinados conocimientos, lenguas y personas” (Mignolo, 2007: 41). Aunque en el léxico político de América Latina y de Ecuador en particular el concepto de raza fue desplazado por categorías como etnicidad, diversidad cultural y mestizaje, éstas siguen siendo el sustento para valorizar las diferencias en términos de inferioridad/superioridad. Como bien lo afirma Achille Mbembe (2016), el racismo es un concepto relacional que a lo largo del tiempo modifica creencias y representaciones pero que finalmente se asienta en el empleo de diferencias biológicas, étnicas, culturales, sociales, educativas, religiosas, para construir alteridades estigmatizadas. La noción de raza alude no solo a discursos y fantasías (dimensión discursiva), sino también a formas de explotación y dominio naturalizadas (dimensión material) que permanentemente se renuevan como materia prima de las que se extrae excedente. Así, la construcción constante del racismo requiere de variados dispositivos donde la categoría de “raza” se esconde -sin desaparecer-, dando paso a un sofisticado andamiaje teórico sustentado en el desarrollo, el progreso o el pago de una “deuda social”, para imponer un relato y una historicidad que persigue la homogeneización de las sociedades y oculta de ese modo la discriminación racial o el hecho de que la institucionalidad existente prolonga y consolida patrones de la colonialidad donde la “dominación es el requisito de la explotación, y la raza es el más eficaz instrumento de dominación” (Quijano, 2014c [2000]: 826).

Siguiendo a Parra-Romero (2016), al complementar la lectura de la conflictividad con el prisma de la colonialidad e incorporar al racismo como dispositivo de dominación, sería posible situar y entender las condiciones particulares que presenta cada conflicto, recorrer sus conexiones con otros lugares y con un patrón global de dominación, y poner en duda la supuesta imparcialidad de las políticas respecto a la pertenencia étnica de las personas, el color de su piel o su escaso poder. Al mirar bajo el prisma del racismo ambiental, las políticas de expansión de las fronteras extractivas no pueden entenderse

únicamente como una trayectoria inevitable del desarrollo, sino como parte de procesos políticos, sociales y culturales asociados a una matriz de colonialidad que provoca resultados desiguales. En efecto, parecería ser que son precisamente estas coordenadas de racismo y discriminación, de jerarquías en el conocimiento y en las formas de ser y pensar las que atraviesan gran parte de la conflictividad presente en el subcontinente y que explican discursos y políticas que tornan inferiores a los pueblos y comunidades que se resisten a que sus territorios sean intervenidos con actividades definidas al margen de su opinión, que consideran a pueblos y comunidades que viven bajo otras formas de organización social como seres ubicados en un estadio de desarrollo menor al del resto de la sociedad o como portadores de una visión arcaica, reñida con el progreso y con lo que supuestamente es beneficioso para la colectividad.

En gran parte de los estudios e investigaciones llevadas a cabo en áreas hoy resignificadas, donde no es casual que vivan poblaciones indígenas o afrodescendientes, la dimensión racial parecería no haber sido tomada en cuenta o no haber sido suficientemente valorada, minimizando el hecho de que el racismo es uno de los lenguajes con los que se representan los conflictos dado el patrón de poder vigente en las sociedades latinoamericanas y su carga de colonialidad, con implicaciones sobre la democracia. El hecho de que en las luchas y conflictos protagonizados por las poblaciones cuyo territorio está siendo ocupado, la variable de discriminación racial no esté presente, posiblemente obedece al sistemático ocultamiento de este fenómeno por parte de un discurso que dice proteger a toda la población en igualdad de condiciones y a la “ciudadanización” de las diferencias.

Uno de los autores que desde la ecología política busca relacionar las dimensiones políticas con las ecológicas y económicas presentes en los conflictos socio ambientales es Horacio Machado-Aráoz para quien “las tasas diferenciales de *apropiación de la ‘naturaleza’ y la distribución desigual de riesgos ambientales* y de degradación sanitaria involucrados en la geografía política del capital, suponen nuevas modalidades de *estratificación jerárquica de la población mundial, en función de sus condiciones étnicas*” (2010: 1908, las cursivas son del autor). Mientras a nivel global la jerarquización de territorios y la racialización de poblaciones se expresaría en decisiones que van desde la selección de sitios para depositar productos tóxicos o chatarra electrónica, el establecimiento de canales de distribución para productos químicos, medicinales o agropecuarios que tienen consecuencias nocivas sobre la salud y el ambiente, hasta la exportación de tecnologías riesgosas y la utilización de procedimientos obsoletos por

parte de empresas transnacionales en los países del Sur, la apropiación de la naturaleza y la distribución desigual de los riesgos se materializaría en la ocupación de territorios con fines productivos o extractivos en regiones periféricas y espacios coloniales en función de atender pautas de consumo de los países ricos.

En términos de movimientos sociales que reivindiquen la justicia ambiental, Brasil es posiblemente uno de los casos más representativos con la Red Brasileña de Justicia Ambiental como uno de los actores más visibles. La justicia ambiental ha sido introducida por esta red en las acciones sociales opuestas a las minas, pozos petroleros, represas, deforestación y plantaciones forestales, y los conflictos alrededor del uso del agua (Wagner, 2014). En su declaración de principios, el concepto de injusticia ambiental fue definido como “el mecanismo por el cual en sociedades desiguales desde el punto de vista económico y social, concentran la mayor parte de los daños ambientales producidos por el desarrollo sobre las poblaciones de baja renta, los grupos sociales discriminados, los pueblos étnicos tradicionales, los barrios obreros, las poblaciones marginadas y vulnerables” (Firpo, 2009: 80).

Rodríguez Mir utiliza la noción de racismo ambiental en Argentina al estudiar la deforestación y desmonte de territorios ancestrales en el Chaco. Partiendo de la premisa de que el racismo ambiental no puede separarse de los estilos de crecimiento propios del capitalismo y de la consecuente relocalización de actividades extractivas en América Latina y otras áreas conformadas por países pobres, este autor sugiere que al hablar de racismo ambiental se tomen en cuenta tres ámbitos: (a) la utilización de territorios habitados por “comunidades minoritarias” en los que se generarán efectos ambientales perversos; (b) la existencia de una práctica discriminatoria y racista extendida por las sociedades y; (c) la necesidad de desarrollar recursos legislativos y judiciales para poner fin a proyectos que generan tales disparidades (Rodríguez Mir, 2012: 52).

En el caso ecuatoriano, en los años recientes, investigadores como Iván Roa Ovalle o Helga Serrano han recurrido al uso de la noción de racismo ambiental para describir la conflictividad en Esmeraldas y en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Mientras Roa Ovalle (2012) explora el vínculo entre racialización y violencia al norte de Esmeraldas y en Tumaco, al sur de Colombia, a raíz de la instalación de cultivos de palma aceitera, Serrano (2013: 29-35) aborda las expresiones de racismo ambiental en el conflicto Chevron-Texaco a partir del uso de tecnología obsoleta que habría permitido a “Texaco un ahorro de más de 4.000 mil millones de dólares o tres dólares por cada barril de petróleo extraído” (Fontaine coord., 2004: 37), la afectación colectiva a la salud y a

los cuerpos y la “deshumanización” de pueblos indios y campesinos por la fragmentación y envenenamiento de sus territorios, lo que significó cercenar territorios ancestrales, la reubicación forzosa de los pueblos Cofán, Kichwa y Siekopai y la extinción de los Tetetes y Sansahuaris, que no pudieron soportar los abruptos cambios que afectaron su vida y su territorio (Trujillo,1981: 9).

En ambos conflictos, palma aceitera y Chevron-Texaco, y como una dimensión adicional que expresa el racismo ambiental, no puede pasar desapercibido que la actuación de las empresas haya contado con la anuencia de importantes sectores de poder al interior de la sociedad ecuatoriana y con el respaldo de distintos gobiernos. En lugar de velar por los intereses colectivos, precautelar el respeto a derechos constitucionales o exigir una actuación responsable por parte de las empresas, los sucesivos gobiernos se encargaron de difundir las supuestas bondades de tales actividades económicas para alcanzar el desarrollo local y contribuir al crecimiento del conjunto del país o, como se explicará más adelante, al analizar la conflictividad en torno a la palma aceitera, otorgar -en determinadas coyunturas- un apoyo explícito para su funcionamiento.

La introducción de la dimensión racial en el ámbito de las fronteras tiene algunas implicaciones. El paso de un imaginario geográfico de subordinación a otro que en la actualidad coloca a las fronteras como áreas de interés estratégico bajo el argumento de privilegiar la integración comercial y económica de la región, conduce a pensar en una rearticulación de la colonialidad y una profundización del racismo ambiental por la disputa de territorios y bienes comunes que puede amenazar con la sobrevivencia cultural y la continuidad histórica de los pueblos asentados en las regiones fronterizas.

En efecto, no puede pasar desapercibido que como resultado de los procesos de conformación de las fronteras estatales en América Latina, las regiones fronterizas son emporios de diversidad biológica y en muchos casos áreas que concentran la mayor presencia de pueblos indios y otras minorías culturales en comparación con otras regiones dentro de los territorios nacionales. La frontera norte ecuatoriana, por ejemplo, cobija al 10,15% de población india, montubia y afrodescendiente del país, distribuida en nueve pueblos y nacionalidades y población negra, además de poblaciones mestizas empobrecidas.

La presencia de estos pueblos en las zonas fronterizas ha significado la creación de un paisaje socio-territorial único pues al tiempo que las poblaciones ancestrales han contribuido al mantenimiento de una biodiversidad abundante y de extensas formaciones boscosas representativas, los bienes naturales existentes han posibilitado el sostenimiento



de sus formas de vida dentro de esos territorios, evidenciando el proceso de co-evolución entre poblaciones y naturaleza. Las áreas ricas en biodiversidad “no son producto de la generosidad de la naturaleza, más bien son producto, resultado de las filosofías de negros y de indios, que prefirieron vivir con lo mínimo pero mantener la vida que florece en estos territorios” (García y Walsh, 2010: 353). Pero no solo eso, como lo afirma Díaz Polanco (1997), no es casual que las áreas más ricas en germoplasma estén pobladas por comunidades indias, lo que da cuenta de la disponibilidad de una estructura socio-organizativa y cultural notablemente eficaz.

En el paso de áreas subordinadas a zonas estratégicas, este paisaje socio-territorial único sufrirá profundas transformaciones. En nombre del progreso, del desarrollo, de la integración regional y de la promoción de un modelo de crecimiento económico, se está abriendo paso a la apropiación de tierras, la explotación de mano de obra, la pérdida de fuentes de sustento en manos de personas ajenas a las comunidades, la desestructuración de comunidades y de sus formas de organización y producción, el desplazamiento de pueblos indios, comunidades negras y poblaciones campesinas pobres y su violenta inserción en entornos desconocidos. Si a tales impactos se suma el nulo eco de sus reivindicaciones y con frecuencia el desdén con el que las “políticas de desarrollo” responden a los problemas ocasionados; la indiferencia o pasividad con la que la institucionalidad reacciona para reparar, restituir derechos o atender las demandas de las poblaciones afectadas; la ausencia de la opinión de quienes viven en las fronteras en asuntos que les competen; el rechazo y menosprecio a formas de vida distintas que se aprecian como inferiores y primitivas; la indiferencia frente a los riesgos de erosión cultural y de pérdida de sus identidades culturales, es posible pensar en una rearticulación de la colonialidad que se ejerce con una profunda violencia epistémica y una carga de racismo orientada a la disputa de territorios y bienes comunes.

Este conjunto de problemáticas hace referencia, al mismo tiempo, a la histórica subordinación de los territorios fronterizos y a una narrativa de control que se consolidó desde el siglo XVI y que la colonialidad materializa a través de prácticas cotidianas de desprecio, de subordinación social y étnica. Tal como lo han puesto de manifiesto los estudios decoloniales en América Latina, la negación cultural, la explotación económica e inferiorización y la opresión política del “otro” se escudan en la superioridad de la sociedad hegemónica (Quijano, 2000; Escobar, 2005; Grosfoguel, 2007).

## **Capítulo 2. Fronteras extractivas y fronteras de seguridad**

---

Las fronteras son espacios heterogéneos que en algunos casos y por diversas razones, han sido territorios que han mantenido cierto nivel de autonomía en relación a su contenedor, el Estado-nación. En la actualidad, esta realidad está modificándose y a la luz de una cada vez mayor ampliación de las fronteras de extracción, están tomando lugar dinámicas que amenazan nuevamente con reproducir la historia colonial que negó y tornó invisibles las vidas y trayectorias de quienes habitaban estas áreas. La amplificación del Estado-nación en las fronteras a partir de una cada vez mayor securitización de los espacios fronterizos y la redefinición de los territorios como consecuencia de estrategias de integración económica y de especializaciones productivas de regiones hasta hace poco tiempo olvidadas son dos procesos que generarán hondas transformaciones sobre realidades socio-territoriales particulares. Aunque el debate no es nuevo,<sup>38</sup> los contenidos de este capítulo representan un esfuerzo para situar estas dos dinámicas que toman lugar en las fronteras en el marco de América Latina y de territorios fronterizos en los que no sólo están presentes variables relativas a la riqueza natural, sino fronteras étnicas, sociales y raciales.

## **2.1. La resignificación de las fronteras o el paso de territorios subalternos a áreas de interés estratégico**

Consideradas como regiones, las fronteras en América Latina reflejan realidades geográficas muy heterogéneas. A lo largo de las regiones fronterizas que se extienden entre dos o más países, es posible encontrar centros urbanos dinámicos y consolidados – como lo que sucede en la zona fronteriza andina entre Colombia y Ecuador o en la frontera sobre el río Paraguay que en el lado argentino contiene centros urbanos de importancia como Resistencia, Formosa y Clorinda, y a Asunción y el departamento Central en el lado paraguayo (Fantin 2010)–, así como áreas que ocupan un lugar secundario dentro de las políticas públicas en términos de cobertura de servicios básicos y presencia institucional, afectadas la mayor de las veces por el centralismo presente en América Latina (Cardozo, 2002). En estos últimos segmentos de las regiones fronterizas, generalmente ocupados

---

<sup>38</sup> Ver entre los estudios más relevantes al respecto el libro escrito por la teórica política Wendy Brown en 2015, *Estados amurallados, soberanía en declive*; los textos de Saskia Sassen, *¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización* (2001) y *Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages* (2006) y el estudio de Sandro Mezzadra y Brett Neilson, *Border as Method, or the Multiplication of Labor*. Para el caso latinoamericano, esta discusión tiene entre sus exponentes más relevantes a pensadores de la ecología política como Héctor Alimonda (2011), Horacio Machado-Aráoz (2010, 2015) y las obras de la arquitecta, geógrafa y antropóloga Margarita Serje, especialmente, *El revés de la Nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie* (2011).

por pueblos indios y poblaciones carentes de poder, la relativa baja densidad demográfica, la dispersión de los asentamientos o la complejidad de sus características físicas determinan que la presencia del Estado haya sido esporádica, parcial y siempre insuficiente (Alimonda, 2011; Ramirez, 2007; Álvarez, Giacalone y Sandoval, 2013), convirtiéndolas en áreas marginales, relegadas y subalternizadas<sup>39</sup> dentro de los Estados. De ahí que no sea sorprendente que en estos segmentos de las fronteras no solo persistan una serie de problemas no resueltos (precaria condición de vida de las poblaciones ahí asentadas, mala calidad o inexistencia de servicios públicos, debilidad institucional), sino que aparezcan nuevas y complejas dificultades vinculadas con la trata y tráfico de personas, la fabricación y el comercio de drogas, el negocio de armas y municiones, la depredación de bosques y la minería ilegal, por citar algunos de los problemas más relevantes,<sup>40</sup> explicando que la intervención del Estado se haya concretado, por lo general, en los ámbitos de la seguridad y en el cumplimiento de procedimientos administrativos y aduaneros a cargo de instituciones precariamente instaladas (Arriaga-Rodríguez, 2013). Son las áreas donde por determinadas situaciones no se ejerce con igual contundencia las orientaciones políticas, sociales y económicas como sucede en el resto del territorio. ¿Cómo explicar esta subalternidad?

Héctor Alimonda (2011) señala que la escasa cohesión territorial, política e identitaria de los Estados latinoamericanos explica que las fronteras y otras áreas de difícil acceso sea por su morfología o su clima; los parajes concentradores de alta biodiversidad como la cuenca amazónica; y los espacios habitados por pueblos indios, afrodescendientes o minorías culturales ocupen un lugar subordinado junto con otras hegemonías territoriales que se atribuyen la representación de un interés nacional único,

---

<sup>39</sup> La utilización de territorios subalternos o de subalternidad territorial se apega a la definición de Héctor Alimonda (2011). Bajo esta denominación se alude al hecho de que la mirada colonial sobre ciertos territorios, que no se superó con la independencia. Tal mirada colonial implica no solo colocar en un plano inferior a las poblaciones que habitan dichos territorios, sino considerarlos como “tierras baldías” cuyos recursos deben ser utilizados para el crecimiento y desarrollo del país. El argumento desarrollado por Alimonda guarda sintonía con el concepto de “*commodity frontiers*” propuesto por Jason Moore (2003) para dar cuenta de que las crecientes presiones por acceder a recursos naturales expanden las fronteras de extracción a áreas de gran valor ecológico o a territorios que han sido históricamente el lugar de vida de pueblos indios u otras minorías culturales.

<sup>40</sup> Un análisis detallado de estas regiones fronterizas “olvidadas” puede encontrarse por ejemplo en Claudia Korol y Silvia Bignami, *Triple frontera: resistencias populares a la recolonización del continente* (2008) que discute la problemática social, económica y ambiental del cruce fronterizo entre Brasil, Argentina y Paraguay. Estudios referidos a las regiones fronterizas principalmente del Cono Sur ocupadas por pueblos indios pueden también consultarse en los dos volúmenes titulados *Pueblos indígenas, Estados nacionales y fronteras* (2014) elaborados bajo la coordinación de Hugo Trincherro, Luis Campos Muñoz y Sebastián Valverde, así como la vasta investigación académica referida a las fronteras del Brasil entre los que destacan Albuquerque (2010), Da Silva (2012), Cardin (2012), Martins (2009).

una identidad compartida, un sentido del nosotros y una constitucionalidad. La afirmación de Alimonda se corresponde ciertamente con la realidad de ciertas regiones fronterizas, áreas a las que en América Latina las sociedades nacionales históricamente han tratado con abierta indiferencia.

Para Margarita Serje, esta subalternidad sería el resultado de un doble proceso de inversión que por un lado transfiere lo negativo, los miedos, las culpas y vergüenzas de la nación a los territorios “salvajes” y las fronteras, a sus poblaciones y paisajes, y por otro lado, concibe la existencia de estas regiones y sus habitantes como objetos de codicia por los bienes naturales que encierran, es decir, como áreas cuyo único valor radica en las posibilidades que ofrezcan para satisfacer las necesidades del resto de la nación. A partir de este doble proceso de inversión, Serje concluye que

“los territorios no apropiados se ven a la luz, bien de todo aquello que resulta inaceptable, bien de aquello que resulta instrumental. Siempre en función del punto de vista de los requerimientos y aspiraciones de la llamada sociedad mayor, de las ventajas que para ésta puedan representar. El continuo salto de la proyección a la reversión, es decir, la doble inversión, está detrás de la cualidad insólita y excéntrica con la que se concibe la realidad de estos lugares, así como la forma contradictoria en que el Estado y la nación se relacionan con ellos, sin llegar jamás a la menor resolución” (Serje, 2011: 178).

De acuerdo con Germán Palacio (2007), la excentricidad, la falta de autonomía y la asincronía son tres características que explicarían el tratamiento concedido por los Estados latinoamericanos a ciertos territorios subalternizados. La excentricidad se refiere a su abordaje como áreas inexploradas y desconocidas. La falta de autonomía alude a la incorporación, al Estado nación de las zonas fronterizas y otros territorios subalternizados a partir de dispositivos ideológicos u operaciones militares de conquista, para convertir a estos espacios en “dependencias directas de los poderes ejecutivos nacionales, en un régimen que podría denominarse de *colonialismo interno*” (Alimonda, 2011: 35). La asincronía da cuenta que la historia de estas regiones no acompaña la periodización de las sociedades que las contienen, pues su ritmo está vinculado generalmente con una temporalidad distinta o con la prevalencia de formas de organización y producción no enteramente capitalistas.

Además de los argumentos desarrollados por Alimonda, Serje y Palacio, una suerte de explicación acerca de la inferiorización concedida a las áreas fronterizas proviene de la discusión abierta por Sandro Mezzadra, quien propone que es la propia naturalización de las fronteras la que condujo a considerarlas como zonas marginales

dentro de la preocupación de los Estados. Según él señala, “la frontera en su estabilidad como condición previa de conceptos e instituciones políticas modernas [...] ha sido relegada por las elaboraciones teóricas y por la representación cartográfica a los márgenes del sistema de gobierno” (Mezzadra, 2016: 22). Al fracturarse esta estabilidad (naturalidad), como producto de la proliferación y heterogeneización de las fronteras y de los debates sobre la territorialidad, la frontera, argumenta Mezzadra, pasó a “ocupar el centro del espacio político” (Ibid.). ¿Cómo se expresa la nueva centralidad de las fronteras en América Latina?, ¿qué elementos han entrado en juego para que los Estados de la región modificaran la histórica indiferencia hacia las regiones fronterizas?

No resulta una novedad que el olvido sobre las áreas subalternizadas se revierta cada cierto tiempo en función de coyunturas particulares. Los conflictos limítrofes, por ejemplo, se traducen en una mayor presencia militar y en un despliegue de fuerza en las áreas comprometidas lo que al parecer, por el momento, no resulta en un escenario probable para la mayor parte de países latinoamericanos. En otras ocasiones, los Estados se sienten obligados a regresar a ver a las áreas subalternizadas debido a la presión ejercida por las poblaciones que exigen el cumplimiento de derechos postergados. Esta realidad motiva la intervención estatal mediante la construcción o puesta en funcionamiento de algún servicio con el propósito de acallar el descontento que más temprano que tarde resurgirá bajo la forma de nuevas reivindicaciones.

En América Latina, la coyuntura de crecimiento económico que experimentó la región en la primera década del siglo XXI podría justificar el desarrollo de estrategias orientadas a incorporar las áreas subalternizadas a la dinámica nacional.<sup>41</sup> Aunque algunos cambios tuvieron lugar en las regiones fronterizas olvidadas -como sucedió en Ecuador (ver la sección 4.6.3 referida a Plan Ecuador) o en México (Lara, 2018)- un argumento de esta naturaleza descansaría en la aceptación de que el desarrollo es un proceso lineal, que tarda pero llega, minimizando la complejidad que está presente en cualquier decisión política.

Además de los problemas limítrofes, el reclamo de las poblaciones fronterizas, la exigencia de mayor seguridad, es también usual que las áreas subalternizadas como las fronteras cobren un interés particular cuando en tales territorios se identifican posibilidades de explotación de algún recurso natural, cuando las necesidades de acumulación de capital demandan la ampliación de las superficies agrícolas, el aumento

---

<sup>41</sup> En el período 2001-2010 el crecimiento del PIB del conjunto de países de América Latina y el Caribe fue de 3,2%, mayor al crecimiento del PIB mundial (2,8%) (<https://datos.bancomundial.org/>).

de actividades de prospección y explotación minera o energética y la realización de grandes obras de infraestructura cuya operación alimentaría al conjunto de la economía nacional. En estos casos, la maquinaria gubernamental pone en movimiento diversos mecanismos para avanzar sobre territorios aparentemente despoblados o habitados por poblaciones indígenas (Grimson 2005; Alimonda 2011), dejando a un lado el confinamiento al que han estado sometidos.

Es precisamente la ampliación de la frontera extractiva la que parecería ser en la actualidad una de las motivaciones más importantes en la revalorización de las áreas subalternizadas, entre las que se incluye ciertos segmentos de las regiones fronterizas que habían permanecido en los márgenes (Porto-Gonçalves 2006; Gudynas, 2007; Svampa 2013).

Este renovado interés por áreas subalternizadas obedecería al incremento sin precedentes en la extracción de recursos que habría tomado lugar desde la última década del siglo pasado (Walter y Conde, 2017; Machado-Aráoz, 2015; Martínez-Alier, 2016; Saxe-Fernández, 2009), motivando la reorganización espacial que, en el caso de América Latina se traduce en la creación de mega zonas de monocultivos, la instalación de proyectos extractivos de gran escala y la redefinición integral de las funcionalidades sociales y ecológicas de los territorios. Y es que desde la lógica de la acumulación, la región resulta de una singular importancia estratégica. El territorio de la región - 20 millones de kilómetros cuadrados- y un mercado de 600 millones de habitantes (Boron, 2013: 97) no son despreciables para impulsar renovados procesos de acumulación de capital, junto con la disponibilidad de recursos de valor estratégico para la operación de capitalismo a nivel mundial. Al respecto merece la pena recordar ciertos datos: la mayor reserva petrolífera del planeta está en Venezuela según lo ha confirmado la OPEP; América Latina dispone más de un quinto de todos los bosques y el 35% de la potencia hidroeléctrica global: solo el cono sur contiene el 25% de las reservas de agua dulce de la Tierra con 1,19 millones de km<sup>2</sup> en el acuífero del Guaraní, el más grande del mundo (Delgado Ramos, 2001). Perú, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela están entre los diez primeros países mineros del mundo y la región en su conjunto contiene casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata, el 27% de carbón, el 5% de uranio y uno de los mayores depósitos de níquel, cobre, litio y niobio a nivel mundial (Sánchez Alvabera y Lardé, 2006, citado por Machado-Aráoz, 2010a: 313). Al mismo tiempo que el subcontinente posee el 40% de todas las especies animales y vegetales existentes en el planeta, cobija a cinco de los diez países más biodiversos del mundo

(Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú) y alberga, en sus ríos interiores, a una cuarta parte de la riqueza ictícola mundial (Boron, 2013), lo que los convierte en una fuente potencialmente rentable para la industria farmacéutica o de alimentos.

La disponibilidad de esta riqueza ha motivado que Argentina regrese a ver a la Patagonia; Brasil reavive su interés por las zonas más lejanas de su extensa Amazonía con la pavimentación de la ruta BR 163 (Gudynas, 2007); Ecuador despliegue un discurso de desarrollo e inclusión de regiones hasta hace relativamente pocos años atrás ausentes de las principales preocupaciones gubernamentales; Perú y Bolivia presionen sobre áreas hasta hoy escasamente intervenidas. El interés de la mayoría de países latinoamericanos por integrar áreas que no constaban dentro de las prioridades políticas, coincide con la presión sobre territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades campesinas pobres que co-existen junto a una importante riqueza natural. Es el caso de muchas de las regiones fronterizas que comprenden ecosistemas compartidos entre dos o más Estados bajo la forma de reservorios de bienes comunes que no conocen fronteras.

El redescubrimiento de las áreas fronterizas como territorios apetecidos por sus recursos y como espacios privilegiados para atender los requerimientos de la acumulación a escala mundial coincidió en América Latina a inicios del presente siglo con narrativas que, desde los Estados, ponían énfasis en los “patriotismos”.<sup>42</sup>

El enardecimiento del patriotismo y la invocación a lo nacional han sido utilizados como herramientas para la consolidación de los Estados nación en varios períodos históricos. Cabe recordar, que en Ecuador, por ejemplo, hasta la resolución del conflicto limítrofe con el Perú, en los albores del 2000, los textos de educación, sobre todo aquellos de una materia obligatoria conocida como “Historia de Límites”<sup>43</sup> exaltaban el valor del territorio nacional, obligaban a memorizar largas listas de “patriotas ilustres” y datos interminables, difundían “valores patrios”, abundaban en la descripción y contenidos de los tratados y acuerdos que habían lesionado la integridad territorial y subrayaban la victimización de Ecuador por el expansionismo de los países vecinos, principalmente el Perú (Espinosa, 2008). La proliferación de textos y contenidos educativos que reforzaban

---

<sup>42</sup> Tomo la noción de patriotismo en los términos propuestos por Hobsbawm (2012 [1990]: 95 y 99). El patriotismo, muy ligado con el nacionalismo, reflejaría la fidelidad con el Estado que ejerce el poder en nombre de la ciudadanía y se alimenta de los sentimientos y símbolos de la “comunidad imaginada” para concentrarlos sobre sí mismos.

<sup>43</sup> El texto *Breve Historia del Ecuador e historia de límites* define a esta asignatura como “el estudio del proceso histórico de nuestro país a través del cual se aprende y comprende el desarrollo de una conciencia de unidad nacional, nuestro derecho territorial y las injusticias internacionales que han conspirado en contra de nuestros intereses nacionales en materia territorial” (Martínez-Estrada, 2003: 98).



el sentido nacional fundamentado en premisas históricas y jurídicas, y enaltecían una identidad nacional sobre la base de la integridad territorial fueron el telón de fondo del largo y complejo conflicto entre Ecuador y Perú, con la consecuente representación negativa del país limítrofe del sur.

Durante el primer decenio de los años 2000, la “novedad” en torno al uso del patriotismo radicó en que éste fue un recurso al que recurrentemente apelaron varios de los mandatarios de los denominados gobiernos “progresistas”. “Patria altiva y soberana”, “volver a tener patria” (Correa, 2007); la “patria ha vuelto” o la “patria ya es de todos” decía Rafael Correa (Alianza País, 2015) en Ecuador de manera similar al “hemos recuperado la patria” que expresa Evo Morales (2014) en Bolivia. En Argentina Cristina Kirchner (2007) advertía que “mientras haya un pobre en la patria no habrá victoria definitiva” o levantaba como consigna hacia sus críticos “hemos reconstruido la Patria”; Hugo Chávez insistía en que “después de tanta lucha ya tenemos patria” (2012) y apelaba a la integración de América Latina para ser “una sola patria o no somos, la patria es una y grande o no será patria nunca” (2011). Siguiendo a su predecesor, Nicolás Maduro juraba “construir una patria de felicidad” (2013) y presentaba a la Asamblea Nacional de Venezuela el “Plan de la Patria” que orientaría su gestión entre 2013 y 2019.<sup>44</sup>

## **2.2. La renovada importancia de las fronteras y la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)<sup>45</sup>**

### **2.2.1. IIRSA: iniciativa de internacionalización de espacios subalternizados**

La IIRSA fue concebida por el BID con la intención de desarrollar e integrar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones para consolidar la orientación exportadora de las economías latinoamericanas; fue un activo promotor del ALCA (Área de Comercio de las Américas) y ha estado estrechamente vinculado al Plan

---

<sup>44</sup> Es importante llamar la atención que en todos los casos el recurso nacionalista de “Patria” parecería ser sinónimo de nación o equiparse indistintamente con la categoría de lealtad a una particular conducción política e ideológica que promociona directa o tácitamente haber recuperado la constitucionalidad y el territorio de las manos de quienes tenían secuestrada a la “Patria”, lo que al menos en el caso ecuatoriano, significaría dar continuidad a una tradición según la que “el nacionalismo ha tenido para Ecuador, un origen estatal” (Ospina, 1996: 114). Si hasta el siglo XX, el nacionalismo, siguiendo a Pablo Ospina, se fundamentó en la religión católica que ofrecía símbolos y motivos de comunión, en el mestizaje y en la cuestión de límites, en el siglo XXI, el nacionalismo sugiere levantarse en oposición a la injerencia extranjera, al uso soberano de los recursos naturales de los que dispone un país y a la igualdad de todos como ciudadanos, donde el mestizaje seguiría siendo el factor de unidad nacional.

<sup>45</sup> Los contenidos de este capítulo se basan en el texto de la autora *Fronteras y seguridad en el nuevo regionalismo estratégico* (2016), publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en el marco del concurso de ensayos “Ruy Mauro Marini”.

Puebla Panamá y al Plan Colombia (Ceceña, 2013). Su énfasis en los mercados internacionales, antes que en la integración regional o el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, explican que la satisfacción de las necesidades sociales, el fortalecimiento de empresas pequeñas y medianas y de cooperativas, la formulación de políticas que favorezcan a la producción campesina, a las comunidades indígenas y a los productores independientes, no sean consideradas dentro de su alcance.

La IIRSA y el Proyecto Mesoamericano persiguen la construcción de infraestructura física y favorecer cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales con el objeto de incrementar el comercio regional y global. Son, por tanto, como los califica Ana Esther Ceceña,

“proyectos de reorganización territorial (con miras a) una apertura casi total hacia el mercado mundial y una racionalización/ampliación de la producción energética para sustentar el ritmo de crecimiento del continente (...). Se trata de los más ambiciosos proyectos de infraestructura de que América tenga memoria, concebidos como soporte de una creciente exportación de commodities, en gran medida producidos por las grandes transnacionales de la minería, la madera/celulosa y los energéticos, en simultaneidad con la extensión de las plantaciones de soya, palma y caña de azúcar, entre otras, ya sea para alimentar al ganado, para la generación de biocombustibles o para usos industriales. Se induce con estos megaproyectos una nueva geografía, marcada por canales de comunicación y generación de energía, que irán seguidos de empresas principalmente extractivas y que dibujan un nuevo mapa político interno, con nuevas fronteras y nuevas normatividades” (Ceceña, 2013: 51).

Desde el 2000, la importancia concedida por los Presidentes de América del Sur a la integración regional determinó que la región acoja como suya a la Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana. En efecto, en 2009, un año después de constituida la UNASUR, por decisión de los Presidentes suramericanos se dio paso a la creación de una instancia a la que se encargaría de implementar la integración de la infraestructura regional de los países miembros: el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), bajo los objetivos de “aumentar la competitividad de las economías de la región; contribuir a la reducción de las disparidades regionales y la desigualdad social y mejorar la calidad y expectativa de vida en cada país y en la región como un todo” (UNASUR-COSIPLAN, 2013: 19).

Resulta sorprendente constatar que un proyecto de esta envergadura, generado en un contexto de apertura económica indiscriminada, haya sido retomado por el “nuevo” regionalismo sin introducir una reorientación en su concepción, marcando una continuidad con el pasado reciente bajo el pretexto de “aprovechar las ventajas ofrecidas

por la globalización” (Ibid.). La IIRSA antes que promover la integridad territorial, impulsa ordenamientos territoriales funcionales a la demanda externa de *commodities* y mercancías. Siguiendo a Sassen, Emmanuel Brunet-Jailly advierte que acuerdos de esta naturaleza “transforman las relaciones de los estados y de otros niveles del gobierno con las fuerzas del mercado, haciendo más compleja la gobernabilidad y generando, según lo sugiere Sassen, nuevos regímenes legales que ‘*fracturan la soberanía*’ y ‘*desnacionalizan territorios*’, lo que a su vez tiene repercusiones sobre la ‘*justicia redistributiva y la equidad*’” (Brunet-Jailly, 2011: 2, las comillas e itálicas son del autor).

La IIRSA está organizada en ejes de integración y desarrollo que son “franjas multinacionales de territorio” (UNASUR-COSIPLAN, 2014: 11) articuladas mediante redes multimodales. Hacia el 2014 existían nueve ejes de integración y desarrollo. Ecuador forma parte tanto del eje Andino como del Amazónico. Para el funcionamiento de estos ejes, los Estados deben realizar importantes inversiones en transporte y comunicaciones e implementar una visión de negocios -denominada por la IIRSA como “función estratégica de la planificación territorial”- que persigue alentar la presencia de inversión extranjera directa y el desarrollo de normativa convergente entre los países.

La cartera de proyectos del COSIPLAN crece cada año. Entre 2004 y 2014 el número de proyectos aumentó en más del 72%, pasando de 335 proyectos en el año 2004, a 579 proyectos en el 2014. Para esos mismos años la inversión total estimada se incrementó en más de cuatro veces: de 37.424,8 millones de dólares en 2004 a 163.324,5 millones de dólares diez años después (UNASUR-COSIPLAN, 2014: 10).

“Para el año 2017 la Cartera de COSIPLAN registra un total de 562 proyectos con una inversión estimada de US\$ 198.901 millones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: una cartera activa compuesta de 409 proyectos con una inversión estimada de US\$ 150.405 millones, y 153 proyectos concluidos por una inversión de US\$ 48.496 millones” (UNASUR-COSIPLAN, 2017: 11).

La ejecución de los proyectos de IIRSA-COSIPLAN supone la construcción de grandes obras de infraestructura especialmente carreteras y demás facilidades para la operación de una ruta multimodal, puertos fluviales, aeropuertos, centros de almacenaje, centrales hidroeléctricas, puentes, túneles, redes ferroviarias, etc. y el establecimiento de industrias a lo largo del espacio suramericano, atravesando áreas de particular valor ecológico y territorios habitados históricamente por pueblos y nacionalidades, algunos de quienes han decidido vivir en condiciones de aislamiento voluntario.

En un estudio sobre el avance de la IIRSA en Ecuador, Pablo Dávalos (Acosta et al., 2014) concluye que hasta el 2013 el país habría ejecutado 45 proyectos IIRSA, 17 de los cuales incidirían sobre la frontera norte ecuatoriana. La revisión del sistema de información de proyectos IIRSA - COSIPLAN revela que cuatro años más tarde, hacia el 2017, 20 proyectos tenían incidencia directa sobre la frontera norte según consta en la Tabla 3.

**Tabla 3. Proyectos IIRSA con incidencia sobre la frontera norte del Ecuador**

Proyecto	Grupo	Sector	Estado	Inversión (miles de USD)	Países	Descriptor
Adecuación de Puerto El Carmen	G01. Acceso a la hidrovia del Putumayo	Transporte	Perfil	3.000,00	Ecuador	Construcción de un puerto fluvial que promueva el comercio entre la región nororiental del Ecuador y el sur de Colombia, con miras a desarrollar un transporte multimodal cuyo destino final sean los puertos brasileños.
Rehabilitación y pavimentación del tramo San Lorenzo-El Carmen	G01. Acceso a la hidrovia del Putumayo	Transporte	Concluido	75.970,27	Ecuador	Carretera por la región fronteriza oriental para facilitar el acceso a zonas petroleras y agrícolas pues confluye a cuencas hidrográficas que conectan a países vecinos.
Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Nuevo Rocafuerte-Cabo Pantoja	G02. Acceso a la hidrovia del Napo	Transporte	Perfil	10.000,00	Ecuador, Perú	Control del comercio y flujo de pasajeros en el río Napo como canal de navegación apto para el flujo comercial asociado con el eje amazónico.
Mejoramiento y navegabilidad del Río Putumayo	G06. Red de hidrovas amazónicas	Transporte	Pre-ejecución	15.000,00	Brasil, Colombia, Ecuador, Perú	Mejorar las condiciones de navegabilidad y de transporte comercial en el río Putumayo y propiciar la integración de la red de infraestructura de transporte.
Puerto de Providencia	G02. Acceso a la hidrovia del Napo	Transporte	Concluido	25.000,00	Ecuador	Puerto de transferencia de carga ubicado sobre el margen izquierdo del río Napo, en la provincia de Sucumbios, para impulsar el comercio entre las cuencas del Pacífico y de la Amazonía ecuatoriana.
Centro Binacional de Atención de Frontera	G05. Conexión Colombia-	Transporte	Concluido	4.000,00	Ecuador, Colombia	Facilitar los flujos de comercio exterior y migración entre Ecuador y Colombia.

Proyecto	Grupo	Sector	Estado	Inversión (miles de USD)	Países	Descriptor
(CEBAF) Río Mataje	Ecuador-Perú					
Proyecto Espriella-Río Mataje, incluye puente sobre el río Mataje	G05. Conexión Colombia-Ecuador-Perú	Transporte	Concluido	43.770,44	Ecuador, Colombia	Favorecer la integración vial entre Colombia y Ecuador y entre los puertos de Tumaco en el lado colombiano y de Esmeraldas en Ecuador. La ruta fue concebida por su importancia en el intercambio comercial de palma aceitera y otros productos agrícolas.
Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) San Miguel	G06. Conexión Colombia-Ecuador II	Transporte	Concluido	n.d.	Colombia, Ecuador	Fortalecer la integración comercial y social entre Ecuador y Colombia mediante el mejoramiento de la eficiencia de los procesos fronterizos.
Proyecto interconexión eléctrica Colombia-Ecuador. Línea 230 kv entre subestaciones Pasto y Quito.	G09. Sistemas de integración energética	Energía	Concluido	45.400,00	Colombia, Ecuador	Interconectar eléctricamente los sistemas de Colombia y Ecuador para trabajar de forma sincronizada con una línea de longitud de 213 km y capacidad inicial de 200 MW.
Proyecto interconexión eléctrica Colombia-Ecuador. Segunda etapa	G09. Sistemas de integración energética	Energía	Pre-ejecución	n.d.	Colombia, Ecuador	Interconectar eléctricamente los sistemas de Colombia y Ecuador para trabajar de forma sincronizada. Supone un enlace de 230 km entre Nueva Loja (Ecuador) y Orito (Colombia).
Implementación del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) en el paso de frontera Tulcán-Ipiales (Rumichaca)	G02. Conexión Venezuela-Colombia-Ecuador	Transporte	Pre-ejecución	104.675,53	Colombia, Ecuador	Fortalecer la integración comercial y social entre Ecuador y Colombia.
Construcción del nuevo puente internacional de Rumichaca y mejoramiento del existente	G02. Conexión Venezuela-Colombia-Ecuador	Transporte	Concluido	4.100,00	Colombia, Ecuador	Facilitar el tránsito de personas, vehículos y mercancías en el paso fronterizo Tulcán (Ecuador)-Ipiales (Colombia).

Proyecto	Grupo	Sector	Estado	Inversión (miles de USD)	Países	Descriptor
Tren eléctrico de carga del Ecuador	G05. Conexión Colombia-Ecuador-Perú	Transporte	Perfil	17.800,00	Ecuador	
Proyecto geotérmico binacional Tufiño-Chiles-Cerro Negro	G09. Sistemas de integración energética	Energía	Perfil	6.860,00	Ecuador, Colombia	Cuantificar el recurso existente y definir la ubicación de los pozos exploratorios profundos.
Proyecto eólico García Moreno	G09. Sistemas de integración energética	Energía	Perfil	926,52	Ecuador	Realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad del potencial eólico en la provincia del Carchi.
Rehabilitación del tramo Barbón-San Lorenzo-Mataje	G05. Conexión Colombia-Ecuador-Perú	Transporte	Concluido	46.973,97	Ecuador	Construcción de un tramo de 79,11 km para completar la conexión costera entre Colombia y Ecuador.
Mejora y pavimentación del tramo Mocoa-Santa Ana-San Miguel	G06. Conexión Colombia-Ecuador II	Transporte	n.d	210.384,88	Colombia, Ecuador	Desarrollar un corredor que fortalezca el comercio internacional del centro sur de Colombia con las provincias amazónicas y el norte y centro de Ecuador.
Adecuación del Puerto de San Lorenzo	G01. Acceso a la hidrovia del Putumayo	Transporte	Concluido	6.000,00	Ecuador	Mejorar la logística de integración y potenciar la interconexión del interior del continente con el Pacífico.
Puerto Esmeraldas	G02. Acceso a la hidrovia del Napo	Transporte	Concluido	n.d.	Ecuador	Potenciar la interconexión entre el interior del país y el Pacífico.
Microcentral de Sucumbíos	G09. Sistemas de integración energética	Energía	Concluido	n.d.	Ecuador	Integrar los sistemas energéticos para mejorar la eficiencia y confiabilidad en la generación, transmisión y distribución de energía.

Fuente: COSIPLAN-UNASUR. Sistema de Proyectos.  
Elaboración: Propia

Diversos análisis respecto a los probables impactos de la IIRSA<sup>46</sup> (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007; Bonilla, 2010) advierten no solo de los pasivos sociales y

<sup>46</sup> Desde el lado gubernamental, el desarrollo de la IIRSA ha sido, sino invisible, poco difundido. Han sido varios colectivos sociales a lo largo de la región los que han embanderado el seguimiento de sus avances mediante el impulso de campañas informativas, de denuncia, movilización y resistencia. Por su sistematicidad destacan, entre otros, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y los estudios, que

ambientales de una propuesta de infraestructura tan ambiciosa, favoreciendo patrones de colonización escasamente planificados, el incremento de la extracción ilegal de madera, la expansión de la frontera agrícola y de los monocultivos, la alteración y contaminación de ríos y una compleja re-organización del territorio, sino que señalan los límites para que ésta efectivamente contribuya al crecimiento económico del conjunto de los países de la región. Las diferencias en materia de desarrollo tecnológico, capacidades instaladas y movilidad de capitales podrían determinar que la mayor parte de los países sean considerados solo como lugar de paso y circulación, que sus territorios sirvan como soporte para el establecimiento y operación de empresas maquiladoras o que probablemente se articulen a la IIRSA a través de las mismas o nuevas actividades económicas primarias. En cualquier caso, esas actividades contarán con una alta participación de capital foráneo asociado a capitales nacionales (estatal o público), con el riesgo de mermar la soberanía debido a que las decisiones sobre estos territorios estarán sujetas a los intereses de los inversionistas y de las compañías que operen a lo largo del eje (Bonilla, 2010). Basta citar por ejemplo, las implicaciones de la creación de la Zona Franca en Ciudad del Este (1960) donde a través de un contrato entre el Gobierno Federal paraguayo con la empresa norteamericana *Foreign Market Trading* (FMT) se autorizó a esta última a beneficiarse de la producción y comercialización de una gran cantidad de mercancías sin el pago de ningún tipo de tasa (Cardin, 2013: 38).

En otros casos, algunas de las obras, que atravesarán territorios ancestrales,<sup>47</sup> obligarán a la reubicación de sus poblaciones, incrementando los riesgos de la continuidad cultural y social de estos pueblos, al mismo tiempo que la construcción de infraestructura y la instalación de actividades económicas, probablemente motiven una mayor presencia militar en el área, recrudeciendo la serie de efectos adversos que este tipo de respuestas ha evidenciado en las regiones fronterizas a lo largo de América Latina.

Desde esta lógica, el quehacer de COSIPLAN-IIRSA respecto a las prácticas de fronterización radica en el fortalecimiento de la cooperación económica y transfronteriza, sin otorgar mayor atención a los efectos ambientales, a los crecientes movimientos migratorios, a los impactos culturales, menos aún a la distribución de la riqueza, al

---

para el caso ecuatoriano, han sido desarrollados por organizaciones no gubernamentales como Acción Ecológica y la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX).

<sup>47</sup> El eje multimodal Manta-Manaos, contenido en la IIRSA, está concebido como un corredor de transporte que conectará áreas del Pacífico, desde Manta en Ecuador, hasta el Atlántico, en Manaos, Brasil. En su trayecto por Ecuador afectará la Reserva Biológica Limoncocha, el Parque Nacional Llanganates, el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Cuyabeno, el Parque Nacional Gran Sumaco y el Napo Galeras (Bonilla, 2010) donde viven pueblos indígenas.

fomento de acciones relativas a la movilidad humana o la calidad de vida de las poblaciones fronterizas. La iniciativa IIRSA concentra su atención en el diseño de nuevas fronteras y regiones definidas por su “actividad industrial y concentración poblacional, es decir, por la fuerza de trabajo real y potencial que ofrecen, y el resto por las dádivas de la naturaleza, puesto que se trata de poner en ruta la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, minerales, genéticos, acuáticos y también agropecuarios” (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007: 17).

Los procesos de fronterización incluyen actualmente, con mayor peso que posiblemente en cualquier otra época histórica, condicionamientos geopolíticos en la medida en que la internacionalización del capital define el sentido y orientación de las fronteras. De ahí que es legítimo preguntar, como lo hace Mignolo (2007), en qué medida los nuevos proyectos de integración están preparados para aliarse a los planteamientos que nacen de la epistemología, las teorías políticas y las economías políticas de los pueblos indios y poblaciones de origen africano y reafirmar, siguiendo a Saskia Sassen, que en “(l)a nueva geografía de los procesos económicos globales, los territorios estratégicos para la globalización económica, deben ser definidos en términos de las prácticas de los agentes corporativos, incluyendo la infraestructura necesaria, y la labor del Estado en la producción o legitimación de nuevos regímenes jurídicos” (Sassen, 2001: 43). En este proceso, si bien perduran la soberanía y el territorio, la fuerza y modalidades bajo las que actúa el capital, presionan hacia una reconfiguración de estas nociones: “la soberanía se ha visto descentralizada y el territorio parcialmente desnacionalizado” (Ibid.), concluye Sassen.

Si como parece la IIRSA mantendrá la misma orientación que le otorgó el BID en su nacimiento, con el cúmulo de consecuencias que se derivan de este enfoque, el nuevo regionalismo latinoamericano habría generando una fuerte tensión entre la búsqueda de autonomía y la continuidad de políticas que no han reparado en el bienestar de la población fronteriza ni han superado el tratamiento de las fronteras como áreas subalternizadas. Con propiedad Gudynas menciona que “las nuevas interconexiones de transporte no representan la meta final de la integración entre las naciones: no debe confundirse una interconexión con la integración, un proceso mucho más amplio y complejo” (Gudynas, 2007: 3), pues el crecimiento económico que estos nuevos proyectos impulsan sigue dejando sobre el tapete el enfrentamiento de las graves falencias sociales y económicas que afectan a las áreas fronterizas y a ciertos segmentos más que a otros. En un escenario en el que la apropiación de los territorios pertenezca a quienes



en ellos habitan, las carreteras deberían servir fundamentalmente para el desarrollo local y regional, comunicando a las regiones entre sí con el fin de potenciar y complementar sus potencialidades productivas y de intercambio, lo que desembocaría, como lo propone Gudynas (Ibid.), en un mapa de corredores de comunicación diferente al concebido bajo la IIRSA.

### **2.2.2. Desintegración social de las fronteras**

Tomando en cuenta que la existencia de bienes naturales estratégicos es un factor determinante en la configuración territorial, es indudable que la identificación en zonas de frontera de petróleo o minerales, así como de espacios territoriales aparentemente vacíos, ha contribuido a su revalorización económica. La renovada voluntad por incorporar las áreas de frontera implica un proceso de resignificación de los antiguos “desiertos” y zonas olvidadas. Eduardo Gudynas (2007) identifica que muchos de los actuales conflictos sociales y ambientales toman lugar en las fronteras donde la instalación de actividades económicas ha hecho caso omiso de la presencia de impactos ambientales que no conocen de límites fronterizos, como sucede en la zona de Madre de Dios-Acre-Pando. También Anthony Bebbington (2007) argumenta, que las áreas de explotación minera impulsadas a partir de la década de 1990 no solo no tienen antecedentes en la región, sino que la mayoría está ubicada en zonas de frontera. En el ánimo de traer a colación algunos ejemplos, vale señalar que el departamento Petén, al norte de Guatemala, colindante con la frontera mexicana, es considerado una región de expansión minera y que El Salvador tiene distritos mineros en las cercanías con Honduras. El proyecto minero Mirador, depósito de una de las más grandes reservas de cobre de Ecuador, está localizado en la Cordillera de El Cóndor que comparte este país con Perú. Cercano a este proyecto minero están los depósitos de oro del proyecto Fruta del Norte, también en territorio ecuatoriano y en los límites con Perú. En Colombia, entre los 40 proyectos mineros prioritarios, denominados “de interés nacional”, 26 están distribuidos en departamentos fronterizos: en la Guajira y César, y en Santander y Boyacá, adyacentes a Venezuela, hay minas de carbón y depósitos de oro y plata, respectivamente; y en Vaupés, frontera con Brasil, reservas de oro. Más allá de los depósitos de minerales, investigadores de la región señalan la correspondencia entre el interés estratégico por

controlar el acuífero del Guaraní localizado en la Triple Frontera con el discurso de enfrentar la amenaza global y el peligro terrorista.<sup>48</sup>

Las anteriores referencias confirman que en América Latina, las fronteras han pasado de ser áreas marginales y subalternizadas para comenzar a ser también consideradas como áreas estratégicas. Gran parte de estos nuevos proyectos estratégicos guardan conexión con las estrategias de articulación de infraestructura, producción y comercio de América Latina como la Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), acentuando el papel mediador de las fronteras macrorregionales y su compromiso con las influencias de la globalización (Anderson y O'Dowd, 1999). Hay una revalorización económica de los espacios de frontera como una alternativa para trascender el carácter periférico y marginal que históricamente han detentado estas áreas, que sin duda tendrá implicaciones sobre la soberanía y la conformación de las regiones fronterizas al punto de enfrentar, como lo dicen Mezzadra y Neilson (2013: 24), un proceso de disrupción geográfica, de continuos cambios y reorganización del espacio. Al respecto resulta útil citar la visión que al respecto plantea la propia Iniciativa en la página web del sistema de información de proyectos:

“El interés por avanzar en la integración en sus distintas dimensiones, exige que la frontera adquiera un nuevo rol. La cooperación y la integración fronterizas constituyen estrategias de los países que tienen como meta el desarrollo integral y sostenible de los territorios, así como la incorporación dinámica de los espacios de frontera en los procesos de desarrollo, cooperación bilateral e integración económica y social.” (COSIPLAN-UNASUR)

No solo la minería o el petróleo, como tampoco el diseño de puertos de embarque, aeropuertos, refinerías, poliductos, sistemas de tratamiento de aguas servidas, grandes autopistas y represas que impulsa la IIRSA presionan sobre los territorios fronterizos que mediante la compleja red de infraestructura que atraviesa por las áreas limítrofes de los Estados busca articular los “*commodities*” y los recursos extraídos con el mercado mundial (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007; Bonilla, 2010; Ceceña, 2013; Dávalos, 2014) bajo la concepción, como lo señala Gudynas (2007), de que la interconexión es sinónimo de integración regional. De la mano con la construcción de infraestructura, diversos países de América Latina e independientemente del signo político de sus gobiernos estarían empujando la “utilización productiva” de los territorios fronterizos a través de la consolidación y expansión de monocultivos en respuesta a la demanda de países del norte

---

<sup>48</sup> Ver al respecto Corach y Baizán (2002), Montenegro y Giménez (2006), Albuquerque (2009), así como la extensa literatura publicada en medios alternativos como [www.rebelion.org](http://www.rebelion.org) y [www.censat.org](http://www.censat.org)

por agrocombustibles (Rincón coord., 2008; Wilson, Bayón y Diez, 2015) y productos de alta versatilidad para la fabricación de alimentos. Es el caso de la ocupación de áreas del biocorredor del Chocó para el cultivo de palma aceitera, con Colombia ocupando un puesto central en esta dinámica que se desparrama hacia Ecuador por el sur y Venezuela al norte; de un eje similar para la producción de caña de azúcar liderado por Brasil para extenderse desde dicho país al Caribe y América Central; y el de soja transgénica que, con Argentina a la cabeza, se prolonga también en Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Junto al desarrollo de estas actividades económicas “formales” han surgido otras que asolan buena parte de las fronteras latinoamericanas como la depredación de bosques y la minería ilegal (Brunner y Grande, 2018; Piñeiro, Thomas y Elverdin, 2016; Vutova, 2017; PRAS-CID-PUCESE, 2011).

El análisis de la información contenida en el *Environmental Justice Atlas*, uno de los compendios más actualizados respecto a la conflictividad mundial confirma que gran parte de los impactos sociales y ambientales ocasionados por el crecimiento económico se concentran sobre las regiones fronterizas. De los 452 conflictos activos que registra el atlas en 11 países de América del Sur en 2016, un poco más de la tercera parte tiene lugar en áreas fronterizas, adyacentes a los límites de otros estados (ver Tabla 4).

**Tabla 4. Conflictos socio-ambientales en áreas fronterizas en América del Sur**

País	Total conflictos	Conflictos en áreas de frontera según categoría							% conflictos en zonas de frontera
		Agua	Mine- rales	Petróleo	Biodi- versidad	Tierra	Infraes- tructura	Otros	
Argentina	40	1	14	1	4	1			52,5
Bolivia	20	2	2	1					25,0
Brasil	69	3	3	3	3				17,4
Chile	41	3	10						31,7
Colombia	122	3	12	9	6	1	5	3	32,0
Ecuador	60		5	5	8		1	2	35,0
Guyana	1		1						100
Paraguay	2								0
Perú	70		13	4	2				27,1
Uruguay	3				1				33,3
Venezuela	24		8	1					37,5
<b>Total</b>	<b>452</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>31,2</b>

Fuente: EJAtlas

Elaboración: Propia

Si bien para fines ilustrativos, los conflictos han sido clasificados en función de la extracción de un recurso particular, en su mayoría éstos se manifiestan en una serie de efectos interrelacionados lo que conduce a plantear que aunque la acepción de ampliación de la frontera extractiva es en términos generales adecuada, es preciso subrayar que su utilización no remite únicamente a la apropiación de la naturaleza, sino que tras este proceso hay concentración de la propiedad, despojo social, desterritorialización y racialización de espacios, en una reafirmación continua de la colonialidad con la que actúan nuestras sociedades.

### **2.3. Securitización<sup>49</sup> y control en las fronteras**

Antes de abordar directamente los contenidos de esta sección, parece necesario traer a colación algunos antecedentes históricos que permitan situar y comprender la gravitación que han ejercido las políticas de defensa y seguridad dictadas por Estados Unidos sobre la región. En este orden de ideas cabe recordar que la primera doctrina de política exterior de los Estados Unidos, la misma que sentó las bases de la seguridad regional, fue la Doctrina Monroe (1823), promulgada un año antes de la Batalla de Ayacucho que puso fin a la colonización española en América del Sur. Su creador, John Quincy Adams, Secretario de Estado, advirtió en su lanzamiento: “Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene objetivos e intereses permanentes”, de ahí estableció la conocida fórmula “América para los americanos”. Theodore Roosevelt profundizó la Doctrina Monroe en 1904 “al establecer que si un país de las Américas amenazaba o atacaba la propiedad de ciudadanos o empresas estadounidenses o cercenaba sus derechos, Washington se vería obligado a intervenir en los asuntos internos del país en cuestión para restablecer el orden y el imperio de la ley” (Boron, 2013: 65). Como sostiene Van Klaveren, la Doctrina Monroe “constituyó una suerte de declaración preventiva que marcó el comienzo de la delimitación del Hemisferio Occidental como una zona de

---

<sup>49</sup> Al hablar de securitización tomo el argumento desarrollado por Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde en *Security. A new framework for Analysis*: “Si la seguridad es el movimiento que conduce a la política más allá de las reglas establecidas y la enmarca como un tipo especial de política o por encima de la política, la securitización puede entenderse como una versión más extrema de la politización” (1998: 23). Según lo desarrollan los autores, la securitización se constituyen por el establecimiento intersubjetivo de una amenaza existencial que tiene la capacidad suficiente para desatar efectos políticos de tal naturaleza que los sectores sociales involucrados en esta dinámica están dispuestos a tolerar violaciones de las reglas que de otro modo no consentirían. “Si a través de un argumento sobre la prioridad y la urgencia de una amenaza existencial, la política de securitización se liberara del cumplimiento de reglas que de lo contrario estaría obligada a cumplir, estamos presenciando un caso de securitización” (Ibid.: 25).

influencia exclusiva de los Estados Unidos, delimitación que asumió el carácter de un proceso gradual y acumulativo” (1983: 121).

A partir de esta postura, Estados Unidos se concentró en la difusión y aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, que no solo sirvió de fundamento ideológico de las dictaduras militares que gobernaron varios países latinoamericanos desde mediados de la década de 1960 hasta los años 80 del siglo pasado, sino que sustentó su supuesto derecho a intervenir en cualquier lugar donde considere afectados sus intereses o de sus empresas privadas, a justificar las agresiones contra otros pueblos y a expandir su poder hacia cualquier punto de la geografía planetaria. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional se legitimó la guerra contra el enemigo interno, un enemigo difuso encarnado en los movimientos sociales, las guerrillas y cualquier expresión de protesta: “narco terrorista en Colombia, maoístas en Perú, movimientos de sectores pobres vinculados al Movimiento Sin Tierra en el Brasil, indígenas cocaleros en Bolivia” (Garzón, 2012: 56) y se dio paso a “una injerencia cada vez mayor de las fuerzas armadas en lo público; la represión ante los posibles cambios en la estructura económica, (...) la reducción de la democracia a la participación en los comicios” (Romano y Delgado, 2012: 23).

A partir de los atentados que sufriera la ciudad de Nueva York en el 2001 y que justificaron la invasión sobre Irak y las guerras que más tarde se extenderían a otros países vecinos, Estados Unidos lanzó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que el Presidente George W. Bush proclamó el supuesto derecho de ese país a emprender “guerras preventivas” contra aquellos estados del mundo que amenazaran los intereses de su país y de sus amigos. Fue el lanzamiento de la “guerra contra el terror”<sup>50</sup> que en el caso de América Latina se formalizó a través de la Declaración de Seguridad de las Américas, aprobada en 2003 por la Organización de Estados Americanos –OEA-. Este instrumento establece una visión de seguridad multidimensional para el hemisferio que abarca las amenazas convencionales y otras nuevas. Entre las primeras se incluye a los conflictos transfronterizos y a las guerras interestatales. Las nuevas amenazas, detalladas en el literal “m”, artículo II, comprenden el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la pobreza extrema y la exclusión social, por sus efectos sobre la estabilidad y la democracia; los desastres

---

<sup>50</sup> Para una revisión detallada de las implicaciones de la Estrategia de Seguridad Nacional que inauguró el presidente George W. Bush sobre las fronteras y las subjetividades ver el artículo de Louise Amoore, *Biometric Borders: Governing Mobilities in the War of Terror* (2006).

naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, el deterioro ambiental, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética; las amenazas sobre el transporte de materiales potencialmente peligrosos o el acceso a armas de destrucción masiva (OEA, 2003: 2). Como sostienen Bonilla y Páez, “la novedad a la que se asiste a raíz de los atentados de septiembre de 2001 y la Estrategia de Seguridad consiste en la estrecha identificación, por parte de EEUU, entre insurgencia interna, drogas, criminalidad, tráfico de armas, lavado de dinero y terrorismo” (Bonilla y Páez, 2006: 130).

Desde inicios de la primera década del siglo XXI, América Latina presenció el ascenso al poder de una serie de regímenes alejados de la aplicación de medidas de política económica que apuntaban a la reducción del Estado, la entrega a manos privadas de servicios públicos y de sectores económicos estratégicos y la apertura comercial indiscriminada.<sup>51</sup> Este cambio, no menor, estuvo acompañado de esfuerzos por construir un regionalismo distante al había históricamente estado presente en América Latina, donde los Estados Unidos, como lo señalado en páginas anteriores, ocupaban un papel central. Una de las manifestaciones en esta dirección fue la creación de instituciones regionales autónomas frente a Estados Unidos: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -ALBA-TCP- (2004), la Unión de Naciones del Sur –UNASUR- (2008), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC- (2011) y el propio MERCOSUR (Mercado Común del Sur) que, constituido en 1991, fue relanzado en el año 2000. En este contexto merece analizarse las rupturas o continuidades que exhiben las nuevas instituciones regionales respecto al modelo de defensa que cuestionaban.

La revisión del Tratado Constitutivo de UNASUR suscrito en Bogotá en mayo del 2008 y puesto en vigor en marzo del 2011, permite concluir que en lo fundamental, no existe una ruptura con la visión de seguridad y defensa dominante. En lo sustantivo, este tratado permanece atado a los ámbitos que al respecto han sido priorizados por Estados Unidos, según se desprende de los literales “q”, “s” y “t” del Artículo 3 de este Tratado:

“(q) La coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado;

---

<sup>51</sup> Ver nota de pie de página 30.

- (s) El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa;
  - (t) La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.”
- (UNASUR, 2014).

En el marco de UNASUR, la conformación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), creado en diciembre del 2008, poco después de que Estados Unidos decidiera reactivar la IV Flota, puede leerse como el avance más significativo de la región para tomar distancia con respecto a la estrategia militar y de defensa de los Estados Unidos. Entre los principios más sobresalientes del CDS destacan el respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos; la promoción de la paz y la solución pacífica de controversias; la preservación y fortalecimiento de Suramérica como un espacio libre de armas nucleares y de destrucción masiva, promoviendo el desarme y una cultura de paz en el mundo; el fomento de la defensa soberana de los recursos naturales; la promoción de la responsabilidad y la participación ciudadana en los temas de la defensa, en cuanto bien público que atañe al conjunto de la sociedad (Artículo 3) (UNASUR, 2008).

Los objetivos del CDS (Ibid.) comprenden la consolidación de Suramérica como una zona de paz, la construcción de una identidad suramericana en materia de defensa y el fortalecimiento de la cooperación regional en este ámbito (Artículo 4). A estos se suman objetivos específicos orientados a la construcción de una visión conjunta alrededor de la defensa; el intercambio de información; el intercambio y la cooperación en el ámbito de la industria de la defensa y en la formación y capacitación; la adopción de medidas de confianza, y la incorporación de la perspectiva de género en el sector de la defensa (Artículo 5).

No deja de tener una relevancia ética y política la “Declaración sobre Suramérica como zona de Paz” (UNASUR, 2012) adoptada durante la IV Reunión Ordinaria de UNASUR, llevada a cabo en Lima en el año 2012. Si bien tal Declaración debe concretarse en la formulación de un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación, sus contenidos reafirmaron la posición expresada por los y las Presidentes de América del Sur en Guayaquil, Ecuador, en el 2002, cuando se declaró a Suramérica como zona de paz y cooperación.

La distancia que se pretende marcar respecto a la política de defensa y seguridad impuesta por Washington se matiza si se considera que el Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano en su artículo 2 señala que éste se sujetará a los principios y propósitos

establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de Estados Americanos (UNASUR, 2008). La sujeción a esta última entidad implica, finalmente, aceptar el papel de organismos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o la Junta de Defensa Interamericana y plantea un interrogante respecto a los continuos cuestionamientos expresados por presidentes de América Latina en torno a la legitimidad de la OEA y sus organismos.

La CELAC, por su parte, formuló declaraciones similares a las de UNASUR. En el 2014, a través de la “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, suscrita en La Habana, los países integrantes de este foro político reafirmaron el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, el compromiso de solución pacífica de las controversias, la obligación de los Estados de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado; la observancia de los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos; el principio de la tolerancia y de vivir en paz; el respeto del derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural y el compromiso de continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones (CELAC, 2014).

Los pronunciamientos más radicales en torno a la seguridad y defensa surgieron en el seno del ALBA-TCP que en la Declaración Conjunta de la VIII Cumbre, en Cuba en 2009, recalcó que América Latina y el Caribe debe ser una región libre de bases militares extranjeras y calificó de inaceptable utilizar la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional como pretexto para el incremento de la presencia militar norteamericana en la región (ALBA-TCP, 2013: 152-153). En esta misma Declaración, el ALBA-TCP insistió ante el gobierno de Colombia, de forma similar a lo que lo hizo durante su VII Cumbre en el año 2009 en Cochabamba, a reconsiderar la instalación de bases militares establecidas en el marco del Acuerdo para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad con los Estados Unidos (Ibid.: 123).

El contenido de las declaraciones provenientes del denominado nuevo regionalismo y su aparente distanciamiento de las políticas de seguridad hegemónicas resultan contradictorios si se examinan con mayor detenimiento algunas variables como el comportamiento que ha exhibido el gasto militar y la militarización de los espacios fronterizos. Un repaso sobre estas dos variables permite advertir tensiones entre los planteamientos de autonomía del nuevo regionalismo y el acatamiento de varias de las



medidas definidas por intereses más poderosos, colocando al discurso de defensa de la región en una posición sino contradictoria, al menos ambigua y poco clara.

Según información de UNASUR, bien entre 2005 y 2013 la relación gasto militar/PIB se mantuvo relativamente estable en el conjunto de América del Sur, con diferencias en el comportamiento individual de los países<sup>52</sup> (ver Tabla 5), en términos absolutos, el gasto en defensa casi se duplicó, pasando de 17,65 mil millones de dólares en 2006 a 33,2 mil millones de dólares en 2010 (CDS, 2012: 5).<sup>53</sup>

**Tabla 5. Gasto militar como porcentaje del PIB en los países de América del Sur (2005-2014)\***

País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Argentina	0,84	0,79	0,79	0,76	0,88	0,81	0,76	0,78	0,84	0,87	0,86
Bolivia	1,77	1,57	1,69	1,96	1,99	1,67	1,68	1,85	1,84	1,90	1,62
Brasil	1,52	1,48	1,47	1,44	1,54	1,54	1,41	1,38	1,33	1,35	1,39
Chile	2,41	2,41	2,29	2,53	2,19	2,16	2,17	2,07	2,05	1,99	1,92
Colombia	3,35	3,28	3,27	3,71	3,86	3,63	3,07	3,17	3,29	3,13	3,38
Ecuador	2,30	2,03	2,57	2,67	3,12	3,01	3,10	2,95	2,95	2,86	2,69
Guyana	2,24	1,32	1,44	1,59	1,53	1,38	1,26	1,18	1,18	1,28	1,43
Paraguay	0,94	1,05	1,00	0,96	1,11	1,08	1,20	1,38	1,36	1,40	1,71
Perú	1,51	1,38	1,20	1,15	1,43	1,33	1,18	1,24	1,47	1,46	1,61
Uruguay	2,08	2,06	1,84	1,95	2,06	1,96	1,76	1,77	1,86	1,49	1,80
Venezuela	1,41	1,63	1,29	1,37	1,22	0,85	0,75	1,30	1,43	1,16	n.d.

\* No hay datos para Surinam  
Fuente: Banco Mundial.  
Elaboración: Propia

Gran parte del crecimiento del gasto militar se ha utilizado para la compra de armamento (Bartolomé, 2013: 46), así como para la gestión institucional de las fuerzas armadas. En el caso del Ecuador, la revista de investigación *Plan V* (2018: s/p), señala que el gasto en defensa pasó de 185 millones entre 2000-2006 a 1.686 millones de dólares entre 2007 y 2016. La misma revista afirma que de acuerdo al Ministerio de Economía y

<sup>52</sup> En el período 2005-2013, la proporción de gasto militar con respecto al PIB disminuye en ocho de los once países para los que se dispone de información y aumenta en tres: Colombia, Ecuador y Paraguay, en su orden.

<sup>53</sup> Pese al incremento del gasto militar en América Latina, éste se mantiene por debajo del promedio internacional, equivalente al 2,5% del producto bruto interno global (Bartolomé, 2013: 45).

Finanzas, este último monto habría sido utilizado para la “Protección y vigilancia del territorio ecuatoriano” y para “Seguridad integral”.

El crecimiento del gasto militar ha ido de la mano con la homologación de criterios entre las Fuerzas Armadas de la región, así como con la adopción de leyes antiterroristas en 33 países<sup>54</sup> (Boron, 2013: 196), de códigos civiles que criminalizan la protesta social y la incorporación de tecnología para inteligencia (Carrión y Llugsha coord., 2013: 12), sin perder de vista que muchos países continúan apoyándose en la formación militar entregada por instituciones de Estados Unidos como el Instituto Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad *Western Hemisphere Institute for Security Cooperation* (WHISC) (nombre que adoptó desde el año 2001 la Escuela de las Américas fundada en 1946). Entre 2009 y 2013, cerca de 22 mil policías y militares de varios países latinoamericanos (México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú) fueron formados en Colombia con el apoyo del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) (Suárez, 2014: 8). El nuevo regionalismo tampoco ha podido detener la suscripción de iniciativas de seguridad subregionales, menos aún rechazar la instalación de bases militares en la región, ni suspender los vínculos entre las fuerzas armadas latinoamericanas con las agencias militares de Estados Unidos, como su participación durante 2013 y 2014 en las actividades ejecutadas por la Junta Interamericana de Defensa o en las conferencias que cada dos años se celebran entre los ejércitos americanos, la Conferencia Naval Interamericana y el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (Ibid.: 23). La única decisión que se distanció de esta tónica fue la adoptada por Ecuador en 2009 consistente en no renovar el acuerdo sobre la base militar de Manta que operaba en la provincia ecuatoriana de Manabí hace más de una década como un apoyo del gobierno ecuatoriano para que el Ejército de Estados Unidos realice actividades de control del narcotráfico en el Pacífico. A la decisión de no renovación del acuerdo le sucedió el bombardeo realizado por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano (Angostura, provincia de Sucumbíos) el 1 de marzo del 2008, acción sobre la que existían indicios de involucramiento del personal y equipo aéreo estadounidense estacionado en la base de Manta.

El énfasis en la seguridad y el control alrededor del manejo de las fronteras, apunta a consolidar el espacio estatal y a poner en marcha un conjunto de procedimientos que

---

<sup>54</sup> La adopción de legislación antiterrorista responde a la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se suscribió en el año 2004.

facilitan el establecimiento de distinciones sociales, culturales y políticas entre grupos humanos en una clara tensión con las declaraciones respecto a la ciudadanía suramericana y el fomento a la libre movilidad de las personas. Las fronteras se asimilan a mecanismos de control, sin considerar programas y medidas específicas para su integración, no desde un sitio subordinado, sino desde el interés por atender la realidad que atraviesa la población fronteriza.

En esta dirección, sobresale la firmeza con la que los gobiernos están aplicando medidas para frenar el contrabando en las fronteras o las disposiciones respecto a la propiedad en zonas fronterizas. En el primer caso cabe por ejemplo citar la experiencia de Brasil analizada por Cardin (2014) en la que a través de un estudio comparativo este autor analiza la forma en que se enfrentó el contrabando en el régimen neoliberal de Fernando H. Cardoso, por un lado, y en el del Partido de los Trabajadores (PT) bajo la dirección de Lula, por otro lado. Durante el régimen de Cardoso, el control aduanero habría sido casi inexistente, mientras que con Lula, la mayor presencia del Estado habría determinado la aplicación de una política de mayor control y fiscalización. Según detalla Cardin, el endurecimiento del control durante este último gobierno habría venido de la mano con un conjunto de medidas para incidir sobre la pobreza como la renta mínima, la cualificación laboral y la escolarización. La perspectiva dominante en la propuesta del PT era que las políticas sociales complementarias se desarrollasen de manera paralela a un conjunto de operaciones policiales orientadas a dismantelar cualquier tentativa de organización y sostenimiento de la población por medios diferentes de aquellos fijados por el Estado.

“(E)s posible visualizar una intervención diferenciada del gobierno durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso en relación con las políticas adoptadas por Luis Ignacio Lula da Silva. La gestión del PSDB, de fuerte carácter neoliberal, no ejercía mucho control aduanero, permitiendo una gran circulación de personas y mercancías por el Puente de la Amistad durante toda la década de 1990 -momento de mayor movimiento financiero en la región. Por otro lado, la gestión del PT, marcada por una presencia del Estado en las diferentes dimensiones de la vida social, establece una política de control y fiscalización mucho más rigurosa de aquella adoptada hasta entonces (...) tal política petista no correspondía a una única acción, sino a un conjunto de medidas integradas” (Cardin, 2014: 56).

El caso del puente que une la ciudad argentina de Posadas con la paraguaya de Encarnación, estudiado por Grimson (2005b), da cuenta de cómo los mayores controles aduaneros afectaron a las mujeres paraguayas —“paseras”—, que hace más de un siglo viven

del comercio en pequeña escala, generando conflictos y protestas locales que determinaron el involucramiento de los mandatarios de ambos países.

Alrededor de las disposiciones sobre propiedad en las zonas fronterizas, merece traerse a colación la propuesta de Ley Orgánica de Fronteras (2004) formulada por el gobierno de Hugo Chávez en el año 2003 que no ha podido hasta el momento ser aprobada por las reacciones de varios colectivos que rechazaron algunos de sus enfoques. Entre los temas motivo de preocupación sobresalen la llamada “franja productiva” (Título X, Capítulo I) y el trato favorable hacia los militares: “Artículo 53: Con el objeto de impermeabilizar, generar empleos posterior al servicio militar a nuestros reservistas, poblar y desarrollar nuestras fronteras, se creará dentro de la Franja de Seguridad Fronteriza la franja productiva no menor de dos (2) kilómetros a lo largo de las fronteras colindantes y terrestres en la que funcionarán las unidades de producción”. Según la ley, mientras más de once reservistas pueden constituir cooperativas (art. 54), a los reservistas individualmente se le puede asignar una parcela no mayor a 100 hectáreas (art. 55). Para no limitar el desarrollo de los caseríos, pueblos y ciudades colindantes a la franja productiva, el artículo 58 señala que “la Zona de Exención será de un metro en ambos sentidos por cada habitante del caserío, pueblo o ciudad, en ningún caso será menos de dos mil (2.000) metros ni más de veinte mil (20.000) metros por cada lado”.

Respecto a la militarización y su incidencia sobre los espacios fronterizos, algunas fronteras de América Latina evidencian que esta es una tendencia que ha ido creciendo a lo largo de los años. La creciente militarización de las fronteras no solo está presente en las regiones fronterizas de Ecuador y Venezuela con Colombia donde los temores al desbordamiento del conflicto colombiano podrían haber explicado una mayor presencia militar; sucede también en la frontera amazónica que comparten Perú, Colombia y Brasil o en la llamada Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil que en el imaginario social ha pasado a considerarse como una zona “caliente” asociada con el peligro terrorista y donde la población islámica se ha convertido en sujeto de vigilancia de los Estados Unidos como posible fuente de financiamiento (Giménez, 2011, citado por García Pinzón, 2014: 235). Esta caracterización sustentó la decisión de los gobiernos de Argentina y Brasil para desplazar un alto número de militares a dicha área en el marco de los operativos “Escudo Norte” y “Operación Ágata”,<sup>55</sup> que respectivamente mantienen

---

<sup>55</sup> Por decisión de Paraguay, Brasil y Argentina, en la Triple Frontera se implementaron medidas legales para restringir el flujo de divisas y en agosto de 2012, en el marco de la “Operación Ágata”, el gobierno brasileño movilizó cerca de 9.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras para combatir el tráfico

tales Estados. La militarización toma igualmente lugar en zonas aparentemente menos conflictivas. Chile adoptó desde el 2011, por ejemplo, el “Plan Frontera Norte” (PFN) que “representa de manera concreta la implementación de acciones por parte del Estado chileno con base en (la) nueva agenda de seguridad” (García Pinzón, 2015: 141).

Aunque no directamente relacionado con la militarización creciente de las fronteras, parece importante traer a colación la iniciativa adoptada por varios países de la región para promover la operación de las Fuerzas Armadas en tareas comúnmente asignadas a la policía, y aún su participación en otros campos (construcción, vigilancia de recursos estratégicos, trabajo humanitario, control de la contaminación, apoyo a la policía y seguridad en las principales ciudades latinoamericanas), bajo el argumento de la urgencia de combatir la delincuencia, el narcotráfico y garantizar la seguridad ciudadana, en línea con las directrices de la política de seguridad dominante (Bonilla y Páez, 2006; Dammert y Álvarez, 2008; Bartolomé, 2008; Garzón, 2012), con consecuencias poco meditadas respecto a las implicaciones de la incorporación de militares a la realización de actividades ajenas a su función. Desde un enfoque similar, Garzón (2012: 35-36) señala que la centralidad que ha adquirido el concepto de seguridad ha dado paso a que bajo su paraguas se aborden no solo los convencionales alcances de la defensa, sino que se enfrenten condiciones que se consideran pueden dar lugar a la inestabilidad social y a la alteración del orden democrático.

El caso del Ecuador es ejemplificador al respecto. A partir de la Política de Defensa para el período 2013-2017, el país otorgó a las Fuerzas Armadas la atribución de que la “defensa como bien público, no solo es protección ante cualquier amenaza externa, sino también en la constitución de nuestra sociedad y cultura; (b) protección de soberanías (económica, ecológica, alimentaria, energética, tecnológica y del conocimiento); y (c) cultura de paz, centrada en el ser humano en su relación armónica con la naturaleza” (Ministerio de Defensa, 2013: 157-158). Con esta ley se posibilitó la participación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en campos tan disímiles como las comunicaciones, el control de contaminantes, la gestión en la entrega de tierras, la protección de los pueblos en aislamiento voluntario, la protección de los derechos de la naturaleza o su papel en la protección de las denominadas “múltiples soberanías” (Ibid.: 161-163). Esta política, que

---

de drogas, armas y el contrabando en general (García Pinzón, 2014: 240-241). Al respecto ver también <http://www.infobae.com/2015/07/22/1743443-brasil-movilizo-4200-militares-la-frontera-paraguay-bolivia-y-argentina> y <http://www.taringa.net/posts/noticias/17109784/Argentina-desplaza-miles-de-militares-a-la-Triple-Frontera.html>, acceso el 28.10.15.

contrariaba disposiciones constitucionales (Art. 158) entró en rigor en el país sin encontrar mayor resistencia. A fines del año 2015, a través de enmiendas constitucionales remitidas desde el poder ejecutivo, entre las que se incluía la reforma al artículo antes señalado, la Asamblea Nacional modificó la Constitución para consignar en la Carta Magna la participación de las Fuerzas Armadas en otras tareas y actividades distintas a las de la defensa. La reforma del segundo inciso del artículo 158 señala textualmente que: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley” (Registro Oficial 653 del 21 de diciembre del 2015), reemplazando el contenido anterior en el que la misión de las Fuerzas Armadas se circunscribía a la defensa de la soberanía e integridad territorial.

Fernández Rodríguez y Sansó-Rubert Pascual (2010) identifican que si bien la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia habría tenido antecedentes en la década de los setenta del siglo pasado, esta práctica habría pasado de ser una manifestación temporal, para convertirse en varios países de la región, en una política definida constitucionalmente que tiene, para el caso de las fronteras, un mayor protagonismo dada la prevalencia de una visión sobre la ilegalidad que predomina en estos territorios.

Llama la atención que tanto el incremento del gasto militar como la mayor militarización de los espacios fronterizos tomen lugar en un momento en que, según coinciden varios autores, es más bien baja la probabilidad de ocurrencia de que estalle un conflicto limítrofe en América Latina (García, 2015; Bartolomé, 2013; Tellería, 2004). En efecto, sin desconocer que en determinadas coyunturas algunos conflictos puedan subir de tono y derivar hacia escenarios de mayor tensión,<sup>56</sup> los diferendos limítrofes existentes (ver Tabla 6), algunos de los cuales se prolongan ya durante varios siglos, han permanecido como reivindicaciones territoriales históricas o han sido una poderosa herramienta para consolidar un sentimiento de lealtad hacia la “nación”, siguiendo la afirmación realizada por Cairo y Lois cuando dicen:

---

<sup>56</sup> Al respecto cabe recordar los problemas fronterizos que en agosto del 2015 estallaron entre Venezuela y Colombia después que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara cerrar pasos fronterizos y decretara el estado de excepción en respuesta a un ataque de presuntos paramilitares y contrabandistas colombianos que dejara como saldo a tres soldados bolivarianos heridos. Tanto en este conflicto, como en la reactivación de la disputa en torno a Essequibo, las causas parecerían sobrepasar problemas limítrofes entre los Estados e incorporar variables más complejas ligadas al control geopolítico de la región.

“No se pueden entender la mayoría de las disputas activas hoy en día si no se tiene en cuenta el nacionalismo con énfasis territorial que se desarrolla en algunos Estados latinoamericanos, especialmente durante el siglo XX, y que va acompañado de un adoctrinamiento territorialista de sus poblaciones” (Cairo y Lois, 2014: 63).

**Tabla 6. Conflictos fronterizos latentes en América Latina y el Caribe en 2018**

Estados en conflicto	Motivo del conflicto	Duración del conflicto	Situación 2018
Cuba-Estados Unidos	Base Guantánamo	Desde la primera ocupación militar de Estados Unidos (1899-1902) a la isla y la declaratoria de la Constitución de Cuba.	
Haití-Estados Unidos	Isla Navassa	Esta isla, ubicada a 170 km al sur de Guantánamo, es administrada por los Estados Unidos a través del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Haití reclama su soberanía desde 1801.	
Guatemala-Belice	Guatemala reclama 12.272 km <sup>2</sup> equivalentes al 50% del territorio de Belice.	La disputa inició en 1859 a raíz de la firma del acuerdo entre Reino Unido y Guatemala.	Ambas naciones acordaron en 2008 elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), previa la realización de una consulta popular en cada país.
Colombia-Venezuela	Colombia reclama la soberanía sobre la isla Los Monjes y las aguas del golfo de Venezuela.	El área en disputa encierra una gran riqueza petrolífera. El diferendo está presente desde 1941 cuando se suscribió el tratado de límites entre los dos países.	
Venezuela-Guyana	Cuenca del río Esequibo, también rica en petróleo.	En 1962 Venezuela desconoció el fallo de 1899 suscrito por Estados Unidos, Rusia y Reino Unido que estableció la frontera entre ambos países.	En 2015 Guayana dio paso a la exploración petrolera por parte de Exxon Valdez en el área del conflicto, lo que motivó el rechazo de Venezuela. Los dos países están a la espera de la intervención de la ONU para solucionar este conflicto limítrofe.
Surinam-Guyana Francesa-Francia	Área conocida como el New River Triangle en Guyana y región de Tigru en Surinam.	Indefinición de la posesión del río Corentyne y de la demarcación de aguas territoriales en un área aproximada de 15.600 km <sup>2</sup> , rodeada por los ríos Boven-Corentyne y Koetari. El área está en manos de Guayana y Surinam desconoce el territorio ocupado.	
Bolivia-Chile	Acceso territorial al mar por parte de Bolivia.	Desde 1879 con la Guerra del Pacífico Bolivia reclama a Chile una salida al mar.	En el tercer trimestre del 2018 la CIJ determinó que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia que este país tenga una salida al mar.
Uruguay-Brasil	Isla Brasileira y Rincón de Artigas (22.000 ha).	Brasil y Uruguay reclaman la soberanía de estos dos territorios desde mediados del siglo XIX.	

Estados en conflicto	Motivo del conflicto	Duración del conflicto	Situación 2018
Argentina-Reino Unido	Islas Malvinas	El reclamo de Argentina data de 1833, cuando los británicos tomaron posesión de las islas.	Según declaraciones de Macri, Argentina no dejará de reclamar la soberanía pero pretende evitar que este asunto se convierta en el eje de su relación con Reino Unido.
Argentina-Chile-Reino Unido	Los tres países presentan reclamos sobre territorios superpuestos en la Antártida.		En 2012, el Reino Unido nombró a una parte de la Antártida <i>Queen Elizabeth Land</i> . Argentina consideró la designación como un ataque y una provocación en un territorio que estaría parcialmente bajo su soberanía.
Colombia-Nicaragua	Archipiélago San Andrés	Los dos países disputan desde 1980 un territorio marítimo que posee siete cayos que son un importante destino turístico y una zona marítima de 50.000 km <sup>2</sup> rica en pesca.	En 2011 la CIJ falló contra Colombia. Dictaminó que los siete cayos seguirían bajo la soberanía colombiana, no así las aguas que los rodea. Otorgó a Nicaragua un área de explotación económica exclusiva de 90.000 km <sup>2</sup> . Diez días después de conocer el fallo, el presidente Santos anunció que no lo acataría y presentó una serie de contrademandas. Se espera un pronunciamiento de la CIJ al respecto hacia finales de 2019 o inicios de 2020.
El Salvador-Honduras	Isla Conejo, cercana al Golfo de Fonseca.	Concluida la Guerra del Fútbol, Honduras ocupó la Isla Conejo como parte de los costos que le había ocasionado el ejército salvadoreño. En 1992 luego de varias disputas diplomáticas, la CIJ confirmó la sentencia a favor de Honduras. El Salvador reclama la soberanía de la isla.	En 2006 en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (Nicaragua), El Salvador presentó el Libro Blanco de las Fuerzas Armadas que incluía a la Isla Conejo como territorio salvadoreño. Dos años más tarde la disputa se reactivó. Actualmente la isla es motivo de controversia y ambos países están dispuestos a llevar el tema a instancias internacionales.
Perú-Chile	Triángulo terrestre de 37.610 km <sup>2</sup> .	Ambos países interpretan de manera distinta el tratado de límites de 1929 y la sentencia que emitió la CIJ en 2014 respecto al límite marítimo de la frontera.	El diferendo se reactivó en 2014 a raíz de la creación de un nuevo distrito peruano en la frontera ente ambos países.

Fuente: García Pinzón, 2014; Cairo y Lois, 2014; Arriaga-Rodríguez, 2013; Serbin coord., 2007; Ibañez, 2012; Orozco, 2001; Serrano Monteavaro, 2012.

Elaboración: Propia

En ausencia de confrontaciones reales, para justificar la centralidad de la seguridad, fuertemente asimilada a la noción de defensa, se elaboró un sofisticado andamiaje conceptual, tanto en los ámbitos multilaterales, como al interior de los países, orientado a matizar las políticas de seguridad bajo diversos calificativos: seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad democrática, seguridad integral, seguridad cooperativa (Garzón, 2012).

No todos los estudiosos de las fronteras parecieran estar de acuerdo en la tendencia a la securitización y consiguiente militarización de los espacios fronterizos. Para



Grimson, por ejemplo, “en muchas fronteras (...) el abandono de la hipótesis del conflicto bélico (años 90 del siglo pasado) fue seguida de una desmilitarización” (2005b: 14), mientras que Andreas (2003), por su parte, fundamenta que la desmilitarización de las fronteras constituyó una respuesta al auge del neoliberalismo y la consecuente liberalización económica:

“hay una variación histórica en las prioridades de control fronterizo. Aunque la defensa militar y la regulación económica han sido tradicionalmente preocupaciones centrales en las fronteras, en muchos lugares los Estados se están reconfigurando (...) la importancia del territorio persiste pero hay un cambio en el énfasis. En muchos casos una aplicación más intensiva de la ley está acompañada de la desmilitarización y la liberalización económica de las fronteras” (citado por García Pinzón, 2014: 229).

La realidad en la segunda década del siglo en curso resulta contraria a las miradas de Grimson y Andreas sobre este particular pues no existen evidencias para afirmar que América Latina no esté también inscrita en una tendencia mundial a “fortificar” las fronteras. A tono con tendencias mundiales orientadas a combatir el narcotráfico, controlar los cultivos de sustancias ilícitas, reaccionar frente a los indetenibles flujos de migración, en América Latina ha ido tomando fuerza la idea de la inseguridad y peligrosidad de las áreas fronterizas. No solo se considera que estos espacios son áreas proclives a altos niveles delincuenciales, sino que pueden estar permeadas por la amenaza terrorista, lo que justifica la puesta en marcha de procedimientos de extrema intimidación y control. Walther Bernecker señala al respecto que los flujos de movilidad humana han contribuido a reforzar “las medidas de ordenamiento y de seguridad de los Estados para ‘cerrar’ sus fronteras. Las funciones de las fronteras en cierto sentido han sido dilatadas” (Bernecker, 2004: 83). Esta constatación coincide con una tendencia mundial que, desde inicios del presente siglo, ha empujado a colocar el acento en los niveles de seguridad y control de las fronteras, a tono con las “amenazas” que el discurso hegemónico situó en el centro de las preocupaciones mundiales a raíz de los atentados que sufriera la ciudad de New York y del incremento sin precedentes de los flujos migratorios (Amoore, 2006; Anderson y O’Dowd, 1999).

Es en este contexto que Wendy Brown discute en *Estados amurallados, soberanía en declive*, que las fronteras de los Estados se han vuelto no solo más militarizadas, sino más “fortificadas” y que lejos de ser instrumentos de protección en el sentido clásico - contra otros Estados-, se han convertido en elementos de contención contra agentes no estatales transnacionales percibidos como amenazas.

“Los Estado nación, ricos o pobres, muestran un deseo apasionado de construir muros. (...) Nos enfrentamos no solo a las barreras, sino también a pasos a través de ellas que separan el tráfico de los negocios de alto nivel de los viajeros ordinarios y de aquellos que desean pasar pero son considerados sospechosos por razón de su origen o de su apariencia” (Brown, 2015: 28).

Reconocer la primacía de una narrativa que se ha impuesto a nivel mundial desde el momento en que Estados Unidos declarara la guerra al terror, así como el sometimiento de la mayor parte de los Estados a las estrategias definidas en este marco, puede conducir a minusvalorar intereses que al interior de los países de América Latina pueden usufructuar de este escenario. En efecto, la realidad actual sugiere que en la mayor presencia militar y el acrecentamiento de los controles en las regiones fronterizas participa una variable adicional vinculada con la renovada visión de las fronteras como lugares estratégicos. De áreas marginadas, éstas han pasado a ser consideradas como espacios de renovada importancia dentro de la lógica del crecimiento económico. En el proceso de resignificación de las fronteras, no pasa desapercibido para los Estados latinoamericanos el potencial de sus bienes naturales (biodiversidad, minerales, petróleo, agua, tierra), como tampoco las provechosas condiciones que brindan las fronteras para instalar empresas maquiladoras o su decisiva ubicación geográfica para facilitar la circulación y distribución de la producción orientada al comercio exterior. Desde esta mirada, la tendencia a la securitización de las regiones fronterizas estaría, por tanto, articulada al avance de la frontera extractiva y a la comercialización y exportación de bienes primarios, variable que se explorará con más detalle en la siguiente sección.

A la luz de lo señalado, es posible argumentar que el interés de las nuevas entidades regionales de América Latina por avanzar en una postura de defensa y seguridad alejada del predominio de los Estados Unidos, en especial, la constitución del CDS, aunque importante, es insuficiente en miras a la construcción de una política autónoma. La consecución de políticas soberanas y de autodeterminación en este campo supone, como lo señala Elsa Bruzzone “deshacernos de la OEA, del TIAR, de la Junta Interamericana de Defensa, en resumen, de todo el sistema interamericano de defensa elaborado por Estados Unidos desde el año 1948” (citado por Boron, 2013: 89). Los gobiernos latinoamericanos deberían renunciar a participar en ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas de Estados Unidos, al tiempo que culminar la conformación de la CELAC y fortalecer su funcionamiento como una institución con capacidad de emitir políticas que comprometan su cumplimiento entre los Estados de la

región. A las medidas añadidas por Bruzzone, Boron señala que enfrentar la dependencia armamentística respecto a Estados Unidos lleva a la necesidad de reemplazar el armamento de origen estadounidense por otro equivalente pero procedente de países con los cuales no exista una hipótesis de conflicto (Ibid.: 170).

Las declaraciones de América Latina como zona de paz podrían a su vez complementarse con políticas regionales conducentes a la moratoria en la importación de armas pequeñas y la adopción de estrictas medidas de uso por parte de personas particulares, incidiendo en la disminución de los niveles de posesión de armas, y aminorando una de las amenazas que mayores conflictos acarrea en las fronteras. La declaración de una zona de paz debería ser consistente con la disponibilidad de un stock de armamentos estrictamente indispensable cuyos parámetros deberían ser materia de un estudio específico. La carrera armamentista representa una amenaza mundial, tanto por sus efectos sociales como ambientales. Los únicos beneficiarios de este proceso son un puñado de grandes corporaciones y países que presionan a que recursos económicos que de otra forma podrían orientarse para solidificar procesos productivos o demandas sociales, se destinen para la destrucción. En el marco de las declaratorias de América Latina como zona de paz, esta región podría constituirse en un referente universal para impulsar una moratoria necesaria al armamentismo.

## **2.4. El doble proceso de fronterización/desfronterización**

Los contenidos expuestos en las secciones anteriores dan cuenta de dos procesos interrelacionados y aparentemente contradictorios: el fortalecimiento de las políticas de seguridad de las fronteras, por un lado, a tono con un discurso hegemónico, y, por otro lado, la ampliación de la frontera extractiva, en donde la implementación de la IIRSA desempeña un papel central, haciendo eco de las crecientes necesidades de recursos que demanda la economía global para su funcionamiento (*space-of-flows*) y la consecuente incorporación de nuevas áreas (*space-of-places*). Este doble proceso de fronterización/desfronterización, desplaza o por lo menos coloca en tensión, temas que tienen que ver con la defensa de la soberanía y la integralidad del territorio del Estado-nación y entra en contradicción con otros asuntos más complejos como la construcción de la plurinacionalidad, poniendo en riesgo la existencia de pueblos, culturas y comunidades que han vivido históricamente en estas áreas y de las que no hemos podido aprender que existen otras formas de vivir en la frontera. En efecto, al mismo tiempo que

la IIRSA impulsa la ampliación de la frontera extractiva, lo que implica una dinámica de desfronterización por la mayor libertad para la circulación de capitales y mercancías, y acarrea el aumento de la conflictividad y violencia asociada al extractivismo, refuerza también una dinámica de refteronterización y de seguridad alimentada, adicionalmente, por un discurso que a nivel mundial ha posicionado la idea de la militarización de las fronteras. Dos fuerzas -desfronterización y fronterización- que aunque en apariencia contrarias, no son sino dos caras de una misma política de aplicación y profundización de un modelo extractivo que actúa en perjuicio de las poblaciones asentadas en los antes confines del territorio. En otras palabras, las tendencias de fronterización y desfronterización que se advierten y que toman lugar simultáneamente, reflejan el papel de las fronteras “en la producción de los tiempos y los espacios del capitalismo global” (Mezzadra y Neilson, 2013: 22): la forma en como las actividades extractivas, los sistemas de conexión multimodales, la presencia de fuerzas de seguridad, se desarrolla en continuidad con la expulsión de poblaciones de sus territorios y con la exclusión de derechos.

La dificultad de conciliar dos agendas portadoras de lógicas distintas -la de comercio y la de seguridad-, no solo da cuenta de las complejidades de organizar coherentemente los territorios, sino del limitado papel de “un centro propiamente soberano de poder político”, utilizando la expresión de Mathew Coleman (2005: 189, citado por Brown, 2015: 138) para equilibrar y gestionar ambas agendas. Por irresoluble y compleja que se presente la tensión entre comercio y seguridad, la hegemonía del neoliberalismo y de la violencia resultante hacen imposible, al decir de Brown, “separar las dimensiones de seguridad y economía que estructuran la política internacional de fronteras” (Ibid.: 142). Los muros, tanto como la militarización de las fronteras, son respuesta a políticas de destrucción e ingobernabilidad, a las políticas que emanan de un orden cada vez más globalizado y a la profundización de un nuevo ciclo de acumulación por desposesión.

Con gran probabilidad, Esmeraldas es una de las áreas que con mayor claridad concentra esta doble problemática en medio de un patrón de colonialidad que racializa a sus poblaciones y sus territorios. Eso es precisamente lo que esta tesis busca discutir con el estudio de caso que se desarrolla más adelante.

## **Capítulo 3. La construcción de las fronteras en Ecuador**

---

En este capítulo se propone un recorrido histórico que a la vez que intenta dar cuenta, discute y analiza cómo se fue consolidando Ecuador como Estado-nación o, dicho en otras palabras, como tomó control de un territorio, con unos límites geográficos más o menos definidos, sobre el que aplicó una particular constitucionalidad, para llegar a la actualidad cuando Ecuador asume el carácter de Estado Plurinacional. Las fronteras que delimitan lo que hoy es el Estado ecuatoriano han pasado por distintas dinámicas. En un inicio, los pueblos originarios mantenían una singular delimitación de sus territorios, diferente a las actuales separaciones limítrofes entre los Estados. La colonia impuso una demarcación territorial que perduró hasta el siglo XVIII, funcional a la Corona en términos administrativos y económicos. Sobre la referencia de la demarcación colonial, se conformó el Estado ecuatoriano a inicios del siglo XIX, con fronteras que se fueron reestructurando hasta cerrarse definitivamente hacia finales del siglo XX, cuando a la luz de procesos mundiales y regionales, las fronteras enfrentan una cada vez mayor militarización y una ampliación de los flujos comerciales a través de sus territorios.

### **3.1. Fronteras y construcción de un proyecto nacional único**

Durante la colonia, españoles y portugueses controlaban territorios no delimitados por fronteras. Dando continuidad a la lógica de conquista desaforada que siguieron los imperios para imponer su dominio sobre el territorio de América, los sucesivos cambios en la delimitación territorial de las colonias obedecieron, al decir de Bernecker (2004), a la necesidad de las coronas de ordenar los territorios en función de sus intereses, sin perseguir en ningún momento consolidar la integridad territorial de los territorios sometidos.

Con la restauración de la monarquía portuguesa (1640) surgió un intento por consolidar las fronteras de las posesiones americanas que no prosperó (Schallenger, 2014). Este interés se revitalizó durante las reformas ilustradas del siglo XVIII orientadas a consolidar los límites de los imperios coloniales (Navarro, 2011) que se percibían amenazados por la competencia externa y las contradicciones internas. Sin embargo, es solo luego de la independencia, en el primer tercio del siglo XIX que, junto al proceso de conformación de los Estados-nación, adquiere importancia la fijación de fronteras dentro del territorio que hoy corresponde a América Latina y el Caribe.

¿Cuál fue el camino que siguieron los Estados latinoamericanos para establecer sus fronteras? Como lo sucedido en casi todo el mundo, incluso en Europa,<sup>57</sup> la fijación de las fronteras no fue el producto de diferencias culturales previas ni se corresponde con separaciones culturales manifiestas. Las fronteras tampoco fueron trazadas luego de que cada Estado-nación consolidara una dinámica particular dentro de un territorio ni se establecieron como resultado de la identificación de la “otredad”.

En el texto de Benedict Anderson, *Comunidades Imaginadas*, se demuestra que en la consecución de la independencia, el temor a las movilizaciones sociales (como los levantamientos de indios y esclavos) y la “delgadez social” de los movimientos independentistas, marcaron una senda de carácter más bien reaccionario en la conformación de los recién formados Estados-nación. Los procesos independentistas, siguiendo el argumento de Anderson, estuvieron en manos de una reducida élite que no mostró mayor interés de incorporar al resto de la sociedad a la vida política. Eran criollos que compartían no solo la lengua, la religión y las “maneras” de la metrópoli de la que buscaban la independencia, “sino que disponían en principio de los medios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos. Constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada” (Anderson, 1993 [1983]: 93). La constitución de Estados-naciones fue en este sentido un hecho casi fortuito que se sustentó en la división administrativa territorial heredada desde la colonia. En efecto, los límites internos de los Estados fueron decididos sobre la base del principio *uti possidetis*, que implicaba tomar en cuenta el trazado de las últimas fronteras administrativas coloniales. Dejando a un lado las fronteras de los antiguos virreinos, la delimitación de las nuevas fronteras tenía que seguir los límites marcados por las anteriores audiencias o capitanías (Bernecker, 2004) de modo que hacia 1824, luego de la batalla de Ayacucho que signó la independencia de España, existían ocho Estados en el territorio que hoy es América Latina. Motivados por el interés de establecer una relación directa con las metrópolis y como una salida para zanjar las diferencias políticas internas, para 1830 ya eran once los Estados, “quince en 1840, diecisiete en 1844, diecinueve al término de la guerra hispano-norteamericana de 1898 y por último veinte cuando en 1903 se desmembró el territorio

---

<sup>57</sup> En el caso europeo hay autores como Agnew (2008) que explícitamente dudan si existía un sentido de “nación” durante la constitución de los Estados en el viejo continente. Lois y Cairo (2011: 18) señalan que las fronteras de los Estados europeos fueron fijadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX (1850-60), a raíz del tratado de Westfalia que puso fin a las guerras que involucraron a varios países europeos.

colombiano tras la conquista de su independencia por Panamá gracias al apoyo de Estados Unidos” (García Pérez, 2005: 216).

En la construcción de los nuevos Estados, y sin más referentes dentro de la concepción de los sectores dominantes locales que Europa, la fijación de las fronteras fue entendida bajo el supuesto erróneo de que Estado, territorio y nación son lo mismo, sin tomar en cuenta las rupturas sociales y étnicas (racistas) de la colonia, sino más bien afianzando la colonialidad que caracteriza a nuestras sociedades. En palabras de Mignolo:

“La constitución histórica de la identidad criolla durante el gobierno colonial quedó sepultada, y las élites se alienaron en su adopción y adaptación de los proyectos republicanos y liberales. En Europa, el republicanism y el liberalismo fueron doctrinas burguesas con las que se hizo frente a la monarquía y al poder despótico, a la Iglesia Católica, que coartaba las libertades individuales, y, por último, al control de la economía mercantilista por parte de la monarquía, que ponía un freno al avance del libre comercio, que prometía enormes beneficios a la clase socioeconómica emergente. Ninguna de estas condiciones existía en las colonias que habían pertenecido a España y Portugal. En ese sentido, la élite criolla no supo ver la situación con claridad. En lugar de dedicarse al análisis crítico del colonialismo (...) eligieron *emular* a la intelectualidad de Europa, imaginando que las historias locales podían repararse siguiendo el ejemplo de Francia e Inglaterra y ocultando el colonialismo (en el que esos dos países estaban cada día más involucrados) bajo la alfombra.” (Mignolo: 2007: 90, las cursivas son del autor).

Las fronteras se establecieron “de acuerdo con las nociones tradicionales europeas de comprensión de la historia y la espacialidad, es decir, siguiendo la lógica de la oposición entre naturaleza y cultura” (Serje, 2011: 148). Las primeras discusiones sobre los límites territoriales (1897-1959) se basaron en la tesis de que las fronteras eran áreas despobladas, salvajes, que debían ser domesticadas, habitadas y civilizadas bajo la hegemonía “blanca” (Newman y Paasi, 1998). Esto significó que en ningún caso fueran tomados en cuenta los territorios en los que vivían los pueblos originarios, menos aún que se respetaran los derechos de propiedad de los pueblos indios sobre sus territorios pues, “los sistemas tradicionales de relación con la tierra no fueron considerados, y tampoco se reconocieron –en general, al menos en los países de colonización española- territorialidad y derechos de propiedad, en el sentido capitalista, a los habitantes preexistentes” (Navarro Floria, 2011: 213). Los territorios internos a conquistar fueron considerados como desiertos, vaciados de su historicidad y de las culturas que los habitaban.

“Si en el siglo XVIII, en el marco de las exploraciones científico-políticas de la Ilustración, los europeos habían llamado ‘desierto’ no solamente a territorios deshabitados o estériles sino a los no apropiados o trabajados según las pautas capitalistas –fueran páramos, montañas, selvas impenetrables o estepas-, en el



siglo XIX, en el contexto de la formación territorial de los nuevos estados-nación, el término sufrió la asignación de un *sentido político*. (...) fue la propia concepción del indígena como salvaje la que convertía *ideológicamente* en desierto –es decir, vacío de civilización- cualquier espacio ocupado por las naciones originarias no sometidas a los estados” (Navarro Floria, 2011: 213, las cursivas son del autor).

De ahí que varios autores coincidan en afirmar que en el proceso de constitución de las fronteras nacionales de América Latina las tensiones fueran particularmente relevantes con las naciones indias pues su trazo no consideró su presencia, no tomó en cuenta las realidades étnicas o lingüísticas previamente existentes (Porto-Gonçalves, 2006), ni reparó en la destrucción de las unidades políticas representativas o la unión artificial de grupos étnicos diferentes o antagónicos. Así se fragmentaron territorios de pueblos como los Awá, Siona y Siekopai (antes llamados Sekoya) divididos por las fronteras entre Ecuador y Colombia; de los Shuar y Achuar que se separaron al fijarse las fronteras entre Ecuador y Perú, o de los cuarenta y cinco pueblos indígenas que viven en territorio brasileño y en territorios de países vecinos, según da cuenta el Instituto Socioambiental.<sup>58</sup> Schallenger (2014) documenta que la resistencia de los pueblos indios entre Brasil y Argentina por preservar sus territorios comunes desde finales del siglo XIX e inicios del XX, fue asumida como un problema que atentaba contra el ideal de la nación.

De manera más genérica, como lo dice Agnew (2008: 178), las fronteras fueron utilizadas para situar identidades opuestas y excluyentes a las pre-existentes o se levantaron sin reconocer que se imponía una división arbitraria y alteradora de los procesos sociales, simplificadora o distorsionadora de lo existente. Navarro Floria detalla en los siguientes términos el proceso de vaciamiento cultural que operó a medida que se cerraban las fronteras de las nuevas naciones:

“(L)as naciones indígenas soberanas reconocidas como tales por los tratados internacionales que firmaba la Corona española pasaron a ser consideradas meras asociaciones estructuradas por el parentesco como ‘tribus’, ‘hordas’ o ‘bandas’. Esta metamorfosis léxica se operó tanto en el plano normativo como en el imaginario fundante de las nuevas repúblicas, pasando los tratados a ser simples actos unilaterales de derecho interno denominados ‘acuerdos’, las fronteras externas con el mundo indígena se denominaron ‘fronteras internas’, y la guerra de conquista pasó a ser un combate de policía contra el bandolerismo y la delincuencia. La experiencia de los mundos fronterizos, con toda su riqueza de contactos, permeabilidad, lógicas mestizas y convivencia pacífica, fue rápidamente olvidada, al mismo tiempo que esos espacios híbridos desaparecían

---

<sup>58</sup> Información extraída de <http://pib.socioambiental.org/es/c/0/1/2/indios-e-militares>, acceso el 26.08.15.

bajo el peso homogeneizador de los Estados” (Navarro Floria, 2011: 212, las comillas son del autor).

En todos los casos, la propuesta territorial de Estado, encarnada en el discurso de sectores sociales herederos del poder económico y político de la colonia, que se auto proclamaron portadores de una visión nacional, resultó en el desconocimiento y menosprecio hacia las formas de organización y territorialidad de otros sectores contenidos en el territorio. La construcción de la territorialidad de los nacientes Estados significó la imposición de intereses particulares y la construcción de procesos de homogenización y unificación que ocultaron diferencias culturales existentes.

En la construcción de los Estados-nación y, consiguientemente de sus fronteras, la literatura identifica que el camino recorrido por los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay) y aquel seguido por el resto de las naciones americanas, si bien comparten el desconocimiento de otras identidades acusan, al mismo tiempo, sendas distintas. En el primer caso, los Estados optaron por conquistar el territorio poblado por pueblos indios y su exterminio como “forma expeditiva de homogeneizar la población nacional y de ese modo facilitar el proceso de constitución de un Estado-nación moderno, a la Europea” (Quijano, 2014c [2000]: 813). Se buscaba reemplazar a los habitantes originarios con migrantes europeos (Navarro Floria, 2011; Delrio et al., 2010). En Uruguay alrededor del primer tercio del siglo XIX las poblaciones indígenas asentadas en ese territorio fueron arrasadas (Richeri, Ordoqui y Hernández, 2009); entre 1876 y 1885, los pueblos indios que habitaban en lo que hoy es Argentina fueron víctimas de políticas genocidas que llevaron a su casi total exterminación física (Navarro Floria, 2011: 216) y en las tres primeras décadas del siglo XX Chile hizo lo propio (Quijano, 2014c [2000]: 813). En el resto de la América Latina, durante la construcción de los Estado-nación e independientemente del peso demográfico de indios, negros y mestizos, la élite criolla negó a la población su participación en la organización de los nuevos territorios políticos, pues siguieron siendo poblaciones colonizadas en tanto indios, negros y mestizos. En estos países, las poblaciones originarias fueron ignoradas e inferiorizadas, reeditando la misma visión que los conquistadores tenían de los pueblos indios de América, bajo un nuevo patrón de poder, la colonialidad que se mantendrá hasta la actualidad y en la que, parafraseando a Echeverría, “los sobrevivientes se inventarían una manera de vivir” (2010 [2006]: 213).

El sometimiento de la población originaria a arreglos territoriales y políticos decididos al margen de su visión posibilitó acallar los movimientos de resistencia

protagonizados por algunos sectores como lo sucedido con los yaquis y apaches de Sonora, los mayas de Yucatán y Quintana Roo, los araucanos del sur de Chile o la gente del Putumayo en Colombia y Ecuador (Navarro Floria, 2011: 212). Sobre la base de estos antecedentes, Quijano concluye:

“Tales nuevos Estados no podrían ser considerados en modo alguno como nacionales, salvo que se admita que esa exigua minoría de colonizadores en el control fuera genuinamente representante del conjunto de la población colonizada. Las respectivas sociedades, fundadas en la dominación colonial de indios, negros y mestizos, no podrán tampoco ser consideradas nacionales, y ciertamente mucho menos democráticas. Esto presenta una situación en apariencia paradójica. Estados independientes y sociedades coloniales” (Quijano, 2014c [2000]: 817).

De esta doble estrategia se desprenden dos imaginarios, mientras en el Cono Sur las áreas de frontera y lejanas a los centros urbanos fueron fundamentalmente consideradas como “desiertos” (Navarro Floria, 2011), en los restantes países, los territorios habitados por pueblos originarios fueron a menudo calificadas como en el caso del Ecuador de “selva con sus pueblos bárbaros y desconocidos”, donde los Estados se mostraron ajenos y distantes. El siguiente pasaje, tomado del libro *Viajes científicos por la República del Ecuador, verificados y publicados por orden del Supremo Gobierno de la misma República. Vol. III*, refleja que según el discurso promovido desde el Estado, los territorios fronterizos de Esmeraldas estaban poblados por seres que vivían en estado salvaje:

“El viajero que (...) llega a Playa de Oro, se cree de repente trasladado de las selvas americanas al África Central. (...) Los Cayapas no son amigos de gastar en vestido, pero (...) ¡Pobres africanos que del estado de esclavitud pasaron al de su primitiva salvajez!, y de este estado no se levantarán, mientras no se lleguen al contacto y roce con las clases civilizadas (...) Al observar tanta abyección y tanto desamparo, se entristece el corazón y se siente una profunda compasión por los infelices negros” (Teodoro Wolf, 1879, citado por Espinosa, 2008: 70).

No obstante el desconocimiento y subordinación de las poblaciones originarias, los Estados latinoamericanos en ciernes abrían en lo posterior las puertas al desafío del nacionalismo y a la construcción de la identidad nacional (Agnew, 2008). ¿Cómo fue posible que entidades tan endeble y sin unidad previa devinieran en Estados-nación? ¿Cómo lograron construir una “comunidad imaginada”? Para Benedict Anderson (1993 [1983]: 81-83), ni el fortalecimiento del control de España durante el período de 1759-1788 impulsado por Carlos III, ni la difusión de las ideas de la Ilustración en la segunda

mitad del siglo XVIII, explican por sí solos este proceso. Tampoco explicaría, el surgimiento de un sentido nacionalista el hecho de que el desarrollo de estas nuevas unidades políticas haya seguido un patrón de autonomía tanto por las dificultades de comunicación existentes en aquella época, como porque las medidas comerciales impuestas por España las convirtieron en zonas económicas separadas. La concepción de la nacionalidad se explicaría, siguiendo a Anderson, como una reacción de los criollos a la posición subordinada otorgada por las metrópolis y que se alimentaba de las ideas de contaminación biológica y del criterio extendido de los americanos como una raza inferior: “ni el interés económico, ni el liberalismo o la Ilustración, podrían haber creado *por sí solos* la *clase* o la forma de la comunidad imaginada que habrá de defenderse contra las depredaciones de estos regímenes; dicho de otro modo, ninguno de estos conceptos proveyó el marco de una nueva conciencia -la periferia de una imagen que apenas se distingue- por oposición a los objetos centrales de su agrado o aversión. Al realizar *esta* tarea específica, los funcionarios criollos peregrinos y los impresores criollos provinciales desempeñaron un papel histórico decisivo” (Anderson, 1993 [1983]: 101, las cursivas son del autor).

A lo largo del siglo XX, aunque con menor intensidad que lo sucedido durante el siglo anterior, se prolongó el proceso de consolidación de las fronteras internacionales de los países que hoy conforman América Latina, al tiempo que se avanzaba en la conquista y apropiación de las fronteras internas. De ahí que no resulte extraño que para el primer tercio del siglo XX, en la región se siguieran sucediendo algunos conflictos como la Guerra del Chaco (1932-1938) entre Bolivia y Paraguay considerado, para entonces, como el evento más sangriento y violento registrado en la región. Aunque algunas de las disputas respondieron a imprecisiones en el trazado de las fronteras, como el largo diferendo entre Ecuador y Perú (1830-1998) o el conflicto que tuvo lugar entre Colombia y Perú (1932-1933) por la falta de delimitación en sus fronteras amazónicas, en la proliferación de otros litigios suscitados en las primeras décadas del siglo XX, los afanes expansionistas de Estados Unidos y algunas potencias europeas son considerados como el factor instigador (Halperin Donghi, 1990; Ayerbe, 2002). Y es que particularmente con el inicio de la Guerra Fría, América Latina se convirtió en un escenario de disputa y de creciente control por parte de los Estados Unidos.

Al respecto cabe recordar algunos hitos. La aprobación en 1947 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) durante la reunión de cancilleres efectuada en Río de Janeiro, el mismo que comprometía a los Estados americanos a actuar

de manera conjunta frente a la eventualidad de que uno de sus Estados fuera atacado, una suerte de continuidad de la Doctrina Monroe, forjada en 1823, con el propósito de enfatizar la no admisión de la intromisión europea en el continente americano y subrayar “América para los americanos”. Un año más tarde, la Novena Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá no solo creó a la Organización de Estados Americanos, sino que impulsó la conformación de un bloque político-militar al servicio de Estados Unidos y la puesta en marcha de una línea de contención al comunismo que obligó a los países a romper vínculos comerciales y diplomáticos con la Unión Soviética (Guerra Vilaboy, 2001; Ayerbe, 2002). En 1951, en la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores efectuada en Washington, se aprobó la Resolución sobre Fortalecimiento de la Seguridad Interior que comprometió a los países de la región a reforzar sus fuerzas armadas, a combatir cualquier agresión dirigida contra alguno de los países del hemisferio occidental, y a aumentar la producción de materias primas necesarias para la defensa colectiva. Tales acuerdos posibilitaron la suscripción en los siguientes años (1952-1955) de 12 convenios bilaterales de asistencia militar, y sustentaron el incremento de las capacidades represivas de los ejércitos latinoamericanos (Suárez, 2003; Ayerbe, 2002). Creadas las condiciones, la venta de los remanentes de armas de la segunda Guerra Mundial fue también una oportunidad que los Estados Unidos extrajeron de la reunión.

En este marco puede entenderse que a lo largo de la primera mitad del siglo XX, bajo el argumento de contención al comunismo y el cambio de énfasis en el concepto de seguridad, que desde entonces se volcó con más fuerza hacia la seguridad interna, haya sido posible justificar la invasión a Guatemala en 1954 y las agresiones a Cuba tras la revolución de 1959.

Paradójicamente este período coincide con el advenimiento de un primer proceso de integración regional que inició en 1959 con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio –ALALC-, que continuó en 1961 con la conformación del Mercado Común Centroamericano –MCCA-, y, más tarde, en 1968 y 1969, con la puesta en marcha de la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) y el Pacto Andino, respectivamente.

Aunque todos estos acuerdos regionales identificaban a la integración como un medio para ampliar los mercados internos, modificar la composición de las exportaciones y reducir la vulnerabilidad de las economías ante el deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios, no solo que pasaron por alto una intervención activa en las fronteras, sino que no implicaron una ruptura con el discurso de seguridad

prevaleciente. Lo contrario, de la mano con las doctrinas de seguridad nacional para entonces en boga, los países latinoamericanos atestiguaron un aumento de los niveles de seguridad y defensa militar, un mayor control sobre la población fronteriza, y el realce de discursos nacionalistas. Estos discursos representaron “un instrumento ideológico muy importante para la construcción, a conveniencia del grupo en el poder, de un sentimiento de pertenencia a una comunidad homogénea y unida, diferente a otras comunidades circundantes, poseedora de derechos históricos irrenunciables, particularmente territoriales” (Carrión y Llugsha comp., 2013: 136).

### **3.2. La invención de un país**

El siglo XVIII significó ante todo la reorganización de los espacios coloniales. Al agotarse la plata del Potosí, las espacialidades y especializaciones se modificaron, sobre todo a raíz de la aplicación de las denominadas reformas borbónicas adoptadas por Carlos III en el tercer tercio del siglo XVIII, dadas sus implicaciones económicas, administrativas y políticas. En esta dirección el Virreinato del Perú se dividió en dos unidades, el de Perú y el de Nueva Granada, y se creó posteriormente el Virreinato del Río de la Plata.

Tales cambios también afectaron a la Audiencia de Quito que luego de un período de incertidumbre, pasaría desde 1739 a ser parte de la zona de influencia del Virreinato de Nueva Granada.<sup>59</sup> Las tres regiones que para ese entonces conformaban la Audiencia, la Sierra Norte, con Quito como núcleo central; la Costa centro sur, aglutinada alrededor de Guayaquil; y, la Sierra sur, estructurada alrededor de Cuenca, tenían una organización económica y política que se habría consolidado desde fines de la colonia y que coexistió por décadas entre tensiones, conflictos y contradicciones.

Junto a estos tres ejes regionales, en el resto del territorio de la Audiencia de Quito existían apenas pequeños asentamientos de colonización en la Costa y pequeños poblados conformados en el declive oriental hacia la Amazonía durante el siglo XVI,<sup>60</sup> a cargo

---

<sup>59</sup> Cabe recordar que hasta 1717, la Audiencia de Quito más Guayaquil, pertenecieron al Virreinato de Lima. De 1717 a 1723, la Audiencia de Quito fue anexada al Virreinato de Nueva Granada. De 1723 a 1739, al suprimirse el Virreinato de Nueva Granada, la Audiencia de Quito pasó nuevamente a depender de Lima para regresar nuevamente al control de Bogotá en el período 1739-1804. En los 16 años siguientes (1804-1820), la provincia de Guayaquil fue parcialmente y luego totalmente anexada al Virreinato de Lima para pasar a depender entre 1822-1830 de las autoridades grancolombinas (Deler, 1987: 94).

<sup>60</sup> Cabe recordar que las ciudades españolas fundadas en la Amazonía a raíz de la conquista fueron al poco tiempo abandonadas porque rápidamente se agotó la explotación de oro para lo que fueron establecidas. El abandono de los asentamientos coloniales amazónicos obedeció también a levantamientos indígenas, el más célebre en 1599 que destruyó la ciudad de Sevilla de Oro, y fue también la consecuencia de rivalidades

fundamentalmente de misiones religiosas<sup>61</sup> que habrían logrado un frágil control administrativo. De hecho, el espacio colonial se topó con grandes obstáculos para insertarse en la Amazonía. No existía una estructura social donde introducirse, además de las dificultades de acceso. Por su movilidad y dispersión, las poblaciones selváticas, conformadas por grupos de cazadores-recolectores y agricultores itinerantes, habrían presentado una fuerte resistencia al control colonial que se agudizaría en el siglo XVIII con la expulsión de los jesuitas. De ahí que para varios historiadores, la incorporación de la Amazonía habría sido más formal que real (Deler, 1987; Ospina, 2004).

La Sierra norte, especializada durante la colonia en la producción de tejidos y alimentos para el centro de explotación minera de Potosí, lo que fue posible gracias a la presencia de abundante mano de obra familiarizada con la producción textil y disponible a través de formas de trabajo forzado (Deler, Gómez y Portais, 1983), hacia fines del siglo XVIII debió readaptar su economía una vez suspendido el flujo con este mercado y la incapacidad de competir con los tejidos franceses e ingleses (Cebrián, 1999). En esta dirección, trató de volcar su producción hacia el norte, a favor de las minas de Nueva Granada, buscando al mismo tiempo encontrar rutas alternativas que le permitieran liberarse del monopolio del puerto de Guayaquil. Si bien la producción textil continuó a lo largo de todo el siglo XIX, paulatinamente esta región fue modificando su patrón productivo para concentrarse en actividades agro-ganaderas orientadas a abastecer al mercado interno, lo que contribuyó a dinamizar la consolidación del sistema hacendatario.

“La declinación textil incrementó el valor de la propiedad de la tierra como instrumento de control de la fuerza de trabajo y de dominación política (...) conduciendo a una progresiva expropiación de las tierras de alta productividad que se mantenían aún en manos de las comunidades indígenas, y consolidando el monopolio de su propiedad entre los descendientes de los españoles y la Iglesia Católica. Como resultado, una parte significativa de la población indígena permaneció en las haciendas, sujeta a relaciones extraeconómicas de coerción (...), y las tierras de las comunidades se redujeron y desplazaron hacia

---

entre los encomenderos españoles en torno a la utilización de fuerza de trabajo en las minas o en la incipiente manufactura textil de la Sierra (Deler, 1987: 139-140).

<sup>61</sup> Resulta ilustrativo citar el papel que concede la historiografía oficial a las misiones religiosas, a quienes reconoce el mérito de “civilizar” esas tierras: “Se debe reconocer que entre los jesuitas hubo verdaderos talentos y gracias a ellos muchos territorios fueron descubiertos y civilizados (...) los jesuitas, luego del fracaso de los conquistadores españoles, fueron casi los únicos que se internaron por las regiones amazónicas de la Audiencia de Quito. Tengamos en consideración, que de acuerdo con la Cédula Real de 1563, se abría la posibilidad de extenderse por la región Amazónica en todos aquellos territorios no descubiertos, ni conquistados y fueron precisamente los jesuitas quienes emprendieron esa labor” (Martínez-Estrada, 2003: 105).

los páramos, conformando el patrón básico de estructura de la tenencia de la tierra que perdura en la Sierra” (Larrea, 2006: 14).

Pese a la crisis, que se prolongaría hasta 1860 y aún algunas décadas después, la Sierra central sería el centro político indiscutible, al punto que sería el sector de los ricos hacendados quienes habrían protagonizado el proceso de independencia que se extendería desde 1809 hasta 1822. Francisco Cebrián identifica en este proceso los primeros esbozos de un “sentimiento de identidad” pues considera que la Audiencia de Quito, con una estructura administrativa lo suficientemente consolidada, habría comenzado a “reclamar un funcionamiento autónomo, derivado tanto de los obstáculos físicos que separan a la Audiencia quiteña de (...) Granada (...) como del freno a las relaciones con el exterior” (Cebrián, 1999: 49).

En contraste con el declive económico que experimentaba la Sierra norte, en la Costa central el fin del siglo XVIII habría correspondido con el inicio del primer auge cacaotero que se extendería entre 1779 e incluso más allá de 1820, favorecido por las reformas borbónicas que impulsaron la liberalización del comercio, por la apertura del mercado mexicano y de Caracas. El espíritu de las reformas encontró en la Costa a un sector latifundista que además de acrecentar su poder en el nuevo escenario, creía en las bondades del libre comercio y del mercado y tenía interés en captar fuerza de trabajo y tierra (Deler, 1987). Aunque el cacao fue sin duda el producto que mayor dinamismo concedió a la economía regional, la producción de tabaco, caña y aguardiente, de frutas y sombreros de paja toquilla, también habría coadyuvado a ampliar el comercio de exportación, a desplazar el núcleo de la producción de riqueza económica de la Audiencia de Quito desde la Sierra centro norte hacia la Costa (Larrea, 2006) y a iniciar la progresiva adecuación del espacio nacional a la economía mundial.

En un estudio sobre las repercusiones de este primer auge del cacao, Contreras anota que entre 1765 y 1825 el promedio anual de las exportaciones de cacao fue de 50,9% (Contreras, 1994: 203). “Más importante que este porcentaje es el hecho de que fueron los ciclos de producción y exportación de cacao los que *dirigieron* la evolución del conjunto de las exportaciones” (Ibid.: 230, las cursivas son del autor). Tal crecimiento económico no habría en todo caso incidido sobre el resto del país. Esto sucedería más tarde, con el segundo auge de la exportación de cacao, una vez vencidas las barreras geográficas y establecidas nuevas condiciones en el espacio social.

La Sierra sur, finalmente, cuya conformación antes que responder a una continuidad histórica, fue el producto de la época colonial, habría fundamentado su



economía en la exportación de producción de quina o cascarilla, la cría de ganado a cargo de medianas y pequeñas propiedades para el consumo de las ciudades y para el comercio con el Perú; y, la operación de pequeñas minas de extracción de oro (Ospina, 2004). La diversidad del patrón productivo y las vinculaciones comerciales de la región habrían contribuido a que el dualismo indio-blanco característico de la Sierra centro norte no haya sido tan marcado en esta región. Con excepción de Cañar y de pequeños espacios rurales que habrían tenido una importante población indígena, la Sierra sur habría estado dominada por el mestizaje y por élites locales que no tenían interés en consolidar una hegemonía regional. “La clase dominante latifundista no tenía ni el poder económico para enrolar a una importante población, ni para asegurar una actividad económica estable”, de ahí que haya subsistido junto a “campesinos medios, comerciantes y artesanos con cierta capacidad económica independiente” (Ramón y Torres, 2004: 34 y 35). Este delicado equilibrio se habría visto afectado por las reformas borbónicas que debilitaron los lazos mercantiles con el exterior y por la crisis de la cascarilla atribuida a la pérdida de control estatal sobre el manejo de los bosques que ocurrió con la independencia (Ospina, 2004).

Hacia finales del siglo XVIII, lo que hoy es Ecuador habría sido, por tanto, un territorio con escasos enlaces inter-regionales y con un mercado interno casi inexistente. Cada una de las tres regiones representaba un espacio diferenciado en términos económicos, políticos, sociales y culturales, con tensiones entre unas y otras y con conflictos a su interior. A lo largo de la Sierra primaban los conflictos por el control de la tierra y de la fuerza de trabajo que se acentuaron a raíz del despegue de la exportación de cacao en la Costa y “la incapacidad económica de las élites regionales, de la Sierra centro-norte y sur, para desarrollar un proyecto hegemónico para superar la crisis y para articular a las élites cantonales y parroquiales” (Ramón, 2004: 142), mientras que en la Costa la bonanza de la que disfrutaron los sectores dominantes explicaría el apoyo que mostraron al régimen español durante el período 1809-1812, cuando comenzó a gestarse el largo proceso independentista que culminaría en 1830. La reorganización de los espacios coloniales definidos por la Corona lejos de impulsar la unidad funcional de la Audiencia de Quito, habrían agudizado la desintegración de las regiones y el surgimiento de intereses separatistas que perdurarían por largo tiempo. De ahí que Pablo Ospina concluya que este proceso

“será sin duda la más profunda e impresionante de las herencias coloniales. De implicaciones no solo políticas, sociales y culturales, sino de profundas huellas en la organización del espacio. A lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX, la formación del Estado ecuatoriano será la lucha contra las tendencias a la desintegración. La autonomía reclamada era, en el fondo, una independencia en los circuitos económicos y culturales” (Ospina, 2004: 48).

En este contexto inició la lenta y compleja creación del Estado-nación ecuatoriano. La tarea fue extraordinariamente difícil si se considera que para inicios de dicho siglo además de identidades regionales y locales que actuaban sobre un territorio poco unificado y sin fronteras claras, se sobreponía una sociedad profundamente dividida por criterios étnicos, económicos y sociales. En el proceso independentista dominado por terratenientes, como lo señala Hobsbawm, los intereses locales y regionales prevalecieron sobre la “nación política”, evidenciando fracturas entre las élites, incluso más notorias que los elementos que tenían en común.

“Los estados latinoamericanos (o por lo menos los hispanos) que emergieron de las guerras de independencia no eran ‘naciones’ o ‘estados-nación’ desde ningún punto de vista realista, ni fueron el resultado de movimientos de liberación *nacionales*. (...) Surgieron como el producto de la reorganización colonial de la monarquía española en el siglo XVIII, y en algunos casos de la de fines del siglo XVIII. En el interior de cada uno de estos países, con la probable excepción de Chile (...), las rivalidades locales y regionales eran más notorias que lo que inclusive las élites tenían en común. Por ello se da la persistente historia de las guerras civiles o interregionales en las primeras décadas de la independencia (...) Por ello aparece también la persistente tendencia de los estados latinoamericanos de formar federaciones oficiales o extraoficiales, hasta que el poder central del Estado empezó a establecer un firme poder sobre el territorio estatal, principalmente en el curso del siglo XX. Ni siquiera las élites de los nuevos estados tenían, de facto, mucha homogeneidad o perspectiva nacionales. Vivían en estados cuyos mismos nombres habían sido inventados después de la independencia. Eran nacionales solamente en tanto y en cuanto que las instituciones de estos nuevos estados, y particularmente su constitución, nominalmente representativa y liberal, les proporcionaban un escenario nacional sobre el que se debían representar sus alianzas y sus conflictos” (Hobsbawm, 2010: 313-314).

Los núcleos urbanos, parte de la “República de blancos”, constituidos por las capitales regionales y provinciales de ese entonces, eran el lugar de vivienda de población blanca, criolla y mestiza, mientras que la mayoría de cabeceras cantonales y parroquiales eran parte de la “República de indios”, de los llamados pueblos indígenas establecidos desde 1560. Las relaciones de interdependencia y dominación entre estas dos “repúblicas” facilitó la utilización de la estructura comunitaria indígena para el cobro de

tributos,<sup>62</sup> para organizar el adoctrinamiento y para la consolidación de una sociedad estamentaria (Ayala, 1996).

En medio de esta fragmentación, ¿cuáles fueron los elementos discursivos, simbólicos o representacionales que formularon los criollos que impulsaron la independencia? Galo Ramón sitúa tres aspectos que él denomina como “mitos fundacionales” y que actuaron como elementos de cohesión y movilización para empujar el proceso independentista. El primer elemento daría continuidad a la tradición propuesta por el padre Juan de Velasco y su tesis de la existencia del “Reino de Quito”. En esta dirección, hasta mediados del siglo XIX algunos intelectuales (Yerovi, 1941; Espinoza y Yerovi, 1947; Cevallos, 1855) habrían intentado sustentar que el territorio ocupado por la Audiencia de Quito desde 1563 no provenía de una arbitrariedad de los conquistadores sino que tenía un soporte histórico en el denominado Reino de Quito.<sup>63</sup> No solo que investigaciones posteriores a estas fechas no habrían encontrado vestigios del Reino de Quito, sino que con el transcurso de los años se llegó a la conclusión de que la tesis de Velasco tenía sobre todo una intencionalidad política. “La ideología criolla precisaba en aquel momento planteamientos de unidad territorial, una historia común, una homogeneidad histórica” (Ramón, 2004: 130), que el relato del Reino de Quito supo cumplir parcialmente.

El segundo mito fundacional discutido por Ramón (2004) y autores como Landázuri (1989) habría sido la república, utilizado por los criollos en oposición al imperio. Apelar a la república significaba posicionar el imaginario de la libertad, la igualdad y el ordenamiento del Estado moderno, idearios que lenta y fragmentariamente comenzaron a introducirse años después de alcanzada la independencia política de España. De acuerdo a Maiguashca (1994) este “mito”, lejos de circunscribirse al periodo independentista, estaría presente durante al menos las tres cuartas partes del siglo XIX especialmente con la denominada Revolución Marcista y más tarde durante el gobierno de García Moreno, según se detallará más adelante en esta misma sección.

---

<sup>62</sup> El pago del tributo, una “contribución” monetaria obligatoria exclusiva para la población indígena, se originó en la colonia. En la primera etapa, luego de la conquista y hasta fines del siglo XVI, a través de la institución conocida como encomienda, los colonos españoles tenían bajo su encargo a un grupo de indígenas a quienes debían catequizar y cobrar el tributo que estaban obligados a pagar. Desde fines del siglo XVI, y en el marco de la especialización de la Real Audiencia de Quito como proveedor de tejidos y alimentos, la mita fue el principal mecanismo de la organización económica. El trabajo obligatorio que debían entregar los indígenas en la mita se pagaba con un salario que garantizaba al Estado el cobro del tributo. Durante la vigencia de la Gran Colombia, Santander habría impulsado la abolición del tributo indígena, sin embargo éste se mantuvo durante la república, hasta la segunda mitad de 1850 (Ayala, 1996).

<sup>63</sup> La supuesta existencia del Reino de Quito ha seguido siendo defendida por historiadores contemporáneos como Jorge Salvador Lara (1994).

Ligado a la historia colonial, el tercer elemento que de acuerdo a Ramón habría contribuido a la construcción de lo nacional fue el “envilecimiento de los subalternos” en oposición a la idea dominante de que la “potencialidad histórica residía en el pensamiento de las élites” (Ramón, 2004: 131). Con el posicionamiento de este imaginario, y más allá de las tensiones, conflictos y contradicciones existentes, las élites se sumaron a la construcción de un solo proyecto nacional que excluyó a la mayoría de la población del proceso de construcción de la nación, buscando una homogeneidad cultural que prolongó una sociedad de corte corporativo, con profundas fracturas sociales y étnicas y rupturas entre los sectores dominantes y el resto de la población (Ayala, 1993), y dando poco a poco cabida al reconocimiento del mestizaje que “con la independencia encontró un espacio de expresión” (Ramón y Torres, 2004: 25).

Para 1820, el enfrentamiento con la Corona era ya una realidad sobre todo presente en las élites regionales de la Sierra que no habían logrado superar la crisis de la manufactura textil y el declive de la producción de cascarilla. En ese año, desde la Costa habría estallado un movimiento independentista que pretendía organizar la Provincia Libre de Guayaquil. “Cuando en 1820, después de haber escapado del decenio de guerras que ensangrentaron las tierras altas, la provincia próspera y en pleno desarrollo demográfico se proclamó independiente de España, fue para afrontar el dilema de la independencia total o de la absorción por uno u otro de los poderosos vecinos recientemente emancipados” (Deler, 1987: 94).

Ante el pedido de las élites de la Sierra para detener la desintegración territorial y consolidar la independencia frente a España, habría sido la intervención del ejército libertador de Bolívar la que detuvo los afanes separatistas de Guayaquil y sellara la independencia del denominado Distrito del Sur el 24 de mayo de 1822, considerado como el día de la independencia de Ecuador. Fue en esas condiciones que el territorio que hoy corresponde a Ecuador se incorporó a la Gran Colombia. Esta unidad, sin embargo, apenas duraría ocho años pues fue superada por las tensiones entre los mismos líderes de la independencia y las facciones autonomistas al interior de cada uno de los espacios del país de Bolívar. En 1830, Ecuador se separó de la Gran Colombia para iniciar el camino a la construcción de un estado nación independiente que Manguerra (1994) califica como un “pacto” entre los tres centros de poder, Quito, Guayaquil y Cuenca, para constituirse como Estado ecuatoriano. Su nacimiento estuvo sellado por la promulgación ese mismo año de la primera Constitución que declaró el Estado ecuatoriano como unitario, organizado en departamentos, provincias, cantones y parroquias.

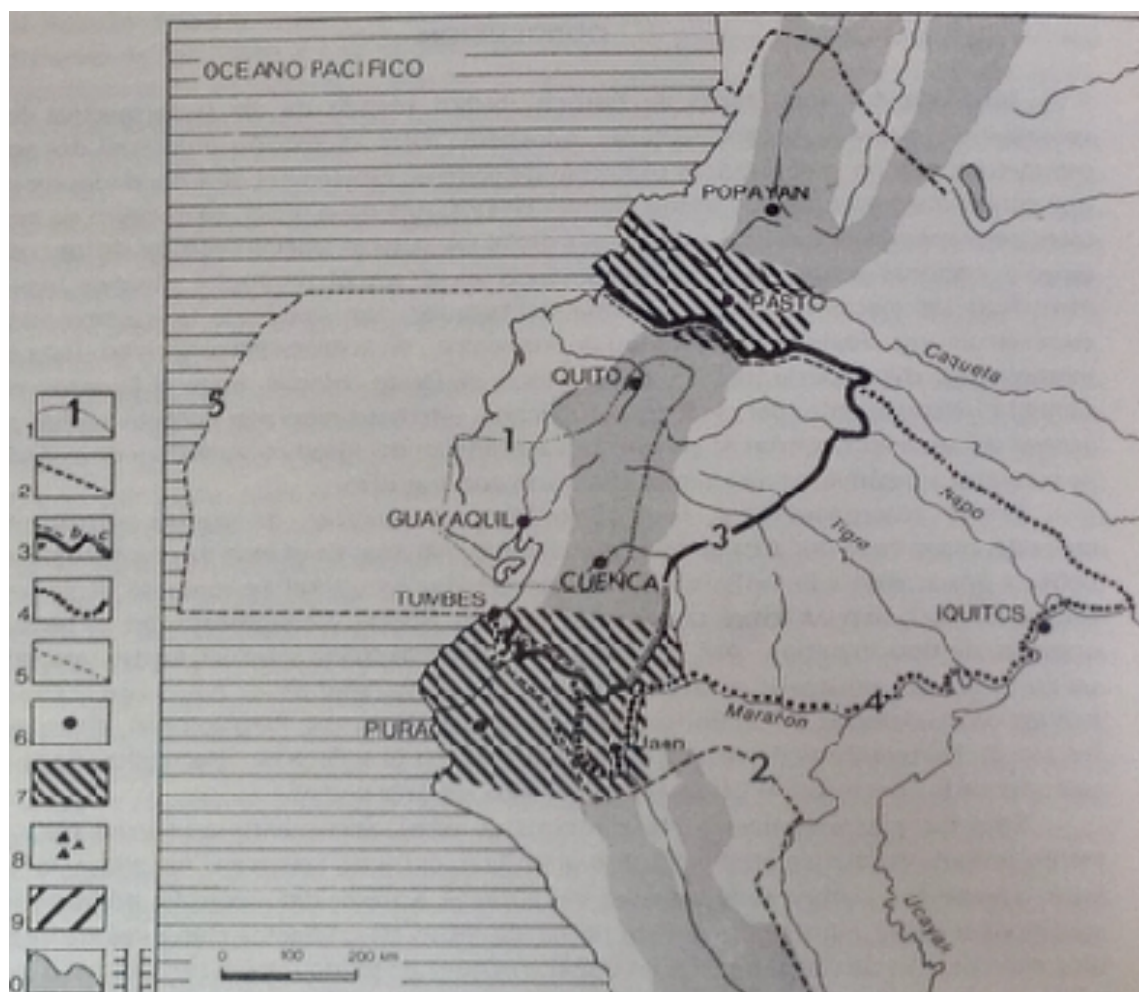
¿Qué territorio se asignó a este nuevo país y cómo se definieron sus fronteras? Jean Paul Deler (1987) es quien posiblemente ha desarrollado el estudio más completo sobre la forma en cómo la población asentada en el territorio de lo que hoy es Ecuador fue construyendo y dando sentido al espacio habitado y al espacio político estatal que lo contiene y que lo conforma. Siguiendo a Deler, en lo teórico y formal, y en el marco del principio *utis possidetis juris*, el distrito del Sur que se separaba de la Gran Colombia y que iniciaría la construcción del Estado-nación ecuatoriano, debía haberse construido sobre los límites establecidos para la Real Audiencia de Quito (ver Figura 2). La imprecisión del trazado, los conflictos al interior de un espacio político que carecía de un sentimiento nacional, el entrecruzamiento de intereses administrativos y religiosos y la simultaneidad del proceso de construcción de los estados vecinos, que al igual que el naciente Ecuador perseguían aclarar los límites de sus territorios, habrían determinado que el principio *utis possidetis juris* sea en lo fundamental una referencia. De haberse respetado este principio, la frontera norte del espacio sobre el que el nuevo país iniciaba a construir su Estado, tendría que haberse extendido hasta Popayán, actualmente parte de Colombia, en virtud de la decisión adoptada por Carlos V en 1541 según la que Quito y Popayán debían estar reunidas bajo un solo gobierno debido al reconocimiento de la Corona de que la mitad septentrional de la Audiencia habría sido el territorio de los Pastos, un área “repartida entre los valles del Chota y del Gauytara, en el macizo andino y rebasaba el declive occidental y sus estimaciones por los Valles del Mira, del San Juan y del Patía” (Deler, 1987: 101).

Al constituirse como un Estado independiente, la Ley de División Territorial de 1824 habría “cercenado” la provincia de Popayán, algo que Ecuador consideró un arreglo desventajoso pues “durante la conquista y la colonia había pertenecido a la Real Audiencia de Quito”, según hasta hace poco se insistía en la enseñanza de historia del Ecuador (Martínez-Estrada, 2003: 111). La indefinición de esta frontera con Colombia significó dos guerras, en 1832 y en 1862-63. Aunque solo entonces Ecuador reconoció a Popayán (alrededor de 180.000 km<sup>2</sup>) como parte de Colombia, fueron necesarios varios tratados con demarcaciones provisionales para llegar en 1916 a la suscripción del tratado Vernaza-Suárez que cerraría el conflicto limítrofe y definiera la actual frontera que separa a ambos países<sup>64</sup> (Deler, 1987: 106).

---

<sup>64</sup> Sobre la base del texto *Derecho Territorial Ecuatoriano* de Luis Aníbal Mendoza (s/f), Deler (1987: 106) sintetiza la cronología de los litigios fronterizos entre Ecuador y Colombia que se detalla a continuación. En 1824, a través de la ley de división territorial de la República se fijó el límite administrativo entre los

**Figura 2. Estado ecuatoriano y espacio**



Tomado de: Deler, 1987: 172

1. Núcleo central del espacio nacional. 2. Espacio sobre el cual ejercía soberanía la Audiencia de Quito durante gran parte del período colonial. 3. Espacio nacional actual (según el protocolo de Río de Janeiro de 1942). 4. Espacio continental oficialmente reivindicado por el Estado ecuatoriano. 5. Espacio marítimo llamado de las 200 millas. 6. Centros urbanos. 7. Franjas fronterizas. 8. Islas Galápagos. 9. Zona de selva densa y de débil densidad humana. 10. Tierras andinas altas (eje más fuerte de desarrollo durante el período colonial).

En las guerras con Colombia y los peligros de invasión que se habrían prolongado incluso hasta 1873, Quintero y Silva advierten que “las clases dominantes a la par que mostraron su desarticulación interna, también manifestaron iniciativas de unión ante la amenaza de su poder territorial” (1991a: 114). No habría sido por tanto, la existencia de

---

departamentos de Ecuador y del Cauca. En 1832, como consecuencia de una guerra entre ambos países, se suscribió el Tratado de Pasto, que contenía una demarcación parcial y provisional de la frontera en los Andes, sobre el río Carchi. En 1856, se firmó un tratado de “amistad, comercio y navegación” con una demarcación provisional de la frontera sobre la base de la ley de 1824. Entre 1862-1863, luego de una nueva guerra, se acordó el Tratado de Pinsaquí por medio del cual Ecuador reconoció a Popayán como parte de Colombia, a cambio de un proyecto de fijación definitiva de la frontera. Entre 1904 y 1908 se llevaron a cabo varias reuniones entre los dos países que desembocaron en la suscripción del Tratado Andrade-Betancourt que incluía un acuerdo limítrofe para la fracción entre el Pacífico y el alto Putumayo. En 1916 el diferendo limítrofe se selló definitivamente con la firma del Tratado Vernaza-Suárez.

un “proyecto nacional”, sino la defensa de un territorio lo que les habría convocado a su unificación temporal y forzosa, en la que los pueblos indios y altos porcentajes de la población mestiza fueron ajenos al desarrollo y desenlace de los acontecimientos. El divorcio entre el poder y la mayoría de la población habría sido especialmente notorio en la guerra de 1862-1863. La falta de involucramiento social en la defensa territorial, fue explicada por las élites como resultado de la “atroz y milenaria inercia de los indios” (Ibid.: 119), en franco desconocimiento, como lo sostienen Quintero y Silva, del corte étnico-cultural que configuraba agrupamientos atomizados, sin vasos comunicantes entre sí, sin una clase capaz de capturar una experiencia histórica acumulada, sino “castas de propietarios cuyo espacio de influencia era limitado” (Ibid.: 120).

Hacia el sur, la fijación de las fronteras tampoco fue fácil. Aunque el trazado de la frontera sur de la Real Audiencia de Quito habría tomado en consideración tanto el límite del incario (hasta Tumbes) como el inicio de un ecosistema desértico desde lo que hoy es Perú, hacia el oriente la imprecisión de los límites se tornaba sumamente compleja por las dificultades de acceso y la menor presencia de poblaciones. En la frontera sur-occidental, el principal desacuerdo en la fijación de los límites entre Ecuador y Perú fue Guayaquil, un área históricamente apetecida por el Perú y, a la vez, una región en la que importantes sectores guayaquileños no ocultaron su interés de anexarse al vecino del sur (Ospina, 1996). Ante este escenario, el cierre de la frontera sur del Ecuador requirió más de un siglo incluyendo seis protocolos de convenio, dos arbitrajes internacionales y cuatro guerras (Deler, 1987: 112), llegando a establecerse la actual frontera hace poco más de veinte años atrás.

Pese a los conflictos en el establecimiento de las fronteras norte y sur del nuevo Estado, los cambios más notables y que implicaron una sustancial modificación de la cartografía respecto a la Audiencia de Quito tuvieron lugar en la definición de la frontera amazónica. En este caso, las negociaciones bilaterales presentes en las otras dos fronteras se ampliaron para incluir a Colombia, Perú y en ocasiones, Brasil. “Mientras que durante casi tres siglos la Audiencia de Quito había aparecido como la modalidad administrativa del poder amazónico de España, el Ecuador contemporáneo, heredero político de la Audiencia, se encuentra relegado entre los países andinos tropicales, al rango de última potencia amazónica” (Ibid.: 113), con una superficie total que representa el 1,86% del área amazónica sudamericana, un poco más de 133 mil kilómetros cuadrados (Ibid.: 114).

La frontera marítima, finalmente, de cerca de mil kilómetros, es la que al decir de Deler concitó la posición más activa por parte de Ecuador seguramente en atención al

papel estratégico de la navegación por el Pacífico y del puerto de Guayaquil durante toda la etapa colonial. No solo que tomó oficialmente Galápagos desde los primeros meses de existencia como república, sino que “reivindica el ejercicio de su soberanía nacional sobre una superficie marítima de más de un millón de km<sup>2</sup>, es decir, más de cuatro veces la superficie de su espacio continental” (Ibid.: 122).

La base territorial del nuevo país constituido en 1830 habría estado entonces conformada por un núcleo central, Quito-Guayaquil-Cuenca, alrededor del cual interactuaban regiones periféricas: las dos franjas fronterizas definidas por antiguos cortes étnico culturales y por la superposición de circunscripciones coloniales, y regiones periféricas como la Amazonía y Esmeraldas, que al carecer de significación económica, habrían sido tratadas como áreas marginales. Dentro de este territorio discontinuo, poco integrado, sin enlaces de unidad entre sí, Ecuador inició la construcción de la nación. Con todo y sus discontinuidades, el territorio precedió a la nación lo que lleva a Deler a concluir la presencia de una contradicción entre

“la antigüedad de la existencia del espacio nacional ecuatoriano y el carácter todavía inacabado del fenómeno de integración (...) el espacio nacional ha precedido y contribuido a suscitar la nación a través del Estado. En el caso del Ecuador, no era interés de las élites (...) dejar desintegrar el territorio de la antigua Audiencia y una de las tareas del nuevo Estado fue la de mantener y consolidar el espacio nacional, lo que contribuyó a hacer surgir progresiva, pero parcialmente, la nación ecuatoriana” (Deler, 1987: 130).

### **3.2.1. Un territorio, un Estado, ¿una nación?**

En las primeras décadas de la república, Ayala (1990) anota que la inestabilidad y la desarticulación seguían siendo las características centrales de la realidad social y política del país. Las crisis que soportó el naciente Estado, luego de la independencia, lo habrían llevado en varias ocasiones al borde de la disolución. Las ambiciones de autonomía de las provincias frente al centralismo de Quito, el interés de las élites por mantener el control de los territorios en los que ejercían su autoridad; la presencia de perspectivas diversas y opuestas de las clases dirigentes frente a los problemas fronterizos y la existencia de un Estado central sostenido únicamente por la fuerza pública y una reducida burocracia, fueron el telón de fondo de las sucesivas crisis por las que atravesó el país en dicho período. En medio de tal inestabilidad y fragilidad, sería el control terrateniente, asentado en el régimen de hacienda, el que reemplazó a la autoridad metropolitana.



“Al derrumbamiento del estado colonial sucedió, pues, un estado controlado por las oligarquías terratenientes que habían sido protagonistas y usufructuarias de la lucha autonomista contra España. Ese ‘estado’, desde luego, aunque sus fórmulas jurídico-constitucionales nos lo mostraran como una institución moderna de tipo liberal, no era aquello que hoy conocemos como estado-nación constituido. Se trataba de una formación político ideológica de tipo precapitalista, cuyo carácter, bastante desconocido aún, estaba marcado por la necesidad de control de las masas indígenas y por la dispersión del poder a nivel local y regional” (Ayala, 1996a [1989]:147-148).

El Estado recién constituido, incapaz de expresar los intereses de la mayoría de la población, habría consolidado desde ese momento una ruptura entre las clases dominantes y el pueblo. Es por eso que al hablar del nacionalismo en América Latina, Hobsbawm (2010) sostiene que al ser una independencia liderada por hacendados y al prevalecer, por estas características, los intereses locales y regionales, representó un proceso inacabado en términos de construcción de la nación.

En línea con lo señalado por Hobsbawm, Maiguashca apunta que ante la imposibilidad de que un sector social lidere hegemónicamente el proceso de construcción del Estado nacional en Ecuador, durante las primeras etapas de la república el control del espacio significó el enfrentamiento y negociación de tres fuerzas: el poder central, entendido como la institucionalidad gubernamental que residía en Quito, los poderes regionales y los poderes locales. El poder central habría asumido el papel de integrar al Estado nacional, sobre todo en su dimensión normativa antes que en lo que respecta a la construcción de infraestructura que facilite la integración del espacio.

“El Estado en el Ecuador hizo acto de presencia primero como institución burocrática. En efecto, consumada la independencia, la necesidad más urgente fue la de construir el aparato estatal republicano. Es verdad que esa institución en el caso ecuatoriano fue inicialmente un tanto primitiva. Pero no por eso dejó de generar una lógica muy propia que se articuló a través de la ejecución de tareas que le eran específicas, como por ejemplo, la de institucionalizar su autoridad a lo largo del territorio nacional, la de administrar varias ramas de la cosa pública y, por fin, la de crear símbolos con el propósito de hacer de la población del país una entidad colectiva” (Maiguashca, 1994: 357).

En el plano de la dimensión material, los estudios históricos coinciden en que los intentos de integración y de consolidación territorial se habrían limitado durante los primeros años de la República al eje Quito-Guayaquil-Cuenca, abandonando las pretensiones de construcción de un espacio político único en los territorios amazónicos que habrían pertenecido a la Audiencia de Quito y en las selvas esmeraldeñas. El abandono hacia estos dos espacios habría posibilitado el mantenimiento de distintas formas de organización social y productiva a su interior (Deler, 1987; Ospina, 2004). Casi

el único contacto del Estado con los pueblos amazónicos y con los pueblos indios y negros de Esmeraldas fue a través de misiones religiosas (Ramón y Torres, 2014).

Los poderes regionales, por su parte, calificados como “sistemas locales de dominación social” (Maiguashca, 1994: 359), habrían participado en la discusión en torno al tipo de Estado que debía tener el Ecuador (unitario o federal), el carácter del régimen administrativo que debía regir en el territorio (centralización o descentralización) y las formas de representación. Los poderes locales, finalmente, materializados por lo general en los municipios y subsumidos a los regionales, habrían tenido en determinadas coyunturas la fuerza para inclinar la balanza a favor de las tendencias en debate sobre el tipo de Estado, la cuestión administrativa o los temas de impuestos y tributos.

Frente a tal fragmentación, en 1835, solo cinco años después de promulgada la primera Constitución, una nueva Carta Magna suplantaría la anterior para echar atrás al federalismo que, a criterio del poder central, alentaba el fortalecimiento de intereses regionales que conspiraban contra la unidad nacional. Sin embargo, no fue solo la oposición al federalismo, sino también el rechazo a la descentralización lo que se expresó tanto en la Constitución de 1835 como en la de 1843, conocida como la “Carta de la Esclavitud”. En esta última, bajo el pretexto de la precariedad económica de los municipios, se otorgó al Ejecutivo la potestad de nombrar las autoridades locales en un intento por institucionalizar el control estatal en un país profundamente fraccionado (Maiguashca, 1994; Ramón, 2004), lo que motivó la reacción de la oligarquía guayaquileña que echó del poder al General Juan José Flores.

El rechazo a las tendencias unitarias determinó el estallido de un movimiento contestatario en marzo de 1845, conocido como la Revolución Marcista que si bien no cedió a favor de un estado federal, se inclinó “por un (Estado) unitario difuso, es decir, un Estado unitario que permitiera una buena dosis de autonomía a sus subdivisiones políticas” (Maiguashca, 1994: 363) y por la introducción de reformas económicas y sociales que perseguían al mismo tiempo que atraer adhesiones a un proyecto “nacional”, liberalizar la fuerza de trabajo que requería el naciente capitalismo ecuatoriano. De ahí que tanto la Junta de Gobierno que tomó el poder el 6 de marzo de 1845, como los tres gobiernos que le sucedieron, habrían emprendido importantes reformas como la emancipación de los esclavos en 1854, la abolición del tributo de los indios en 1857 y la reforma electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente que a partir de 1852 ya no serían elegidos por el Congreso sino por Asambleas de electores designados por sufragio universal directo (Ayala, 1990).

Hacia 1858, la etapa “reformista” inaugurada con la revolución de marzo y la escasa integración nacional habrían comenzado a desmoronarse al punto de amenazar, hacia 1859, con desintegrar al recientemente constituido Estado. En efecto, en ese año, durante la presidencia de Francisco Robles (1856-1859), el Estado cedió más de dos millones de cuadras a Inglaterra para pagar una parte de la deuda contraída desde la Independencia.<sup>65</sup> Los territorios “embargados” estaban localizados en su mayor parte en el sur oriente del país y “200.000 cuadras se ubicaban en la provincia de Esmeraldas, divididas equitativamente entre la región del Pailón en el norte y la zona al sur de la Ciudad de Esmeraldas situada cerca de la playa de Atacames” (León, 2013: 21). La cesión de territorio, formalizada a través del Convenio Icaza-Pritchett (1857) habría traído como consecuencia la reacción del Perú que consideraba como suya el área amazónica entregada a Inglaterra. Tras la invasión del Perú y el bloqueo del puerto de Guayaquil, el país se vio abocado a una casi virtual división, a una de las guerras civiles más largas del siglo XIX y la victoria de un gobierno provisional.<sup>66</sup>

¿Podría hablarse de que un sentimiento nacionalista afloró como consecuencia de la desatinada medida adoptada por Robles? Al contrario, lo que este conflicto evidenció, en consonancia con lo que sostiene Maiguashca (1994: 383), es que la crisis de 1859 expresaría un cuestionamiento a la legitimidad del Estado y una suerte de advertencia de los poderes regionales hacia el poder central sobre su decisión de no renunciar a la tutela y control de la población indígena. De ahí que se abriría un período de pugnas entre la Costa y la Sierra que reflejaban la tensión entre visiones centralistas y descentralizadas respecto al manejo del Estado y la consiguiente participación del electorado. Los estudiosos de este período consideran que tales debates se resolvieron en lo formal con la Constitución de 1861 que actuó sobretudo como un compromiso político que no llegó a ser un documento tan centralizado como hubiera querido el presidente de ese entonces, García Moreno, ni cumplió con las aspiraciones federalistas de la Sierra sur (Cuenca y Loja) (Quintero y Silva, 1991a; Henderson, 2009).

La crisis de legitimidad del Estado aparentemente resuelta con la Constitución de 1861 duró poco. A mediados de esa década habrían resurgido conflictos que desembocaron en el golpe de Estado protagonizado por García Moreno quien en 1869

---

<sup>65</sup> La deuda por la independencia se terminó de pagar en 1974 durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara.

<sup>66</sup> Este no será el único momento que el Estado ecuatoriano corrió el riesgo de desaparecer, ya antes en 1835 y 1845 los intereses autonomistas fueron muy pronunciados; en 1876 y 1883, como se analizará más adelante, también se suscitaron episodios de aguda inestabilidad política y social.

promovió una nueva Constitución que zanjaría definitivamente las difusas ideas entre lo federal y lo unitario. En esta Constitución, conocida como la “Carta Negra”, los avances en materia de descentralización enfrentarían un retroceso, al tiempo que “consagró un orden político supeditado a la religión, fundamentado en una ideología teológica del Estado” (Quintero y Silva, 1991a: 131), a través del Concordado celebrado con la Iglesia. En política interna, García Moreno impulsó un amplio programa de obras públicas, incluyendo el inicio de la construcción del ferrocarril Quito-Guayaquil; extendió la cobertura educativa, fortaleció la educación técnica, modernizó el ejército, incursionó en el saneamiento de las finanzas del Estado, defendió al libre comercio y al pequeño empresario.

El régimen garciano, por tanto, habría privilegiado una vía de integración nacional “desde arriba” en la que, junto a la integración material, las dimensiones ideológica y normativa cobraron una importancia decisiva. Mientras la religión habría sido utilizada como elemento de cohesión, como “único vínculo que nos queda en un país tan dividido por los intereses y pasiones de partidos, localidades y razas” (Mensaje a la Constituyente de García Moreno, citado por Ibid.: 135), la centralización habría perseguido romper con los localismos y regionalismos y actuar a manera de freno para minimizar que el poderío económico que iba adquiriendo Guayaquil, gracias al inicio de un segundo ciclo de expansión cacaotera desde 1875, conlleve al resurgimiento de tendencias autonomistas capaces de desafiar al Estado central (Ibid.: 137). Estas tendencias, aunque presentes, no habrían podido expresarse por el férreo control y la violencia con la que García Moreno manejó el poder.

A partir de 1875, tras su asesinato y agotados los esfuerzos de integración nacional por la vía normativa, los sucesivos gobiernos que ocuparon el poder privilegiaron, al decir de historiadores como Ayala (1991), Maiguashca (1994) y Ramón (2004), la vía material de integración del país, concentrando su gestión en la realización de obras y la consecución de fines inmediatos. La tónica adoptada por los denominados gobiernos progresistas si bien logró disminuir el nivel de tensiones, siguió desenvolviéndose en una realidad en la que aún era notoria la presencia de regiones escasamente articuladas, la persistencia de tendencias que presionaban por la fragmentación, la prolongación de conflictos y una constante “reinención del país” que desde 1830 a 1883 había promulgado diez constituciones (Ayala, 1991; Maiguashca, 1994; Ramón 2004; Hobsbawm, 2010).

A nivel económico y social, el auge de la producción y exportación de cacao determinó cambios sustantivos en la realidad de fines del siglo XIX e inicios del XX.<sup>67</sup> Entre las más notorias transformaciones destacan, por un lado, la consolidación de enormes latifundios levantados sobre el despojo de tierras y la apropiación de tierras estatales, así como la afirmación de un modelo de crecimiento económico dependiente de los vaivenes de los mercados internacionales y signado por intercambios desfavorables para el país. Por otro lado, el peso económico y demográfico de Guayaquil hizo posible el crecimiento de un núcleo de ciudades funcionales a la lógica la expansión cacaotera, ahondando la dualidad entre una economía agroexportadora en la Costa y el sistema hacendatario tradicional en la Sierra donde se mantenían relaciones de dominación de corte claramente colonial -concertaje, prisión por deudas, “yanapas”<sup>68</sup>- (Deler, 1987). Pese a la importancia de las exportaciones de cacao, que en la década 1870-79 llegaron a representar el 70% del total, Ospina afirma que “el auge cacaotero no logró crear los suficientes eslabonamientos económicos para arrastrar a las demás regiones” (2004: 158).

Es en medio de esta nueva fase de acumulación que estalla la revolución liberal bajo el liderazgo de la emergente burguesía costeña y Eloy Alfaro como figura visible de esta transformación. ¿Cuál fue el significado de la revolución liberal?, ¿logró este proceso descolonizar y democratizar a una sociedad profundamente fragmentada o solidificar las bases del Estado-nación recién conformado en el primer tercio del siglo XIX?

Desde 1880 Alfaro habría protagonizado varias revueltas contra el dictador Ignacio de Veintimilla (1876-1883). Ante la imposibilidad de detener el descontento social, precipitado por el episodio conocido como la “venta de la bandera”,<sup>69</sup> en 1882, Alfaro fue designado Jefe Supremo de Guayaquil y Esmeraldas y como tal dirigió la

---

<sup>67</sup> En la década de los ochenta se publicaron dos de los más relevantes estudios relativos al ciclo del cacao, el desarrollado por Andrés Guerrero, *Los Oligarcas del Cacao. Ensayo sobre la acumulación originaria en el Ecuador: hacendados, cacaoteros, banqueros, exportadores y comerciantes en Guayaquil (1890-1910)* y el de Manuel Chiriboga, *Jornaleros y Gran Propietarios en 135 años de exportación cacaotera (1790-1925)*.

<sup>68</sup> El concertaje era un convenio entre el hacendado y los campesinos carentes de tierra (conciertos) mediante el que la familia campesina se comprometía a trabajar por un período para el hacendado a cambio de un anticipo de dinero, grano, animales y un pedazo de tierra prestado para el sustento de la familia. El convenio suponía el pago de un jornal. Sin embargo, del jornal se descontaban los daños que pudieran aparecer (en sementeras, rebaños, hatos), con lo que el concierto vivía constantemente endeudado. Los yanapas, en cambio, era un acuerdo que establecían los indígenas para utilizar los recursos de las haciendas como leña, pasto, agua, a cambio de trabajo (Barsky et al, 1980).

<sup>69</sup> El Gobernador del Guayas, José María Plácido Caamaño, habría comprado ficticiamente un barco a Chile para entregarlo a Japón, su comprador, en un momento en que dicho país se encontraba en guerra con China (1894-1895). Más allá de que el episodio develara la contradicción de Chile que se habría declarado neutral en la guerra chino-japonesa, sembró dudas sobre la conducta de Caamaño, nombrado por Veintimilla. El Gobernador del Guayas no solo que utilizó el nombre de su país sino que fue acusado de haber cobrado una comisión por el papel de intermediación desempeñado (Ayala, 1990).

sublevación que derrocaría al gobierno de facto. Ayala señala que la lucha liberal habría surgido como una reacción al agotamiento de la vía “progresista” y las amenazas de recuperación del conservadurismo: “La burguesía entonces se lanzó a la toma del poder. Su proyecto no era solo el control del gobierno sino una real transformación del carácter del Estado. Y para ello contaba con el respaldo de contingentes de latifundistas costeños y de grupos populares movilizadas” (Ayala, 1996b: 122). La resistencia de los conservadores y de la Sierra significó una guerra civil que concluyó el 4 de septiembre de 1895 cuando Alfaro ingresó a Quito.

En la literatura histórica hay acuerdo en señalar que la revolución liberal tuvo dos fases, la primera más radical que la segunda (Ayala, 1993; Paz y Miño, 2012; Ramón, 2004; Ospina, 2004). Durante la primera fase que se habría extendido desde 1895 a 1912, se dio un fuerte impulso a la secularización, la integración física del país, la modernización de las relaciones sociales de producción, con la eliminación en 1895 del trabajo subsidiario que realizaban los indios, y el manejo centralizado del poder, en contra de las élites locales. Estas medidas se complementaron con un control territorial más efectivo por parte de las fuerzas armadas, así como con la organización de aduanas en la mayor parte de puestos de frontera. Junto a estas medidas, quizá uno de los hitos más sobresalientes de la revolución liberal fue la terminación de la construcción del ferrocarril Quito-Durán, una ciudad cercana a Guayaquil, que se concebía como la obra más importante para integrar al país y contribuir a superar el letargo que atravesaba la sierra, al contribuir a la expansión del mercado interno. Los cambios en las haciendas serranas no fueron sin embargo de la inmediatez que se pensaba. Recién para 1914 los terratenientes habrían comenzado a introducir mejoras tecnológicas ante el atractivo del incremento de los precios de los productos agrícolas como consecuencia de la primera guerra mundial y más tarde por la depresión de 1929 (Larrea, 2006). En este sentido, la importancia del ferrocarril, antes que económica, habría sido simbólica al unir a dos regiones que representaron al Ecuador a lo largo del siglo XIX e inicios del XX, como lo detalla Pablo Ospina en una obra pionera sobre la historia ambiental del Ecuador,

“El ferrocarril fue mucho más un esfuerzo nacional para crear un símbolo en común, que el símbolo nacional de un esfuerzo compartido. Los sectores dirigentes del país buscaron así dotar de sentido a aquel espacio que compartían por encima de sus diferencias regionales. Ofrecer un significado a la comunidad nacional que aspiraron a construir durante el siglo XIX” (Ospina, 2004: 55).

En la segunda fase de la Revolución Liberal, desde 1912 a 1925, más allá de la eliminación del concertaje como medida encaminada a liberalizar la fuerza de trabajo, las reivindicaciones sociales habrían ido perdiendo importancia hasta virtualmente eliminar la construcción de un proyecto democrático. Ayala (1996b: 139-143) sostiene que la amplia y frágil alianza que apoyó a Alfaro, un incipiente sector de la burguesía industrial, pocos terratenientes, las bases populares liberales e intelectuales, para 1911 ya estaba desecha. Al haberse mantenido ligada al latifundismo costeño y fuertemente influenciada por el capital comercial y financiero, la burguesía que en un inicio apoyó a Alfaro, no tenía ya el interés de avanzar más, lo que habría detenido, por ejemplo, la implementación de una reforma agraria o a una verdadera liberalización de la fuerza de trabajo. Al perder la Revolución Liberal su impulso y orientación iniciales, se dio paso a la reconstitución de las redes de poder local y su control sobre los municipios, la consolidación del poder político y económico de la banca de Guayaquil, la clausura de los enfrentamientos con la Iglesia y se procedió a otorgar concesiones al latifundismo de la Sierra (Maiguashca, 1992, citado por Ramón, 2004: 160). En última instancia, los sectores que empujaron la revolución liberal mantenían su poder sobre una estructura agraria profundamente desigual. “Por este sesgo, esta sociedad se asimiló estructuralmente mucho más de lo que hubiera creído a la clase de los hacendados conservadores de las regiones andinas” (Deler, 1987: 209).

La frustración de los sectores campesinos que se unieron al liberalismo explicaría que la insurrección montonera se haya mantenido en la Costa con la movilización de pueblos negros y del campesinado de Esmeraldas y Manabí durante más de cuatro años, luego que Leonidas Plaza, quien inaugurara la segunda fase del liberalismo, tomara el poder. Las montoneras han sido calificadas por la historiografía como el “proyecto de campesinos propio, democrático y radical” (Ayala, 1996b: 122) cuyas principales reivindicaciones giraban en torno a la propiedad de la tierra y la supresión de instituciones como el concertaje.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Resulta revelador señalar cómo uno de los episodios que significó una de las etapas de mayor movilización social en Ecuador en la lucha por un país más justo sea tildado como una obra de ignorantes y de hordas cuasi salvajes, haciendo eco del desprecio con el que la colonialidad juzga las “otras” historias. “Pensemos que los ejércitos liberales estuvieron en muchos casos formados por campesinos de la costa que eran en su mayor parte analfabetos, seguidores fanáticos del caudillo (en referencia a Alfaro), que poco comprendían de la filosofía liberal y arremetían con métodos de violencia a veces inauditos” (Martínez Estrada, 2003: 45), señala el libro de texto escolar dirigido para estudiantes del último año de educación básica, *Breve historia del Ecuador e Historia de Límites. Sexto Curso*.

Pese a su repliegue, la revolución liberal constituyó un hito histórico, una época que contribuyó a la consolidación del Estado-nación en Ecuador, que si bien no pudo o no tuvo la fuerza para arremeter contra la estructura latifundista de la Sierra ni detener la concentración de la tierra que venía produciéndose en la Costa en torno a la producción de cacao, facilitó la integración económica del país, recobró para el Estado el control de sectores que hasta entonces habían estado en manos de la Iglesia como el registro civil, la regulación del contrato matrimonial, de la educación y la beneficencia, e introdujo medidas sociales que aliviaron la pesada carga de las poblaciones indígenas, negras y campesinas (Paz y Miño, 2012). Sin desconocer la importancia de estos cambios, la Revolución Liberal no pudo, en paralelo, ampliar el juego democrático a favor de los sectores más explotados (Ayala, 1990); tampoco logró afectar la “pronunciada concentración de la tenencia de la tierra, prevaleciente en la Sierra y en la Costa” (Larrea, 2006: 53). En el plano social y cultural, la revolución liberal se tradujo en el afianzamiento del mestizaje como relato aglutinador y de cohesión de la nacionalidad. Este relato, que en lo simbólico se tradujo en “la supuesta igualación de los indios” -como lo apunta Galo Ramón- “produjo su marginación como pueblos con derechos diferenciados, promoviendo su eclipsamiento como indígenas de la escena nacional, por largo tiempo” (2004: 162). La integración física del país fue también parcial. La Sierra sur y sobre todo Esmeraldas y la Amazonía se mantuvieron al margen del mercado interno y de un imaginario de lo “nacional” pues si bien es cierto que la construcción del ferrocarril reforzó el eje Quito-Guayaquil, al mismo tiempo configuró la construcción de un espacio nacional “comprimido”, al decir de Deler (1987: 204), que contribuirá a marcar la simbología que estos dos centros de poder otorgaron a la nación ecuatoriana en formación.

A la muerte de Alfaro, se abriría un período conocido como la “dictadura bancaria” o de predominio plutocrático que expresaría la alianza entre el capital financiero materializado en el Banco Comercial y Agrícola y los latifundistas (Deler, 1987). Esta naciente burguesía agro-exportadora de la Costa tuvo muy poco interés en mirar más allá de la hacienda cacaotera. Si bien habría incursionado en otros negocios como el azúcar, muelles, textiles, alimentos y bebidas, tuvo en lo sustantivo un comportamiento dispendioso e imitativo de la aristocracia europea. Tampoco le interesó avanzar en la “proletarización” de la fuerza de trabajo, manteniendo más bien una suerte de híbrido que combinaba relaciones salariales en ciertas actividades con otras claramente



no capitalistas sobre todo en las plantaciones. Según lo señala Andrés Guerrero, autor de uno de los estudios más rigurosos sobre el significado de la exportación de cacao,

“En el Ecuador las determinaciones externas que provocan la formación del modo de producción capitalista pasan por la constitución de relaciones de producción no capitalistas en la extracción de la renta en cacao destinada al mercado mundial (...). La extensión de las haciendas cacaoteras no se efectúa aprovechando un proceso de proletarianización, sigue más bien un proceso contrario: la sujeción del trabajador directo y su familia -sembrador o peón- a la gran propiedad territorial” (Guerrero, 1980: 90-91).

En 1925 la denominada revolución juliana habría pretendido poner fin al largo período de hegemonía liberal y despojar del inmenso poder acumulado por la burguesía comercial bancaria. Quintero y Silva (1991a) identifican en la revolución juliana un esfuerzo por garantizar que el Estado apoye al proceso de acumulación del conjunto de los sectores dominantes, no solo de aquellos asentados en el litoral centro sur, y por empujar la modernización del Estado, en definitiva, un levantamiento orientado a descorporativizar y propender a un manejo centralizado del Estado. En esta dirección, la Junta Militar que tomó el poder se centró en la reconstitución del sector financiero, cuyo control en el pasado habría estado en manos de la burguesía comercial bancaria que financió las arcas públicas a través de créditos. Esta medida se concretaría en 1927, durante el gobierno de Isidro Ayora (1926-1929) al amparo de una “comisión técnica” de Estados Unidos, la “Misión Kemmerer”, en un momento en que ese país consolidaba su posición en la región.<sup>71</sup> Con la reorganización del sector financiero y la formulación de un conjunto de políticas monetarias y fiscales, a tono con el capitalismo que despuntaba en el país, una nueva alianza entre terratenientes serranos y latifundistas comerciantes de la costa retomó el control del país.

Quintero y Silva anotan que “como fruto de todo este proceso modernizante, el Estado registró una ampliación y un crecimiento nunca antes visto. Amplió sus facultades, expandió su control sobre las instituciones y recursos económicos, las obras públicas, el transporte, y mejoró su capacidad administrativa en todos los ámbitos” (1991b: 379). Aunque habría apoyado la emergencia y desarrollo de una burguesía serrana, no habría logrado romper con la regionalización ni habría logrado unificar el capitalismo a lo largo

---

<sup>71</sup> En *Nueva Historia del Ecuador* editado por Enrique Ayala, Alejandro Moreano (1996b [1991]: 189-190) recuerda que los momentos de reorganización y modernización del Estado han contado con la presencia de misiones técnicas de Estados Unidos. Además de la misión Kemmerer, en 1948 otra misión se habría encargado de definir los lineamientos que orientarían la producción y exportación de banano, sin contar con el asesoramiento militar como el que tuvo lugar durante la dictadura que gobernó el país entre 1963 y 1966.

de todo el país. En la Sierra los hacendados seguían controlando el territorio y era indiscutible el predominio de la iglesia, en la Costa, menos afianzada en un patrón colonial. Los latifundios también se nutrían de formas no capitalistas y en ambos casos el poder de las élites regionales interfería sobre el Estado.

El comportamiento corporativizado de los sectores de poder económico, la crisis de la economía mundial, sus impactos sobre el Ecuador y la consiguiente terminación del auge cacaotero habrían empujado a la terminación de la revolución juliana, dando cabida a un período de inestabilidad política, con 27 gobiernos en el lapso de los 23 años entre 1925 y 1948 y el inicio del fenómeno del populismo encarnado en la figura de Velasco Ibarra quien fuera elegido presidente por primera vez en 1934<sup>72</sup>. La ascensión al poder de Velasco Ibarra no sería, como lo describen Quintero y Silva (1991b), el triunfo de los sectores sociales mayoritarios, sino de los terratenientes y de los pequeños y medianos propietarios rurales movilizadores por el conservadurismo y la Iglesia.

Fue en el contexto de un país dividido y un gobierno sin respaldo que en 1941 el Perú invadió a Ecuador, lo que determinaría la reorganización del espacio ecuatoriano y el recorte de “la región amazónica, en una superficie forestal cuya evaluación varía entre algunas decenas de millares de kilómetros cuadrados y más de 200.000, según los tratados o protocolos que se tomen como referencia” (Deler, Gómez y Portais, 1983: 222). De acuerdo a Jaime Galarza, la invasión peruana habría sido motivada por el acceso a los recursos petroleros de la Amazonía y la consecuente intervención de empresas petroleras. En efecto, la historia cuenta que el dictador Federico Páez (1935-1937) habría anulado las concesiones que desde 1920 tenía la *Leonard Exploration Company* (Standard Oil) en la Amazonía para cederlas a favor de una empresa inglesa, la Royal Dutch Shell, que utilizó el nombre de *Anglo Saxon Petroleum Company*. Según concluye Galarza, no fue la victoria del Perú sobre Ecuador, sino de la Standard Oil sobre la Royal Dutch Shell: “Si en 1935 la Standard Oil de Nueva Jersey fue derrotada en Bolivia por la Shell, en 1942 en Ecuador sucedió lo contrario. La deuda estaba saldada” (Galarza, 1974: 125).

Para sellar la disputa, un año más tarde, se suscribió el Protocolo de Río de Janeiro. La guerra con el Perú afectó la organización del espacio ecuatoriano y sería el hito a partir del cual la Amazonía comenzaría a ocupar un lugar central en el imaginario y la identidad.

---

<sup>72</sup> Una afirmación recurrentemente utilizada es que Velasco Ibarra cubrió un período de 40 años en la política ecuatoriana. En realidad solo gobernó 13 años en 5 administraciones. Su gestión se caracterizó por la poca claridad, por políticas vacilantes y una búsqueda permanente por tratar de complacer a la fracción dominante en cada coyuntura (Ayala ed., 1996b [1991]: 193).

Para el conjunto del país y sobre todo para los militares, el resguardo de las fronteras se convirtió en aquel momento en una política decisiva por lo que fuertemente apoyaron el poblamiento de la región en un intento para extender la soberanía a los territorios más alejados. Se inició así la construcción de carreteras, el establecimiento de diversos puestos de control y vigilancia, la implantación de escuelas en sitios remotos, y una lenta ampliación de la institucionalidad pública (Espinosa, 2008).

### **3.2.2. Consolidación territorial y fronteras internas**

Con las poblaciones asentadas en áreas “remotas” o zonas de frontera, a las que el Estado trataba con excentricidad, desprecio y conmiseración, más allá de contactos esporádicos, resultó más bien beneficioso para los Estados desentenderse de su realidad. A los sectores dominantes no les interesó fortalecer a la sociedad nacional en su conjunto porque “ella no existía sino como el conjunto de los dominadores, ni estaba en el interés de éstos organizarla y desarrollarla en beneficio de toda la población, aún con todas las desigualdades sociales de tipo clasista. El efecto perverso de ese comportamiento ha sido, en todas partes, la inestabilidad y la precariedad del desarrollo” (Quijano, 2014d [1993]: 209).

La presencia estatal en las áreas fronterizas se circunscribió en lo sustantivo al despliegue de puestos de control militar, y la provisión de contados servicios públicos en los lugares de mayor densidad poblacional ocupados por poblaciones mestizas. Solo fue desde mediados del siglo XX, con la expansión del capitalismo y la consecuente búsqueda de nuevos recursos para insertarse a la economía mundial que diversos Estados latinoamericanos fomentaron la necesidad de impulsar misiones evangelizadoras hacia áreas marginalizadas con el objeto de combatir la “barbarie”. Estas misiones, al tiempo que destruían las manifestaciones sociales, culturales y productivas de los pueblos indios y presionaban por su desterritorialización, introducían su propia visión ideológica religiosa y fomentaban su inserción en la economía en calidad de campesinos. En un detallado recuento de las implicaciones de este proceso, el antropólogo ecuatoriano Jorge Trujillo señala que:

“la expansión de la economía capitalista industrial provocó el surgimiento de nuevas y más ambiciosas empresas misioneras a las cuales se asignaría la tarea de ‘penetrar’ en forma pacífica aquellas economías que se reproducían al margen del capital. La más importante fue la Wycliffe Bible Translators/ILV (...) Los ‘puentes’ tendidos por la civilización para incursionar en las culturas no civilizadas se sostienen sobre la labor misionera que, en esta nueva cruzada

mundial combina con la mayor eficacia posible el control ideológico-religioso, con el control político y con la práctica más sutil y moderna del etnocidio” (Trujillo, 1981: 12).

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) ingresó a Perú en 1946, a Ecuador, Colombia y Guatemala en 1952 y en 1955 a Brasil y Bolivia. Esta misión evangelizadora se expandió a las Islas Filipinas, Indonesia, Camboya, Nepal, Vietnam y por territorios del continente africano que se enfrentaban a la colonia. Terminó cumpliendo su labor en 820 distintos lugares. En el caso de Ecuador, la investigación llevada a cabo por Trujillo señala que el ILV se instaló en el país como una institución académica ligada a la Universidad de Oklahoma con el objeto de investigar las lenguas indígenas (Registro Oficial No. 83 del 9 de diciembre de 1952). El convenio otorgaba a los misioneros el rol de intermediarios entre los pueblos indígenas y el Estado, la atribución para recopilar datos de yerbas medicinales y formas de curación y les reconocía el derecho a disponer de territorios en la Amazonía ecuatoriana para instalar sus bases de operaciones<sup>73</sup>, volar sin el control del Estado e introducir libremente todo material o equipo.

En los lugares donde operó el ILV, la estrategia apuntaba al vaciamiento social de grandes extensiones de territorio o la aculturación de pueblos indígenas para su futura integración, a fin de facilitar el establecimiento de enclaves para la extracción de recursos. Con este propósito, y recurriendo nuevamente al caso ecuatoriano, se crearon asentamientos donde se relocalizó a la población indígena, en una suerte de reproducción de la estrategia colonial de establecimiento de reducciones.

A medida que se desarrollaba el trabajo del ILV, Capuchinos, Josefinos, Franciscanos, Salecianos también avanzaban en las regiones no plenamente controladas por el Estado.<sup>74</sup> La estrategia de adoctrinamiento y control se prolongó hasta bien entrado el siglo XX. Según lo demuestra Trujillo, para 1976 en la región amazónica del Ecuador trabajaban 17 sectas religiosas, cristianas y católicas, mientras que la presencia del ILV

---

<sup>73</sup> Según la investigación de Jorge Trujillo, la sede del ILV en Limoncocha, en la provincia amazónica de Sucumbíos, disponía de “infraestructura habitacional dotada de las más modernas tecnologías, un jardín tropical cuyos frutos eran prohibidos para la población que estaba siendo adoctrinada, pista de aterrizaje, dispensario médico, escuela para los hijos de los misioneros, un centro lingüístico y de traducciones de la biblia, una red de mantenimiento de aviones y un sofisticado equipo de comunicación, estaciones experimentales de agricultura y ganadería y talleres de enseñanza de mecánica, carpintería y otras ocupaciones por el estilo” (Trujillo, 1981: 97).

<sup>74</sup> A manera de ejemplo vale citar que hacia mediados del siglo XX, la Misión de los Capuchinos instaló un internado en Puerto Asís, en la actual provincia de Sucumbíos en Ecuador, al que eran conducidos por la fuerza los jóvenes. Bajo la justificación de educar a la población, se les enseñaba otro idioma, otra forma de vestirse y otra religión. La población que hoy vive en San José de Wisuya, de origen Siona, considera que es en este período cuando perdieron la mayor parte de su cultura (Pezzi, Chávez, Minda, 1996: 151).

finalizó recién en 1981, luego de 29 años, cuando el presidente Roldós terminó el contrato que mantenía con el Estado.

La operación de estas misiones incidió severamente sobre la organización tradicional y las prácticas productivas de pueblos asentados en las áreas fronterizas, en la Amazonía o en lugares cubiertos por bosques. Su actuación pretendió destruir las estructuras organizativas y culturales que daban cohesión a los pueblos indios, a fin de incorporarlos al sistema político único pues se consideraba que vivían al margen de la modernidad y eran la traba más significativa para iniciar el despegue al desarrollo. De ahí que junto a Quijano se pueda concluir que algunos países de América Latina siguieron atestiguando hasta relativamente unas cuantas décadas atrás “un siempre frustrado intento de homogenización cultural a través del genocidio cultural de los indios, negros y mestizos” (Quijano, 2014c [2000]: 821).

Para Serje, la domesticación de los territorios marginales como las áreas de frontera y la puesta en marcha de políticas de enclave configuran una línea de actuación caracterizada por la delegación de las funciones del Estado en manos privadas. A lo largo de la historia de América Latina, “se puede constatar la delegación de la presencia del Estado en manos de misiones, que montaron en muchos casos verdaderas economías de escala regional (como el caso de las misiones Jesuitas o Capuchinas en el siglo XVII, o de las misiones protestantes en el siglo XX)” (Serje, 2017: 43).

La catequización de las poblaciones, entendida como una “estrategia de disciplinamiento (con el) objetivo de normalizar mediante el tránsito hacia el estado de civilización a las etnias salvajes” (Espinosa, 2008: 72), se desarrolló de la mano con la ocupación de las fronteras bajo el impulso de procesos de colonización dirigidos hacia tales áreas. Motivadas por las promesas y ofrecimientos de las políticas de fomento a la colonización, poblaciones de diversos puntos al interior de los países latinoamericanos asumieron el reto de conquistar territorios. El impulso a la colonización se sustentó en la mayor parte de países latinoamericanos en la concepción según la cual la integridad territorial y el resguardo de las fronteras equivalía al fortalecimiento de la nación. Implícitamente, su finalidad apuntaba, como lo sugiere Serje (2011), al “blanqueamiento” de las fronteras y los territorios salvajes.

En el establecimiento de las llamadas “fronteras vivas”,<sup>75</sup> a cargo de poblaciones mestizas, nuevamente el horizonte cultural previo fue ignorado. Estas áreas, antes

---

<sup>75</sup> La categoría de “fronteras vivas” se desarrolló en América Latina desde finales del siglo XIX. Desde la lógica de la seguridad, la construcción de infraestructura física y el establecimiento de asentamientos

“peligrosamente” salvajes, paradójicamente se fueron tornando, como dice Navarro Floria, en zonas de grandes potencialidades y prometedoras riquezas. El imaginario difundido resignificó a las áreas fronterizas y otras regiones subalternizadas como “paisajes de progreso” (Navarro Floria, 2011: 215), combinando cuando era necesario, la construcción de infraestructura física que se traducía, a su vez, en un nuevo atractivo para alentar procesos de inmigración al interior de los países.

La colonización con frecuencia resulta en una suerte de válvula de escape para reubicar fuerza de trabajo que no puede ser absorbida por el mercado laboral, para disminuir las presiones por la mala distribución de la tierra o para desfogar problemas internos. Esta realidad fue justamente la que se registró en Ecuador hacia fines de la década de 1950 e inicios de la siguiente cuando la colonización fue la salida para frenar la presión que ejercía el campesinado serrano sobre las grandes propiedades, dando paso paralelamente a la expansión de la frontera agrícola y a una estrategia extractivista sustentada en la explotación de los bosques.

“Terratenientes y clérigos (...) armaron su propia cruzada (...) contra el campesinado indígena que amenazaba con un asedio constante sobre las grandes haciendas latifundarias; había que expulsarlos de la Sierra hacia las selvas orientales y occidentales donde según lo afirmó el Estado, se encontraban a disposición tierras vírgenes y baldías” (Trujillo, 1981: 43).

### **3.2.3. El capitalismo avanza y el Estado se fortalece**

Hacia fines de la década de los cuarenta, el banano habría reemplazado el declive de la producción cacaotera. De un papel marginal en la exportación de banano, Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial de la fruta, pasando de 33.394 tm en 1964 a 1.185.825 tm en 1969 (Deler, 1987: 254) y la incorporación de más de 170 mil hectáreas de cultivo de banano en cerca de dos décadas para llegar a totalizar 214.592 hectáreas en 1968 (Larrea, 2006: 64). Entre los rasgos comunes entre este ciclo y el del cacao, en ambos casos se apreciarían fuertes movimientos migratorios interregionales de la Sierra a la Costa, el desarrollo de frentes de colonización con el propósito de ampliar la superficie agrícola e integrarla al mercado nacional, de la mano con la extensión de la red

---

poblacionales que se consideraba debían encargarse del desarrollo, seguridad e integridad territorial, respondía al objetivo de limitar los posibles afanes de expansión de los países vecinos. Hacia finales del siglo XX, una vez consolidados los territorios estatales, la idea de fronteras vivas se utilizó para convertir a las zonas limítrofes en áreas claves para la ampliación del espacio económico regional (Revelo, 2003: 124-128).

vial para lograr una mayor integración regional<sup>76</sup> y el apareamiento de muchas ciudades intermedias, especialmente en la Costa, región que experimentó un crecimiento demográfico notable: en 1950 contenía al 40,5% de la población, para comienzos de la década de los 60 en la Costa se asentaría cerca de la mitad de la población del país y a principios de la década siguiente pasaría a ser la región más poblada (Quintero y Silva, 1991b: 16 y 217).

En contraste con el cacao, la producción de banano significó dos cambios sustantivos. En el plano económico, existe consenso entre los investigadores de este período que su cultivo representó un empuje fundamental al avance del capitalismo (Ayala ed., 1996b [1991]). Aunque las grandes propiedades (como las 225.000 has. de la hacienda Tenguel y otros latifundios en la región de Balao, en la provincia del Guayas o el control de extensas superficies en Esmeraldas) (Deler, 1987: 254) no desaparecieron y se prolongaron ciertas relaciones de producción precarias como la aparcería,<sup>77</sup> su vertiginoso crecimiento habría contribuido a desintegrar la hacienda tradicional, a ampliar las relaciones salariales e impulsar el surgimiento de pequeños y mediados propietarios agrícolas, con lo que se diversificarían las actividades económicas en pueblos y pequeñas ciudades, se ampliaría el mercado interno y se aceleraría la urbanización del país.<sup>78</sup> La segunda modificación de relevancia que trajo consigo el banano fue de carácter ideológico al perder la Iglesia funcionalidad dentro de un nuevo momento histórico. El vacío dejado por la Iglesia no pudo ser cubierto por nuevas instituciones políticas, ideológicas o culturales en la medida en que, “el carácter oligárquico y antinacional de las fracciones que componían el poder” (Quintero y Silva, 1991b: 230) limitó el surgimiento de nuevos referentes. El tercer rasgo distintivo de la economía alrededor del banano estaría dado por la participación más activa y directa del Estado lo que se evidencia por ejemplo en el surgimiento de la planificación y en el incremento del gasto público.

Bajo un contexto de prosperidad económica, un “ensanchamiento” de los sectores sociales, de fortalecimiento del Estado como organizador de la economía y políticas, y de un nuevo cuadro de alianzas entre la burguesía comercial bancaria de la Costa y la

---

<sup>76</sup> En menos de veinte años, de 1948 a 1967, la red vial se habría extendido tres veces y para 1980 habría crecido en siete veces, llegando a un total 34.640 km. (Larrea, 2006: 66).

<sup>77</sup> La aparcería representaba el pago en especie de la renta de la tierra. Mediante esta figura, el latifundista entregaba tierra al campesino, recibiendo como pago parte de la cosecha.

<sup>78</sup> Deler anota que la urbanización del país fue una de las transformaciones más notables durante el siglo XX. De 7 ciudades de más de 10.000 habitantes que había en 1920, antes de acabar el siglo XX, las ciudades grandes ascendieron a 34 (1987: 242).

emergente burguesía agraria de la Sierra que poco a poco comenzó a tecnificar la producción para atender un mercado interno cada vez más amplio, es posible entender un período de relativa estabilidad política con tres mandatos presidenciales entre 1948 y 1963 que lograron terminar su gestión, algo que no había ocurrido desde 1929.

El auge del banano fue de corta duración. Para fines de los años 50, la *United Fruit Company*, empresa que impulsó el cultivo en Ecuador por la inestabilidad política y las plagas que asolaron sus cultivos, habría regresado a Centroamérica, al mismo tiempo que la capacidad adquisitiva de las exportaciones disminuía como consecuencia del deterioro de los términos de intercambio (Deler, 1987). A esto se suma el cambio en la variedad de la fruta cultivada, más propicia para cultivos industriales, que llevaría a la quiebra a pequeños y medianos productores que seguirán cultivando banano para el mercado local y nacional, mientras la costa sur se especializaría en la producción de banano para exportación (Ospina, 2004). Hacia mediados de la década siguiente la crisis de las exportaciones bananeras habría sido ya notoria. Esta no fue sin embargo la única razón que explicaría la nueva coyuntura que se abrió a partir de 1963 con el golpe de una Junta Militar presidida por el Contraalmirante Ramón Castro Jijón. La irrupción de los militares habría respondido a una multiplicidad de variables internas y externas entre las que destacan la debilidad del Estado frente a un movimiento social en ascenso que se pensaba podía “contaminarse” de la revolución cubana; la búsqueda de nuevos mercados por parte del capital estadounidense, en un contexto de recesión de su economía; la necesidad de romper con la regionalización y de “centralizar vertical y coercitivamente el espacio nacional” (Quintero y Silva, 1991b: 242-240). Y es que pese a los cambios en la estructura social generados por el boom bananero, varias investigaciones coinciden en señalar que persistían una elevada concentración del ingreso y la propiedad, marcadas diferencias entre el campo y la ciudad (Larrea, 2004),<sup>79</sup> al tiempo que subsistían poderes locales ligados a la hacienda. “Cada unidad productiva y región era un centro autónomo con poder ejecutivo, leyes y cárceles propias. La autoridad social era, a la vez e inmediatamente, autoridad política”, dice Alejandro Moreano (Ayala ed., 1996b [1991]: 191). Los sectores campesinos e indígenas en esa estructura social cerrada no existían como ciudadanos.

Los trabajadores bananeros que perdieron su trabajo fueron expulsados hacia los centros urbanos, principalmente Guayaquil, a la zona petrolera que comenzaba a

---

<sup>79</sup> Según lo recuerdan Quintero y Silva (1991b), en 1960 por ejemplo, el ingreso de la población indígena era de apenas 12 dólares al año.



instalarse en el norte de la Amazonía, al centro y sur de la provincia de Esmeraldas y a la provincia de Zamora Chinchipe, al sur de la región amazónica u ocupaban terrenos abandonados de las haciendas. Existía el panorama propicio para exigir una redistribución de la tierra, lo que dio paso a la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria de 1964 que se dictó de la mano con la Ley de Colonización y Tierras Baldías emitida el mismo año y la creación de la entidad responsable de llevar a cabo estas políticas, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). La reforma agraria si bien alentó la modernización de las haciendas y la erradicación de las relaciones precapitalistas que aún subsistían a su interior, no modificó la estructura de tenencia de la tierra que siguió exhibiendo en lo fundamental indicadores de alta asimetría en su distribución, dando paso más bien a la colonización de áreas hasta entonces abandonadas por el Estado (Ospina, 2004; Larrea, 2006; Trujillo, 2005).<sup>80</sup> El poder de los terratenientes representó un freno para la adopción de una real y profunda reforma agraria como la exigida por los movimientos campesinos. De ahí que se habría circunscrito a una “política integracionista” antes que redistributiva, orientada a incorporar nuevas áreas a la producción (Quintero y Silva, 1991b: 242).

El descontento de la población campesina, principalmente de la Costa, marcó un período de intensa agitación y movilización social. “La movilización y la lucha campesina no solo se quedaron en un rechazo a la política agraria (...), sino que al ser formas prolongadas de expresión de sectores populares a los que un rígido sistema político secularmente les había negado derecho a la participación, se constituyeron en el lecho sobre el que nacieron nuevas organizaciones” (Ibid.: 329). Además de organizaciones campesinas y sindicatos de trabajadores, asociaciones de estudiantes y expresiones reivindicativas ligadas a la Iglesia Latinoamericana, que se crearon o fortalecieron en este período, entre los pueblos indios comenzó a estructurarse el discurso de defensa de la territorialidad como parte de la identidad étnica, en paralelo con el cuestionamiento de la arquitectura de un Estado definido como unitario (Dávalos, 2005).

Serían los militares los que no solo pusieron fin “al agotamiento de un modelo de mediación entre el capital y el pre capital” (Quintero y Silva, 1991b: 338) vigente desde 1948 y cubrieron el vacío de un sector hegemónico capaz de conducir al Estado, sino los que al derrocar a Velasco Ibarra, habrían prometido una real y efectiva reforma agraria a

---

<sup>80</sup> De acuerdo a la información estadística disponible en varias fuentes, de las 293.159,10 hectáreas afectadas entre 1964-1966, 29,20% fue por reforma agraria y 70,80% por colonización, con notables diferencias entre regiones y provincias (Quintero y Silva, 1991b: 265).

partir de una adecuada “siembra del petróleo”. En efecto, en 1967 brotó petróleo por primera vez en la Amazonía. Su explotación estaba a cargo de empresas extranjeras a las que se había entregado en concesión más de 100 mil kilómetros cuadrados en la Amazonía y la Costa, equivalente al 35% del territorio nacional (Deler, 1987: 278), en condiciones sumamente desventajosas para el país.<sup>81</sup>

Bajo una retórica nacionalista, la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), tuvo interés en fortalecer el capitalismo, colocando al Estado como un eje central dentro de esta nueva fase de acumulación e introduciendo transformaciones de profunda envergadura gracias a los ingentes recursos petroleros con los que contó el país a partir de la renegociación de los contratos petroleros.<sup>82</sup> De acuerdo a Alejandro Moreano para este momento histórico, los poderes locales resultaban inviables y era necesario impulsar un proceso de reformas tendente a eliminar los obstáculos para el desarrollo del capital:

“Las exportaciones petroleras aseguraron al Estado las rentas suficientes para asegurar la modernización de la agricultura y el surgimiento de nuevos grupos empresariales y financieros, sin afectar los ingresos de la vieja oligarquía comercial. De todas maneras y a pesar de su carácter limitado, esas transformaciones económico-sociales de las dos últimas décadas y que culminaron en el período del gobierno de Rodríguez Lara consumaron la crisis irreversible del sistema político imperante hasta los años 60” (Ayala ed., 1996b [1991]: 196).

Al disolver los poderes locales y crear las condiciones para el dominio de las nuevas facciones de la burguesía, el Estado no solo que estableció un control más directo sobre los distintos sectores sociales sino que gracias a los recursos provenientes del petróleo y el agresivo endeudamiento externo en el que incurrió el país a partir del último cuarto del siglo XX habrían contribuido a consolidar el proceso de integración territorial por la vía del mercado y a incidir sobre la modernización en el campo, a impulsar un tímido proceso de industrialización, acelerar la urbanización del país, y promover ciertas políticas sociales (ESPOL et al., 2011). Esto explicaría que durante la fase de bonanza petrolera se hayan dado pasos importantes para cubrir la mayor parte del territorio nacional a través de la radio, la prensa y la televisión; para impulsar la presencia de organismos públicos, la policía y las fuerzas armadas en las más remotas regiones del

---

<sup>81</sup> Al respecto Deler señala, por ejemplo, que las regalías se establecieron a tasas que fluctuaban entre el 6% y 12,5%, cuando la ley fijaba el 16% (1987: 278).

<sup>82</sup> En solo 15 años, de 1950 a 1975, el PIB habría aumentado en más de cinco veces, las exportaciones se habrían multiplicado por 15 y el presupuesto nacional habría aumentado en 25 veces (Moncada, 1978: 102 y 105).

país y para ampliar la red de carreteras (Ramón, 2004), alentando de manera paralela la creación de numerosos cantones y provincias. Cebrián anota que de 20 provincias y 110 cantones que el Ecuador registraba en 1962, se pasó a 114 cantones en 1974, 124 en 1982 y 169 en 1990, junto con la creación en 1989, de una provincia más, la de Sucumbíos, para llegar a un total de 21 provincias a esa fecha (Cebrián, 1999: 66). La intencionalidad fundamental en la creación de nuevas unidades administrativas habría sido, según Ramón (2004), el favorecer procesos de colonización sobre la región amazónica y en Esmeraldas, contribuyendo a sellar la integración definitiva de estos espacios a la economía nacional y a transformar territorios con particulares dinámicas sociales, culturales, productivas, organizativas y políticas en territorios ocupados. En la integración de nuevas áreas al control del Estado fueron importantes los impulsos dados por la expedición de una nueva ley de reforma agraria en 1973 durante el gobierno de Rodríguez Lara; y, en 1977, de la promulgación de la Ley de Colonización de la Región Amazónica y la conformación de una institución para regular esta actividad, el Instituto Nacional de Colonización de la Región Amazónica –INCRAE-, a cargo de la Junta Militar que derrocará a la anterior dictadura.

Sería precisamente esta Junta Militar la que auspició el retorno a la democracia y la elaboración de una nueva Carta Constitucional en la que la coyuntura política reciente no podía pasar desapercibida. De ahí que la Constitución de 1978 haya concedido, por un lado, el derecho al voto a los analfabetos, ampliando así los alcances de la ciudadanía a mayorías hasta entonces marginadas, especialmente pueblos indios y sectores campesinos, y haya formalizado, en su primer artículo, el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico del Ecuador. Desde entonces, ya no podrían estar ausentes del discurso político del país las demandas de los pueblos indios.

#### **3.2.4. ¿Estado-país o Estado-nación? Ecuador en los últimos cincuenta años<sup>83</sup>**

Alejandro Moreano escribía en 1991 que Ecuador es una existencia geográfica, no histórica. Los intentos, como el de la Revolución Liberal, para construir una voluntad hegemónica y fortalecer a la sociedad, no lograron cuajar debido a la resistencia a abandonar las bases materiales e ideológicas sobre las que se sustentaban los poderes

---

<sup>83</sup> Tomo prestado “Estado-país”, uno de los subtítulos del estudio realizado por Alejandro Moreano sobre el sistema político contemporáneo (Ayala ed., 1996b [1991]: 205).

locales. La Revolución Liberal tampoco habría podido integrar a todos los sectores sociales en un proyecto histórico común, en especial a los pueblos indios y afrodescendientes. Según Moreano, un sentido colectivo tampoco habría logrado cristalizarse en otros momentos históricos, como en la década de los sesenta, cuando ya se habría completado la base física del país, “la construcción de la maquinaria estatal sobre un territorio determinado” (Ayala ed. 1996b [1991]: 207), pues los sectores dominantes habrían preferido las alianzas con el capital internacional. El Estado-nación ha sido finalmente, según lo califica Moreano, una “prótesis creada desde arriba y desde afuera, subsidiaria del poder imperial” (Ibid: 188) y no una nación aglutinada alrededor de un sentido de identidad. Tampoco, dice él, es un pueblo que se exprese como sujeto histórico. La palabra pueblo, argumenta, es producto del aparato estatal en el marco de los procesos electorales o remite exclusivamente a los sectores pobres de las ciudades, relegando nuevamente de esta noción a los indios y afrodescendientes. Al no ser nación ni pueblo, Ecuador es un territorio y un aparato estatal que se explica por la trayectoria histórica seguida en la construcción del Estado:

"El Estado moderno es a la vez capitalista y nacional. En varios países de Europa los dos procesos se dieron en un solo movimiento. Pero, en el Ecuador, la constitución del Estado capitalista sin la formación del Estado Nacional ha devenido en un poderoso obstáculo para la construcción de una voluntad nacional-popular. En efecto, el Estado moderno ecuatoriano impulsa la fragmentación y particularización de las clases y fuerzas sociales portadoras de la sustancia nacional y perpetúa su condición de Estado-país. De allí su resistencia al reconocimiento político de la sustancia pluriétnica del Ecuador" (Ayala ed., 1996b [1991]: 207).

Frente al análisis de Moreano, elaborado hace menos de tres décadas, cabe preguntarse, ¿cuáles son los avances que se advierten en la construcción del Estado-nación ecuatoriano?, ¿ha permitido el desarrollo y consolidación del capitalismo la estructuración de un sector dominante hegemónico capaz de constituirse en portador de una voluntad nacional-popular?, ¿cómo ha procesado el Estado y la sociedad ecuatoriana el surgimiento de un “nuevo ” sujeto histórico, los indios, que hicieron su aparición en la escena política en los años 90?

El retorno democrático (1978) se sustentó en una nueva Constitución, que para ese entonces era la décimo octava en el país y que habría sido impulsada por la Junta Militar que abandonó el poder a raíz del triunfo de Jaime Roldós Aguilera.<sup>84</sup> Este retorno

---

<sup>84</sup> Para profundizar sobre el proceso político ecuatoriano durante las dos terceras partes del siglo XX ver Agustín Cueva, *El proceso de dominación política del Ecuador* (1972); Osvaldo Hurtado, *El poder político*

no fue fácil. No solo fue la prematura muerte del Presidente en un accidente aún no plenamente dilucidado, sino también el estallido de una de las peores crisis económicas por las que atravesaría el Ecuador y el inicio de la aplicación de severas políticas de ajuste para enfrentar el pago de la deuda externa. En contraste con la relativa estabilidad gubernamental hasta 1996, donde se suceden cuatro administraciones sin interrupciones (Osvaldo Hurtado, León Febres-Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén), la esfera social se distinguió por continuos estallidos, el más notable el levantamiento de los pueblos indios en los noventa, que no solamente reivindicaba derechos colectivos sino que logró canalizar el descontento de las mayorías sociales y su oposición a la combinación de liberalización económica y ajuste fiscal que los gobiernos de turno habrían aplicado con diversos grados de intensidad.

El escenario de recesión económica que afectó al Ecuador sobretodo desde 1982, ha sido ampliamente estudiado. Las investigaciones llevadas a cabo por Acosta (2004), Larrea (2006), Falconí y Oleas (2004), así como por universidades (ESPOL, et al., 2011), dan cuenta del desplome de los indicadores sociales, del crecimiento de la deuda externa a niveles insostenibles, de la profundización de la inequidad, del drástico derrumbamiento del producto interno bruto, de la abultada emisión monetaria para proteger la operación del sistema financiero privado y el bloqueo de los flujos internacionales, cuyos efectos se exacerbaban por la concurrencia de un conjunto de factores internos y externos como la disminución del precio del petróleo y los negativos impactos productivos como consecuencia del fenómeno de El Niño. Para ilustrar la gravedad de los problemas económicos y sociales basta señalar que hacia finales de los noventa mientras los nueve deciles de la población redujeron sus ingresos, el decil más rico los aumentó de 35,4% en 1990 a 45,3% en 2000 (ESPOL et al., 2011: 101); que se evidenció un profundo retroceso en algunos de los logros alcanzados en materia de desarrollo social, al punto que para el año 2003, Ecuador ostentaba, en comparación con otros países de la región, uno de los últimos lugares en la inversión social por habitante con 76 dólares frente a un promedio de 481 dólares para 21 países de América Latina (Ibid.); que el PIB que entre 1992 a 1997 había crecido a un promedio anual del 2,9%, descendió a un 0,4% en 1998 y se desmoronó al -7,3% en 1999 (Ibid.: 141); que la deuda externa que en 1982 representaba el 50% del PIB ascendiera en el 2003 hasta el 57% (Larrea, 2006: 104). En esta década, “el balance

---

*en el Ecuador* (1977); *Ecuador: pasado y presente* (1976), editado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador y el libro de Patricio Moncayo, *Ecuador: grietas en la dominación* (1977).

tiene menos relación con el desarrollo y más con el fracaso del crecimiento” (Falconí y Oleas, 2004: 41).

Para paliar la crisis, Ecuador optó por incrementar las exportaciones como medio para reactivar el crecimiento de la economía, lo que significó incrementar la presión sobre la naturaleza y territorios que habían pasado hasta entonces desapercibidos. Larrea identifica a la extracción de petróleo y de madera como las dos actividades de mayor impacto sobre ecosistemas remanentes pues mientras en el primer caso la capacidad de extracción y de transporte se habría duplicado en relación a los volúmenes registrados a inicios de los noventa, afectando áreas protegidas y territorios de pueblos ancestrales, la deforestación en selvas tropicales, con Esmeraldas en uno de los lugares más relevantes, ubicaría a Ecuador en la segunda posición más crítica del continente (Larrea, 2006: 121-123). La promoción de actividades económicas extractivas fue posible gracias a la existencia de un marco regulatorio que alentó la concentración de la tierra: mientras la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario de 1979 garantizó la propiedad de las tierras cultivadas, la ley de Desarrollo Agrario de 1994 promocionó el mercado de tierras y autorizó el fraccionamiento de las tierras comunales (Acosta et al., 2014: 172).

La crisis hizo posible que los municipios retornen a la escena política y con ellos las demandas por autonomía y descentralización de diverso signo; activó igualmente el surgimiento de las reivindicaciones de pueblos indios y afrodescendientes que reclamaron el acceso al territorio como condición para su reproducción social, cultural y política como pueblos diferentes dentro de un Estado aparentemente homogéneo. Serían los orígenes de un nuevo discurso sobre la territorialidad, del consiguiente cuestionamiento al carácter unitario y centralista del Estado y el inicio de la discusión de la plurinacionalidad ya no como etiqueta, sino como una demanda real por concreciones ante la cada vez mayor visibilidad que fue adquiriendo el movimiento de los pueblos indios desde los años 90. Al respecto cabe recordar que la presión y poder de convocatoria del movimiento indio logró, desde la fecha del histórico levantamiento de junio de 1990, la atención a algunas de sus demandas como la entrega de 1.115.000 hectáreas de tierras a pueblos y nacionalidades, bajo el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992).

El rechazo social a los planes de ajuste convirtió al período 1996-2006 en un escenario de alta inestabilidad pues como dice Esther del Campo en un estudio sobre la gobernabilidad en tres países andinos, en Ecuador,

“la caída de la renta petrolera y el crecimiento de la deuda externa redujeron considerablemente la capacidad del Estado para intervenir en la actividad económica, redistribuir los recursos públicos y arbitrar los conflictos sociales. En tales circunstancias, los grupos y actores sociales presionaron a los distintos gobiernos para asegurar o recuperar su acceso privilegiado a los recursos públicos, agudizando así la crisis económica y acelerando la polarización social, étnica y regional” (Campo, 2006: 20).

La crisis fue de tal magnitud que en la historia reciente, no existe período comparable con mayor cantidad de gobiernos por unidad de tiempo, con nueve presidentes que no lograron terminar su período.

Hacia principios del siglo XXI, el incontenible deterioro de las condiciones de vida y el desprestigio de la institucionalidad estatal condujeron a que el 21 de enero de 2000, el movimiento indígena y los militares, representados por un grupo de coroneles entre los que sobresalía Lucio Gutiérrez, expulsen del poder a Jamil Mahuad, en quien se personificó la debacle económica y financiera del país a través de un salvataje bancario y un masivo congelamiento de depósitos que abrió paso a la apresurada medida de dolarización de la economía ecuatoriana. En medio de la profundización de la crisis que empujó el gobierno de Mahuad, la única política que con probabilidad tuvo una repercusión positiva fue la culminación de las diferencias limítrofes entre Ecuador y Perú en relación a un área de frontera común de 78 km que no fue delimitada desde los procesos independentistas. Con la firma del Tratado de Paz y Amistad entre los dos países se cerró uno de los conflictos limítrofes más largos de la historia y cuyas repercusiones se extendieron incluso hasta el último tercio del siglo XX en el enfrentamiento bélico de 1981, conocido como Paquisha, y en 1995, en la llamada guerra del Cenepa.

El derrocamiento del presidente Mahuad en el 2000 condujo, a los pocos días, a que la alianza que lo destituyó entregue la conducción del gobierno a quien hasta entonces se había desempeñado como vicepresidente constitucional, Gustavo Noboa. Tres años después, en el marco de un nuevo proceso electoral, indios y ex militares consiguieron llegar al poder. Una vez Presidente, Lucio Gutiérrez rompió la alianza con los indios. Su gobierno, caracterizado por un conjunto de decisiones erráticas y salpicado de continuas denuncias de corrupción, culminó en abril del 2005 tras intensas protestas sociales. Para terminar el período presidencial, Alfredo Palacio, vicepresidente de Gutiérrez, fue nombrado Presidente por el Congreso Nacional.

A partir del 2007 y ante el desgaste de los partidos políticos tradicionales y de la institucionalidad existente, una coalición conformada por diversos sectores de izquierda y fuerzas progresistas, llegó al poder bajo los postulados del denominado "socialismo del

siglo XXI”. La Revolución Ciudadana, dirigida por el economista Rafael Correa, fue sobre todo la respuesta a la descomposición del sistema político y a la crisis social y económica que había afectado al Ecuador en los últimos años y no el fruto de un proceso organizativo de larga data. De hecho, su triunfo coincidió con un repliegue del movimiento indio, dividido luego de su paso por el poder, así como con un debilitamiento de los movimientos estudiantiles, de trabajadores y maestros. Uno de los análisis más completos realizados respecto al triunfo de la Revolución Ciudadana señala que,

“la sociedad ecuatoriana de mediados de la década del 2000 estaba urgida por recuperar la estabilidad y la seguridad perdidas desde tiempo atrás, quizá desde finales de la dictadura de Rodríguez Lara. (...) Esto explicaría la adhesión que al final produjo un discurso en esencia, tan convencional. El desarrollismo, la eficacia tecnocrática, la provisión de infraestructura y el incremento del consumo no son más que emulaciones de modelos anclados en viejos patrones colonialistas” (Álvarez et al., 2013: 23).

Los postulados que concitaron el apoyo mayoritario de la población se tradujeron, durante el régimen de la Revolución Ciudadana, en medidas fundamentalmente orientadas a recobrar el control de la riqueza del país por parte del Estado y a otorgar centralidad a la acción de gobierno. En esta dirección destacan la renegociación de los contratos petroleros que posibilitó al Estado el acceso a una mayor proporción de la renta petrolera en comparación con lo sucedido en regímenes anteriores o los esfuerzos por una mayor recaudación tributaria (Moncada, 2012). Menor importancia tuvo la renegociación de la deuda externa ecuatoriana que, en función de las recomendaciones de la auditoría integral impulsada por el gobierno, podría haber significado una renegociación mucho más amplia por la existencia de argumentos que justificaban la impugnación de deudas con el Banco Mundial y otras bilaterales declaradas como corruptas. La renegociación finalmente ejecutada consistió en la suspensión de pagos de dos tramos de deuda externa comercial, los Bonos Global a doce años y los Bonos Global a treinta años, y la compra de estos bonos en el 2008 (Acosta, et al., 2014: 292).

Pese al amplio respaldo popular que concitó el gobierno de Correa, durante su período de gobierno no solo no se dieron cambios estructurales significativos, sino que se intensificó la modalidad primario exportadora y sus consecuencias sobre la concentración de la tierra. Un estudio respecto a la política agraria implementada en este período gubernamental revela, por ejemplo, que el coeficiente Gini de acceso a la tierra



es de 0,81,<sup>85</sup> lo que coloca a Ecuador entre uno de los países más desiguales del continente. Esto explica que mientras

“el 46,3% de las tierras son propiedad del 0,68% de la población (Revolución Agraria, 2011: 5), las propiedades de menos de cinco hectáreas representan el 64% de las unidades y el 6,53% de la superficie (promedio de 1,4 hectáreas). Las de más de 500 hectáreas constituyen el 0,16% de las unidades y el 16% de las tierras (promedio de 1.400 hectáreas). Los minifundios de menos de 0,5 hectáreas, que son 165.000 en el país, es decir la mitad de las pequeñas propiedades, no permiten la reproducción social del campesino y constituyen una zona de pobreza” (Acosta et al., 2014: 170).

En otros ámbitos de la acción estatal, ante el vacío organizativo, el gobierno de Rafael Correa combinó la lucha contra la pobreza a través de reformas fiscales, el incremento de los ingresos y el clientelismo político como lo demuestra la continuidad de la política de subsidios -Bono de Desarrollo Humano- que cubre a cerca de dos millones de ecuatorianos; la consecución de la eficacia y modernización institucional, con un mayor tutelaje y sometimiento de la población y con dosis cada vez más altas de autoritarismo; la mayor explotación de los bienes naturales como condición para transitar hacia la transformación de la matriz productiva, propendiendo a la “monopolización y transnacionalización del proceso de acumulación”, al mismo tiempo que esgrimía una “retórica antiimperialista avalada por un entramado regional (...) favorable” (Ibid.: 25).

Es en este marco que se entiende un espectacular crecimiento de la inversión pública que en ocho años más que triplicó su participación en el PIB al pasar del 4,2% en 2006, al 10,7% en 2009, al 15,7% en 2012 y al 13,2% en 2014.<sup>86</sup> Análisis económicos realizados sobre el impacto de esta inversión señalan que ésta no se tradujo en un

“incremento del sector industrial ni del empleo; tampoco modificó la estructura de las exportaciones o propició un incremento de las exportaciones de bienes de capital. La obra pública en la que invirtió el gobierno de Correa ha significado sobre todo una mayor integración de la economía nacional a los circuitos mundiales de la financiarización del capital” (Acosta et al., 2014: 242).

En la medida en que el grueso de los ingresos públicos se dirigieron al transporte, la energía y las comunicaciones, su racionalidad apuntaría sobre todo a la integración geográfica y territorial a través de la construcción de una extensa red de carreteras que articula las diversas regiones a lo largo y ancho del país, y a la construcción de puertos,

---

<sup>85</sup> Un índice de Gini de cero significaría la ausencia de inequidad, en cambio, mientras más se acerque a uno el valor de este índice, mayores son los niveles de inequidad presentes en una sociedad.

<sup>86</sup> Los datos provienen de [www.senplades.gob.ec](http://www.senplades.gob.ec), acceso el 20.11.16.

aeropuertos y zonas de transporte multimodal que conectarían áreas de explotación al mercado mundial. Como apunta la evaluación sobre los siete primeros años del gobierno de Rafael Correa elaborada por Acosta y otros, esta compleja red de transporte e infraestructura se “corresponden a los ejes multimodales de integración territorial contenidas en la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sud Americana - IIRSA” (Ibid.: 245). Para ilustrar la dimensión de la inversión realizada cabe señalar que solo en el período 2007-2015 se habrían intervenido 9.706 km de vías con recursos económicos superiores a los 7,7 mil millones de dólares.<sup>87</sup>

Como parte de la relevancia entregada por el Presidente Correa a la integración territorial, durante su gobierno se ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que, de acuerdo a información gubernamental, significa sumar 180 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo al patrimonio nacional. Esta decisión supuso definir los espacios y límites marítimos con Perú, Colombia y Costa Rica.

La construcción de un proyecto común que contribuya a cohesionar la nación, no ha tenido igual importancia. La ascensión del gobierno de Correa y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, representaron para amplios sectores sociales una suerte de “ilusión movilizadora”<sup>88</sup> que prometía la refundación del país sobre bases más equitativas y de mayor inclusión social, considerando la adopción de las principales demandas de los movimientos sociales y las organizaciones indígenas en los contenidos de la nueva Carta Magna que regiría el destino del país. La definición de Ecuador como un Estado Plurinacional, la adopción del denominado régimen del buen vivir o las diversas disposiciones constitucionales orientadas a fomentar la participación (vale recordar, por ejemplo, iniciativas pioneras recogidas en la Constitución como el derecho a la resistencia, la “silla vacía”<sup>89</sup>, la conformación del Consejo de Participación y Control Social, entre otras), resultaron mucho más ambiciosas que el alcance de la llamada Revolución Ciudadana.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Información disponible en <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/mas-de-mil-kilometros-de-carreteras-por-cada-ano-2>, acceso el 08.12.16.

<sup>88</sup> Uso la frase que en algunas ocasiones fuera utilizada por el ex Presidente Correa en Ecuador durante sus alocuciones públicas, como fue durante el lanzamiento del Plan Nacional de Alto Rendimiento 2013-2016. Ver [http://www.la-razon.com/marcas/ilusion-movilizador-Rafael-Correa\\_0\\_1901809804.html](http://www.la-razon.com/marcas/ilusion-movilizador-Rafael-Correa_0_1901809804.html), acceso el 22.11.18.

<sup>89</sup> La silla vacía es un mecanismo previsto en la Constitución ecuatoriana del 2008 (Art. 101) que prevé la participación de un representante ciudadano en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados con el propósito de participar en el debate de un tema y en la toma de decisiones.

<sup>90</sup> Para un análisis crítico de los diez años del gobierno de Correa merece consultarse la trilogía a cargo de varios autores ecuatorianos, *El correísmo al desnudo* (2013), *La restauración conservadora del correísmo* (2014), y *El gran fraude* (2018).

## **Capítulo 4. La realidad de las fronteras del norte del Ecuador**

---

Las fronteras, lejos de interpretarse solo como el límite internacional de un Estado, comprenden un área de extensión variable o incluso una zona de transición entre sociedades distintas. El significado de frontera en tanto área o zona de frontera deriva en la categoría de región fronteriza, un término que, al igual que la noción de frontera, tiene también una variedad de significados. Puede abarcar el área inmediatamente colindante al límite exterior del Estado o referirse a regiones más amplias como las zonas binacionales o transnacionales y aún a las jurisdicciones administrativas adyacentes a la frontera que tienen sus centros políticos físicamente distantes del límite fronterizo. Para esta investigación, se asume que la región fronteriza norte o la frontera del norte del Ecuador está constituida por tres provincias, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Este capítulo tiene precisamente como objetivo el estudio de la realidad de estas provincias y la forma en cómo su adscripción a la frontera incide en su configuración.

#### **4.1. Tres fronteras y un solo límite territorial**

*“La retórica de la frontera, con sus mecanismos de negación, ocultamiento y contención, es parte constitutiva de la historia nacional. Ésta tiene como función destituir el acontecimiento, la heterogeneidad, las historias y las memorias locales, con el fin de mantener la unidad de sus interpretaciones y afirmaciones globales” (Espinosa, 2008: 77).*

A lo largo de 586 km, Ecuador y Colombia comparten un territorio dividido por una frontera (ver Mapa 3). Como sucede con todas las fronteras, este espacio aparentemente homogéneo refleja, parafraseando a Albuquerque (2014), la capacidad humana de producir discontinuidad en un espacio continuo. Esta característica no escapa a la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Dentro del límite entre los dos Estados es posible distinguir diversas fronteras o regiones fronterizas que se caracterizan por rasgos sociales, económicos, políticos y ecológicos particulares, que evidencian desiguales niveles de consolidación institucional; alianzas y conflictos diferentes, una intensidad variable en el volumen y naturaleza de los intercambios y flujos comerciales, una presencia militar que no tiene los mismos parámetros a lo largo de la línea fronteriza ni ejecuta iguales mecanismos de control en cada lugar de cruce; así como distintas configuraciones sociales producto de trayectorias históricas particulares. Como señala Grimson, “(e)l estudio de las fronteras requiere escapar a las versiones estáticas y homogéneas de culturas unitarias” (Grimson, 2005a: 93) y comprender que dentro de una frontera pueden existir múltiples fronteras como lo constata Gregory Valdir para el caso del Paraná cuando señala:

“El territorio, las fronteras, la población y el paisaje que lo componen tienen historicidad. Las historias de lugares son historias de movimientos, de migraciones constantes, de conflictos y de transformaciones de espacios y de paisajes. Así como el espacio, el territorio es producido (explorado o utilizado) por formaciones sociales, con dinámicas propias y repletas de contradicciones y desigualdades. Al interior de las fronteras de los territorios, están presentes las especificidades locales, inherentes a la dinámica general de la sociedad y a las particularidades de los lugares y tiempos históricos” (Valdir, 2014: 209).

**Mapa 3. Fronteras del norte del Ecuador. Distribución política-administrativa**



Fuente: Cartografía de libre acceso. Geoportal ([www.geoportaligm.gob.ec](http://www.geoportaligm.gob.ec), acceso el 04.01.2016)

Elaboración: Propia

En el caso de la frontera norte del Ecuador, esa única línea fronteriza parecería desdoblarse en tres segmentos, cada uno atado a una unidad administrativa –provincia- y coincidente casi de manera exacta con un ecosistema característico, así como con trayectorias históricas distintas de incorporación al espacio político único. Entre cada uno de estos tres segmentos, pequeñas franjas socio-territoriales harían las veces de espacios de transición desde una provincia a la siguiente, de un ecosistema a otro, de una a otra forma de organización social. La heterogeneidad presente en los tres segmentos en los que se dibuja la frontera norte del Ecuador alude a los discursos y prácticas con los que la sociedad dominante calificó a cada uno de los territorios. Mientras en las fronteras de Esmeraldas y Sucumbios históricamente han estado asentados pueblos negros e indios

cuyas formas de organización y producción han sido motivo de prácticas discriminatorias y racistas, el territorio de la provincia de Carchi, identificado desde la colonia como un área de colonización, tiene predominio de población mestiza y una trayectoria de incorporación más temprana al proceso de conformación del Estado ecuatoriano. Siguiendo a Santos (2014), es precisamente la distinta conformación socio cultural de cada uno de los tres segmentos territoriales fronterizos la que ha definido su ubicación dentro de la línea abismal: mientras Esmeraldas y Sucumbíos están del lado de la apropiación y la violencia, y por lo tanto, de la estructuración de territorios racializados, Carchi está más cercano al espacio de la regulación/emancipación.

Esmeraldas, con 16.031 km<sup>2</sup> (GADPEsmeraldas, 2011: 6) de superficie, corresponde al primer segmento de la frontera entre Ecuador y Colombia que se extiende desde el Pacífico hacia el interior del continente. Es el territorio de vida de pueblos afroecuatorianos, de tres pueblos ancestrales Chachi, Épera y Awá y de población mestiza, cuyos asentamientos se distribuyen desde áreas cubiertas por manglares para prolongarse por los bosques tropicales pertenecientes a la biocorredor del Chocó, uno de los espacios más valiosos y representativos por su diversidad biológica debido a la combinación de humedad y altas temperaturas, lo que convierte a la zona en una suerte de macro-invernadero. De ahí que de las 25.000 especies vegetales identificadas en Ecuador, alrededor de 6.300 especies de flora provengan de bosques lluviosos tropicales del litoral norte con un nivel de endemismo del 20%, equivalente a 1.260 especies, y que de las 1.500 especies de aves registradas en el país, 650 serían propias de esta región (Dodson y Gentry, 1993, citado por PRAS-CID-PUCESE, 2011a: 66).

Según se detalla en la sección 5.1, la misma que aborda el proceso de integración de Esmeraldas al Estado ecuatoriano, el territorio de esta provincia mantuvo una relativa autonomía hasta bien entrado el siglo XX. Desde entonces su territorio ha sido adecuado y aprovechado para atender las diversas tendencias de exportación impulsadas por el país: banano, camarón, petróleo, palma aceitera, junto con una intensa explotación forestal y la realización de actividades de pesca, tanto para el consumo interno cuanto para los mercados internacionales. En conjunto, estas actividades económicas representan una producción bruta cercana a los 1.500 millones de dólares al año, lo que significa el 4% del total nacional. En la composición de la producción bruta, la refinación del petróleo ocupa un lugar central (39%), a la que le sigue el comercio (15%), las actividades manufactureras (12%) y la agricultura (11%). La pesca es también una actividad importante que implica una producción de 32 mil toneladas métricas al año. Hay

alrededor de 80 cooperativas artesanales que se dedican a esta actividad de las que apenas un tercio están activas, y siete grandes empacadoras. La producción de camarón es de 9.500 tm/año (MCPEC, 2011a: 22).

Orientada a la producción de *commodities* y a actividades extractivas, la riqueza de la provincia de Esmeraldas no ha repercutido en el mejoramiento de la calidad de vida de su población. Subsiste una alta inequidad en la distribución de la tierra y escasas oportunidades de trabajo. Con 811.000 has de tierra de uso, el 41% de las fincas con menos de 9 has cada una, concentran apenas el 7% de la superficie; las fincas medianas de más de 20 has y menos de 100 has, representan el 50% del total y concentran el 43% de la superficie y en el otro extremo, 9% de las fincas ocupan el 50% de la superficie restante con propiedades que sobrepasan las 270 has. (Ibid.: 19). En términos de empleo, Esmeraldas ha tenido históricamente una tasa de desempleo más alta que el promedio nacional. Mientras en el 2007, la tasa de desempleo ascendía en el país al 6,1%, en Esmeraldas era del 7,3%. Dos años más tarde, en el 2009, estos indicadores fueron del 7,9% y 11,1%, respectivamente (Carrión y Llugsha coord., 2013: 87).

Los diversos procesos de apropiación de la naturaleza como los monocultivos, la expansión de piscinas camaroneras y la operación de la primera y única refinería de la que dispone Ecuador, han sembrado un cúmulo de pasivos ambientales que han profundizado los problemas que enfrenta históricamente la población de esta provincia, particularmente entre sus poblaciones originarias y comunidades afroecuatorianas.

Dentro de este primer segmento de la frontera, el poblado ecuatoriano fronterizo más cercano a Colombia es Mataje, ubicado a unos 40 km aproximadamente de San Lorenzo. Entre Mataje en Esmeraldas y La Espriella en Nariño, el departamento colombiano adyacente a territorio ecuatoriano, el paso fronterizo está prácticamente abandonado, con controles militares ubicados a alguna distancia del límite internacional. La falta de carreteras en la zona fronteriza de Colombia se reconocía como una de las grandes limitaciones para mejorar el equipamiento en el cruce fronterizo Mataje-La Espriella (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004: 179) y construir un Centro Nacional de Atención de Frontera. Sería recién a mediados del 2012 que los gobiernos de Ecuador y Colombia adoptaron el compromiso binacional de concluir esta ruta.

Además de este acceso fronterizo, en este primer segmento de la frontera existen numerosos pasos informales que, según información oficial, ascendían hacia finales de la primera década de este siglo a 72 accesos entre Nariño y Esmeraldas (Cancillería del Ecuador y Cancillería de Colombia, 2009). Como en los restantes segmentos de la

frontera norte, los pasos informales existentes entre Colombia y Ecuador son utilizados para el tráfico de migrantes con destino a Norte América. En Colombia, la Regional Nariño detectó durante el período 2012-2013, 385 posibles víctimas de traficantes de población migrante (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 60).

Esmeraldas dispone de cuatro puertos. Desde el puerto de Esmeraldas salen las exportaciones de madera y aceite de palma e ingresan las importaciones de la industria siderúrgica, automotriz, así como minerales, maquinaria industrial y equipo eléctrico. El puerto pesquero artesanal de Esmeraldas abastece el comercio interno del país con mariscos y pescados. Por el puerto de Balao se canaliza el 58% de las exportaciones de petróleo, mientras que el puerto de San Lorenzo, antiguo puerto maderero, se ocupa en la actualidad como embarcadero fluvial (Ibid.). El aeropuerto de Esmeraldas, ubicado en Tachina, una población cercana a la capital de la provincia, tiene operaciones internas e internacionales (Cali, Colombia).

La segunda frontera dentro del espacio divisorio entre Ecuador y Colombia, coincide con la provincia del Carchi. La mayor parte de su superficie de 3.605 km<sup>2</sup> pertenece al ecosistema andino donde vive la población mestiza y el pueblo Pasto<sup>91</sup> y se extiende hacia zonas subtropicales, abarcando parte del territorio del pueblo Awá. Su dinámica económica se caracteriza por un intenso flujo de tráfico y comercio y la presencia de economías campesinas que aprovechan las favorables condiciones los suelos de esta provincia, generando el 35% y el 27% del valor agregado provincial, con tasas de desempleo que en el período 2007-2009 han sido menores al 5%, más bajas que el promedio nacional de este indicador (Carrión y Llugsha coord., 2013: 76).

El 45% de su superficie (163.125 hectáreas aproximadamente), está dedicada al cultivo de tubérculos (papa especialmente), cereales y la cría de ganado, con una importante producción lechera y de carne (Carchi produce el 5% de la leche y el 1% de la carne a nivel nacional) (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 22). La contaminación y la erosión de los suelos, así como el envenenamiento del río El Ángel son las consecuencias

---

<sup>91</sup> Desde mediados del año 2005, el pueblo Pasto asentado en Ecuador inició su proceso de reconstitución. Los Pastos habrían ocupado el territorio que se repartía entre los valles del Chota y del Guaytara, extendiéndose hacia el occidente por los valles del Mira, del San Juan y del Patía, en un espacio que en la actualidad corresponde a ambos países (Martínez, 1977, citado por Deler, 1987: 101). No solo que la constitución de los Estados habría significado para los Pastos una importante fractura etno-cultural, sino que durante la conquista española habrían sido objeto de “expediciones destructoras que aspiraban a ‘pacificar’ las regiones codiciadas” (Ibid.: 140), motivando al mismo tiempo que parte de la población abandone su territorio en busca de lugares menos accesibles a los conquistadores. Y es que los Pastos, quienes no estuvieron sometidos a la influencia Inca, representaron un foco de resistencia mucho más poderoso en comparación con territorios ubicados más al sur donde las instituciones incas fueron funcionalizadas a favor de la conquista.



más visibles de un patrón productivo fuertemente dependiente de insumos químicos y de una alta inequidad en la distribución de la tierra pues mientras el 87% de los productores, con fincas de menos de 20 hectáreas, tienen un tercio de la tierra, el 2% de las unidades productivas concentran el 40% de la superficie (MCPEC, 2011: 19). Aparte de su vocación agrícola, desde 1985 en el Carchi se localizaron depósitos mineros de metales, minerales no metálicos y canteras y actualmente se explota oro aluvial de forma artesanal en el área noroccidental. En términos de su aporte a la producción nacional, el comercio y la agricultura del Carchi contribuyen con un 1% (Ibid.: 14).

De las tres provincias fronterizas, Carchi es la que tiene un mayor nivel de urbanización pues sus bosques cubren cerca del 30% de la provincia, en comparación con el 41% de bosques que tiene Esmeraldas y el 61% Sucumbíos. Pese a la relativamente menor área forestal, Carchi contiene bosque tropical húmedo, bosque de niebla, páramos y humedales (Ibid.: 30).

Para la comunicación con Colombia, Carchi cuenta con un aeropuerto y con el principal paso fronterizo binacional, el puente Rumichaca, y existen, a lo largo de este segmento más de 20 pasos clandestinos. Es el paso del puente Rumichaca precisamente el que ha sustentado la generación de una economía ligada al comercio en el que participa un significativo porcentaje de la población carchense, aprovechando desde un conocimiento empírico desarrollado históricamente hasta las ventajas del diferencial cambiario entre el dólar y el peso colombiano. Los flujos comerciales se vieron afectados desde el 2012 debido a la paulatina apreciación del dólar frente al peso colombiano, lo que se agravó con la imposición de salvaguardas para restringir las importaciones, medida adoptada a inicios del año 2015 por el gobierno del Ecuador. El deterioro del comercio condujo a declarar a la capital de la provincia, Tulcán, como “zona deprimida” en respuesta a la movilización de la población que exigía la atención del Estado (El Telégrafo, 2015).

El tercer segmento de la frontera concuerda con la provincia de Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana que, al igual que Esmeraldas, ha estructurado su dinámica productiva en respuesta a las demandas y requerimientos de los mercados internacionales: oro y quinina a lo largo del siglo XIX, caucho a comienzos del siglo XX y madera y petróleo desde aproximadamente 1960 hasta la actualidad. Más de las tres cuartas partes de Sucumbíos tiene petróleo. Se estima que actualmente operan más de 300 pozos que extraen más de 200 mil barriles diarios (MCPEC, 2011b: 26). Es precisamente esta forma de imbricación de Sucumbíos al espacio nacional único lo que lleva a Gardenia Chávez

a señalar que “(e)s una zona que ve desarrollar el Estado en función directa de lo que son la defensa de fronteras y la consecución y/o mantenimiento del monopolio sobre el manejo de recursos estratégicos (...)” (Pezzi, Chávez y Minda, 1996: 130).

Sucumbíos está localizada en el extremo nororiental de Ecuador, haciendo frontera con Colombia y Perú, es la provincia de más reciente creación en la región fronteriza pues se estableció recién en 1989, cuando se desprendió de su anterior contenedor administrativo, la provincia del Napo, bajo la triple justificación de fortalecer su desarrollo económico, responder a las exigencias de la descentralización y fortalecer la región fronteriza (Ibid.: 115).

Habitada históricamente por los pueblos Siona, Sekoya, Cofán, y más tarde por migraciones internas de los pueblos Shuar y Kichwa, su territorio de 17.947 km<sup>2</sup> fue densificándose desde los años 60 del siglo pasado a través de la presencia de olas de colonización promovidas por el Estado y por nuevos procesos migratorios asociados al inicio de la explotación petrolera. Las olas migratorias alteraron la baja densidad poblacional que caracterizó a la Amazonía hasta mediados del siglo XX. Para ese entonces, esta región habría tenido 46.471 habitantes de los cuales mientras el 66% vivían en las dos provincias del sur, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, el 34% de la población, cerca de 16 mil personas, se distribuía en el resto de la región (Ospina, 2004). Para el 2010, esta realidad se habría invertido. De las cerca de 740 mil personas que vivían para ese entonces en la Amazonía ecuatoriana, lo que representa un crecimiento de 16 veces en cincuenta años, el 32% se concentraba al sur y el 68% en las provincias del centro y norte de la Amazonía, siendo Sucumbíos la provincia con mayor población (24%), seguida por Orellana (18%), Napo (14%) y Pastaza (11%) (INEC, 2016).

La construcción de la red de carreteras y oleoductos necesarios para la operación del sector petrolero empujó la fundación de nuevas ciudades como Lago Agrio, Coca, Shushufindi y Joya de los Sachas, la presencia de desordenados y caóticos procesos de colonización alrededor de las vías, y consecuencias graves sobre los pueblos indígenas para quienes “esta última ola de urbanización implicó desposesión, empobrecimiento, enfermedades fruto de la contaminación petrolera y en los casos de Tetetes y Sansahuaris su extinción” (Ospina, 2004: 9).

La importancia del petróleo para el conjunto de la economía nacional<sup>92</sup> no ha logrado traducirse en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que viven en las zonas de extracción, donde los índices de pobreza son mayores en comparación con otras regiones y provincias. Además de petróleo, Sucumbíos tiene depósitos de oro en los ríos, en algunos de los cuales ha iniciado operaciones de explotación ilegales.

Aunque es una provincia especializada en el área extractiva, la generación de empleo proviene principalmente de la agricultura, el turismo y los servicios, que le siguen en importancia. En la agricultura, además de la producción para consumo local, sobresalen los pastizales con impactos sobre la calidad del suelo y la deforestación de extensas superficies de bosques, así como extensiones cada vez más grandes de palma aceitera introducida desde finales del decenio de los 60 (Trujillo, 2005).

El paso fronterizo de este tercer segmento está representado por el Puente Internacional San Miguel y a aproximadamente 5 km de la línea fronteriza, en el lado ecuatoriano está construida una gran edificación destinada para el Centro Nacional de Atención de Frontera (CENAF) que tras reiterados incumplimientos comenzó a operar desde el 2013, conectando la frontera amazónica del Ecuador con Santa Ana en Colombia.

En términos de conectividad, en Sucumbíos operan varios puertos fluviales entre los que destacan: San Miguel, El Carmen-Putumayo, y Puerto Providencia-Napo, este último motivo de una ampliación en 2015 a través de una inversión de 29,6 millones de dólares (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 107). El aeropuerto de Lago Agrio se utiliza para el transporte de pasajeros, militares y personal de las empresas petroleras.

Los tres “segmentos” de la frontera norte ecuatoriana antes descritos, pese a sus diferencias y particularidades, comparten al mismo tiempo una serie de conflictos y problemas de larga data y que se han agudizado en el transcurso de los últimos años como resultado de la confluencia de problemas estructurales por largo tiempo no atendidos, a los que se suma la irrupción de nuevos factores entre los que destacan la consolidación de un modelo extractivo, los efectos del conflicto colombiano y una presencia del Estado que ha favorecido la seguridad y el control, por sobre el cumplimiento de los derechos de la población fronteriza. Si bien la problemática descrita será abordada en otras secciones de esta tesis y analizada con detenimiento para el caso de Esmeraldas, una mirada

---

<sup>92</sup> Según cifras del Banco Central del Ecuador, en el período 2007-2017, las exportaciones de petróleo representaron en promedio cerca de la mitad de las exportaciones totales y los ingresos petroleros el 31% del presupuesto general del Estado (<https://www.bce.fin>).

panorámica sobre lo que acontece en el conjunto de la región fronteriza del norte de Ecuador puede ser capturada a través del Mapa 4 que condensa la problemática de esta región y los actores que interactúan en el área.

## 4.2. La población de las fronteras del norte del Ecuador

Demográficamente, para el año 2010 en las tres provincias vivían 875.088 personas, que representan el 6,12% de la población nacional. De este total, un poco más del 5% se identifica como parte de los nueve pueblos y nacionalidades indígenas distribuidos en la región, el 1,72% se reconoce como población montubia y aproximadamente una tercera parte como afrodescendientes, asentados mayoritariamente en Esmeraldas<sup>93</sup> (ver Tabla 7).

La riqueza contenida en la frontera norte contrasta con problemas que se arrastran aún en la actualidad. A la luz de los datos oficiales es posible evidenciar que las condiciones de vida de la población fronteriza son significativamente inferiores a los promedios nacionales y existe un déficit en los indicadores sociales, en comparación con la realidad de otras regiones del país, según se ilustra en la Tabla 7.

**Tabla 7. Población de la frontera norte ecuatoriana según auto-identificación (2010)**

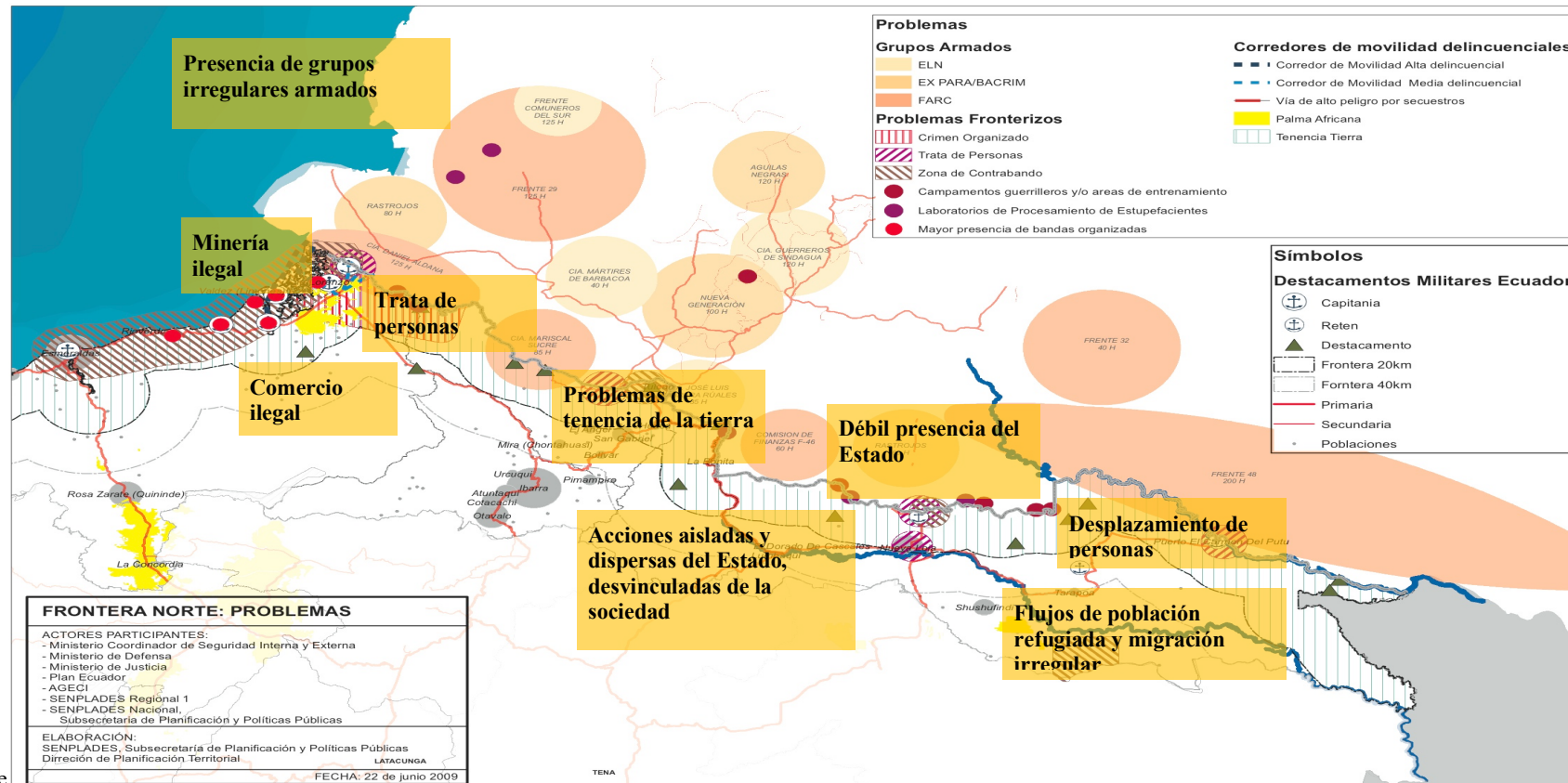
Auto-identificación de la población	Esmeraldas	Carchi	Sucumbíos	Total
Mestizo	238.739	142.971	132.354	514.064
Blanco	31.511	4.771	7.941	44.224
Indígena	14.955	5.594	23.647	44.196
Montubio	12.818	494	1.765	15.077
Afroecuatoriano	234.466	10.530	10.412	255.408
Otros	1.602	165	353	2.120
Total	534.092	164.524	176.472	875.088

Fuente: INEC, 2016.

Elaboración: Propia

<sup>93</sup> La auto-identificación étnica fue un criterio utilizado en el censo de población y vivienda del 2010. En términos nacionales, la población indígena habría descendido de un 9% que representaba en el año 2001, cuando se realizó el anterior censo (2001), al 6%. Esta disminución porcentual podría indicar la negación de una identidad étnica como consecuencia de prácticas discriminatorias y racistas.

**Mapa 4. Conflictos y problemas en la frontera norte ecuatoriana**



Fuente:  
Elaboración: Propia

Pese al rezago en los indicadores referidos a la frontera norte, hay que reconocer que éstos han aumentado en comparación con lo que sucedía en años anteriores. En el 2010, por ejemplo, la incidencia de la pobreza de ingresos era en las tres provincias al menos 20 puntos porcentuales más alta que el indicador nacional que, en ese entonces, ascendía al 26% (MCPEC, 2011: 25).

**Tabla 8. Principales indicadores de la frontera norte y a nivel nacional (2014)**

Indicadores	Carchi	Esmeraldas	Sucumbíos	Nacional
Pobreza por ingresos	30,2	41,3	31,8	26,6
Pobreza extrema	12,9	20,7	13,5	8,2
Coefficiente de Gini	0,47	0,53	0,49	0,45
Tasa empleo adecuado	31,1	33,6	40,1	46,7
Tasa empleo inadecuado	64,7	59,7	53,8	49,3
Escolaridad	8,85	9,58	9,16	9,81
Tasa de analfabetismo	4,8	6,2	5,3	5,8
% viviendas con acceso a agua por red pública	78,1	57,8	40,6	75,3
% viviendas con acceso a alcantarillado sanitario	77,8	42,0	39,8	63,1

Fuente: SENPLADES, 2015: 95 y 99. Los valores nacionales provienen de ENEMDU, 2014 e Indicadores laborales diciembre 2014. Los datos de acceso a agua y alcantarillado provienen de SENPLADES, Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, SENAGUA y Banco del Estado (2014).

Elaboración: Propia

La mejora en los indicadores sociales responde a un incremento en la inversión pública dirigida a la frontera norte a partir del año 2007. En una investigación llevada a cabo por Plan Ecuador se concluye que mientras en el año 2006 la inversión por habitante ascendió a US\$ 32 en los 16 cantones con límites fronterizos con Colombia, en el 2009, este indicador pasó a representar US\$132 (STPE, 2009) en los mismos cantones.<sup>94</sup> Cambios igualmente positivos se advierten en la inversión pública canalizada a las tres provincias fronterizas que entre el 2007 y 2013 representó más de 1.553 millones de dólares. El 28% de estos recursos se destinaron para proyectos en sectores estratégicos, el 16% para la producción orientada al cambio de la matriz productiva y una cantidad similar para el desarrollo social, el 15% en seguridad y un 12% en talento humano (no se dispone de información sobre el destino del 13% restante) (SENPLADES-DNP/PFP,

<sup>94</sup> Dicha investigación consideró la información proveniente de 18 entidades públicas.

2014: 99). Si se considera que a nivel nacional la inversión per cápita promedio fue en el 2009 de US\$ 91,34, es sin duda importante reconocer los esfuerzos realizados por el país para cubrir las enormes necesidades de la población fronteriza.

A la inversión pública se añaden los recursos que por concepto de cooperación recibe el país para esta región. De acuerdo a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional –SETECI-, entre 2007 y 2010 la frontera norte habría recibido por concepto de cooperación alrededor de 156 millones de recursos de cooperación no reembolsable desde diferentes modalidades. Esmeraldas es una de las provincias que mayor cooperación ha recibido durante este período, con el 46%; Sucumbíos con el 27%. Entre los principales cooperantes se encuentran Estados Unidos, a través de USAID; el sistema de Naciones Unidas mediante sus diferentes agencias; España por medio del canje de deuda y cooperación bilateral y la Comunidad Europea (SETECI, 2011: 20-21).

En el crecimiento experimentado por el flujo de inversiones se evidencian, sin embargo, grandes vacíos. Es por ejemplo bastante limitado el monto de recursos destinado a electrificación o comunicaciones (exceptuando carreteras), que contribuirían a mejorar la seguridad de la región, así como los fondos canalizados para reactivación económica y productiva del área. Igualmente limitado ha sido el presupuesto para contratar docentes en condiciones de mínima estabilidad. Varias entrevistas realizadas señalaron que el pago de docentes en comunidades del norte de la provincia de Esmeraldas fue posible hasta el 2012 o incluso más adelante, gracias al apoyo de entidades de cooperación y la Iglesia (Entrevistas a activista de derechos humanos el 31.01.2018 y a dirigente de la Gran Comarca del Norte de Esmeraldas el 30.01.2018).

El sistema educativo vigente no ha podido responder a la dispersión en la que viven muchas de las comunidades asentadas en la frontera y que dificulta el desplazamiento diario de niñas, niños y adolescentes. De hecho, durante las entrevistas de campo se reiteró en varias ocasiones que por los costos del transporte, por la inseguridad o por dificultades de acceso, niños, niñas y adolescentes habían abandonado la escuela.<sup>95</sup>

Más difícil ha sido aún para el sistema educativo vigente poner en marcha modalidades alternativas de educación ofrezcan una alternativa viable para enfrentar las grandes diferencias que existen entre la edad y el grado escolar que deberían estar cursando muchos niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la pobreza de las

---

<sup>95</sup> En el capítulo 5 se desarrollan con más detalle las falencias que enfrenta la población del norte de Esmeraldas debido a la limitada pertinencia de ciertos gastos de inversión.

familias o su prematura incorporación al trabajo. Cabe recordar que sea por desconocimiento o por insensibilidad, o simplemente por la supremacía de los trámites burocráticos, lo cierto es que resulta lamentable constatar que un proyecto orientado a reinsertar a 600 jóvenes de la provincia de Esmeraldas en el sistema educativo formal, cuyas edades no correspondían con el año escolar que debían cursar, presentado por Plan Ecuador ante la SENPLADES, requirió ocho meses hasta que la entidad de planificación nacional lo declare como prioritario y, por tanto, susceptible de financiamiento. La formulación de este proyecto se inspiró en el denominado modelo “Wiñari” que con bastante éxito está funcionando en diversas ciudades del país –incluida la ciudad de Quito-. Este proyecto busca ofrecer a niños, niñas y adolescentes trabajadores oportunidades para continuar su trayectoria escolar y reducir sus niveles de atraso. Para esto propone la ejecución del denominado Ciclo Básico Acelerado que posibilita que en el lapso de un año, los jóvenes con atraso escolar, puedan aprobar los tres años de educación básica de modo de reinsertarse en el primer año del bachillerato con la edad correspondiente o con una brecha de edad menor (DYA, 2009).

Lejos de considerar las especificidades de las áreas fronterizas, el crecimiento de la inversión pública mantuvo el mismo comportamiento que en otras regiones del país, privilegiando sobre todo la realización de obras de gran envergadura, como las denominadas escuelas del milenio<sup>96</sup> y ciudades del milenio<sup>97</sup>, que no se corresponden con las características sociales ni el entorno geográfico, en desmedro de inversiones más bien poco onerosas pero que entrañarían un cambio positivo en la vida de la población de la frontera como pequeños puentes y trochas para la movilidad de la población, de muelles para mejorar la seguridad del transporte fluvial, la rehabilitación de la infraestructura

---

<sup>96</sup> Las escuelas o unidades educativas del milenio son instituciones de educación caracterizadas por su gran infraestructura y equipamiento, con costos que oscilan entre USD 4 y 6,3 millones. Además de mejorar la calidad de la educación, estas escuelas tenían por objeto, juntar escuelas pequeñas que no ofrecían todos los niveles educativos. Una evaluación de las escuelas del milenio llevada a cabo por la FLACSO en el 2017 concluye que su funcionamiento luego de ocho años no se ha traducido en un aumento en la matrícula; que en comparación con otras escuelas públicas, hubo impacto en matemáticas pero no en lenguaje y que la intervención en infraestructura no es suficiente si no va acompañada de cambios en el modelo pedagógico (Ponce y Drouet, 2017).

<sup>97</sup> Las ciudades del milenio son una serie de nuevos poblados construidos en la Amazonía a partir de las regalías del petróleo y localizadas alrededor de los centros de extracción de recursos. En contraste con la forma de vida de las comunidades amazónicas, una investigación realizada por Wilson, Bayón y Diez señala que “las viviendas están distribuidas a parejas casadas; el acceso a la selva y al río está obstruido por verjas y paseos; y los habitantes tienen prohibido tener animales, cultivar, fermentar chicha, o modificar las estructuras de sus casas” (Wilson, Bayón y Diez, 2015: 17), lo que les lleva a concluir que su función sería la de regular la vida cotidiana de la fuerza de trabajo.



escolar existente a la que acceden los niños y niñas de las comunidades rurales distribuidas de manera dispersa o el equipamiento de centros de salud y escuelas.

Las siguientes citas extraídas de diversos planes de desarrollo y ordenamiento territorial de parroquias del norte de Esmeraldas, corroboran las aseveraciones realizadas:

“Se evidencia un descontento masivo de la población asentada en los recintos ya que las escuelas cercanas a ellos están siendo cerradas por el Distrito de Educación del Cantón Eloy Alfaro y sus hijos están siendo obligados a asistir a centros educativos lejanos a su lugar de residencia y en su mayoría los obliga a movilizarse hasta la cabecera parroquial de Borbón” (GAPBorbón, 2015: 29).

“Los estudiantes tienen problema para trasladarse a los centros educativos, que ponen en riesgo sus vidas fundamentalmente en la época de invierno” (GADTelembí, 2015: 73).

“Muchos niños ya no pueden acceder a la educación. No pueden llegar. Faltan puentes y en invierno no pueden pasar” (GADChontaduro, 2015: 31).

“El alto costo de la movilización explica que 222 niños y niñas no asistan a la escuela. El costo del pasaje de Guayabal a La Ceiba está entre \$1,00 a \$1,50, gastando diariamente de \$2,00 a \$3,00 para poder movilizarse a la escuela” (Fundación Altrópico, 2015: 40).

#### **4.2.1. Organizaciones sociales y fronteras**

A partir del reconocimiento de que las fronteras son una construcción social, en la actualidad existe consenso al afirmar que las políticas fronterizas ya no son privativas del Estado. Éstas se definen no solo en los diversos niveles de gobierno (central, provincial, cantonal), sino también son moldeadas por diferentes organizaciones públicas o privadas con o sin anclaje territorial.

“Las fronteras no son líneas territoriales inamovibles; son instituciones que resultan de las políticas de fronterización en las que participa la gente. En la medida en que las fronteras se construyen a partir de una variedad de tejidos culturales, económicos y políticos, en la mayor parte de territorios, están predominante relacionadas con la inclusión y la exclusión. Los territorios delimitados y las regiones fronterizas son el resultado de continuas interacciones e intersecciones entre las acciones de la gente (agencia) y las restricciones y límites definidos por el contexto y por factores estructurales (estructura)” (Brunet-Jailly, 2011: 3).

La identificación de los actores sociales presentes en la frontera norte ecuatoriana tiene por intención desentrañar su incidencia –si es que la hay- en la formulación de las prácticas y políticas de fronterización.

El tejido organizativo de la frontera norte es disperso, acotado a dinámicas localizadas y escasamente vinculado con otros movimientos sociales o territoriales del resto del país. La existencia de una problemática común no ha logrado permear en una

propuesta organizativa regional estable. Solo en determinadas coyunturas han aflorado movimientos reivindicativos provinciales o de carácter sectorial (transporte, comercio, movilidad social) que cada cierto tiempo se reactivan en función de escenarios electorales o debido a la disputa de liderazgos locales, así como iniciativas binacionales como la Asociación de Mujeres Colombo Ecuatoriana, que estuvo vigente hasta finales del 2005 con acciones en el campo de la reivindicación de los derechos de las mujeres y las cajas de ahorro binacionales que operaron hasta inicios del 2000. Hacia el 2008, una investigación sobre las organizaciones fronterizas determinó que para ese entonces, en Esmeraldas y en Sucumbíos tenían presencia 165 actores públicos y privados interviniendo en ámbitos tan diversos como seguridad, política, justicia, economía, asuntos sociales, ambiente y género, con interrelaciones entre sí más bien limitadas y puntuales (Dumas y Frank, 2008: 45).

En los primeros años de este siglo, los espacios de participación más activos fueron las asambleas cantonales de Esmeraldas (Esmeraldas) y Lago Agrio (Sucumbíos), la Asamblea de las Nacionalidades Indígenas de Sucumbíos; la mesa binacional Colombo-Ecuatoriana, la mesa afro-ecuatoriana y la Asamblea Bi-provincial de Orellana y Sucumbíos. Esta última se conformó en el 2001 a raíz de la construcción del oleoducto de crudos pesados (OCP). Entre 2001 y 2006 protagonizó cinco paros en los que se exigía al gobierno la atención a las necesidades de la población, la dotación de servicios básicos, la consecución de un reparto más equitativo de las rentas petroleras, a fin de garantizar que una buena parte de la riqueza extraída de la Amazonía se quede en dichos territorios, y la revisión de los contratos petroleros.

Aunque la Asamblea Bi-provincial ya no es un espacio activo, las fallidas respuestas gubernamentales a sus planteamientos reivindicativos que en lugar del diálogo optaron por la cooptación de dirigentes o la imposición de políticas públicas que poco han incidido en el desarrollo de la región, contribuyeron a configurar élites con interés de conseguir la adhesión de electores dentro de sus territorios y bosquejar una agenda específica para las poblaciones fronterizas amazónicas sobrepuesta a la captación de una mayor tajada de la renta petrolera y la permanente deslegitimación de la acción gubernamental.

En Esmeraldas el declive del tejido organizacional ha seguido una senda similar. El proceso organizativo en Esmeraldas tuvo un punto sobresaliente en los primeros años de la década de los noventa cuando se constituyeron organizaciones como la OCAME (Organizaciones Campesinas de Muisne y Esmeraldas) o la Coordinadora para la Defensa

del Manglar que opuso resistencia a la instalación de piscinas para el cultivo de camarón a costa de la tala de los bosques de mangle. Hacia esa época se habrían conseguido los más importantes avances en la titulación de tierras. Según un testimonio recogido por Roa Ovalle,

“Las grandes organizaciones que había o que hubo en el norte han sido destruidas todas, y esto es el problema más grande que tiene el norte de Esmeraldas, y no solo el norte, todas las grandes organizaciones que se han creado en los años setenta, setenta y cinco y noventa han sido destruidas, (...) y en este momento no hay organizaciones. Se están volviendo a formar pequeños grupos de trabajo, pero basado en un interés económico, pero de veras, no hay organización” (habitante de Borbón, abril 2011, citado por Roa: 2012: 121-122).

A partir de la agudización del conflicto colombiano (2000 en adelante), conjuntamente con las aspersiones de glifosato y la activa movilidad humana en la frontera norte, comenzaron a ganar visibilidad otras expresiones sociales organizativas más ligadas a las discusiones sobre soberanía que a la vigencia de los derechos (Espinosa, 2008). Cabe destacar en este ámbito a la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, FORCCOFES, que aglutinó las organizaciones campesinas afectadas por las aspersiones con glifosato, así como a la Unión de Asociaciones que agrupaba a 38 asociaciones de las provincias amazónicas del norte del Ecuador (Sucumbíos y Orellana). Pero no solo ganaron protagonismo las expresiones sociales que vigilaban los impactos del conflicto colombiano, sino que fueron surgiendo y madurando otras que representan demandas territoriales y de defensa a la identidad cultural encarnadas en los pueblos y nacionalidades indígenas y en las comunidades afroecuatorianas. El análisis de sus planteamientos será motivo de una lectura más detallada en el quinto capítulo de esta tesis.

En el plano de la vigilancia a los efectos del Plan Colombia sobresale la Red Fronteriza de Paz, creada en el año 2005. Inicialmente surgió en la Parroquia fronteriza de General Farfán, Sucumbíos, para extenderse posteriormente entre organizaciones y juntas parroquiales de la provincia de Carchi y del cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. En la actualidad está constituida por 43 organizaciones sociales de base, pastorales fronterizas, organizaciones de colonos y refugiados de Colombia, grupos juveniles y de mujeres y cuenta con 52 organizaciones aliadas.

En una caracterización del tejido organizativo presente en la frontera norte, Espinosa (2008) señala que un rasgo central es su intermitencia. Son pocos los

movimientos que se mantienen activos durante largos períodos como es el caso del Frente de Defensa de la Amazonía que interpuso una demanda legal hace 24 años a la empresa Chevron-Texaco por uno de los más graves desastres ambientales (Serrano, 2013).<sup>98</sup> Las disputas políticas, la penetración estatal en estos movimientos a fin de captarlos para determinadas acciones, la tradición centralista del Estado ecuatoriano y la consiguiente ausencia de interlocución en los territorios locales, así como las debilidades de mantener un movimiento activo sin recursos suficientes para fortalecer la formación, la capacitación, la investigación y documentación de casos, son factores que conspiran en contra de su continuidad. En este contexto, las iniciativas levantadas por los movimientos sociales se convierten casi siempre en reacciones coyunturales y poco articuladas con otras demandas levantadas por otros movimientos sociales. Pese a estas limitaciones y la intermitencia de la reacción social, de manera coordinada, organizaciones de Ecuador y Colombia han logrado, desde un enfoque binacional, avanzar en algunas temáticas, como lo señala Ralf Oetzel en un estudio sobre la realidad transfronteriza:

“A nivel de la sociedad civil, ha habido en los últimos diez años, no menos de 700 encuentros binacionales, la mayoría relacionados con temas del conflicto colombiano concentrándose en las garantías de derechos de las personas afectadas. A pesar de la dispersión de estos encuentros, en el transcurso de los años, sí han logrado posicionar algunos temas relevantes para la zona: las fumigaciones aéreas con glifosato, la situación de refugiadas y refugiados no visibles en las políticas oficiales, mujeres refugiadas jefas de hogar, niñas y niños refugiados no acompañados, xenofobia y otras formas de violencia” (Oetzel, 2017: 5).

### **4.3. Dinámica económica fronteriza**

En el 2012, el PIB de la región fronteriza del norte del Ecuador representó el 6% del total nacional. Este indicador se alimentó en un 42,62% de la extracción de petróleo, 14,8% provino de la manufactura, 9,45% de la agricultura, ganadería y pesca y el comercio aportó con el 6,04% (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 66 y 69).

Las actividades económicas que mayor respaldo estatal han tenido, como la extracción petrolera y los cultivos de palma aceitera no constituyen fuentes de generación

---

<sup>98</sup> De acuerdo a información del Frente de Defensa de la Amazonía, en la operación de 339 pozos por parte de Texaco se habrían vertido 18 mil millones de galones de desechos tóxicos en aguas de formación, se habrían derramado 17 millones de galones de crudo en los ecosistemas terrestres y acuáticos del área; se habrían abandonado 916 piscinas descubiertas llenas de material tóxico (FDA, s/f, citado por Serrano, 2013: 23) y más de dos millones de hectáreas habrían sido deforestadas (Fajardo y Heredia, 2009, citado por Ibid.: 34). La cifra de los galones vertidos en el ambiente amazónico supera, con mucho, los 10,8 millones de galones que se derramaron en el accidente del tanque Exxon Valdez en Alaska, una de las peores catástrofes ambientales que jamás haya ocurrido en el mundo (San Sebastián y Hurting, 2004).

de empleo para las poblaciones locales. Mientras la explotación petrolera requiere por lo general de mano de obra con mayor calificación que la que se encuentra en la región, los cultivos de palma aceitera -129.596 hectáreas en Esmeraldas y 21.184 hectáreas en Sucumbíos, el 45% y 8%, respectivamente, de la superficie total de este cultivo en el país- (FEDAPAL, 2017), no representan una fuente de trabajo estable debido a las características de su propio proceso productivo (ver Capítulo 5). En este contexto, más de la mitad de la población que vive en la frontera norte está vinculada al sector informal (59,4%) (ENEMDU, 2014), lo que dibuja un panorama de falta de fuentes de trabajo y de generación de empleo adecuado que se agudiza debido a que la agricultura de subsistencia, a la que se dedica cerca de una tercera parte de la población de la región fronteriza del norte, enfrenta limitaciones de acceso a crédito y tecnología<sup>99</sup> y dificultades para insertar su producción en el mercado. Otras fuentes de generación de ingreso, como las artesanías que hace algunas décadas atrás constituían la segunda fuente de ingresos después de la agricultura, en la actualidad han perdido dinamismo (GADTelembí, 2015: 75-76).

Frente a esta realidad, la población fronteriza ha desarrollado una serie de estrategias de reproducción familiar. Como sucede en varias fronteras, existe un flujo de comercio transfronterizo que aprovecha el diferencial de precios entre ambos países. Debido a su gratuidad en Ecuador, hay servicios como la educación y la atención médica que son utilizados por la población colombiana, no solo población refugiada. Para la población ecuatoriana, el acceso a medicinas, en cambio, resulta más ventajoso en Colombia debido a la disponibilidad de medicamentos genéricos y de un programa de distribución interno, situación que hasta hace poco tiempo no existía en Ecuador por el alto peso de las medicinas importadas y la asignación de la distribución a compañías privadas (Ramón y Torres, 2004a; Espinosa, 2008). De manera similar, incluso hasta los primeros años de la década del 2010, era frecuente que la población ecuatoriana ingresara a territorio colombiano a realizar llamadas por telefonía móvil hacia cualquier provincia del Ecuador debido a los costos más bajos de este servicio en el vecino país.<sup>100</sup>

Es interesante al efecto traer a colación el acuerdo informal establecido entre El Carmelo, población fronteriza de la provincia del Carchi en el Ecuador, con la comunidad

---

<sup>99</sup> El riego es inexistente en las parroquias de la región fronteriza, “solo existe en las grandes palmicultoras. Los agricultores comunes de la zona no cuentan con el servicio de red de riego” (GADMaldonado, 2015: 77).

<sup>100</sup> Entrevista a oficial de UNFPA, realizada el 08.07.2018.

de La Victoria en el otro lado de la frontera, alrededor del comercio de productos agropecuarios y que es ampliamente descrito por Lauret Sander en su investigación sobre las dinámicas transfronterizas en el Carchi (Sander, 2009: 152-154). Este acuerdo ha permitido que mientras la población ecuatoriana se beneficie de los precios relativamente más bajos de los productos agropecuarios colombianos, La Victoria disponga de una provisión regular de leche. Tales arreglos locales han merecido una fuerte oposición de las asociaciones agrícolas y ganaderas de la provincia del Carchi, así como críticas de los altos mandos militares (Ibid.: 153). Estrategias de esta naturaleza evidencian que la frontera no solo representa un recurso económico para las poblaciones ahí asentadas, sino es un espacio de ejercicio de derechos:

“La frontera política muchas veces funciona como un recurso y sistema de complementariedad para las poblaciones fronterizas. Vivir en la frontera es también vivir de la frontera (...) Existe una especie de cálculo y diferencial fronterizo que posibilita un ahorro por medio de compras más baratas al ‘otro lado de la frontera’. Además de un recurso económico, la frontera es un espacio de generación de estrategias y tácticas de ejercicio de ciudadanía de las poblaciones que viven entre dos Estados nacionales” (Albuquerque, 2014: 72).

Desde finales de la década de los años 90, durante el conflicto colombiano, y en la actualidad, dadas las dificultades por las que atraviesa el proceso post-conflicto (Molano Rojas, 2014; Flechas, 2017; Rueda, Alvarado, Gentili, 2016; Vélez 2016), la dinámica económica de la región fronteriza del norte de Ecuador ha experimentado profundas transformaciones. En un primer momento, varias investigaciones señalaron la existencia de flujos de migración laboral hacia los departamentos colombianos cercanos a la frontera, movilizados por la fuerte demanda de mano de obra para el cultivo y procesamiento de coca (Sander, 2009; Espinosa 2008), los denominados “raspachines” y “temporeros”. De la misma manera, que durante los años 80, la época de auge de la producción florícola en el Ecuador, fue importante el ingreso de población colombiana a las provincias y ciudades cercanas a la frontera en busca de empleo como jornaleros de las plantaciones de flores (Moncada, 2006). Hacia inicios del siglo se ha podido detectar que en épocas de cosecha de papa existe una importante afluencia de jornaleros colombianos que se incorporan a las actividades agrícolas sobre todo en la región nororiental de la provincia del Carchi atraídos, entre otros aspectos, por la dolarización de la economía ecuatoriana (Sander, 2009: 160).

En medio del conflicto que vivía Colombia y el control ejercido por grupos irregulares armados sobre la zona fronteriza adyacente al Ecuador, ciertas áreas del

territorio ecuatoriano fueron utilizadas para el descanso y el abastecimiento, con el desarrollo de varios servicios (restaurantes, billares, sitios de diversión) y la venta de productos de consumo (Jaramillo comp., 2009). Lejos de apreciarse como manifestaciones de la criminalización de la economía transfronteriza, esta realidad evidencia causas estructurales que han provocado que las poblaciones de la frontera ecuatoriana, ajenas al conflicto de Colombia, estén supeditadas a incursionar en la economía de la guerra y el narcotráfico como única alternativa de generación de ingresos a su alcance. En algunas comunidades, sin embargo, se evidencia un desplazamiento del comercio local, controlado antes por ecuatorianos, por refugiados colombianos, quienes tienen acceso a mercancías colombianas más baratas e incluso a dinero de fuentes ilícitas, lo cual facilitaría la instalación de mejores negocios que los de la población ecuatoriana. Esto habría generado una competencia desleal y obligado a algunos connacionales a abandonar sus negocios o a mantenerlos con una muy reducida rentabilidad (Real, 2007).

En todos los casos, la respuesta estatal fue la persecución y criminalización de estas actividades sin distinguir modalidades de intercambio que contribuyen de alguna manera a aliviar las difíciles condiciones económicas y sociales de la población fronteriza y responden a la dinámica social de éstas áreas, de la operación de redes vinculadas a poderes económicos transregionales e inmiscuidas en el narcotráfico, el comercio de armas y la trata y tráfico de personas, al tiempo de imponer normativas que no solo que han resultado poco eficaces para detener el contrabando, sino que han actuado en perjuicio de la comunidad local. Esto último sucede, por ejemplo, con los controles fijados en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos para acceder a la autorización de compra de una determinada cuota de combustible, lo que ha determinado afectaciones sobre la libre movilidad de las personas alrededor de las riberas, obstaculizado la distribución de productos (Carrión y Llugsha coord., 2013) y limitado la realización de faenas agrícolas por parte de pequeños propietarios que requieren de combustible para algunas de sus actividades.

El contrabando y el comercio irregular son comunes en las regiones fronterizas y todo esfuerzo por disciplinar tales prácticas requeriría de un abordaje político que rebase el control y la represión en la medida en que su continuidad, si bien habla de las precarias condiciones de vida y la falta de oportunidades de trabajo, hace también alusión a variables sociales y culturales cuyo peso pasa desapercibido. Varios autores (Cardin, 2014; Grimson, 2005) coinciden en afirmar la forma superficial en la que los Estados abordan los problemas ligados al contrabando:

“Para ser entendido en su totalidad, el contrabando exige encuadrarse en los modos de vida de las poblaciones de la frontera, y a un nivel microscópico, en las estrategias de supervivencia de los núcleos domésticos. Comprender el fenómeno es entender las razones por las cuales los individuos que son parte de un modo de vida local, explican su involucramiento en una actividad tan peligrosa y desgastante, exigiendo el abordaje de las formas económicas, de las relaciones sociales y de las construcciones culturales locales” (Godinho, 2009: 44, citado por Cardin, 2014: 48).

Sander no se equivocó al señalar que “(u)na intensificación de la represión estatal solo tiende a acrecentar el carácter criminal del contrabando puesto que estimula la emergencia de redes contrabandistas más sofisticadas y los intentos acompañantes de obtener protección política” (2009: 41).

A raíz de la firma de los acuerdos de paz en Colombia,<sup>101</sup> las economías ilícitas en la frontera norte han experimentado un crecimiento significativo. Disidentes de las FARC, vinculados a bandas criminales (BACRIM), disputan junto con grupos delincuenciales ecuatorianos, el control de espacios territoriales para la realización de actividades logísticas y el dominio sobre rutas de narcotráfico y procesamiento de droga, incrementando los niveles de inseguridad y violencia en las provincias ecuatorianas aledañas a Colombia. Entre los efectos más significativos asociados a la presencia de grupos armados irregulares, destaca la tendencia al crecimiento de la superficie cultivada con coca. Según datos de la UNODC (2016), hacia el 2016, Colombia era el país con mayor superficie de este cultivo: 146.000 ha. El 46% de este total se concentra en los departamentos de Nariño y Putumayo adyacentes a Ecuador. La frontera ecuatoriana se ve así amenazada por un espacio cocalero de más de 89.000 ha.

Los llamados “temporeros” dejaron de ser ya un fenómeno eventual para devenir en algo más permanente y cotidiano. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que aunque Ecuador no sea un área de cultivo de coca, es la fuente de aprovisionamiento de los insumos necesarios para esta actividad, incluida la mano de obra.

“Una parte importante de la población situada en la línea fronteriza ecuatoriana vive de los cultivos ilícitos de coca ubicados en territorio colombiano a donde cruzan diariamente o por períodos de varias semanas. Los ingresos obtenidos a través de esta actividad han llevado a una disminución de los cultivos tradicionales de subsistencia como maíz, arroz o plátano, al preferir la población comprarlos que cultivarlos, lo que compromete la seguridad alimentaria de amplias zonas fronterizas” (OACDH, 2018: 7).

---

<sup>101</sup> La construcción del proceso de paz en Colombia inició en el 2013. Su concreción supuso la consecución de seis acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano: desarrollo rural, participación política de las FARC, narcotráfico, víctimas y reparación, armas y justicia transicional.



La participación en determinadas épocas en las actividades del negocio de la droga, se combinan con el tráfico de armas, estupefacientes, gasolina e insumos para la elaboración de drogas,<sup>102</sup> gasolina blanca (para tratamiento de la cocaína), gas de uso doméstico y el involucramiento de la población en otra serie de actividades ilícitas en las que sucumben ante la ausencia de otras alternativas de obtención de ingresos (Sander, 2009; Vélez, 2016). De ahí que el análisis de los flujos de narcotráfico elaborado por Álvaro Vélez Tangarife discuta la afirmación de que Ecuador sea únicamente una ruta de paso para el narcotráfico o un lugar de aprovisionamiento. Su investigación señala que “Ecuador no solamente es un país de tránsito ocupando un lugar privilegiado como acopiador, transportador y distribuidor, sino también y por sobre todo Ecuador es hoy un procesador de PBC y de clorhidrato de cocaína” (Vélez, 2016: 18) y demuestra que en la frontera norte “se han desarrollado las condiciones para la producción de droga, sin la necesidad de una amplia presencia de cultivos de coca” (Ibid.: 12). Otros autores amplían este criterio pues aunque Ecuador sea un área marginal para el cultivo de coca, es “un territorio integrado al negocio del narcotráfico por ser un lugar de tránsito y mercado de precursores químicos y de armas” (Jaramillo comp., 2009: 38) o, como lo dice Espinosa en su artículo dentro del libro *Relaciones fronterizas: encuentros y conflictos*:

“Aunque en Ecuador se ha procurado negar la evidente inserción del país en la economía de la coca, (...) en realidad, (...) el enclave cocalero ha sido posible porque a ambos lados de la frontera se han generado las condiciones para su emergencia y desarrollo. Por ejemplo, si no hubiera existido un apoyo desde el lado ecuatoriano a la provisión de insumos, abonos para el cultivo y elaboración de pasta base y cocaína, no se hubiera podido desarrollar la ‘plantación’ e industrialización de la hoja de coca en el Putumayo. Si bien, de tiempo en tiempo, el gobierno ecuatoriano ha reconocido que sus connacionales han sido importantes proveedores de precursores, generalmente se ha sostenido que éste ha sido su único papel. (...) Incluso, el enclave petrolero que se ha desarrollado en esa provincia debe ser visto en ese contexto” (Carrión y Espín coord., 2011: 27).

---

<sup>102</sup> Para una profundización sobre la economía de la droga, con énfasis en lo que acontece en la frontera norte amazónica del Ecuador ver las investigaciones de Adriana Rossi (1996) y Patricio Trujillo (2010). Carlos Espinosa (2007) y Rivera y Torres (2011) han estudiado el impacto económico en Ecuador del dinero proveniente de la droga.

#### 4.4. Frontera norte y conflicto colombiano

El arranque del Plan Colombia<sup>103</sup> en el 2000 significó el inicio de un proceso tenso y conflictivo entre Ecuador y Colombia. Si bien en los años anteriores, los efectos del conflicto interno colombiano habían sido sentidos entre la población de la frontera, las relaciones bilaterales entre ambos países se mantuvieron virtualmente inalteradas. A partir del 2000 las tensiones entre Quito y Bogotá subieron varias veces de tono con una recurrente presión por parte del gobierno colombiano exigiendo a Ecuador una política más activa en torno al conflicto, cuanto por acciones que motivaron la reacción de los distintos gobiernos ecuatorianos ante foros internacionales como las aspersiones con glifosato y el bombardeo a Angostura (Roa Ovalle, 2012; Vélez Tangarife, 2016).

Las aspersiones con glifosato para la destrucción de los cultivos de coca, amapola y marihuana se hicieron públicas en el año 2000 y desde entonces se convirtieron en una práctica sistemática. Según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en los tres años comprendidos entre 2001 y 2003 se habrían fumigado 379 mil hectáreas con cerca de 9 millones de litros de glifosato (citado por Maldonado, 2000: 61), mientras que de acuerdo a la Comisión Científica, hasta fines del 2005 se habrían fumigado cerca de 700 mil hectáreas (Comisión Científica Ecuatoriana, 2007: 19). Aunque el número exacto de hectáreas afectadas por fumigaciones varía según la fuente, las consecuencias de esta estrategia no podían seguir siendo minimizadas a la luz de la protesta social que fue creciendo en intensidad y de investigaciones que demostraban la toxicidad de los productos utilizados, los consiguientes daños sobre la salud de las poblaciones expuestas a aspersiones y los efectos a mediano y largo plazo derivados de la contaminación del suelo (Nivia, 2001, citado por Maldonado, 2000: 63). En octubre del 2000, 44 personas de la comunidad de Mataje, Esmeraldas, fueron ingresadas al hospital después de la primera fumigación; en enero del 2001, el hospital de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos, atendía semanalmente de 10 a 15 personas intoxicadas por

---

<sup>103</sup> El Plan Colombia, una estrategia militar y de control territorial, se firmó durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Bill Clinton (1993-2001). En lo económico, esta estrategia supuso la canalización de un cuantioso flujo de recursos proveniente de los Estados Unidos. La asistencia militar y policial hacia Colombia superó los 7 mil millones de dólares en el período 1996-2014, lo que convirtió a este país en el mayor destinatario de asistencia militar estadounidense en la región. México, que le sigue, recibió en el período citado y por el mismo concepto un poco menos de la tercera parte del financiamiento percibido por Colombia (Isacson, Haugaard, Poe et al. 2013: 20). El Plan Colombia se mantuvo durante casi toda la primera década del siglo XX, cambiando sucesivamente de denominaciones: Plan Patriota en el 2004, Plan Victoria en el 2006 y Plan Consolidación en el 2007 (Oetzel, 2017).

los químicos utilizados y muchas otras personas, carentes de medios económicos para trasladarse a las ciudades más cercanas en procura de atención médica, permanecieron en sus comunidades haciendo uso de remedios tradicionales. Los pobladores denunciaron que avionetas, acompañadas de helicópteros, fumigaban tres días seguidos, 8 horas diarias, y que luego de 15 días repetían la operación (Ibid); que las aspersiones iniciaban sin previo aviso, lo que mantenía a la población en un estado permanente de miedo e inseguridad; que se destruyeron fuentes de alimentación y sustento económico; que se evidenciaron daños sobre los ecosistemas y sus componentes; que si bien muchos impactos sobre la salud física y mental, pudieron ser verificados durante la realización del estudio, otros tendrán efectos en el futuro (cánceres, malformaciones) (Comisión Científica Ecuatoriana, 2007).

Ante la presión de la población y de varias organizaciones sociales, el gobierno ecuatoriano presionó, en un principio, para que Colombia suspenda las operaciones de fumigación en una franja de 10 km desde la línea fronteriza. Sin embargo, en la medida en que continuaron las afectaciones sobre la población, en el 2008 el gobierno ecuatoriano interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra el Estado colombiano en la que describe los impactos inmediatos y los efectos duraderos de las fumigaciones sobre la población y la economía.<sup>104</sup>

La presentación de esta demanda tuvo efectos a raíz del segundo momento de tensión importante entre Ecuador y Colombia a partir del bombardeo, el 1 de marzo de 2007, a un grupo guerrillero de las FARC asentado ilegalmente en el territorio nacional. Para asegurarse de la destrucción del campamento, soldados y policías colombianos habían ingresado al lugar, llevándose varios cadáveres, entre los que se hallaba Raúl Reyes, el segundo jefe en importancia dentro de las FARC. El Presidente Correa declaró una violación sobre la soberanía del territorio ecuatoriano y dispuso el retiro del Embajador del Ecuador en Bogotá, la expulsión del Embajador de Colombia en Quito y la movilización de tropas a la frontera norte, además de hacer un llamado a la solidaridad internacional y solicitar una urgente reunión de la OEA (Almeida Izurieta, 2011; Mantilla y Contreras; 2011). La demanda contra Colombia fue retirada en el 2013. Tres años antes se habían restablecido las relaciones diplomáticas entre los dos países.

---

<sup>104</sup> El texto de la demanda está disponible en [http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news\\_user\\_view/texto\\_de\\_la\\_demanda\\_de\\_ecuador\\_contra\\_colombia\\_ante\\_corte\\_internacional\\_de\\_justicia--74862](http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/texto_de_la_demanda_de_ecuador_contra_colombia_ante_corte_internacional_de_justicia--74862), acceso el 12.12.2018.

Algunos autores (Bonilla y Páez, 2006) sostienen que tras las fumigaciones y la ejecución de actividades militares se buscaba vaciar al espacio de población a fin de tornarlo en un escenario propicio para la guerra bajo la simplista idea de que liquidando a la guerrilla, se liquidaba a su vez, la producción y el comercio de drogas, o, siguiendo las palabras de Roque Espinosa, “la política que se aplica y que se ha aplicado en la frontera (norte) ha sido una política de guerra- que ha apuntado a combatir la guerrilla y ha dejado librado el narcotráfico” (citado por Vélez, 2016: 31).

La afirmación de Espinosa efectivamente se corresponde con lo que ha sucedido en la realidad. En los territorios fronterizos, incluso antes del inicio del Plan Colombia, las FARC habían cruzado al territorio ecuatoriano para descansar, aprovisionarse y comprar insumos. Sin embargo, fue a partir de la puesta en marcha de este plan, que la presencia de las FARC y de otros grupos armados (Ejército de Liberación Nacional - ELN- grupos paramilitares y bandas criminales) para controlar el territorio y compartir el poder se hizo más permanente (IDMC-NRC, 2010).

El proceso de desmovilización de las fuerzas paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia) que tuvo lugar entre los años 2005-2006 repercutió en la creación de bandas criminales que se desplazaron a Ecuador motivados por la dolarización de la economía.<sup>105</sup> Roa Ovalle concuerda con esta apreciación. “El 2007 se puede ubicar como el momento en que más se notó la presencia de grupos armados y de su simbiosis con grupos locales de delincuencia y sicariato, (lo que) coincide con la transición organizativa que tuvieron los paramilitares” (Roa Ovalle, 2012: 142).

Según el informe preparado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

“el control que las FARC-EP ejercían en la frontera norte comienza a diluirse con la firma del Acuerdo de Paz y el surgimiento de distintos grupos criminales y de grupos disidentes de las FARC-EP. Estos grupos y otros directamente provenientes del narcotráfico, junto con el ELN, inician una serie de disputas territoriales, tanto en Colombia como en Ecuador, entre sí y con las autoridades, que afectan a la población civil” (OACDH, 2017: 8).

---

<sup>105</sup> En el año 2008, un informe elaborado por la Unidad de Análisis Político de la Presidencia de la República advirtió la presencia en la provincia de Esmeraldas del grupo paramilitar “Águilas Negras” que supuestamente controlaba, en aquellos años, el contrabando de combustibles, de armas y el narcotráfico y que habrían impuesto el cobro de un impuesto mensual a comerciantes y hacendados a cambio de protección (vacunas). De acuerdo con el mencionado informe, el accionar de esta banda armada se extendía desde Las Peñas, playa ubicada a 70 km de la línea fronteriza, hacia Borbón, Limones, Pampanal de Bolívar y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Desde el 2011, Roa Ovalle (2012) señala que el grupo de sicarios autodenominado “Látigo” se habría instalado con fuerza en Borbón. Este grupo se resguardaría en parroquias rurales de difícil acceso y se movilizaría por los ríos que atraviesan el manglar.

La intervención del narcotráfico y grupos armados en la frontera norte apunta a una estrategia de control territorial que junto a la producción y distribución de droga ha supuesto el establecimiento de redes para la trata y tráfico de personas y el comercio de armas; el contrabando de combustible; la operación de grupos dedicados a la extorsión y al sometimiento de pobladores (para cosechar hojas de coca o para cumplir tareas logísticas en los campamentos), mediante “préstamos” forzados de dinero, los llamados “prestadiarios”<sup>106</sup> y rifas diarias de dinero en las parroquias, como un mecanismo para blanquear los capitales. A lo largo de toda la línea fronteriza, el informe antes citado advierte “una amplia práctica de reclutamiento por los grupos criminales, tanto de niños y jóvenes como de adultos, en ocasiones forzada y con frecuencia basada en el atractivo económico que supone la incorporación al grupo o la participación en cultivos ilícitos” (Ibid.). Aunque el reclutamiento es pocas veces voluntario, niños y jóvenes han manifestado su interés por ser parte de los grupos armados que consideran les ofrecen protección (Entrevista con la dirigente de la Gran Comarca del Norte de Esmeraldas, 30.01.2018). En otras ocasiones, para evitar el reclutamiento, las poblaciones han optado por el desplazamiento (Entrevista con el párroco de Borbón, 15.08.2018).

El enfrentamiento entre los diversos grupos armados por mantener las actividades ilícitas más rentables y por controlar a la población y a espacios del territorio ha presionado sobre el incremento de una economía ilegal en la frontera, el aumento de la violencia, la actividad criminal y la inseguridad y la expansión de las violaciones de los derechos humanos. Éstas incluyen sicariato, comercio de armas, drogas, y de químicos y materiales necesarios para procesar cocaína; la apropiación y el tráfico ilegal de tierra; la explotación sexual y el tráfico de mujeres,<sup>107</sup> niños y niñas.<sup>108</sup> Un mercado emergente fue, durante un buen período, la venta de documentos de identidad del Ecuador cuya demanda se concretó por los vacíos legales y por la “ilegalidad” que suponía el refugio

---

<sup>106</sup> Los “prestadiarios” constituyen la única vía de acceso al crédito por parte de la población más pobre pues no suponen más requisitos que la presentación de una fotografía de un familiar cercano. Los intereses pueden fluctuar entre el 10% al 20% por día.

<sup>107</sup> Una investigación llevada a cabo en el año 2011 por Pável Uranga, *La trata ante el espejo. Una aproximación a la explotación sexual en trabajo esclavo. Frontera Norte del Ecuador*, llega a la conclusión de que cerca de 100 mil mujeres, la mayoría colombianas (85%), estarían sometidas a severas condiciones de explotación sexual en la frontera norte, generando significativas ganancias para una red en la que destacan policías, dueños de bares y hoteles, empresas de transporte y de turismo.

<sup>108</sup> Según una investigación llevada a cabo por el Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia (INNFA) en el año 2008, de un total de 210 niñas, niños y adolescentes estudiados, 44 eran víctimas de explotación sexual. El Observatorio de la Niñez y la Adolescencia concluye que para el mismo año, el 47% de las adolescentes en Sucumbíos enfrentaban el riesgo de ser sometidas a la pornografía (Dumas y Frank, 2008: 16 y 17).

ante la ausencia de alternativas de reconocimiento de esta situación (Dumas y Frank, 2008).

Las tasas de homicidio en las provincias frontera superan a las del resto del país. Según cálculos realizados por el Consejo Noruego de Refugiados, a fines de la primera década de los 2000, la tasa de homicidios en la frontera norte habría sido tres veces mayor que la nacional (IDMC-NRC, 2010: 4). La estimación de SENPLADES para el 2014 es menor pues señala que en toda la Zona 1 (que comprende además de las tres provincias fronterizas a la provincia de Ibarra), la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes habría sido de 33,25 frente a una tasa de 23 a nivel de todo el país, con Esmeraldas como la provincia que registra el mayor número de homicidios con 36,6, seguida por Sucumbíos, Imbabura y Carchi, respectivamente, cerca de tres veces la media nacional que es de 10,3 (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 57).<sup>109</sup>

La dinámica que vive Colombia ha ido reproduciéndose paulatinamente en el lado ecuatoriano por varios factores, entre ellos: la débil presencia estatal en materia de promoción y garantía de derechos, el escaso papel que cumplen las fuerzas de seguridad y la falta de acceso a un sistema de justicia eficaz. La frontera norte del Ecuador ha venido presenciando un deterioro de las condiciones de vida de la población y ha experimentado nuevos problemas cuyas manifestaciones se describen en las siguientes secciones.

## **4.5. Movilidad humana en la frontera norte**

### **4.5.1. Refugio y frontera norte**

Si bien casi todas las fronteras mundiales son espacios de activa movilidad humana como consecuencia de la intensa actividad comercial que toma lugar en estas áreas y el fluir de redes de parentesco y amistad tejidas a lo largo de los años, en pocas fronteras latinoamericanas los flujos poblacionales tienen las características que están presentes en el área limítrofe entre Ecuador y Colombia.

Estos flujos poblacionales más o menos regulares, más o menos continuos, que Ecuador ha mantenido históricamente con Colombia, dieron un brusco salto desde finales del siglo pasado, cuando se acentuó el flujo de población inmigrante en respuesta al conflicto armado, la violencia y las fumigaciones aéreas a los cultivos de coca, en el

---

<sup>109</sup> San Lorenzo, población fronteriza con el municipio de Tumaco, presentó en el 2014, la tasa de homicidio más alta del Ecuador: 96,2 homicidios por cada 100.000 habitantes (Ministerio del Interior, citado por Plan V, 2018a).

marco del inicio de la aplicación del Plan Colombia. Ya no se trataba, como antaño, de migración laboral. El escenario de la frontera entre Ecuador y Colombia evidenciaba un fenómeno nuevo y desconocido: el refugio.

El lugar protagónico ocupado por Colombia en el contexto global en torno al número de población desplazada dentro de su territorio ha propiciado la presencia, sin parangón en la historia reciente, de un alto número de población colombiana dentro de territorio ecuatoriano. Para el año que Arturo Escobar publicó su libro *Más allá del Tercer Mundo. Globalización y diferencia*, en el que introduce una aguda reflexión sobre la situación del Pacífico colombiano y anticipa los problemas que más tarde se producirían, él señalaba que en 1985 se calculaba que 2,2 millones de personas habrían sido desplazadas de sus tierras (Escobar, 2005: 52). Diez años después, esta cifra se habría más que triplicado. Las estimaciones más recientes realizadas por ACNUR advierten que Colombia tendría el mayor flujo de refugiados después de Siria: “El segundo grupo (de desplazados internos) era el de los colombianos, con 7,7 millones de desplazados forzosos, en su mayoría dentro del país” (ACNUR, 2016: 6).

Ecuador fue siempre un receptor marginal de la población refugiada que salió de sus países por persecución política o guerras, en el caso de Europa. Por lo mismo, el ingreso de miles de refugiados de Colombia en un lapso de tiempo relativamente corto, significó para el país enfrentar un fenómeno desconocido y complejo.

De acuerdo a datos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador citados por ACNUR,<sup>110</sup> desde el año 2000 hasta el 2015, 233.049 personas habrían solicitado asilo en el Ecuador, sin desconocer que antes de este año, en el período 1996-1999 ya habrían arribado los primeros contingentes de población refugiada. El flujo de personas solicitantes de asilo, aunque menor, no se ha detenido con la firma de la paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC-. Población colombiana continúa buscando protección en el Ecuador como respuesta a la violencia que perdura por la acción de grupos renuentes a suscribir el acuerdo para poner fin al conflicto y como efecto de la ampliación de la frontera agrícola y el concomitante proceso de desalojo de la población,<sup>111</sup> con un total aproximado de 500 solicitudes al mes, según datos de ACNUR.

---

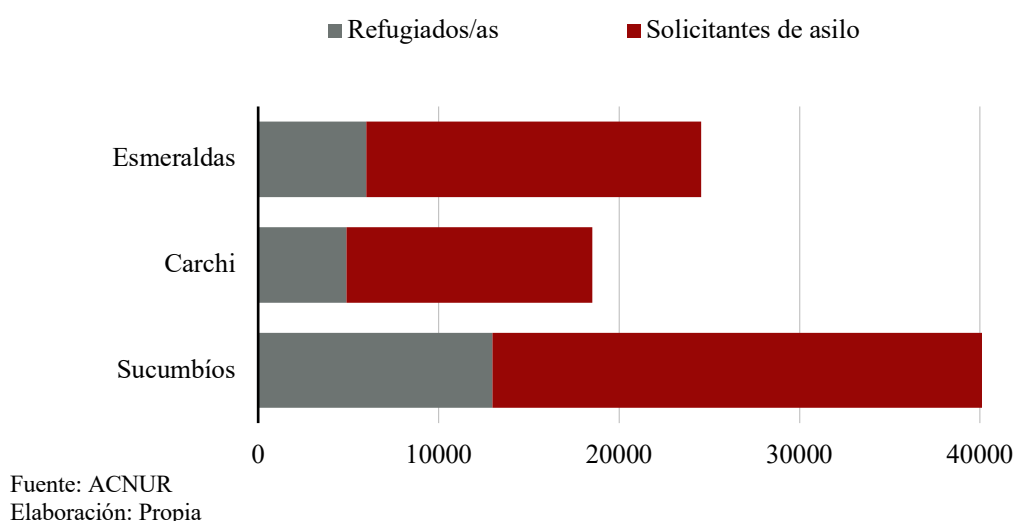
<sup>110</sup> Todos los datos sobre movilidad humana en Ecuador y específicamente sobre población refugiada colombiana provienen de la página web de ACNUR (<http://www.acnur.org>).

<sup>111</sup> Como ha sido ampliamente estudiado, el crecimiento de cultivos de palma en la frontera sur de Colombia, en territorios limítrofes con el Ecuador, no se ha dado sobre tierras vacías sino que ha supuesto un proceso de concentración de tierras y de despojo social. Para una profundización sobre el desplazamiento



Del total de población que ha solicitado asilo, Ecuador habría reconocido hasta el 2018 a alrededor de 62.000 personas de nacionalidad colombiana, lo que lo convierte al país con el mayor número de refugiados colombianos en América Latina. Un alto número de la población refugiada cuyo estatuto es reconocido oficialmente se concentra en las tres provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, representando un total cercano a las 24 mil personas o, en términos relativos, el 42% del total de población refugiada reconocida (ver Gráfico 2).

**Gráfico 2. Distribución de la población refugiada reconocida y de la población solicitante de asilo en la frontera norte ecuatoriana**



La presencia de tan alto número de población colombiana en la frontera norte ha trastocado la dinámica social y demográfica de la región al punto que muchos de los poblados están mayoritaria o únicamente constituidos por población colombiana. Según se desprende de una investigación llevada a cabo por ACNUR (2009a) en la provincia de Sucumbíos, se determinó que 48 comunidades fronterizas están constituidas solo por población colombiana y que en 16 comunidades, más de la mitad de la población es colombiana.

La distribución de la población refugiada colombiana corrobora las tendencias identificadas por investigaciones realizadas en otros contextos (África, Vietnam, Camboya y Laos en la frontera de Tailandia) donde, de forma similar a lo que acontece

---

de población colombiana por efectos del crecimiento de los cultivos de palma aceitera, la investigación coordinada por Martha Rincón (2008), *Agrocombustibles Llenando tanques, vaciando territorios*, constituye una de los estudios más completos. Ver también la investigación más reciente de Victoria Marín-Burgos, *Access, Power and Justice in Commodity Frontiers* (2014).



en Ecuador, un número significativo de población refugiada tomó la opción de establecerse en las regiones fronterizas no solo porque estas áreas son las más cercanas para obtener algún tipo de protección, sino por la presencia de un ideal de retorno que al permanecer en la frontera o sus inmediaciones podría concretarse de la manera más inmediata posible (Kauffer, 1997). En el caso de los refugiados colombianos que viven en Ecuador, esta última opción no se avizora realista a la luz de la actual coyuntura. Muchos refugiados con seguridad permanecerán en Ecuador no solo por la gran cantidad de familias mixtas, compuestas por ecuatorianos y colombianos, sino porque el retorno no lo perciben hasta el momento como una alternativa. De las entrevistas mantenidas en la zona de frontera se puede concluir que entre la población colombiana refugiada hay desconocimiento de la normativa generada en Colombia para beneficiar a las víctimas en el exterior como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Entrevista con Presidenta de la Asociación de Migrantes en San Lorenzo, 17.08.2018).

A la movilidad humana entre Colombia y Ecuador, se suma en el último período, la afluencia de un numeroso contingente de población venezolana que cruza la frontera. Según información de ACNUR, se estima que un promedio de 2.650 venezolanos, hombres y mujeres, cruzan diariamente la frontera.<sup>112</sup> Parte de esta población continua su trayectoria migratoria mientras otros, aproximadamente unas 215.000 personas no han registrado su salida del país. Se estima que alrededor de la mitad de la población venezolana que optó permanecer en el Ecuador está en situación irregular, lo que se corrobora por el hecho de que se han otorgado cerca de 95.000 visas y que unas 35.000 aún están en trámite (UNICEF, 2018). Al igual que lo que sucede con la población colombiana, para muchos venezolanos, la región fronteriza del norte se convierte en su nuevo hogar, compartiendo las mismas carencias que soporta la población ecuatoriana.

La zona transfronteriza es también un corredor de tránsito de migrantes de distintas nacionalidades. La política migratoria ecuatoriana, considerada como una de las más liberales del continente, al incorporar dentro de la Constitución el principio de ciudadanía universal (Art. 416, literal 6),<sup>113</sup> el derecho a migrar (Art. 40), y la garantía a la población migrante de los mismos derechos que la población ecuatoriana (Art. 392),

---

<sup>112</sup> Los datos sobre la inmigración venezolana provienen de la comunicación personal con el Coordinador Técnico de ACNUR en Quito, el 22.11.2018.

<sup>113</sup> La Constitución del Ecuador del 2008 contempla en el Capítulo Primero, 13 principios para las relaciones internacionales. El sexto principio dice textualmente que el Ecuador “Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”.

fue la excusa para que personas provenientes incluso de otros continentes encuentren en el Ecuador el punto de inicio de su ruta hacia Centro América y los Estados Unidos. Si bien no existen estadísticas confiables debido a los pasos informales existentes, la constante modificación de rutas y la operación de redes de tráfico de migrantes, como variable aproximativa se puede citar que solo durante el 2016, 33.981 personas fueron deportadas en los pasos fronterizos de Colombia, aumentando en cuatro veces el número de deportaciones realizadas en el 2015 (Oetzel, 2018: 6).

#### **4.5.1.1. La respuesta del Estado ante el refugio y la movilidad humana internacional**

Los primeros contingentes de población refugiada que llegaron a Ecuador tuvieron lugar en una coyuntura particularmente compleja. La inestabilidad política que atravesaba para ese entonces el país (con nueve presidentes en el lapso de los nueve años que se extienden desde 1996 al 2005), habría erosionado la ya frágil institucionalidad existente.

La alta inestabilidad política y social explica que durante los primeros años existiera una suerte de desatención o pasividad respecto a las condiciones de vida de la población refugiada. En ausencia de una política humanitaria sustentada en el marco de los derechos, la única respuesta fue en términos de seguridad, apuntando a la imposición de restricciones para la movilidad interna de la población refugiada debido a la falta de un documento de identidad o llegando a situaciones extremas por las cuales personas refugiadas fueron detenidas y deportadas, según lo reconocía un documento oficial:

“(...) la gran mayoría de la población refugiada en el Ecuador vive en condición de invisibilidad, lo que dificulta su acceso a servicios básicos como educación y salud, y dificulta enormemente conseguir trabajo. Esta situación produce que algunos refugiados hayan sido sujetos de detención y deportación, lo que es un irrespeto al principio de no devolución a su país de origen, uno de los principales del Derecho Humanitario Internacional”. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008: 28).

Recuperada la estabilidad política en el 2007 y una vez contenida la conflictividad de los años anteriores, el gobierno electo tomó por primera vez en serio la realidad de la población refugiada colombiana. En esa dirección, en el año 2008, promulgó la *Política Nacional en Materia de Refugio*, modificando de alguna manera la pasividad con la que el Estado venía enfrentando tal problemática. Su vigencia, sin embargo, como se verá más adelante comenzó a diluirse al poco tiempo.

Tal Política considera al refugio como parte integral del derecho fundamental a la movilidad humana. Con su promulgación, Ecuador declaraba que respetaría y garantizaría los principios de no devolución y no sanción penal por violación a la normatividad migratoria, además de que tomaría las decisiones y acciones necesarias para lograr la “inclusión” de las personas solicitantes de refugio. Esto se traduciría, según los términos expresados en la Política, en el “ejercicio efectivo de (los) derechos humanos y ciudadanos por parte de los refugiados extranjeros” y en la “garantía (...) para una solución efectiva y duradera de la situación de los refugiados” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008: 22).

A través de la Política, el Estado ecuatoriano se comprometía adicionalmente a cumplir con los compromisos derivados de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984 y la Declaración y Plan de Acción de México de 2004, bajo un enfoque de corresponsabilidad con el Estado colombiano y la comunidad internacional, lo que se complementaría con los recursos financieros que Ecuador destinaría para cada uno de los programas contenidos en la Política.

En el marco de la *Política Nacional en Materia de Refugio*, la acción sin duda más importante desatada por el gobierno frente a la población colombiana con necesidades de protección internacional fue la estrategia de registro ampliado llevada a cabo entre 2009 y 2010. Esta estrategia fue concebida como un esfuerzo intenso y concentrado para facilitar la regularización migratoria y documental en plazos bastante ágiles y procesar la alta cantidad de solicitudes presentadas al Estado ecuatoriano sobre la base de experiencias recientes desarrolladas por ACNUR en Malasia y en Jordania, Siria y Líbano derivadas de la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003. La estrategia de registro ampliado fue sobre todo una medida humanitaria para registrar a los refugiados “invisibles” que ya estaban en Ecuador pero que por diversas razones no se habían registrado como tales. Su implementación se basó en la definición ampliada de la categoría de refugio de la Declaración de Cartagena de 1984 según la que los refugiados son “las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” (Tercera conclusión de la Declaración).

Su puesta en marcha motivó a que en octubre del 2009 el Comité Ejecutivo de ACNUR reconozca a Ecuador como uno de los ocho países modelo a nivel mundial en

asistencia a refugiados. Lamentablemente, tal reconocimiento no estuvo acompañado de mayores recursos ni de acciones de apoyo internacional orientadas a compartir la atención de la población refugiada. El registro ampliado tampoco fue aprovechado internamente por parte de las esferas gubernamentales como sustento para estimular estrategias sostenidas y consistentes de sensibilización y de integración cultural y social de la población refugiada que vive en el Ecuador, en el ánimo de contrarrestar el incremento de las prácticas de discriminación y xenofobia.

Una estrategia que podría haber propiciado procesos sostenidos de integración social, se redujo a un simple procedimiento formal sin implicaciones futuras para quienes solicitan seguridad y condiciones para construir una vida digna, haciendo eco de la caracterización que propone Shiv Visvanathan (2007) sobre las personas refugiadas al reconocerlas como personas desplazadas que están entre dos casas, condenadas a un estado perpetuo de limitaciones. En efecto, en virtud del carácter aislado y puntual del registro ampliado, el impacto sobre el mejoramiento de la calidad de vida de la población refugiada fue limitado. No se logró, por ejemplo, motivar la participación de Colombia ni de la comunidad internacional en el levantamiento de fondos para ampliar los servicios requeridos por la población refugiada, una situación común en el refugio que en este caso puso nuevamente en evidencia la falta de protección del Estado de origen, la privación de los derechos fundamentales y la dependencia de la ayuda internacional (Shacknove, 1992, citado por Kauffer, 1997: 735). De hecho, durante el gobierno del presidente Uribe y en los primeros meses del gobierno del presidente Santos, la Cancillería de Colombia mantuvo la posición de negar la existencia de refugiados colombianos en Ecuador y aceptar la inclusión de este tema en la agenda binacional.

Según información oficial, algunos de los servicios recibidos por la población refugiada provenían directamente del Estado ecuatoriano, con el apoyo de organizaciones internacionales de cooperación, principalmente ACNUR, de la Iglesia Católica a través del programa de Acción Social, de la organización internacional Catholic Relief Services -CRS- y el Servicio Jesuita para los Refugiados (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2008). Con el paso de los años esta realidad no se ha modificado de manera sustantiva. De acuerdo al Coordinador de ACNUR en Esmeraldas,

“la magnitud del fenómeno de refugio y las dificultades para procesar el flujo de inmigrantes, a los que hoy se suman personas venezolanas, han puesto en evidencia la insuficiencia de recursos económicos en un momento en que se han reducido los flujos de la cooperación y se han reducido los presupuestos para programas sociales. Esto es más notorio en comunidades de Esmeraldas y

Sucumbíos que arrastran serios déficit en servicios básicos” (Entrevista al Coordinador de ACNUR en Esmeraldas el 19.08.2018).

#### ***4.5.1.2. Prácticas discriminatorias e imaginarios respecto al refugio y la inmigración***

El éxito del registro ampliado no contribuyó a corregir las asimetrías que afectan a la población refugiada. Paradójicamente, el reconocimiento formal de la condición de persona refugiada en ocasiones ha acentuado los problemas que afectan al conjunto de este sector. En efecto, si bien subsisten obstáculos que limitan el ingreso de niñas, niños y jóvenes colombianos a las instituciones educativas;<sup>114</sup> trabas para el arrendamiento de viviendas a familias colombianas y el acceso, cuando es posible, a un empleo de calidad, estos problemas se magnifican para la población formalmente reconocida como refugiada. Es el caso de la atención en educación y salud, que evidencian diferencias de acceso de alrededor de 10% a favor de la población con necesidad de protección internacional no registrada: mientras el 74% y 82% de la población refugiada no registrada accede a la educación y salud, respectivamente, solo el 63% y el 73% de la población registrada estudia o recibe atención en salud (ACNUR, 2009: 43 y 45). Esta diferencia está igualmente presente en relación al bono de desarrollo humano al que accede más del doble de población en necesidad de protección internacional no registrada que población refugiada registrada (Ibid.: 42).<sup>115</sup>

Con respecto al trabajo, a partir de la información procesada por ACNUR se desprende que, en promedio, el 60% de la población en necesidad de protección internacional -registrada o no- que percibe ingresos está expuesta a condiciones laborales desfavorables, con salarios más bajos y sin las garantías contempladas en la legislación ecuatoriana, además de enfrentar, en ocasiones, prácticas discriminatorias de los propios trabajadores ecuatorianos que perciben competencia en esta población (2009: 37). Su vinculación laboral está básicamente atada al sector informal en actividades vinculadas a la construcción o como vendedores ambulantes (Riaño y Villa, 2008; PUCSE, 2012). Estos problemas se concentran entre la población refugiada legalmente reconocida que

---

<sup>114</sup> El informe de ACNUR respecto a la población en necesidad de protección internacional revela que más de la tercera parte de niñas y niños refugiados no accede a la escuela por “falta de papeles” o discriminación (ACNUR, 2009: 44). Esta situación ocurre pese a que la legislación vigente garantiza el derecho a la educación de la población refugiada, sin mediar la presentación de requisitos de documentación (Acuerdo Ministerial 337).

<sup>115</sup> Para compensar a las familias que viven bajo la línea de pobreza, Ecuador creó el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (bono de desarrollo humano) que implica una transferencia mensual de 50 dólares a las familias afectadas bajo la condición de que niños y niñas de estos hogares asistan a la escuela y accedan a los servicios sanitarios públicos.

en un 40% afirma no tener condiciones de trabajo similares a las de la población ecuatoriana (ACNUR, 2009: 40).

El 40% restante de la población refugiada que no ha logrado vincularse laboralmente, vive de actividades informales, del apoyo concedido por organizaciones humanitarias y redes familiares, en su orden (Ibid.: 37). Alrededor de una cuarta parte de la población refugiada masculina no percibe ingresos y se encuentra desempleada<sup>116</sup> (Ibid.: 56).

Los más bajos niveles de los indicadores sociales entre la población refugiada registrada llevan a concluir que una vez que una persona solicitante de refugio se torna visible, su situación de protección en lugar de mejorar, parecería deteriorarse. La constatación de esta realidad podría contribuir a sustentar lo que Nicholas De Genova denomina “proceso activo de inclusión a través de la ilegalización” (2005: 234, citado por Mezzadra, 2016: 15) al reflexionar sobre la migración de México a Estados Unidos, en la medida en que la población refugiada no legalizada cruza y divide espacios de ciudadanía, fracturándolos y alentando regímenes heterogéneos respecto, en este caso, a la población refugiada registrada.

La realidad de la población venezolana migrante no es distinta. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que niños, niñas y adolescentes venezolanos

“han sido objeto de hostigamiento en las escuelas. Algunos interlocutores, incluidos funcionarios, utilizaron descalificativos para referirse a los venezolanos en el país, y se han adoptado algunas ordenanzas para evitar que se realice venta ambulante (...) como resultado del aumento del número de vendedores ambulantes venezolanos. Los venezolanos tienen dificultades para acceder al alquiler de vivienda, y se han dado casos de personas viviendo hacinadas en lugares sin las condiciones sanitarias adecuadas. Igualmente, se tiene registro de niñas y mujeres venezolanas víctimas de abusos sexuales” (OACDH, 2018: 48).

La discriminación y vulnerabilidad que enfrenta la población migrante estimula el surgimiento de redes de explotación. “A poco llegar al territorio, especialmente a San Lorenzo, los inmigrantes son interceptados por individuos que los vinculan a través de variadas estrategias de manipulación al trabajo en las palmicultoras y a redes de explotación sexual” (Uranga, 2011: 25), así como a la actividad minera en el norte de Esmeraldas, a lo que se suma en la actualidad indicios de operación de redes de trata con

---

<sup>116</sup> No se dispone de información equivalente para el caso de las mujeres.

finés de explotación laboral por medio de ofrecimientos orientados a una pronta solución de su situación migratoria (Moncayo, 2012). Como sucede en muchos paisajes fronterizos a lo largo del mundo, la migración ilegal se ha transformado en la piedra angular de un modo de gestión política y económica que explota la diferencia entre lo legal y lo ilegal (Samaddar, 1994).

Los problemas que soporta la población inmigrante se agudizan con la percepción según la que el refugio es la fuente de muchos de los males que enfrenta el país. En materia de seguridad, por ejemplo, y a medida que el refugio se fue haciendo cada vez más visible, fue tomando fuerza un imaginario social que de manera peligrosa asocia el aumento de la delincuencia y la criminalidad a la presencia de población colombiana -y hoy también venezolana-, cuando no a asociar el refugio con el ingreso de personas que pueden “contagiar” a la población ecuatoriana debido a sus supuestos nexos con las FARC, el M-19 o grupos paramilitares.

La construcción de representaciones y estereotipos negativos frente al refugio explican la realización, en el año 2010, de un informe orientado a analizar la correlación entre el número de los delitos cometidos en el país y la nacionalidad de los autores.<sup>117</sup> El informe identificó que solo cerca del 2,9% del total de delitos registrados en el país entre 2009-2010 habían sido cometidos por personas colombianas, que solo en dos de los casos se confirmó la participación de personas refugiadas de nacionalidad colombiana y que del total de población carcelaria en el 2010, aproximadamente 12 mil personas, la población colombiana ascendía a 5,025%. Otras estimaciones revelan que el número de población privada de libertad colombiana ha sido fluctuante. Desde el 2006 (año pico) al 2009 esta cifra evidenció una tendencia a la baja. En el 2013, más de mil personas colombianas se encontraban privadas de libertad. Este número representa aproximadamente el 4,15% del total de población carcelaria del Ecuador para dicho año (24.203 personas).<sup>118</sup>

El propio presidente Correa justificaba a mediados del 2011 los mayores requisitos solicitados para optar por el refugio señalando que “antes era muy laxo el proceso, eso ya se ha corregido. (...) Este año tenemos la mitad de solicitudes de refugio que el año pasado porque antes cualquiera presentaba una solicitud de refugio (...)

---

<sup>117</sup> Información proporcionada por un ex asesor del Ministerio del Interior. Comunicación personal 04.07.2011.

<sup>118</sup> Información disponible en: <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/sobrepoblacion-de-las-carceles-de-ecuador-con-detenciones-provisionales-narcotrafico>, acceso el 18.05.16.

algunas veces delincuentes pedían refugio y eran refugiados” (El Comercio, 18 de junio 2011), a la vez que los medios de comunicación profundizaban los temores con titulares como “Delincuencia motiva depuración del plan de visa de refugiados” (El Universo, 27 de junio de 2011) o “Ecuador depura visas de refugiados colombianos tras detectar irregularidades” (El Mercurio, 7 de junio de 2011).

El imaginario construido alrededor del refugio por parte de los más importantes medios de comunicación, como de algunas autoridades públicas, no dista del tratamiento concedido en otras latitudes. La investigación llevada a cabo por Edith F. Kauffer (1997) respecto a población refugiada y fronteras evidencia que las autoridades del país receptor suelen considerar a quienes solicitan protección internacional como personas políticamente activas o con posibilidades de influir en la vida política interna a partir de las alianzas que puedan establecer con las fuerzas de la oposición. En cualquier caso, y aún si ninguno de los escenarios descritos tomara lugar, el énfasis en el análisis de la población refugiada ha sido la amenaza que ellos implican para la seguridad interna del país receptor. “Para los países que enfrentan olas de migrantes en sus fronteras, una de las respuestas es el control. Esta opción puede presentarse bajo la modalidad migratoria o, de manera más represiva, con la militarización. Se trata de salvaguardar la soberanía nacional y de controlar la población” (Kauffer, 1997: 743).

Las expresiones xenofóbicas son más usuales en las ciudades intermedias de la región fronteriza o en ciudades grandes del Ecuador y contrastan con la reacción de la población asentada en comunidades y poblados limítrofes a la frontera para quienes la nacionalidad es un membrete vacío. En las ciudades fronterizas, San Lorenzo y Lago Agrio, principalmente, el refugio ha sido utilizado como un mecanismo de presión por parte de las autoridades locales que en determinadas coyunturas han sobredimensionado la presencia de población colombiana para exigir mayor atención por parte del gobierno llegando a advertir sobre el cierre de la frontera o la expulsión de los refugiados.

Esta instrumentación ha permeado hacia la población que ante la presencia de “foráneos” busca exteriorizar su malestar por el mayor apoyo que reciben los refugiados de organismos internacionales a través de la entrega de raciones alimenticias o de la consecución de refugio en otros países. En las entrevistas mantenidas con población esmeraldeña alrededor de su opinión frente al refugio era usual escuchar el reclamo de “por qué a los colombianos se les da y nosotros siendo esmeraldeños pobres no tenemos ni para comer”. En la construcción de un imaginario negativo hacia la población refugiada colombiana, Van Dijk (2007, citado por Ortega y Ospina ed., 2012: 16) anota el peso que



ha tenido la representación de la inmigración como invasión. Se asume así que colombianos refugiados y migrantes ocupan nuestro espacio, compiten por nuestro trabajo, se toman nuestros barrios, y están al frente del incremento de los índices de delincuencia e inseguridad en las ciudades.

La solidaridad y muestras de apoyo hacia la población colombiana adquiere un cariz distinto en las comunidades de frontera. Aquí es común observar que las familias ecuatorianas compartan la vivienda con familias colombianas, que presten dinero a la población colombiana refugiada e incluso reciban el apoyo para acceder a parcelas para la producción agrícola (IDMC-NRC, 2010). Pese a los problemas y carencias que enfrenta la población refugiada, su incorporación en las comunidades ecuatorianas ha facilitado su integración y posterior búsqueda de oportunidades de sobrevivencia. Según lo reconocen el International Displacement Monitoring Centre y el Consejo Noruego para los Refugiados (2010), más allá de las dificultades y la precariedad en la que muchas familias colombianas han debido reconstruir su vida, este tipo de integración es cualitativamente superior a lo que sucede cuando la población refugiada es sometida a vivir en campos ajenos a la dinámica social circundante.

Un conjunto de condiciones entre las que destacan la ininterrupción del ingreso de personas solicitantes de refugio, la solidificación de una percepción social que sanciona la presencia de población colombiana -y actualmente también venezolana-, las contradicciones entre la Ley de Movilidad Humana aprobada en 2016 y la Constitución de 2008,<sup>119</sup> los cuestionamientos al registro ampliado, la debilidad institucional de las dependencias encargadas de evaluar y calificar a la población que solicita refugio y de regularizar la situación de personas migrantes, han servido de sustento para que Ecuador endurezca su política migratoria. De acuerdo a análisis pormenorizados sobre la Ley de Movilidad Humana, ésta “profundiza el enfoque securitista y sancionador de la migración y atenta contra el principio de igualdad y no discriminación de las personas de otro origen nacional” (Arcentales, 2017: s/n). La Ley sería contraria al principio de igualdad y no discriminación pues la definición de persona extranjera contenida en la Ley está sujeta a la disponibilidad de una visa, restringe la ciudadanía suramericana a aquellas personas que provengan de países pertenecientes a la UNASUR, a quienes se reconoce una forma exclusiva de regularización y la exención del pago de multas y otras sanciones pecuniarias por su condición migratoria (Art. 89) y obliga a toda persona de otra nacionalidad a contar

---

<sup>119</sup> Una mayor discusión al respecto se puede encontrar en el artículo de Gardenia Chávez y Javier Arcentales, *Movilidad humana, irregularidad y ‘tráfico ilícito de migrantes’* (2016).

con un seguro mientras permanezca en territorio ecuatoriano (Arts. 52, 55, 61 y 64). El enfoque securitista de la Ley se expresaría en que la admisión al Ecuador, la obtención de una visa o la naturalización depende de que la persona solicitante no sea considerada amenaza o riesgo para la seguridad interna (Art. 137), sin precisar la información que requieran presentar los solicitantes o la autoridad encargada de hacer dicha evaluación. Siguiendo a Arcentales, la Ley contemplaría, entre otros aspectos, solicitar la salida voluntaria del país de quienes se encuentren en condición migratoria irregular (Art. 142) y posteriormente el inicio del proceso de deportación (Art. 143.3).

En relación al refugio tras la suspensión del registro ampliado, se adoptaron medidas migratorias ambivalentes respecto a la obligatoriedad, durante algunos períodos, de presentar “pasado judicial” o el levantamiento de tal medida durante algunos momentos puntuales.<sup>120</sup> Es solo en el 2012, como consecuencia del acercamiento entre Ecuador y Colombia a raíz de la reactivación de la zona de integración fronteriza y la formulación del correspondiente plan, así como también de forma paralela a las negociaciones post conflicto que tomaron lugar en Colombia, que la disposición de presentación del pasado judicial para los refugiados finalmente se levantó. Hay que anotar que pese a la magnitud y relevancia del fenómeno de refugio y del impacto del desplazamiento de población colombiana sobre el Ecuador, el tratamiento de esta problemática ha estado ausente de los diálogos en torno al post-conflicto protagonizados por el gobierno de Colombia y las FARC. No solo debería ser materia de preocupación la definición de un estatuto más estable para la población refugiada y la identificación de los mecanismos y estrategias que deberían ponerse en marcha para garantizar el retorno de aquellas personas que decidan regresar a Colombia una vez suscritos los acuerdos, sino también el diálogo en torno a las políticas relacionadas con la desmovilización de los grupos armados y su posible incidencia sobre los países vecinos y el análisis de los

---

<sup>120</sup> Contrariamente a los acuerdos de libre tránsito de la Comunidad Andina de Naciones de los que Ecuador es signatario, durante el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) se reglamentó la obligatoriedad de presentar el pasado judicial, como también lo hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez en el año 2004. Tras levantar esta medida a inicios de su mandato, en diciembre del año 2008, el Presidente Rafael Correa restableció la exigencia de pasado judicial mediante el Decreto Ejecutivo 1471. Este decreto, que al poco tiempo se suspendió, fue retomado en marzo del 2009 a través de la expedición de otro decreto ejecutivo (DE 1635) que, a criterio de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, incorporaba medidas restrictivas y violatorias de derechos y principios constitucionales e internacionales, e insistía en la presentación del pasado judicial a las personas solicitantes de refugio. Sin mayor claridad en torno a cómo enfrentar el fenómeno del refugio, finalmente en el 2012 se suscribió un nuevo Decreto Presidencial No. 1182 del 30 de mayo del 2012 que regula el sistema de asilo en Ecuador. Este decreto eliminó la definición de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena de 1984 para sujetarse a los términos de la definición tradicional contenida en la Convención de 1951.

escenarios que se derivarán, una vez desmovilizadas las FARC, del mayor margen de maniobra que tendrían las organizaciones internacionales de la droga, la posibilidad de llenar el vacío de poder y la paramilitarización de las zonas de cultivo (Vélez, 2016).

Dadas las dificultades por acceder al estatuto de refugiado, la población con necesidades de protección internacional se ha acogido a las disposiciones del “Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile” al que adhirieron Perú (28 de junio de 2011), Ecuador (29 de junio de 2011) y Colombia (29 de junio de 2012). Este acuerdo representa un significativo avance en materia migratoria en la medida en que simplifica los trámites y procedimientos para la obtención de permisos de residencia bianuales y permanentes y garantiza igualdad de libertades y derechos laborales y de educación para los y las inmigrantes y sus familias.

Más restrictivo ha sido aún el tratamiento concedido a la población venezolana a quienes se prohibió la entrada si no arribaban con pasaporte, contrariando la Ley de Movilidad Humana y acuerdos multilaterales suscritos en el marco de la Comunidad Andina (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) (Gallegos, 2018). Esta medida fue parcialmente revisada luego de que la Defensoría del Pueblo y otras entidades de derechos humanos interpusieran medidas cautelares, exigiendo en lugar del pasaporte, un certificado de validez de la cédula de identidad.<sup>121</sup>

Aunque es casi un siglo que el refugio apareció como un fenómeno social y político y que su recurrencia, lejos de disminuir, ha aumentado y adquirido nuevas características, los Estados han mostrado una notable incapacidad para abordar esta problemática. Ecuador no es un caso aislado. Los avances introducidos entre el 2008-2010 en relación a la movilidad humana poco a poco se esfumaron, al tiempo que las políticas se adherían a una corriente dominante que no atina cómo reaccionar ante este fenómeno social contemporáneo, a no ser con el despliegue de mayor seguridad, control y una merma sistemática de los derechos humanos. Es por eso que Agamben, siguiendo a H. Arendt, señala que los límites para tratar y abordar el refugio, radican en la ambigüedad de las nociones fundamentales que regulan la adscripción de los ciudadanos dentro del ordenamiento jurídico de los modernos Estado-nación.

“Es necesario esforzarse en tomar en serio esta formulación, que liga indisolublemente la suerte de los derechos del hombre y la del Estado nacional moderno, de manera que el ocaso de este último implica necesariamente que

---

<sup>121</sup> La solicitud de medidas cautelares puede encontrarse en <http://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpecomunicacion/medidascautelares-poblacion-venezolana.pdf>, acceso el 20.12.18.

aquellos se conviertan en obsoletos. La paradoja está aquí en que precisamente la figura –el refugiado- que habría debido encarnar por excelencia los derechos del hombre, marca por el contrario la crisis radical de este concepto” (Agamben, 2010: 24).

Ecuador no ha podido escaparse de un patrón según el cual la población refugiada enfrenta limitaciones para ser tratada bajo parámetros similares a los de su ciudadanía por lo que comúnmente su atención se ha relegado a organizaciones humanitarias y a la policía, instituciones a las que la magnitud y severidad del refugio usualmente rebasan sus capacidades y competencias. Esto explica que con demasiada frecuencia se haya adoptado el diseño e instrumentación de arreglos más bien precarios y restrictivos de cara a los sectores poblacionales solicitantes de refugio.

#### **4.5.2. Desplazamiento interno y refugiados ambientales**

Con el fin de dar cuenta de los procesos de desterritorialización a los que son expuestas poblaciones por efectos de la degradación ambiental, pensadores vinculados a la ecología política (Brown, 1976; Conisbee y Simms, 2003, Reuveny y Peterson, 2003) aluden al uso del concepto de refugiados ambientales o desplazados ambientales cuyo uso se popularizó a partir de la publicación del informe *Los Refugiados Ambientales* elaborado por El-Hinnawi para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA-. Según la definición propuesta por El-Hinnawi los refugiados ambientales

“son personas forzadas a abandonar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, a causa de una grave ruptura ambiental (natural o de origen humano) que pone en peligro su existencia y/o afecta seriamente la calidad de sus condiciones de vida. Por ruptura ambiental se entiende todo cambio físico, químico y/o biológico en el ecosistema (o en los recursos básicos) que lo convierte, de forma temporal o permanente, impracticable para la vida humana” (Cardy, 1994: 2).

Si bien dicho concepto ha sido utilizado de manera convencional para caracterizar a las poblaciones particularmente expuestas a los efectos ocasionados por el calentamiento global, principalmente por el aumento del nivel del mar y los consecuentes riesgos de pérdida de territorio -pérdida total en el caso de Estados insulares como Tuvalu en el Pacífico o Maldivas en el Mar de China-, bajo la denominación de refugiados ambientales también se sitúan aquellas personas que deben abandonar su hogar como consecuencia de actividades económicas de las que no son responsables. “Para los países ricos, la incómoda verdad es que las fuerzas que empujan el crecimiento global en el número de refugiados están muy cerca de ellos -en sus propios estilos de vida

dilapidadores de energía” (Conisbee y Simms, 2003: 4-5). Existe una extensa literatura que demuestra la desterritorialización de poblaciones para dar sitio a minas, campos petroleros y de gas, oleoductos, refinerías, plantaciones, represas<sup>122</sup> y otras actividades económicas, así como estudios que demuestran que otras poblaciones se ven forzadas a salir de sus hogares y territorios debido a la desertificación, la contaminación del agua y entorno circundante, que tornan imposible la continuidad de la vida<sup>123</sup>. Como lo dice Nicholas Hildyard, investigador en temas de derechos humanos y ambiente,

“En todo el mundo, cientos de miles de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares para dejar sitio a las minas, campos petrolíferos y de gas, oleoductos, centrales eléctricas y refinerías que proporcionan la energía que la economía mundializada necesita. Algunos son desposeídos porque sus tierras son directamente ocupadas por las infraestructuras para la producción energética; otros lo son debido a que la contaminación resultante arruina sus tierras e imposibilita la subsistencia; otros más, (...) se convierten en víctimas de intimidaciones y hostigamientos por intentar defender los derechos de los afectados. A todos ellos hay que sumarles las innumerables personas que acaban sin hogar debido a los impactos climáticos provocados por el consumo de los combustibles que se han extraído, o por los conflictos generados por esas actividades extractivas” (Hildyard, 2003: 37).

El refugio ambiental atribuible directamente al calentamiento global ha constituido una bandera de lucha de pequeños estados insulares que enfrentan la posibilidad de extinción o de países como Bangladesh<sup>124</sup> donde gran parte de su población está amenazada por el aumento del nivel del mar, las islas de la bahía de Bengala, Vietnam y el Delta del Mekong (Solà Pardell, 2012). La posibilidad de su ocurrencia ha puesto en el tapete de la discusión los conceptos de ciudadanía y nacionalidad pues no existen definiciones sobre la probable re-localización de grandes conglomerados, ni claridad sobre el tratamiento para nacionalidades que han perdido su territorio, menos aún sobre las responsabilidades.

Aunque según el léxico internacional el cruce o no de fronteras internacionales determina que la noción de refugiado se aplique a las personas que se encuentran fuera

---

<sup>122</sup> Se estima que en la India la construcción de represas habría ocasionado el desplazamiento de entre 20 y 50 millones de personas (Conisbee y Simms, 2003: 19).

<sup>123</sup> Ver por ejemplo como la sequía y la degradación de los suelos inciden sobre la movilidad de la población del Sahel (Shmite y Nin, 2015); el estudio sobre el despoblamiento del Aral, en Asia central, como consecuencia del crecimiento de los cultivos de algodón de Juliette Williams (2007), así como la reflexión sobre desarrollo y desplazamiento forzado de Laura Jeffery (2018).

<sup>124</sup> Los autores de un reciente artículo publicado en la revista *Migraciones Forzadas* señalan que si bien el gobierno de Bangladesh “ha promulgado una gran cantidad de leyes y políticas relativas a la vulnerabilidad y adaptación que genera el cambio climático; sin embargo ninguna de ellas aborda con claridad el desafío del desplazamiento inducido por el clima, incluidos los derechos de vivienda, tierra y propiedad de las personas desplazadas” (Barua, et al., 2017: 89).

del país de su nacionalidad, y que se utilice la categoría de desplazado para quienes son parte de un movimiento migratorio que se produce dentro de las fronteras de un mismo país, el reconocimiento del desarraigo provocado por el crecimiento económico, por la instalación o ampliación de una industria, por la construcción de represas o el deterioro ambiental de un entorno para su utilización productiva, es aún materia de debate.<sup>125</sup> En el mejor de los casos, el desarraigo y la desterritorialización ligados al ambiente suelen ser calificados como una lamentable consecuencia del desarrollo, como un problema localizado y sin mayor relevancia, o como fácilmente subsanable una vez que los réditos de las actividades económicas se distribuyan entre toda la población y los sectores afectados puedan reinsertarse en los nuevos procesos económicos, algo que rara vez sucede o cuya probabilidad es absolutamente marginal. Lo usual, en cambio, ha sido que el desplazamiento interno o externo de comunidades atribuible a problemas ambientales sea ignorado, desconocido u omitido (Hildyard, 2007). ¿Qué explica el desconocimiento y desatención a esta realidad? Kauffer (1997), así como Metha y Gupte (2003), consideran que el hecho de que el desplazamiento ocasionado por factores ambientales privilegie la migración interna, ha contribuido a eclipsar un fenómeno que se suscita diariamente más aún cuando las poblaciones despojadas de su territorio y re-localizadas en otras regiones del mismo país deberían ser protegidas por el mismo Estado que dio paso a la utilización económica de sus tierras. “Los intentos de las poblaciones desplazadas por buscar protección del Estado suelen ser complejos en la medida en que el Estado es al mismo tiempo el perpetrador de las violaciones a los derechos humanos y el árbitro de justicia” (Metha y Gupte, 2003: 27). Para Conisbee y Simms (2003), una de las dificultades para el reconocimiento del desplazamiento ambiental radicaría en que a diferencia de las migraciones políticas o económicas que usualmente se concentran en un período relativamente corto e implican el cruce de fronteras donde se detiene o modifica el factor que desencadenó la migración, las migraciones ambientales, cuando no responden a desastres fácilmente localizables o medibles (como un accidente industrial), pueden tomar lugar durante extensos períodos, a medida que aumenta la contaminación, se agudiza la erosión del suelo o se reduce el territorio necesario para soportar la vida de una comunidad determinada. Hildyard (2007), por su parte, esgrime razones políticas vinculadas al escaso o nulo poder de poblaciones que son forzadas a abandonar sus formas

---

<sup>125</sup> Para designar a la población que sale de su territorio por problemas vinculados al desarrollo y la contaminación del ambiente, Mahapatra (1983) en la India recurrió al término “oustee” (expulsado) que permite evidenciar la injusticia y naturaleza coercitiva del desarraigo (Metha y Gupte, 2003: 8).

de vida, sus territorios y su entorno, y que en varios casos, podría añadirse, son parte de territorios racializados en los que viven poblaciones indígenas o afrodescendientes.

Pese a que en la actualidad existe ya un reconocimiento del fenómeno de refugiados y desplazados ambientales, su cuantificación sigue siendo imprecisa y su tratamiento motivo de polémica. Conisbee y Simms (2003: 36) anotan que para inicios del siglo, alrededor de 25 millones de personas se habrían ya desplazado por razones ambientales. Hacia el 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportaba que más de 30 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse como consecuencia de desastres naturales y calculaba que para el 2050 por efectos del cambio climático y la degradación ambiental entre 25 millones y mil millones de personas podrían sumarse a estas estadísticas,<sup>126</sup> una cifra que excede con creces el cálculo realizado a inicios del presente siglo cuando se consideraba que cada año 10 millones de personas podrían sumarse a las estadísticas de refugiados ambientales (Hildyard, 2007: 38). Otros cálculos acotados a efectos concretos, estiman que alrededor de 150-200 millones de personas podrían desplazarse hasta el año 2050 como consecuencia de los problemas ocasionados por el cambio climático y específicamente por el aumento en el nivel del mar (OIM, 2008: 11). Siguiendo la afirmación de Susana Borrás, “la misma disparidad de cifras sobre los posibles migrantes ambientales es indicativa de la complejidad e indefinición del fenómeno” (2016: 33), así como también de la irrelevancia política con la que se ha abordado esta realidad que involucra generalmente a los sectores más pobres y con menor acceso al poder. Una definición contemporánea alrededor del refugio debería incorporar los cambios en el entorno social, las implicaciones de los problemas ambientales globales en la migración de la población y las consecuencias de la acción de gobiernos y empresas para crear condiciones que fuerzan el desplazamiento de población para la instalación de actividades económicas (Conisbee, 2007; Hildyard, 2007).

Aún reconociendo la dificultad de contar con cifras exactas sobre la magnitud de los refugiados y desplazados ambientales, la información disponible advierte la existencia de una preocupante realidad que afecta a millones de seres humanos. Lamentablemente, esta población no disfruta de los derechos como refugiados según los términos contenidos en Convención sobre el Estatuto de los Refugiados elaborada en Ginebra en 1951 que fuera elaborado a partir del reconocimiento de la situación política, social y económica

---

<sup>126</sup> Información disponible en <http://www.acnur.org/que-hace/cambio-climatico/>, acceso el 15.05.16.

de la Europa de posguerra, como tampoco está dentro del alcance del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados acordado en 1967.

Para la población que se desplaza por problemas ambientales, no existen instrumentos internacionales que garanticen su protección. Lo más cercano a este propósito podrían ser los Principios Rectores del Desplazamiento Interno (1997) que tienen un carácter orientativo para los Estados; y, para el caso de América Latina, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984) que aunque no es un instrumento jurídicamente vinculante, podría ser la base para desarrollar una legislación específica en materia de refugio y desplazamiento ambiental de cobertura regional, al considerar el criterio de “la violación masiva de los derechos humanos” (Sección III).

Los antecedentes hasta aquí expuestos ofrecen el marco necesario para situar que la presencia de miles de familias refugiadas de Colombia no es la única manifestación de la movilidad humana presente en la frontera. En los últimos años, ha comenzado a tomar fuerza el desplazamiento de población ecuatoriana originalmente asentada en la frontera norte hacia otros lugares del país.

“(…) la violencia que se vive en la región de la frontera norte, tanto en Colombia como en el Ecuador, obliga a mucha gente a salir de sus territorios – en verdad que las razones de los desplazamientos tienen distintos ‘colores y sabores’ pero los resultados son los mismos. Miles de familias que teniendo una identidad construida a partir de los referentes culturales de las fronteras, ahora están obligados a vivir lejos de esa realidad” (García ed., 2012: 83-84).

Al contrario de lo sucedido en otros momentos de la historia del país, este nuevo proceso de desplazamiento no obedece a motivos económicos y la consecuente movilización interna de la población hacia determinados polos de crecimiento. Su movilización está vinculada a factores asociados con la violencia e inseguridad que soporta la región (chantajes, amenazas, hostigamientos y asesinatos, recepción de panfletos amenazantes) y que hacen del desplazamiento de población ecuatoriana de la frontera norte, un proceso nuevo y desconocido para el país. Sin embargo, el desplazamiento de población ecuatoriana no es solo atribuible a factores externos ligados con el conflicto colombiano o a la actuación de bandas delincuenciales y grupos armados irregulares. Muchas familias son desplazadas de esta región por efectos de la dinámica económica imperante y que en muchos casos ha sido estimulada por el Estado (expansión del monocultivo de palma, por ejemplo, y consecuente usurpación de tierras y medios de vida de las familias fronterizas). Esta última tendencia contribuiría a dibujar un escenario de movilidad humana en la frontera norte ecuatoriana en el que de manera compleja



interactúan los procesos migratorios derivados del conflicto colombiano (población refugiada) y la expulsión de población ecuatoriana de su territorio por el deterioro y la destrucción del entorno donde viven.

El desconocimiento de las familias afectadas respecto a cómo actuar o dónde acudir en estas circunstancias, el temor a hablar por las represalias y amenazas, la desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial, la falta de un sistema de denuncia y protección frente a este fenómeno, o la generalizada percepción de inseguridad de quienes enfrentan la decisión de desplazamiento, explican que este fenómeno se mantenga oculto. Su ocurrencia es ignorada por el Estado ecuatoriano, que considera al desplazamiento interno como algo inexistente (Roa Ovalle, 2012).

El desplazamiento de ecuatorianos se ha documentado solo de manera marginal y la información es escasa, basada fundamentalmente en evidencias particulares. Aún cuando servidores públicos tiene conocimiento de que el desplazamiento está ocurriendo, el asunto no está siendo discutido en ámbitos políticos y gubernamentales, limitando de tal manera las posibilidades para construir las capacidades institucionales necesarias a fin de dar una respuesta eficaz y ágil en el marco de la protección y restitución de derechos. Por eso en el 2011, en un encuentro entre los pueblos afrodescendientes de Ecuador y Colombia se revelaba que:

“Los desplazados y los refugiados no es solo un tema de los hermanos que salen del otro lado de la raya, aquí adentro de nuestro Ecuador hay cientos de familias desplazadas. (...) este fenómeno está escondido y solo se habla de los hermanos y hermanas refugiados que vienen de Colombia. (...) Nadie está preocupado, ni las instituciones del Estado tienen interés en conocer cuántas familias ancestrales fueron botadas de sus tierras ancestrales por la violencia de los sembradores de palma. Cuando en los programas de gobierno se habla de los desplazados, solo se piensa en los hermanos de Colombia, pero en las ciudades grandes del Ecuador viven cientos de familias que son desplazadas locales” (García ed., 2012: 141).

La poca valoración que se ha otorgado a este proceso emergente obstaculiza el cumplimiento de disposiciones constitucionales que obligan a la protección y asistencia humanitaria de quienes se hayan visto obligados a desplazarse<sup>127</sup> y llama a la necesidad

---

<sup>127</sup> El artículo 42 de la Constitución dispone que: “Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas e hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna”.

de conjugar diversos esfuerzos que permitan desde el reconocimiento formal de los procesos de desplazamiento dentro de territorio ecuatoriano, una delimitación del alcance de la noción de desplazamiento interno, sus manifestaciones y modalidades, hasta el montaje de un sistema de prevención, atención, protección y restitución de derechos para las personas afectadas.

Algunas organizaciones no gubernamentales han mostrado interés por profundizar en las causas y consecuencias del desplazamiento interno asociado a factores de violencia e inseguridad. En el año 2008, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), una organización privada que promueve los derechos humanos, publicó un estudio de carácter cualitativo en el que señalaba que aproximadamente 4000 personas se habrían desplazado de la frontera norte como una respuesta a las continuas amenazas que recibían. Si bien los datos cuantitativos son aproximativos y referenciales por el carácter de la metodología utilizada, la investigación profundizó estudios de caso que permitieron derivar algunas tendencias en el desplazamiento de población.

Una primera tendencia sería el desplazamiento permanente asociado a la desaparición de comunidades que deciden partir por el incremento del acoso y la presión de grupos irregulares. Este proceso se habría registrado en Charip y Santa Carolina, en la provincia de Sucumbíos. Mientras en esta última, la población abandonó la comunidad y vendió la tierra, en Charip, las familias se vieron forzadas a salir por el temor al ingreso de grupos armados irregulares. Luego de intentar retomar sus tierras por cuatro ocasiones, las familias de Charip tomaron la decisión de asentarse 10 km al sur del lugar donde anteriormente se levantaba el centro comunitario. Las familias de Santa Carolina nunca regresaron (Carrión y Llugsha coord., 2013: 96).

Una segunda tendencia sería la reducción del número de personas de una comunidad por el desplazamiento de familias que soportan algún tipo de chantaje o amenaza. Esta situación es bastante frecuente en Esmeraldas. Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la comunidad de Pichanal con 400 personas registradas, hacia la primera década del siglo en curso cobijaba a no más de 30 habitantes (IDMC-NRC, 2010: 7). En Palma Real, también situada en la provincia de Esmeraldas, a inicios del año 2010, 20 personas huyeron de la comunidad por amenazas a su vida y buscaron la protección de instituciones estatales.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Conocí de este desplazamiento durante mi trabajo en Plan Ecuador, entre los años 2010 a 2013.

La tercera tendencia guardaría relación con el desplazamiento temporal, adoptado como una estrategia de prevención o como una alternativa para minimizar la ocurrencia de presiones provenientes de los grupos armados irregulares dentro de la comunidad o en comunidades vecinas. En este caso, familias asentadas en zonas fronterizas optan por modificar su lugar de vivienda para retornar diariamente a las labores de cultivo de sus fincas, en las comunidades en las que anteriormente estaban asentadas.

En el 2010, un equipo de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) liderado por María Isabel Moncayo desarrolló un estudio para comprender las razones del desplazamiento interno y sus especificidades en cada una de las provincias fronterizas. Fruto de esta investigación se advierte que las causales que explican los procesos de desplazamiento de población ecuatoriana varían según las provincias, de la misma manera que varía el lugar de destino. En Esmeraldas, son dos los factores desencadenantes para que familias y pobladores abandonen sus tierras: el incremento de la violencia (sicariato, delincuencia, vacunas) y la expansión de monocultivos y el consecuente control del territorio por parte de empresas agroindustriales.

La salida de sus comunidades de origen por efectos de la presión de industrias extractivas, fenómeno que será analizado con mayor detenimiento en el Capítulo 5, ha determinado la pérdida de los medios de vida de poblaciones caracterizadas, hasta entonces, por practicar una agricultura familiar. Las cabeceras cantonales, las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil y parroquias rurales de la provincia de Imbabura, se convierten en los nuevos lugares de vivienda de las familias desplazadas por el establecimiento de industrias extractivas (Moncayo et al, 2010).

En Carchi, el desplazamiento de familias ecuatorianas está asociado al secuestro, vacunas, extorsión y amenazas de reclutamiento forzado y, según lo identificaron Moncayo et al. (2010), es usual que las familias desplazadas de esta provincia busquen un nuevo lugar de vivienda en Ibarra o Quito.

Según el mismo estudio, los desplazamientos de familias ecuatorianas asentadas en la provincia de Sucumbíos obedecerían a tres causales: enfrentamientos armados, fumigaciones y amenazas o asesinato de dirigentes. El desplazamiento de población producto de las fumigaciones efectuadas por Colombia, no es un problema desconocido. Una investigación llevada a cabo en el año 2009 para identificar los impactos de las aspersiones, señala que “hasta un 50% de la población que habitaba la franja de diez kilómetros a lo largo de la frontera con Colombia ha huido de la zona desde el inicio de

las aspersiones” (Crespo, 2009: 17, citado por Carrión y Llugsha comp., 2013: 114). Los desplazamientos se habrían registrado sobre todo en comunidades indígenas Shuar y Kichwa, expuestas a mayores niveles de fragilidad y vulnerabilidad, lo que ha conducido a la desaparición de poblados completos como Yana Amaru (parroquia General Farfán), Sumak Pamba y Santa Carolina (cantón Cascales) (INREDH, 2008) y Puerto Mestanza que antes de las aspersiones albergaba a ochenta y seis familias y en el 2005 solo a cuatro (Crespo, 2009: 17, citado por Carrión y Llugsha comp., 2013: 114).

El estudio de Byron Real (2007: 43-45) sobre la provincia de Sucumbíos, identificó que el desplazamiento de población responde a dos causales: la violencia asociada al conflicto colombiano y la expansión del modelo extractivo. Según su investigación, el desplazamiento de comunidades Kichwa y Siekopai habría sido motivado por la incursión de grupos armados irregulares, en el primer caso, y por la expansión de los cultivos de palma aceitera, en el segundo. Un desplazamiento más antiguo, citado por el mismo estudio, es el que habría afectado a las comunidades Cofán asentadas en las parroquias Dureno y Shushufindi por la contaminación provocada por la empresa petrolera Texaco en los años 1970 del siglo pasado. Si bien no existe una cuantificación precisa sobre el número de personas expulsadas de sus tierras como consecuencia de la exploración y explotación de petróleo, resulta significativo citar que en un estudio elaborado por Pablo Fajardo y María Guadalupe de Heredia sobre el conflicto con Texaco, el 74,1% de indígenas y campesinos migrantes entrevistados señalaron haberse visto obligados a asentarse en una nueva área como consecuencia de la pérdida de tierras ocasionada por la contaminación o explotación petrolera (2009: 182, citado por Serrano, 2013: 33).

De acuerdo a las investigaciones citadas, la expulsión de población ecuatoriana de la frontera norte obedecería, entonces, a dos tipos de presiones. Algunos de los desplazamientos son claramente atribuibles a los variables ligadas al conflicto colombiano: persecuciones y amenazas provocadas por grupos irregulares armados que ingresaron a territorio ecuatoriano y aspersiones con glifosato que tornaron imposible mantener cultivos u otras actividades productivas. Otros desplazamientos, en cambio, tienen raíces ambientales y sociales asociadas a la expansión de la frontera extractiva. En estos casos, la población es forzada a abandonar su territorio debido a la pérdida de medios de vida o a la conversión de su espacio de vivienda en un lugar intolerable por la contaminación del ambiente. Aunque en ambos casos se trata de expulsión de población de su territorio, el abordaje político de estos dos tipos de desplazamiento ha sido distinto.

En los desplazamientos provocados por los efectos del conflicto colombiano y, específicamente por las aspersiones, la violación de la soberanía territorial se convirtió en un factor que los gobiernos ya no pudieron desconocer. El reconocimiento de población desplazada fue utilizado para exigir a Colombia no solo el cese de las fumigaciones, sino el establecimiento de un fondo destinado a la reparación de las familias afectadas. Los desplazamientos de familias ecuatorianas generados por la expansión de la frontera extractiva han sido, en cambio, sistemáticamente ignorados. Tales desplazamientos no son parte de las estadísticas oficiales ni representan un problema tipificado por la legislación nacional.

## **4.6. Desorganización de los territorios fronterizos**

### **4.6.1. La frontera a los ojos del Estado**

En atención a las demandas planteadas por varios actores sociales durante el proceso constituyente que tuvo lugar en Ecuador a lo largo del 2007, que reclamaban un trato distinto de la sociedad y el Estado frente a los territorios fronterizos, la Constitución ecuatoriana del 2008 incorporó algunos artículos que buscaban revertir la percepción de histórico menosprecio hacia las fronteras y sus habitantes. En esta dirección se contempló un tratamiento preferencial a los cantones asentados en la franja fronteriza de 40 km próximos a los límites territoriales (Ver Mapa 5). Al efecto, el Art. 249 del texto constitucional señala lo siguiente:

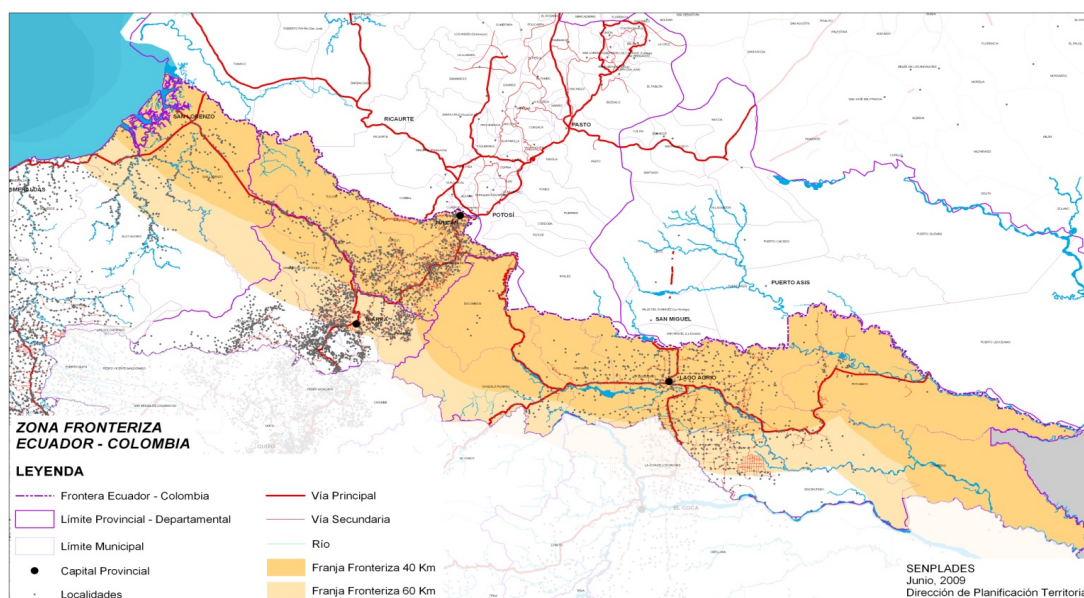
“los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socio-económico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad”.

Junto a este artículo, la Constitución del 2008 dispuso la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones fronterizas y de refugiados (Art. 423, § 5) y el mantenimiento y desarrollo de relaciones de cooperación entre los pueblos divididos por fronteras internacionales (Art. 57, § 18). El alcance de los artículos constitucionales señalados coexiste con varias leyes e instrumentos de planificación y políticas.

Esta sección busca desentrañar la correspondencia entre las disposiciones constitucionales y las políticas nacionales y locales existentes con incidencia sobre el ordenamiento territorial de las fronteras en la perspectiva de entender los significados que

adquiere el territorio fronterizo para los distintos niveles de gobierno desde el ámbito central hasta las unidades administrativas de menor jerarquía, las parroquias. Los contenidos de esta sección se fundamentaron en el análisis de 37 planes de desarrollo y ordenamiento territorial en sus distintos niveles (zonal, provincial, cantonal y parroquial), así como en los puntos de vista vertidos en las entrevistas mantenidas durante la realización de esta tesis. En todos los casos es preciso señalar que el énfasis del análisis girará en torno al territorio de Esmeraldas, y específicamente del norte de esta provincia, por ser ésta el área de estudio central de esta tesis.

**Mapa 5. Área de tratamiento preferencial de 40 km en la frontera norte ecuatoriana**



Tomado de: Secretaría Técnica de Plan Ecuador, 2009.

#### 4.6.1.1. La región fronteriza del norte del Ecuador – Zona 1

La Zona 1 es parte de las regiones autónomas definidas en el artículo 244 de la Constitución y se rige por una planificación específica, la *Agenda Zonal. Zona 1 Norte. 2013-2017*, que propone un conjunto de acciones para abordar “el desarrollo con una mirada más cercana a las particularidades de (la) demarcación territorial” (SENPLADES, 2015: 6), actuando como bisagra entre el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) y los procesos de desconcentración que se llevan a cabo en el territorio. La conformación de regiones autónomas tenía como propósito contribuir al equilibrio interregional, sobre la base de la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas entre provincias adyacentes. Para su operatividad, la legislación

prevé entregar incentivos económicos o de otra índole. De acuerdo a la ley, la iniciativa para la creación de una región autónoma correspondería a los gobiernos provinciales y su aprobación estaría supeditada, finalmente, a una consulta popular en las provincias que formarían la región.

Desde la entrada en vigencia de la actual Constitución no se han conformado regiones autónomas ni se ha sugerido su creación por iniciativa de algún gobierno provincial. En gran parte esta realidad obedece a las dificultades para constituir regiones que se sustenten en el equilibrio regional en un país en el que las fracturas entre sus tres regiones terrestres (Costa, Sierra y Amazonía) aún no ha podido superarse y donde los liderazgos locales aún tienen un peso decisivo.

Fue la SENPLADES la que en ausencia de la actoría social requerida, dio paso a la conformación de regiones denominadas zonas de planificación con el objeto de “fortalecer la articulación entre las políticas nacionales y locales e incorporar las dinámicas regionales en el proceso de planificación e inversión” ([www.planificacion.gob.ec](http://www.planificacion.gob.ec)). Para cada zona de planificación se definieron planes de desarrollo regionales que debían estar articulados al PNBV. La Zona 1, que se corresponde con la Zona de Integración Fronteriza Ecuatoriana-Colombiana (ZIFEC) (ver más adelante sección 4.6.2.) comprende, además de las tres provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, a Imbabura en la Sierra. Al incluir a esta última dentro de la Zona 1 y de la ZIFEC, una provincia con mayor desarrollo relativo que las otras unidades administrativas fronterizas, se perseguía que Imbabura actúe como polo de desarrollo capaz de dinamizar los otros territorios contenidos en la zona. Esta intencionalidad, probablemente defendible en términos teóricos, no ha provocado los resultados esperados y en ocasiones no ha hecho sino profundizar asimetrías ya existentes en la medida en que los indicadores agregados eclipsan las diferencias y deficiencias existentes en los territorios provinciales individualmente considerados, como lo revelan los valores de algunos indicadores y su heterogéneo comportamiento provincial. En el establecimiento de la Zona 1 y la consecuente redefinición de la ZIFEC se privilegió más la racionalidad técnica-administrativa del Ecuador que la realidad de la frontera norte.

¿Cómo aborda la Agenda Zonal 1 a la frontera? Después de exponer un diagnóstico que sitúa los principales problemas por los que atraviesa la región, entre los que destaca el “histórico abandono del Estado”, lo que se reflejaría en inequidad, pobreza y desorganización territorial (Ibid.: 79), la Agenda Zonal 1 propone algunas estrategias y líneas de acción para superar las dificultades que soporta la región fronteriza. Más allá de

la aplicación de políticas públicas sociales orientadas a reducir brechas en el acceso a servicios sociales, la Agenda Zonal 1 enfatiza que la superación de los problemas existentes sería el resultado del cambio de la matriz productiva, la misma que descansa en la diversificación productiva, la agregación de valor, la sustitución selectiva de importaciones y el fomento de nuevas exportaciones (SENPLADES, 2015: 83). Estas orientaciones se materializarían, en el caso de Esmeraldas, en el mejoramiento de la infraestructura petrolera y de la refinería, el impulso a la minería, incluyendo la regularización de la minería artesanal; la expansión de la palma aceitera junto con el fortalecimiento de su regulación y control; el impulso de sistemas de producción combinados que posibiliten el aprovechamiento de algunas especies maderables de alta demanda y la diversificación de la producción para garantizar la soberanía alimentaria (Ibid.: 96), para lo cual se propone facilitar equipamiento productivo, construir sistemas de riego, mejorar los suelos, ampliar la cobertura de los sistemas y redes de comunicación, acceso vial hacia el oriente del país y con Colombia y el funcionamiento de la infraestructura portuaria y aeroportuaria y su conexión con los ejes viales. A través de estos cambios, la sustitución selectiva de importaciones se centraría en la industrialización de productos agroindustriales, el desarrollo de la biotecnología, biomedicina, bioservicios y de la industria farmacéutica, mientras que el fomento de exportaciones descansaría en el turismo y en el impulso de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) que potencien las oportunidades comerciales entre Ecuador y Colombia (Ibid.: 96-97).

Sobre el tratamiento concedido a la frontera, la Agenda no pasa de referencias puntuales como la cercanía geográfica de la región con el límite internacional o las oportunidades comerciales dada su cercanía con Colombia. La frontera como potencialidad o como factor para dinamizar ámbitos sociales, culturales o ambientales no está presente en los contenidos de la Agenda Zonal. Por el contrario, es la violencia que afecta a Colombia, el elemento sustantivo que utiliza la Agenda para explicar la problemática que atraviesa la región, según se desprende de la siguiente cita:

“Las poblaciones de la zona, en relación con su ubicación en área de frontera, han estado marcadas por dinámicas poblacionales diferenciadas del resto del país. Por un lado, representa el paso fronterizo más importante de las relaciones comerciales con Colombia, pero al mismo tiempo estas poblaciones han estado directamente expuestas a los efectos del problema social y político que vive este país vecino, desde hace más de 60 años. De estos efectos se desprenden una serie de actividades ilegales e irregulares, que amenazan las estructuras sociales,



económicas y organizacionales de las poblaciones de frontera” (SENPLADES, 2015: 79).

En suma, la Agenda reproduce una concepción según la que el desarrollo de la región se construiría, fundamentalmente, en función de la contribución de determinados rubros productivos a la economía nacional -básicamente productos exportables-, descuidando promover mercados locales y un desarrollo endógeno que permita corregir las asimetrías actuales. Dado el énfasis extractivo y economicista de este documento de planificación, ningún espacio se concede al análisis de los problemas que soportan cientos de familias ecuatorianas desplazadas de las áreas que tradicionalmente ocupaban, de la situación de la tenencia de la tierra que convierte a la frontera norte en una de las regiones con mayores conflictos al respecto,<sup>129</sup> o de las políticas u orientaciones para abordar una territorialidad marcada por la presencia de diversas culturas. Tampoco están presentes en la Agenda el señalamiento, menos aún la definición, de orientaciones para abordar otros impactos que soporta la Zona 1 y que han sido extensamente estudiados como la contaminación petrolera en la provincia de Sucumbíos,<sup>130</sup> o las afectaciones provocadas por la palma aceitera y la minería ilegal en Esmeraldas. Sin siquiera mencionarlo, además, el énfasis en el fomento de las exportaciones y en políticas de conectividad y equipamiento productivo, parecerían estar estrechamente vinculadas a las directrices de IIRSA-COSIPLAN, corroborando que el significado básico de la frontera es, para la Agenda Zonal 1, el de un horizonte orientado a incrementar los flujos comerciales, sin considerar, a tono con las disposiciones constitucionales, políticas especiales para las

---

<sup>129</sup> Sobre la propiedad de la tierra en Esmeraldas, el Subsecretario de la Región 1 de SENPLADES, se expresó en los siguientes términos en la entrevista mantenida: “No existen datos actualizados sobre la tenencia de la tierra. Actualmente estamos trabajando con proyecciones. En un futuro cercano vamos a tener un levantamiento catastral en cada una de las provincias y ciudades. Para ello se creó una Superintendencia de Ordenamiento Territorial que entre uno de sus objetivos tiene el levantamiento catastral de información. La información sobre predios es actualmente competencia de los gobiernos municipales y hay que decirlo también, dentro de una lógica institucional, hay pocas capacidades por parte de los técnicos municipales en la provincia de Esmeraldas y por lo tanto no podemos contar con una información precisa, real y actualizada. En este sentido, cualquier política pública es difícil de manejar si hay ausencia de datos.” (Entrevista virtual el 15.01.2018).

<sup>130</sup> La problemática alrededor del petróleo ha sido profusamente investigada desde distintos puntos de vista. Desde el clásico libro de Judith Kimerling (1993) que contribuyó a develar el desastre ocasionado por Texaco en el norte de la Amazonía ecuatoriana, pasando por investigaciones que analizan el impacto de la actividad petrolera en la realidad ecuatoriana, como el análisis que realiza Fándar Falconí (2004) en clave de economía ecológica, así como otros aportes que se concentran en efectos particulares generados por la explotación petrolera (ver por ejemplo la investigación de Chris Joshnick publicada en 1994 sobre los impactos en la salud derivados de las actividades de Texaco), hasta la vasta discusión en torno a la conflictividad petrolera y su vinculación con la gobernabilidad, un ámbito donde la contribución de Guillaume Fontaine es una de las más valiosas (2003, 2004, 2005, 2007, 2013). Pablo Ortiz, desde una mirada histórica y cultural (1995, 1997, 1999, 2010) o el más reciente estudio de Helga Serrano (2013) complementa el análisis de los pasivos derivados del petróleo desde una dimensión social.

poblaciones que habitan en la frontera, menos aún contemplar los planteamientos y propuestas emanadas desde los sectores sociales.

#### **4.6.1.2. *La visión de la frontera desde las provincias***

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tienen, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), competencias para planificar el desarrollo provincial, construir y mantener el sistema vial, manejar las cuencas y microcuencas, la gestión ambiental y los sistemas de riego; fomentar las actividades productivas, especialmente las agropecuarias y gestionar la cooperación internacional (Art.42). Cada provincia, por tanto, dispone de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que orientará su quehacer en un determinado número de años hacia el futuro.

Los tres planes de desarrollo de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos presentan distintas lecturas de la frontera. En Sucumbíos la frontera es una noción ausente. Las únicas referencias al respecto aluden a las mayores carencias de servicios públicos que soportan las comunidades ubicadas en la línea de frontera y la presencia de población migrante en su territorio, sin mencionar que esto represente fuente de conflictos (Gobierno Autónomo Provincial de Sucumbíos, 2015).

En Carchi, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial reconoce que la condición fronteriza constituye “una oportunidad para el desarrollo de un rol integrador de una zona más amplia, que incluya a las provincias vecinas y al Departamento de Nariño de la República de Colombia, donde se pueden establecer lazos políticos y territoriales de integración” (Prefectura del Carchi, 2015: 410) y subraya el papel de la Mancomunidad del Norte conformada en el 2011 como asociación de los gobiernos provinciales fronterizos.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas (PDOT) para el período 2015-2025, por su parte, incluye tanto en la visión del territorio, como en una de sus ocho líneas estratégicas, una referencia explícita a su condición fronteriza: “consolidar la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC) a fin de mejorar la calidad de vida de la población de los territorios fronterizos” (GADPEsmeraldas, 2015: 114) y fortalecer, para el año 2019, “los lazos de hermandad binacional aportando al desarrollo de los territorios de la frontera colombo-ecuatoriana” (Ibid.: 116).

Para la consecución de estas aspiraciones, el Plan plantea lo que denomina una estrategia de internacionalización del territorio definida como “el proceso mediante el cual los gobiernos locales participan más allá de las fronteras nacionales con una perspectiva de afuera hacia adentro, como reflejo de los desafíos que el escenario internacional impone al local o territorial” (Ibid: 130). En el marco de esta estrategia, el PDOT de Esmeraldas profundiza en las potencialidades que tendría la relación binacional con Colombia para lo que se propone la construcción de nuevos ejes viales que posibiliten conectar zonas potencialmente productivas con un presupuesto estimado de más de 75 millones de dólares (Ibid.: 163), y la puesta en marcha de una serie de líneas de acción que van desde la creación de una marca de la provincia, la realización de foros binacionales, hasta el fortalecimiento de cadenas de valor (cacao, coco, turismo), la captación de inversión internacional, de fondos de cooperación y la construcción de capacidades institucionales. Más allá de los temas económicos y comerciales, las únicas preocupaciones sociales incluidas en el Plan son “la ejecución de actividades recreativas, deportivas y culturales para el fortalecimiento de las identidades locales de las zonas de frontera”, para lo que se destinarían 620 mil dólares durante cuatro años (Ibid.: 165).

De forma similar a lo señalado con relación a la Agenda Zonal 1, el PDOT de Esmeraldas también señala que los problemas sociales más importantes responden a la actuación de grupos irregulares del vecino país que “han generado situaciones de desplazamientos humanos hacia Ecuador, contrabando, inseguridad y obstáculos en el desarrollo” (Ibid.: 152). Con una menor jerarquía, otros problemas identificados por el PDOT provincial son la ampliación desordenada de monocultivos, la tala indiscriminada, el aumento de la minería ilegal y el desplazamiento de poblaciones locales por la presencia en sus territorios de actividades extractivas.

Los contenidos de estos tres planes revelan tres visiones distintas sobre la frontera. Mientras Sucumbíos parecería centrarse en la promoción de un modelo más endógeno, volcado hacia su territorio, Carchi valora la importancia de la integración con las otras provincias fronterizas y con los territorios vecinos de Colombia. En Esmeraldas los contenidos del PDOT sugieren, en contraste, que sobresale un interés eminentemente económico y comercial en relación a la frontera. En ninguno de los casos se incluyen lineamientos que promuevan un trato preferencial a los territorios ubicados en la franja fronteriza de 40 km próximos a los límites territoriales, según lo estipula la Constitución (Art. 249).

Las puntuales y esporádicas referencias a la frontera contenidas en los PDOT provinciales contrastan con acciones que están en marcha y que revelan el interés de los gobiernos autónomos provinciales por enfrentar problemas comunes a partir de la articulación de esfuerzos y recursos. Es el caso de la Mancomunidad del Norte, que resalta el gobierno provincial del Carchi antes citado. Esta entidad regional está conformada por las prefecturas de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura y tiene por objeto “propiciar una gestión concertada para el desarrollo sustentable y sostenible de las provincias del norte del Ecuador” (<https://mancomunidadnorte.gob.ec>). En el 2014, la Mancomunidad suscribió un Convenio Interadministrativo y de Hermanamiento con los departamentos de Nariño y Putumayo “con el objetivo de establecer acciones conjuntas orientadas al fomento del desarrollo integral, social, económico, cultural y ambiental del territorio transfronterizo, comprometiéndose mutuamente a la construcción del Plan Binacional y la Agenda de Prioridades del Territorio de la Zona de Integración Fronteriza Colombo-Ecuatoriana, orientada a la formulación de planes, programas y proyectos que permitan cumplir el objetivo de hermanamiento” (Prefectura del Carchi, 2015: 26-27).

Tanto la conformación de esta asociación de gobiernos autónomos provinciales, como la disponibilidad del convenio de hermandad con departamentos fronterizos de Colombia representa en opinión de personal técnico de la Mancomunidad,

“la única posibilidad de que los acuerdos de paz y reducción de la violencia se sostengan es mediante el empoderamiento de los actores locales, los cuales tienen que construir una institucionalidad fuerte y profesionalizada. Las alianzas del más amplio espectro permitirán transitar hacia los fines comunes de protección, empoderamiento, paz y desarrollo. Esta estrategia debe permitir que los actores locales, desde un entendimiento binacional, cultiven sus propios mecanismos de construcción de acuerdos, gestión del conocimiento, creación de nuevas oportunidades y alternativas de desarrollo y promoción de entornos protectores” (Entrevista a la Coordinadora Técnica de la Mancomunidad del Norte, 22.08.2018).

#### ***4.6.1.3. La visión de la frontera desde los gobiernos autónomos descentralizados: municipios y parroquias***

Considerando que la Constitución diferencia competencias para cada uno de los niveles que conforman los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios (gobiernos cantonales) les corresponde la formulación de planes de ordenamiento territorial dentro de su jurisdicción, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón (incluyendo el manejo catastral); la vialidad urbana, el tránsito y transporte público dentro del territorio cantonal; la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado,

manejo de aguas residuales y de desechos sólidos; y la gestión de los equipamientos de salud, educación, y demás infraestructura física (Art. 264).

A los gobiernos parroquiales por su parte, les corresponde planificar el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial; planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos, los espacios públicos y la vialidad parroquial rural; incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; administrar los servicios públicos; promover la organización social; gestionar la cooperación internacional y vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos (Art. 267).

Administrativamente la división por cantones y parroquias de la frontera norte tiene una configuración básicamente rural (ver Tabla 9) y es más bien reciente pues en los últimos cincuenta años se habrían constituido más de los dos tercios de los cantones de la frontera norte y cerca de la mitad de ellos en las dos pasadas décadas (Ramón y Torres, 2004a: 62). Su corto tiempo de existencia y el reducido número de habitantes en algunos cantones y parroquias, determinan que en la mayoría de los casos exista una fuerte dependencia de los recursos provenientes del gobierno central. En el caso de Rioverde, por ejemplo, para el año 2014, con un presupuesto de más de 7 millones de dólares, solo el 3,28% representaban ingresos propios del municipio (SENPLADES, SENPLADES-GADM Rioverde, 2015: 216), mientras que según datos del 2008 en San Lorenzo el 78% del presupuesto municipal provenía de fondos fiscales (Dumas y Frank, 2008: 35). La mayor parte de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados se destina para gasto corriente, dejando un margen muy limitado para inversión y, según datos analizados por Ramón y Torres en el período 1996-2001, con una tendencia a que ésta última disminuya mientras crece el primero (2004a: 67-69). A manera de ejemplo cabe ilustrar que el presupuesto de la parroquia de Lagarto, con 5.674 habitantes, ascendía en 2014 a 261.200 dólares. De este monto, el 29% se destinó para inversión y el restante 71% para gasto corriente (Gobierno Parroquial de Lagarto, s/f.: 65).

Esta realidad obedece a que en muchos de los casos, los gobiernos locales representan una de las pocas opciones de trabajo estable para la población fronteriza y un mecanismo para sumar lealtades, como lo ilustra el siguiente testimonio:

“En el 2009-2010, se hicieron varias gestiones para tratar de ayudar a resolver los problemas del municipio (Eloy Alfaro). Se trataba de un municipio quebrado que tenía una plantilla de cerca de tres mil trabajadores. El alcalde que se eligió

para esa época intentó arreglar esa situación pero los trabajadores exigían su indemnización. Seguramente como reacción y amenaza, lanzaron una bomba en la terraza de su casa” (Entrevista a la Coordinadora de la Pastoral Social, 28.01.2018).

**Tabla 9. Cantones y parroquias de la frontera norte**

Provincia	Cantones	Juntas parroquiales urbanas	Juntas parroquiales rurales
Carchi	6	9	28
Esmeraldas	7	18	66
Sucumbíos	7	7	31
<b>Total</b>	20	34	125

Fuente: Prefectura del Carchi, 2015; GADPEsmeraldas, 2015 y GADPSucumbíos, 2015.  
Elaboración: Propia

A los problemas presupuestarios se suman otra serie de falencias de orden técnico, administrativo y de gestión como la escasa coordinación interna e interinstitucional, la realización de procesos de planificación desligados de la población, el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades lo que genera desconfianza e inconformismo, incoherencia entre la planificación y la ejecución, y la persistencia de un manejo centralista que poco espacio ha dado a los procesos de descentralización, según lo señalan los diagnósticos contenidos en los propios planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT).

Las apreciaciones contenidas en los PDOT coinciden con las conclusiones a las que llegaron Galo Ramón y Víctor Hugo Torres hace más de una década en su estudio sobre la institucionalidad local de la frontera norte al señalar que en la mayor parte de las unidades administrativas, las competencias asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados rebasan con creces sus capacidades técnicas y financieras, lo que se traduce en la desatención de las necesidades de la población. Cuando a inicios de la década del 2000 se publicó su libro *Frontera Norte ecuatoriana. Desafío de gobernabilidad*, ellos consideraban al “fortalecimiento institucional, el incremento de la autogestión local, la seguridad e integración territorial, la coordinación interinstitucional y el apoyo a la participación ciudadana (...) aspectos clave para mejorar la gobernabilidad local en la frontera norte” (Ramón y Torres, 2004a: 89). Esta realidad no se ha revertido ni siquiera con las disposiciones constitucionales que otorgaban una prioridad especial a las regiones fronterizas.

Y frente a la frontera, ¿cuál es la visión de los gobiernos autónomos descentralizados? Dada la magnitud de cantones y parroquias existentes en la región fronteriza del norte, la respuesta a la anterior interrogante se basa en la lectura de tres planes cantonales (San Lorenzo, Rioverde y Eloy Alfaro) y de 34 planes parroquiales pertenecientes a estos tres cantones que corresponden a los territorios más cercanos al límite internacional con Colombia. Del análisis de estos documentos se desprende que un denominador común dentro de los PDOT cantonales y parroquiales es que la realidad fronteriza pasa casi desapercibida. Sólo cinco PDOT parroquiales hacen mención a la frontera (Pampanal de Bolívar, Santa Lucía de las Peñas, Ancón de Sardinas, Candelilla y Montalvo) por su cercanía geográfica con el límite internacional, por las afectaciones recibidas durante las fumigaciones que realizó Colombia para erradicar los cultivos de coca, como oportunidad para el comercio o como “puerta de entrada a la integración binacional del turismo costero con Colombia” (GADAncón de Sardinas, 2015: 77). La frontera, como condición material o como realidad simbólica no aparece reflejada en sus contenidos ni como una oportunidad ni como una amenaza. En este contexto, tampoco hay referencia alguna en los planes parroquiales a los artículos constitucionales que otorgan un trato preferencial a las poblaciones asentadas en la región fronteriza, que podrían ser entendidos como una oportunidad para la exigibilidad de derechos. El vacío de contenidos respecto a la frontera y de las regiones fronterizas confirmarían lo señalado por Newman y Paasi (1998), al afirmar que las fronteras están más presentes para quienes viven lejos de las áreas fronterizas que para las poblaciones ahí asentadas. Para estas últimas, las fronteras son parte de su vida cotidiana.

Si por un lado existe un vacío en torno a la frontera, llama en cambio la atención sobre la preeminencia de una perspectiva urbana a partir de la cual se juzga la conformación que debería tener el territorio, sus falencias en términos de equipamiento en comparación con los entornos urbanos y una suerte de desvalorización de otras formas de vida. Las siguientes citas ilustran esta afirmación:

“Las comunidades Chachi son las que mayor desorden presentan en los centros poblados, en relación a las comunidades afrodescendientes. Además, el 100% del territorio de los centros poblados no tiene una distribución adecuada de los espacios físicos, que permitan proveerles una buena imagen; en su interior no cuentan con áreas para la construcción de parques infantiles y otros espacios de recreación para la población, pese que disponen de tierra en los perímetros de los centros poblados” (GADAtahualpa, s.f: 79).

“El 88,64% del territorio de los centros poblados, no tiene una distribución adecuada de los espacios físicos, que permitan proveerles una buena imagen;

además en su interior no cuentan con áreas para la construcción de parques infantiles y otros espacios de recreación para la población, pese que disponen de tierra en los perímetros de los centros poblados” (GADTelembí, 2015: 108).

“Los asentamientos humanos del territorio (...) experimentan la necesidad de contar con infraestructura moderna, avances tecnológicos y equipos de punta en armonía a los objetivos del Plan del Buen Vivir” (GADMaldonado, 2015: 66).

La lectura de la realidad a través de una concepción urbana que valora determinados estilos de vida y de organización social cruza igualmente la formulación y aplicación de políticas públicas como el reemplazo de cocinas de gas por cocinas de inducción en comunidades donde el suministro de energía sufre continuas interrupciones o es inexistente (Borja Consultores y GADRocafuerte, 2015).

A partir de la escasa valoración o el desconocimiento sobre el mundo rural es posible también entender que en el contenido de los planes se desconozca la existencia de la propiedad comunal, pese a la presencia de comunas de antigua data, o que se considere a este tipo de propiedad como un problema y como una amenaza que alienta el tráfico de tierras. De ahí que no sea un caso aislado encontrar en los planes afirmaciones de la siguiente naturaleza: “De 114.729 hectáreas de tierra del cantón Eloy Alfaro, la mayoría son tierras que no se encuentran legalizadas y permanecen bajo régimen de propiedad colectiva (comunidades)” (GAPBorbón, 2015: 57); “la tierra ha sido el origen de conflictos y desencuentros entre las comunidades que interactúan en la zona, permaneciendo bajo régimen de propiedad colectivo (comunidades), lo que dificulta la obtención de beneficios, como créditos y asistencia técnica para lograr su óptima utilización” (GADMaldonado, 2015: 57).

#### **4.6.1.4. Otros instrumentos de planificación y ordenamiento territorial con implicaciones sobre la frontera norte**

Otro de los instrumentos de ordenamiento del territorio que tiene igualmente consecuencias sobre la organización social es la declaratoria de áreas naturales protegidas que aún en la actualidad se aprecian como la única vía posible para conservar bosques y ecosistemas relevantes. En la frontera norte ecuatoriana, el 30% de su superficie está bajo la categoría de Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas (Ver Mapa 6)<sup>131</sup> y aunque los

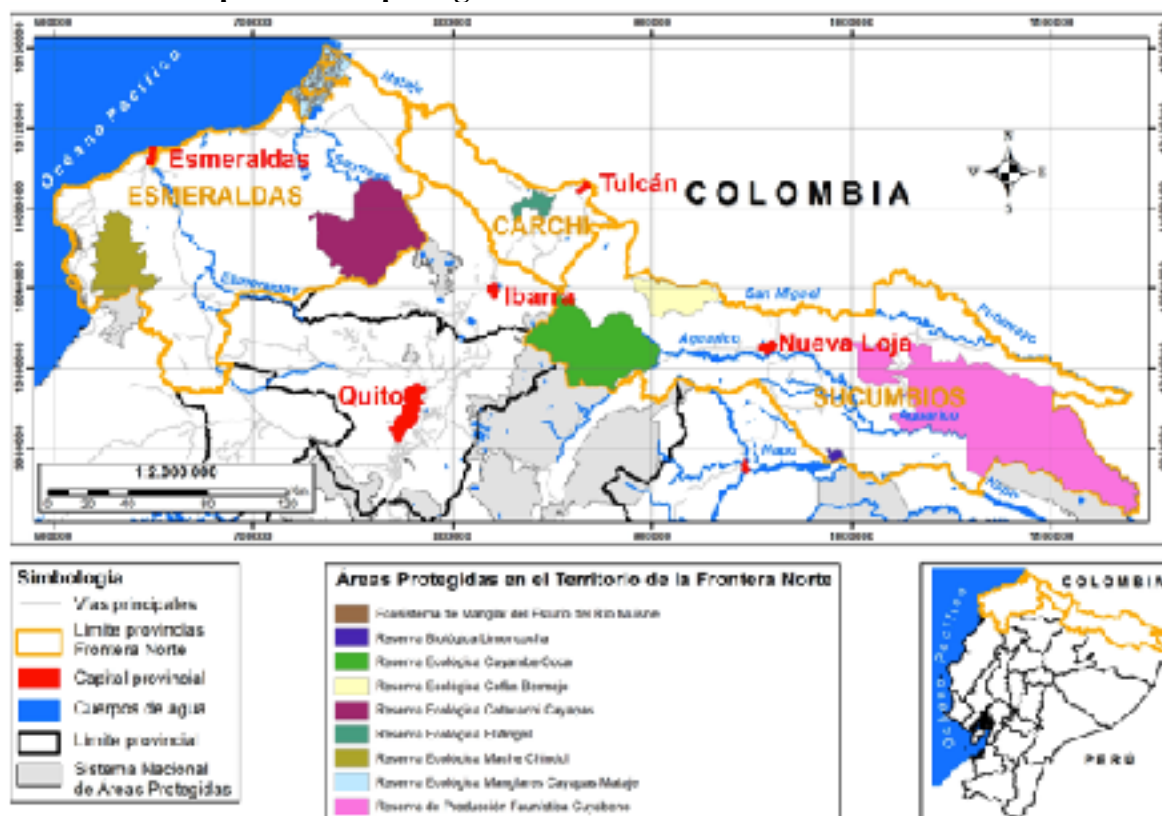
---

<sup>131</sup> En el área del Pacífico se encuentran la Reserva Ecológica Manglares-Cayapas-Mataje con 49.350 hectáreas pertenecientes a la zona de vida bosque húmedo tropical y manglares, la Reserva Ecológica Mache-Chindul que cubre una extensión de 119.172 hectáreas, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas con una extensión de 243.638 hectáreas, cuatro refugios de vida silvestre, El Pambilar, La Chiquita, el Estuario del Río Muisne y el Estuario del Río Esmeraldas que totalizan 7.348 hectáreas y la Reserva Marina Galera San Francisco que abarca una superficie de 54.604 hectáreas. En las estribaciones occidentales de



finés de conservación que soportan la creación de estas áreas no necesariamente concuerdan con la reivindicación de los pueblos indios sobre el derecho al uso, usufructo y administración de sus territorios, en varios casos existe sobreposición entre territorios de pueblos originarios y parques o reservas naturales, lo que no en pocas ocasiones ha sido motivo de conflicto.

### Mapa 6. Áreas protegidas de la frontera norte ecuatoriana



Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, <http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec>, acceso el 02.10.2017.  
Elaboración: Propia

En el contexto actual, existe el interés por potenciar las áreas protegidas que se consideran son “barreras naturales que limitan el accionar de la economía criminal” (Gobierno de la República del Ecuador, 2018: 34), algo cuya efectividad es dudosa en un escenario en el que las áreas naturales protegidas “cuentan con el 48% del total de recursos necesarios para alcanzar su consolidación” (MAE, 2015: 21)” y no existen

los Andes y en el páramo están la Reserva Ecológica El Ángel (15.715 hectáreas) y el Parque Nacional Cayambe-Coca con una superficie de 403.103 hectáreas. En esta zona, se extiende la Reserva Forestal Awá (101.000 hectáreas) que tiene un estatuto de manejo distinto al de las áreas de conservación. Las áreas protegidas de la Amazonía son la Reserva Faunística Cuyabeno, la más extensa del país con más de 603.380 hectáreas, la Reserva Biológica de Limoncocha (4.613 hectáreas) y la Reserva Cofán-Bermejo (55.451 hectáreas). Dentro de la Reserva Cuyabeno está la Zona Intangible de Conservación Cuyabeno-Imuya con una superficie de 435.500 hectáreas ([www.ambiente.gob.ec](http://www.ambiente.gob.ec)).

avances significativos en la concreción de modelos de manejo que incorporen la participación de poblaciones locales,<sup>132</sup> abriendo el camino para que diversas ONG, a menudo internacionales, asuman la administración y gestión de estas áreas, lo que finalmente se traduce en la delegación de las funciones del Estado en manos privadas (Serje, 2017).

Bajo consideraciones ambientales y de conservación, la Constitución contempla la creación de un régimen especial para la Amazonía (Art. 250) que descansaría sobre una planificación específica para la región y una legislación particular, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica vigente desde el 10 de mayo de 2018, y que en el caso de la frontera norte tendría repercusiones concretas sobre la provincia de Sucumbíos. Esta Ley incluye políticas de acción afirmativa para la población y la creación de fondos para impulsar el desarrollo sostenible de la región que se alimentarían de un porcentaje del precio de venta de cada barril de petróleo, de las regalías mineras y de las utilidades de las empresas hidrocarburíferas y eléctricas. Una de sus principales falencias radica, sin embargo, en la falta de claridad respecto al instrumento de planificación rector para la Amazonía, tomando en cuenta la disponibilidad de herramientas para planificar y ordenar los territorios en los ámbitos nacional, zonal, provincial, cantonal y parroquial.

Adicionalmente cabe anotar que la normativa vigente da paso a que pueblos y nacionalidades definan planes de vida dentro de sus territorios. Los planes de vida de los pueblos indios asumen al territorio como el espacio de gobierno local, incorporando una visión de autonomía a una escala micro. Proponen por lo general la gestión de la territorialidad desde su propia cosmovisión y la conducción política por parte de sus propias estructuras organizativas. La presencia en la frontera norte de nueve pueblos y nacionalidades supone la disponibilidad de al menos el mismo número de planes de vida que con seguridad implican contradicciones y tensiones con la orientación de las regulaciones estatales.

#### **4.6.2. Cinco décadas de integración fronteriza**

Aunque el discurso acerca de la integración fronteriza comenzara a tomar cuerpo desde el decenio de los 70, a raíz del despertar de las políticas de integración donde el Acuerdo

---

<sup>132</sup> Comunicación personal con el Subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio de Ambiente del Ecuador (12.01.2019).

de Cartagena (1969) desempeñó un papel sustantivo al reconocer la importancia de una acción común frente a las zonas de frontera, Socorro Ramírez sostiene que en los hechos, los esfuerzos integracionistas no prosperaron durante un largo período:

“(…) durante los primeros veinte años esos buenos propósitos permanecieron en el papel. Para que la situación comenzara tímidamente a cambiar fue necesario que desde la frontera y desde experiencias nacionales o binacionales surgieran presiones e iniciativas concretas y en la última década aumentara la presión externa” (Ramírez, 2005: 8).

El contraste entre las declaraciones favorables a la integración regional y al desarrollo fronterizo y las débiles concreciones revela una baja comprensión de los gobiernos sobre las áreas de frontera, en cuyas miras únicamente cabía emular un modelo de desarrollo concebido y diseñado desde el centro y para beneficio de sectores vinculados con la industria o el comercio, poco consecuente con la realidad de las poblaciones asentadas en la frontera. Habrían sido más bien los gobiernos locales de las áreas fronterizas los que empujaron, entre 1980 y 1990, una integración “desde abajo” que rápidamente se desvirtuó al ser asumida por intereses económicos vinculados al comercio (Ibid.) al tenor del Protocolo de Quito de 1987, el manifiesto presidencial andino de Cartagena y la Declaración de Galápagos suscritos en 1989; la Declaración de la Paz de 1990 y la disponibilidad de una “Programación de actividades de desarrollo e integración fronteriza entre los países de la región andina” elaborada con el soporte técnico y financiero del BID entre 1990 y 1991.

Sin claridad sobre qué porciones de cada uno de los territorios serían consideradas para avanzar en la constitución de zonas de integración fronteriza, durante los años setenta y ochenta la intervención sobre las fronteras habría estado circunscrita a la construcción de carreteras para incorporar las zonas de frontera a la economía nacional, a puntuales acuerdos para facilitar el libre tránsito de personas y mercancías y a la identificación de proyectos de industrialización que permitirían apuntalar el desarrollo de la región.

Hacia inicios de la década de los años 90, las relaciones entre Ecuador y Colombia sugerían condiciones particularmente optimistas para concretar las aspiraciones de integración fronteriza promovidas a nivel regional debido a que, a diferencia de la imagen construida sobre el Perú, Colombia era apreciada como el vecino confiable, el país hermano, en gran parte por la pertenencia común a la Gran Colombia. Esta imagen positiva era a su vez compartida por Colombia respecto del Ecuador. Fruto de este proceso, en 1991, luego de la firma del denominado Convenio de Esmeraldas, Ecuador y

Colombia se vieron obligados a requerir definiciones por parte del Parlamento Andino para tornar operativa la primera zona de integración fronteriza sudamericana que involucraba las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo y Sucumbíos por el lado ecuatoriano y los departamentos de Nariño y Putumayo por parte de Colombia.

Tres años más tarde, mediante un acuerdo de ampliación, se incorporó el departamento del Cauca y en el año 1997 los departamentos de Cali y Buenaventura pertenecientes a Colombia, y, dentro del territorio ecuatoriano, la ciudad de Quito y las provincias de Orellana y Manabí, incluyendo de manera expresa el aeropuerto de Manta ubicado en esta última provincia (Tobar Subía, 2010). Esta primera ZIF no prosperó, no solo por su desmedida cobertura, sino porque antes que abordar la problemática fronteriza, en su definición primaron intereses políticos más cercanos a la consecución de las metas de crecimiento económico de cada uno de los países, que a los objetivos de integración.

“Su ampliación excesiva la llevó a abarcar un territorio tan grande –la mitad del Ecuador y un tercio de Colombia- que dificultó su carácter operativo. Desdibujó, además, el objetivo inicial de promover desarrollo e integración fronteriza dado que el interés estuvo centrado solo en la libre circulación de bienes, personas y vehículos” (Ramírez, 2005: 8).

Más allá de los problemas operativos, este primer intento fallido se explica, siguiendo a Ramírez (2007), porque para los dos países la realidad fronteriza constituía un asunto más bien burocrático, sin agenda definida y casi exclusivamente manejada por los gobiernos centrales, a lo que se suman factores internos que dispersaron la atención sobre la Zona de Integración Fronteriza –ZIF- como la inestabilidad política en Ecuador, la agudización del conflicto colombiano y el inicio del Plan Colombia.

En medio de los fracasos en la constitución de zonas de integración fronteriza, hacia finales de la década de los noventa del siglo pasado, siguió manteniéndose el énfasis discursivo en torno a su importancia. Así, en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Consejo de Ministros en 1997 adoptó la Decisión 399 sobre el libre tránsito del transporte internacional de mercancías por carretera; el Consejo de Presidentes resolvió en 1998 crear capacidades binacionales para el desarrollo de las fronteras y acordó en 1999 generar una agenda social y la política comunitaria de integración y desarrollo fronterizo que fue definida ese mismo año por el Consejo de Cancilleres a través de la Decisión 459 (Ramírez, 2005: 9 y 11).

Al inaugurarse el nuevo siglo, estos antecedentes desembocaron en la propuesta de creación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) mediante la promulgación de la Decisión 501 en el 2001 que comprometió a los países a crear, en el plazo de un año, al menos una ZIF en cada una de las fronteras comunes. Las ZIF eran entendidas como

“los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la Comunidad Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las características de cada uno de ellos” (Artículo 1) (CAN, 2001).

La Decisión 501 se reforzó con tres decisiones consecutivas: la Decisión 502 referida a la creación de los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF), la Decisión 503 que establecía que la población de cualquier país andino pudiera ingresar como turista a cualquier otro país miembro de la CAN, sin el requisito de visa; y, la Decisión 504 que creaba el pasaporte andino, el mismo que debería haber entrado en vigencia a partir del 1 de enero de 2006. Las ZIF podrían ser constituidas tanto por los países limítrofes, cuanto por la invitación a un tercer país para que se integre a este espacio.

Bajo el impulso de esta nueva normativa, sería una década más tarde del primer intento que no prosperó, cuando las Cancillerías del Ecuador y de Colombia re-definieran en el año 2002 una nueva ZIF conformada por tres áreas estratégicas a partir de similitudes climáticas, geográficas, económicas, sociales y culturales: el área del Pacífico, la Andina y la Amazónica. Esta ZIF abarcaba una superficie de 79.058 km<sup>2</sup>, 51,5% dentro de territorio ecuatoriano y 48,5% en Colombia, comprometiendo las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos y los departamentos de Nariño y Putumayo de Colombia, y un total de 59 municipios, 38 del lado colombiano y 21 del de Ecuador. La delimitación de estas tres regiones estratégicas implicó un cambio cualitativo respecto al primer intento de establecimiento de la ZIF. La nueva delimitación geográfica de la ZIF estuvo acompañada, tres años más tarde, por un Plan Binacional de Desarrollo para la Zona de Integración Fronteriza cuyo seguimiento recaía en la Comisión de Vecindad Ecuatoriano-Colombiana, concebida como un instrumento bilateral facilitador y garante de la bi-nacionalidad.

En el 2008 los relativos avances en los acuerdos de integración se detuvieron por el ataque colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano (Angostura,

1 de marzo de 2008), al punto que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los dos países. Éstas se restablecieron casi tres años después (SENPLADES-DNP/PFP, 2014).

Fruto del acercamiento diplomático, el 22 de julio del 2011 mediante Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, se reestructuró la Comisión de Vecindad Ecuatoriana-Colombiana como mecanismo bilateral de carácter político para promover la integración, cooperación y desarrollo binacional, que desde entonces pasaría a llamarse Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriana-Colombiana (COVIEC), y en el 2012, a través de la Declaración de Tulcán, los presidentes de Ecuador y Colombia acordaron el diseño del *Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia para el período 2014-2022*. En el 2018 los organismos de planificación de ambos países decidieron actualizar este plan con el propósito de articular sus contenidos con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y los escenarios de la Agenda Global para el Desarrollo Pos 2015 (DNP-SENPLADES, 2018). En ambas versiones, la visión de desarrollo para la ZIFEC es que al 2022, la región “camina hacia un territorio de paz y reconciliación, modelo de integración, interconexión y desarrollo territorial. Contará con una planificación binacional sólida que permita el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, la erradicación de la pobreza extrema y el fomento productivo, con clara presencia del Estado y la institucionalidad pública” (Ibid.: 23).

En la consecución de esta visión, las dos versiones del plan binacional contemplan cinco ejes o estrategias: social y cultural, seguridad y defensa, desarrollo económico y productivo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad ambiental. Una revisión detallada de los contenidos elaborados indica que solo los referidos a seguridad y defensa y a infraestructura y conectividad proponen políticas y metas que toman en cuenta las particularidades de la región fronteriza, mientras que los restantes ejes podrían aplicarse a cualquier contexto. En el primer caso se reconoce no solo la actuación de delincuencia transfronteriza, sino la “corresponsabilidad binacional para la protección y garantía de derechos de la población en situación de refugio y desplazamiento forzoso” (Ibid.: 44). En el eje de infraestructura y conectividad se priorizan la energía, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el transporte. En estos ámbitos el telón de fondo es apuntalar el crecimiento industrial de los dos países y la adscripción a la Red para la Conectividad Suramericana para la Integración en el marco de UNASUR, tomando como punto de partida una red vial estatal que para el caso de la zona de integración ecuatoriana está conformada por 1.389 km de vías primarias y secundarias (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 76).

Los estudios realizados sobre las zonas de integración han demostrado que su finalidad es básicamente de carácter económico comercial, aprovechando las ventajas comparativas de los Estados, a fin de convertir a las zonas fronterizas en ámbitos territoriales dinámicos regidos por un mercado común (Anderson y O'Dowd, 1999). Los temas sociales, el respeto a las culturas ancestrales, o los asuntos ambientales se han convertido en objetivos secundarios que no logran trascender de declaraciones de buenos principios a ejecuciones concretas que se traduzcan en políticas y recursos. De ahí que en gran medida éstas no hayan pasado de ser una delimitación de carácter formal sin logros concretos en la construcción de regiones transfronterizas.

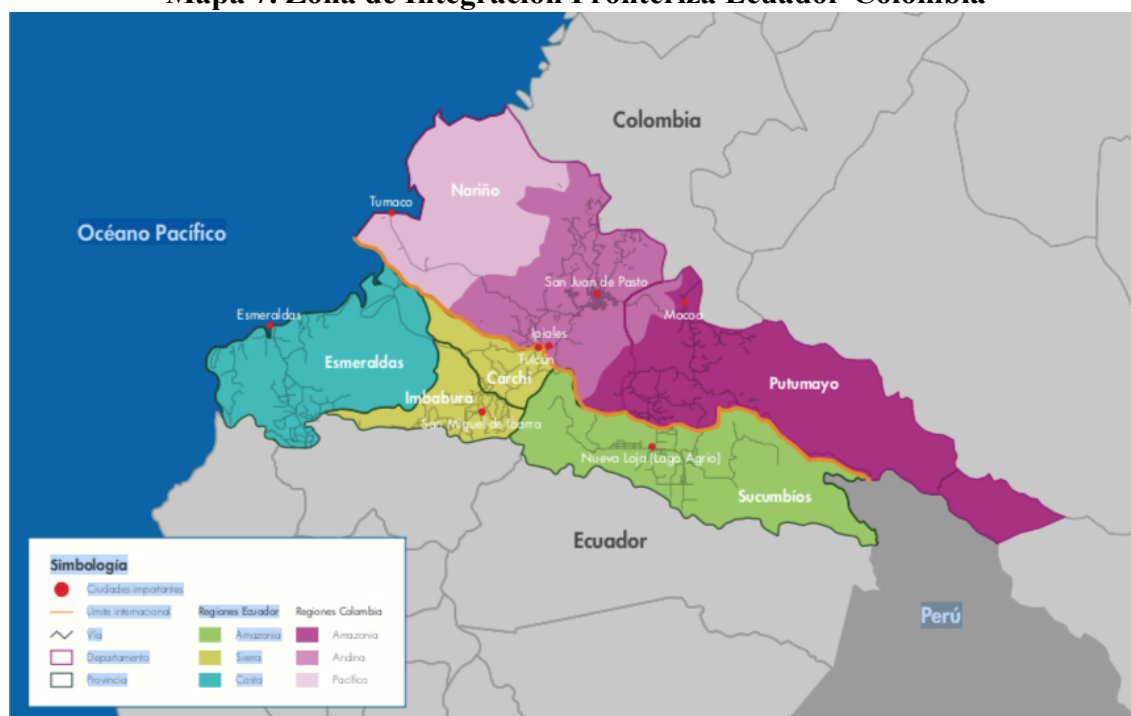
El énfasis en concebir la frontera como un sitio de paso de productos elaborados en otras áreas al interior de los países podría agudizarse con la puesta en marcha del IIRSA. Dentro de esta iniciativa regional, la frontera norte del Ecuador representa un territorio estratégico, pues sería el paso de diversos ejes de conectividad, según lo confirma la información presentada en la sección 2.2 de esta tesis, IIRSA y la renovada importancia de las fronteras.

Bajo el criterio de que la inserción de los bienes naturales de un territorio al mercado generaría ingresos en beneficio de las poblaciones asentadas en esta región, el Plan insiste en que “Las condiciones socioeconómicas presentes en algunas zonas fronterizas son reflejo de una situación histórica de abandono y marginación. (...) Por este motivo, impulsar la conectividad de los dos países permitirá potenciar y orientar los flujos de esos factores hacia las necesidades de desarrollo de las zonas fronterizas” (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 73). Bajo este entendimiento el Plan omite que en la larga historia de la consecución del desarrollo binacional se han registrado más fracasos que éxitos al impulsar actividades económicas que han operado a manera de enclaves, la mayor de las veces operados por empresas transnacionales, públicas o mixtas cuya función fundamental ha sido la atención de la demanda externa, descuidando el apoyo a procesos productivos asentados en lo local.

Una observación final en relación a la planificación binacional es el rediseño de la cobertura de la ahora llamada Zona de Integración Fronteriza Ecuatoriana-Colombiana (ZIFEC) cuyo territorio se expandió en comparación con las definiciones alcanzadas en el 2002 (ver Mapa 7). La actual ZIFEC tiene un territorio de 100.055 km<sup>2</sup> integrado, en el caso del Ecuador, por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, que se sobrepone con la Zona 1 de planificación del Ecuador, con 42.259 km<sup>2</sup> de superficie y, en el caso de Colombia, por los departamentos de Nariño y Putumayo, con

una extensión de 57.990 km<sup>2</sup>. Para el 2013, la población de la ZIFEC ascendía a 3.287.374 habitantes, 2.014.042 en Colombia y 1.273.332 en Ecuador, lo que representaba el 61,27% y el 38,73%, respectivamente, del total de la población de la ZIFEC. En Colombia, quienes habitan la ZIFEC constituyen el 4,3% del total de la población de dicho país, mientras que en Ecuador es el 8,7% (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 22 y 23).

**Mapa 7. Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia**



Tomado de: Versión 2.0. Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia, 2018.

En la formulación del *Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia* como de los anteriores, la población ha reclamado que su construcción se ha hecho al margen de los actores locales de la frontera. De hecho, en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, fue posible evidenciar que con excepción de altos cargos públicos y contados dirigentes, las personas entrevistadas no conocían de la existencia de un plan binacional. Esto explica que la provincia de Carchi en Ecuador, junto con el departamento de Nariño en Colombia, hayan decidido formular su propio plan de desarrollo binacional (Oetzel, 2017).

Dentro de la región y específicamente en relación a la ZIF entre Ecuador y Colombia, varios estudios han establecido un balance de lo que ha representado el proceso de integración a lo largo del período analizado en esta sección: desde 1970 hasta la actualidad. Al respecto no existe una sola opinión. Ricardo Montenegro, anterior asesor



de la CAN y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, advirtió que “esa frontera se sigue viendo como un todo, como un área en la que hay que dar soluciones homogéneas a problemas que tienen diferencias sustanciales y marcadas” (Ramírez, 2007: 38). Otros análisis que dan cuenta del limitado impacto de las iniciativas de integración binacional y específicamente de la ZIFEC señalan que hasta la primera década de este siglo, su bajo dinamismo era atribuible a la no ejecución de los convenios de infraestructura vial, energética y de producción; a los problemas de seguridad en la frontera, agravados por el conflicto colombiano y la inestabilidad política que vivió el Ecuador hasta el 2007 (Oliveros, 2005, Tobar Subía, 2010; Gómez, 2013), combinando, por tanto, el argumento recurrente de ausencia de la presencia de los Estados en la frontera junto con la ocurrencia de externalidades o de procesos políticos cuyo origen no está vinculado a la condición fronteriza como las diversas manifestaciones del conflicto colombiano o los problemas políticos por los que atravesó el Ecuador.

Hernán Moreano, investigador de la FLACSO, considera por su parte, “que los gobiernos de Colombia y Ecuador han visto a la frontera como una zona común, no existe una legislación similar que permita el desarrollo de proyectos productivos” (Jaramillo comp., 2009: 43), para concluir más adelante “que los gobiernos toman en cuenta sus fronteras solo cuando se generan problemas de seguridad o dificultades comerciales” (Ibid.: 44), confirmando la persistencia de una visión centralista que no ha logrado vincularse con las necesidades de las poblaciones fronterizas.

Explicaciones como estas y otras similares, han justificado que cada cierto tiempo, Ecuador y Colombia renueven sus discursos en torno a la frontera, proponiendo nuevos arreglos institucionales, mayor inversión o la reformulación de los marcos normativos, como se discutirá en las siguientes páginas.

#### **4.6.3. Nuevos enfoques, viejas prácticas: Plan Ecuador**

La centralidad otorgada a los efectos provenientes del conflicto colombiano pareció modificar el desentendimiento histórico del Estado ecuatoriano frente a la frontera norte, a la vez que cumplían el propósito de endosar a la crisis social y militar de Colombia las carencias y dificultades de la realidad fronteriza ecuatoriana. La crisis político-militar de Colombia se utilizó en gran medida para culpar a “otros” sobre los problemas históricos que soportaba la región.

El inicio del Plan Colombia marcó una suerte de punto de inflexión en la imagen construida desde Ecuador sobre el país vecino. Los estereotipos negativos, centrados en

el Perú hasta los noventa, se trasladaron a la frontera norte del Ecuador. La frontera delimitada, sin conflictos, de pronto se tornó central en todas las representaciones. El imaginario social, alimentado por narrativas fabricadas en los medios de comunicación y desde el Estado,<sup>133</sup> convirtió a la frontera norte en un lugar violento e inseguro, en un área vetada que debía ser cerrada, a riesgo de que los males que habían tomado el territorio del lado colombiano se despararraran y contagiaran al Ecuador, sobre todo a su región fronteriza. La población colombiana, antes considerada como hermana del Ecuador, fue estereotipada como sospechosa hasta ser considerada una población violenta, de la que hay que desconfiar, a menudo involucrada en el narcotráfico, una representación que no solo se posicionó en Ecuador sino que circuló a una escala muy amplia, en la región e incluso más allá.

“La generación de estigmas y la circulación de los rasgos estigmatizadores en la zona de frontera en donde buena parte de la población es colombiana, tiene parientes colombianos o mantiene relaciones económicas, sociales o culturales con los colombianos, fue el resultado del descubrimiento de la frontera. A partir de ese instante ya no fue recomendable estar cerca de la frontera, juntarse con o ser colombiano. Las relaciones de frontera adquirieron un tinte negativo y fueron deslegitimadas” (Espinosa, 2008: 79-80).

En concordancia con lo sostenido por Robbins (2008), el Estado es en todos los aspectos y campos de operaciones, un ávido productor de narrativas y es con gran probabilidad el actor que tiene la mayor capacidad para generar o borrar relatos en temas territoriales, usualmente asociados a la soberanía estatal. Pero no solo esto. Al endosar al conflicto colombiano y al inicio del Plan Colombia los “males” que atravesaba la frontera norte, Ecuador se vio en la necesidad de generar un discurso que marcara distancias frente a lo que acontecía en Colombia.

Para tornar operativa una mayor participación del Estado en la frontera, se dio impulso en el año 2000 a la conformación de la Unidad Ejecutora de Desarrollo del Norte -UDENOR- (Decreto Ejecutivo 640/08-08/2000) con el objetivo de ejecutar el Plan de Desarrollo Fronterizo para las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Napo y Orellana, incidir en el desarrollo de la región y promover alternativas que desestimulen

---

<sup>133</sup> Gabriela Ruiz, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO señala que la revisión de 15 años de prensa ecuatoriana en temas relacionados con mercados legales y fronteras, muestra que 8 de cada 10 noticias reportan contenidos violentos. “La tendencia es construir notas de prensa como conjuntos de esquemas morales donde se obliga al lector a tomar partido entre la respuesta del Estado y el accionar criminal. (...) Capturas, decomisos e incautaciones se cuantifican para generar credibilidad. La representación mediática de la violencia tiene una última trampa y es la atribución de conductas disfuncionales a agentes externos” (Fiscalía General del Estado y FLACSO, 2015: 16).

la vinculación de la población con actividades ilegales. UDENOR se levantó con el apoyo de la cooperación de Estados Unidos a través de la Iniciativa Regional Andina.

Con el gobierno de Rafael Correa, UDENOR fue suplantada por una nueva institucionalidad que se consideraba podría superar con creces el trabajo desarrollado a la luz de la cooperación bilateral de Estados Unidos. Es así como en abril del 2007 Plan Ecuador se presentó al país y a la comunidad internacional como una propuesta para enfrentar los problemas de la frontera norte desde una perspectiva diferente. En su lanzamiento, en la provincia de Sucumbíos, el Presidente Correa señaló:

“Para hacer frente a la locura e irracionalidad del Plan Colombia, el gobierno ecuatoriano está empeñado en desarrollar el sector productivo de la zona fronteriza de este país en el marco del denominado Plan Ecuador. A las balas, a la represión, a la locura, a la irracionalidad, al Plan Colombia, el Plan Ecuador le va a responder con desarrollo, con justicia, con bienestar, con producción, con empleo, con educación, con salud, y así construiremos una patria que debe ser sobre todo de los más pobres y aquellos que como ustedes viven en zona de frontera” (El Universo, 2008).

En dicha oportunidad señaló, además, que su gobierno “busca cambiar toda esa equivocada visión del desarrollo nacional para que la zona fronteriza tenga mejores servicios y a través de esa forma tengamos la mejor protección (límitrofe)” y que la nueva iniciativa, antes que centrarse en los Ministerios de Defensa o Relaciones Exteriores, se afianzaría en los del área social (La Nación, 2007).

A través del Decreto Ejecutivo 565 de agosto del 2007 Plan Ecuador se constituyó en una Secretaría Técnica adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)<sup>134</sup> y en febrero del 2008 mediante otro decreto (Decreto Ejecutivo 906) se decidió su adscripción al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (MICSIE), con competencias para planificar, coordinar, priorizar y ejecutar los planes, programas y proyectos en la frontera norte, para lo cual tendría autonomía administrativa y financiera. Para el 2013, sin mayor resonancia, se decidió nuevamente que Plan Ecuador retorne, como una dependencia de poca importancia, a la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Decreto Ejecutivo No. 7 del 30 de mayo del 2013). En SENPLADES, Plan Ecuador se transformó en una Dirección de Asuntos Binacionales y en una Gerencia de Plan Ecuador.

---

<sup>134</sup> Llama la atención el símil de UDENOR y posteriormente de Plan Ecuador con el Programa de Promoción del Desarrollo de la Franja Fronteriza adoptado por Brasil en el 2009. El programa “constituye una iniciativa inédita de locación de recursos para el desarrollo de ese territorio, considerado como una unidad de inversión” (Alvarez y Salla, 2013: 24).

De acuerdo a sus documentos constitutivos, la intervención de Plan Ecuador giraría alrededor de tres ejes: “i) consolidar la seguridad y una cultura de paz centradas en el ser humano, la satisfacción de sus necesidades y la potenciación de sus capacidades y libertades; ii) mantener una política de relaciones internacionales equitativa y solidaria; y iii) afirmar una política de defensa basada en la protección de la población, de los recursos naturales, del patrimonio nacional y el control efectivo de su territorio” (Secretaría Técnica de Plan Ecuador, 2008).

En términos geográficos, Plan Ecuador debía abarcar las provincias de Esmeraldas, Carchi, Ibarra, Sucumbíos y Orellana con un total de 31 cantones y una población de más de un millón de habitantes, en un esfuerzo de al menos diez años de duración. En un inicio, sin embargo, precisaba concentrar su atención sobre la población vulnerable asentada en los cantones fronterizos de San Lorenzo, Tulcán, Cascales, Sucumbíos, Lago Agrio y Putumayo, consideradas como las áreas más afectadas. Finalmente se circunscribió a la franja de 40 km desde el límite fronterizo en concordancia con lo estipulado en el artículo 249 de la Constitución del Ecuador que concede una atención preferencial a las jurisdicciones localizadas en este espacio.

Para cubrir la atención de la población y el desarrollo de los programas previstos por Plan Ecuador, se hizo público el compromiso gubernamental para financiar su puesta en marcha a partir de un presupuesto inicial de 135 millones de dólares.<sup>135</sup> En la práctica, tales recursos no se canalizaron a Plan Ecuador, entidad que careció de los fondos económicos suficientes para hacer frente a la compleja realidad social, institucional, ambiental y de seguridad de la frontera norte. Los recursos directamente administrados por Plan Ecuador fueron en el mejor de los casos simbólicos. En el período 2007-2010, el presupuesto asignado a Plan Ecuador no llegó ni a los 50 millones de dólares. En el 2011, Plan Ecuador administró aproximadamente 8 millones de dólares y cerca de 14 millones de dólares en 2012. Para cubrir el limitado presupuesto entregado a una iniciativa aparentemente emblemática, la inversión realizada por otras instituciones públicas en la frontera norte fue contabilizada como ejecución de Plan Ecuador, mientras se entregaba la responsabilidad de ejecución directa de acciones a cargo del presupuesto propio de la institución a las fuerzas armadas.

Con poca claridad sobre su rol, competencias y funciones, carente de las capacidades y recursos económicos para incidir en la definición y ejecución de políticas

---

<sup>135</sup> Información disponible en [http://www.nacion.com/mundo/Gobierno-Correa-presento-Plan-Ecuador\\_0\\_899310121.html](http://www.nacion.com/mundo/Gobierno-Correa-presento-Plan-Ecuador_0_899310121.html), acceso el 13.03.17.

públicas en la frontera norte, la trayectoria de la Secretaría Técnica de Plan Ecuador resultó marginal y errática en relación a la problemática que soporta la región fronteriza. De ahí que sea fácil comprender que durante varios períodos el quehacer de esta política pública se haya caracterizado por la inestabilidad, el desconcierto y una cada vez más fuerte deslegitimación social (Jaramillo comp., 2009).

Más allá de las limitaciones de orden institucional y presupuestario, en el trasfondo del tímido impacto de Plan Ecuador subyace la continuidad de una política estatal que no considera la dinámica social de las fronteras, ni el tejido social existente y que terminó supeditándose al enfoque de seguridad dominante, ligado a la imposición de la fuerza y el control, a la intervención de aparatos especializados para asumir la seguridad y defensa del territorio y de la población y a la vigilancia de actores y actividades que se aprecian como factores de riesgo para el país. Frente a la representación dominante de la frontera norte como un lugar inseguro, violento y sometido a amenazas, la reacción inmediata fue la necesidad de introducir orden, de reforzar la presencia de instituciones públicas, de garantizar la plena incorporación de la región fronteriza a la sociedad nacional a través de la explotación de su naturaleza y de subordinar la vida cotidiana de la población a las decisiones del Estado, que es el único que conoce cuál es la senda adecuada por la que debe transitar la domesticación de este territorio.

Pese a lo supuestamente “innovador” de Plan Ecuador, tampoco en esta ocasión existió el interés de conocer la frontera y su realidad, lo que lleva a concluir junto con Espinosa que “(a)ctualmente se conoce de estas regiones tanto o menos que ayer, lo único que ha sucedido ha sido la emergencia de un discurso sobre la región que ha tendido a legitimar las medidas (...) administradas e impuestas sobre esta zona” (Espinosa, 2008: 82).

#### **4.6.4. Una fortaleza en el norte de Ecuador**

Desde el 2007, el Estado ecuatoriano incrementó significativamente la presencia militar en la frontera norte. Mientras en aquel año, siete mil efectivos estaban distribuidos en las tres provincias fronterizas del norte de Ecuador, en el 2008 aumentaron a once mil, lo que representaba alrededor del 22-25% del total de las Fuerzas Armadas (Jaramillo comp.,

2009: 51), con un costo que para ese entonces fluctuaba entre los 62 y 100 millones de dólares al año (Ibid.: 23).<sup>136</sup>

Luego del bombardeo colombiano al sitio fronterizo de Angostura en marzo del 2008, aumentaron los fondos y la presencia de tropas que llegaron a trece mil efectivos; se adquirieron aviones, helicópteros, lanchas y armas destinados a la región fronteriza, se construyeron 15 nuevos destacamentos (5 militares y 10 policiales) y un año después se promulgó una prohibición para circular con armas pequeñas. Para el 2010, Ecuador tenía 20 destacamentos militares permanentes en la frontera norte (Jaramillo comp., 2009: 123) (ver Mapa 8).

**Mapa 8. Dispositivo militar en la frontera norte ecuatoriana 2009**



Fuente: Ministerio de Defensa del Ecuador, 2010

El incremento de la seguridad en la región fronteriza tuvo lugar en el marco del denominado Plan de Protección de Fronteras que implicaba el apoyo mutuo entre Fuerzas

<sup>136</sup> No con fines comparativos, sino como una herramienta para ilustrar la tendencia a la militarización de las fronteras cabe señalar que en los últimos años, Jorge Luis Sierra apunta que “México ha concentrado en la región fronteriza una fuerza militar constante que se compone de once del total de cuarenta y seis zonas militares y la mitad de las veintiséis guarniciones militares del país (...). A esa concentración fija de efectivos militares, habrá que agregar el empleo transitorio de fuerzas especiales del ejército y la armada de México que llegan a los territorios cuando la violencia ha desbordado a las autoridades locales o estatales” (Carrión y Llugsha comp., 2013: 192).



Armadas y policía, junto a un incremento significativo del equipamiento y la infraestructura. De acuerdo a las orientaciones de este Plan, las Fuerzas Armadas debían realizar una acción de contención en la frontera para el control territorial, impedir el establecimiento de campamentos y desarticular las redes logísticas y los laboratorios (Presidencia de la República. Unidad de Análisis Político, 2008).

A partir del 2018, como reacción a los violentos acontecimientos que tomaron lugar en la provincia de Esmeraldas,<sup>137</sup> la presencia militar registró un nuevo incremento. Más de 13.000 policías, soldados, agentes de fuerzas especiales, marinos y pilotos fueron desplegados a lo largo de la frontera, lo que sumado a los cerca de 9.000 uniformados que movilizó el gobierno colombiano en su frontera sur, habrían convertido a la región fronteriza entre Ecuador y Colombia en el área con mayor presencia militar en Sudamérica (Periodistas sin Cadenas, Liga contra el Silencio, OCCRP, Forbidden Stories, 2018). Para fortalecer el control, el gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción por 60 días, que luego sería renovado, junto con la suspensión de cuatro derechos ciudadanos: inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, libertad de tránsito y de asociación en San Lorenzo y Eloy Alfaro. Desde entonces, tomó vigor la *Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte* aprobada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) el 10 de mayo de 2018, que propone enfrentar los problemas que atraviesa la región desde un “enfoque integral” en línea con las directrices adoptadas por la OEA.

“La Asamblea General de la OEA, ante la aparición de nuevos actores que amenazan la seguridad de las personas y la soberanía e integridad territorial y los recursos estratégicos de los países del mundo; tales como narcotráfico, terrorismo, grupos armados ilegales, delincuencia organizada, entre otros, adoptó en Bridgetown, en 2002, un enfoque multidimensional de la seguridad que introduce otras formas para la prevención y gestión de la crisis. Esto significó un cambio en la definición tradicional de seguridad, de una concepción que consideraba exclusivamente amenazas externas de tipo militar a otra más amplia que incorpora una combinación de problemáticas políticas, económicas, medioambientales y de seguridad humana” (Gobierno de la República del Ecuador, 2018: 10).

---

<sup>137</sup> Al iniciar el año 2018, un coche-bomba destruyó el cuartel policial de San Lorenzo en Esmeraldas, ocasionando al menos 30 personas heridas y alrededor de unas 35 viviendas afectadas. Poco después se produjo el secuestro y posterior asesinato de un equipo periodístico del diario ecuatoriano de El Comercio y meses más tarde de una joven pareja; la muerte de tres militares en un enfrentamiento, de más de una decena de heridos tras un atentado; el desplazamiento de los habitantes de Mataje, del recinto Las Delicias y de las comunidades de Tobar Donoso y el Pan, pequeños poblados situados al frente de Colombia, por el temor ante su integridad y seguridad; y, ataques contra la infraestructura eléctrica del Ecuador (Morán, 2017b; Plan V, 2018a).

*La Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte* va a tono con la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) que establece la zona de seguridad de frontera bajo responsabilidad de las fuerzas armadas, cuya responsabilidad también recae sobre la protección de la infraestructura estratégica localizada en esta región (Ibid.: 12).

El protagonismo adquirido por la Política de Defensa para la Frontera Norte eclipsó el sentido de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo (Registro Oficial 243) expedida en mayo del 2018 que contempla una serie de políticas de promoción y estímulos en diversas áreas, como un pago adicional por ubicación geográfica a personal de salud, maestros y maestras. La existencia de esta ley y sus contenidos son ajenos a la población fronteriza y a gran parte de sus instituciones como se pudo desprender durante el trabajo de campo. De las personas entrevistadas luego de la vigencia de esta ley, ni una sola expresó conocerla.

Si bien las estadísticas advierten de un incremento en el número de las acciones de las fuerzas de seguridad en el control de actividades ilícitas, es al mismo tiempo evidente que la presencia de las Fuerzas Armadas y de la policía ha generado tensiones con la población. La presencia militar y policial en la frontera norte no se traduce necesariamente en una percepción de seguridad. En las entrevistas mantenidas con pobladores de la frontera norte, existe coincidencia en que las más evidentes repercusiones del conflicto colombiano son el endurecimiento de los controles y una mayor presencia policial y militar que no solo ha incrementado la vigilancia sobre el flujo transfronterizo, sino que incide en las actividades cotidianas de la población. Así lo corrobora el siguiente testimonio:

“Los militares entraron a nuestra comunidad, utilizaron los centros educativos, la casa comunal, el puesto de salud y toda el área de la comunidad, además de bloquear las vías. Ahí se quedaron, nos invadieron. Nosotros no queremos a los militares en nuestra comunidad. Son abusivos, matan nuestros animales, nos amenazan. No nos sentimos seguros con su presencia porque los disidentes que están del otro lado podrían atacar. En otras ocasiones nos han exigido abandonar la comunidad en tres horas pero como allá no hay transporte para tanta gente, entonces nos quedamos” (Entrevista a dirigente Awá, 18.08.2018).

Las incursiones sorpresivas a las comunidades, el ingreso intempestivo a las viviendas, los interrogatorios a niños y niñas, la exigencia de presentación de documentación a la población en cualquier momento y bajo cualquier pretexto, o las



detonaciones de armas en lugares cercanos a viviendas o escuelas, son conductas usuales en un contexto que ha tendido a militarizarse de manera creciente.<sup>138</sup>

Estos hechos han contribuido a forjar una percepción de indefensión social y una atmósfera de inseguridad, la que paradójicamente busca controlarse a través de la mayor presencia de fuerzas del orden en los territorios fronterizos. González señala que para evitar acciones de hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas, la población fronteriza comenzó a denunciar la presencia de campamentos o reportar actividades de las FARC, “ubicando a la población civil en medio de una confrontación que ha incitado el desplazamiento de varias personas” (Carrión y Llugsha comp., 2013: 99).

Las conclusiones de una investigación llevada a cabo en el 2016 son todavía más críticas pues detallan que

“las políticas exteriores y de seguridad que se emplean en la zona de la frontera colombo-ecuatoriana, estrictamente ligadas a la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, señalan (...) que ‘la política que se aplica y que se ha aplicado, ha sido una política de guerra, pero que ha apuntado a combatir la guerrilla y ha dejado librado el narcotráfico. Esto por la simplista identificación entre guerrilla y narcotráfico que supone que si se liquida la guerrilla, se liquida la producción, el narcotráfico y todos los problemas asociados a la narco economía. No obstante, si se analiza críticamente esta postura se puede generar otra reflexión que puede dar origen a la emergencia de una hipótesis: cómo el arrinconamiento de la guerrilla ha dejado librado al narcotráfico, pues, ahora la producción de PBC (pasta base de cocaína) y, sobre todo, el de clorhidrato de cocaína, se ha internado en el sur de Colombia y se ha trasladado al Ecuador” (Espinosa, 2016, citado por Vélez Tangarife, 2016: 44).

Entre los impactos que mayor huella ha provocado la presencia militar en la frontera y la ejecución del Plan Colombia, destacan la precarización de las relaciones transfronterizas y la fragmentación de vínculos sociales y comerciales entre los habitantes de ambos lados de la frontera. Las familias se han dividido, las visitas antes frecuentes ahora no pueden realizarse, y los canales de comercialización e intercambio se han roto o tiene un carácter cada vez más sumergido, criminalizando prácticas inscritas en un histórico entramado social y cultural que representaba un núcleo central de las estrategias de sobrevivencia de la población. Todo intercambio es calificado como un apoyo

---

<sup>138</sup> Mientras trabajé en Plan Ecuador conocí en el 2009 la denuncia del pueblo Awá de Guadalito sobre maniobras militares en el bosque comunitario, poniendo en peligro la vida de sus miembros. Hacia fines del mismo año, militares realizaron detonaciones a pocos metros de la escuela de la comunidad de Bocana del Cuembí, en la provincia de Sucumbíos, provocando pánico entre niños y niñas de corta edad y sus familias.

solapado a las actividades del narcotráfico o a la acción de grupos armados irregulares (Espinosa, 2008; Dumas y Frank, 2008).

Espinosa (2008) anota que al reprimir al pequeño comercio paradójicamente ha crecido el peso de grupos de poder locales que controlan los intercambios comerciales transfronterizos debido a su papel en la articulación de contactos a ambos lados de la frontera, como “facilitadores” de trámites burocráticos, como proveedores mayoristas de determinadas mercancías y como propietarios de inmuebles estratégicamente localizados para embodegar mercancías y controlar los flujos de intercambio.

Una consecuencia adicional, producto de la militarización de los territorios, tiene que ver con la profundización de la masculinización de las relaciones sociales, que en el caso de la frontera norte se agudiza por la operación de actividades petroleras, mineras o de las plantaciones de palma aceitera a cargo fundamentalmente de hombres que, sobre todo en el caso de las empresas de petróleo, se desplazan desde otras ciudades del Ecuador para permanecer un número determinado de días en las áreas donde operan las empresas. Las manifestaciones más tangibles de una situación fronteriza masculinizada son el aumento de embarazos entre las mujeres jóvenes y del comercio sexual (Uranga, 2011). Según datos del Plan Binacional de Integración Fronteriza, de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años, dos están embarazadas, lo que equivale a más de la quinta parte de este segmento de mujeres adolescentes que vive en la frontera (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 48).

Los distintos gobiernos han justificado el blindaje de la frontera norte y la agudización de las políticas de seguridad como medidas necesarias frente a los efectos del conflicto colombiano sobre el país. En esta línea argumentativa no han faltado pretextos para sustentar la declaratoria de estados de excepción en contextos determinados (ver más adelante sección 4.6.5) y la creciente militarización y securitización de la frontera norte. Según lo anotan varios estudiosos de la problemática fronteriza, los estados de excepción han tendido a normalizarse (Brown, 2015; Agamben, [2001] 2010), hasta convertirse en parte “de una nueva forma de estado, (...) el cual, contrariamente a las viejas formas de estado de sitio o de estado de emergencia, restringe derechos democráticos bajo la premisa de salvaguardarlos o incluso expandirlos” (Santos, 2014: 32-33), y han tendido a ser una medida de aplicación recurrente que se escuda en las nociones de “abandono” o “ausencia del Estado” pese a que

“históricamente ha habido en estas zonas una presencia consistente de los Estados (...) cuyas funciones se orientan a atraer y garantizar condiciones favorables a la inversión de los superávits de capital en los ‘centros’, al tiempo en que se privatizan y se ‘tercerizan’ sus funciones de regulación y de protección social” (Serje, 2017: 43).

Agnew señala que frente a las presiones de los estados vecinos, la respuesta generalmente se concentra sobre la dimensión territorial con el objetivo de garantizar la estabilidad e inalienabilidad del régimen territorial, y la consiguiente puesta en marcha de mecanismos y dispositivos de control, seguridad, defensa y vigilancia:

“El énfasis que se otorga a las presiones transfronterizas y que determina que las fronteras se construyan y mantengan en su lugar, refleja una imagen de espacialidad completamente territorializada en la cual los estados territorializados (...) monopolizan la geografía del poder. Así, si en un momento hubieron ‘fuerzas’ y ‘funciones’ que caracterizaron las presiones transfronterizas, actualmente hay ‘discursos’ y ‘prácticas’. Lo que siempre permanece (...) es el énfasis en el ‘pensamiento y la práctica de ordenar las fronteras (b/ordering) y subrayar su otredad’” (Agnew, 2008: 177).

De esta forma, no solo que prima la concepción según la cual la presión que ejercen los estados adyacentes moldea la orientación y el contenido de las políticas fronterizas, relegando a un lugar secundario la injusticia histórica ejercida sobre las fronteras o la precariedad social y económica de sus poblaciones, sino que se privilegia al territorio – a la imagen completamente territorializada de los Estados- en perjuicio de la acepción de fronteras como construcciones sociales y lugares de vida de poblaciones fronterizas. La realidad que afecta a Colombia, tanto durante los largos períodos de guerra como ante el escenario del posconflicto, constituye una de las dimensiones bajo las que se escuda la fortificación militar de la frontera norte ecuatoriana. Si durante la guerra, la presencia de un importante contingente de seguridad se justificó por las amenazas de un desbordamiento del conflicto hacia los territorios de los Estados vecinos, frente a la desmovilización de las FARC, la política de seguridad y defensa del Ecuador en la frontera norte no solo que no se modificará, sino que ha tendido a fortalecerse. Como lo afirmó el Ministro de Defensa de Ecuador en los primeros meses del año 2016, el país no tendrá ningún reparo para ampliar el dispositivo militar existente a través de la implementación de otros procedimientos o la adquisición de nuevo equipamiento.<sup>139</sup> Aunque la retórica oficial señale lo contrario, y diga mantener una política distante de aquella generada en los países centrales, Ecuador no ha podido escapar del marco de

---

<sup>139</sup> Declaraciones disponibles en: <http://www.eluniverso.com/noticias/2016/03/22/nota/5481519/ecuador-blindara-frontera-norte-tras-firma-paz-colombia-farc>, acceso el 04.04.16.

políticas hegemónicas que a nivel global han tornado a las fronteras en espacios cada vez más fortificados y securitizados (Brown, 2015).

La segunda dimensión que explica la estrategia de securitización desatada sobre la frontera norte descansaría en el modelo de crecimiento económico y desarrollo concebido para esta área. Parafraseando a Mbembe (2008), este modelo consiste en otorgar preeminencia a las cosas sobre las personas o, apunta, según lo menciona uno de los estudiosos de la realidad fronteriza en Ecuador, a “visibilizar y priorizar el territorio a costa de invisibilizar y precarizar a la población. En estricto sentido, por tanto, el verdadero sujeto de la soberanía no son quienes habitan en los bordes, que se mantienen –como se decía en el siglo XIX- *en un lamentable estado de incivilización o barbarie*, sino el territorio que es parte de la realidad jurídico-política del Estado” (Carrión y Llugsha coord., 2013: 39, las cursivas son del autor). Lo anterior sugiere relativizar la afirmación a la que recurrentemente apelan medios de comunicación, dirigentes políticos, informes técnicos y algunos estudios académicos respecto a la ausencia de la presencia del Estado en las regiones fronterizas. Lo discutible no es necesariamente su ausencia, sino la forma en que ésta se materializa y los intereses que escudan sus manifestaciones (Serje, 2011; 2017).

Bajo este contexto, el impulso de procesos económicos orientados a fortalecer los vínculos con el mercado, en lugar de propiciar el desarrollo, como lo propugnan los diversos gobiernos, no ha hecho sino empeorar las condiciones de vida de las poblaciones fronterizas, especialmente de pueblos y nacionalidades indios y población afrodescendiente; agudizar las tensiones que históricamente han estado presentes por la débil y precaria institucionalidad pública en la frontera norte ecuatoriana, sobre todo notoria en términos de atención a las necesidades de la población, garantía de los derechos y justicia social; y, exponer a las poblaciones fronterizas a la desterritorialización y pérdida de referentes de cohesión social y cultural, como se explorará con detenimiento en siguiente capítulo de esta investigación centrado en el estudio de la provincia fronteriza de Esmeraldas.

#### **4.6.5. Centralismo y excepción**

Los contenidos desarrollados en este capítulo dan cuenta de la interacción de once diferentes instrumentos normativos y de planificación (ver Tabla 10) relacionados con la frontera norte del Ecuador. Si bien estos instrumentos cubren diversas escalas geográficas, su énfasis es la planificación y gestión de la región fronteriza como un todo

(6 de los 11 instrumentos detallados tienen un énfasis regional), sin detenerse a capturar las particularidades presentes en los diversos segmentos de la frontera, ocasionado traslape de funciones y el riesgo de duplicación de esfuerzos. Pero no solo eso, en la medida en que cada una de las políticas estudiadas tiene un sentido y una lógica particular, con visiones a veces antagónicas y contradictorias entre sí (como lo que sucede entre la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo que prevé una serie de estímulos y acciones afirmativas y la Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte que enfatiza en acciones de control y el despliegue de una mayor presencia militar) el resultado es un escenario marcado por crecientes dificultades para avanzar en la consecución de propósitos complementarios y la configuración de un confuso contexto social e institucional en el que es difícil reconocer un eje de dirección.

**Tabla 10. Normativa para la frontera norte ecuatoriana**

<b>Instrumento de planificación</b>	<b>Escala de planificación</b>	<b>Institucionalidad responsable</b>
Agenda Zona 1 (provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura)	Regional	SENPLADES
Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte	Regional	Consejo de Seguridad Pública y del Estado
Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo	Regional	Comité Intersectorial de Desarrollo Fronterizo
Plan de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (PIFEC) (provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos e Imbabura)	Regional / transfronterizo	SENPLADES – Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	Regional	Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica
Planes de desarrollo provinciales	Provincial	Gobiernos Autónomos Provinciales de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos
Planes de desarrollo cantonales	Cantonal	20 Gobiernos Autónomos Municipales de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos
Planes de desarrollo parroquiales	Parroquial	159 Gobiernos Autónomos Parroquiales
Planes de vida de pueblos y nacionalidades	Local	Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador -CODENPE-

<b>Instrumento de planificación</b>	<b>Escala de planificación</b>	<b>Institucionalidad responsable</b>
Planes de manejo de las áreas protegidas	Local / provincial	Ministerio del Ambiente
Circunscripciones territoriales indígenas y afrodescendientes	Regional, provincial o local	Corte Constitucional

Elaboración: Propia

La saturación de instrumentos, leyes y mecanismos de planificación a nivel de la frontera norte ecuatoriana considerada como una región, constituye un terreno fértil para reeditar una dinámica que se ha caracterizado por la ausencia de diálogo entre los distintos niveles de gobierno, dando como resultado planteamientos sueltos y poco articulados y respuestas a menudo contradictorias donde con frecuencia ha primado la decisión y orientación definida desde los núcleos del poder central. La congestión normativa e instrumental antes que contribuir a resolver los problemas, en la práctica cotidiana opera como una suerte de vacío institucional por la falta de claridad en las responsabilidades o porque las responsabilidades institucionales tienden a diluirse, con repercusiones negativas sobre la realidad de la población debido a la complejidad de canalizar sus demandas o la dificultad de realizar un seguimiento periódico respecto al cumplimiento de sus necesidades. En efecto, en el trabajo de campo, muchas de las personas entrevistadas manifestaron desconocer las competencias institucionales para atender las necesidades de la población, así como expresar la ausencia de políticas específicamente orientadas para mejorar la realidad de su territorio. Al respecto resultan ilustrativos los siguientes testimonios:

“El Municipio de San Lorenzo nos dice que no puede construir el sistema de agua porque el gobierno no le pasa los recursos pero que además ese es un compromiso del gobierno por la contaminación que produce la minería. El Ministerio de Salud dice que ellos no construyen sistemas de agua. Que eso le toca al Municipio o al Consejo Provincial. En el Vicariato nos han dicho que el juez dictó (medidas cautelares) que era obligación del gobierno y los municipios la construcción del sistema de agua potable. Así se pasan de uno a otro y nosotros todavía sin agua” (Entrevista a poblador de San Lorenzo, 17.08.2018).

“Esmeraldas ha sido históricamente discriminada en las asignaciones por parte del Estado. Esmeraldas no ha formado parte del desarrollo del país ni ha sido parte de una propuesta de desarrollo” (Entrevista al Coordinador del Programa Buen Vivir para el Norte de Esmeraldas, 29.01.2018).

En este contexto es usual que ante los reiterados incumplimientos, como una medida para corregir las supuestas o reales deficiencias de los gobiernos autónomos descentralizados o para hacer frente a coyunturas complejas, se genere el escenario propicio para la intervención directa del gobierno central o a través de políticas específicas como Plan Ecuador o la reciente Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte, agudizando no solo la superposición de competencias, sino sobre todo, afirmando una representación dominante según la cual la ingobernabilidad e inseguridad de la frontera justifica una intervención desde afuera, generalmente desde el gobierno central, acompañada de la declaratoria de regímenes distintos, como zonas especiales o áreas de seguridad nacional. Se legitima así la idea de que cualquier solución va más allá de las capacidades locales,

“requiriendo intervenciones ‘de emergencia’ desde el Estado central. Sobre todo, se impone la idea que para articular estas regiones al desarrollo y a la economía modernas se requieren medidas extraordinarias (léase grandes inversiones de capital) que solo pueden ser garantizadas desde el centro, con el concurso de la empresa privada. Así, aunque las periferias aparecen como desarticuladas y como producto del ‘abandono del Estado’ de hecho se han constituido a partir de un régimen consistente de intervención, que se estructura a partir de diversas operaciones ‘técnicas’ y de ‘instrumentos de planificación’ que terminan por objetivar las condiciones de periferia. Sus formas de orden han implicado históricamente la creación de un conjunto particular de conceptos (como los de ‘frontera agrícola’ o ‘aislamiento estructural’); de instituciones (como las Secretarías de Frontera o las Oficinas de fomento a la colonización); de regímenes normativos (como los contratos de colonización, las leyes de baldíos o de tierras fiscales, el régimen de reservas privadas) y de tipos de territorio (territorios nacionales, zonas extremas, localidades aisladas, territorios de integración tardía)” (Serje, 2017: 42).

La realidad de la frontera norte corrobora las conclusiones de Serje pues como se examinará en las siguientes páginas, además de saturación de políticas y normativas, las intervenciones sobre esta región han respondido a una visión centralista que poco ha contribuido en la superación la subalternización histórica de este territorio.

Junto a la creación de marcos normativos y regímenes institucionales particulares, los complejos problemas de la frontera norte han sido el pretexto para declarar de manera más o menos continua estados de excepción para hacer frente a situaciones de alta complejidad. Como se verá más adelante, estas declaratorias han sido utilizadas tanto para atender situaciones humanitarias como lo sucedido a raíz del sismo que afectó a la costa ecuatoriana en el año 2016, para enfrentar situaciones de violencia según se registró a inicios del 2018 en respuesta al atentado en San Lorenzo contra un destacamento de policía o para hacer frente a realidades que amenazan la vida de poblaciones y que en

ausencia de una intervención oportuna, se presentan como escenarios de desbordamiento social como ha acontecido con la minería ilegal en Esmeraldas en reiteradas ocasiones. Si bien la recurrencia en el uso de estados de excepción ha motivado el surgimiento de debates políticos, académicos, y al interior de las propias fuerzas armadas sobre la eficacia de esta medida, la necesidad de mirar con cautela su implementación y examinar las implicaciones de estas declaratorias en el fortalecimiento de prácticas autoritarias de gobierno (Loewenstein, 1986), su uso parecería estarse naturalizando en la región fronteriza del norte de Ecuador no solo como medida para abordar de manera temporal e inmediata un conflicto particularmente grave, sino como un recurso para el disciplinamiento continuo de la población (Agamben, 2001; Santos, 2014).

La errática y ambigua intervención sobre la frontera norte, que combina políticas que supuestamente otorgan prioridad a la atención de sus problemas con otras abiertamente represivas y de control, confirman la denominación de este capítulo. En efecto, su implementación lejos de resolver los problemas existentes, ha contribuido a la desorganización de los territorios fronterizos, a la configuración de un entorno institucional y un marco normativo caótico y poco claro, a la fragmentación y destrucción de entornos de vida de poblaciones a quienes históricamente el Estado ha mirado como inferiores y como sujetos, por tanto, de tutela, cuando no de un severo control.



## **Capítulo 5. Colonialidad, racismo y extractivismo en el norte de Esmeraldas (estudio de caso)**

---



expresión de la forma en que el Estado ecuatoriano se relacionó con dicho territorio, una relación siempre más colonial que capitalista.

El capítulo pasa luego a analizar del marco temporal de lo sucedido en los últimos 50 años, desde que se instala en Esmeraldas, y específicamente en su área nor-occidental, un modelo económico basado en la extracción de los recursos naturales que ha ocasionado serios impactos en su territorio y que en lugar de contribuir a superar la condición de subalternidad que ha vivido esta provincia, parecería reafirmar la diferencia colonial según la cual, como lo han demostrado los estudios culturales y poscoloniales, “(d)esde la inserción de América en el capitalismo mundial moderno/colonial, las gentes se clasifican y son clasificadas según tres líneas diferentes, pero articuladas en una estructura global común (...): trabajo, género y raza” (Castro-Gómez y Grosfoguel eds., 2007: 115).<sup>140</sup> Entre las diversas estrategias extractivas que tienen vigencia en el norte de Esmeraldas: madera, camarón, pesca, turismo, palma aceitera<sup>141</sup> y minería, el capítulo se concentrará en el examen de estas dos últimas, tanto por su relevancia como por la intensidad y magnitud de los cambios que provocan su operación, las mismas que coinciden con territorios habitados por poblaciones negras y pueblos indios a los que la sociedad dominante no solo que los ha tratado como seres inferiores, y cuya existencia solo ha sido reconocida como fuerza de trabajo para negocios definidos al margen de sus necesidades.

Al discutir el alcance y sentido de las nuevas coordenadas del modelo extractivo sobre un territorio fronterizo, los contenidos de este capítulo apuntan a generar elementos para dar respuesta a las preguntas de investigación realizadas para esta tesis, ¿cuáles serían los elementos que marcarían la especificidad de los conflictos socio-ambientales suscitados en regiones de frontera?, ¿ameritan los conflictos y problemas que se generan en regiones fronterizas a causa de los procesos extractivos una lectura particular?, ¿en

---

<sup>140</sup> Uso el término diferencia colonial o mirada colonial en el sentido de los estudios decoloniales y que da cuenta que los procesos de acumulación capitalista y la división internacional del trabajo no solo son procesos económicos, sino que están profundamente atravesados por dimensiones culturales, divisiones étnico/raciales y de poder que no se agotaron con el dominio de la corona española o la conformación de los Estados-nación, sino que se mantienen en la actualidad en manos de élites que perpetúan la colonialidad del ser, del saber y del poder (Dussel, 1992; Quijano, 1993, 2000; Coronil, 1999; Castro Gómez y Grosfoguel, 2007).

<sup>141</sup> En un encuentro sobre la expansión de los cultivos de palma en la ciudad de Quito en octubre del 2018, un dirigente del norte de Esmeraldas cuestionó el uso del término “palma africana” pues las connotaciones negativas de este cultivo tienden a asociarse a la población de origen africano que vive en el Ecuador. Para los pueblos del norte de Ecuador, dijo el dirigente, el término “palma aceitera” es más inocuo y objetivo. Al asumir su posición, a lo largo de este capítulo utilizaré palma aceitera y mantendré “palma africana” solo en aquellos casos que el término proviene de citas textuales o fue utilizado de esa manera en las entrevistas realizadas.

qué medida el estudio del caso de Esmeraldas contribuye a generar claves para entender e interpretar las especificidades del extractivismo, o de manera más amplia, de la ecología política en las regiones fronterizas?

## **5.1. Del “reino de la libertad” a la integración de Esmeraldas**

### **5.1.1. El poblamiento de Esmeraldas**

El poblamiento del norte y sur del territorio de lo que hoy es la provincia de Esmeraldas manifiesta dos patrones distintos. En el norte de la provincia el territorio fue poco a poco ocupado. La memoria oral, dice Juan García,<sup>142</sup> habla de que Alfonso de Illescas, original de Cabo Verde (actual Senegal), un esclavo que sobrevivió al naufragio de un barco que encalló en las costas de Esmeraldas en 1553 y que tomó el nombre de su antiguo amo que murió en este accidente, lideró la conformación del denominado “Reino del Zambo” o “reino de la libertad” como una alianza entre indígenas Chachi y africanos para vivir en un territorio que se habría extendido desde Bahía de Caráquez (en lo que hoy es la provincia de Manabí) hasta Buenaventura en Colombia<sup>143</sup>. Illescas, conocido como el “Gobernador de Esmeraldas” por su resistencia a la colonia y fuerte liderazgo, habría estado a la cabeza del primer territorio libre de la diáspora africana en el continente americano (Antón, 2003).

En la primera mitad del siglo XVII una nueva ola de poblamiento habría llegado a los territorios que hoy corresponden a Esmeraldas. Se trataba de la penetración de cimarrones provenientes de las minas de oro de Barbacoas en el sur de Colombia y de esclavos fugados de las plantaciones de caña de azúcar que mantenían los jesuitas en la sierra central y en el sur de Nueva Granada. La tercera ola de poblamiento negro se produjo hacia finales del siglo XIX, cuando población esclavizada proveniente de Jamaica habría sido introducida para trabajar en las minas de oro ubicadas en Playa de Oro, Cachaví y Wimbí (Trujillo, 2005; Deler, Gómez, Portais, 1983 y León, 2013).

El arribo de las poblaciones de origen africano al norte de lo que hoy es Esmeraldas, se sumó a asentamientos Chachi, uno de los grupos humanos de más antigua

---

<sup>142</sup> Conversación informal con Juan García en enero del 2016.

<sup>143</sup> No todos los autores consideran que las relaciones entre pueblos negros e indios eran sinónimo de convivencia armónica. Intelectuales como Julio Estupiñán señalan que las poblaciones negras habrían actuado con violencia, engaño, abuso y crueldad: “Alfonso como caudillo absoluto de lo que es hoy la provincia de Esmeraldas (...), ejerció un gobierno de crueldad y venganza, implantando de este modo un gobierno de dominio y de terror” (1976: 47, citado por Pezzi, Chávez y Minda, 1996: 39).

presencia en este territorio. Las investigaciones históricas indican que los Chachi, conocidos anteriormente como Cayapas, podrían provenir de migraciones de pueblos que vivían en el territorio de la actual provincia de Imbabura originadas a raíz de la expansión de los Incas o, como lo considera el antropólogo y lingüista Samuel Barret, de una separación de la cultura ancestral Tolita (Trujillo, 1981). No obstante, hay quienes sitúan el origen de los Chachi en la Amazonía, como se desprende de los estudios de Jijón y Caamaño (1919).

En un principio, los Chachi se asentaron hacia el área norte, en las desembocaduras de los ríos Santiago y Cayapas, conformando núcleos de población dispersos. De acuerdo con la investigación histórica, su desplazamiento hacia el sur de la provincia habría iniciado en 1940 cuando se registra su presencia en Muisne y en la década de los 60, cuando impulsados por el auge bananero, habrían llegado a Quinindé (Carrasco, 1983; Medina, 1997; Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986).

Fruto de su lucha, los Chachi disponen de un territorio de 105.468,52 hectáreas. De este total, el 21% está ocupado con 46 centros Chachi y el 79% restante está constituido por bosques primarios que se distribuyen en tres áreas protegidas: Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Reserva Ecológica Cayapas-Mataje y Reserva Ecológica Mache Chindul (<https://conaie.org>).

Además de los Chachi, los Eperara Siapidaara (conocidos como Épera) y Awá son dos pueblos ancestrales asentados en el norte de Esmeraldas. Los primeros son originarios del Chocó colombiano en el departamento del Cauca, desde donde se habrían desplazado hacia Ecuador a partir de la década de los años 40 del siglo pasado por la violencia que amenazaba su vida (Gómez Rendón, 2013). Desde el decenio de los 60, los Épera constituyeron asentamientos sedentarios a lo largo de los ríos Cayapas, Ónzole, Santiago y Bogotá, en el norte de Esmeraldas, sin perder de vista su interés por agruparse en un solo territorio. La concreción de esta aspiración fue un proceso largo que según la CONAIE iniciaría en 1993 con la compra de 26 lotes (<https://conaie.org>) y que terminaría en el 2003 con la entrega de las escrituras sobre 347 hectáreas (Carrasco, 2012: 95). Su existencia pasó desapercibida al punto que los Épera no tenían ni siquiera un documento de identidad que recién fue proporcionado por el Estado ecuatoriano hacia fines del siglo pasado. Sería solo la consecución del territorio, según lo afirma Carrasco, el “fundamento de su visibilidad” (Ibid.: 91).

Los Awá viven en el Ecuador en un territorio de más de 100 mil hectáreas que se extiende entre la zona subtropical de la provincia del Carchi y la parroquia Tululbí en el

cantón San Lorenzo en Esmeraldas. Están distribuidos en 19 comunidades de las cuales 5 están en Esmeraldas: Mataje, Pambilar, Guadualito, La Unión y Río Bogotá (<https://conaie.org>). Se cree que este pueblo descende de los Mayas y que se radicó en Colombia. La denominada guerra de los Mil Días (1899-1902), la guerra civil en Colombia entre conservadores y liberales, obligó a numerosas familias Awá a viajar al Ecuador.

El territorio ecuatoriano que ocuparon los Awá, dice Jeffrey D. Ehrenreich en su artículo que sobre este pueblo consta en el libro *Etnologías Mínimas*, “se encontraba, teóricamente hablando, bajo el control administrativo ecuatoriano pero la negligencia de sus autoridades lo llevó a una situación de extremo olvido” (Ehrenreich, 1997: 145), lo que le permite afirmar que por aproximadamente un lapso de cincuenta años, los Awá no tuvieron contacto con el Ecuador. Esto explica, de acuerdo a la CONAIE, que solo 90 años después de la presencia del pueblo Awá en territorio ecuatoriano, entre 1985 y 1986, esta población haya accedido a un documento de identidad (<https://conaie.org>).

La disponibilidad de territorio por parte de los Awá fue un proceso largo y entendido desde un inicio como la única opción para su supervivencia cultural y social. La participación de *Cultural Survival*, una entidad internacional cuyo objetivo era defender los derechos de las poblaciones indígenas, y de la CONAIE, no solo que otorgó fuerza al proceso, sino que sirvió de apoyo para que los Awá fortalezcan su organización y constituyan en 1984 la Federación Awá; en 1986 la coordinación binacional y en 1988, con el apoyo adicional de la Fundación Mundial de Vida Salvaje (WWF, por sus siglas en inglés), logren el establecimiento de la Reserva Étnica y Forestal Awá de Biósfera que se extiende entre Ecuador y Colombia en un área de 400 mil hectáreas (Ehrenreich, 1997).

El patrón de poblamiento del sur de la provincia de Esmeraldas evidenciaría una senda distinta a lo acontecido en el norte, según lo describe Ospina en *Modelos productivos y lógicas de ocupación del espacio* (2004). En este caso, desde finales del siglo XVIII, aproximadamente a partir de 1780, el territorio se habría ido poblando con campesinos que fueron expulsados de sus tierras al calor de la expansión cacaotera que se extendía por el *hinterland* de la cuenca del Guayas. En busca de nuevas tierras para subsistir, las familias campesinas desplazadas habrían replicado, en lo que hoy es la provincia de Manabí y sur de Esmeraldas, el mismo patrón de expansión del cultivo de cacao que los expulsó de sus tierras. De acuerdo a este patrón, los campesinos que abandonaron la cuenca del río Guayas habrían sido sembradores, trabajadores relativamente autónomos a quienes los capitalistas cacaoteros encargaban la instalación

de las plantaciones de cacao. Una vez establecida la plantación, peones contratados se hacían cargo de las labores de cosecha y beneficio mientras que el sembrador iniciaba una nueva plantación más lejos. Interesados en conseguir su independencia económica, los sembradores se habrían desplazado hacia el norte, llegando a Manabí y al sur de Esmeraldas, donde los pequeños campesinos combinaron el cultivo de cacao con la recolección de caucho, tagua, una especie de palma propia de zonas húmedas y subtropicales y la confección de manufacturas de paja toquilla. La variabilidad en los cultivos de cacao junto a espacios boscosos relativamente compactos fue el antídoto a las plagas que afectaron a la producción del Guayas. Éstas y la baja de los precios internacionales del cacao en la segunda década del siglo XX, marcarían el declive del auge cacaotero. “Los pequeños productores resultaron ser más hábiles (...) para resistir el ataque de las plagas debido a la ausencia de monocultivos extensos. De hecho, los pequeños productores de cacao todavía existen en la actualidad y todavía son capaces de exportar (...) Esa habilidad ecológica no puede ser desdeñada (...)” (Ospina, 2004: 64).

Este recorrido describe la paulatina ocupación de un espacio y la presencia de patrones socio-territoriales diversos que incidieron sobre la conformación de un paisaje en el que coexiste un mosaico cultural portador de trayectorias y experiencias singulares.

### **5.1.2. De las minas a la compra de libertad, la autonomía y el territorio**

La investigación histórica desarrollada por Deler, Gómez y Portais (1983) y especialmente por Rueda (2001; 2010), da cuenta que los primeros intentos de la colonia para forzar la integración del territorio de Esmeraldas habrían tomado lugar alrededor de 1526, a través de incursiones militares que enfrentaron la fuerte oposición de las poblaciones locales. Tampoco pudieron cumplir su cometido los misioneros mercenarios a quienes en 1534 se les solicitó la cristianización de Esmeraldas (Carrasco, 1983) ni los que ingresaron medio siglo después, en 1577 (Rueda, 2001). Recién en 1597 la Iglesia llegó efectivamente a Esmeraldas y según lo relata Carrasco en su estudio sobre el pueblo Chachi, “(q)uizá en los primeros encuentros la actitud de los indígenas fue de curiosidad y acogida. Cuando se empezaron a manifestar los verdaderos móviles (...), se suscitaron hechos violentos y los consiguientes ‘castigos y acciones para reducirlos’ (que) sin lugar a dudas, diezmaron las poblaciones indígenas” (Carrasco, 1983: 187, las comillas son de la autora). Para 1598, Jurado Noboa (1990) estima que la población indígena de la actual Esmeraldas habría descendido en 5000 personas (citado por Lapierre y Macías, 2018: 44).

La oposición y rechazo demostrados por los pueblos asentados en el norte de Esmeraldas, convirtió a este “Reino”, como lo calificaba García,<sup>144</sup> en un territorio impenetrable para los españoles que les obligó no solo a reconocer al gobernador de estas tierras como su legítimo representante, sino a suscribir en 1600 un documento conocido como la “Carta de Libertad” que estipulaba que este grupo de pobladores estaba exento del pago tributario a cambio de un compromiso de fidelidad (Rueda, 2010: 8).

A lo largo del siglo XVII la colonia habría realizado sucesivos intentos (1621, 1626 y 1713) por fortalecer el control del territorio de Esmeraldas, buscando la construcción de caminos que no lograron prosperar pese a las prebendas ofrecidas a los potenciales inversionistas (Deler, Gómez y Portais, 1983: 174). Las fracasadas tentativas determinaron que hasta las primeras décadas del siglo XVIII Esmeraldas haya mantenido una organización social distante de su contenedor, en ese momento, la Audiencia de Quito. “Esmeraldas permanece completamente separada de contactos con la organización colonial, prácticamente ausente de toda la región costanera” (Ibid.: 94), lo que la llevó a ostentar el calificativo de “tierra de libertad” (Ibid.).

A partir de 1735 y con el objetivo de abrir nuevas rutas comerciales que liberaran a la Sierra del monopolio del comercio detentado por Guayaquil, Pedro Vicente Maldonado, un científico y político ecuatoriano, impulsó la construcción de dos vías: Ibarra-río Santiago o río Mira (conocido como el Camino de Malbucho) y Quito-río Esmeraldas. La construcción de los caminos implicó, según detalla Rueda (2001), el establecimiento de acuerdos con la población de origen africano para que a cambio de su colaboración en la apertura de las vías, el poder colonial permita a las comunidades mantener su organización social. Iniciada la construcción de las vías se descubrieron depósitos de oro, lo que habría determinado que esta zona, concebida inicialmente como una de paso, se convierta en un foco de colonización que impulsó el envío de nuevos trabajadores, muchos de ellos esclavos provenientes de Nueva Granada, el Chota, Quito y Guayaquil. El hallazgo de oro en 1738 habría dado paso a lo que Rocío Rueda denomina como una primera fase extractiva en Esmeraldas (Rueda, 2010: 58).

Esta primera fase extractiva que tuvo una corta duración tanto por la resistencia de la población local como por la huida de los “trabajadores mineros” hacia los asentamientos libres, fue retomada en 1771 cuando mineros neogranadinos incursionaron en el territorio atraídos nuevamente por su potencial aurífero (León, 2013). Se inicia así

---

<sup>144</sup> Conversación informal con Juan García en enero del 2016.



una segunda fase extractiva en la que “la presencia de los vecinos del distrito de la Audiencia de Quito fue prácticamente marginal” (Rueda, 2001: 15) debido al interés de los criollos en la terminación de un camino que representaba la condición de posibilidad de autonomía de la Audiencia de Quito frente a los puertos de Guayaquil y Callao. Este camino fue concebido como una ruta alternativa para reactivar el comercio de exportación de las manufacturas textiles hacia Nueva Granada y como una salida pragmática para contar con canales de comercialización que permitan superar el declive en las exportaciones ocasionado por la crisis en las minas de Potosí y los efectos de las reformas borbónicas.

Aunque la Audiencia de Quito no estuvo presente en esta segunda fase minera, sus impactos fueron bastante más visibles que en el primer intento en la medida en que la minería no solo que modificó el paisaje, sino que habría introducido un régimen esclavista en el norte de Esmeraldas. Hacia 1805, García ed. (2012: 61-68) establece la presencia, en el norte de Esmeraldas, de cuatro sitios mineros que operaban con poblaciones atadas a relaciones de servidumbre y a la esclavitud, en el caso de la población afrodescendiente. Pese a su dispersión y precariedad, los asentamientos mineros disponían de capillas, siguiendo las disposiciones legales de educar a la población en la doctrina cristiana, y aunque el Código Negro de 1784 censuraba los maltratos, en las minas, según los expedientes estudiados por Rueda (2010: 61), se encontraron instrumentos de tortura.

Fuera de las minas, en el área norte de Esmeraldas el paisaje estaba dominado por poblados habitados por indios y otros constituidos por cimarrones, contribuyendo a la conformación de una identidad particular, con fuerte raigambre local. Los Chachi, por ejemplo, lograron conservar una autonomía relativa durante las dos fases mineras. En parte se encargaron de las labores agrícolas para alimentar a los mineros o mantuvieron una vinculación puntual con la sierra a través del intercambio de caucho, tagua y madera provenientes de la recolección, y de achiote, café y cacao, cultivados en sus tierras (Trujillo, 1981).

Hacia los primeros años del siglo XIX, un conjunto de factores similares a los que precipitaron el cierre del anterior ciclo minero, habría determinado el cese de esta segunda fase de explotación. La explotación minera se habría detenido por la clausura del camino motivada por la oposición de Lima y de Guayaquil que consideraban que la integración física de Esmeraldas abría oportunidades para la utilización de sus puertos naturales, lo que significaba una clara competencia al control del comercio portuario en sus manos (Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986).

Al cierre del camino se suma la recurrente resistencia de la población que se expresó en continuos episodios de rebelión de los esclavizados contra sus dueños, primero a través de métodos pacíficos como el grito, el canto nocturno, los arrullos, los chigualos y las danzas, luego a través de la destrucción de los instrumentos de labor, la negativa a trabajar, hasta expresiones activas como las rebeliones, el enfrentamiento y la fuga (Rueda, 2011; León, 2013). Las sucesivas incursiones para pacificar a los insurrectos terminaron finalmente en un acuerdo en el que teóricamente ambas partes cedían posiciones y que consistía en el pago del derecho de explotación de minas cada seis meses, medida que si se cumplió, solo se lo hizo de manera parcial pues habría más bien servido para que la población negra acumule los recursos necesarios para posteriormente comprar su libertad y los territorios que habían ocupado por cerca de tres siglos.

“El interés demostrado por los esclavos por preservar su libertad los había llevado a adoptar una serie de estrategias como la rebelión, la amenaza de fuga y la negociación con las autoridades; les quedaba el mecanismo de compra de su libertad a través del cual podían dejar de ser esclavos y recuperar su condición de hombres libres, para el efecto contaban con el oro obtenido de sus labores como mazamorreros. El proceso de la liberación por compra lo iniciaron los esclavos de Playa de Oro en 1826, de un total de doscientos doce esclavos, constan manumitidos cuarenta, entre capitanes de cuadrillas y los hijos menores de cuarenta años” (Rueda, 2011: 30-31).

Pese a que durante los intentos de construcción de las vías, la colonia pudo tomar conciencia de la riqueza de un territorio hasta ese momento desconocido, en términos de cacao, algodón y maderas finas y de oro (Minda, 2004), es posible concluir junto a Rueda (2010, 2011) que la suspensión de las actividades mineras subrayan el hecho de que la principal motivación de las élites quiteñas por llegar a Esmeraldas no habría sido el de incorporar este territorio a la dinámica colonial, sino ante todo la apertura de una vía que permita concretar un proyecto exportador. Esmeraldas fue hasta entonces, sostiene Rocío Rueda Novoa, “un área periférica con una peculiar estructura política, social y económica y una escasa articulación con los centros del poder colonial, definida en buena medida por la ausencia de vías de comunicación” (2010: 81), un territorio en el que subsistió una temporalidad distinta a la del resto de su contenedor.

Al iniciar las luchas independentistas, que se prolongaron desde fines del siglo XVIII hasta 1830, la colonia habría intentado, a veces por la fuerza, a veces a través de la negociación, restablecer el control de las minas, al tiempo que los esclavizados habrían continuado desplegando acciones de resistencia o se habrían sumado a las luchas por la

independencia a través de los grupos de montoneros. Rueda explica este proceso en los siguientes términos:

“En la coyuntura de la independencia, la población esclavizada luchó a favor de la causa republicana, paralelo al proyecto político de la insurgencia los esclavizados tenían su propio proyecto social, dar continuidad al proceso de etnogénesis, consolidar sus sociedades en medio de la libertad y autonomía, en un territorio propio, espacio fundamental de construcción y representación de identidades. Esto explica que, frente a la promesa de la insurgencia de conceder la libertad, la ciudadanía y el derecho a ser incluidos en la nueva sociedad republicana que se estaba construyendo, decidieran luchar a su lado” (Rueda, 2010: 296-297).

Sellado el proceso independentista del Ecuador, los esclavos habrían seguido pagando por su libertad hasta al menos 1845 cuando las tierras de Playa de Oro pasaron a ser propiedad de Juan José Flores, el primer presidente de Ecuador, siete años antes de que el presidente José María Urbina expidiera el decreto de manumisión. A partir de 1852 y ya en rigor la ley de manumisión, los pueblos negros habrían iniciado la compra de tierras que habían ocupado ancestralmente. Tenían la consciencia de que la única manera de conservar el control de su territorio y de gozar de autonomía era como propietarios.

“Este trámite, en el caso de la comunidad de Playa de Oro, se inició en 1869, cuando los negros libres compraron parte de la propiedad de Reynaldo Flores y, más tarde, en 1885, obtuvieron otra parte de las tierras de Playa de Oro, Santiago y Angostura a la señora Isolina Weir. Una vez realizada la negociación, haciendo uso de su concepción sobre la propiedad comunal de la tierra, los negros se reconocieron y se conformaron como comuna, denominada del río Santiago” (Rueda, 2010: 31).

Las comunidades negras compraron inicialmente 62 mil hectáreas con la finalidad de garantizar su permanencia en este espacio territorial y conformar lo que luego sería la Comuna Río Santiago Cayapas, la primera comunidad negra libre de América que para 1885 se convertiría en la primera comunidad latinoamericana con territorio propio.<sup>145</sup> Con esta transacción, el pueblo negro creyó posiblemente iniciaría un nuevo momento en el control de su territorio y en la construcción de un proyecto autónomo. Sin embargo, como lo recuerda Jhon Antón Sánchez, “los descendientes de los esclavizados lograron la libertad sin ninguna garantía política, económica, social o territorial, lo que desembocó

---

<sup>145</sup> El territorio de esta comuna, la más grande, está superpuesto a diez parroquias rurales pertenecientes a los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, y está formada por 57 comunidades (Acción Ecológica, 2017: 28). Esta Comuna coexiste con otras de más reciente creación, a partir de 1994, cuando la Ley de Desarrollo Agrario posibilitó la titulación de tierras ancestrales a los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Desde entonces se han titulado 248.921,78 hectáreas de tierra. El 50,7% de este total (127.279,28 hectáreas) corresponde al pueblo negro de Esmeraldas (Antón y García, 2015: 122).

en una nueva forma de explotación y de servidumbre (como el concertaje y el huasipungo)” (González, Burguete Cal y Mayor, Ortiz coord., 2010: 223).

### **5.1.3. El “descubrimiento” de Esmeraldas: el paso de lo invisible a lo útil**

Al poco tiempo de conseguida su libertad, sobre la población de Esmeraldas se impondría un nuevo patrón de dominación bajo la figura de una empresa inglesa a la que el gobierno del Ecuador entregó parte de su territorio para saldar una porción de la deuda de la independencia. En efecto, en 1854 el gobierno del Ecuador suscribió un contrato con Gran Bretaña para pagar el 21% de la deuda total contraída con tierras ubicadas en la Costa y la Amazonía, las que se adjudicaron tres años más tarde, sin respetar la presencia o los derechos de quienes ya vivían en estas tierras.

“Fue así como en 1857 se adjudicaron a la compañía británica Ecuador Land Company, por un período de cien años, a un precio irrisorio y libres de toda clase de impuestos, extensos territorios en la provincia de Esmeraldas. La compañía se dedicó a la explotación de tagua, madera, oro, corteza de mangle, caucho, pieles y plantas medicinales (Flores, 1978). Así, después de haber sido liberada de la Corona española, Esmeraldas pasaba a ser una suerte de colonia de la Corona británica” (Arboleda, 2005: 107).

Las tierras adjudicadas en Esmeraldas para cancelar la deuda -200.000 cuadras-, estaban distribuidas hacia el noroccidente de la provincia, extendiéndose hacia el sur hasta la playa de Atacames (Ibid.). Con su entrega a una empresa extranjera iniciaría lo que Evan León denomina como “el único proyecto imperial británico en la historia de Ecuador” (León, 2013: 19) que implicó la implantación de un sistema jurídico y económico en un área en la que no solo no había presencia del Estado ecuatoriano, en términos del control del territorio o de provisión de servicios para su población, sino donde ésta era cuestionada “por *otra* autoridad soberana” (Ibid.: 9), la de las comunidades afroecuatorianas que defendían la autonomía y organización del territorio que ocupaban.

Según los términos del contrato, la empresa podía explotar todos los recursos, sin control de ningún tipo. Pablo Minda reproduce el texto al respecto, extraído de la página 604 del contrato de adjudicación, que textualmente señalaba que “transfiere (...) todo el dominio y propiedad de los predichos terrenos, con todas sus acciones útiles, derechos reales, personales y mixtos y que nadie la inquietará, despojará, ni moverá pleito alguno, sobre su propiedad, posesión, uso y más derechos anexos” (Minda, 2004: 103). De hecho, el modelo de enclave de la *Ecuador Land Company*, que a su vez subarrendó la tierra a otras empresas internacionales y extendió sus dominios de manera ilegal hacia áreas que

contenían minas en el río Santiago, consistía en extraer productos de alta demanda en el mercado mundial, sin ningún empacho por el mantenimiento o la recuperación de la naturaleza que estaban habitando (Rueda, 2010), menos aún por sus habitantes. Este negocio de extracción se benefició de manera directa de un servicio de cabotaje bimensual que operó desde 1880 a través del puerto Vargas Torres desde donde se exportaba tagua, caucho, ceiba y diferentes cortezas e ingresaban a Esmeraldas algunos productos provenientes de Guayaquil (Deler, 1998: 180).

Con la operación de *Ecuador Land Company* las poblaciones locales perdieron el control de su territorio, la libertad de recolectar y vender de manera independiente, así como la autonomía de mantener un sistema productivo para su sostenimiento ya que estaban obligados a comprar los artículos necesarios para su reproducción en las mismas casas comerciales donde vendían sus productos (Speiser, 1991: 69, citada por Minda, 2004: 43).<sup>146</sup> Perdieron igualmente la libertad de moverse por su territorio o de establecerse en el lugar donde lo decidieran (Arboleda, 2005). En este como en otros momentos de la historia de Esmeraldas, además de controlar territorio, de requerir grandes dosis de energía y materias primas, la operación de la *Ecuador Land Company* significó “arrasar el mundo existente, vaciándolo de sentido para crear un entorno radicalmente nuevo” (Serje, 2011: 262).

Durante la administración británica y poco después de promulgarse el Código de Minería de 1886, misiones estadounidenses y británicas recorrieron las áreas de los ríos Cayapas y Santiago para valorar la riqueza minera contenida que se creía abundante. De tal magnitud se consideraba la riqueza del norte de Esmeraldas que los técnicos extranjeros le entregaron el calificativo de “El Dorado” (León, 2013: 33).

Convencidos de la riqueza minera, los equipos de exploración extranjeros presionaron para que la comunidad Playa de Oro venda sus tierras y dar inicio así a la tercera fase minera extractiva mediante la operación de *Playa de Oro Mining Company* en 1891 (Ibid.).<sup>147</sup> Esta tercera fase minera, cuya duración se extendió por casi dos

---

<sup>146</sup> Aunque el convenio que dio origen a la concesión señalaba que se debía reconocer la soberanía nacional, la empresa emitió su propia moneda –el pailón– con la que se pagaba a los peones y se respaldaba todas las transacciones en casas comerciales de propiedad de ingleses y estadounidenses (Arboleda, 2005; León, 2013).

<sup>147</sup> La tesis de maestría de Evan León titulada *Límites y Linderos: Una interpretación decolonial de los conflictos territoriales en la Región Norte de Esmeraldas durante los finales del siglo XIX*, presenta un cuidadoso análisis sobre las tensiones generadas a partir de las distintas interpretaciones sobre el uso y la posesión de tierras. Mientras los estadounidenses y británicos concebían al territorio -la tierra- como un bien, las poblaciones negras negaban la posibilidad de que un individuo posea la tierra, “el territorio pertenece colectivamente a la comunidad” (León, 2013: 46 y 47). La venta de tierras de Playa de Oro, es interpretada por varios autores como una estrategia para resistir su expulsión del territorio en la medida en

décadas, cerró en 1908 luego de varios intentos de recapitalización. Además de la baja productividad, la operación, cuya administración había pasado a manos estadounidenses bajo el nuevo nombre de *Playa de Oro Company Limited*, cerró por la falta de trabajadores. Y es que la minera, cuya intención era contar con la fuerza de trabajo de Playa de Oro, tuvo que recurrir a 500 “peones” traídos desde Jamaica en 1899 (Ibid.: 56-66) ante el vacío de trabajadores provocado por la huida de la población de Playa de Oro hacia el Cayapas bajo el convencimiento de que con la mina, regresaba la esclavitud. Junto a la minera de Playa de Oro, entre 1891 y 1894, habrían estado presentes otras dos empresas de extracción de minerales, la *Cachaví Gold Mining Company* de capital estadounidense, y la *Uimbi Gold Washington Company*, de capital inglés (Ibid.: 32) que operaron, como la primera, sin ningún control por parte del Estado.

Ante el fracaso de la explotación minera, los inversores extranjeros dirigieron sus capitales a la explotación de una plantación de caucho que tuvo corta duración debido a su limitada productividad pues suponía la aplicación de una técnica de “sangramiento” de la resina y de amplios espacios boscosos de selva húmeda (Ospina, 2004).

Contrariamente a las aspiraciones de los gobiernos que consideraban que la presencia de capital extranjero impulsaría el desarrollo de Esmeraldas, según se desprende de las declaraciones del Presidente Flores Jijón en 1892 cuando con entusiasmo comunicaba la inversión realizada por las mineras del río Santiago (Rueda, 2010; León, 2005), el saldo final resultó negativo no solo para las poblaciones y su territorio, sino incluso para el Estado dada la extensión de prácticas poco transparentes en el manejo de las exportaciones:

“A partir de 1894 se efectuaban exportaciones trimestrales con destino a Estado Unidos. Los lingotes iban en cajas de hierro y únicamente los interesados conocían el contenido. Nadie puede calcular la cuantía de la riqueza aurífera perdida, pues la participación del 10% del Estado siempre se quedó en poder de los tesoreros de Hacienda y de los inspectores designados para controlar los envíos al exterior” (Estupiñán, s.f.: 136, citado por Rueda, 2010: 283).

Las afectaciones provocadas por las tres mineras que operaron en el área y el papel que ejerció la *Ecuador Land Company* en Esmeraldas cuyos derechos pasaron en 1907 a la empresa alemana Casa Tagua S. A. solo cesaron en 1937 con el fin de la concesión británica. A partir de entonces las tierras intervenidas regresaron a sus propietarios originales, las comunidades negras que compraron su libertad, el derecho a su autonomía

---

que el contrato estipulaba la permanencia de los pueblos negros en sus espacios (León 2005; Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986; Rueda, 2010).

y a mantener sus formas de organización y producción caracterizadas por una ocupación longitudinal del espacio a lo largo de los ríos, con fincas de sembríos en zonas más alejadas y una vinculación puntual con el mercado interno a partir de la comercialización de ciertos productos recogidos en el bosque (madera, tagua y oro aluvial) (Trujillo, 1981; León, 2005). La recuperación de sus tradicionales formas de organización demostraría el desarrollo de estrategias de adaptación por parte de los pueblos negros mediante la combinación de actividades que según el caso fluctuaban entre la adscripción a las actividades impuestas por el poder dominante y sus propias estrategias de autoabastecimiento (Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986; García y Walsh, 2010; Rueda, 2010). En palabras de Freddy Rivera:

“La existencia de un proyecto autónomo de reproducción no implica necesariamente un auto aislamiento o una reproducción exclusivamente generada en el autoabastecimiento; es más bien, en esta etapa, la capacidad para vincularse a procesos externos (como la recolección-venta) con cierta ventaja o con cierta capacidad de regular ese proceso, para mantener márgenes más o menos amplios de autonomía, de negociación; de tal manera (...) que el mercado no arrase con las modalidades y capacidades propias de reproducción material o que la crisis (...) agrave su peso sobre las familias” (Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986: 49-50).

La cesión de territorio al imperio británico, no solo que simboliza, como lo menciona Arboleda (2005), el patrón de negligencia y abandono al que ha estado sometida la provincia de Esmeraldas, sino que significó una estrategia que profundizó su aislamiento al abandonar el Estado ecuatoriano cualquier tipo de política que aliente la integración de este territorio (Deler, Gómez y Portais, 1983), menos aún la implementación de acciones para garantizar la protección y bienestar de sus habitantes pese a los problemas denunciados en su momento por funcionarios públicos, como lo documentan algunas investigaciones históricas. Entre estas denuncias, resulta revelador el fragmento presentado por Rueda correspondiente al informe emitido por el Gobernador de Esmeraldas en 1895, en el que no solo se detallan los abusos que soportaba la población, sino que se evidencia el trato discriminatorio que simbolizaba la relación de las élites ecuatorianas respecto a los pueblos negros:

“Esmeraldas es una basta hacienda de un puñado de hombres malos y que de 7.806 habitantes las nueve décimas partes son esclavos con el nombre de conciertos. (...) Sería conveniente se declaren nulos todos los contratos y que solo puedan contratar con la presencia de un protector. Pues los montañeses son más torpes que los indígenas del interior, no saben contar sino hasta diez y hablar tan pocas palabras, ¿como podrán comprender las obligaciones que contraen y defender sus derechos si no tienen más entendimiento que el instinto

de su conservación y el de la propagación de su especie?” (Informe del Gobernador de Esmeraldas julio 1865 citado por Rueda, 2010: 262-263).

Sin desconocer el tono despectivo y el trato desvalorativo hacia las poblaciones de origen africano, la cita reproducida no habría sido la única advertencia realizada en aquel entonces. En 1902, el Teniente Político de Concepción habría alertado al Estado respecto al pago de jornales con trozos de metal sin ningún valor monetario (León, 2005: 62) y en 1903 un nuevo informe del Gobernador de Esmeraldas al Ministerio de Relaciones Exteriores habría detallado los graves daños ambientales ocasionados por la empresa *Playa de Oro Mining Company* debido al “desembancamiento lento del río Santiago a causa de las cantidades enormes de tierra dispuesta por sus máquinas” (Ibid.: 41). En ningún caso, sin embargo, se registró intervención del Estado para frenar las irregularidades y los atropellos hacia la población.

La ausencia del Estado fue también evidente en la inoperancia demostrada por los sucesivos gobiernos para implementar políticas de educación en el área o construir siquiera escuelas, y la dificultad para concretar algún proyecto vial, según lo relata Rocío Rueda en su investigación doctoral sobre la cuenca aurífera del río Santiago Cayapas (2010).

Durante los 73 años que parte del territorio de Esmeraldas estuvo bajo el control de manos extranjeras, primó básicamente el interés del Estado ecuatoriano por pagar la deuda externa como condición para mantener y fortalecer las relaciones con la principal potencia económica y política de aquel entonces, prescindiendo de la existencia de las poblaciones asentadas en dicho territorio a quienes las élites criollas inferiorizaron o trataron como no-existentes.<sup>148</sup> La dinámica que se desarrolló en Esmeraldas durante ese período contribuyó, adicionalmente, a consolidar su perfil como territorio orientado a la provisión de materias primas para el mercado mundial materializado en la extracción de productos del bosque, el comercio y el control del territorio por parte de ingleses, estadounidenses, alemanes, italianos y colombianos:

---

<sup>148</sup> Resulta paradójico que en un momento en que parte del territorio de Esmeraldas estaba adjudicado a un país extranjero, el Estado ecuatoriano decidiera, en el marco de la Constitución y la Ley de Régimen Municipal de 1861 crear la provincia de Esmeraldas, escindiéndola de su anterior unidad administrativa, la provincia de Pichincha. Pese a su nueva realidad administrativa, en 1869, para la conformación de la Asamblea que redactaría una nueva Constitución, la misma que debía estar integrada con tres diputados por cada una de las provincias, Esmeraldas no fue considerada como tal sino como un cantón de Manabí, sin representación por tanto en el poder legislativo (Quintero y Silva, 1991a: 123-127). Una muestra adicional de la desidia hacia este territorio.



“En definitiva, en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, se imprimió un dinámico comercio definido por la demanda internacional, productos como la tagua, el caucho, la madera y el oro eran comercializados a través de casas comerciales que enviaban al puerto mayor de Esmeraldas o de Guayaquil con destino a los puertos de Hamburgo, Nueva York, Londres, Liverpool y Bremen” (Rueda, 2010: 258).

Mientras gran parte de la franja noroccidental de Esmeraldas, el territorio ocupado principalmente por pueblos negros estaba bajo el control de Gran Bretaña (1854-1937), la otra parte del territorio de Esmeraldas fue entre 1895 y 1925 el escenario de luchas y revueltas en favor de la revolución liberal, respaldando en un primer momento a Eloy Alfaro y, luego de su muerte, exigiendo el cumplimiento de la senda inicial del liberalismo que se truncó por el pacto entre terratenientes y la naciente burguesía de la costa (ver sección 3.3.1).

Esta segunda fase de la lucha en Esmeraldas, encabezada por un terrateniente y comerciante local, Carlos Concha, cuyo nombre bautizó a esta lucha como la “Revolución de Concha”, habría tenido como objetivo reclamar una “nueva correlación de fuerzas que permita la expansión y difusión del capitalismo en una región no integrada económica ni políticamente al país” (Quintero y Silva, 1991b: 362), desde el convencimiento de que el territorio de dicha provincia podía efectivamente insertarse en el mercado con productos exportables como cacao, café y tagua debido a la disponibilidad de puertos naturales. Las victorias militares de Carlos Concha y sus guerrillas fueron acompañadas de la organización política del territorio, nombrando autoridades en parroquias, recintos y caseríos y administrando el cobro de los impuestos y motivaron el abierto rechazo de la alianza inter clasista que capturó el poder central, hasta desembocar en el apresamiento de Concha en 1915 y la desestructuración de las montoneras vencidas un año más tarde en medio de un gran poderío militar y un decreto de amnistía formulado por el gobierno de Alfredo Baquerizo (1916-1920) (Ibid.: 361).

Desde mediados del siglo XIX hasta el tercer decenio del XX, durante la consolidación del naciente Estado ecuatoriano, es evidente la persistencia de una mirada colonial<sup>149</sup> sobre el espacio de Esmeraldas. Como lo sucedido durante la colonia, los hechos que tomaron lugar en este período reflejan que el interés del naciente Estado ecuatoriano no habría sido el de incorporar el territorio de Esmeraldas a la dinámica nacional, sino fundamentalmente utilizarlo como una “reserva” para cubrir una deuda cuyos beneficios -la consecución de la independencia- estarían circunscritos a

---

<sup>149</sup> Ver la nota de pie de página 140.

determinadas regiones del país y a particulares sectores sociales, de ahí también la decisión de acallar las expresiones más democráticas del liberalismo encarnado en Concha y clausurar, concomitantemente, la posibilidad de que el Estado disperse su atención y recursos para impulsar un desarrollo más homogéneo del país y sus regiones. Es esta mirada colonia sobre Esmeraldas la que explica en gran parte los límites de integración de este territorio al espacio nacional único.

#### **5.1.4. La gravitación del mercado mundial en la organización del espacio**

El interés sobre la provincia de Esmeraldas se retomó y aceleró en el período 1945-1960 con el inicio de la explotación bananera y su paulatina incorporación a las dinámicas económicas globales, según lo corroboran los estudios que analizan este período:

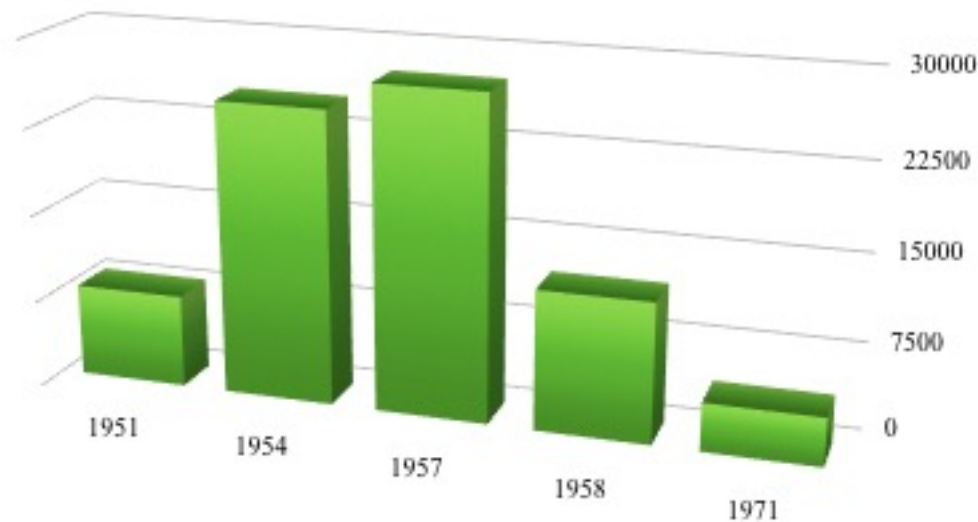
“La coyuntura bananera en el contexto socio-económico esmeraldeño implicó, por una parte, la desarticulación de la modalidad anterior (recolectora-exportadora) a la que estaba inserta la provincia desde años atrás, y por otra, una adecuación-funcionalización de la población existente a esta nueva dinámica económica que a la postre engendró cambios significativos al interior de la estructura social” (Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986: 34).

El crecimiento del cultivo del banano fue de tal magnitud que en el período 1950-1959, mientras las exportaciones de este producto crecieron en el país a una tasa anual del 4,2%, en Esmeraldas lo hicieron al 9,5%, lo que se tradujo en el inicio de un proceso de presión por la tierra que desde entonces se convertirá en una constante dentro del territorio de esta provincia. Para 1954, el 26% de la superficie provincial estaba comprometida en el cultivo de banano mientras Guayas tenía el 24% (AEBE, s/f.) (Ver Gráfico 3). El auge bananero en Esmeraldas alcanzó su máximo en 1953 cuando participó con el 32,4% del total de las exportaciones (Martínez, 1976: 42).

La explotación de banano vino de la mano con la construcción de la carretera Quito-Santo Domingo-Quinindé que conectó los centros urbanos de la sierra con el sur de Esmeraldas. Si bien la disponibilidad de esta carretera representó un primer hito de integración de la provincia al resto del país, su construcción, al igual que lo sucedido con los proyectos viales que se impulsaron en la primera mitad del siglo XVIII, fue una acción particularmente orientada a atender intereses comerciales y empresariales para facilitar el naciente negocio de exportación alrededor del banano. En el diagnóstico de la provincia de Esmeraldas elaborado por Marco Jaramillo en el decenio de los 80, sobresale la relevancia de esta carretera y de otros ejes de comunicación:

“La historia de la provincia de Esmeraldas es la expresión de las luchas por su integración física, económica y política con el resto del país. La Colonia y la República están jalonadas por estos intentos que por diversas razones siempre fracasaron. Su vinculación física comienza recién en 1948 con la inauguración del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo y sólo en la década de los 60, con la carretera Esmeraldas-Quinindé-Santo Domingo-Quito” (Jaramillo, 1981: 23).

**Gráfico 3. Evolución de la superficie dedicada al cultivo del banano en Esmeraldas (en hectáreas)**



Elaboración: Propia

Fuente: Martínez, 1976: 46

Otro eje vial que conectó el norte de Esmeraldas con la sierra fue la carretera Ibarra-San Lorenzo. Según Minda, la construcción de este tramo, el mismo que concluyó en 1957, después de más de cuatro décadas de haber iniciado los trabajos, tuvo dos significados. El primero, de carácter más instrumental, se concretó en la apropiación de tierras por parte de trabajadores y colonos en áreas colindantes a la vía, junto al inicio de un proceso sostenido de deforestación. El segundo significado tuvo una connotación más simbólica y política. La construcción del tramo Ibarra-San Lorenzo representaba el interés de las élites de Quito por afianzar su control en el norte del territorio ecuatoriano, en una suerte de neutralizar la fuerza de Guayaquil (Whitten, 1997). De ahí que Minda concluya que “esta vía no tenía el objetivo de incorporar la zona norte al espacio nacional para desarrollarla, sino para que sirviera de palanca para fortalecer política y económicamente a la élite de Quito” (Minda, 2004: 44).

Más allá de la dotación de infraestructura para dinamizar el comercio del banano, la presencia del Estado siguió siendo marginal y en lo sustantivo se redujo a auspiciar la presencia del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) entre 1956 y 1958. El ILV, dirigido por misiones evangélicas de los Estados Unidos actuó, según se mencionó en la sección

3.2 de esta tesis, de forma similar a como lo hizo en la región amazónica, es decir, como un dispositivo ideológico con el propósito de controlar las formas de organización y producción de los pueblos indígenas y negros de Esmeraldas y sus estructuras socio-culturales. Según lo relata Jorge Trujillo (1981), las poblaciones del norte de Esmeraldas resistieron la penetración ideológica de esta entidad que apreciaron su presencia como algo externo e impuesto, dificultando que actuara con la misma eficacia que demostró en la región amazónica. Aunque el ILV no prosperó en sus propósitos, sin duda profundizó el proceso de asimilación y logró el control político del pueblo Chachi mediante la cooptación de sus dirigentes, al punto que hoy en la actualidad el CODENPE (Consejo Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) reconoce que los dirigentes que anteriormente fueron profesores formados por el ILV, “han adoptado valores y pautas de comportamiento diferentes a los culturalmente reconocidos como propios, situación que ha motivado un desprendimiento e incompreensión de la reproducción endógena de la cultura y su proyección histórica” ([www.codenpe.gob.ec](http://www.codenpe.gob.ec)).

En términos de la organización de la producción bananera, la literatura (Larrea, 2006; Ospina, 2004) afirma que en el sur de Esmeraldas, la expansión de este cultivo se hizo a partir de pequeños y medianos productores que reemplazaron parcialmente sus antiguos cultivos de cacao. A éstos se sumaron colonos-finqueros que migraron masivamente hacia la costa atraídos por el promisorio nuevo producto de exportación y el impulso que representó la construcción de la carretera Quito-Santo Domingo-Quinindé. En el sur y norte de la provincia, este sistema productivo convivió, según lo estudió Luciano Martínez (1976),<sup>150</sup> con el enclave de la *Fruit Trading Corporation* con sede en Panamá. Hacia 1948, esta empresa habría comprado varias haciendas para dedicar aproximadamente siete mil hectáreas a la producción de banano (Ibid.: 42), trastocando la distribución de la propiedad de la tierra con 36 propietarios que controlaban el 30,4% de la superficie y 5.418 propietarios, en el otro extremo, que disponían del 18,9% de la tierra cultivable de Esmeraldas (Ibid.: 46). Además de concentrar la tierra, la *Fruit Trading Corporation* pudo aprovechar de la oferta de mano de obra proveniente de diversas regiones del país que carecía de poder de negociación.

La presencia de esta empresa significó, al contrario de lo que sucedió en el resto del país donde el control de las empresas extranjeras se centraba sobre el proceso productivo, la puesta en marcha de un modelo particular que incluía control del territorio,

---

<sup>150</sup> Agradezco a Luciano Martínez haberme facilitado el texto original de su investigación.

de la producción y de la comercialización, independientemente de la economía local. Según la reseña de la Asociación de Exportadores del Ecuador, “para ganar eficiencia la Fruit Trading estableció una forma de operación vertical. En las haciendas instaló un sistema de transporte interno y externo, red de fumigación aérea y astilleros propios para construir sus naves” (<http://www.aebe.com.ec/>), y operaba a través de otras compañías para su cadena de comercialización como Astral y Estrella Fruit Shipping (Martínez, 1976: 44).

La producción de los finqueros independientes era comprada por la *United Fruit Company* que luego se encargaba también de la exportación, lo que significó la paulatina monetarización de las relaciones sociales y la consiguiente modificación de formas de organización y producción de los pueblos tradicionalmente asentados en Esmeraldas. Trujillo (1981) advierte que el cultivo de banano no solo tuvo un efecto físico sobre el espacio, sino un profundo impacto cultural al acelerar el paso de pueblos que practicaban la recolección, la cacería y la pesca, para convertirse en pocos años en agricultores y en poblaciones sedentarias. Tales cambios habrían sido particularmente severos para los Chachi, encargados del transporte fluvial de la producción desde las plantaciones hasta el puerto de Esmeraldas, que desde entonces habrían visto modificada su lógica de reproducción social.

El impacto del banano en el pueblo negro agrupado en la Comuna Río Santiago Cayapas es estudiado en detalle en *Campesinado y organización social de Esmeraldas* que analiza la trayectoria histórica de esta organización. Según sus autores (Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986: 38-41), el auge bananero significó el abandono del lavado y la extracción de oro y la virtual desaparición de las prácticas de recolección (tagua y caucho, principalmente) por la mayor demanda de fuerza de trabajo requerida para el nuevo cultivo; una disminución de las actividades de caza y pesca que habrían sido compensadas por el aumento en la cría de cerdos y aves de corral; un crecimiento de las actividades agrícolas tanto por el aumento de la superficie destinada al banano como por la necesidad de contar con otros productos para el autoabastecimiento de las familias y una mayor dependencia del mercado para satisfacer el acceso a nuevos bienes (electrodomésticos o motores fuera de borda). Los requerimientos de mayores superficies se tradujeron, adicionalmente, en el inicio de conflictos entre el pueblo Chachi y las comunidades negras que competían por la ocupación del territorio a lo largo del río Cayapas (Trujillo, 1981).

Para Martínez (1996) dos son los cambios de mayor trascendencia ligados al banano: la transformación de los patrones productivos de las economías de subsistencia que poco a poco comenzaron a abastecer la demanda urbana de productos agrícolas y el aparecimiento de sectores ligados al comercio en los núcleos urbanos, que recibían parte del excedente que se orientaba al consumo. La irrupción de comerciantes e intermediarios es, siguiendo a Martínez, una especificidad del modelo económico estructurado en torno al enclave que alienta el surgimiento de sectores sociales vinculados a la esfera de la circulación y no de la producción.

Hacia fines de los años cincuenta y con más fuerza desde mediados de los sesenta, iniciaría en Esmeraldas el declive del boom bananero por la confluencia de una serie de factores como la recuperación de las plantaciones centroamericanas que vencieron las plagas, el cambio de la variedad de banano demandado en el mercado mundial de *Gross Mitchel* a *Cavendish* y el término de un proceso de inestabilidad política que atravesó dicha región en los primeros años del decenio de los cincuenta (Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986; Ospina, 2004; Larrea, 2006). Sin desconocer la importancia del restablecimiento de las plantaciones centroamericanas en la merma de la producción bananera de Esmeraldas, en el declive de este rubro fueron decisivos la competencia de empresas exportadoras y el poderío de los empresarios bananeros del Guayas “que por todos los medios trataron de hacer desaparecer del mapa a la provincia de Esmeraldas como zona exportadora de banano” (“El Tiempo”, 04.08.74, citado por Martínez, Ibid.; 45). Socialmente, una vez desarticulado el aparato productivo alrededor del banano, no solo que se acentuó la migración campo-ciudad al interior de la provincia, dando paso a la formación de un numeroso sector suburbano, sobre todo en la capital provincial, sino que se habrían reactivado “formas o mecanismos de supervivencia que en la etapa recolectora habían sido fundamentales para la reproducción (lavado de oro, caza, pesca y diversos cultivos en pequeña escala), y que durante el auge bananero fueron relegados a un segundo plano” (Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986: 41).

Con la crisis del banano, los pequeños y medianos productores que habían comprado sus fincas a través de créditos hipotecarios, se vieron imposibilitados de cumplir con los pagos. Los bancos iniciaron entonces acciones legales para apropiarse de la tierra. De acuerdo a Quintero y Silva (1991b: 32), entre 1958-59, el Banco de Fomento habría dado paso, solo en la provincia de Esmeraldas, a cerca de tres mil procesos legales. “La resistencia del campesinado costeño al desalojo de sus tierras, las huelgas de los asalariados agrícolas, las tomas de tierra, el impulso a la organización campesina, fueron

creando una (...) ‘situación explosiva’” (Ibid.: 36) que derivó, en enero de 1960, en una fuerte represión contra los trabajadores de las plantaciones de Esmeraldas y el asesinato de Sergio Molina, dirigente de los trabajadores bananeros. Esta habría sido una de las primeras luchas por la tierra. La primera huelga habría estallado en 1955 en las plantaciones de la *Fruit Trading* en Esmeraldas bajo el liderazgo de la Federación de Trabajadores Agrícolas de Esmeraldas que aglutinaba a los trabajadores contratados y a los pequeños productores que tenían conflictos con la empresa (Ibarra, 2010: 142).

#### **5.1.5. Integración territorial y desintegración del espacio habitado**

El inicio en 1972 de la exportación de petróleo a través del Puerto de Balao en Esmeraldas constituye el preámbulo, según la memoria oral de la población, de la “historia de riesgo ambiental de la provincia” (CNSCA, 2009). Este proceso se profundizó aún más con la instalación de la Refinería Estatal de Petróleo en 1978, que marca “la integración definitiva de Esmeraldas al espacio y economía nacional”<sup>151</sup> y que ha ocasionado una serie de pasivos ambientales y sociales en el territorio. Uno de los casos más críticos ocurrió en febrero de 1998, cuando un derrame de crudo propagó un incendio sobre un barrio (Propicia I), dejando como saldo alrededor de 30 personas muertas y más de un centenar de heridos y desaparecidos (Acción Ecológica, 1999, citado por Arboleda, 2005: 118).

La articulación de Esmeraldas a la economía del petróleo junto con el mejoramiento y construcción de vías, dio paso a nuevas fases extractivas a partir de las décadas de 1970-1980, con profundas modificaciones en el espacio de la costa norte. La siguiente cita que habla del “descubrimiento de los Awá” y la implantación de la narrativa del progreso y desarrollo puede ser utilizada para ilustrar la percepción social que se iba tejiendo sobre la región y su área norte:

“Poco había cambiado hasta que en 1970, intereses particulares en el área crecieron como respuesta a una combinación de factores. El área fue requerida cada vez más por militares ecuatorianos por ser de importancia estratégica. El *boom* petrolero también elevó el interés en todas las zonas no desarrolladas del Ecuador y simultáneamente dio al gobierno mayores pautas para desarrollar proyectos dentro de la nación. El gobierno buscó nuevos recursos para el desarrollo y nuevas tierras para abrir haciendas, fincas y residencias, verificándose un empuje para expandir nuevas fronteras” (Ehrenreich, 1997: 149).

---

<sup>151</sup> Conversación informal con Juan García en enero del 2016.

Los intereses económicos que crecieron sobre el área dieron paso a actividades económicas nuevas. Fue el turno del camarón y de los bosques. Mientras capitales de Guayaquil estuvieron detrás del impulso del cultivo de camarón, la explotación forestal recayó en capitales quiteños. De acuerdo a Ospina (2004), estas dos actividades tendrían una doble característica desde el punto de vista de la construcción del espacio. La explotación forestal y la implementación de piscinas camaroneras significó, por un lado, arrasar con bosques húmedos y manglares y, por otro lado, representó la antesala de la instalación en la zona de dos polos económicos en constante pugna, Quito y Guayaquil, que competirían por la hegemonía de un territorio que históricamente se aferró a la autonomía. A las dos características anotadas podría añadirse una tercera que parecería ser una constante en la provincia: la acuicultura y la explotación forestal, significaron grandes procesos de concentración de tierras y el funcionamiento de economías de enclave que marcan distancia con la población local y con la dinámica social y económica circundante, de la misma manera como sucederá más tarde con los cultivos de palma aceitera y como sucedió antes con los enclaves a cargo de empresas extranjeras.

El impacto del cultivo de camarón y de la explotación forestal amerita revisar algunos de los datos más reveladores. En los últimos años de la década de 1980, con una superficie de 207 mil hectáreas de piscinas camaroneras, Ecuador se convirtió en el primer exportador de camarón del mundo (Bravo, 2003: 5). El crecimiento de esta industria se hizo a costa de zonas salinas del litoral ecuatoriano y de bosques de manglar, uno de los ecosistemas más complejos y productivos por la variedad e importancia de servicios ambientales que proporciona a los seres humanos y la naturaleza (Sanjurjo y Welsh, 2005; Holguín y Bashan, 2007). De 203.695 has. de manglar que tenía Ecuador antes del auge de la acuicultura de camarón, más de 55 mil hectáreas habrían desaparecido hacia 1999 para convertirse en piscinas de cría de camarón (Bravo, 2003: 2). Para el 2005, Carlos Larrea sitúa la pérdida de bosques de manglar en cerca de 200 mil hectáreas (2006: 104).

Si dos décadas más tarde el negocio no prosperó fue por la afección de la denominada mancha blanca<sup>152</sup> que incidió sobre la productividad de las piscinas camaroneras, reduciendo la rentabilidad del negocio (Minda, 2004). Ni la destrucción de

---

<sup>152</sup> El síndrome de la mancha blanca (WSS, White Spot Syndrome) es una enfermedad de origen viral que no tiene cura pues el camarón carece de sistema inmunológico. La enfermedad se caracteriza por el apareamiento de manchas blancas en el exoesqueleto. El virus se convirtió endémico en Ecuador (Marcillo, s/f).



manglar ni la apropiación de los medios de vida de la población representaron barreras para una actividad que se instaló irrespetuosamente en diversos puntos de la costa ecuatoriana y particularmente en la provincia de Esmeraldas donde la industria del camarón a inicios de la década del 2000 fue caracterizada como una “economía de ‘enclave’ en tierras nuevas sobre las que se expande y provocará importantes procesos de concentración territorial en manos de grandes compañías modernas de capital nacional” (Ospina, 2004: 82).

En torno a la deforestación, Minda (2004) identifica el inicio de la explotación maderera en Esmeraldas a partir de la última mitad del siglo anterior, en coincidencia con la Ley de Concesiones Forestales (1966) y la apertura de varias vías de comunicación, incluyendo la inauguración del ferrocarril Ibarra-San Lorenzo en 1957 y de la carretera Borbón-Esmeraldas en 1983. Sobre esta última vía y la marginal de la Costa, un estudio sobre los conflictos ambientales en Ecuador señalaba que desde su planificación estas fueron concebidas como

“un corredor que adquirirá gran importancia como enlace de integración fronteriza y para la incorporación a la producción de grandes zonas según el Plan de Desarrollo Regional de la Región I del CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo. (...) (E)stas vías no sólo han afectado las zonas de bosques no intervenidos o protegidos que atraviesan las comunidades indígenas allí asentadas, sino que son la vía de acceso fácil para la expansión de la agroindustria, la extracción de la madera, y la llegada de nuevos colonos” (Hanekamp y Ponce ed., 2005: 118).

La explotación forestal, dirigida a mercados fuera de la provincia, tuvo en sus inicios dos modalidades: la colonización alentó el desbroce de la cubierta vegetal, al mismo tiempo que la búsqueda de ingresos motivó a que las poblaciones locales incursionen en la tala de madera y su posterior venta a intermediarios. A estas dos modalidades de explotación forestal se sumaría, desde los años 90, la presencia de empresas extractivas conformadas por capitales principalmente provenientes de la sierra, que en unión con capitales extranjeros, convirtieron a la explotación forestal en su negocio central (Varea, et al., 1997; Ospina, 2004). Pese a las extensas superficies entregadas a los empresarios forestales (Minda, 2004: 60), investigaciones realizadas revelan que la mayor cantidad de madera extraída no provenía de las áreas concesionadas, sino de tierras de campesinos con el fin de aprovechar la disponibilidad de mano de obra y de árboles (Rivadeneira, 1986, Minda, 2004).

La identificación de Esmeraldas como reserva forestal impulsó la colonización como una estrategia de ocupación de territorios y una válvula de escape a la presión por la tierra en la Sierra. Minda subraya que “esta es la época donde la migración creció de manera significativa, la misma que obedecía a una política del Estado como una forma de desactivar los conflictos sociales que se empezaban a producir en otras regiones del país” (Minda, 2004: 109), para derivar, en el período 1980-1990, en un proceso de consolidación de la colonización con la adjudicación de tierras a favor de los colonos migrantes. Pero la colonización como lo observa Margarita Serje no es solo una estrategia de poblamiento de regiones “inhóspitas”, también ha sido pensada como una “de blanqueamiento de las regiones baldías: es decir, de las regiones indígenas o cimarronas, cuyo poblamiento no merece ni siquiera ser visto” (Serje, 2011: 162), una variable que en el caso de Esmeraldas no puede pasar desapercibida.

Implantado el modelo de explotación forestal, el ritmo de extracción de madera no ha disminuido desde entonces.<sup>153</sup> Si entre 1983 y 1993 se deforestaron 95.675 hectáreas, con una tasa anual del 1,9%, entre 1998 y 2007, la deforestación habría representado 64.717 hectáreas, lo que implica una tasa anual del 1,7% (Ecociencia, 2007 citado por Lapierre, 2012). Según se verá más adelante, la deforestación de Esmeraldas se mantiene como una constante hasta la actualidad y se ha extendido hacia el sur de la provincia, en las zonas de Tonchigüe y Súa, a través de la instalación, desde el año 2000, de plantaciones masivas de eucalipto. Esta nueva agroindustria, a cargo de la compañía Ecuapacific, conformada por capital japonés, tiene como objetivo la producción de pulpa y papel para el mercado nipón, y ha proyectado la plantación de 10.500 hectáreas de *eucalyptus urograndis* (Arboleda, 2005: 112).

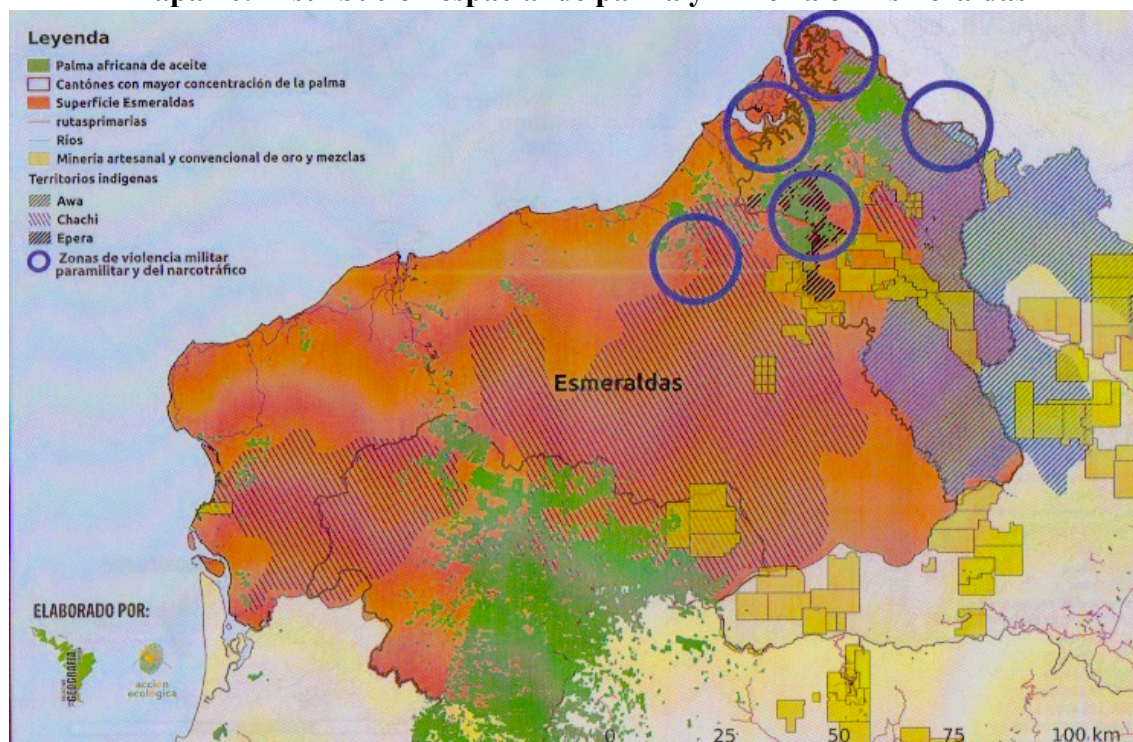
La intensidad y magnitud de la deforestación de Esmeraldas motivó a que en el año 2013 el gobierno declare estado de excepción en la provincia (Decreto 116) con el objetivo de prohibir la emisión de permisos de tala en bosque nativo, la renovación de los existentes y la realización de una auditoría a todos los permisos otorgados por el Ministerio del Ambiente. A criterio de las organizaciones que elaboraron el Informe Alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, la eficacia de este declaratoria es dudosa pues la “deforestación sigue desarrollándose de forma irracional” (FECICHE et al., 2017: 3).

---

<sup>153</sup> Los estudios desarrollados por Minda (2004; 2011) ofrecen un examen detallado del proceso de deforestación en el norte de Esmeraldas, sobre la base de un trabajo de campo de más de ocho años.

En el recuento del saqueo ambiental que ha sufrido Esmeraldas no podría dejar de mencionarse el impacto del turismo. Desde aproximadamente el último cuarto del siglo anterior, Esmeraldas atestiguó un vertical crecimiento del turismo que ha ahondado las diferencias sociales, con una escasa repercusión en la economía de la provincia, fuera de contados períodos en el año en los que se incrementa el empleo temporal de una porción de la población provincial. “Los departamentos y viviendas de propiedad de gentes de medianos y altos ingresos (...) suelen estar desocupados la mayor parte del año. Su utilización intensiva se logra especialmente en épocas de vacaciones en la Sierra, cuando al menos treinta mil personas visitan las playas de Esmeraldas, (...). Se trata, pues, de construcciones que conforman verdaderos enclaves que, de alguna manera, se desenvuelven al margen del sistema social que los rodea (...)” (Moncada, 2006: 63).

**Mapa 10. Distribución espacial de palma y minería en Esmeraldas**



Tomado de: Acción Ecológica.

Estas abruptas transformaciones, suscitadas en menos de cinco décadas, tuvieron impactos en la población históricamente asentada en el norte de Esmeraldas. La economía de subsistencia tradicionalmente practicada por los pueblos indios y comunidades afrodescendientes comenzó a ceder lugar a una cada vez más importante dependencia del mercado, empujando no solo al cultivo de productos susceptibles de comercializarse como el cacao y café, sino a la explotación del bosque, tanto de manera directa, como a

través del establecimiento de concesiones y venta de tierras comunales a compañías madereras (Trujillo, 1981), a la vez que contribuyó a erosionar las redes de redistribución y reciprocidad que existían anteriormente.<sup>154</sup> Es en este contexto y en una suerte de estrategia de resistencia y de defensa de su supervivencia que

“las comunidades afrodescendientes e indígenas emprendieron un *proceso* urgente y masivo de *titulación de las tierras ancestrales*, en el contexto de su reconocimiento en la Constitución de 1998, titulándose alrededor de 228 mil hectáreas en San Lorenzo y Eloy Alfaro. La Constitución actualmente vigente (2008) profundiza este derecho y declara las tierras comunitarias como *inalienables, inembargables e indivisibles* (Artículo 57, literal 4), en consonancia con la gestión ancestral de los territorios afrodescendientes e indígenas de Esmeraldas” (FECACHE et al., 2017: 4, las cursivas son de los autores).

La reseña histórica contenida en las páginas anteriores demuestra que en lo sustantivo la incorporación de Esmeraldas al territorio nacional –al Estado-nación- ha privilegiado su papel como área proveedora de ciertos bienes naturales que han contribuido a promover el crecimiento y desarrollo del resto del país. La historia de las incursiones mineras, de la cesión del territorio a capitales internacionales, del camarón y de la explotación forestal, no solo son historias de construcción de una naturaleza distinta a la pre-existente, de una naturaleza que entra en el mercado y “gracias a la cual hemos aprendido durante siglos a organizar con eficiencia las desigualdades” (Ospina, 2004: 54), sino también historias que ilustran la recurrente contradicción entre un discurso que dice defender y promover la integridad de los territorios fronterizos y el bienestar de sus habitantes con una práctica permanente de expulsión de la vida y saqueo de la riqueza natural de estos espacios. La incorporación de Esmeraldas al espacio nacional único demuestra también el papel central de la división internacional del trabajo en la calificación que otorga a ciertos territorios, en donde no solo están presentes variables relativas a la disponibilidad de riquezas naturales, sino también a las fronteras establecidas por diferencias de género y raza (Mezzadra y Neilson, 2003) ¿Cuál es la

---

<sup>154</sup> La extensa producción etnográfica y antropológica sobre los pueblos que habitan el norte de Esmeraldas da cuenta de formas de vida y organización social particulares. Rueda, por ejemplo, describe ampliamente la forma en que las comunidades negras, dentro de las comunas, fijaban la extensión de terreno para cada unidad familiar que “dependía de la capacidad de trabajo de los miembros y de las formas comunitarias de colaboración regidas por vínculos extendidos y de reciprocidad” (2010: 290). Para el caso de los pueblos Chachi, Épera y Awá, varias investigaciones antropológicas han profundizado cómo las redes de parentesco y solidaridad han permitido la cohesión organizativa y la sobrevivencia de sus formas de producción. Son ilustrativos en esta dirección los trabajos de Trujillo (1981), Carrasco (1983), Medina (1997) sobre los Chachi, de Ehrenreich (1997) sobre los Awá, así como la visión de conjunto que ofrecen Donoso y Franco (2003) respecto a las estructuras organizativas del mosaico cultural del norte de Esmeraldas.

realidad contemporánea? Las siguientes secciones apuntan al análisis de las rupturas y continuidades registradas en las dos primeras décadas del siglo XXI en relación a la integración de la zona norte de Esmeraldas (Ver Mapa 10) a partir del examen del cultivo de palma aceitera y el establecimiento de la minería de oro, dos actividades económicas que cobran relevancia en el área nor-occidental de Esmeraldas habitada principalmente por poblaciones negras y por tres pueblos indios: Chachi, Awá y Épera. Luego de situar y analizar las implicaciones de estas dos actividades económicas y la conflictividad asociada, este capítulo concluirá con el significado que éstas adquieren al tomar lugar en una región de frontera.

## **5.2. La palma aceitera en el norte de Esmeraldas**

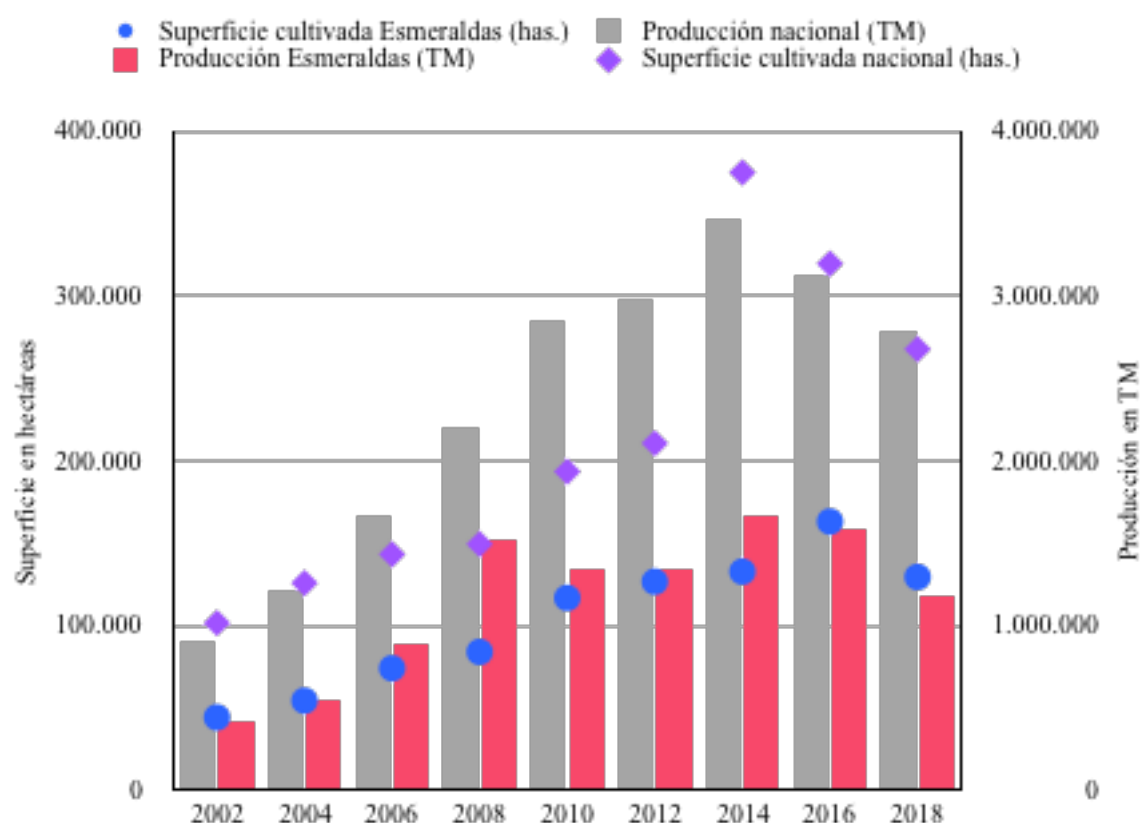
### **5.2.1. ¿Un programa agroindustrial para el progreso de la región fronteriza?**

La palma aceitera, *Elaeis guineensis*, es una especie originaria del África Occidental. Aunque tiene variados usos, los cultivos industriales básicamente se han concentrado en la extracción de aceite de palma de la parte carnosa del fruto y aceite de palmiste de la semilla. Ha sido utilizada para la obtención de aceite comestible, cosméticos y cremas, jabones, detergentes y lubricantes; bollería, comidas congeladas, helados, bombones y la más diversa gama de productos comercializados a través de cadenas alimentarias especializadas en “fast food”; productos de higiene personal y del hogar, y, desde inicios de este siglo ha sido una de las materias primas más importantes para la producción de agrocombustibles, especialmente diesel. De ahí que según información del gremio que aglutina a los productores de palma aceitera, mientras el 45% de la producción se destina a cubrir la demanda local, el 55% se exporta a distintos países, principalmente Estados Unidos (<http://www.ancupa.com>).

El crecimiento de esta especie requiere de ciertas condiciones geográficas: solo se puede cultivar en regiones de no más de 500 metros sobre el nivel del mar, tener una humedad del 70-80% y crecer entre los 15° de latitud norte y 15° de latitud sur (Bayón, 2012), lo que convierte a Ecuador y otros países ubicados en similares latitudes (Colombia, Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea), en lugares especialmente aptos para el desarrollo de la palma aceitera.

Aunque el cultivo de palma aceitera remonta a finales de los años setenta del siglo pasado,<sup>155</sup> con manchas dispersas en diversos puntos de la geografía nacional, es a partir de 1995 cuando esta plantación se consolida. Desde entonces hasta el 2018, la superficie ha pasado de 95 mil hectáreas a más de 265 mil hectáreas. Esmeraldas concentra la mayor extensión de este cultivo con el 48% de la superficie (129.596 has.), sobretodo localizadas en la zona norte limítrofe con Colombia, y contribuye con el 43% del total de la producción generada en el país (INEC, 2019). El Gráfico 4 ilustra la evolución de este cultivo en términos de superficie y de toneladas métricas producidas durante el período 2002-2018.

**Gráfico 4. Evolución de la superficie y de la producción de palma aceitera a nivel nacional y en Esmeraldas (2002-2018)**



Fuente: INEC  
Elaboración: Propia

<sup>155</sup> Una de las primeras referencias sobre el ingreso del cultivo de palma aceitera a Esmeraldas consta en un diagnóstico provincial elaborado a finales del decenio de los 70: “(la) diversificación de cultivos está realizándose aunque lentamente. El desarrollo de cultivos más rentables depende de la capacidad de inversión la que, como en el caso de la palma africana, está siendo realizado por capitales de origen extranjero” (Jaramillo, 1981: 34).

El acelerado crecimiento de los cultivos de palma aceitera determinó que en el año 2016, con exportaciones valoradas en 228 millones de dólares FOB (CFN, 2017), este sector se convierta en el séptimo rubro más importante entre los productos de exportación, colocando a Ecuador como el quinto exportador mundial, el segundo productor latinoamericano de aceite de palma (después de Colombia) y el séptimo en el mundo ([www.fao.org/faostat](http://www.fao.org/faostat)). En Ecuador, el sector palmicultor contribuye con el 4% del PIB agropecuario (CFN, 2017).

En Esmeraldas, la Ley de Desarrollo Agrario (1994) que promovió la colonización de la Amazonía ecuatoriana, actuó como el soporte para el desarrollo del cultivo de palma aceitera. Bajo el enunciado de favorecer la legalización de la tierra, esta ley alentó su utilización “productiva”, lo que implicaba la tala de bosques, considerados como superfluos, y la consiguiente introducción de cultivos. Tal medida fue aprovechada por las empresas productoras de palma aceitera que presionaron sobre los territorios de las comunidades negras y de pueblos indios, para apropiarse de cada vez mayores espacios. Aunque la superficie de palma crecía en Esmeraldas de manera silenciosa, no sería si no al inicio del siglo cuando el Estado reconoció oficialmente su presencia, impulsó abiertamente su desarrollo y justificó a través de una ley, los atropellos cometidos. Esta es la historia.

A mediados del año 2002, anteponiendo el argumento de fortalecer la seguridad y favorecer el desarrollo del norte de Esmeraldas, el gobierno ecuatoriano facultó la conversión de 50 mil hectáreas de bosque tropical en cultivos agroindustriales a través del Decreto Ejecutivo No. 2961 del 8 de agosto del 2002 (ver Anexo 2). El decreto en cuestión explícitamente señalaba entre sus considerandos, “Que un programa de desarrollo agroindustrial combinado con programas agroindustriales sustentables y adaptados técnicamente a las condiciones ecológicas de la región, contribuirán al progreso socio-económico de la Zona Fronteriza Norte”, y establecía en su artículo 1:

“Aprobar los planes de explotación agrícola y desarrollo sustentable en la zona (...) en virtud de los cuales se autoriza a las personas naturales y jurídicas cuyas propiedades se encuentran dentro de dicha extensión de tierra, para que desarrollen actividades agrícolas productivas, de conformidad con las regulaciones legales existentes y acorde con las disposiciones de este Decreto. En consecuencia, estas zonas quedan excluidas de las calificadas como de Protección Forestal Permanente”.

Con la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 2961, el Estado no solo que encubría las estrategias que habían sido utilizadas desde años atrás para acceder a la tierra,







abandonen sus fincas, como el asedio a las parcelas que terminaban rodeadas de cultivos de palma aceitera (García, s/f). En todos los casos, la instalación de palma aceitera estuvo antecedida por el desbroce del bosque, lo que lleva a afirmar a varios autores la cercana asociación entre madereros y la industria de la palma: “Esto es justamente lo que ha sucedido en San Lorenzo con el proyecto palmicultor, pues de alguna manera las empresas palmicultoras compraron tierras que habían sido previamente taladas de manera selectiva con fines de extraer madera que tenía valor comercial” (Minda, 2004: 107).

A través del Decreto 2961 se habrían legalizado, entonces, actividades económicas que se instalaron de manera arbitraria, ignorando la explotación comercial de madera previa a la instalación de los cultivos de palma y la vulneración de derechos de pueblos indios y comunidades negras, así como desconociendo que la cubierta forestal de la provincia de Esmeraldas forma parte del último reducto de bosques tropicales de la costa del Pacífico en América y es parte de la región biogeográfica del Chocó,<sup>156</sup> uno de los *hot spots* del planeta.<sup>157</sup>

No solamente fue la promulgación del Decreto antes señalado el que fortaleció el desarrollo de la palma aceitera en el norte de Esmeraldas sino también la disponibilidad de infraestructura que facilitó el Estado, desde servicios básicos, como lo reconoce el presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera -ANCUPA-, hasta vías de comunicación que contribuyeron a articular a la provincia con el resto del país. Al respecto es ilustrativa la opinión de otro representante de este gremio, presidente de la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional (FEDAPAL):

"Los proyectos iniciaron en el 2002-2003 luego de que el Estado abriera dos caminos, desde Esmeraldas a Rioverde y el otro que entra desde Ibarra, desde Salinas (se refiere a las carreteras Borbón-Esmeraldas inaugurada en 1983 y a la carretera Ibarra-San Lorenzo que existía desde 1957, según se detalló en páginas anteriores). Sin vías era imposible que se instalen los cultivos de palma. Antes de la palma hubo un período de 80 años de explotación maderera. La palma fue a instalarse en una superficie donde la cubierta vegetal ya había sido removida por la explotación maderera. Sí hubieron algunos abusos y atropellos que como gremio no podríamos avalar, esconder. Pero en lo fundamental esa

---

<sup>156</sup> La importancia biológica del Chocó está dada por la presencia de 6.300 especies de plantas de las cuales el 23% son endémicas, más especies de palmas que en cualquier otro lugar de la tierra, 830 especies de aves con un 10,2% de endemismo, 235 especies de mamíferos entre los que 60 son endémicos, 350 especies anfibias que tienen más de un 60% de endemismo y 210 especies de reptiles, 30% de los cuales son endémicos (Terrack y Rebolledo, 2012: 22).

<sup>157</sup> El término *hot spot*, acuñado por el biólogo estadounidense Norman Myers (1998), se utiliza para designar áreas especialmente relevantes por la biodiversidad que encierran. La caracterización de un área como *hot spot* depende del nivel de endemismo de las especies y el nivel de amenaza.

era una tierra abandonada.” (Entrevista con el Presidente de la FEDAPAL, 23.01.2018).

Ante la imagen de abandono, de “tierras de nadie”, de que los márgenes y confines del territorio nacional están deshabitados, el ingreso de la palma aceitera al norte de Esmeraldas se presenta, desde el punto de vista de los palmicultores, como una contribución para afirmar la presencia del Estado a través de industrias que prometen riqueza, trabajo y la anhelada domesticación de un entorno que hasta entonces había dado las espaldas a la civilización. En esta dirección resultan aún más reveladoras las palabras de uno de los representantes del sector de la palma aceitera entrevistados en el marco de este trabajo,

“La tierra en San Lorenzo estaba subutilizada. Hace 18 años, en 1999, cuando llegamos a San Lorenzo, la gente era recolectora. No se producía nada que no sea fruto de la recolección. La gente se alimentaba de pescado, concha, camarón y plátano y no había cultivos en la zona y la gente se dedicaba única y exclusivamente a la explotación de la madera. Era una tierra que estaba ociosa y que había que generar trabajo y eso fue lo que pasó. Además, la tierra en esa zona nunca tuvo propietarios. Las tierras fueron adjudicadas a la mayoría de la gente, casi nadie llegó a comprar las tierras, fueron adjudicadas y se manejaban como tierras de familia, por herencia, y cuando se verificaba las tierras, la gente no conocía sus tierras, y había 10 beneficiarios de esas tierras porque nunca se acercaron a colocar un poste para una cerca, a limpiar un pedazo para un potrero. No. Ese pedazo es mío, también es de mi tía, también es de mi hermano. Nunca le dieron el valor a la tierra para hacerla producir. Llegan las empresas grandes y comienzan a comprar grandes extensiones y se trabaja con el Ministerio del Ambiente para hacer un área específica donde se va a desarrollar el cultivo de la palma africana. A partir de conversaciones con el Ministerio del Ambiente de ese momento, se crea una cancha de aproximadamente 200.000 hectáreas, un espacio donde se pueda desarrollar la palma. Y así fue. Algunas empresas habían comprado en algunos sitios que salían de esas 200.000 hectáreas y entonces hubo procesos de reparación, de recuperación”. (Entrevista con el Director Ejecutivo de ANCUPA, 25.01.2018).<sup>158</sup>

El hecho de categorizar ciertas áreas como abandonadas representa, por un lado, una estrategia discursiva sobre la que se sostiene la expansión y acumulación del capital (Harvey, 2004, 2006). Estos espacios y territorios externos a los centros de acumulación y consumo se conciben como disponibles para la extracción de riqueza y son, como lo han demostrado varios autores (Luxemburgo, 1967; Moore, 2000; Mezzadra y Neilson, 2003), constitutivos al desarrollo y consolidación del capitalismo. Es en estas áreas externas, marginales y subalternizadas, donde siguen tomando lugar procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Su articulación a los centros de

---

<sup>158</sup> Nótese que el representante de ANCUPA asume una superficie 4 veces mayor para la instalación de cultivos de palma aceitera que aquella definida en el Decreto Ejecutivo No. 2961.

acumulación y consumo responde menos a las necesidades internas, a las dinámicas y lógicas de organización de sus habitantes que a los flujos e intereses del capital. Un segundo elemento ligado a la imagen de tierras subutilizadas evidencia la concepción según la que, aquellas formas de organización social que no operan bajo el paradigma capitalista, como sucede con las comunidades negras del norte de Esmeraldas, son entonces tratadas como no existentes, como atrasadas o prescindibles, en una clara continuidad con lo sucedido en los primeros años de la república cuando el Estado no tuvo empacho en entregar parte del territorio de Esmeraldas a capitales internacionales, prescindiendo de la existencia de otras formas de organización y ocupación del espacio. Si el establecimiento de este cultivo se asume como una actividad que transformó tierras abandonas y subutilizadas en tierras productivas, es obvio que tanto el proyecto económico de la palma aceitera cuanto el Estado, hicieron caso omiso de poblaciones que se regían por la propiedad comunal de la tierra que entraña, como lo demuestran varios estudios, una forma particular de organización y distribución de los recursos (Aguilera Klink, 1996; 2012).

Si bien las implicaciones del despojo de los territorios serán abordadas más adelante, conviene por el momento situar que el impulso al cultivo de palma aceitera, como una de las materias primas más promisorias en la fabricación de agrocombustibles, fue una respuesta a un discurso que en el ámbito internacional advertía sobre la necesidad de identificar fuentes energéticas alternativas ante el agotamiento del petróleo:

“(…) uno de los argumentos que más frecuentemente se usa para advertir la necesidad de transitar hacia una nueva matriz energética, y de allí para impulsar los agrocombustibles, es que se ha llegado al ‘pick oil’ (punto de inflexión en la curva de Hubbert donde el petróleo es cada vez más inaccesible, costoso y contaminante). Ello estimula pensar que es urgente que se introduzcan otras fuentes de energía distintas a las fósiles para suplir la creciente demanda. De esta reflexión se pasa a decir que entre esas energías, las más promisorias son las obtenidas de los agrocombustibles, la hidroenergía y la hidroelectricidad o, incluso, la energía nuclear” (Rincón coord., 2008: 17).

En este contexto, el Protocolo de Kioto de 1997 fue indirectamente un aliciente para la proliferación de los cultivos de palma aceitera. Su expansión se justificó entonces como un medio para el cumplimiento de metas supuestamente orientadas a favorecer la consolidación de una “economía verde” y atender el interés de los países del norte, especialmente del bloque perteneciente a la Unión Europea, que se había propuesto incrementar la utilización de carburantes provenientes de agrocombustibles hacia el 2020 (Borras et al., 2010; FAO, 2008; White y Dasgupta, 2010). La crisis del petróleo y el

calentamiento global representaron, por tanto, un estímulo para explotar nuevas fuentes energéticas, corroborando lo que Marx (1999 [1987]) habría señalado hace un siglo atrás al demostrar que la solución a la brecha metabólica pasaba por la creación de nuevos mercados y la ampliación de la oferta de productos en nuevos territorios, así como reafirmando que la apertura de un mercado y la atención a la demanda internacional son resultados de la expansión de la frontera en el *space-of-flows* (Moore, 2000; 2003).

### 5.2.2. Tierras ocupadas, territorios vacíos

*“Defender nuestra tierra porque eso es lo principal que nosotros debemos tener para después hablar de una cultura porque sino tenemos territorio tampoco tenemos cultura” (Érica Tascón, Comité de Jóvenes del Norte de Esmeraldas).<sup>159</sup>*

La deforestación es uno de los impactos más notorios ocasionados por la instalación de los cultivos de palma aceitera (Mingorance, Minelly y Le Du, 2004; Altieri y Bravo, 2008). Antecedida por lo general por la tala de grandes superficies a cargo de empresas forestales, la destrucción del bosque no solo que facilitaría la ampliación de nuevas áreas para cultivos, sino que sugeriría una estrecha relación entre deforestación y palma aceitera, a modo de un acuerdo implícito para que el desbroce de la cobertura vegetal abra el camino al establecimiento de cultivos de agrocombustibles (Minda, 2004). En los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en las áreas ocupadas por las empresas productoras de palma aceitera, la deforestación acusa niveles críticos. En esta zona, para el 2007 se registraba el promedio más alto de deforestación (1,7%), casi tres veces más que la media nacional (Ecociencia, 2007, citado por Lapierre, 2012: 9). En correspondencia con estos datos, estudios intertemporales respecto a la evolución de la cobertura vegetal en Esmeraldas advierten que entre el 2001 y 2015, al menos 100 mil hectáreas de bosque se habrían perdido, sobre todo en el norte de dicha provincia. Esta pérdida representa una tala de 6.640 has/año y equivale al 16% del total de la deforestación que Ecuador ha sufrido en 15 años.<sup>160</sup>

Una vez sin cobertura forestal, los suelos son el soporte para la instalación de los cultivos de palma aceitera. De acuerdo al Censo Nacional Palmero de 2017 (FEDAPAL) impulsado por los principales gremios del sector, en los tres cantones del norte de Esmeraldas la superficie ocupada por este cultivo ascendería a 29.965,97 hectáreas, lo

---

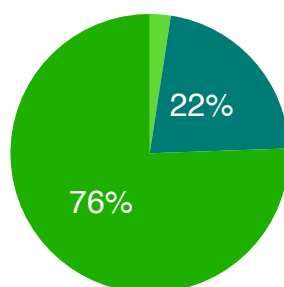
<sup>159</sup> Testimonio presentado en la Audiencia del Chocó (Acción Ecológica, 2017: 37).

<sup>160</sup> Comunicación personal con Malki Sáenz, Coordinador de la Unidad de de Información Socioambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar, 24.10.17.

que representa el 25,8% de la superficie cubierta por palma en la provincia. El Gráfico 5 presenta la distribución del cultivo de palma por cantón.

**Gráfico 5. Distribución de la superficie de palma aceitera en Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo según el Censo Palmero**

■ Rioverde ■ Eloy Alfaro ■ San Lorenzo



Fuente: FEDAPAL. Censo Nacional Palmero 2017  
Elaboración: Propia

Otra fuente consultada, la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2016 señala que la palma cubría en ese año una superficie de 163.217 has. en Esmeraldas, con más de 42 mil hectáreas en la parte norte (INEC, 2016).

Una probable explicación a la presencia de datos tan dispares descansa posiblemente en la pérdida de miles de hectáreas de palma aceitera por el ataque de la enfermedad conocida como pudrición del cogollo (PC) que comenzó a afectar a las plantaciones desde el año 2004. Según la Asociación Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera, ANCUPA, para el 2014 esta enfermedad habría destruido 23 mil hectáreas de plantaciones ([www.ancupa.com](http://www.ancupa.com)).

En todo caso, más allá de la variabilidad de los datos no es posible desconocer que la expansión de los cultivos de palma ha incidido sobre la construcción del espacio con afectaciones hacia territorios comunitarios. Uno de los ejemplos más relevantes es el de la Comuna Río Santiago Cayapas que ha perdido el control de buena parte de su territorio. Hacia el fin de la primera década del 2000, Minda (2012: 67) identificó que entre el 40% o más de la mitad del territorio comunal, es decir, entre 27 mil y 33 mil hectáreas, estaban en manos de empresas o personas externas a la comunidad que habrían utilizado artificios de todo tipo para “adquirir” tierra comunitaria. Para el 2016, la superficie fuera del control

de la comuna habría sobrepasado las 35-38 mil hectáreas, que estarían siendo usufructuadas por empresas de palma aceitera, operaciones mineras ilegales y colonos externos al área (Entrevista al Presidente de la Comuna Río Santiago Cayapas, 03.02.18). La magnitud de la ocupación de tierras comunitarias y la consiguiente pérdida de fuentes de vida, ha contribuido a que al interior de la comuna se discuta la posibilidad de cobrar un canon de arrendamiento por hectárea, una medida que si bien podría paliar de forma coyuntural la necesidad de ingresos de la población, no resuelve la depredación ambiental ni repara el daño económico, social y cultural infringido a los pobladores ancestrales de este territorio.

El caso de la Comuna Río Santiago Cayapas no es aislado. Minda (2012) estudia la venta de 5.000 hectáreas que realizó la comunidad de Ricaurte en 1998, bajo el ofrecimiento de inversión en la zona y la creación de fuentes de empleo. Hacia la primera década del presente siglo, el mismo patrón de presión sobre la tierra se desdobló sobre las comunidades La Chiquita y Guadualito del pueblo Awá, rodeadas en casi un 60% por plantaciones de palma aceitera y cercanas a una planta extractora de aceite de palma (Hazlewood, 2010; Moncada, 2013). Frente a estas comunidades se ampliaron las estrategias de presión para acceder a tierras comunitarias, incluyendo el daño a los cultivos familiares, la muerte de animales, extorsión, incendio de viviendas, hasta amenazas de muerte, conjuntamente con limitaciones a la libre circulación de las personas por la presencia de guardias armados que impiden el paso de la población por áreas cercanas a las plantaciones y por caminos “comprados” por las empresas de palma (Cañas, 2009; CERD, 2016). La serie de atropellos cometidos serían el detonante para el inicio de una resistencia más orgánica por parte de La Chiquita y Guadualito que se prolonga hasta la actualidad.

El territorio habitado se convirtió en un territorio ocupado con el consiguiente paso de la propiedad comunal a la propiedad privada o como se mencionó en una entrevista:

“Esmeraldas es una de las provincias del Ecuador que más sembríos de palmicultoras tiene. Al inicio se presentó como una oportunidad para que los campesinos mejoraran sus condiciones de vida; sin embargo a medida que pasan los años vemos que el cultivo de la palma africana es sin duda un negocio rentable para el agro-empresario exportador – terrateniente – testaferro y no para el pequeño campesino. Más bien lo que ha existido es presión para que los campesinos abandonen sus tierras y que van desde las amenazas, a los desalojos forzosos. Eso no es desarrollo ni tampoco una oportunidad para los campesinos” (Entrevista a Coordinadora de Pastoral Social, 28.01.2018).

En la actualidad la tierra sigue siendo materia de presión como lo demuestra una de las comunidades más antiguas del norte de Esmeraldas, la comunidad 5 de Junio, también conocida como Wimbí, cuyas 350 familias se resisten al ingreso de las plantaciones de palma tanto por los impactos ambientales como porque no están dispuestos a ceder sus tierras donde viven hace más de 300 años (Morán, 2017c). De acuerdo a lo señalado en una entrevista:

“El conflicto de Wimbí podría haberse solucionado rápidamente de existir la voluntad política para hacerlo. Sin embargo, en la medida en que el gobierno anterior demostró tanto apoyo a la palmicultura, era difícil pensar que las 5 mil hectáreas en litigio sean restituidas a la comunidad, más aún cuando el dirigente de Wimbí enfrentó una acción penal por apropiación de maquinaria de la palmicultura, como efectivamente ocurrió cuando la empresa ingresó a la zona y destruyó los cultivos de la comunidad en un acto amenazante para tomar el control del territorio. Para complicar el panorama, en este proceso se perdió un informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 2017 respecto a la tierra en litigio que confirmaba la ancestralidad de estos territorios. La abogada a cargo del caso, quien se presume fue comprada por la palmicultura, demostró una actitud negligente pues permitió que todos los recursos presentados caduquen. En este momento se está levantando información histórica a través de técnicas antropológicas con el fin de demostrar que este es un territorio ancestral”. (Entrevista a activista de derechos humanos, 31.01.2018).

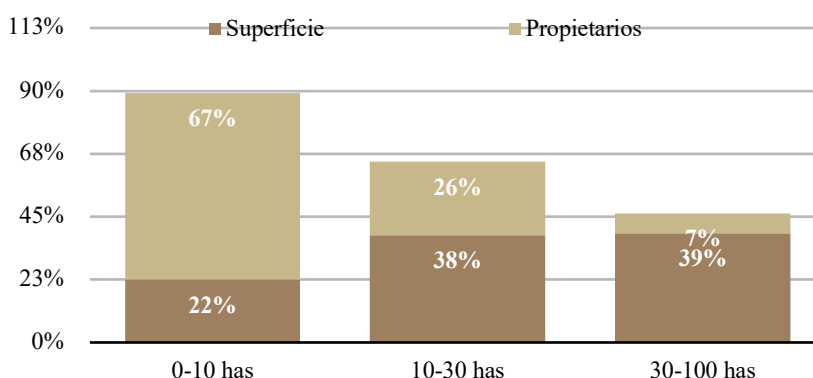
El despojo y la apropiación enfrentaron una mayor resistencia por parte de los pueblos Awá y Chachi cuyos territorios estaban legalizados, y recibieron respuestas variadas entre la población colona (Tamayo, 2010; Potter, 2011). La trayectoria migratoria de este último sector poblacional que habría llegado a la región a fines de los años 60 del siglo pasado para convertirse en pequeños y medianos propietarios de fincas, contribuye a explicar que hayan optado por transformarse en abastecedores de las empresas, lo que no afectaba la tenencia de la tierra pero sí su uso.

La impasibilidad del Estado frente a la pérdida de territorios comunitarios constituye una evidencia de cómo la colonialidad del poder desconoce o relega a un plano inferior formas de propiedad y posesión de la tierra distintas a la propiedad privada que distingue a la modernidad (ver la sección 4.6.1.3 de esta tesis donde se examina la visión de las juntas parroquiales sobre la propiedad colectiva), a la vez que simboliza, sobre todo, la indiferencia con la que la sociedad trata a poblaciones que considera pertenecen a una escala inferior del desarrollo, a los negros e indios que viven en el norte de Esmeraldas, y el sitio concedido a la naturaleza como pura materia prima para la producción de bienes demandados en el mercado internacional. En efecto, el proceso de apropiación-concentración de la tierra sobre el que se asienta la expansión de las

plantaciones de palma aceitera ha hecho caso omiso de normativa vigente que protege y garantiza la propiedad comunitaria en manos de sus propietarios ancestrales, de los derechos colectivos que les asiste, haciendo caso omiso de sus cuerpos y subjetividades. De manera particular, la Constitución (Artículo 57, §4) estipula que las tierras comunitarias son parte de los derechos colectivos y como tales, las comunidades tienen derecho a: “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos”.

Para ilustrar desde otra perspectiva la dinámica imperante en el mercado de tierras que se traduce en la venta individual y la fragmentación de territorios comunales, Michel Lapierre (2012), propone un análisis a partir de los datos oficiales sobre la tenencia de la tierra lo que implica, en la práctica, tratar a la tierra como un activo individual y adoptar el único lenguaje que existe en las estadísticas oficiales. A través de este abordaje metodológico Lapierre (2012: 12-14) demuestra que la presión para el establecimiento de los cultivos de palma aceitera en el norte de Esmeraldas, y de manera particular en el área baja donde se concentran estas plantaciones, ha determinado que se vaya configurando un patrón de cada vez mayor inequidad en la distribución de la tierra. Esta realidad se refleja en que mientras cerca del 40% de la tierra está en manos de un 7% de propietarios, a la mayor parte de la población (93%) le corresponde el 60% restante (Ibid.: 12), como se presenta en el Gráfico 6.

**Gráfico 6. Distribución de la tierra en el área de concentración de las plantaciones de palma aceitera**



Fuente: Lapierre, 2012: 17, a partir de datos del PDNR, 2009  
Elaboración: Propia

Dentro de este segmento mayoritario, un análisis más detallado revela, además, que el 9,52% de las familias sobreviven con superficies de 1,5 hectáreas o menos, que el



35,71% acceden a propiedades que fluctúan entre 1,5 y 5 hectáreas y que el 21,43% dispone de 5 a 10 hectáreas de tierra. La inequidad en la distribución y acceso a la tierra fue un fenómeno que comenzó a configurarse hace ya casi dos décadas, marcando un proceso de concentración de la tierra en manos de la palmicultura “y su anverso, la pérdida de la propiedad de sus habitantes” (Ibid.: 12).

El recuento anterior evidencia que la expansión de la frontera de la palma en el *space-of-places* abarca un conjunto de estrategias que terminan imponiendo presión para que un alto número de habitantes abandone sus tierras y se asiente en otras ciudades y centros poblados en condiciones de alta vulnerabilidad social. Hay comunidades que como Tangaré y Papayal en la parroquia de Anchayacu registran la salida permanente de habitantes (GADAnchayacu, 2015) y otras como Rocafuerte donde la población ha disminuido como consecuencia de la emigración en búsqueda de empleo (Borja Consultores y GADRocafuerte, 2015). Esmeraldas tienen la más alta tasa de emigración laboral de la Zona 1 con 49,4%, frente a la del Carchi que es de 7,5% (SENPLADES, 2015: 30). A criterio de una pobladora de Maldonado, “muchos jóvenes, sobre todo hombres, se han ido. Están en Quito, Guayaquil, en Esmeraldas y en San Lorenzo. Hay algunos que van a Colombia y regresan con mucho dinero” (Entrevista realizada el 26.01.2018).

En casi todas las parroquias, los PDOT señalan a la emigración como una estrategia recurrente para la obtención de ingresos que llega, en casos como los de Atahualpa, a involucrar al 80,50% de la población mayor de 10 años que migra temporalmente por períodos de tiempo de distinta duración (GADAtahualpa. s/f.: 51), o de Telembí cuya realidad se condensa en la siguiente cita:

“En estos últimos años se ha producido movilizaciones sucesivas de la población Chachi y afrodescendiente, que se les ha considerado como un proceso de desajuste social, económico y cultural. Se ha determinado que un 56,70% de la población total migra temporalmente en lapsos que fluctúan de una semana hasta más de dos años en busca de medios suficientes para satisfacer las demandas familiares, por estudio, salud u otras necesidades” (GADTelembí, 2015: 71).

La vida de quienes fueron despojados de sus tierras dependía tradicionalmente del bosque. Durante cientos de años estas comunidades combinaron la recolección de productos como tagua, balsa, frutos, semillas, la pesca, y el cultivo en pequeñas parcelas para el auto consumo y la venta de excedentes, basadas en un manejo agroforestal recreado por generaciones. Aunque esta estructura económica tradicional comenzó a

soportar las primeras afectaciones en la década de ochenta con el ingreso de las empresas madereras, desde el decenio de 1990 en adelante su ruptura resulta ya evidente sin que exista una mejora de sus condiciones de vida, según lo señalado en el Informe Alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas:

“En el norte de Esmeraldas, la mayoría de la población tiene su empleo en la rama de actividad primaria, es decir, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (59,2% en Eloy Alfaro, 48,9% en San Lorenzo y 70% en Rioverde), sin embargo, ahora se realiza en condiciones de dependencia (peón agrícola de palma africana o maderero), mientras que antes los habitantes producían sus propias tierras. La evidencia señala que el cambio genera más empobrecimiento” (FECHE et al., 2017: 12).

La ocupación de tierras “baldías” y de territorios de comunidades, la “venta” de tierras o la presión para forzar que las familias abandonen el área, lo que conlleva a la desterritorialización de grupos humanos, se combinan con otras menos violentas pero con efectos igualmente negativos sobre la región. La transformación de productores independientes en abastecedores de las empresas de palma aceitera no está, por ejemplo, exenta de abusos en la medida en que el reducido número de hectáreas destinado al cultivo de palma aceitera (5 hectáreas generalmente), no resulta rentable para el productor (Potter, 2011). Los pequeños campesinos que abastecen a las empresas palmicultoras, muchos de ellos colonos que compran tierra, firman un acuerdo a través del cual acceden a un crédito para la instalación del cultivo. El crédito supuestamente debería venir acompañado de insumos y asistencia técnica, que normalmente no se hacen efectivos, y debe ser cancelado desde el primer año, sin tomar en cuenta que la primera cosecha de palma se obtiene a los 4-5 años de plantación. La cláusula de exclusividad que contiene estos acuerdos, según la cual los agricultores deben entregar la fruta a la extractora de propiedad de la empresa por un periodo de 10 años, somete a los pequeños propietarios al control de las empresas que manipulan el precio a su antojo y acaparan los mejores años de cosecha (Presidencia de la República, 2009; Yumbra et al., 2013). A la larga, el campesino pierde la inversión y enfrenta la presión por vender su tierra.

El modelo del agro negocio no contempla la convivencia entre las grandes empresas y las tierras campesinas o indígenas. Su éxito demanda de un proceso de “vaciamiento territorial” de las poblaciones originalmente asentadas en estos territorios, de la destrucción de ecosistemas y de una profunda alteración del paisaje. El desplazamiento temporal o definitivo de la población que ha sido expulsada de sus tierras y ha perdido sus fuentes de sustento calza con lo que la literatura califica de refugiados

ambientales (Brown, 1976; Conisbee y Simms, 2003, Reuveny y Peterson, 2007) pues su emigración es tanto la respuesta a la ocupación del territorio-soporte-de-vida para el desarrollo de actividades económicas con orientación al mercado, como el producto de daños muchas veces irreparables al entorno social y geográfico donde vivían. Este fenómeno, hasta hace poco tiempo invisible y desconocido por la institucionalidad oficial, ha comenzado a ser introducido en el discurso de algunas autoridades, como se desprende de la siguiente cita:

“La palma no se desarrolla desde una lógica de la economía popular y solidaria. Está concentrada en terratenientes y en empresas palmicultoras y madereras. Por eso ha generado procesos de segregación que han ocasionado el desplazamiento forzoso de la población. Para enfrentar este problema se están impulsando intervenciones cuya orientación es atender la lógica de la necesidad ... las necesidades de las personas que están siendo afectadas por la expansión de la palma” (Entrevista con el Subsecretario de la Zona 1 de SENPLADES, 15.01.2018).

La salida de población tiene su correlato en el ingreso de nuevos colonos. A manera de ejemplo cabe citar lo que señala el PDOT de Chontaduro al respecto: “se presentan conflictos por la llegada a la parroquia de personas de otros cantones a causa de la venta de tierras, que posteriormente la utilizan para la siembra de palma africana” (GADChontaduro, 2015: 37); Lagarto acusa el ingreso de población de otras provincias, atraídos por la tierra y en Alto Tambo, solo en el año 2015 se reportaron 77 casos de compra de tierra y la emigración de 117 personas (Fundación Altrópico, 2015: 54 y 56).

La ausencia de control no solo está presente en el traspaso de tierras comunitarias sino que se extiende a por lo menos dos ámbitos adicionales: las áreas naturales protegidas y la propiedad de la tierra en la zona de frontera. En el primer caso, llama la atención la falta de medidas para detener la presencia de plantaciones de palma aceitera en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas o a su interior como sucede con la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje en el territorio de Ancón de Sardinas y Mataje o con el Refugio de Vida Silvestre La Chiquita (GADCalderón, 2015). De acuerdo a la legislación vigente (artículos 68 y 75 de la Ley Forestal y de Conservación de Área Naturales y Vida Silvestre y artículo 3 de la Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales), las áreas protegidas no pueden ser alteradas y existen prohibiciones expresas de ocupación o deterioro de sus recursos.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Esta Ley fue suplantada por el Código Ambiental Nacional -COA- en el año 2017, que recoge igual disposición en torno a la intangibilidad de las áreas naturales protegidas (Arts. 5 y 39).

En relación a la propiedad de la tierra en el área cercana al límite internacional y en áreas de seguridad nacional, la normativa vigente prohíbe la adquisición de títulos de tierras a extranjeros: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir ningún título de tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley” (Art. 405 de la Constitución). El área de seguridad nacional corresponde, según la Ley de Seguridad Pública y el Estado, a una zona de 20 kilómetros desde el límite fronterizo hacia el interior del territorio nacional que estaría bajo el control de las fuerzas armadas (Art. 39).<sup>162</sup> Pese a la vigencia de esta normativa, el Grupo Indupalma, el primer productor de aceites y oleaginosas en Colombia, tiene participación en las principales industrias de producción y extracción de aceite de palma en Ecuador como Palmeras del Ecuador y Energy & Palm ([www.indupalma.com](http://www.indupalma.com)), que operan en el norte de Esmeraldas, según también lo corrobora Bayón (2012). La empresa Oleana, antes conocida como Grupo Alzamora, con participación de capitales estadounidenses y españoles, tiene presencia en Ecuador y Colombia, y controla toda la cadena de la producción de palma aceitera, desde el cultivo, pasando por la extracción y refinación, hasta la exportación, con una terminal de almacenamiento cerca del puerto de Esmeraldas, una planta refinadora, tres plantas de extracción, ocho centros de acopio y dispone de plantaciones en áreas limítrofes con Colombia (<https://www.oleana.ec>). Tanto el representante de FEDAPAL, como el de ANCUPA, confirmaron durante las entrevistas que el capital extranjero está presente en el norte de Esmeraldas. Mientras para el primero, la participación de otros países (sin especificar cuáles) “no debe ser un estigma pues lo que está pidiendo el gobierno es inversión extranjera y son precisamente esas empresas las que han generado la tecnología pues en Ecuador hay un problema muy serio en términos de investigación” (Entrevista a Presidente de FEDAPAL, 23.01.2018), el representante de ANCUPA señaló el carácter innovador de la alianza con el capital foráneo: “En San Lorenzo hay una empresa que tiene capital colombiano que se creó bajo la modalidad de empresa binacional andina, es Palesema” (Entrevista a Director Ejecutivo de ANCUPA, 25.01.2018).

Los nuevos dueños del territorio han impuesto una lógica de organización del espacio radicalmente distinta a la que caracterizó la dinámica en esa área. La libre

---

<sup>162</sup> La Ley prevé dos excepciones: “1. Matrimonios y uniones de hecho legalmente reconocidos, de ecuatorianas y ecuatorianos con extranjeros, cuya sociedad conyugal y de hecho tengan por lo menos 5 años de duración; y, 2. Personas jurídicas nacionales cuyos socios extranjeros se encuentren domiciliados en el país por el lapso de por lo menos 5 años, continuos e ininterrumpidos” (Art. 40).

movilidad de la población ha sido suplantada por zonas cercadas y vigiladas por guardias armados (Hazlewood, 2009; García, s/f). Este proceso de privatización, fraguado durante varios años, cobija la operación de una suerte de enclaves que ha permitido a las empresas de palma funcionar con regulaciones más laxas que en el resto del territorio del Estado, tanto en lo concerniente al ambiente, como en lo laboral. De esta manera, el control de la soberanía territorial y de las regiones fronterizas estaría compartido entre el Estado y empresas privadas, tendiendo una paralela con lo sucedido entre los siglos XIX y XX e incluso antes, cuando la presencia del Estado en la frontera, como se revisó en secciones anteriores, estuvo a cargo de capital internacional, de mineros y empresas forestales. En este orden de cosas, la presencia de capital nacional y extranjero en las empresas ubicadas en la región fronteriza matiza el supuesto interés del Estado ecuatoriano por favorecer la seguridad, integridad y soberanía de los territorios fronterizos pues lo que efectivamente sucede es una suerte de internacionalización de los espacios de frontera en la medida en que la organización del territorio responde en lo fundamental a la satisfacción de una demanda de *commodities* definida externamente, con fuerte presencia de capital internacional.

### **5.2.3. La palma aceitera y sus impactos: “proyectos contra la vida”**

La presión por la tierra, la pérdida y fraccionamiento de territorios comunales, la “sistemática desposesión de los medios de vida” (FECHE et al., 2017: 12) y las consiguientes amenazas sobre la seguridad alimentaria de la población, los cambios en el paisaje y en la calidad del medio natural y social del norte de Esmeraldas, son procesos que explican la agudización de un entorno de conflictividad alrededor de la palma que no ha pasado desapercibido. Diversas investigaciones, desde distintos campos disciplinarios, han estudiado y aportado miradas complementarias sobre la serie de conflictos asociados a la consolidación de un modelo definido desde la centralidad del poder y al margen de la opinión de quienes habitan en esta área. Entre los estudios llevados sobre los efectos de la consolidación del cultivo de la palma aceitera en el norte de Esmeraldas hay, por un lado, aproximaciones que intentan dar cuenta de las implicaciones sobre el ambiente, la deforestación, el trabajo, la violencia, las políticas públicas o las expresiones de resistencia (Minda 2002, 2012 y 2013; García, s/f; Hazlewood, 2010; Bravo y Bonilla, 2011; Roa Ovalle, 2012; Bayón, 2012; Moncada, 2013) y, por otro lado, investigaciones que se centran en el análisis de conflictos que se desarrollan en una comunidad específica (Tamayo, 2010; Mideros, 2010; Cañas, 2009; Jarrín, 2014; Morán, 2017c).

La mayoría de estudios concuerda que al imponer una organización del espacio y de la producción concebida al margen de los históricos pobladores del norte de Esmeraldas, no se consideraron los impactos actuales y potenciales asociados a su cultivo. Sin llegar a un detalle exhaustivo, merece la pena resaltar algunos de efectos más sobresalientes: los agrocombustibles generan más emisiones que el diesel convencional, cada tonelada de palma aceitera producida resulta en 33 toneladas de emisión de dióxido de carbono – 10 veces más que el petróleo (Mombiot, 2007 citado por Holt-Giménez y Patel, 2009: 70); la producción de un litro de combustible proveniente de la soja o de la palma requiere 2.500 litros de agua (FAO, 2009); la eutrofización por fertilizantes, la acidificación, la disminución del ozono y los impactos sobre la salud humana tienen severas consecuencias sobre el clima (Runge y Senauer, 2007); el balance energético de los agrocombustibles no es positivo en la medida que la energía utilizable sería mayor que la energía gastada en su producción (FAO, 2008).

Junto a la pérdida de la tierra y los problemas ambientales, uno de los temas más polémicos alrededor de la palma es el del empleo. Pese a las amplias superficies ocupadas por este monocultivo, las plantaciones de palma no representan oportunidad de empleo para la población local.<sup>163</sup> Según estimaciones realizadas en Colombia, el cultivo de 100 hectáreas de caña de azúcar o de palma aceitera generarían 10 empleos; en la misma superficie cultivada de soja se requerirían dos trabajadores (Trevisan, 2007, citado por Rincón coord., 2008: 28) y uno solo en el caso de plantaciones de eucalipto (Ibid.: 45). La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA) presenta información más optimista al señalar que en Ecuador por cada 100 hectáreas de palma aceitera se generarían 17 empleos directos. Aún bajo este optimismo, el número de empleos generados por el cultivo de palma serían la mitad de los que el estudio coordinado por Rincón afirma requerirían 100 hectáreas de cultivos familiares en los trópicos: “en los trópicos 100 hectáreas de agricultura familiar crean 35 empleos” (Ibid.).

Quienes trabajan como jornaleros en las plantaciones están expuestos a condiciones de trabajo caracterizadas por su precariedad, sin estabilidad o posibilidades de asociación y carentes de medidas de seguridad social y laboral. Para manipular las altas dosis de agroquímicos que requieren las plantaciones, los trabajadores no cuentan

---

<sup>163</sup> Con fines ilustrativos cabe señalar que en Maldonado y Colón Eloy del María, dos parroquias que han soportado el crecimiento expansivo del cultivo de palma aceitera, los planes de desarrollo local indican que el número de empleos generados es de 140 y 60, respectivamente, lo que representa el 20% y el 12% de la PEA de cada una de las parroquias (CEPESIU, 2016).

con equipamiento especial y hasta hace una década atrás una misión que evaluó la calidad del trabajo en las palmicultoras denunció la ocupación de niños y niñas en respuesta a las exigencias de las empresas para cumplir con un determinado volumen de cosecha, así como de familias de personas refugiadas sometidas a duras condiciones de trabajo (Misión de Verificación, 2007). Hasta el 2009 se registraron denuncias de que las empresas productoras de palma aceitera mantenían la figura de la tercerización, en abierta violación de la legislación vigente (Presidencia de la República, 2009) y que los trabajadores recibían 6-9 dólares al día por jornadas de más de 12 horas mientras que el salario de los supervisores no sobrepasaba los 12 dólares diarios (Bravo y Bonilla, 2011, citado por Bayón, 2012: 7).

En la actualidad, la realidad laboral en las plantaciones parecería no haber cambiado radicalmente según información proveniente de las entrevistas realizadas:

“La afirmación de que los cultivos de palma son una fuente de trabajo debe relativizarse. Hay trabajo mientras la palma crece pues requiere de cierto cuidado. Luego, una vez que la plantación ya está consolidada, el trabajo requerido es mínimo. Las plantaciones de palma africana, además, han optado o bien por contratar jóvenes de 16-17 años a quienes se les paga muy mal (...). Quienes trabajan en las palmicultoras, además, suelen ir con sus hijos pequeños. Se ha podido ver niños de siete años trabajando con sus padres” (Entrevista a técnica del Seguro Social Campesino, 31.01.2018).

De acuerdo al Informe Alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, casi el 80% de los trabajadores vinculados a la palma aceitera mantiene contratos informales y no cuentan con afiliación a la seguridad social; se ha detectado que las niñas y niños de las familias que viven en campamentos dentro de las plantaciones de palma están fuera del sistema educativo, no acceden a servicios de salud y muchos empiezan a trabajar a los 8 años (FECHE et al., 2017: 17 y 28).

Pese a la precariedad del empleo generado y a la mayor oferta de fuerza de trabajo migrante, algunas de las entrevistas reconocieron que el trabajo en las plantaciones de palma es casi la única opción de ingresos que tiene la población del norte de Esmeraldas que, como se verá más adelante, ha decaído en los últimos años como consecuencia de la pudrición del cogollo (PC), una enfermedad que atacó a los cultivos:

“La expansión de la frontera agrícola fue motivo, en sus inicios, de una fuerte oposición pero también hay que reconocer que generó fuentes de trabajo. Hoy la realidad ha comenzado a cambiar nuevamente y estamos soportando un éxodo. La gente está emigrando porque después de vender sus fincas y quedarse

sin el trabajo en la plantación de palma, ya no tiene medios para subsistir” (Entrevista al Director Provincial del Ministerio de Ambiente, 03.02.2018).

En contraste con las anteriores afirmaciones, para los representantes de los gremios del sector palmicultor, la generación de empleo no es sólo la contribución más importante que ha dado esta industria al norte de Esmeraldas, sino que es un empleo ceñido a todas las disposiciones legales y que cuenta con estímulos adicionales, según lo describió el Director Ejecutivo de ANCUPA:

“Las empresas grandes habrían generado en su momento de 2.500 a 3.000 empleos directos. Por cada empleo directo se generan de 1,5 a 3 indirectos. Posiblemente se puede llegar a unas 4.000 personas indirectas. Todos los trabajadores tienen contrato, con prestaciones de ley, su pago de primas, dotación. Una actividad que ayudó mucho es la creación de los comisariatos que es un servicio que prestaban las extractoras y las plantaciones mediante el cual se les entregaba a los trabajadores productos a menor costo en relación a lo que se conseguía en el mercado” (Entrevista al Director Ejecutivo de ANCUPA, 25.01.2018).<sup>164</sup>

Sin embargo, como un técnico palmicultor lo reconoce, el empleo generado no siempre habría sido en beneficio de la población local debido a sus dificultades para cumplir con las exigencias de las empresas y otros imaginarios discriminatorios:

“Uno de los primeros problemas que encuentran las empresas en San Lorenzo es la mano de obra. Sin embargo de que había demanda de trabajo, el nativo de San Lorenzo no estaba (...) preparado para trabajar bajo presión o bajo un sistema de contratación porque ellos generalmente, de lo que cuentan, estaban dedicados a la tala del bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Que tumbaban un palo, un árbol, y con eso subsistían y cuando se les acababa la plata regresaban a cortar otro y las señoras, las mujeres de la casa, -me han contado ellos- se dedicaban a ‘conchar’, a cosechar conchas y es igual, traían sus conchas y vendían, y se descansaban hasta que se acababa la plata y volver. Eso fue difícil porque los trabajadores no se acostumbraban a los horarios. Cuando las empresas van trayendo gente, ellos sienten ‘si estoy en mi área, ¿por qué me estoy quedando sin trabajo?’” (Entrevista a técnico palmicultor, 30.01.2018).

El testimonio anterior demuestra, en línea con lo señalado por algunos pensadores, que cuando las élites mestizas dominantes visibilizan la existencia de los negros, construyen imágenes estigmatizadas y estereotipadas. El racismo se presenta así como esa jerarquía de superioridad e inferioridad producida y recreada durante siglos para mantener la dominación (Fanon, 1952).

---

<sup>164</sup> Nótese el símil con lo acontecido en la segunda mitad del siglo XIX durante la operación de la *Ecuador Land Company*. En aquel entonces, los trabajadores únicamente podían adquirir los productos que requerían en los almacenes de la empresa con una moneda que solo tenía validez en el territorio controlado por dicha compañía.



Para agravar las cosas, varios estudios han demostrado la alta exposición de las comunidades a los agroquímicos utilizados por las empresas. La concentración de agroquímicos habría provocado que en la provincia de Esmeraldas entre 1999 y 2003 se triplique el número de población envenenada por el uso de estos productos (Aguilar 2003, citado por Hazlewood, 2010: 88). El agua de los ríos, fuente principal para el consumo doméstico,<sup>165</sup> exhibe altos niveles de concentración de grasas y aceites, lo que en gran parte explica el incremento de las tasas de mortandad de peces y la desaparición de humedales (Núñez, 2004; Ponce, 2018). Tales afectaciones ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la población que no dispone de los medios económicos suficientes para adquirir las fuentes de proteína requeridas en los mercados locales y que se ve empujada a adquirir productos procesados de dudosa calidad en las cabeceras cantonales (GADTelembí, 2015).

La contaminación no proviene únicamente de los altos volúmenes de fertilizantes, sino del funcionamiento de las plantas procesadoras que deben localizarse en sitios cercanos a las plantaciones pues hay un plazo máximo de 12 horas desde que se cosecha el fruto hasta que es procesado, facilitando además la conformación de enclaves (Marín-Burgos, 2014: 75, en función de datos proporcionados por los gremios de la palma en Colombia).<sup>166</sup> “En el procesamiento de la palma se generan 2,5 toneladas de afluentes por cada tonelada de aceite” (Bayón, 2012: 6). Debido a la proximidad de extractoras a ciertas áreas pobladas, las comunidades de La Chiquita y Guadualito vienen denunciando hace más de una década la ocurrencia de enfermedades por el consumo del agua del río, dolores de cabeza y alteraciones gastrointestinales, irritaciones cutáneas y manchas en la piel (Moncada, 2013). También la nacionalidad Awá ha expuesto su preocupación por la mortandad de peces lo que incide sobre sus patrones de alimentación (Entrevista a dirigente Awá, 18.08.2018). En los primeros días de mayo del 2016, de la misma manera que lo sucedido meses atrás y también hace tres años, varios medios de comunicación publicaron que cientos de peces muertos fueron arrastrados por la corriente del río

---

<sup>165</sup> Hay parroquias como Chumundé donde 7 de cada 10 habitantes se abastecen de agua directamente del río (GADChumundé, 2015: 37).

<sup>166</sup> En San Lorenzo, ANCUPA reporta la presencia de 4 plantas procesadoras, mientras el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Esmeraldas señala que tres extractoras están registradas en el cantón: Energy Palma, Palesema, Ales Palma San Patricio (2015: 75). Pese a ser datos dispares, se debe reconocer que mientras a lo largo de los años ha aumentado la superficie cultivada de palma, el número de plantas extractoras se ha mantenido relativamente estable, lo que podría significar un aumento en la capacidad instalada de las plantas y una mayor intensificación de su uso.

Esmeraldas aparentemente por la contaminación generada por las palmicultoras (Gracia, 2016).

Otro de los efectos aún poco explorados de la deforestación y el cambio de la cobertura vegetal en el norte de Esmeraldas guarda relación con las alteraciones climáticas, sin claridad sobre las épocas de lluvia y las temporadas secas. La escorrentía y las inundaciones de los ríos son en la actualidad un fenómeno regular que no solo implica pérdidas materiales recurrentes, sino que han determinado la reubicación de poblados como lo sucedido con Anchayacu (Minda, 2012: 122) y la convivencia de varias comunidades con riesgos por inundación, deslizamientos y derrumbes. Este es el caso de Telembí donde más del 88% de los centros poblados están expuestos a estos riesgos (GADTelembí, 2015: 48).

Los impactos y problemas señalados no pasan desapercibidos para los gobiernos autónomos descentralizados. La contaminación, las afectaciones a los ríos, la pérdida de fertilidad del suelo y el incremento de los conflictos por tierra atribuibles a la palmicultura son preocupaciones que atraviesan a la mitad de los gobiernos autónomos del área: 17 de los 34 gobiernos autónomos parroquiales cuyos planes de desarrollo y ordenamiento territorial fueron analizados (Ver Tabla 11 que sintetiza el uso del territorio por parte de actores externos según parroquia). El caso de San Lorenzo es revelador al respecto: “el 54% del territorio cantonal está sometido a una presión que va más allá de los parámetros que puede soportar la tierra por sus características, lo que genera conflictos de diverso tipo” (GADSan Lorenzo, 2013: 33).

**Tabla 11. Principales usos del territorio. Información parroquial**

Parroquia	Datos básicos		Uso del territorio			
	Superficie (246,13 km²)	Nº de habitantes	Bosques	Palma	Minería	Otras actividades extractivas
Valdez (Limonas)	92,87	6.226				
Anchayacu	246,13	2.537				
Atahualpa	248,13	1.913				
Borbón	192,57	7.696				
La Tola	243,13	4.366				
Luis Vargas Torres	743,52	352				
Maldonado	57,43	1.861				
Pampanal de Bolívar	77,45	1.118				
Santo Domingo de Ónzole	677,48	1.934				
San Francisco de Ónzole	165,22	1.430				
Selva Alegre	49,56	1.166	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Parroquia	Datos básicos		Uso del territorio			
	Superficie (246,13 km²)	Nº de habitantes	Bosques	Palma	Minería	Otras actividades extractivas
Telembí	1.264,86	7.367				
Colón Eloy del María	71,72	1.410				
San José del Cayapas	120,78	1.513	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Timbiré	2.208,12	1.139				
San Lorenzo	251,85	25.096				
Ancón de Sardinas	39,43	1.814				
Mataje	295,06	1.475				
Tambillo	222,05	1.743				
Tululbí	352,07	2.295				
Calderón	24,74	628				
Carondelet	76,25	1.730				
Concepción	211,83	2.354				
Santa Rita	81,32	1.639	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
San Javier de Cachaví	42,19	664	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Urbina	794	761				
5 de junio	211,67	416				
Alto Tambo	1.094,28	1.871				
Rioverde	72,42	4.964				
Chontaduro	177,45	3.222				
Chumundé	5.079,85	3.512				
Lagarto	212,78	5.674				
Montalvo	377,53	4.009				
Rocafuerte	1.233,10	5.488				

Fuente: Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de los Cantones de Eloy Alfaro, San Lorenzo y Rioverde. La información sobre superficie y población fue extraída de INEC, 2016.

Elaboración: Propia

Nota: El uso de distintos colores tiene la finalidad de diferenciar las parroquias según su ubicación cantonal: gris para las parroquias de Eloy Alfaro, amarillo para las de San Lorenzo y verde para las parroquias de Rioverde.

Llama la atención que en un buen número de planes, la nocividad generada por los cultivos de palma aceitera o por el funcionamiento de extractoras se presente como secundaria frente a otros que, según los contenidos de estos documentos de planificación, serían más relevantes y que a menudo están vinculados al comportamiento de las poblaciones locales (el hecho de que las mujeres laven la ropa en los ríos, por ejemplo), con una supuesta falta de sensibilidad o con las debilidades de la organización para proteger y controlar la utilización de los recursos naturales. Lo anterior no solo revela un cierto nivel de aceptación y un desconocimiento de los derechos humanos y territoriales, sino también la construcción de un enfoque que tiende a culpabilizar a las poblaciones locales del deterioro de su entorno y de la explotación de la naturaleza. Al respecto resulta paradigmática la siguiente afirmación:

“Patrones socio-culturales con una corta mirada para adoptar y explotación de madera como fuente de ingreso, que han traído consigo escasez de estas materias primas y pocas ventajas económicas. En esta misma línea hay otros factores que explican el por qué la corta visión, la tasa de analfabetismo es del 16,15% de sus habitantes según el censo de población (y) vivienda, el régimen educativo se ha manejado con grandes altibajos y no ha dado mayores respuestas al proceso de formación para permitir un cambio de actitud en la forma de ver el entorno y colocarlo a su servicio” (GAD Anchayacu, 2015: 15).

En opinión del sector palmicultor, la contaminación del agua y la contaminación por olores y por el ruido de los motores de las extractoras si bien fueron severas en un inicio, constituyen en la actualidad un problema menor debido a la introducción de mejoras tecnológicas: construcción de piscinas con capacidad de captar mayor volumen de materia orgánica de modo de disminuir la cantidad de sólidos que se vierten a los ríos, silenciadores para reducir el ruido de los generadores eléctricos y reforestación para disminuir los malos olores (Entrevista al Director Ejecutivo de ANCUPA, 25.01.2018). Otras personas entrevistadas vinculadas a la palma aceitera tienen una opinión aún más favorable.

Un técnico que trabaja en una de las empresas que opera en la zona mencionó que no solo no existe contaminación de la palma, sino que este cultivo tiene un gran parecido al bosque debido al gran tamaño del área foliar y a su contribución directa e indirecta para la fijación de nitrógeno (Entrevista con técnico palmicultor, 30.01.2018), interpelando la famosa consigna de Ricardo Carrere (1943-2011), reconocido dirigente del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM): “Las plantaciones no son bosques”.

El Presidente de FEDEPAL, por su parte, considera que los impactos, que alguna vez existieron, no solo que fueron sobredimensionados, sino que estarían siendo ya enfrentados:

“La palma tiene la cualidad de atraer toda una serie de criterios adversos. Ya estamos acostumbrados a eso. Tenemos un karma ambiental no generado acá sino en Malasia pues allá arrasaron con los bosques. Nosotros afirmamos que la palma apenas cubre el 3% de la superficie forestal del Ecuador y, como todo cultivo, también debe ser sometido a fertilizantes, al empleo de mano de obra. En la actualidad, estamos aplicando procesos muy exigentes para el cumplimiento de todas las normas en todos los ámbitos” (Entrevista al presidente de FEDAPAL, 23.01.2018).

Las diferentes visiones en torno a la contaminación y las afectaciones ambientales generadas por la palma no pueden esconder la debilidad del Estado en la frontera norte ecuatoriana para hacer cumplir la normativa vigente y desplegar acciones de control que

precautelen los derechos de la población y de quienes están laboralmente vinculados a las empresas. La población del norte de Esmeraldas, como lo sucedido en el pasado, es una población supeditada y subsumida a la dinámica del capital. Esta no es sin embargo la única particularidad referida a la frontera. Un segundo rasgo estaría atado al aprovechamiento de los diferenciales de precios -en este caso de salarios- entre uno y otro país (Anderson y O'Dowd, 1999). La investigación sobre la trata de personas realizada por María Isabel Moncayo en San Lorenzo encontró evidencias de que las empresas de palma mantienen un sistema de reclutamiento para

“captar trabajadoras/es de origen afroecolombiano (desde los 15 años de edad) al otro lado de la frontera y trasladarlos a territorio ecuatoriano. Entre las estrategias para reclutarlos están el engaño respecto al auspicio del refugio y la rotación periódica entre las empresas. Si bien no se encontraron evidencias suficientes para afirmar que sean casos de trata con fines de explotación laboral, las mínimas condiciones en las que trabajan estas personas, unidas a los mecanismos que se utilizan para reclutarlas deberían alertar a las autoridades de control y al Ministerio de Relaciones Laborales sobre las irregularidades que están ocurriendo en este sector productivo” (Moncayo, 2012: 55).

Con respecto a años pasados, la trata de personas con fines de explotación laboral ya no se circunscribe únicamente a población colombiana sino también población de Venezuela, según lo ilustran los siguientes testimonios:

“El poco trabajo formal que existe es cada vez menos accesible para la población ecuatoriana pues las empresas prefieren contratar a colombianos y a venezolanos que han cruzado Colombia, utilizada como sitio de paso, pues ellos aceptan hasta 4-5 dólares al día o menos y no exigen seguro, contratos ni vacaciones” (Entrevista a dirigente del grupo de mujeres de Colón Eloy, 10.07.2018).

“Las plantaciones de palma han destrozado a las comunidades. Nos quitaron las tierras, aunque ellas digan que las han comprado, y ahora están quitando el poco trabajo que generaban en las comunidades. Hay una empresa, en el Km 7, cerca de Maldonado, que contrata solo colombianos. Son refugiados que trabajan por un jornal diario y sin seguridad” (Entrevista a dirigente la Comuna Río Santiago Cayapas, 09.07.2018).

Esta realidad es recogida en las *Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador* al señalar el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial su preocupación por la explotación laboral en la palma y su afectación desproporcionada a migrantes, refugiados, afroecuatorianos y pueblos indígenas (2017: 7).

Es en base a esta realidad que las poblaciones del norte de Esmeraldas asentadas en zonas cubiertas por palma hayan denominado a las plantaciones de palma como “proyectos contra la vida”. “Los llamamos contra la vida porque todo lo que esta gente hace en estos territorios son actividades para destruir la vida que teníamos antes”, fue la afirmación expresada durante el encuentro internacional de reflexión y participación de comunidades afrodescendientes de Ecuador y Colombia los días 12 y 13 de diciembre del 2011 en Quito (García ed., 2012).

#### **5.2.4. Y el progreso ... ¿llegó?**

Entre los beneficios que se pensaba acarrearía el cultivo de palma a la región fronteriza del norte de Esmeraldas, el progreso socio-económico era uno de los más esperados. Los actores empresariales ligados a la palma consideran que efectivamente esto se ha logrado:

“Cuando la palma llegó no había ni agua, ni luz, ni alcantarillado, no habían vías, el hospital en condiciones precarias, lo propio con la seguridad social. Todas las instituciones del Estado funcionaban precariamente. El Banco Nacional de Fomento, en ese entonces, tenía una sucursal y la caja fuerte del banco era una nevera. La realidad ha cambiado mucho, hay vías asfaltadas, hay parques, hay recreación, acceso al puerto, hay alcantarillado y suministro de agua, hay luz y un desarrollo de los centros médicos, clínicas privadas; se han abierto almacenes, almacenes agropecuarios, de venta de ropa, víveres, abarrotes.

En los años que inició la palma todo había que llevar de Quito, hasta un tornillo. Hoy se puede ver que la economía se ha desarrollado. Las cuatro grandes empresas que iniciaron el proceso cuando pagaban a fin de mes colocaban en el mercado cerca de 5 millones de dólares. El seguro social pasó de tener cerca de 30 afiliados a 2000, personal con trabajo estable, con contratos, con pago de prestaciones, que no había en el sector agrícola. En ese sector se comenzaron a conocer los taxis y los buses porque la gente se transportaba en camiones. Creció un poco el tema de la seguridad industrial, la gente comenzó a utilizar calzado. Muchas de estas cosas se dieron con la llegada de la palma. Llegó el Banco del Pichincha, y se comenzó a trabajar con cajeros automáticos, a comercializar los cheques. Todo esto se dio con el cultivo de la palma africana” (Entrevista al Director Ejecutivo de ANCUPA, 25.01.2018).

Otras opiniones consultadas no comparten el mismo optimismo. En general, tanto la población entrevistada como las personas vinculadas a instituciones públicas si bien reconocen un mayor equipamiento urbano o la disponibilidad de mayores servicios básicos en la región del norte de Esmeraldas, no consideran que el protagonismo de tales cambios radique en la consolidación de la palma aceitera. Por el contrario, varias de las

entrevistas coincidieron en señalar que el fortalecimiento de la palmicultura no ha modificado la pobreza estructural que soporta esta área:

“La actividad de la palmicultura viene generando y ahondando varios problemas. Esto sucede porque la palmicultura es catalogada como una economía de enclave, es decir, la producción de las palmeras no se queda en el sector local, son capitales que se fugan a otros países u otras ciudades del país como Quito y Guayaquil. Si desde 1995 se ha incrementado el cultivo y siembra de palmicultoras, hasta el 2017 la pobreza no se ha disminuido significativamente en la zona, es decir, no han sido un efecto positivo para la zona” (Entrevista a dirigente de San Lorenzo, 02.02.18).

Al tratarse de un cultivo en manos de empresas privadas, una de sus principales contribuciones para el desarrollo sería el pago de impuestos. No obstante, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), en Esmeraldas solo aparecen dos contribuyentes vinculados a la palma aceitera (<http://www.sri.gob.ec>). Las restantes empresas tributan en otras provincias como lo reconoció el presidente de FEDAPAL: “Estamos promoviendo que las empresas tributen donde producen pero seguramente tomará tiempo ya que en otras regiones aún hay problemas con el SRI. Por eso algunas tributan en Quito” (Entrevista a Presidente de FEDAPAL, 23.01.2018).

Para la mayor parte de las personas entrevistadas, el patrón de expansión de la palma, suscitado sin control, evidencia tanto la ausencia del Estado como la configuración de un escenario social que, ante la pérdida de horizontes de vida, presiona a que la población, especialmente jóvenes, se haya visto cada vez más empujada a inmiscuirse en actividades ilícitas. Así lo dice el testimonio del Director Provincial del Ministerio del Ambiente:

“El principal problema del norte de Esmeraldas es el ambiental. Hay una contaminación desmesurada y un cambio total del paisaje provocado por la deforestación que se alimenta tanto de la tala de árboles como de la ampliación de la frontera agrícola. El empobrecimiento del ambiente explica también que no existan fuentes de trabajo. Sin trabajo, la población se ha visto empujada a participar en actividades cada vez más riesgosas como el *narcotráfico que ha ido ganando terreno*. A lo anterior se suma la persistencia de analfabetismo, de machismo, de necesidades básicas insatisfechas por la ausencia del Estado en las comunidades fronterizas. Hacer esta afirmación no implica desconocer que en comparación con 20 años atrás, la realidad no haya cambiado. En estos últimos años, ciertamente han tomado lugar algunas transformaciones: hay mejor infraestructura, hay electricidad en comunidades que no tenían luz como El Pan o Mataje, y el Estado ahora provee de servicios que antes eran proporcionados por organizaciones sociales. Los palenques en el norte de Esmeraldas soportaban al Estado pues financiábamos la salud, construíamos escuelas. Pese a estos cambios, lo que sí ha sido una constante es la falta de una *política de desarrollo fronterizo* al igual que la ausencia de una política laboral,

lo que ha determinado que este territorio sea el caldo de cultivo para lo que hoy soporta esta región. La realidad ha demostrado que es así” (Entrevista a Director Provincial del Ministerio de Ambiente, 03.02.2018).

Además de cuestionar el aporte de la palma aceitera al desarrollo de la zona norte de Esmeraldas, varias de las entrevistas anotaron que el fortalecimiento de esta agroindustria ha contribuido a debilitar y fracturar la institucionalidad pública existente. Para el Secretario Nacional de Gestión de la Política, por ejemplo, la persistencia de la falta de ingresos y empleo para la población, el deterioro de los recursos naturales donde la palma ha tenido un lugar importante y la inseguridad que sigue afectando al área, son tres problemas que explican que la institucionalidad pública no logre desarrollar una gestión eficiente (Entrevista al Secretario de Gestión de la Política, 21.12.2017). Esto último se expresa a través de la creación de una serie de redes de corrupción en las que participan funcionarios públicos y empresarios. Según denuncias de los pobladores de San Lorenzo, registradas en el 2008, los créditos concedidos por el Banco Nacional de Fomento (banca pública encargada de canalizar crédito a los productores rurales) a empresarios de la palma por montos de hasta 50 mil dólares, eran a su vez utilizados por los deudores para dar préstamos a la población mediante la figura de “presta-diarios” con intereses que podían llegar hasta el 10% diario. La imposibilidad de pago por parte de las familias constituía una nueva fuente de expropiación de tierras, con la consiguiente extensión de los cultivos de palma (Presidencia de la República, 2009). En las entrevistas realizadas una percepción bastante generalizada es que la falta de control a las empresas de palma obedece a las redes que se han tejido a lo largo de los años entre los gobiernos locales y el sector palmicultor, llegando a mencionar en algunas ocasiones el papel de los alcaldes de los municipios fronterizos como inversionistas directos de empresas o como soportes del sector palmicultor:

“El Alcalde de San Lorenzo tenía una ferretería donde vendía pocas cosas y cuando entramos las plantaciones, su negocio se amplió. Puso una sucursal, su familia se dedicó a las ferreterías, a las impresiones, imprentas. El negocio se multiplicó en muchas aristas” (Entrevista al Director Ejecutivo de ANCUPA, 25.01.2018)

La ausencia del Estado, por su parte, explica que quienes impongan las reglas sean entidades y actores no estatales que usan la fuerza y la cohesión para ejecutar acciones a favor de sus intereses, como lo mencionó el Adjunto de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo:



“Lo grave de que se imponga una lógica extractiva (...) es que se imponga sin una regulación suficiente porque no todo es controlado y regulado por el Estado, sino que genera ingentes beneficios a quienes controlan estas actividades” (Entrevista al Adjunto de la Defensoría del Pueblo, 19.01.2018).

En la narrativa que dio paso al fortalecimiento de la palma aceitera, otro ámbito que se consideraba iba a ser reforzado a partir de esta agroindustria era el de la seguridad. Los gremios de la palma efectivamente consideran que éste es también un aporte del sector:

“La palma ha contribuido a fortalecer la seguridad de las áreas fronterizas. Cuando la gente tiene una vida digna para ellas y sus familias, no están pensando en secuestrar, en robar o meterse en la guerrilla. Esto es parte de las bondades que ha representado el cultivo de la palma en esa zona del país” (Entrevista al Presidente de FEDAPAL, 23.01.18).

En contraste con esta opinión, entre las personas entrevistadas existe la percepción de que la violencia e inseguridad que soporta la región es fundamentalmente atribuible al ingreso de personas y bandas ajenas al área y las disputas por el control del territorio protagonizadas por las empresas de palma y, más recientemente según se examinará más adelante, por las mineras. Como advierte Gudynas (2009), la ampliación de la frontera extractiva es con frecuencia un motivo para facilitar el ingreso de actores que contribuyen a deteriorar las condiciones de seguridad de un área.

La percepción de la población no es aislada. La investigación que Iván Roa Ovalle desarrolló en el área, *El desborde de la violencia: raza, capital y grupos armados en la expansión transnacional de la palma aceitera en Nariño y Esmeraldas* (2012), profundiza sobre la presencia del paramilitarismo y su articulación con los cultivos de palma aceitera. La relación entre estos dos actores se materializaría, según su estudio, en dos fases. La primera, del 2000 al 2004, se habría caracterizado por una “violencia moderada, puesto que los intereses en la región eran de índole económica” (2012: 139), lo que se concretaba en la búsqueda de rutas de narcotráfico y de oportunidades para el lavado de activos. Durante esta primera fase, el paramilitarismo habría actuado en lo fundamental como servicio de seguridad en las plantaciones de palma. La segunda fase, entre 2004-2009, habría implicado una suerte de consolidación del paramilitarismo y su alianza con bandas criminales ecuatorianas que disputaban con la guerrilla que ingresaba a territorio ecuatoriano para abastecimiento. Estos años, los de mayor violencia en el norte de Esmeraldas, registran según Roa Ovalle, un alto crecimiento de las plantaciones de palma:

“la época de violencia más fuerte en San Lorenzo registra una ampliación del cultivo de palma aceitera en la región; hacia el año 2005, se habla de 18.266 hectáreas cultivadas en la región, al 2009, según los habitantes y haciendo seguimiento de los censos agrícolas, se estima que el cultivo se encuentra alrededor de las 27.000 hectáreas” (Roa Ovalle, 2012: 145).

Hacia esos mismos años, tanto un informe elaborado por la Presidencia de la República de Ecuador (2009) como los contenidos del Plan Binacional de Integración Fronteriza ya asociaban el aumento de la violencia en San Lorenzo y la presencia de grupos irregulares a la circulación de capitales colombianos alrededor de mercado de la palma aceitera: “En la última década se observa una relación directa entre el crecimiento de los cultivos de palma asociada a la violencia debido a la presencia de grupos armados irregulares” (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 55). No es casual, en este caso, que los años de mayor violencia en el norte de Esmeraldas, 2007-2009, coincidan con el crecimiento de la superficie destinada al cultivo de palma aceitera, lo que sugiere una relación convergente entre ejercicio de la violencia y obtención de tierras. “La violencia de las empresas madereras y de las palmicultoras obligan -dicen García y Walsh- a las comunidades a huir y dispersarse” (2010: 53). Las anteriores afirmaciones se corresponden con lo que sucede en Colombia donde

“entre las nuevas personas que han llegado para instalar cultivos de palma en el sur del país se incluyen grandes y medianos propietarios de tierra, políticos y élites nacionales y locales atraídas por la nueva fuente de acumulación de capital. Entre quienes han llegado se incluye, además, grupos ilegales armados que aprecian en el cultivo de palma una oportunidad para legitimar su control sobre el territorio” (Marín-Burgos, 2014: 79).

La violencia no se circunscribe a la relación conflictiva entre empresas de palma y comunidades, sino que en se expande en una serie de conflictos al interior de las comunidades, o entre los diversos pueblos que habitan esta región, como el que involucra a la comunidad afroecuatoriana de San Francisco con la comunidad Chachi de La Ceiba. La Ceiba, además de estar rodeada de plantaciones de palma, soporta desde el año 2006, la presión de la población afroecuatoriana de San Francisco que, bajo el argumento de la ilegalidad del título de propiedad Chachi, reclama estas tierras para sí. Como elemento de presión, la población afroecuatoriana ingresa regularmente a extraer madera del área comunal Chachi. El seguimiento a este conflicto, realizado por ECOLEX, conducía a pensar que detrás de este reclamo se encontraban las empresas palmicultoras que negociaron con la población afroecuatoriana la venta de estas tierras, llegando incluso a

dotar de armas a personas de San Francisco para invadir el territorio del pueblo Chachi (Entrevista a técnico de ECOLEX, 16.12.2018).

Al interior de las comunidades, la consolidación de la palma ha tenido efectos sobre la organización y la dinámica social del área. Las distintas visiones sobre la palma y el papel jugado por algunos dirigentes en la compra de tierra han contribuido a romper las formas tradicionales de autoridad y a deteriorar la legitimidad y representatividad de sus estructuras organizativas tradicionales. Las fracturas se han ahondado por prácticas usuales a las actividades extractivas que “compran” el apoyo de determinados sectores de la población a cambio de pequeñas obras o bienes.<sup>167</sup> Como lo han estudiado algunos pensadores, los efectos del extractivismo no se reducen a las estructuras macroeconómicas ni guardan únicamente relación con los impactos negativos sobre la naturaleza, sino que inciden decisivamente en el campo microbiopolítico de constitución de las subjetividades, lo que Machado-Aráoz denomina como “expropiación ecobiopolítica” (2013: 35).

“(E)l extractivismo opera produciendo una abismal expropiación de la sensibilidad corporal. Expropiación, más que con arrebato, tiene que ver acá con eficacia performativa; da cuenta de la capacidad biopolítica de producir sujetos radicalmente in-sensibles a la explotación. En parte por acostumbramiento-internalización del dolor social; en parte por la colonización-mercantilización del deseo” (Ibid.: 37).

En lo social, nuevos problemas han aparecido en el área como el alcoholismo y el uso de drogas en jóvenes, el aumento de embarazos adolescentes<sup>168</sup> y altos índices de violencia y maltrato, como se describe en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de Montalvo, Lagarto, Rocafuerte, San Francisco de Ónzole, La Tola, Alto Tambo, Calderón, Concepción, Tululbí, Urbina. En muchos planes de desarrollo parroquiales se destaca la presencia de trabajo infantil, que teóricamente está vetado por ley:

---

<sup>167</sup> En las negociaciones entre Palmera de los Andes y la comunidad La Chiquita llevadas a cabo en el año 2006 se acordaron desde temas relacionados con la ubicación de los sitios de descarga hasta la entrega de obras (aula) y el pago del maestro para las niñas y niños de la comunidad (Trujillo, 2005). Esta práctica se mantiene hasta la actualidad. En la parroquia Colón Eloy de María, PROVEMUNDO, la empresa de palma que opera en dicho territorio, entrega bonos a los maestros (Paesyan Cía. Ltda. Consultores, 2015a: 35), mientras que en Mataje, PALASEMA está abriendo caminos hacia las comunidades de Las Delicias, Campanita y Valverde (GAPMataje, s/f.: 43).

<sup>168</sup> En Rocafuerte la tasa de embarazos adolescentes sobrepasa el 20% (Borja Consultores y GADRocafuerte, 2015: 78). En Palma Real y Mataje, la edad inicial de embarazos es de 12 años (FECHE et al., 2017: 27).

“De los 835 niños y niñas trabajadores (...), 485 no asisten a un establecimiento de enseñanza regular lo que demuestra que más del 50% se encuentran limitados o impedidos de seguir sus estudios. Los niños, niñas y adolescentes trabajan por cuenta propia o como jornaleros, peones, empleados, obreros, en trabajos no remunerados en el empleo doméstico” (SENPLADES-GADM Rioverde, 2015: 120).

Desterritorialización, acumulación de pasivos ambientales que hacen intolerable a la vida, dificultades para la libre movilidad, aumento de la conflictividad, pérdida de credibilidad en la institucionalidad local, no solo que no significan progreso sino que demuestran que la consolidación del cultivo de palma aceitera se ha dado en paralelo al aumento de los niveles de vulnerabilidad a la que está expuesta la población local, contradiciendo a través de hechos concretos que la expansión de la frontera agroindustrial constituye la antesala del desarrollo, del fortalecimiento de la institucionalidad y de la seguridad y, en general, de una mayor presencia del Estado, como lo sintetizan las palabras de la Palenquera Mayor de la Gran Comarca del Norte de Esmeraldas:

“La frontera, como la conocíamos, dejó de ser un corredor para cruzar y encontrarnos con nuestros hermanos. Hoy es un paso de problemas pues al reconocer que ‘aladito’ hay un conflicto, nos damos cuenta que eso nos trae consecuencias, que hace que vivamos en una sociedad donde todos, especialmente los jóvenes, se vuelven más vulnerables. Es que la minería, la palma o la tala de madera no solo nos han dejado sin oportunidades, sino que nos desprendieron de nuestras formas de vida propias y no hay una política pública que tome en cuenta los intereses de los pueblos fronterizos” (Entrevista a dirigente de la Gran Comarca, 30.01.2018).

Contrariamente al “progreso” prometido, la región fronteriza del norte de Esmeraldas asiste a la configuración de un escenario de erosión de derechos, de deterioro de las condiciones de vida y de menoscabo del tejido institucional a favor de empresas privadas, nacionales, mixtas o extranjeras, que imponen el dominio de reglas de juego a su favor, al tiempo que se evidencia que la frontera, lejos de ser un elemento que bloquea el paso de personas y objetos, desempeña en la actualidad un papel fundamental en la articulación del capital (Mezzadra y Neilson, 2003). La frontera deviene así en un espacio de soberanías múltiples, abierto y poroso, menos parecido a la noción de límite de la soberanía (Serje, 2017). De ahí que, en concordancia con lo que apunta Mbembe,

“En las regiones del mundo situadas en los márgenes de las principales transformaciones tecnológicas contemporáneas, la reconstrucción temporal de los marcos territoriales existentes va de la mano del establecimiento de una economía de la coerción cuyo objetivo es destruir a las poblaciones ‘superfluas’ y explotar las materias primas. La rentabilidad de este tipo de explotación exige

la salida del Estado, su emasculación y su sustitución por formas fragmentadas de soberanía” (Mbembe, 2008: 195).

El irrespeto a los derechos de la población, la destrucción de sus formas de vida, de su organización y su ambiente; la afectación colectiva a la salud de los pobladores, han sido y son formas de inferiorizarlas, de reducir su valor como personas, sin mediar medidas de control que se supone deberían recaer en el Estado. Este conjunto de afectaciones conduce a considerar que este es un caso de racismo ambiental, en los términos acuñados por Bullard (1993), es decir, de la implantación de un modelo de crecimiento económico que supone la negación de los derechos humanos, el creciente deterioro de la naturaleza, la pérdida de fuentes de vida y la desterritorialización de los pueblos negros y una serie de severas connotaciones por tratarse de una región que cobija un mosaico de culturas que enfrentan la tensión de discontinuidad cultural en el marco de un proceso que parecería tener características similares “al otro lado de la raya”, según se explorará más adelante en esta tesis.

#### **5.2.5. Un nuevo comienzo para la palma aceitera y la historia se repite**

Como todo monocultivo, vulnerable al ataque de plagas y enfermedades, desde el año 2004 en las plantaciones de palma aceitera comenzó a detectarse la presencia de la enfermedad conocida como pudrición del cogollo (PC).<sup>169</sup> Para el 2014 esta enfermedad habría destruido, según la Asociación Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera, ANCUPA, 23 mil hectáreas de plantaciones, con la pérdida de ocho mil plazas de trabajo directas, 16 mil indirectas<sup>170</sup>, y perjuicios económicos por 150 millones de dólares (<http://www.ancupa.com>).

En el norte de Esmeraldas la incidencia de esta enfermedad habría sido variable. En las grandes plantaciones, la presencia de la pudrición del cogollo fue manejada oportunamente, iniciando la renovación de las plantaciones con un híbrido OxG (*Oleifera x Guiniensis*) que es tolerante a la enfermedad (Entrevista a técnico palmicultor,

---

<sup>169</sup> De acuerdo a la información proporcionada en las entrevistas, no se conoce exactamente qué es la PC, una plaga, un virus, una malformación, pues se trataría de un complejo que devasta las plantaciones de palma aceitera.

<sup>170</sup> A la luz de la información proporcionada por ANCUPA en la Revista Institucional Palma (ediciones 20, 25 y 26), el número de plazas de empleo perdidas resulta sobredimensionado si se toma en cuenta otros datos difundidos por la misma fuente. Según la información de este gremio, en una superficie total sembrada de 288.500 hectáreas se han generado 50.000 empleos directos. El deterioro de 23.000 hectáreas implicaría, siguiendo la proporcionalidad indicada por ANCUPA, la pérdida de 3.986 empleos directos y seguramente de varios cientos de empleos indirectos. Sobre la base de la información difundida por los palmicultores, no existen elementos que sustenten un número tan alto de pérdidas de fuentes de trabajo.

30.01.2018). Sin embargo, y aún con las reservas expresadas hacia la información proporcionada por las empresas, la afectación de la PC significó la pérdida de fuentes de trabajo como lo recoge la opinión de la directora de una ONG de desarrollo que trabaja en la zona:

“Con la pudrición del cogollo y los problemas que sufrieron las plantaciones de palma, pudimos comprobar que muchos trabajadores fueron despedidos. Los problemas fueron muy grandes pues pudimos observar una acelerada devastación de las plantaciones que imposibilitaba mantener a todos los trabajadores. La gente que perdió su trabajo en muchos casos salió del área pues tampoco tenían tierras o tenían superficies tan pequeñas que no permitían la satisfacción de las necesidades familiares” (Entrevista a la Directora de CEPESIU, 04.02.2018).

Las mayores afectaciones recayeron sobre las pequeñas propiedades, más vulnerables a la enfermedad debido a la falta de tecnología y a que su único recurso era remover una por una las plantas enfermas. En un estudio sobre los pequeños propietarios cultivadores de palma aceitera, Lesley Potter, concluye:

“Los agricultores de San Lorenzo, (...), no están felices, ya que la encuesta demuestra que la enfermedad devastó los árboles y tienen que prepararse para volver a plantar una gran parte de sus cultivos con especies híbridas. Tal vez, afortunadamente, muy pocos pequeños propietarios se pueden encontrar en esa zona ya que la población local no desea o no puede unirse a la industria. Como resultado de la enfermedad, los precios de la tierra en San Lorenzo han caído a 2.000 dólares por hectárea” (Potter, 2011: 51).

De manera similar, un funcionario gubernamental señaló que luego de las afectaciones que sufriera la palma aceitera, muchas fincas están en venta. “Desde Ibarra a San Lorenzo, la carretera está llena de anuncios de venta de fincas y casas” (Entrevista al Director Provincial del Ministerio de Ambiente, 03.02.2018).

Ante esta situación, el gobierno decretó al sector palmicultor en emergencia y decidió desde el año 2014, apoyar con programas de investigación y tecnología para combatir la plaga. Para las actividades de remoción de la plaga, dispuso la participación de brigadas de las fuerzas armadas y para la renovación de los cultivos generó nuevas líneas de crédito dirigidas a los pequeños y medianos productores con 10 años de plazo, 5 años de gracia tanto en el pago del capital como de los intereses, así como la reestructuración de deudas para los palmicultores que no habrían podido cumplir con sus obligaciones crediticias por la afectación de la PC. Cuando se ha tratado de custodiar el funcionamiento de empresas, el Estado no ha tenido empacho en poner en movimiento

toda su maquinaria, lo que convierte en una suerte de mito la ausencia del Estado en las regiones fronterizas.

El Decreto Ejecutivo 1303 del 17 de septiembre del 2012 habría significado, dos años antes, un impulso adicional al sector productor de palma aceitera al declarar de interés nacional la producción de “biodiesel”<sup>171</sup> y determinar que el combustible diesel premio que se comercializa en el país contenga inicialmente un 5% de biodiesel de origen vegetal hasta llegar a un 10% (Art. 1, 2 y 3). A partir de este Decreto, tres entidades públicas actualizaron la zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivos de palma aceitera, considerado como uno de los sectores que contribuirían a la diversificación de la matriz productiva de Ecuador. Tal zonificación, contenida en el Acuerdo Interministerial 189 suscrito por el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio del Ambiente el 29 de julio del 2015, definió que el área susceptible para la producción de palma aceitera ascendería a 9.149.378 has. bajo cuatro distintas categorías: zona de producción óptima (2,32%), zona de producción moderada (9,33%), zona de aptitud marginal (13,97%) y zona de alta adecuación de los factores productivos (74,38%). Esta zonificación suplantó a una anterior volcada en el Acuerdo Interministerial 389, suscrito por los mismos ministerios dos años atrás (30 de agosto de 2013) que fijaba en 332.775 has. el área susceptible de plantación para la palma aceitera. Entre uno y otro acuerdo interministerial llama la atención el incremento de 30 veces en la superficie susceptible de siembra de palma aceitera, evidenciando el interés del Estado por este cultivo, la resignificación de áreas dedicadas a otros propósitos y la fuerte gravitación del sector palmicultor para que en el plazo de dos años los mismos ministerios y dos de los tres ministros que firmaran la primera zonificación realicen una modificación de esta envergadura. Los 9 millones de hectáreas que el Acuerdo Interministerial de 2015 considera podrían utilizarse para el cultivo de palma aceitera representan cerca del 37% de la superficie continental del Ecuador y un poco menos de mitad de la superficie nacional con aptitud agropecuaria,<sup>172</sup> lo que implica una seria amenaza a la seguridad y

---

<sup>171</sup> El biodiesel es un carburante que se produce a través de la biomasa. Proviene de aceites vegetales (palma aceitera, soja, colza) o de grasa animal. Es un sustituto del diesel y puede ser usado en estado puro o mezclado (Rincón coord., 2008). En la medida en que el prefijo “bio” es con frecuencia utilizado para denotar procesos de producción respetuosos con la naturaleza, movimientos como Vía Campesina han optado por la denominación de agrocombustibles.

<sup>172</sup> De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Agricultura, “El Ecuador continental tiene una extensión de 24,8 millones de hectáreas; de ellas, 5,9 millones (24%) son aptas para el desarrollo de la agricultura en condiciones naturales de suelos, topografía y clima; el 13% es apto para pastos; y el 42% para bosques. Es decir, el 79% de la superficie nacional tiene aptitud agropecuaria (potencial productivo). El restante 21%

soberanía alimentarias del país, mayores riesgos de desterritorialización de la población local y la ocurrencia de nuevos y más profundos conflictos, reafirmando las dos dimensiones de la ampliación de las fronteras de extracción: la incorporación de nuevas áreas *-space-of-places-* para contar con nuevos recursos *-space-of-flows-*.

Para el sector palmicultor, estas políticas así como aquellas definidas durante la emergencia sanitaria son insuficientes. De acuerdo a las entrevistas realizadas, eran necesarias más líneas de crédito y mejores condiciones de endeudamiento, así como un apoyo más activo a la investigación y la exoneración durante un período del pago del impuesto a la renta, como habría sucedido en Colombia (Entrevista al Presidente de FEDAPAL, 23.01.2018). En todo caso, más allá de las expectativas del sector de la palma, la realidad confirma que existe un escenario propicio para impulsar nuevamente al sector. Las interrogantes más bien apuntan a definir el sentido y alcance de este nuevo impulso. Hacia Esmeraldas y su región fronteriza, los nuevos arreglos alrededor de la palma aceitera sugieren la posibilidad de ocurrencia de dos dinámicas. Una primera dinámica apunta a la disminución del número de pequeños propietarios dedicados al cultivo de la palma que no pudieron enfrentar las consecuencias de la enfermedad de la PC ni tienen tampoco condiciones para contratar deudas con las que reactivar su producción. No en vano, “las 50 hectáreas o menos, a duras penas permiten cubrir el salario básico del dueño de la tierra más uno o dos trabajadores que por lo general son su familia” (Entrevista a Director Ejecutivo de ANCUPA, 25.01.2018). La segunda dinámica implica un nuevo momento de expansión del cultivo y de re-concentración de la tierra, lo que parecería estar ya tomando lugar según los testimonios volcados en algunas entrevistas. ANCUPA, por ejemplo, tiene la meta de alcanzar 32 mil hectáreas en el norte de Esmeraldas, lo que implica “ampliar en al menos 8.000 hectáreas la superficie que cultivos que había entre el 2000 y el 2005” (Ibid.). Conservación Internacional (CI), una ONG conservacionista que trabaja en el área, ha podido verificar que “después de la PC que afectó a la palma, los palmicultores están expandiendo sus cultivos hacia la parte alta, los bosques de Lita, por ejemplo” (Entrevista a técnico de CI, 15.02.2018).

---

corresponde al Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PANE) y zonas sin uso agrícola, además de las zonas urbanas y cuerpos de agua” (MAGAP, 2016: 271).



La renovación-expansión de la superficie de palma aceitera estaría sujeta en la actualidad a la aplicación de una certificación internacional, el RSPO (*Rountable on Sustainable Palm Oil*)<sup>173</sup> que de acuerdo al Presidente de FEDAPAL,

“es una iniciativa de productores, ONG, gobiernos nacionales y locales, consumidores. Esta certificación tiene unas condiciones muy exigentes y Ecuador se ha acogido a este proceso en el que vamos a ir avanzando poco a poco. Precisamente el 20 de enero (de 2018) Palmeras de los Andes es la primera empresa en Ecuador y en esa zona, que acaba de acceder a la certificación RSPO” (Entrevista a Presidente de FEDAPAL, 23.01.2018).

Esta certificación, en la que trabajó Conservación Internacional, sería una exigencia de los mercados internacionales que habrían anunciado que para el 2020-2022 las transacciones girarían únicamente alrededor de aceite certificado (Entrevista a técnico de CI, 15.02.2018).

Lo que para los gremios de la palma representa una muestra de su responsabilidad social, constituye para algunos de los actores locales entrevistados una medida voluntaria que evade el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de cara a los derechos humanos de las comunidades donde operan. “Antes que certificaciones empresariales, el Estado está obligado a generar mecanismos de protección de derechos, de garantías de derechos y de prevención de la vulneración” (Entrevista a Coordinadora de la Pastoral Social, 28.01.2018).

Más allá de la certificación, lo discutido en esta sección permite concluir que la economía de la palma en el Ecuador es similar a su organización en Colombia, según lo estudiado por Victoria Marín-Burgos en *Access, Power and Justice in Commodity Frontiers* (2014). En ambos casos, la palma se distingue por los altos niveles de integración vertical entre la agroindustria y las actividades de procesamiento industrial de tal forma que los productores de palma (plantaciones) directamente vinculados a los productores de aceite de palma (plantas extractoras), son parte del mismo grupo empresarial. El segundo factor distintivo de la economía de la palma es el apoyo gubernamental del que ha gozado que se refleja tanto en términos del acceso a la tierra

---

<sup>173</sup> Esta certificación establece criterios y sistemas de auditoría que pretenden garantizar que la producción respete los derechos laborales y de las comunidades indígenas, que no se ocupen nuevas zonas de elevado valor ambiental y que no se amenace la biodiversidad, además de promover prácticas agrícolas más limpias. Fue creada en el 2004 por productores, sociedad civil, gobiernos y compradores para dirigir estos impactos y crear una imagen que transmitiera la idea de “transformar los mercados para hacer que el aceite de palma sostenible sea la norma”. Comprende 558 miembros, de los cuales la tercera parte representan fabricantes de bienes de consumo y sólo el 17% de ellos son productores de aceite (Tomado de <http://www.aceitedepalma.org/rspo>).

como a través de la creación de un mercado de agrobiocombustibles (el denominado biodiesel), lo que se fortalece por la demanda proveniente del mercado internacional. Este apoyo puede adoptar la forma de incentivos y políticas para promover actividades extractivas (Acuerdo Interministerial 189 de julio de 2015 que fija el área potencial para el cultivo de palma y Decreto Ejecutivo 1303 de septiembre de 2012 que declara de interés nacional la producción de biodiesel), puede traducirse en mecanismos estructurales de acceso que operan en paralelo a medios ilegales (legalización de la ilegalidad cometida por los palmicultores al apropiarse de territorios que no les pertenecían a través del Decreto Ejecutivo 2961 de agosto del 2002 o la indiferencia frente a la apropiación de tierras comunitarias) y pueden muchas veces revestirse de políticas basadas en una retórica de derechos (las promesas de empleo, ingresos y desarrollo).

#### **5.2.6. Eje regional para la producción de agrocombustibles**

La extensión del monocultivo de palma encuentra un símil con lo que acontece en el lado colombiano donde con gran despliegue de violencia, y en operaciones articuladas entre ejército, paramilitares y empresas, comunidades enteras han sido expulsadas de sus territorios, dejando muchas veces vidas segadas como saldo. En las zonas de expansión de la palma están presentes grupos paramilitares que desde 1990 han operado bajo la consigna de recuperar los territorios entregados a las comunidades negras (Ley 70 de 1993). Como lo advierte Morales González en uno de los más completos estudios de los efectos de la expansión de la palma aceitera en Colombia, “(l)os agrocombustibles devienen en una herramienta fabulosa para que estos sectores criminales terminen de consolidar la apropiación de tierras, recursos y riquezas” (Rincón coord., 2008: 102). Curvaradó es emblemático al respecto. Ubicada en la región del bajo Atrato, al norte del departamento del Chocó, Curvaradó soportó siete años de desplazamiento forzado, más de 100 crímenes y miles de hectáreas usurpadas para el cultivo de palma (siete mil hectáreas de tierras comunales, que corresponden al 93% del territorio de esta comunidad, y 20 mil hectáreas de reserva forestal). En Urabá y el Chocó antioqueño, los paramilitares desplazaron de sus territorios colectivos a comunidades negras. Sus casas fueron destruidas. Las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó fueron despojadas violentamente de sus tierras para luego ser ocupadas por una empresa de palma aceitera. En Tumaco, con el apoyo de USAID, se promovió la creación de estructuras organizativas –empresas asociativas– ajenas a las tradiciones y formas de organización existentes (Juntas Directivas de los Consejos Comunitarios) que establecen una interlocución

directa con las empresas y el gobierno y lesionan las formas de representación que históricamente han estado vigentes en esta área. En la región de Orinoquia los palmicultores se han apropiado de tierras baldías o de la nación (algunas de ellas en litigio con comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes). En el lenguaje de la economía ecológica (Martínez-Alier, 2002; Mendoza, 2010) es posible señalar que la violencia y fuerza con la que se ha implantado el cultivo de la palma aceitera, así como los daños ambientales ocasionados, no se registran en las cifras de exportación que convierten a Colombia en el primer productor de América Latina (Rincón coord., 2008).

Sin desconocer que en Colombia la violencia y severidad del proceso de apropiación de tierras para la instalación del cultivo de palma aceitera reviste características particulares, el saldo final comparte elementos comunes en ambos países vecinos: desterritorialización de comunidades, desestructuración de la organización comunitaria, pronunciado deterioro de los derechos humanos, destrucción del bosque y modificación del paisaje, supresión de formas alternativas de producción y de consumo; acumulación de una serie de pasivos ambientales y sociales; intensificación de la dependencia económica y agravamiento de la vulnerabilidad en la seguridad alimentaria. En efecto, en Ecuador, la desterritorialización de poblaciones campesinas y afroecuatorianas, la afectación de territorios ancestrales o la pérdida de bosques han tomado lugar en medio de regímenes democráticos que escasamente han reaccionado frente a la ilegalidad con la que han actuado las empresas de palma. La ampliación de la frontera extractiva ha sido, en este caso, encubierta como una estrategia para la protección de la frontera, como una alternativa de desarrollo para las poblaciones rurales, una posibilidad de generación de ingresos y empleo, como una actividad que abonaría a la diversificación de la matriz productiva dependiente del petróleo y un proceso productivo aparentemente inocuo que sustituye la cobertura forestal natural por otra, si bien menos diversa, más rentable y útil en el combate del calentamiento global. Según manifestara el presidente Correa en una de sus intervenciones semanales el 19 abril del 2015: “Hemos identificado los sectores primarios con mayor potencial agrícola e industrial. El cacao para el chocolate, la palma para derivados, el café, la madera, acuicultura y pesca, flores, lácteos, balanceados. Aquí podemos generar \$ 7 mil millones para el PIB, más de 5 mil millones para exportaciones, lo cual alivia el sector externo” (Ecuadorinmediato, 2015).

El camino recorrido por las poblaciones que han soportado el ingreso de empresas palmicultoras demuestra las falacias de este discurso. Mientras la desterritorialización ha acentuado la desigualdad históricamente existente y la racialización de ciertos territorios

habitados por pueblos negros e indios, el carácter privado de las plantaciones no se traduce, como podría pensarse en el caso de la renta petrolera o minera en las que el Estado tiene un papel más activo, en una redistribución social de las ganancias. La profundización de las asimetrías sociales se da a costa del despliegue de una estrategia de control del territorio en la que los Estados y sus instituciones han perdido el protagonismo, cediendo el espacio a empresas privadas, a fuerzas militares y policiales y a grupos irregulares armados.

La concentración de cultivos de palma aceitera en los departamentos de Nariño (que linda con Ecuador), Meta, Casanare, Santander, Cesar y Magdalena (al norte de Colombia), amenaza con extenderse hacia otros departamentos entre los que se encuentran los de Caquetá, Putumayo, Chocó y Guaviare, próximos a la frontera ecuatoriana, lo que podría tener eco en Ecuador, donde la palma aceitera ya no solo está presente en Esmeraldas, sino que ha comenzado a desplazarse a provincias de la Amazonía norte en las que de manera paralela se asiste a un despunte de los cultivos de caña de azúcar destinados a la producción de agrocombustibles. Este patrón de crecimiento, también presente hacia el norte de Colombia, en las regiones fronterizas con Venezuela, advierte la configuración de un eje para la producción de agrocombustibles derivados de una especie foránea en esta región de América del Sur, que se consolida independientemente de la presencia, en cada uno de estos países, de gobiernos con posiciones políticas diversas y aparentemente opuestas. Ejes similares de producción de agrocombustibles serían los de etanol, liderado por Brasil para extenderse, desde dicho país al Caribe y Centro América; y, el de soja transgénica que, con Argentina a la cabeza, se prolonga también por Brasil, Bolivia y Paraguay. Esta nueva cartografía del extractivismo, constituye el telón de fondo de los acuerdos estratégicos detrás de iniciativas regionales como la IIRSA. Si se considera que el diseño de este programa regional incluye puertos de embarque, refinerías, poliductos, sistemas de tratamiento de aguas servidas, grandes autopistas y represas, es posible suponer, en coincidencia con otros autores (Bayón, 2012), que esta infraestructura potenciará el cultivo de la palma aceitera:

“El biodiesel y el bioetanol no suelen tele-transportarse de los campos a los tanques de gasolina. Y aquí se ubica otro aspecto muy poco ‘bio’ en el auge de los agrocombustibles: la creciente necesidad de integración de infraestructuras que implica su transporte y exportación. Salen a luz, entonces, (...) el Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA). Estos megaproyectos consideran a la rebelde geografía

latinoamericana como un obstáculo para la extracción de materias primas y para el transporte de mercancías. Su misión es doblegarla mediante corredores intermodales de autopistas, represas hidroeléctricas, hidrovías, tendidos eléctricos, etc.” (Rincón coord., 2008: 46).

Este es el caso del Proyecto Espriella-Río Mataje y el puente sobre el río Mataje cuyo objetivo, según se menciona en el sistema de información de proyectos IIRSA-COSIPLAN es “permitir la integración vial entre Colombia y Ecuador y el intercambio comercial, especialmente de palma aceitera y de la explotación agrícola” (<http://www.iirsa.org/proyectos/>).

La cartografía del extractivismo vigente en acuerdos como la IIRSA rememoran la forma en la que simultáneamente surgieron los procesos de acumulación y explotación y la cartografía del mundo, o en otras palabras, cómo la definición de los mapas abonó a configurar la división internacional del trabajo. En efecto, de la misma manera que el desarrollo de la cartografía abría espacio a la acumulación originaria (Mezzadra y Neilson, 2013), la nueva cartografía del extractivismo abre el espacio para renovados procesos de acumulación por desposesión y a un proceso de cambio y reorganización de la geografía.

En el norte de Esmeraldas, este proceso de acumulación por desposesión, comparte, con las obvias diferencias a nivel de intensidad y violencia imparable en Colombia, cinco características: (1) la presencia de poblaciones desplazadas por la guerra que vivió Colombia hasta septiembre de 2016 y de sectores poblacionales desplazados por efectos de los conflictos ecológicos y sociales que se suceden en la región fronteriza entre ambos países; (2) la articulación entre actividades económicas que tienen características de enclave y la violencia armada; (3) el incremento de fuerzas militares y policiales, bajo una concepción de “seguridad ciudadana” o “seguridad humana” en Ecuador y, hasta hace unos años atrás, de “seguridad democrática” en Colombia; (4) la falta de sintonía de los proyectos de desarrollo que impulsan los Estados con las necesidades de las comunidades locales; y (5) un acentuado deterioro del entorno ambiental presente en la contaminación de suelos, agua y aire, así como en el empobrecimiento del paisaje por la pérdida de cobertura vegetal.<sup>174</sup> Ante tales similitudes, cabría interrogar si las diferencias en la magnitud, intensidad y crudeza en

---

<sup>174</sup> Arturo Escobar identifica para la realidad de la región del Pacífico de Colombia tres de las tendencias enunciadas: (1) la articulación entre economía y violencia armada; (2) el incremento de la represión militar, la vigilancia y la paramilitarización dentro de una concepción de “seguridad democrática”; y (3) la falta de sintonía entre los proyectos socio-económicos de los actores armados y los de las comunidades locales (Escobar, 2005: 32).

las estrategias de control del territorio no son sino dos expresiones de una sola política orientada a satisfacer los crecientes apetitos por recursos naturales en la que, mientras el gobierno colombiano no ha tenido empacho en responder con mano dura y apego a los intereses estadounidenses, el Estado ecuatoriano ha ido desarrollando una estrategia de apoyo cada vez más firme a la palma, eludiendo la discusión y abordaje de problemas que modificaron el paisaje socio-territorial más allá de las expectativas iniciales.

#### **5.2.7. El difícil camino de la resistencia**

*“Las luchas que giran en torno a las fronteras, y las prácticas de traducción que las atraviesan, pueden desempeñar un papel clave en la profundización del debate acerca de las políticas de lo común” (Mezzadra y Neilson, 2013: 12).*

La resistencia a la expansión de los cultivos de palma aceitera no ha sido un proceso lineal y sostenido. A momentos de fuerte movilización le han seguido otros de desánimo y pasividad. Pese a sus vaivenes, el rechazo a la instalación de las plantaciones de palma aceitera contribuyó en el diseño de una expresión social que cuestiona el modelo económico impuesto en el norte de Esmeraldas y que propone un ordenamiento territorial distinto que toma en cuenta la frontera como construcción social y la presencia ancestral de comunidades negras e indias.

Las iniciales expresiones de inconformidad frente al establecimiento de los cultivos de palma aceitera se unificaron en el año 2000 en oposición a la promulgación del Decreto Ejecutivo 2691 que dio paso a la consolidación del monocultivo de palma en el norte de Esmeraldas. En ese año, los sectores sociales afectados, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y abogados ambientalistas, interpusieron un recurso de amparo constitucional a fin de frenar el incremento de la superficie de cultivos de palma y exigir al Ministerio del Ambiente la aplicación de la normativa vigente.<sup>175</sup> La demanda presentada se sustentaba en el carácter indivisible, inalienable e imprescriptible de los territorios ancestrales, según lo reconoce la legislación ecuatoriana.

En marzo del 2001 el Tribunal Constitucional (hoy Corte Constitucional) no solo que aceptó el recurso de amparo, sino que instó al Ministerio del Ambiente a una

---

<sup>175</sup> El recuento de los procesos legales llevados a cabo en contra del establecimiento de la palma se desprende de la información proporcionada por la abogada que patrocinó las acciones de judicialización en curso, doctora Sylvana Rivadeneira. Agradezco su generosidad y disposición para compartir esta información.

actuación urgente. La respuesta institucional, después de apelar la decisión del Tribunal, se circunscribió a la adopción de tímidas medidas para ordenar de alguna manera el establecimiento y manejo de las plantaciones de palma, como el pago de multas por la destrucción del bosque. La multa más alta se impuso a la empresa Palasema, con 67.908 dólares por la tala de 250 hectáreas de bosque. Las restantes empresas –Ecuafinca, Aiquisa, Teobrama, Ales Palma- recibieron una multa de 4 salarios mínimos vitales vigentes en ese entonces: el equivalente a 16 dólares. Los juicios contra Palmeras del Pacífico, Agrícola San Lorenzo y Palmeras de los Andes fueron anulados o, sus multas levantadas, por errores administrativos (Trujillo, 2005). Pese a este insignificante gesto de control gubernamental, los empresarios de palma aceitera amenazaron suspender sus actividades “por falta de garantías”. Las palmicultoras no se fueron; quién sí lo hizo fue el Ministro del Ambiente de aquel entonces (Moncada, 2013).

La inacción del Ministerio del Ambiente determinó el inicio de un juicio penal por desacato que definió la aplicación de dos nuevas medidas cuyo alcance frente a la gravedad del problema resultaba insuficiente y banal. En este orden expidió, por un lado, una normativa para obligar a que las empresas productoras de palma aceitera etiqueten los insumos utilizados según su nivel de peligrosidad y decidió, por otro lado, realizar un seguimiento semestral para verificar el manejo de las plantaciones y de sus instalaciones lo que en lugar de aportar en la introducción de mejoras en el proceso productivo, dio paso al establecimiento de una red de influencias y compadrazgos entre los empresarios de la palma aceitera y el personal encargado de cumplir actividades de control.<sup>176</sup>

A los primeros años de lucha continuaron otros caracterizados por el desánimo, la frustración y el desgaste de los procesos organizativos debido tanto a la presión ejercida sobre las comunidades por parte de empresas palmicultoras, como por la desatención institucional y el escaso eco de sus demandas. Esmeraldas corrobora una vez más cómo la irrupción de una industria extractiva fomenta fracturas internas o debilita los procesos organizativos (Gudynas, 2009).

El temor a las represalias y la expectativa de contar con trabajo estable y remunerado a cambio de la venta de sus tierras, determinaron una conducta pasiva y aún temor por parte de algunos sectores de la población para reclamar sobre las nocivas consecuencias sociales y ambientales provocadas por el monocultivo de palma aceitera. La pasividad y el conformismo se agudizaron por la falta de respuesta del Estado a las

---

<sup>176</sup> Comunicación personal con Sylvana Rivadeneira, abogada patrocinadora del caso, el 25.03.2015.

demandas reivindicativas de la población, aún ante la evidencia de violaciones flagrantes como la presencia de altos niveles de contaminación del agua, con graves efectos sobre la salud de la población (Hazlewood, 2010; FECHE et al. 2017).

Pese a las adversidades, otros sectores retomaron la lucha iniciada hace casi 20 años atrás y se han esforzado por mantener y recrear nuevas alternativas de resistencia. Es así como el 23 de junio del 2010 en una acción conjunta entre el pueblo negro de la comunidad La Chiquita<sup>177</sup> y la comunidad Guadualito, se interpuso un proceso legal en el marco de la Constitución aprobada en el 2008 que reconoció los derechos de la naturaleza.<sup>178</sup> Se trata de una demanda civil de pago por daños y perjuicios presentada el 23 de junio del 2010. El Gobierno Municipal de San Lorenzo del Pailón respaldó esta denuncia presentada contra dos empresas palmicultoras: Los Andes y Palasema.

Sin autocalificarse como una expresión social ecologista -la resistencia de la población local cabe dentro de lo que Martínez-Alier (2002, 2011) caracteriza como un movimiento del ecologismo popular y una organización de justicia ambiental en ciernes-, la lucha de la población afectada por el monocultivo de la palma aceitera no se localiza en el ámbito crematístico, sino en el de los valores de uso, en la medida en que reivindican sus derechos sobre el territorio, el acceso al agua, y el mantenimiento de sus formas tradicionales de producción y de organización. Tampoco es una lucha que apunta a la consecución de ganancias individuales o que pueda ser resuelta en el mercado. Es una lucha que prioriza una racionalidad no económica (Navarro y Pineda, 2009), que persigue el control del territorio y la utilización de los bienes naturales que éste contiene.

En enero del 2014, después de cerca de cinco años de presentada la demanda, las comunidades enfrentaron severos problemas que casi amenazan la continuidad del proceso, con fracturas internas entre sectores que proponían negociar con las empresas y quienes mantenían la posición inicial que motivó la realización del juicio. Para agosto del

---

<sup>177</sup> La Chiquita es una comunidad asentada en un área protegida, el refugio de vida silvestre del mismo nombre. En su territorio, 150 de las 806 hectáreas son afectadas por cultivos de palma (FECHE et al., 2007: 4). Guadualito, una comunidad Awá, está rodeada de palma aceitera.

<sup>178</sup> “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. // Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. // El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema” (Art. 71). Los derechos de la naturaleza son parte de la vertiente del neo-constitucionalismo latinoamericano, inspirado en la concepción de pueblos y nacionalidades que concibe la indisoluble unidad entre los diversos elementos de la Pachamama y que hace hincapié en los principios de equilibrio, respeto mutuo y relación entre los seres humanos y la naturaleza.



2015, luego de intensos procesos de discusión y motivación, y de manera coincidente con la realización de la audiencia de conciliación, un procedimiento usual en juicios civiles, las comunidades están más unidas y comprometidas con su lucha. En gran parte este cambio en el estado de ánimo es la respuesta a la actitud prepotente y hostil del equipo legal que defiende a las empresas que además de negar la responsabilidad por los daños ambientales y sociales e insinuar que el objetivo de la demanda es conseguir dinero que de otra manera las empresas no entregarían gratuitamente, ridiculizaron los contenidos de la demanda, haciendo mofa de valores como la sacralidad de sitios y territorios o el respeto hacia la tierra.<sup>179</sup> La demanda de Guadalito y de La Chiquita fue finalmente aceptada a favor de las comunidades el 11 de enero de 2017 por parte de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. La resolución de la corte incluye la disposición de que el Estado dote a las comunidades de servicios básicos y ordena que se restrinjan autorizaciones para la ampliación de la frontera agrícola (Ponce, 2018; IC Magazine, 2018).

Las comunidades demandantes están estudiando una posible apelación a la resolución de la Corte Provincial en la medida en que consideran que el pronunciamiento de la Corte de Esmeraldas no reconoce la responsabilidad de las empresas de palma, como tampoco los derechos de autodeterminación:

“Después de tantos años nos sentimos indignados. Aunque la sentencia es parcialmente favorable para nuestras comunidades, a las palmicultoras Los Andes y Palasema no se les responsabiliza por los daños causados. El juez además nos trata como una sola comunidad cuando hemos dejado claro que somos comunidades ancestralmente distintas. Si el juez no considera la diferencia entre ambas, esto vulnera nuestros derechos de pluriculturalidad y auto-determinación” (Entrevista a dirigente de La Chiquita, 18.08.2018).

Pese a las limitaciones identificadas, este fallo podría contribuir a reactivar la organización en el norte de Esmeraldas, sobre todo en un momento que, como lo reconocen varias de las personas entrevistadas, la cohesión organizativa y el tejido asociativo del norte de Esmeraldas están en entredicho.

“Durante el anterior gobierno, sobre todo en la parte baja de esta región, nos quedamos sin oportunidades. El Estado mediatizaba todo y se registró un fuerte bajón organizativo para los movimientos pues los dirigentes fueron comprados a través de cargos para que promuevan las políticas del gobierno, consiguiendo el apoyo de las comunidades y su lealtad en los procesos electorales. No solo el gobierno compró dirigentes, también lo han hecho las empresas de palma y la

---

<sup>179</sup> Esta información fue proporcionada por Flavia Carlet, doctoranda de la Universidad de Cambria, y por el actual abogado defensor de las comunidades La Chiquita y Guadalito.

minería ilegal. Esto nos ha roto, nos hemos dividido. En la actualidad priman los intereses individuales por sobre los colectivos” (Entrevista a dirigente de la Gran Comarca del Norte de Esmeraldas, 30.01.2018).

“En términos de organización social, la situación es muy compleja. En estos diez años, se suplantaron a las organizaciones. Las federaciones, por ejemplo, casi han perdido sus bases. El gobierno y algunas ONG en lugar de fortalecer el tejido asociativo existente, con todas las dificultades que tenga, se dedican a crear nuevas organizaciones, nuevos procesos, dividen a la gente y debilitan lo existente. Cuando se ejecuta un proyecto, ni siquiera contratan gente de la zona, sino que son personas de otros lugares del Ecuador o del extranjero. Hoy no tenemos el tejido asociativo de hace diez años atrás. Esto ha sido un golpe muy duro, hemos perdido en lugar de avanzar” (Entrevista a dirigente de la Asamblea Nacional Ambiental, 05.02.2018).

A partir del año anterior, con el apoyo de la iglesia, las organizaciones lentamente han comenzado a reactivarse. Varias opiniones provenientes de las entrevistas reconocen que el activo trabajo de la iglesia católica a través de la Pastoral Social en la defensa de los derechos, las reivindicaciones étnicas, el territorio, ha sido muy positivo pero aún con poco eco social por la dificultad de competir con el extractivismo y la posibilidad de contar con recursos inmediatos. “La realidad de Esmeraldas ha motivado a que la iglesia amplíe su marco de acción, y no se dedique únicamente a lo social y educativo, áreas en las que históricamente han trabajado, para inmiscuirse en lo ambiental pues reconocen que éste es uno de los ámbitos que demanda una atención urgente” (Entrevista a técnica de Acción Ecológica, 19.01.2018).

Organizaciones socio-territoriales como la Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas (REDCONE), la Comuna Rio Santiago Cayapas, la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas (FECCHE), la Nacionalidad Épera Siapidara de Esmeraldas (NAESE), la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (UONNE), así como organizaciones más pequeñas, vinculadas a un territorio específico o a actividades productivas (recolección de crustáceos, por ejemplo), han expresado en reuniones y encuentros comunitarios la consigna de “NO al desalojo de los pueblos ancestrales asentados por más de 300 años atrás, ni al acaparamiento de tierras por parte de las empresas transnacionales palmicultoras” (Entrevista a dirigente de San Lorenzo el 02.02.2018) y es que la lucha por el territorio se ha convertido para muchas de estas organizaciones en una lucha por la supervivencia (Entrevista a dirigente de la Asamblea Nacional Ambiental, 05.02.2018).

## **5.3. Minería i-legal**

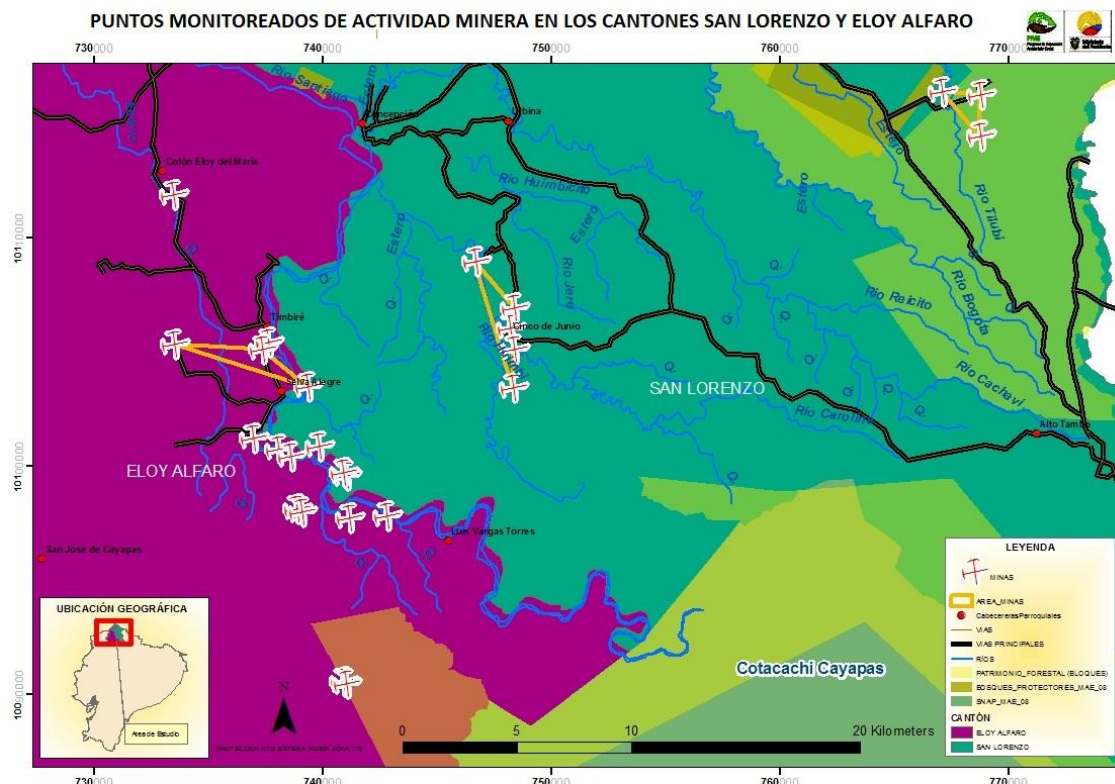
### **5.3.1. Reingreso de la minería en el norte de Esmeraldas**

Después de casi un siglo de la suspensión de las operaciones mineras manejadas por empresas extranjeras, la minería regresó al norte de Esmeraldas. No se trataba de la minería históricamente practicada por las poblaciones asentadas en esta área, por lo general a cargo de mujeres, que casi de forma manual, recogían el oro en los ríos (Rueda, 2001; 2010). La minería que hizo presencia en el norte de Esmeraldas en la primera década del siglo XXI, interesada en los depósitos de oro aluvial aparentemente abundantes en la zona y motivada por el incremento del precio del oro en el mercado, estaba equipada con retroexcavadoras valoradas cada una en más de US\$ 200.000 y otro tipo de maquinaria de difícil acceso para poblaciones que carecen de capital. Se habló entonces de la incursión de la minería ilegal que, según los términos de la Ley Orgánica Reformativa a la Ley de Minería de julio de 2013, es aquella que ejercen “personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, autorizaciones, permisos o licencias” (Art. 57).

El frente minero se concentró alrededor de nueve ríos y esteros de la cuenca Santiago-Cayapas: Tululbí, Palabí, Cachaví, Bogotá, Huimbicito, Santiago, María, Zabaleta y Zapallito, incidiendo directamente sobre 24 comunidades, incluyendo las ciudades de Borbón y San Lorenzo y uno de los territorios comunales más antiguos del Ecuador, la Comuna Río Santiago-Cayapas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en un área próxima al límite internacional con Colombia (PRAS-CID-PUCESE, 2011b) (ver Mapa 12).

Según información proporcionada por dirigentes comunitarios, en la Comuna Río Santiago Cayapas en el 2010 se advertía la presencia de más de 200 operaciones mineras ilegales, todas a cargo de personas externas (Entrevista realizada el 03.02.2018). Varios planes de desarrollo y ordenamiento territorial retratan una realidad similar pues cerca del 70% de las 31 parroquias rurales del área de estudio (Ver Tabla 11 que sintetiza el uso del territorio a nivel parroquial) estarían enfrentando los impactos de la minería y, en algunos casos, la conversión de áreas de palma, afectadas por la pudrición del cogollo (PC) en minas, como sucede en el sector de Casas Viejas (Acción Ecológica, 2017: 12).

## Mapa 12. Ubicación de la actividad minera ilegal en Esmeraldas



Tomado de: PRAS-CID-PUCESE, 2012: 27

### 5.3.2. Minería, seguridad y violencia

A partir del ingreso de las operaciones mineras, la situación de seguridad en la zona sufrió un fuerte deterioro. A través del empleo de grupos de personas armadas provenientes de bandas de sicarios encargadas de custodiar las instalaciones y garantizar la operación de las maquinarias, las empresas ilegales lograron intimidar a los pobladores y acallar cualquier posible muestra de inconformidad (González, 2014; Morán, 2017a). No es sorprendente en esta dirección que Iván Roa Ovalle (2012) afirme que el personal de seguridad de estas operaciones mineras podría pertenecer a bandas paramilitares y otras de acción criminal como la conocida como “El Látigo” o la de César Bernaza.

Las contribuciones monetarias recibidas por ciertos dirigentes, el pago de los maestros que trabajan en las escuelas del área o la construcción de algunas obras de interés comunitario, como la casa comunal de Maldonado, son también algunos de los argumentos que explican el apoyo a la minería por parte de ciertos sectores de la población pese al alto rechazo demostrado por la mayoría de sus habitantes. Como lo sucedido en otras regiones del país y en los diversos segmentos de la frontera norte, las empresas privadas han reemplazado en ciertas ocasiones la provisión de servicios que le

corresponde al Estado, ahondando una lógica clientelar de relacionamiento (Gudynas, 2009; Machado-Aráoz, 2015).

La práctica del chantaje se ha extendido hacia los gobiernos locales que reciben el pago de “impuestos” por los operadores mineros a cambio de libertad de acción y movilidad dentro de los territorios. Para garantizar el apoyo a las operaciones mineras, la investigación desarrollada por González (2014), *Minería del oro y agua segura en territorios fronterizos, etnodiversos y de alta vulnerabilidad geopolítica*, determinó el pago de sueldos adicionales a los concejales, la conversión de alcaldes en inversionistas de las mineras o de los gobiernos parroquiales en administradores de los frentes mineros en su jurisdicción. De manera similar a las evidencias documentadas por González, Jarrín (2014: 185) determinó que un monto entre 3 mil y 6 mil dólares mensuales es entregado por las mineras a la administración del cabildo.

La red de protección de la que goza la minería no solo se circunscribe a ciertos dirigentes comunitarios y gobiernos subnacionales, sino que atraviesa a funcionarios de instituciones públicas centrales (Naizot, 2011), ahondando no solo la erosión de la ya débil institucionalidad del norte de Esmeraldas, sino fortaleciendo la percepción de desprotección y desatención de la población. El siguiente testimonio es ilustrador al respecto:

“De la minería se benefician las mafias que operan en la zona en las que están incluidos funcionarios del Estado, de gobiernos cantonales y parroquiales, de la policía, el ejército y la marina. Actúan con colombianos quienes abren el camino y supervisan la recolección de los fondos a las buenas o a las malas.

En Selva Alegre, las fuerzas armadas disponen de un gran cuartel desde el que señalaron que iban a controlar la deforestación, las operaciones mineras. Mientras quienes íbamos a supervisar las escuelas éramos sometidos a una minuciosa revisión, era conocido que más arriba, ahí en el Santiago, estaban las mineras. ¿Cómo van a permitir eso? Encontrábamos carros con placa (matrícula) colombiana y en la zona de Juan Montalvo y Aquí Me Quedo, donde realmente está la minería ilegal, donde ha habido muertos el año anterior, donde mataron a un maestro, los militares dicen que no saben por dónde entraron los mineros, ¿cómo es que no conocen?, ¿cómo es que lo permiten?” (Entrevista a activista de derechos humanos, 31.01.2018).

Las altas cantidades de dinero que se movilizan alrededor de la minería ilegal conducen a que funcionarios públicos entrevistados afirmen la existencia de vínculos entre esta actividad y el narcotráfico (Entrevista a Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, 20.12.2017). Una opinión similar fue expresada por el Secretario Nacional de la Política quien mencionó que:

“El dinero proveniente de la minería y de las restantes actividades ilegales circula entre funcionarios públicos, así como entre las comunidades y contribuye a agudizar los problemas existentes y a aumentar los conflictos. En este contexto, la intervención pública no logra sostenerse. En varias ocasiones la puesta en marcha de una política pública se ha visto obstaculizada pues la minería ilegal o el narcotráfico compran a funcionarios públicos y jueces que terminan favoreciendo que continúen operando las actividades ilegales” (Entrevista realizada el 21.12.2018).

En línea con esta apreciación, Fernando Carrión (2016) ha estudiado la transformación del Ecuador de país de paso de la droga a su constitución en una suerte de nodo (plataforma) de la red global del crimen donde se lava dinero, se consume droga y se trafican productos psicotrópicos más allá del mercado nacional. Este nuevo rol del Ecuador en la división internacional del trabajo de la droga implicaría la proliferación de nuevas fuentes de ingresos ilegales como el contrabando de hidrocarburos o la minería ilegal.

El tejido de amenazas, compra de lealtades, redes de corrupción, terminó finalmente configurando un panorama en el que la minería ilegal poco a poco fue ganando terreno al tiempo que destruía las alternativas de vida para la población y rompía los ciclos ecológicos de las áreas en las que se instala. Pese al rechazo de la población, la minería ilegal no ha podido ser controlada y ha tendido a aumentar con un patrón distinto al que se reflejaba años atrás:

“En la actualidad la minería ilegal se concentra en tres frentes: la parte alta del río Cachaví, en el cordón Durango-Alto Tambo, en los límites con la provincia del Carchi, y en Playa de Oro que tiene el más alto rendimiento con 0,5 kg. de oro por tonelada de tierra removida, cuando en el pasado los mineros estaban distribuidos a lo largo de toda la región norte de Esmeraldas. Este nuevo patrón obedece a que los mineros han podido ya identificar los puntos de mayor rendimiento para la obtención de oro. Cada frente está en manos de un grupo definido, una suerte de repartición del territorio” (Entrevista al Director del Instituto de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas, 17.12.2017).

La ocurrencia de tales prácticas ha sido posible, según la mayoría de las personas entrevistadas, por la “desatención histórica del Estado” -afirmación cuya veracidad ha sido cuestionada a lo largo de esta tesis- frente a las poblaciones asentadas en los “confines” del territorio. Sin embargo, para el Subsecretario de Minería Norte, la irrupción de la minería ilegal no solo obedece al olvido de la frontera por parte del Estado central y los gobiernos locales, sino a la aplicación de políticas cuyas consecuencias no fueron adecuadamente valoradas por el Estado. En concreto, este alto funcionario del Ministerio de Minas considera que en el 2008, en el marco de la Asamblea Constituyente,

la decisión de revertir todas las concesiones mineras al Estado -conocido como el “Mandato Minero”-, provocó un aumento desmesurado de la minería ilegal.

Resulta paradójico que una vez en vigencia el Mandato del 18 de abril de 2008, cuyo objeto era regular la actividad minera y racionalizar las concesiones que habían sido entregadas en años anteriores a través de un marco jurídico insuficiente, sin consideración de variables ambientales y sin el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y afroecuatorianos, la minería ilegal se expanda de manera descontrolada.

### **5.3.3. El desastre ambiental y social ocasionado por la minería**

La mayoría de las entrevistas realizadas coinciden en afirmar que la minería constituye uno de los más graves desastres ambientales que ha afectado al norte de Esmeraldas. Además de la destrucción de la vegetación y la indiscriminada apertura de vías que acelera la tala del bosque, es evidente la contaminación de los ríos y esteros, principales fuentes de abastecimiento de agua de la población y uno de los núcleos de socialización, recreación y cohesión más importantes. Un muestreo en las cuencas de los ríos Cayapas, Santiago, Bogotá y Tululbí efectuado por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) en noviembre del 2010 concluye que el 50% de los cuerpos de agua monitoreados presentan concentraciones elevadas de aluminio, con valores que exceden entre 90 y 350 veces los máximos permisibles (0,2 mg/L. para aguas de consumo humano y uso doméstico). Estas altas concentraciones responden, según el informe, a la utilización de “aluminio en el proceso extractivo denominado cementación, por medio del cual el oro tiende a formar complejos, que representa un proceso de bajo costo para la extracción y de alto costo para el ambiente afectando a la flora y fauna del ecosistema” (SENAGUA, 2010: 9). En los ríos analizados, el estudio determinó, además, la presencia de arsénico con valores que sobrepasan cuatro veces el límite máximo permisible. Tales concentraciones pueden desencadenar problemas de salud como cáncer a la piel, vejiga y pulmones. Se identificó, finalmente, exceso de hierro y de carga orgánica ( $\text{DBO}_5$ ), lo que explica la turbidez y el color del agua que registran valores que sobrepasan la normativa ambiental (Ibid.: 11). Sobre la base de tales constataciones, el estudio concluye que las fuentes de agua analizadas no son aptas para el consumo humano ya que los valores de hierro, arsénico, aluminio,  $\text{DBO}_5$ , color, turbiedad, coliformes totales y fecales sobrepasan los límites máximos permisibles en la normativa ambiental.

Los contenidos del estudio de SENAGUA se complementaron con el esfuerzo investigativo llevado a cabo en el marco de un acuerdo suscrito entre el Programa de

Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente y la Pontificia Universidad Católica-Sede Esmeraldas (PRAS-CID-PUCESE) a partir de junio del 2011.<sup>180</sup> De acuerdo a este estudio, los efectos de la contaminación minera han agudizado la ya precaria situación de salud de la población asentada en el norte de Esmeraldas. Las áreas abandonadas por las mineras una vez agotada la extracción de oro, quedan absolutamente devastadas, estériles y sembradas de piscinas de aguas tóxicas, y los ríos envenenados. De la información analizada por PRAS-CID-PUCESE se desprende que la población estaría expuesta a la intoxicación por arsénico y aluminio, metales que se encontraron en los peces. El estudio también registra una alteración en la composición de las especies de peces: el 90% serían omnívoros, con presencia baja de otros grupos y una ausencia total de herbívoros (2011b: 111-116). En este escenario la conclusión del estudio es que “(l)a actividad minera ha generado una contaminación sistemática que pone en peligro la vida de las comunidades acuáticas (peces y macroinvertebrados) y de los habitantes que dependen de cursos de agua para su consumo y uso” (Ibid.: 105).

Debido a la intensidad de la explotación minera se estima que entre los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo habría más de 7 mil piscinas abandonas (Acción Ecológica, 2017: 12), las mismas que serían un caldo de cultivo para la aparición y desarrollo de insectos portadores de paludismo (anopheles) que, según datos recogidos por la Unidad Epidemiológica de Esmeraldas han proliferado en el área con el riesgo de expandirse (PRAS-CID-PUCESE, 2011b: 153).

De acuerdo al Director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas (entrevista realizada el 17.12.2017), en la actualidad las explotaciones mineras, a diferencia de lo ocurrido 10 años atrás, ya casi no ocupan mercurio en los sitios de extracción pues el oro que se está explotando tiene una naturaleza laminar. Las principales fuentes de contaminación en los sitios mineros y en los ríos aledaños sería por metales pesados como el aluminio, hierro y zinc, mientras que el mercurio sería utilizado en otra fase de la explotación, en la extracción de los pequeños residuos, que no se realiza en el sitio de explotación sino en lugares cercanos a San

---

<sup>180</sup> Los resultados de este estudio no fueron difundidos por decisión del gobierno que vetó su circulación. Agradezco a Eduardo Rebolledo, Director del Centro de Investigación y Desarrollo -CID- de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas -PUCESE- la entrega de los documentos completos. Según él mencionó en la entrevista mantenida el 17.12.2017, “frente a la negativa de socialización de los resultados, y ante la ausencia de acciones de reparación y el consiguiente incumplimiento de las medidas cautelares, el equipo técnico de la Universidad Católica de Esmeraldas optó por recomendar a la población que suspenda el consumo de peces. Tal recomendación resulta en una medida de precaución debido a los altos niveles de contaminación de los ríos”.



Lorenzo donde estos remanentes de la minería son transportados en mantas para ser procesados con mercurio. Este procedimiento representa una amenaza para la población de San Lorenzo, ampliando el alcance de la contaminación de las operaciones mineras.

Junto a la contaminación y deterioro ambiental, la presencia de la minería ilegal ha traído consigo varios problemas como la fragmentación social de las comunidades entre comuneros en contra y a favor de esta actividad, el aumento de la conflictividad y de los niveles de desconfianza entre los pobladores (Morán, 2017a). Con las mineras ha crecido la prostitución, ha aumentado el número de embarazos adolescentes, la violencia sexual y el consumo de alcohol y drogas, y se evidencia, en general, un deterioro de las condiciones de vida especialmente en las zonas rurales:

“La minería ha provocado el cambio de conductas entre la población como el consumo excesivo de alcohol y el uso de drogas. Pero no solo eso, junto a la minería ha crecido la prostitución, que aumenta o disminuye en función del precio del oro y de la apertura de nuevas áreas de explotación. Las armas han entrado al territorio, a los sitios cercanos a la minería y con éstas han aumentado la delincuencia y la violencia que antes eran fenómenos eminentemente urbanos. Si hace algunos años, en San Lorenzo no era posible salir por las noches, ahora esa realidad ha pasado al campo. La inseguridad es un fenómeno diario y a todas horas” (Entrevista a la Coordinadora de la Pastoral Social, 28.01.2018).

Aunque es difícil establecer una correlación lineal entre la minería y la alienación de los cuerpos y los territorios para usar el concepto de Machado-Aráoz (2010), los cuantiosos flujos de dinero provenientes de la minería (y otras actividades ilegales) han agudizado la adopción de patrones culturales foráneos y la incorporación de nuevas pautas de consumo que se traducen en la adquisición de equipos y artefactos que no pueden utilizarse en la zona por falta de infraestructura de soporte como televisores o teléfonos inteligentes en áreas que carecen de cobertura celular (Gobierno Parroquial de Lagarto, s/f.). En medio de un escenario de carencias materiales básicas, en algunas parroquias (Lagarto, Anchayacu, Borbón, Maldonado) las familias pagan servicios satelitales de televisión aunque los cortes de energía sean parte de la rutina diaria.

Un factor adicional que contribuye a la expulsión de la población es la venta de tierras producto del aumento exponencial de su precio: “El precio de la tierra también ha crecido muchísimo. Si en el 2011 una hectárea costaba 400 dólares, en la actualidad se ofrece hasta 10 veces más, aunque rápidamente los precios vuelvan a bajar. La obtención de dinero es un incentivo para la venta de la tierra y las comunas han sido las más afectadas” (Entrevista a técnica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Eloy Alfaro,

09.07.2018). Muchas tierras han sido vendidas de manera fraudulenta por dirigentes, afectando sobre todo a las tierras comunales. En las entrevistas se denunció que dirigentes de la Comuna Río Santiago y del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) habrían vendido tierras o intervenido en el área con maquinaria de su propiedad.

También los gobiernos autónomos habrían sucumbido al establecimiento de acuerdos con los mineros como se reporta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Luis Vargas Torres:

“En los años 2009 al 2010, el Cabildo llegó a convenios con empresarios mineros especialmente colombianos y algunos nacionales para realizar minería con maquinaria pesada y otros sistemas contaminantes a cambio de pingües dádivas y ofertas de mejoras insustanciales. La realidad es que ninguna familia, de manera organizada y solidaria, compró una libra de azúcar por este tipo de explotaciones mineras. Ni el cabildo ni ninguna persona de la comunidad supo, conoció o fue informado de la cantidad de oro que los empresarios extrajeron de sus territorios, les contaminaron el río y la vida y el oro lo comercializaron fuera del país” (GAP Luis Vargas Torres, 2015: 40).

De manera similar a los impactos de la expansión de los cultivos de palma aceitera, otro de los efectos visibles de la minería es el aumento de la emigración, principalmente a San Lorenzo y Esmeraldas, a otras ciudades del país y a Colombia. El siguiente testimonio da cuenta de la severidad de este cambio:

“En los últimos años se registra una alta salida de población del norte de Esmeraldas hacia Colombia. La magnitud de este fenómeno es tal que podría afirmarse que es más numerosa la población que emigra hacia Colombia que la que viene de ese país hacia Ecuador. Aunque esta realidad es difícil cuantificar con exactitud, conocemos que los jóvenes en un alto porcentaje van a Colombia donde son contratados en los cultivos de coca. Van a ‘minar’ (como se conoce el trabajo vinculado a la recolección de coca) y regresan con dos mil o hasta tres mil dólares a la semana. El dinero proveniente de la minería y las ingentes cantidades de circulante generadas a partir del negocio de la droga han impactado en la economía de la región norte de Esmeraldas donde los precios son, en promedio, tres veces más altos que en el resto de la provincia” (Entrevista al Director del Centro de Investigación y Desarrollo de la PUCSE, 17.12.2017).

#### **5.3.4. La riqueza se va, las “sobras” son para los que se quedan**

Según se desprende de algunos de los planes de desarrollo de la región (Timbiré, 5 de junio, Concepción, Pampanal de Bolívar), además del personal armado, las operaciones de minería ilegal suelen contratar un número reducido de trabajadores, incluyendo el trabajo de niños y niñas que abandonan la escuela para obtener ingresos, así como

personal de apoyo, sobre todo mujeres, dedicadas a la cocina y que por lo general no son de las comunidades donde se realiza la explotación minera. En el mejor de los casos, las 4-5 personas contratadas por cada sitio minero representan, de acuerdo al estudio antes citado del Ministerio del Ambiente y la Universidad Católica, entre 3.000 y 4.000 empleos directos (PRAS-CID-PUCESE, 2011b: 29), sin ocupar en todos los casos, mano de obra local, sino más bien población migrante o de otras regiones del país como lo reportan los planes de desarrollo de Carondelet, Tululbí, Chumundé y Rocafuerte.

Aunque el empleo en la minería se caracteriza por su precariedad (Ibid.), Jarrín (2014: 86) determinó que los ingresos que la población obtiene por esta vía representan cerca de tres salarios básicos (1.200 dólares), a la vez que detectó la creación de “cadenas de valor” funcionales a la explotación minera, las mismas que facilitarían el intercambio comercial del oro, así como la provisión de los insumos requeridos (combustibles para la operación de la maquinaria o servicios de alimentación) para la explotación minera a través del uso de transporte fluvial y terrestre.

Como medida compensatoria para frenar posibles descontentos por una tasa de ocupación tan reducida y contrarrestar la resistencia de la población, las mineras permiten que grupos de 30-40 personas, una vez extraída la parte principal del material, accedan al lavado del oro depositado en el fondo de los orificios abiertos. En estos grupos también es frecuente encontrar a niños y niñas trabajando. Quienes recogen estas “sobras” no mantienen ningún tipo de relación laboral con la actividad minera y apenas logran un ingreso promedio de 7 a 10 dólares diarios luego de la venta de las chispas de oro así recogidas.<sup>181</sup> Pese a las consecuencias sobre su salud, a la absoluta precariedad de su trabajo y a la indefensión bajo la que operan, la sola posibilidad de contar con ingresos que antes carecían, ha convertido a los “playadores” en defensores de la minería ilegal. El arrendamiento o venta de la tierra comunitaria para la explotación minera es otra fuente de ingresos para la población (PRAS-CID-PUCESE, 2011b).

Independientemente de la vía, la consecución de un ingreso inmediato proveniente de la minería representa, para un porcentaje de la población del norte de Esmeraldas, la única opción de trabajo, sobre todo para los jóvenes. La mayoría de la población, sin embargo, está al margen de los beneficios monetarios de la minería, lo que lleva a una dirigente de Timbiré a preguntarse: “¿cuál es la compensación que recibimos los pueblos

---

<sup>181</sup> Este dato fue proporcionado en varias de las entrevistas realizadas mientras que el estudio ya citado de PRAS-CID-PUCESE señala como valor referencial que los playadores pueden ganar entre 40 y 60 dólares diarios (2011b: 122).

que estamos dentro de este territorio a cambio de la explotación de esos recursos naturales?” (Acción Ecológica, 2017: 36). Más de 75 mil personas, tomando como referencia la población parroquial, soportaría los impactos de la contaminación, la insalubridad, la inseguridad y la violencia provocada por la minería, o como lo dice Lapierre,

“(L)o más grave es el contexto geopolítico en el cual se desarrolla esta nueva relación de poder: la zona es la frontera sur del modelo de desarrollo propio de vastas zonas rurales de Colombia, caracterizado por la disputa violenta de recursos naturales. En estos momentos, no es secreto la operación actual de grupos de esa índole en el norte de Esmeraldas (INREDH, 2009; NRC, 2009). En muchos casos, la profundización de las actividades extractivistas (en un contexto de tierras comunales) fortalece el peso de estos grupos en el territorio, lo que también conlleva a potenciales amenazas de cooptación institucional. Esto es extremadamente grave: en el norte de la provincia están las condiciones para que se profundice dicho modelo paramilitar colombiano, lo que conlleva el peligro a una pauperización mayor de la población y a la violación sistemática de los derechos humanos” (Lapierre, 2012: 16).

En efecto, los acontecimientos que ha vivido el norte de Esmeraldas desde inicios del 2018 (ver sección 4.6.4) parecerían corroborar las perspectivas anunciadas por Lapierre. En la actualidad, el territorio de la región del norte de Esmeraldas parece efectivamente haberse ido de las manos: grupos irregulares armados han hecho presencia en la frontera disputando el control con bandas delincuenciales del Ecuador y con carteles internacionales como el de Sinaloa, Los Zeta, Los Rastrojos o Los Urabeños en los que participan miembros de los aparatos de seguridad del Estado ecuatoriano (Haro, 2012; Levoyer, 2014; Carrión, 2016; Vélez, 2016).

### **5.3.5. La minería continúa en medio de medidas cautelares y estados de excepción**

Pese a las amenazas, el miedo y la falta de atención de las instituciones públicas, el grueso de la población ha mantenido su oposición a las operaciones de minería ilegal, llegando en ocasiones a escenarios de abierta confrontación que obligó la intervención del gobierno. En ese contexto, y argumentando básicamente razones de seguridad, en el año 2009 el gobierno decidió intervenir en el desalojo de las explotaciones mineras ilegales, en una operación conjunta entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y la Policía Nacional. En la primera incursión, 8 sitios fueron afectados: se retiró la maquinaria que operaba en tres áreas y se suspendió el funcionamiento de las cinco restantes. La maquinaria decomisada fue restituida a los

mineros luego de que el Juzgado Civil de Limones fallara a favor de la acción de protección que presentaran los supuestos afectados en octubre del 2010. Con la maquinaria restituida al poco tiempo los mineros reanudaron las operaciones ilegales (Secretaría Técnica de Plan Ecuador, 2010). La afectación a la propiedad privada tuvo más peso en la decisión legal que el alto impacto social y ambiental provocado por la minería ilegal.

Las contradicciones entre el ejecutivo y el poder judicial estuvieron también presentes al interior del propio gobierno. En el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, por ejemplo, dos sucesivas administraciones evidenciaron discrepancias en el procedimiento a seguir, llegando incluso a poner trabas para frenar la operación de desalojo de la minería ilegal y el decomiso de la maquinaria. Por su parte, el Ministerio del Ambiente dilató la entrega de un informe sobre los daños e impactos derivados de la minería ilegal, el mismo que serviría como base para iniciar las demandas legales por los delitos ambientales cometidos (Ibid.). La agilidad con la que el Estado reacciona frente a los problemas que afectan a las empresas privadas, como lo demuestra la reseña alrededor de la palma aceitera, se torna en una maraña administrativa al momento de enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de poblaciones que carecen de poder. El juego del gato y el ratón parecía haber tomado el control del territorio y de la institucionalidad pública.

Ante el deterioro del escenario social y ambiental y de manera paralela a los acontecimientos que se estaban sucediendo, la comunidad La Antonia presentó una denuncia, a la que le siguió un paro realizado por la comunidad de San Agustín en octubre del 2010 y la presentación de una demanda a la Defensoría del Pueblo en noviembre de ese mismo año (Acción Ecológica, 2017). Como resultado de la presión social, el 15 de diciembre del 2010 la fuerza pública ingresó a la zona con el propósito de efectuar un nuevo desalojo de la maquinaria utilizada por la minería ilegal (El Comercio, 2010). La operación finalmente no pudo concretarse pues al parecer la medida había sido filtrada con días de anticipación por quien luego se desempeñaría como Gobernador de Esmeraldas, Ministro de Justicia y Alcalde de Esmeraldas, sucesivamente (Entrevista a activista de derechos humanos, 31.01.2018). Lo que sí se logró fue presionar para que SENAGUA realice un estudio sobre la calidad del agua a finales de diciembre. Fruto de este informe, el 24 de marzo del 2011 el Juez Sexto de San Lorenzo dictó medidas cautelares en las que exigía al Estado una urgente atención a los problemas ocasionados por la minería. Las medidas cautelares, que benefician a 80 comunidades y parroquias de

los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, incluían la suspensión provisional de cualquier autorización para la operación de actividades mineras en dichos cantones; la suspensión de actividades mineras hasta la realización de una evaluación ambiental que garantice que las operaciones en funcionamiento no afecten ecosistemas y fuentes de agua y que formule directrices que deben cumplir las actividades mineras; la erradicación de la minería informal; la realización de un diagnóstico de salud de las personas que habitan en las comunidades afectadas y la atención sanitaria correspondiente; y, la dotación de agua a las comunidades por parte de los gobiernos municipales autónomos. En agosto del 2011, las medidas cautelares fueron extendidas por seis meses más.

Varias de las entrevistas realizadas señalaron que algunos sistemas de agua fueron contruidos solo por el municipio de Eloy Alfaro y no por el de San Lorenzo, cuyas autoridades se percibe estarían vinculadas con la minería: “La minería ha golpeado profundamente a la institucionalidad local. El Alcalde de San Lorenzo, tantas veces reelegido, está comprometido con la minería, con las madereras y con las palmicultoras” (Entrevista a dirigente de San Lorenzo, 02.02.2018).

Adicionalmente, a partir del 2012 se iniciaron ciertas actividades de remediación ambiental cuyo costo total se estima ascendería a 385 millones de dólares. De acuerdo a medios de comunicación, hasta abril del 2013 se habrían recuperado alrededor de 20 hectáreas con el trabajo de los mineros legalizados (El Comercio, 2013). El estudio antes citado de PRAS-CID-PUCESE advierte que el plan de remediación no prevé esfuerzos para disminuir la contaminación ni “tuvo ningún proceso de participación y elaboración local” (2012: 175).

En el marco de las medidas cautelares, en un principio la extracción de oro siguió realizándose en la noche como una estrategia para evitar que ésta sea detectada por los agentes del Estado (Roa Ovalle, 2012: 166). Poco tiempo después nuevamente la minería ingresó con fuerza motivando la declaratoria de un nuevo estado de excepción en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo (Decreto Ejecutivo 844) para los primeros días de agosto del 2011. Esta medida fue motivo de extensión por al menos dos ocasiones consecutivas.

En este contexto, el cumplimiento de las medidas cautelares sigue pendiente y enfrentando la oposición de instituciones como el Ministerio de Minas que considera que “las medidas cautelares tiene que evaluarse (pues) son un obstáculo para entregar concesiones a gente que puede realizar una minería responsable” (Entrevista al Subsecretario de Minería Norte, 28.12.2017) y el Alcalde de San Lorenzo que habría

argumentado la inversión en minería del municipio “para dar trabajo a mi gente” (Entrevista a dirigente de San Lorenzo, 02.02.2018). De ahí que en relación a las medidas cautelares el Adjunto de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo concluya:

“Aquí hay una lógica perversa. Las medidas no se han cumplido después de 7 años. Al inicio fue algo como emblemático, las comunidades estudiaban las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría y acogidas por el juez. Fue una cosa interesante al inicio pero, ya en el desarrollo, el poder fáctico es el que determina. Ahí quedaron y las organizaciones han presentado una demanda por incumplimiento de las medidas cautelares en la Corte Constitucional. El dictamen está por emitirse” (Entrevista realizada el 19.01.2018).<sup>182</sup>

Para las comunidades afectadas, tanto el incumplimiento de las medidas cautelares cuanto la continuidad de la minería, son señales de la conducta discriminatoria con la que el Estado ha tratado a la población del norte de Esmeraldas.

“Después de ocho años de contaminación sistemática, la casi totalidad de las comunidades no contamos con sistemas de agua segura; y seguimos consumiendo y utilizando, el agua de los ríos contaminados. La magnitud de la problemática y el tiempo transcurrido desde el inicio de la emergencia ambiental, confirman la invisibilización, exclusión y discriminación de las comunidades afrodescendientes e indígenas del norte de Esmeraldas. Como se observa, el Estado ha privilegiado en el norte de Esmeraldas la profundización de las actividades mineras, antes que la protección al derecho al agua y la vida” (FECHE et al., 2017: 11).

Con mayor expectativa observa el Adjunto de Derechos Humanos las medidas cautelares a favor de la comunidad indígena Awá del Resguardo Hojal La Turbia ubicado en los municipios de Tumaco y Barbacoa del departamento de Nariño, dictadas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, Colombia, frente a Esmeraldas en el Ecuador, donde también habitan comunidades Awá. Los contenidos de estas medidas, cuyo espíritu es precautar la supervivencia de este pueblo darían paso, según su criterio, a una intervención de carácter binacional para detener el avance de la minería ilegal, generando una nueva dinámica para el tratamiento de este conflicto. En concreto, el dictamen del Juzgado Tercero Civil del 11 de julio de 2017 señala, en el literal i:

“Ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo que en coordinación armónica con

---

<sup>182</sup> La acción de incumplimiento de las medidas cautelares presentada ante la Corte Constitucional fue interpuesta por Acción Ecológica el mes de noviembre del 2017. En esta acción están involucrados al menos seis ministerios (Entrevista con técnica de Acción Ecológica, 19.01.2018).

las autoridades de la comunidad indígena Awá del Resguardo La Turbia, en un plazo máximo de dos (02) meses contados a partir de la comunicación de esta decisión, adelanten las acciones correspondientes ante la República del Ecuador para que, de manera articulada con ese país, se logren adoptar medidas idóneas y eficaces que permitan prevenir y responder a las actividades de minería ilegal que se están llevando a cabo en la zona de frontera, concretamente, en la cuenca de los ríos Mayasquer y Mira” (2017: 45).

Este dictamen ha contribuido a impulsar la coordinación entre las defensorías de ambos países para construir una estrategia de actuación común. El límite de este esfuerzo descansaría en que

“al actuar desde la centralidad política, no hay un diálogo desde los ejercicios territoriales y resulta complejo hacer realidad los planteamientos emitidos desde las instituciones centrales. Los grandes acuerdos están bien pero hay que pensar en ejercicios que permitan aterrizar en el territorio, con los gobiernos locales, con los actores que ahí operan” (Entrevista al Adjunto de Derechos Humanos 19.01.2018).

En contraste con la no aplicación de las medidas cautelares y la consecuente vulneración de la vida de las poblaciones del norte de Esmeraldas, lo que sí ha funcionado es la declaratoria de un estado de excepción casi permanente. En efecto, frente al descontrolado crecimiento de operaciones mineras ilegales el 20 de mayo del 2011 se emitió el Decreto Ejecutivo No. 783 que dio paso a la declaratoria de un nuevo estado de excepción en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo. Mediante esta medida se otorgaron amplias competencias al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que ingresó al área a través de un dispositivo militar de proporciones hasta entonces inusitadas en el país. En dicho operativo se destruyeron 67 retro excavadoras y se incautaron algunas más, una de las cuales pertenecía al Municipio de San Lorenzo (Entrevista a activista de derechos humanos, 31.01.2018). La afectación no fue total en la medida en que en la zona operaban más de 200 retro excavadoras (PRAS-CID-PUCESE, 2011b). La permanencia de maquinaria en la zona conlleva a cuestionar los fines detrás del operativo militar: “un tiempo atrás, el ejército entró en Selva Alegre y paralizó los trabajos mineros de ese sector. Pero los que conocen la región saben que ese acto buscaba legitimar la presencia de los militares en la región, antes que parar el trabajo de las mineras” (García y Walsh, 2017: 231).

El despliegue de seguridad se complementó con la creación de una Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (Decreto Ejecutivo 754), conformada por



once entidades gubernamentales<sup>183</sup> encargada de coordinar la aplicación de las políticas orientadas a contrarrestar la minería ilegal, a resarcir a las poblaciones afectadas con medidas compensatorias y el lanzamiento de la Misión Luis Vargas Torres para la construcción de servicios básicos, equipamiento comunitario, carreteras y la adquisición de maquinaria para minería con un presupuesto de 13 millones de dólares (La Hora, 2011). Entre las personas entrevistadas, quienes conocen la existencia de la Comisión consideran que esta es una de las medidas más eficaces. No obstante, para la gran mayoría de las entrevistas su funcionamiento es aún desconocido, lo que revela los límites en su operación.

Si bien las demostraciones de fuerza (7 operativos militares entre el 2010 y 2013) y el uso de estados de excepción podrían leerse como una acción desesperada del gobierno frente a una realidad que obstinadamente persiste en mantenerse, los resultados finales sugieren que más allá de estrategias violentas y con un alto contenido performativo, las instituciones públicas han carecido de voluntad para contribuir a mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que determinan el contexto en el que viven los pobladores de San Lorenzo y Eloy Alfaro, como lo demuestra el incumplimiento de las medidas cautelares.

Según lo afirma Mary Douglas (1966, citada por Brown: 2015: 167), la declaratoria de un estado de excepción casi continuo como medida para frenar la irrupción de la minería ilegal guarda correspondencia con las respuestas que a nivel mundial se han puesto en práctica para contener la contaminación o para frenar los supuestos peligros en áreas de frontera. Si bien la realidad corrobora la percepción de Douglas, es preciso destacar que mientras la declaratoria de estados de excepción ha tenido repercusiones negativas sobre la población, su implementación no ha significado en ningún momento afectaciones sobre la dinámica de acumulación que prevalece en esta zona y que en gran parte moldea muchas de los conflictos y problemas presentes. De ahí que, en acuerdo con Margarita Serje sea necesario complementar que

“el estado de emergencia se perpetúa tras nociones como el ‘abandono’ o la ‘ausencia del Estado’, a pesar de que históricamente ha habido en estas zonas una presencia consistente de los Estados mediante este régimen de intervención que, irónicamente, se parece mucho al que hoy se conoce como Estado neoliberal, cuyas funciones se orientan a atraer y garantizar condiciones

---

<sup>183</sup> La Comisión, presidida por el Ministerio Coordinador de la Seguridad, estaba integrada, además por los ministerios del Interior, Defensa, Recursos Naturales No Renovables, Ambiente y Justicia; la Agencia de Regulación y Control Minero, la Secretaría de Riesgos, la Secretaría Técnica de Plan Ecuador, la Secretaría de Inteligencia y el Servicio Nacional de Aduanas.

favorables a la inversión de los superávits de capital en los ‘centros’, al tiempo en que se privatizan y se ‘tercerizan’ sus funciones de regulación y de protección social” (Serje, 2017: 43, las comillas son de la autora).

Lo anterior confirma que el enfrentamiento del complejo escenario del norte de Esmeraldas no pasa únicamente por mejores arreglos institucionales, normativos o jurídicos, sino fundamentalmente por procesos de orden social, cultural, económicos y de políticas que garanticen y materialicen un proyecto de vida pues como lo afirma el Adjunto de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, Esmeraldas de acuerdo a la Constitución “es una zona de paz, pero hay violencia. Es una zona preferencial, pero para el extractivismo. Hay una dicotomía cierta que debe resolverse” (Entrevista realizada el 19.01.2018).

### **5.3.6. Un modelo minero para el norte de Esmeraldas**

En junio del 2011, un mes después del desalojo parcial, el gobierno inició un proceso de regularización de los mineros ilegales, una medida cuestionada por varios sectores. La intención detrás de esta decisión al parecer habría radicado en el reconocimiento de que “si no podemos contra ellos, al menos cobremos los impuestos que corresponden por la extracción de minerales”, minimizando la opinión de la población:

“En términos simbólicos, el propio apoyo del estado a explotaciones mineras que operaron, durante años, de forma ilegal (contraviniendo los preceptos constitucionales de remediación e indemnización por daños a la naturaleza y los seres humanos), remarca en las poblaciones de la zona un sentido común estructurado de impunidad, corrupción, desconfianza en las instituciones y escasa apropiación de las normativas y las estructuras de autoridad” (Lapierre, 2012: 19).

Aún sin concluir la fase de regularización, en septiembre del 2011 el gobierno hizo el lanzamiento del “Plan Minero Metalúrgico Artesanal Comunitario” mediante el cual el Estado entregó a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) una primera concesión por 18 mil hectáreas para que esta entidad se asocie con pequeños mineros y mineros artesanales a quienes el Estado dotaría de maquinaria y equipos. A esta primera concesión se añaden otras ocho adicionales hasta llegar a totalizar 1.290.938,78 hectáreas que cubrirían lo que se conoce como proyecto minero “Río Santiago” (Lucero, 2014: 13).

El funcionamiento de un proyecto minero directamente gestionado por el Estado en una superficie que, de acuerdo al total de hectáreas entregadas en concesión, podría fluctuar entre el 2,5% y el 5,5% de los territorios cantonales de San Lorenzo y Eloy

Alfaro, configuró un escenario de paulatina consolidación de la minería a cielo abierto en el norte de Esmeraldas. En su establecimiento no solo que no mediaron procesos de consulta previa con la población, según lo establece la ley, sino, lo que es aún más grave, el paso de un Estado ausente a uno extractivista, representó un terreno fértil para que continúe la operación de actividades mineras encubiertas e ilegales. En efecto, pese a las expectativas levantadas, el proyecto estatal dejó de funcionar en el 2015, mientras las operaciones ilegales se han consolidado:

“Para el 2012 ya se habían otorgado 38 mil hectáreas a la ENAMI. La idea era constituir una empresa con las comunidades para lo que se constituyó la COPROSAN (Cooperativa de Producción Minera Río Santiago y Cayapas) conformada por 47-50 personas de todas las comunidades. No obstante, el desacuerdo entre las comunidades no permitió que la empresa prospere. A esto hay que añadir problemas de gerencia y la presión que ejercieron guerrilleros. En el 2015 la concesión quedó en manos de COPROSAN pero en lugar de hacer un manejo técnico, a la concesión ingresaron mineros ilegales. En la actualidad hay 57 frentes de minería ilegal que operan dentro de concesiones legalmente entregadas. Conocemos que se paga 5000 dólares por inscripción y 3000 dólares por operación. Se desconoce quién recoge este dinero. Los frentes trabajan bajo la modalidad 2 x 1. Es decir, por cada dos sitios mineros de 10 x 10 metros y de 2 o 3 metros de profundidad, uno adicional es para las comunidades. De estos frentes solo 3 se quieren legalizar pues la mayoría de gente considera que los costos de operación de minería legal son muy altos: 18 dólares por hectárea al año por patentes de conservación, 8 mil dólares ó más por un estudio de impacto ambiental, pago de regalías, etc. De ahí que se haya iniciado un proceso de caducidad de esta concesión pues COPROSAN debe más de 300 mil dólares en patentes de conservación y regalías” (Entrevista al Subsecretario de Minería Norte, 28.12.2017).

La tesis de maestría de Gabriela Lucero sobre el Proyecto minero Río Santiago añade que la salida de los técnicos gubernamentales del área habría obedecido a la inviabilidad económica financiera del proyecto: 17.008,84 dólares de ingresos mensuales frente a 118.774,57 dólares de costos mensuales de operación (2014: 161).

Este último argumento resulta poco convincente a la luz de los cuantiosos ingresos generados por la minería:

“el incremento de la minería solo responde a motivaciones económicas. Un kilogramo de oro se cotiza actualmente en 36 mil dólares, un kilogramo de coca en 6 mil dólares. No hay forma de competir con un precio tan alto, y con el hecho de que la minería ilegal posibilita lavar dinero y que el blanqueo del oro luego se utilice para el crecimiento del negocio de la coca” (Entrevista al Subsecretario de Minería Norte, 28.12.2017).

Aunque el proyecto gubernamental fue abandonado, la minería sigue operando en el norte de Esmeraldas. La interrogante pendiente es conocer quién se beneficia de los recursos generados por la minería y cuál es la estructura que está detrás de estas

operaciones. Es claro para la mayoría de los actores entrevistados que en la minería ilegal no solo intervienen extranjeros, sino que existe una activa participación de capitales nacionales a través de una compleja red de alianzas conformada por bandas irregulares armadas en asocio con miembros la policía, las fuerzas armadas y funcionarios públicos de los distintos niveles del gobierno que facilita permisos (autorizaciones para combustible, por ejemplo) a los frentes mineros y que impone trabas burocráticas para combatir la minería. De otra forma no podría entenderse que bajo la presencia de 1.800 soldados en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, la minería ilegal continúe expandiéndose (El Comercio, 2018). Esta compleja red de alianzas parecería extenderse a lo largo de toda la frontera binacional, según se desprende de la declaración de medidas cautelares dictadas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, Colombia:

“El INFORME TÉCNICO NO. 742 MAE-DPAE UCA-2016 (fls. 355 a 359 idl) del Ministerio del Ambiente, determina que *al realizar* una inspección a finales del año 2016, entre los meses de octubre a noviembre, se verificó las afectaciones del suelo y agua dejando pasivos ambientales irreversibles y se evidenció la presencia de maquinaria ecuatoriana realizando actividad minera ilegal en suelo colombiano” (2017: 43).

Pese al fracaso del proyecto minero respaldado por el Estado, en la actualidad el Ministerio de Minería insiste en impulsar en el norte de Esmeraldas, “una minería ambientalmente sustentable, socialmente responsable y bajo un formato de economía social y solidaria. Por eso se iniciará un proceso de regularización de mineros informales, retomando lo que ya se hizo hace algunos años” (Entrevista al Subsecretario de Minería Norte, 28.12.17).

Más allá de las dudas que genera esta decisión, el Ministerio parecería desconocer que el fortalecimiento de la minería, como lo señala el estudio de PRAS-CID-PUCESE (2011b), conlleva efectos que podrían aumentar en escala y difuminarse por las áreas colindantes, afectando a la agricultura, la ganadería y las iniciativas turísticas que estaban emergiendo, con repercusiones sobre la seguridad alimentaria y las fuentes de sustento, la fragmentación y traspaso ilegal de tierras y el desplazamiento de comunidades, además de erosionar aún más la credibilidad y confianza de la población hacia la institucionalidad pública. De hecho, en la actualidad ya se advierte un incremento en la extracción de madera, lo que podría alentar la explotación de fauna silvestre, así como afectaciones sobre la zona sur de la Reserva Cayapas-Mataje cuyos manglares son la fuente de ingresos

de aproximadamente 5.500 pescadores artesanales y personas dedicadas a la extracción de moluscos (Ibid., 2011b: 184).

Ante esta realidad, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial comunicó al Estado ecuatoriano su preocupación respecto a

“las informaciones relativas al impacto negativo que tiene el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, incluidas la minería y la tala ilegales, en los territorios de pueblos indígenas y afroecuatorianos, que ocasionan daños irreparables en el medio ambiente y afectan a sus formas tradicionales de subsistencia y de explotación de la tierra y recursos, tales como la caza, la pesca, la agricultura y la minería ancestral. Preocupa también al Comité la tensión existente entre actores externos y los pueblos indígenas y afroecuatorianos que habitan esos territorios. El Comité está particularmente preocupado por la situación que enfrentan los afroecuatorianos en la provincia de Esmeraldas (...)” (2017: 3).

Algunos autores proponen entender la consolidación de la minería en la frontera norte del Ecuador como una consecuencia del desbordamiento de la economía de guerra y el mercado de la violencia con los que durante décadas se desarrolló el conflicto colombiano (ver al respecto Vásquez, 2008: 90). En esta línea coinciden algunas de las personas entrevistadas que defienden la opinión de que al salir las FARC de escena, también se habría perdido el orden que imponía su presencia:

“Las comunidades conocían de la presencia de grupos que permanecían un tiempo en sus territorios para descanso y abastecimiento. Pero hoy, al perderse el control del territorio por parte de un ejército organizado como las FARC, hay una disputa entre los diversos grupos irregulares para redefinir las líneas de mando y el control de las rutas de tráfico. En la medida en que cierto orden estaba garantizado, en aquella época fue incluso posible lograr la titulación colectiva de las tierras” (Entrevista a Director Provincial del Ministerio de Ambiente, 03.02.2018).

Si bien las anteriores opiniones corroboran una realidad presente, circunscribir la ocurrencia del flagelo minero solo al conflicto colombiano o a las consecuencias del proceso de paz suscrito en dicho país deviene en una explicación parcial que coloca en un lugar secundario el papel desempeñado por el Estado ecuatoriano frente a Esmeraldas y sus territorios fronterizos. De ahí que en el intento por aproximar una comprensión más integral de esta realidad, esta tesis sostenga que la consolidación de la minería marca posiblemente una nueva fase en la relación de Esmeraldas con el Estado que la contiene a partir de la convergencia de tres elementos distintivos. El primero consiste en reafirmar la percepción de Esmeraldas como territorio extractivo (Lapierre, 2012) lo que conlleva, además de nocivos impactos ambientales, a la expulsión de las poblaciones

ancestralmente ahí asentadas. Durante la colonia Esmeraldas fue, como la califica Arboleda (2005: 107), “la despensa minera de la corona española”; durante los primeros años de la república fue una tierra apetecida por sus bosques y extensos territorios para la extracción de tagua, cascarilla, balsa, maderas, y se ha convertido en la época contemporánea en un territorio donde la codicia por sus recursos no solo ha desplazado a un lugar secundario a las necesidades de la población, sino que ha configurado un escenario de vaciamiento cultural y social y de empobrecimiento del tejido institucional.

El segundo aspecto es la profundización del manejo centralista del Estado en la definición y diseño de las políticas que orientarán el rumbo del acontecer económico y social en Esmeraldas, en este caso, de la minería aurífera, a costa del debilitamiento de los gobiernos locales y de la participación y decisión de la población local respecto al rumbo de las políticas públicas y de su vida. Derivado de las dos connotaciones anteriores, el tercer rasgo que distingue esta nueva fase de relación de Esmeraldas con el Estado es lo que González (2014: 71) denomina como “institucionalización estatal fracasada” que se expresaría en los límites para combatir la minería ilegal, la incapacidad para atender de manera integral los problemas por los que atraviesa la población y la instauración, finalmente, de una economía ilícita en el norte de Esmeraldas que reafirma que es “típicamente la violencia o la amenaza de la fuerza, en lugar de la democracia, lo que se expresa en las fronteras estatales” (Anderson y O’Dowd, 1999: 596). Para las organizaciones sociales del norte de Esmeraldas, la violencia existente y la sistemática desatención de la población representan una situación de discriminación racial que evidencian “los insuficientes esfuerzos por parte del Estado para evitar, sancionar y reparar dicha degradación” (FECCHÉ et al, 2017: 28), por eso concluyen en el informe presentado ante Naciones Unidas que “*la exclusión y la discriminación es principalmente de hecho, no de derecho*”, solicitando al Estado ecuatoriano “responder (...) *con hechos y metas concretas alcanzados en el norte de Esmeraldas y no mediante el recuento de los avances normativos y de políticas públicas*. Sabemos que ellas, en nuestro territorio, se diluyen y no son cumplidas” (Ibid.: 36, las cursivas son de los autores).

Los tres hitos mencionados reactualizan, a su vez, la discusión del papel de las regiones fronterizas en la construcción del Estado-nación y su declaratoria como áreas de “atención preferencial” según lo estipula el Art. 249 de la Constitución vigente. La forma de relacionamiento del Estado con Esmeraldas o, dicho en otras palabras, su inserción al espacio político único, implica rupturas con los postulados constitucionales respecto a la prioridad concedida a las regiones fronterizas, a la configuración de un régimen del buen

vivir o a la construcción de un Estado Plurinacional. Históricamente Esmeraldas fue y sigue siendo para el discurso estatal un área extractiva y como tal, un territorio carente de los atributos para incluirse dentro de los postulados de refundación del Estado. Tanto la historia de su relación con el Estado ecuatoriano, como su realidad presente, confirman el hecho de que en las regiones fronterizas no siempre es posible corroborar los postulados sobre los que se levanta la construcción de lo “nacional”, o como lo dicen Anderson y O’Dowd,

“Fronteras, estados y sociedades son mutuamente formativos -las fronteras dan forma a lo que contienen a la vez que son modeladas por el contenido- pero la investigación sobre las fronteras socava el supuesto superficial de que ‘Estado’ y ‘sociedad’, ‘Estado’ y ‘nación’, ‘Estado’ y ‘gobierno’ son sinónimos o términos que pueden utilizarse indistintamente” (1999: 602-603).

### **5.3.7. La resistencia frente a la minería**

Los ofrecimientos gubernamentales para regular la minería y operar una empresa estatal contribuyeron a desactivar la resistencia social y a relegar a un segundo plano sus demandas. Patricia González determinó en su estudio que las expectativas generadas permitieron que poco a poco las instituciones del Estado central omitan el carácter de emergencia sanitaria en el que se encuentran las comunidades afectadas bajo la promesa de que en el corto plazo la conflictividad provocada por la minería ilegal sería controlada (González, 2014: 73 y 75). Sin embargo, una vez que ya la minería se ha consolidado, la población paulatinamente ha comenzado a tomar consciencia de la irreversibilidad de los daños y de las escasas oportunidades para mejorar su calidad de vida.

El proceso no ha sido fácil pues según se desprende de algunas entrevistas, las organizaciones sociales fueron seriamente afectadas durante el gobierno de Rafael Correa:

“El tejido social organizado está atravesado por conductas individualistas y paternalistas. El Decreto 16<sup>184</sup> del anterior gobierno contribuyó a debilitar a las organizaciones. Es el caso de la Comuna Río Santiago Cayapas. En el vasto territorio de la comuna existe una superposición de competencias pues en su territorio están presentes 10 juntas parroquiales, 2 gobiernos municipales y el gobierno provincial que no solo compiten con los recursos que no tiene la

---

<sup>184</sup> El Decreto 16, “Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas”, fue expedido en el año 2013. Desde su promulgación, fue motivo de rechazo por asociaciones, ONG, organizaciones sociales que identificaron la vigencia de esta ley con la imposición de una serie de restricciones desproporcionadas a los derechos de asociación y de libertad de expresión (Simon, 2013; CEDENMA, 2013; Saavedra, 2015). Mediante este Decreto el gobierno cerró a la Fundación Pachamama, una ONG ambientalista, y disolvió a la Unión Nacional de Educadores.

comuna, sino que deslegitiman a la autoridad comunal. De ahí que el Cabildo de la comuna se haya convertido en un tramitador para explotar minas de piedra o para conseguir permisos para la explotación de una superficie de bosque. La desintegración organizativa también se ha agudizado por la pobreza y la marginación que determinan que sea más importante ‘buscar el pan de cada día’ o recibir 10 dólares diarios de la minería, que inmiscuirse en el conocimiento de lo que pasa en la zona o de tomar partido por opciones de más largo plazo.” (Entrevista al Coordinador del Programa Buen Vivir para el Norte de Esmeraldas, 29.01.2018).

“Nuestro proceso perdió peso y fuerza con el Decreto 16 emitido por Correa que exigía una serie de requisitos difíciles de cumplir para organizaciones cuya actividad se concentraba en la lucha por la defensa de los derechos y de la tierra. El Decreto 16 contenía exigencias que no se correspondían con la realidad” (Entrevista a dirigente de San Lorenzo, 02.02.2018).

Desde mediados del 2015 la población se ha organizado para exigir ante las autoridades el cumplimiento de las medidas cautelares, rechazar la minería ilegal y demandar la remediación de los daños ocasionados, muchos de los cuales se atribuyen directamente al Estado luego del paso de la Empresa Nacional Minera por el territorio, así como para reivindicar la pérdida de tierras y el cumplimiento de derechos, sobre todo hacia poblaciones negras, frente a quienes “ha existido un imaginario negativo” (entrevista a técnica del GAD de Eloy Alfaro, 14.08.2018), en una suerte de confluencia de varios y complejos procesos reivindicativos. Paralelamente se han organizado reuniones en las que participan actores de ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana para debatir y difundir la propagación de la minería ilegal a lo largo del área binacional.

“Con el apoyo de la Defensoría hemos realizado reuniones donde intervienen actores locales de lado y lado de la frontera, organizaciones afrodescendientes, organizaciones de mujeres, concheras, indígenas. Los Awá buscan hacer un ejercicio similar desde la perspectiva de las organizaciones sociales que se unan, que reflexionen, que se planteen cuáles son las estrategias y cómo enfrentar los problemas, cómo garantizar un rol más activo como sujetos históricos” (Entrevista a dirigente de C-CONDEM, 09.07.2018).

Un hito importante hacia mediados del 2017 fue la realización de la Audiencia del Chocó que se realizó en la ciudad de San Lorenzo. La Audiencia, que se llevó a cabo bajo el formato de un juicio, incluyó 15 peritajes en tres ámbitos, naturaleza, pueblos y defensores, y concluyó con la difusión de un veredicto en el que se exhorta al Estado a cumplir con el marco constitucional, a formular una política de protección del Chocó y sus pueblos, a imponer regulaciones sobre las actividades económicas que impactan sobre el ambiente y las comunidades, a sancionar a los responsables de los daños ocasionados y compensar a las poblaciones, a facilitar la reapertura de los juicios por pérdida de



territorios, a reiniciar un proceso de restauración integral del bosque y cumplir con las medidas cautelares (Ver Anexo 3, Veredicto del Chocó).

La opinión de la población respecto a la falta de actuación del Estado frente a los derechos y los contenidos constitucionales contrasta con voces oficiales que señalan que "la mayor responsabilidad es de las comunidades pues ellas dejan finalmente que la maquinaria ingrese al área y (es también) de los gobiernos locales que no cumplen con sus competencias" (Entrevista al Subsecretario de SENPLADES el 15.01.2018), en una clara paralela con la narrativa según la cual la pobreza es la principal causa de la degradación ambiental, según lo debatió Arturo Escobar en *El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea* (1999). Este discurso parece estar efectivamente circulando en el área según lo expresa una técnica de una ONG ecologista que opera en la zona:

“Las autoridades del gobierno responsabilizan a las poblaciones locales del descontrol que existe. El Ministerio del Ambiente, con la ARCOM, del Ministerio de Minería, con Defensa, con la policía, no pueden organizarse bien para controlar, por ejemplo, la minería ilegal y en muchos casos lo que dicen es que no hay colaboración de parte de la población, que la población es parte del problema y al filtrarse la información es imposible hacer un operativo. Sin embargo, aunque las autoridades del gobierno no lo digan, también se reconoce que la información se filtra desde los militares y la policía. Por eso proponen realizar operativos sorpresa, dando a entender que existe un problema de gobernabilidad hacia adentro de las propias fuerzas de seguridad” (Entrevista a integrante de Acción Ecológica, 19.01.2018).

La mirada de otros actores sobre el papel de las comunidades en la cesión de tierras para la ejecución de actividades extractivas es más compleja. Para el Secretario Nacional de la Política (Entrevista realizada el 21.12.2017), la penetración de recursos económicos generados en actividades ilegales ha configurado un escenario en el que conviven intereses contradictorios y ambiguos pues mientras públicamente las comunidades expresan su oposición a la minería, en la dinámica cotidiana, en cambio, la gente trata de vincularse a la explotación minera sin tomar en cuenta ni la precariedad del trabajo que deben desarrollar, menos aún los problemas ambientales que esta actividad produce. Más directamente, el párroco de la parroquia Santa María del Cayapas expresa:

“Nos dicen que hemos vendido los territorios, que hemos hecho contratos con capitales externos pero la pregunta es ¿en qué términos? ¿Acaso nuestra gente entiende la terminología plasmada en un documento llamado contrato? Ha cedido porque la pobreza les ha pedido, (...), lo que no se ha tenido en cuenta es qué pasará después, aguas contaminadas, bosques destruidos, territorios devastados, pueblos divididos y lo peor de todo este relajo con un índice de

pobreza superior al que había antes (...) y es ¿por qué? Porque el poblador piensa casi siempre con el estómago vacío” (Acción Ecológica, 2017: 23-24).

Pese a todos los reveses, en la región ha iniciado un proceso de paulatino fortalecimiento de las organizaciones, principalmente la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (UONNE), la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCH) y la Organización de la Nacionalidad Eperara-Siapidaara del Ecuador (NAESE), en el que la Iglesia ha tenido un papel protagónico. En el escenario actual hay que reconocer, sin embargo, que el despertar organizativo de la población podría sufrir un nuevo revés por la violencia que recrudeció en el área a partir del 2018 que no solo condicionaría las formas de lucha, sino que implica una amenaza a la integridad de dirigentes.<sup>185</sup>

#### 5.4. Visiones “otras” sobre la organización del espacio fronterizo

*“Como ignorante que soy  
me precisa preguntar  
si el color blanco es virtud  
para mandarme a blanquear”  
(Copla esmeraldeña)<sup>186</sup>*

*“¿Po qué será,  
me pregunto yo  
que casi todo lo negro  
tan pobre son  
tan pobre son  
como soy yo?*

*Yo no lo sé,  
ni yo ni Uté”  
(Fragmento de la poesía Yo no sé de Adalberto Ortiz)<sup>187</sup>*

Pese a lo sombrío y en ocasiones desesperanzador que puede ser el escenario construido en Esmeraldas, sobre todo en aquella parte del territorio provincial habitado por pueblos indios y negros, sus habitantes originarios siguen defendiendo y recreando su derecho a una vida digna en un espacio que constituye el soporte de su vida. Por eso he optado por concluir esta tesis reseñando las visiones y concepciones “otras” que pueblos indios y negros han levantado respecto al espacio fronterizo donde habitan. Estas visiones “otras” no son, como lo sostiene la crítica decolonial, un repertorio adicional de planteamientos, son postulados construidos desde la diferencia, lejanos al pensamiento

---

<sup>185</sup> Resulta ejemplificador citar, por ejemplo, que el dirigente de San Lorenzo entrevistado haya mencionado su negativa a responder a entrevistas frente a medios de comunicación y que haya comentado la estrategia utilizada de cambiar cada cierto tiempo de número telefónico o de utilizar distintas rutas de movilización.

<sup>186</sup> Copla esmeraldeña extraída del libro *Pensar sembrando/sembrar pensando* de Juan García y Catherine Walsh (2017: 49).

<sup>187</sup> Adalberto Ortiz (1914-2003), pedagogo, diplomático y profesor universitario, recibió en 1995 el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo por su contribución a la cultura afroecuatoriana.

dominante y que por lo mismo interpelan aquella “historia única”, utilizando la conocida frase de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, para abrir paso a la descolonización y abrir los horizontes, estrechamente vinculados a los espacios de lo común: “especialmente en los casos en los que las luchas de las fronteras presionan sobre la cuestión de lo que constituye el territorio y la jurisdicción, plantean un fuerte desafío a los pensamientos y las prácticas de lo común predicada a partir de la apelación a una comunidad ya existente y siempre limitada” (Mezzadra y Neilson, 2013: 345).

#### 5.4.1. El Territorio Región de El Pacífico<sup>188</sup>

*“Cuando la memoria colectiva de este gran territorio región del Pacífico hace una lectura de su historia, por lo general, tiene dos tiempos principales: el ayer y el ahora. El ayer es entendido como el tiempo cuando los Estados no eran, y el ahora, que tiene que ser visto como el tiempo cuando los Estados nos imponen sus leyes que mandan ser, lo que nunca quisimos ser” (Abuelo Zenón)<sup>189</sup>*

La fuerte irrupción del cultivo de palma africana en Esmeraldas desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado reactivó la preocupación de la población negra del norte Esmeraldas por su territorio. En efecto, la expansión de la frontera extractiva se convirtió en el detonante para que comience a resurgir la conciencia sobre los derechos ancestrales y el territorio, entendido como el único elemento que podría garantizar su sobrevivencia física y cultural. La larga historia de despojo soportada por la población guardaba en la memoria reciente que el ingreso de empresas foráneas, como sucedió con las camaroneras, implicaba el abandono de las comunidades de sus tierras. ¿Cómo enfrentar esta nueva amenaza? La gente tomó la iniciativa de reunirse para juntos analizar el panorama que se avecinaba, de manera paralela al impulso de un proceso de legalización de las tierras.

En las asambleas y reuniones las comunidades negras recordaban sus formas de vida y las decisiones en torno a la organización del territorio y como hace un poco más de 50 años, entre un lado y otro de la frontera, entre el norte de Esmeraldas en Ecuador y la región de Tumaco en Colombia, había una activa movilidad de la población que

---

<sup>188</sup> Los contenidos de esta sección se fundamentan en las conversaciones que durante enero del 2016 mantuve con Juan García.

<sup>189</sup> Juan García utilizó la figura del abuelo Zenón, su abuelo y, a la vez, su *alter ego*. Aunque García se formó en universidades de Ecuador y Estados Unidos, mantuvo durante su vida una posición crítica frente a la academia pues cuestionaba la forma en la que la academia ocultaba y borraba las historias protagonizadas por el pueblo negro, como lo dice Catherine Walsh en la introducción a un libro publicado en homenaje a este pensador y luchador afroesmeraldeño, *La palabra está suelta* (Padilla y Montaña comp., 2018: 10-11).

recorría libremente el territorio según las oportunidades de trabajo, las celebraciones y fiestas, que decidía a qué lado se establecía o cómo distribuía su vida entre uno y otro territorio pues finalmente casi todas eran “truncos familiares” y un buen número de la población portaba dos cédulas de ciudadanía. Los más viejos aún se acordaban cómo muchos años atrás, su territorio fue testigo de grandes movimientos humanos a consecuencia de “aguajes” o fenómenos naturales como el tsunami que afectó las costas del Pacífico en 1906 o la guerra de los mil días en Colombia a inicios del siglo XX.

En el florecimiento de este proceso organizativo, John Antón y Fernando García (2015: 125-126) consideran que fue decisiva la influencia del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), cuya fuerza se hizo visible a raíz de la aprobación de la Ley 70 de 1993 que concedía la titulación de tierras del Pacífico a afrocolombianos.

Es en este contexto que el concepto del territorio y la necesidad de su protección fue ocupando centralidad en las discusiones grupales. Por territorio, las comunidades negras entienden

“el espacio apropiado por un grupo humano para su reproducción física, social y cultural, es el espacio físico, las plantas y los animales; es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido, es la forma de disposición de caseríos y viviendas, la economía, las formas de trabajo, los calendarios de fiestas culturales y religiosas, las relaciones sociales, la autoridad y la cosmovisión” (Vargas, Patricia, 1999, citado por García ed., 2012: 101).

Así entendido, el territorio deviene en la condición de posibilidad para ofrecer soporte y cohesión a un grupo social (Escobar, 2018), lo que implica la primacía de una dimensión simbólica en torno al espacio de vida, al mismo tiempo que se conforma como el espacio de ejercicio de la autoridad, es decir, “una práctica constante de apropiación, dominación, pertenencia, asentamiento y de lucha por un espacio estratégico para sus proyectos de vida” (Antón y García, 2015: 114).

La ancestralidad, por su parte, remite a la presencia de los pueblos negros en el territorio del norte de Esmeraldas hace más 400 o 500 años atrás y a una historia de manejo compartida en la que estaba ausente “la raya”, como estas poblaciones denominan a la frontera, la consecuente separación que fue impuesta por los Estados, y la “frontera como sinónimo de violencia” (García y Walsh, 2010: 357). Los pueblos negros del norte de Esmeraldas, antiguos esclavizados, ganaron su presencia en el norte de Esmeraldas y ahí sembraron las raíces del pueblo afroecuatoriano. La ancestralidad vincula a los seres humanos con su entorno, “a sus propuestas para ser, cuando los derechos humanos no habían nacido” (Ibid.: 348).

Territorio y ancestralidad se combinan para dar paso al concepto de territorio ancestral que se constituye en la “razón principal para participar como colectividades de todas aquellas decisiones que pueden afectar la presencia del pueblo afroecuatoriano” (García y Walsh, 2017: 52).

La condición periférica que mantuvo Esmeraldas hasta bien entrado el siglo XX, sobre todo las áreas más septentrionales, determinaron un escaso contacto de la población negra asentada en las zonas adyacentes a Colombia con el resto del Estado-nación. Su vinculación más cercana era con el sur de Colombia, donde pervivían redes familiares y de amistad, “donde no cambiaba el paisaje ni los métodos ni el lenguaje, no cambiaba la vida. Se iba por mar, se entraba al manglar y era lo mismo”.<sup>190</sup>

A partir de los años 50 y 60 del siglo anterior, la noción de la frontera comenzó a ser parte del léxico de algunos de los pobladores, de colonos y de funcionarios públicos que eventualmente ingresaban al área. Para los años 70, la frontera adquirió un significado, se revistió de materialidad. “A la gente ya se le había impuesto otra visión de la frontera. Ya no era la frontera nuestra, de ‘uno’, de allá pa’ca. La frontera se fue cerrando y con ella comenzó a cambiar el concepto de libertad que nosotros teníamos, de andar y trajinar esta región. Comenzó a cambiar policíacamente”.<sup>191</sup> No solo la frontera cobró otra materialidad, también prácticas históricamente aplicadas por la población recibieron otro calificativo. Se llamó “contrabando” tanto al cruce de los productos y bienes que tradicionalmente intercambiaba la población, como al comercio a mayor escala generalmente practicado por población externa a la zona.

Al comenzar a “pensar el territorio”, que es la forma en cómo el movimiento negro denomina el proceso de organización que tomó lugar en defensa de sus formas de vida, la memoria de la ancestralidad, la autonomía y la región, fueron el sustento para construir la propuesta territorial y para recrear un discurso que afirmaba un origen común, unas prácticas culturales compartidas y un solo territorio concebido como un gran colectivo entre las poblaciones de uno y otro lado de la frontera. La “raya” de la frontera comenzó a ser entendida como una imposición violenta de los Estados, como una decisión unilateral que genera afectaciones negativas a los habitantes de las regiones fronterizas, según lo señala una de las conclusiones del Encuentro Internacional de Reflexión y Participación *Al otro la’o de la Raya* llevado a cabo en Quito en el año 2011:

---

<sup>190</sup> Conversación informal con Juan García en enero del 2016.

<sup>191</sup> Ibid.

“(U)na frontera que dividió y sigue dividiendo un pueblo que se reconoce como uno solo y que desde siempre ha reclamado ser un solo pueblo. Está más que claro que el sentido de pertenencia común del que estamos hablando tiene que ir más allá del hecho de compartir una historia, de tener manifestaciones culturales comunes y de estar ocupando un mismo territorio que pasa por encima de la raya de frontera. Aquí se está hablando del nacimiento de un derecho para reconstruir esos legados comunes que nos fueron dados ayer. Los Estados que nos separaron tienen que buscar los caminos para unificarnos” (García ed., 2012: 143).

En el período 1980-1990 los pueblos negros de Ecuador y Colombia organizaron una comisión binacional a la que se le encargó la construcción de una propuesta territorial conjunta y la elaboración de un programa de educación. El método, según comentan los dirigentes, siempre fue la coincidencia. Las comunidades afrodescendientes que viven en lo que se denomina “Territorio Región del Pacífico” se auto identifican como una nación cultural de origen africano compuesta por troncos familiares que se dispersaron como consecuencia de la esclavitud. Según la tradición, “unos quedaron asentados en la ‘costa arriba’ y otros están viviendo en la ‘costa abajo’, pero todos somos hombres y mujeres nacidos de una misma cepa, de una misma sangre: la de nuestros ancestros africanos que llegaron a vivir en estas tierras hace un poco más de cuatrocientos años” (Ibid.: 134). Son pobladores de una región que fue dividida y violentada “por los que vienen de afuera, por los que no conocen, o no quieren, o no les interesa conocer el derecho que los pueblos afrodescendientes nos hemos ganado sobre este gran territorio. El derecho que tenemos es un derecho ganado, no es regalado”, según lo mencionó Lennis Castro, representante de RECOMAS-Colombia en el encuentro binacional antes citado (García ed., 2012: 41).

Entre otras medidas concretas establecidas en la propuesta territorial y recogidas posteriormente en el “Manifiesto de Quito” suscrito el 13 de diciembre del 2011 por los pueblos afrodescendientes de Ecuador y Colombia, se exhortaba a los dos Estados a generar mecanismos de integración real para la construcción de “fronteras vivas y de paz”, el establecimiento de escuelas binacionales a fin de impulsar un modelo educativo que apoye las propuestas transfronterizas y promueva la interculturalidad; y, el reconocimiento de la doble nacionalidad para las poblaciones fronterizas, en línea con lo estipulado por el artículo 7 de la Constitución de la República de Ecuador que señala “Son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento: 1. Las personas nacidas en Ecuador; 2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 3. *Las personas pertenecientes a*

*comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”.*<sup>192</sup>

Mientras de manera binacional se discutía un solo territorio para las comunidades negras del Pacífico, en el ámbito local, numerosas comunidades empujaron una propuesta orientada a la creación de una “Gran Comarca Afro-ecuatoriana del Norte de Esmeraldas” (CANE) –*Comuinchi Tuvu Caiú*-. La Gran Comarca fue concebida como un modelo de organización política-comunitaria para la defensa de la vida, del territorio y la cultura del pueblo afroecuatoriano, reivindicando de tal forma los derechos, la identidad cultural, la organización, representación y autonomía en la administración de los bienes naturales y la toma de decisiones que afecten su vida. Geográficamente, la Gran Comarca comprendería los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro donde hay presencia mayoritaria de población afrodescendiente, estableciendo acuerdos de convivencia intercultural con los otros pueblos ancestrales que comparten dicho territorio, y respetando la propiedad de colonos, mineros, madereros, camaroneros, cuyas actividades económicas deberían sujetarse a los reglamentos de manejo y uso definidos por la Gran Comarca y el Consejo Intercultural que daría cabida a todos los pueblos y nacionalidades presentes en la región.

El funcionamiento de la Gran Comarca se ampararía en el derecho constitucional de crear circunscripciones territoriales y en un plan de manejo para la región cuyo énfasis sería garantizar la continuidad histórica y geográfica del territorio. En términos organizativos, la Gran Comarca estaría conducida por un Consejo Regional de Palenques, constituido por las organizaciones comunitarias de base, jurídicas o no, que poseen territorios colectivos y que se rigen por sus propios sistemas de derecho consuetudinario, valores, prácticas sociales, culturales, espirituales y políticas. Administrativamente operaría un “Consejo Intercultural” con representación del pueblo negro, el pueblo Chachi, la nacionalidad Awá y otras nacionalidades indígenas que viven en la región.

En suma, la construcción de la Gran Comarca habría perseguido mantener la unidad del pueblo de origen africano que vive a lo largo de la bioregión del Chocó y la defensa de un territorio que se extiende sobre la frontera binacional entre Ecuador y

---

<sup>192</sup> Cabe señalar que en lo que respecta a la doble nacionalidad desde el Estado ecuatoriano aún no hay ningún avance para tornar operativo el alcance del artículo 7 que tendría repercusiones sobre los pueblos transfronterizos. Este artículo tiene su correlato en la Constitución de Colombia que prevé la doble nacionalidad en el artículo 96, numeral 2, literal c.

Colombia. De ahí que no solo estarían en juego los derechos ancestrales, sino un planteamiento de reparación al daño históricamente soportado por el pueblo negro.

A partir de la aprobación de la Constitución vigente (2008) y, con ésta, de la facultad para el establecimiento de circunscripciones territoriales (CT), dirigentes del pueblo negro de Esmeraldas encontraron en esta vía una posibilidad para concretar sus reivindicaciones territoriales. La intervención del Estado a través de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana (CODAE) y de diversas ONG, la poca claridad respecto al papel que desempeñarían los gobiernos territoriales autónomos (juntas parroquiales y concejos municipales, principalmente) ante la eventualidad de conformación de una CT, la posibilidad de acceder a recursos económicos o de disputar los recursos en manos de los gobiernos territoriales, las pugnas por el liderazgo, son algunos de los elementos que solos o combinados, hicieron a un costado la dimensión política de la reivindicación original.<sup>193</sup>

En la actualidad hay un reflujo del movimiento territorial. Juan García propone algunas explicaciones al respecto: “Los Estados penetraron los movimientos de aquí y de allá. La corrupción entró. Los problemas surgieron cuando se inició a discutir quién iba a dirigir, cómo se iba a manejar el dinero. Las ONG intervinieron”. De manera paralela, algunos dirigentes y sus familias fueron amenazados, en ocasiones con saldos trágicos. Por otro lado, aunque se reconoce diálogo y empatía con la Federación Chachi, a la que pertenecen las comunidades de este pueblo ubicadas en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas, no fue posible llegar a acuerdos con la CONAIE que, desde el punto de vista de García, tenía interés en impulsar una circunscripción solo para los pueblos indios. Sin minimizar el impacto de los elementos descritos, con gran probabilidad el elemento crucial en el decaimiento de la propuesta territorial fue la pérdida de horizontes comunitarios y subjetivos, el ingreso a una espiral de empobrecimiento y dependencia de las comunidades frente a actores externos al área (empresas extractivas o Estado), el incremento de la violencia, y la fragmentación del tejido social que desestructuró a las comunidades, “desbarataron la memoria, el sentido de pertenencia, y quitaron la autonomía de la gente”, producto de la pérdida de su territorio.

---

<sup>193</sup> Conversación informal con Juan García en enero del 2016 y entrevistas a dirigentes de San Lorenzo en los dos momentos del trabajo de campo llevado a cabo en el año 2018. Especialmente valiosas al respecto fueron las entrevistas mantenidas con Pablo de la Torre, dirigente afroesmeraldeño quien lideró las discusiones en torno a la conformación de una circunscripción territorial, y con la actual Palenquera Mayor de la Gran Comarca del Norte de Esmeraldas



La Palenquera Mayor de la Gran Comarca del Norte de Esmeraldas ve con mayor optimismo el escenario que puede construirse hacia el futuro en la medida en que identifica que la defensa del territorio es la única opción que tienen los pueblos negros para defender su vida:

“El despertar de esta propuesta se da en un momento en que ya no podemos seguir viviendo del engaño. Por más de 25 años nos han hablado del proceso binacional sin que las cosas cambien. Permitieron el ingreso de la palma, de las camaroneras y de la minería diciendo que nuestra vida iba a cambiar y lo que tenemos son amenazas permanentes de grupos irregulares.

Nuestro error es haber ‘aflojado’ la lucha por el territorio. Ahora tenemos contaminación, empresas que actúan como dueñas del territorio, ausencia de apoyo por parte del gobierno, decretos a favor de las empresas, cambio de valores en los jóvenes cuya única ilusión es comprar cosas de marca o tener un teléfono costoso.

Pese a la interferencia de otros actores y la desconfianza que se ha generado, la Gran Comarca del Norte de Esmeraldas está interesada en impulsar un procesos de reorganización y consolidación interna que gira en torno a cuatro ejes: 1) La titularización de tierras no solo como un derecho ancestral que asiste a los pueblos negros, sino como una garantía para detener la fragmentación y pérdida de territorios; 2) La socialización de los derechos que tenemos como pueblos y que incluyen desde el territorio, la defensa de nuestra cultura y forma de organización social, así como la exigencia a que se respeten nuestros derechos humanos pues nos han envenenado el agua, hemos perdido nuestros alimentos y nuestra salud está en riesgo; 3) La lucha por mantener nuestra identidad, lo que supone el reconocimiento de una comarca sin fronteras entre dos pueblos que compartimos historia, cultura y una sola visión del mundo; y, 4) El desarrollo de una propuesta de etno-educación, de una educación propia y respetuosa de nuestras tradiciones y prácticas culturales” (Entrevista realizada el 30.01.2018).

#### **5.4.2. Territorios ancestrales, binacionales y de paz**

El planteamiento territorial de las poblaciones negras no es una visión aislada. Desde el año 2001 aproximadamente, organizaciones indígenas y campesinas, y comunidades afroecuatorianas del noroccidente de Esmeraldas comenzaron a reunirse para intercambiar experiencias e identificar soluciones a problemas comunes. En ese entonces era central el aumento de la violencia en la región fronteriza, la creciente militarización de sus territorios y el ingreso de actores externos (mineros ilegales, madereros) que no solo usufructuaban de manera irresponsable de los bienes naturales presentes en el área, sino que amedrentaban a la población. Hacia el 2009 las comunidades plantearon avanzar en la conformación del corredor Chiles-Mataje, calificado por ellos como “Corredor de

Vida Chiles Mataje”.<sup>194</sup> La Asamblea eligió entonces un Comité Promotor al que se le encargó afinar la propuesta en diálogo con las comunidades, así como con diversas instituciones públicas.

El Corredor de Vida se distribuiría a lo largo de tres provincias (Esmeraldas, Carchi e Imbabura), siete cantones y diecisiete parroquias, aglutinando a las comunidades asentadas alrededor de la Reserva Ecológica El Ángel, el Bosque Protector Golondrinas, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, el territorio indígena Awá y la comuna indígena Pasto-La Esperanza. El corredor se extendería así desde el páramo al manglar, pasando por el bosque andino y por el húmedo, cubriendo una superficie de aproximadamente un millón de hectáreas. Culturalmente, Awá, Chachi, Épera, Pastos, afroecuatorianos y mestizos estarían presentes en el Corredor de Vida.

Hasta el 2010 el Comité Promotor y las comunidades que lo integraban avanzaron en una zonificación del área, llegando a acuerdos sobre el uso de la tierra, lo que implicaba ampliar, en algunos casos, la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas a fin de garantizar su conectividad. Establecieron además mecanismos de coordinación respetuosos de las dinámicas internas de cada organización y comunidad y diseñaron un sistema de alerta a fin de actuar oportunamente frente a las amenazas. Su preocupación fundamental era minimizar las amenazas bajo la convicción de cuidar el entorno natural del que depende su vida. En esa medida era, como dice Arturo Escobar (2018), una garantía de existencia de la “comunalidad”, buscando potenciar su entorno para la autocreación continua.

Hacia esta época estaban también convencidos de que no buscaban ejecutar proyectos pues ya conocían experiencias que habían terminado en el fraccionamiento del tejido social comunitario, o que habían generado conductas clientelares entre la población. No obstante, sí les interesaba contar con el respaldo del Estado y sus instituciones, sobre todo para efectos de formalizar la existencia del Corredor de Vida y apoyar las formas de utilización del territorio definidas por sus habitantes. Buscaban convertirse “en un espacio de integración, concertación, diálogo e incidencia” (CVCHM, 2011: 5) en la medida en que las poblaciones reconocían que la posibilidad de compartir y cooperar solo se hace efectiva a niveles locales.

---

<sup>194</sup> Conocí esta propuesta durante mi trabajo en Plan Ecuador. Agradezco la apertura de la Fundación Altrópico y de sus integrantes en la entrega de información actualizada respecto a esta iniciativa.

Un esfuerzo similar al del corredor Chiles-Mataje es desplegado por la nacionalidad A'i Cofán. Sus territorios cubrían más de tres millones de hectáreas en la zona amazónica y pie de montaña de Ecuador y Colombia. En defensa de su cultura, espiritualidad y territorio, los pueblos A'i Cofán de ambos lados de la frontera, propusieron defender sus leyes, su propio sistema de justicia y una jurisdicción especial indígena de carácter binacional, lo que se volcó en el 2011 en la elaboración de un plan de vida y ordenamiento ambiental que se construyó a partir de su condición de sociedad transfronteriza, y en el impulso de la conformación de una Organización Binacional A'i Cofán en la que por parte del Ecuador participa la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE) y por parte de Colombia la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente y los Cabildos Indígenas de los Valles de Guamuéz y San Miguel.

El plan de vida de los pueblos A'i Cofán es concebido como el único mecanismo de preservación y supervivencia de la nacionalidad pues se consideran “blanco de las medidas conflictivas del gobierno colombiano y ecuatoriano, que se traducen en la implementación de procesos de desarrollo nacionales fundamentados en políticas económicas extractivas sobre recursos renovables y no renovables, en la construcción de obras de infraestructura, tales como las nuevas carreteras y los puestos militares, etc.” (Nacionalidad A'i Cofán, 2012: 3).

Los Awá son otro pueblo que exige un reconocimiento binacional. Los aproximadamente 39 mil Awá que viven en un territorio de 610.000 has distribuido entre Ecuador y Colombia constituyeron el movimiento que se conoce como La Gran Familia Awá (Barahona, 2013) cuyo propósito es asegurar su supervivencia cultural. La Gran Familia Awá formuló un plan de vida que entre otros aspectos busca fortalecer la autoridad y ejercicio de la autonomía, defender el territorio, conservar la naturaleza y fortalecer y preservar su cultura milenaria, lo que se conseguiría a través del reconocimiento binacional como garantía de vida del pueblo Awá. Desde una perspectiva coyuntural, el plan de vida y las reuniones mantenidas por La Gran Familia Awá con funcionarios públicos de ambos países buscaban poner en evidencia los continuos atropellos a sus derechos ocasionados por la presencia militar dentro de su territorio. La presión ejercida determinó que tanto el Sexto Comité Técnico Binacional llevado a cabo en diciembre del 2011, como el Gabinete Presidencial Ecuador-Colombia y el Gabinete Binacional que se realizaran un año después, acordaran iniciar los pasos correspondientes para atender los requerimientos del pueblo Awá, algo que aún está pendiente. Según el

Presidente de la Federación del Centro Awá del Ecuador: “El Estado no ha dado prioridad a las necesidades de la zona, no hay fuentes de trabajo. Acá la salud y la educación no es suficiente. Tampoco tenemos infraestructura, no hay vías de acceso, ni sistema de agua potable, solo entubada” (Ponce, 2018).

La nacionalidad Épera, presente en Colombia y Ecuador, inició desde el 2016 un proceso de diálogo para reivindicar sus derechos como nacionalidad en ambos países, elaborando una agenda común orientada a impulsar un trabajo binacional que fortalezca el desarrollo fronterizo (El Comercio, 2016).

También los Pastos, ubicados en la zona fronteriza de la provincia del Carchi, en Ecuador y en la parte central del departamento de Nariño, al sur de Colombia, han elaborado un plan estratégico binacional de conservación ambiental de nudos montañosos centrales que enfoca la protección territorial y ambiental, aspectos ligados con prácticas culturales propias y el auto-gobierno, la administración y justicia propia. Su formulación inició en el año 2005 como una iniciativa de las comunidades pasto del lado colombiano que luego se difundiría y ganaría respaldo entre las comunidades asentadas en el Ecuador (Carrión Sánchez, 2014). Hacia mediados del año 2014, el pueblo Pasto de ambos lados de la frontera se reunió en San Gabriel, en la provincia del Carchi, en el evento “Nosotros los Pastos y ustedes también” donde, además de hacer explícita su lucha por el reconocimiento de un territorio especial binacional para los pastos, solicitaron discutir la doble cedulação como una estrategia de ampliación de derechos de los pueblos binacionales y la adopción de medidas emergentes frente a los problemas ocasionados por la militarización de los territorios.<sup>195</sup>

Si bien escapa al marco de esta investigación el análisis de la genealogía y del proceso seguido por cada una de las propuestas de reivindicación socio-territoriales detalladas, merece la pena señalarse algunos elementos cuya profundización debería ser materia de estudios posteriores. No resulta sorprendente constatar que el surgimiento de estas reivindicaciones coincida con el recrudecimiento de la violencia y de la presión extractiva en Colombia, así como de la expansión de la frontera extractiva en Ecuador en áreas ocupadas históricamente por pueblos transfronterizos. La instalación de palma aceitera, el ingreso de la minería, el incremento de la tasa de destrucción de bosques y la apertura de nuevas vías, son procesos que afectan a los pueblos Pasto, Awá, Chachi y A'i

---

<sup>195</sup> Información disponible en <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/los-pastos-de-ecuador-y-colombia-alistan-encuentro> y en <http://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/premio-nobel-de-paz-rigoberta-menchú-estará-en-rumichaca-77463>, acceso el 03.07.15.

Cofán, Épera y afroecuatorianos fragmentando territorios en los que históricamente se levantaron formas de vida particulares y amenazando su continuidad como pueblos y que no en pocos casos han capturado la atención de ciertos dirigentes que han permitido el paso del extractivismo.

Las propuestas “otras” respecto al territorio, emanadas desde los habitantes originarios de la frontera ecuatoriana-colombiana, tampoco han sido siempre adecuadamente canalizadas por organizaciones privadas que han encontrado en las expresiones de autonomía de los pueblos originarios la oportunidad para introducir sus propias agendas. De ahí que no pueda pasar desapercibido que organizaciones como USAID, Wildlife Conservation Society (WCS) o World Wildlife Fund (WWF), por lo general se encuentren entre las instituciones que financian y respaldan estas iniciativas, impulsando, en el mejor de los casos, visiones de conservación que poco se corresponden con la realidad de las comunidades, cuando no empujando otros intereses menos explícitos como el acceso y patentamiento de la biodiversidad y los conocimientos asociados (Görg y Brand, 2000; Ribeiro, 2001; Leff, 2001).

Más allá de interferencias externas, de los avances y retrocesos en la lucha, de sus contradicciones y discontinuidades, acrecentadas por la presencia de palmicultoras y mineras (Antón y García, 2015), el llamamiento a la identidad y al territorio deviene, sin dejar de considerar que existe una historia y una memoria compartida, en un “deseo de protección frente a las amenazas de desaparición -el instinto de sobre vivencia y de preservación-. Se trata, entonces, de imaginar y propiciar otro lugar donde poder aislarse para estar protegido. Estar protegido requiere una redistribución de lo sensible y de los afectos, de la percepción y de la palabra” (Mbembe, 2016: 78).

## **Capítulo 6. Reflexiones finales**

---

El estudio realizado en esta tesis intenta desentrañar las manifestaciones de las políticas de fronterización en aquellos territorios que se han mantenido por largo tiempo en una condición periférica respecto al resto del espacio político mayor que lo contiene. En esa medida, la tesis se planteó como objetivo, comprender las razones que explicarían el renovado interés que han despertado las fronteras en diversos países de América Latina y el Ecuador en particular, a fin de identificar las continuidades y rupturas en la constitución y consolidación de las fronteras entre la trayectoria histórica y la realidad contemporánea, analizar el papel desempeñado por la integración latinoamericana y las experiencias de integración fronteriza, y entender el significado de las áreas fronterizas a la luz de los actuales marcos de acumulación del capital y de las nuevas modalidades de organización territorial como el Estado Plurinacional. Para viabilizar este propósito, el estudio realizado se concentró en Esmeraldas, provincia ecuatoriana limítrofe con Colombia.

Esmeraldas, territorio fronterizo del Ecuador con Colombia, revela que no solo las fronteras no son territorios homogéneos, son también diversos, como dice Grimson (2005), los vínculos entre las sociedades fronterizas y sus Estados. Esmeraldas demuestra que el Estado construyó una relación particular con esta parte del territorio, más similar a la que estableció con Sucumbíos, territorio amazónico, y bastante diferente a la que forjó con Carchi, que tiene una trayectoria de incorporación más temprana al proceso de conformación del Estado ecuatoriano.

La heterogeneidad presente en los tres segmentos en los que se dibuja la frontera norte del Ecuador alude a los discursos y prácticas con los que la sociedad dominante calificó a cada uno de los territorios y a sus habitantes. Mientras en las fronteras de Esmeraldas y Sucumbíos históricamente han estado asentados pueblos negros e indios cuyas formas de organización y producción han sido motivo de prácticas discriminatorias y racistas, el territorio de la provincia de Carchi, tiene predominio de población mestiza y fue identificado desde la colonia como un área de colonización. Siguiendo a Santos (2014), es precisamente la distinta conformación socio cultural de cada uno de los tres segmentos territoriales fronterizos la que ha definido su ubicación dentro de la línea abismal: mientras Esmeraldas y Sucumbíos están del lado de la apropiación y la violencia, y por lo tanto, de la estructuración de territorios racializados, Carchi está más cercano al espacio de la regulación/emancipación.

Como parte de la región bio-geográfica del Chocó, Esmeraldas es un territorio de gran riqueza biológica, mineral y forestal y ha constituido históricamente el espacio de

vida de pueblos afrodescendientes, y de pueblos indígenas Awá, Épera y Chachi. Por su lejanía respecto a los centros de poder, su carácter de territorio “excéntrico”, para utilizar uno de los atributos con los que Germán Palacio (2007) califica a ciertos territorios subalternizados por los Estados latinoamericanos, Esmeraldas se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, escasamente integrada al resto del espacio político ecuatoriano.

Es cierto que durante la colonia Esmeraldas ya habría sido “descubierta” y catalogada como un territorio que contenía inagotables riquezas. Tal “descubrimiento”, sin embargo, habría sucedido no como producto de la voluntad de tomar control sobre el territorio septentrional de lo que era la Audiencia de Quito, sino que fue el resultado de la necesidad de las élites de la Sierra de abrir un camino que conectara dicha región con el Pacífico, liberando a los terratenientes serranos del monopolio del comercio detentado por Guayaquil (principal puerto del Ecuador). Las fracasadas tentativas en la construcción de las vías determinaron que hasta las primeras décadas del siglo XVIII Esmeraldas haya mantenido una temporalidad y una organización social distantes a las de su contenedor, en ese momento, la Audiencia de Quito. “Esmeraldas permanece completamente separada de contactos con la organización colonial, prácticamente ausente de toda la región costanera” (Deler, Gómez y Portais, 1983: 94), lo que la llevó a ostentar el calificativo de “tierra de libertad” (Ibid.) y a mantener particulares formas de organización social y productiva a su interior (Deler, 1987; Ospina, 2004).

Aunque la construcción de esta vía solo se concretaría casi dos siglos después, el hallazgo de oro en 1738 y, posteriormente en 1771, habría dado paso a la ocurrencia de las dos primeras fases extractivas (Rueda, 2010) que si bien fueron de corta duración se convertirían desde entonces en una característica que acompañará el rumbo del devenir de Esmeraldas. Para las poblaciones que habitaban este espacio, la incursión de la minería significó la puesta en marcha de un régimen esclavista al que resistieron mediante diversas estrategias. Una de las más relevantes fue la acumulación de oro con el que posteriormente comprarían su libertad y los territorios que habían ocupado por cerca de tres siglos. Desde entonces sus pobladores entendieron que la única forma de conservar autonomía y mantener su vida era a través del control de su territorio, lo que explica la constitución de comunas en el norte de Esmeraldas entre las que destaca la del Río Santiago Cayapas que con 62 mil hectáreas representó la primera comunidad negra libre de América y la primera comunidad latinoamericana con territorio propio.

Una vez constituido el Estado ecuatoriano en 1830, el único contacto con Esmeraldas fue la esporádica presencia de misiones religiosas (Ramón y Torres, 2014).



En ausencia de un proyecto nacional durante la constitución del Estado ecuatoriano, Esmeraldas y otras áreas habitadas principalmente por pueblos indios como la Amazonía, al estar al margen del núcleo central Quito-Guayaquil-Cuenca y carecer en ese entonces de significación económica, fueron ignoradas (Deler, 1987: Quintero y Silva, 1991a). La indiferencia del naciente Estado hacia Esmeraldas se revertió a mediados del siglo XIX cuando en 1854 el gobierno del Ecuador entregó parte del territorio de esta provincia a Gran Bretaña para saldar una porción de la deuda de la independencia. “Así, después de haber sido liberada de la Corona española, Esmeraldas pasaba a ser una suerte de colonia de la Corona británica” (Arboleda, 2005: 107).

La empresa inglesa beneficiaria de este contrato, la *Ecuador Land Company*, subarrendó a su vez la tierra y sus recursos, incluida la fuerza de trabajo, a empresas alemanas, italianas y de Estados Unidos. El enclave constituido a raíz de este acuerdo “liberó” nuevamente al Estado del diseño de políticas orientadas a la integración de este espacio fronterizo, demostrando que durante los 73 años que parte del territorio de Esmeraldas estuvo bajo el control de manos extranjeras, primó básicamente el interés por pagar la deuda externa como condición para mantener y fortalecer las relaciones con la principal potencia económica y política de aquel entonces, prescindiendo de la existencia de las poblaciones asentadas en dicho territorio a quienes las élites criollas inferiorizaron o trataron como no-existentes.

El interés sobre la provincia de Esmeraldas se retomó y aceleró en el período 1945-1960 con el inicio de la explotación bananera y la paulatina incorporación del país a las dinámicas económicas globales. Fue el turno de la hegemonía de capital estadounidense a través de la *Fruit Trading Corporation* cuyo impacto significó cambios en las formas de producción y reproducción social de la población de Esmeraldas (Martínez, 1976), especialmente de aquella asentada en el norte del territorio. Su vida, hasta entonces organizada en torno al cultivo de pequeñas parcelas agrícolas y la recolección de los productos del bosque (Carrasco, 1983, 2012; Rivera, Rivadeneira y Mora, 1986), comenzó a evidenciar el inicio de un proceso de concentración de la tierra cuyas paralelas se extienden aún en la actualidad, al tiempo que presencié el ingreso de poblaciones de otras regiones del Ecuador que llegaban a Esmeraldas amparadas en políticas de colonización promovidas por el Estado en ese entonces.

Una década después, a partir de la irrupción de la economía petrolera, iniciaría lo que la memoria oral denomina como “la historia de riesgo ambiental de la provincia” (CNSCA, 2009) a partir de dos hitos: la definición del Puerto de Balao como el sitio a

través de donde saldrían las exportaciones de petróleo y la construcción de la refinería, ambos en la capital de Esmeraldas.

Con el petróleo se consolidó la construcción de diferentes vías de comunicación que además de conectar a Esmeraldas con el resto del país, posibilitaron el surgimiento de nuevas actividades económicas. Fue el turno del camarón y de los bosques. Mientras capitales de Guayaquil estuvieron detrás del impulso del cultivo de camarón, la explotación forestal recayó en capitales quiteños en una suerte de instalación y toma de territorio de la provincia por parte de dos polos económicos en constante pugna (Ospina, 2004). Aunque el cultivo de camarón con el paso de los años se ha mantenido relativamente estable debido a la devastación que sufrió el manglar (Bravo, 2003; Larrea 2006), ecosistema sobre el cual se instalaron las piscinas para la cría de camarón, y a enfermedades que afectaron su producción, la extracción de madera ha continuado hasta convertir a Esmeraldas en la provincia con la más alta tasa de deforestación del país con 6.640 has/año, lo que equivale a la pérdida de más de 100 mil hectáreas de bosque en el período 2001-2015 y representa el 16% del total de la deforestación que ha sufrido Ecuador en 15 años.<sup>196</sup>

Mientras las actividades económicas florecían, y se instalaba en la región el discurso de la integración, la realidad persistía actuando con indiferencia hacia la población local que comenzó a enfrentar la pérdida de sus tierras, la monetización de las relaciones de intercambio que hasta entonces se habían fundamentado en redes de reciprocidad y un proceso generalizado de empobrecimiento.

Este recuento evidencia que en lo sustantivo, el territorio fronterizo de Esmeraldas hasta incluso concluido el siglo XX nunca calzó plenamente en el espacio nacional -o lo hizo de manera instrumental. Ni siquiera las políticas de integración regional, impulsadas desde el decenio de los 70 por los principales organismos latinoamericanos de ese entonces lograron modificar el tratamiento subordinado a la frontera norte y a Esmeraldas en particular. Cabe mencionar por ejemplo que en 1991, fruto de la presión de las poblaciones y gobiernos locales de Ecuador y Colombia, se estableció la primera zona de integración fronteriza sudamericana que no prosperó, no solo por su desmedida cobertura (casi la mitad del territorio ecuatoriano y un tercio del de Colombia), sino porque antes que abordar la problemática de la frontera, en su definición primaron intereses políticos

---

<sup>196</sup> Comunicación personal con Malki Sáenz, Coordinador de la Unidad de de Información Socioambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar, 24.10.17.

más cercanos a la consecución de las metas de crecimiento económico de cada uno de los países, que a los objetivos de integración.

Al llegar el siglo actual y sobretodo a raíz de la entrada en rigor de la Constitución de 2008 que recogía históricas demandas de los sectores sociales racializados y sujetos de explotación, incluidas las poblaciones fronterizas, como el Estado Plurinacional (Art. 1), los derechos de la naturaleza (Art. 71) o el tratamiento preferencial para las áreas de frontera (Art. 249), parecía que un nuevo escenario, más democrático e inclusivo, podría tener lugar en las regiones fronterizas. Los nuevos arreglos institucionales como la política de paz y desarrollo para la frontera norte -Plan Ecuador- y los pronunciamientos gubernamentales que enaltecían el patriotismo, la soberanía nacional y que proclamaban la necesidad de “cambiar toda esa equivocada visión del desarrollo nacional para que la zona fronteriza tenga mejores servicios y a través de esa forma tengamos la mejor protección (límitrofe)” (declaración del Presidente Correa recogida en La Nación, 2007), hicieron creer que finalmente el país contaba con las condiciones para enfrentar los problemas existentes.

El escenario nacional coincidió a nivel regional con la irrupción de nuevas entidades regionales como UNASUR, ALBA y CELAC, que decían conceder mayor importancia a la integración y a la construcción de una política regional diferente a la que hasta entonces había primado en América Latina, con mayor autonomía frente a Washington. Estas nuevas instituciones regionales representaron, hasta el tercer quinquenio de este siglo, oportunidades excepcionales para concretar procesos de integración distintos que superen el dominio exclusivo de lo público y el consecuente predominio de una lógica economicista -consecución de ingresos- y que incorporen la palabra y las necesidades de la gente.

¿En qué medida esta coyuntura significó un cambio para la frontera norte? En el caso de las nuevas entidades regionales creadas bajo el impulso de los denominados gobiernos progresistas que dirigieron un buen número de países latinoamericanos a inicios del siglo XXI, es posible concluir que los avances respecto a la integración regional y fronteriza fueron insuficientes al punto que en la actualidad el denominado nuevo regionalismo ha perdido protagonismo y retrocede ante los acuerdos comerciales convencionales y las tradicionales entidades sub-regionales -como la OEA-, institución frente a la que pretendió marcar distancias.

En el ámbito interno, si únicamente se analizan las cifras económicas gruesas, es posible afirmar un crecimiento de los flujos de inversión pública hacia la frontera norte

que entre 2007 y 2013 representó más de 1.553 millones de dólares (SENPLADES-DNP/PFP, 2014: 99). Sin embargo, resulta paradójico constatar que pese a la mayor inversión muchos problemas se mantienen y otros se han agudizado. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?

Al mirar con detenimiento el destino de la inversión pública, la información revela que no solo que en su mayor parte ésta se orientó a proyectos estratégicos como petróleo, minería, energía y vías de comunicación, sino que mucha de la inversión social resultó poco adecuada a las características culturales y a la conformación socio-territorial de la región fronteriza. Solo para citar un ejemplo basta mencionar la construcción de infraestructura educativa de gran escala y el cierre de pequeñas escuelas cercanas a las comunidades, lo que en lugar de contribuir a mejorar los indicadores de escolaridad, incidió sobre el aumento de los niveles de deserción escolar y del trabajo de niñas y niños (Ponce y Drouet, 2017).

A una inversión pública no siempre dirigida a atender los problemas más relevantes de la población debe sumarse la saturación y sobreposición de políticas y normativas que han contribuido a generar un entorno confuso, contradictorio y, que en la mayor parte de las veces, deriva en una suerte de vacío institucional por la falta de claridad en las responsabilidades o porque las responsabilidades tienden a diluirse, de la mano con la definición de regímenes especiales para la frontera que en poco tiempo son reemplazados por otros que prometen instaurar los cambios esperados. Frente a este escenario, la realidad fronteriza y particularmente de Esmeraldas ha sido explicada como producto del abandono del Estado.

El abandono del Estado, una tesis por lo general esgrimida por estudiosos y dirigentes políticos ecuatorianos para interpretar la realidad de la frontera norte, es contrastada por los contenidos de esta tesis a la luz de lo que ha acontecido en el norte de Esmeraldas en las dos últimas décadas y que no se aleja de los modelos definidos para este territorio a lo largo de la historia. En efecto, la baja importancia concedida a la atención a los derechos de la población fronteriza difiere del respaldo proporcionado por el Estado a la ampliación de la frontera extractiva de la palma aceitera cuyo desarrollo inició en Esmeraldas a partir del decenio del 90 con manchas dispersas por el territorio hasta llegar a ocupar en la actualidad cerca de 130 mil hectáreas en la provincia, el 8% del territorio de Esmeraldas, sobre todo en el norte, con perspectivas para seguir extendiendo la superficie cultivada gracias a un marco normativo favorable (Acuerdo

Interministerial 189), consolidar una estructura monopólica ligada a la agroexportación y concentrada en un número limitado de empresas.

El impulso del cultivo de palma aceitera, aunque tildada de “verde” por la supuesta menor nocividad de los agrocombustibles, y como parte del cambio de la matriz productiva, no solo que puede ser mucho más perniciosa en términos de emisiones y contaminación de fuentes de agua como lo han demostrado varios estudios a nivel mundial (Mingorría, 2016; Marín-Burgos, 2014; Colchester, Jiwan, Andiko, Sirait, Yunan Firdaus, Surambo y Pane, 2006); sino que poco aporta a desprender al país de la “trampa de la especialización” (Muradian y Martínez-Alier, 2001), es decir, su dependencia respecto a la exportación de bienes naturales.

En efecto, la expansión de este cultivo ha generado una serie de pasivos ambientales y sociales entre los que destacan la expulsión de la población del territorio que ancestralmente había ocupado, la contaminación del ambiente ocasionada por las altas concentraciones de fertilizantes utilizadas, con efectos dañinos sobre las personas, la tierra, el agua, el aire y la biodiversidad local (Aguilar, 2003; Nuñez, 2004; Hazlewood, 2010; Bayón, 2012; Minda, 2012; Moncada, 2013; FECCHÉ et al., 2017; Ponce, 2018) y la ruptura del entramado socio-territorial y organizativo existente para imponer uno radicalmente distinto.

La ampliación de la frontera extractiva de la palma aceitera ha sido encubierta como una estrategia para la protección de la frontera, como una alternativa de desarrollo para las poblaciones rurales, una posibilidad de generación de ingresos y empleo, como una actividad que abonaría a la diversificación de la matriz productiva dependiente del petróleo y un proceso productivo aparentemente inocuo que sustituye la cobertura forestal natural por otra, si bien menos diversa, más rentable y útil en el combate del calentamiento global. El balance indica, más bien, la consecución de resultados opuestos a los señalados y el despliegue de una estrategia de control del territorio en la que el Estado y sus instituciones han perdido el protagonismo, cediendo el espacio a empresas privadas ecuatorianas con participación de capitales internacionales en un claro desafío a la normativa vigente (Art. 405 de la Constitución) sobre la prohibición de propiedad o concesión en áreas de seguridad nacional como las fronteras, a personas naturales o jurídicas extranjeras.

Sin discutir por el momento que estas empresas suelen funcionar como economías de enclave que imponen reglas específicas para su operación, que se escudan en arreglos institucionales que por lo general se distancian de lo que sucede en su entorno inmediato

y que por sobre los “intereses nacionales” o la “integridad territorial” privilegiarán la estabilidad de sus intereses corporativos, cabe preguntar, como lo hace Grimson (2005a: 6), ¿qué sucede cuándo la soberanía se delega a manos privadas?

Si la soberanía tradicionalmente ha sido entendida como una competencia exclusiva de los estados o, más aún, ha sido concebida como uno de los preceptos fundacionales del estado moderno, lo que sucede en el norte de Esmeraldas daría cuenta de una tensión entre el discurso de la soberanía como potestad del Estado y su delegación tácita o “compartida” con empresas privadas. Operaciones económicas de esta naturaleza no solo exhiben contradicciones con un discurso oficial cuya retórica es la defensa irrestricta de la soberanía sino que suponen el riesgo cierto de privatizar e internacionalizar áreas geográficas que, al menos en la teoría, han sido históricamente de alta sensibilidad en el proceso de construcción de los estados latinoamericanos. De este modo, los discursos de protección de la soberanía, de la integridad territorial y del nacionalismo entran en contradicción con una suerte de internacionalización de los espacios fronterizos que, en el caso de Esmeraldas, se manifiesta tanto en la orientación de las actividades económicas privilegiadas para este territorio -orientadas principalmente a satisfacer la demanda externa-, cuanto en el control de capitales nacionales y extranjeros por parte de enclaves desvinculados con la dinámica social y productiva de la región. Bajo estas condiciones se erosionan o pierden los supuestos de integralidad territorial o manejo soberano de las fronteras, ideas tradicionales sobre las que se construyó la noción de Estado-nación. La frontera deviene así en un espacio de soberanías múltiples, abierto y poroso, menos parecido a la noción de límite de la soberanía (Serje, 2017) y se enmarca en el argumento de Saskia Sassen quien en *¿Perdiendo el control?* (2001 [1996]), discute la tensión entre la desnacionalización del espacio económico y la renacionalización del discurso político.

Siguiendo a Wendy Brown (2015), la internacionalización de los espacios fronterizos, acompañada de una participación creciente de sectores privados y paraestatales, sería la evidencia de una tendencia que agudiza el declive de la soberanía política de los Estados. Si bien las reflexiones de Wendy Brown se centran en lo fundamental alrededor de la construcción de muros, vallas y otros dispositivos de seguridad en los países ricos, en la realidad latinoamericana, sin minimizar la importancia de nuevas barreras en zonas fronterizas, la presencia de sectores privados estaría sobre todo asociada a la explotación de bienes naturales bajo el justificativo de la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en dichas regiones. Si como dice Brown en relación a

los muros, “(e)n la medida en que el Estado externaliza la seguridad de ese modo, disminuye su estatus de protector de la seguridad” (2015: 129), en relación con la explotación de bienes naturales por parte de enclaves privados, podría señalarse en que en la medida en que el Estado externaliza de ese modo la creación de empleo y la consecución del desarrollo, disminuye su estatus como garante y proveedor de derechos y lesiona, concomitantemente, su soberanía política.

En el marco de la ampliación de la frontera extractiva se entiende también la ambigüedad con la que el Estado ha enfrentado la irrupción de la minería ilegal en el norte de Esmeraldas. El cúmulo de impactos negativos propiciados por la minería ilegal, como la contaminación de ríos y esteros, la pérdida de fuentes de sustento y el incremento de la inseguridad alimentaria, la tala indiscriminada de bosques (SENAGUA, 2010; PRAS-CID-PUCESE, 2011) y la ocurrencia de otros problemas que han trastocado profundamente la vida cotidiana de la población como la violencia, el aumento de la explotación sexual hacia la mujer y del consumo de drogas y alcohol, la alteración de los patrones culturales con la aparición de conductas cada vez más ávidas por el consumo de artículos suntuarios, no han merecido la atención del Estado. Lejos de resolver los problemas ocasionados por una actividad realizada al margen de la ley y de precautelar los derechos de la población, la respuesta gubernamental se circunscribió a autorizar la concesión de más de 38 mil hectáreas asumiendo, como lo sucedido en anteriores ciclos extractivos suscitados en Esmeraldas, que el territorio ocupado es un espacio vacío que debe ser ordenado y utilizado en términos económicos. Pese a todos los problemas existentes y a la movilización de la población ante el envenenamiento y violencia que soportan, siguen pendientes al menos desde el 2011, cuando el Juez Sexto de San Lorenzo dictó medidas cautelares en las que exigía al Estado una urgente atención a los problemas ocasionados por la minería, la atención de necesidades tan elementales como la provisión de agua apta para el consumo humano.

La reciente historia de la minería en el Norte de Esmeraldas parecería marcar una nueva fase de la relación de esta provincia con el Estado a partir de la convergencia de tres elementos distintivos. El primero consiste en reafirmar la percepción de Esmeraldas como territorio extractivo, lo que conlleva, además de impactos ambientales nocivos, al vaciamiento social y cultural del territorio. El segundo aspecto es la profundización del manejo centralista del Estado en la definición, diseño y aplicación de las políticas que orientarán el rumbo del acontecer económico y social en Esmeraldas. Derivado de las dos anteriores, el tercer rasgo que distingue esta nueva fase de relación de Esmeraldas con el

Estado es la presencia de una “institucionalización estatal fracasada” (González, 2014: 71) que evidencia los límites para combatir la minería ilegal, la incapacidad para atender los problemas de la población y la instauración de una economía ilícita que reafirma no solo el predominio en las fronteras estatales de estados de violencia (Anderson y O’Dowd, 1999) sino de un sistemático proceso de discriminación racial y social.

A la luz de esta realidad, resulta necesario matizar el “abandono” del Estado y la consiguiente falta de presencia institucional–afirmación recurrentemente citada al caracterizar la realidad de los territorios fronterizos (ver al respecto Ramón y Torres, 2004; Lauret, 2009) - y proponer que fronteras como las de Esmeraldas, ricas en bienes naturales y habitadas por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones carentes de poder, han tenido y tienen una presencia gubernamental consistente con un régimen de intervención favorable al capital, en perjuicio de la atención de la población, la construcción de entornos favorables para la reproducción social y cultural y el diseño y aplicación de políticas de integración fronteriza. El limitado proceso de incorporación de Esmeraldas a la sociedad mayor hasta bien entrado el siglo XX, salpicado únicamente por diversas olas extractivas que en determinados momentos empujaron a que el Estado mire con interés a un territorio usualmente olvidado, se revierte en la actualidad no bajo los parámetros contemplados en la Constitución del Ecuador - tratamiento preferencial a los cantones asentados en la franja fronteriza de 40 km próximos a los límites territoriales (Art. 249), implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones fronterizas y de refugiados (Art. 423, § 5) y mantenimiento y desarrollo de relaciones de cooperación entre los pueblos divididos por fronteras internacionales (Art. 57, § 18)-, sino nuevamente bajo la consolidación de un régimen extractivista.

Es en el marco de este régimen que el Estado no ha tenido empacho en garantizar su presencia a través de diversos medios, desde el diseño de políticas favorables a la operación de previos o nuevos procesos de acumulación, hasta la utilización de fuerzas armadas para remediar las afectaciones a los cultivos de palma aceitera provocadas por el PC en la segunda década del 2000. Estas respuestas contrastan con la precariedad en el funcionamiento de un estado de derecho frente al incremento de la conflictividad, el contradictorio discurso estatal frente a la minería, la impunidad frente a las empresas de palma tanto por los daños ambientales ocasionados como por el irrespeto a la legislación laboral, y constituyen manifestaciones de las diferencias existentes, sobre todo cuando las personas directamente afectadas pertenecen a pueblos indios, a comunidades rurales



empobrecidas, a grupos humanos que carecen del poder e influencias para incidir sobre las grandes decisiones. La poca efectividad de las respuestas estatales para enfrentar la problemática social, cultural y ambiental de la población que habita en la frontera norte contrasta con la facilidad con la que en esta área se pueden instalar y poner en funcionamiento actividades económicas que resultan de interés para el Estado y grupos de poder económico y político. En la explotación de reservas de los bienes naturales existentes en la región fronteriza, no han existido obstáculos para garantizar las condiciones necesarias al ingreso de capitales nacionales y extranjeros, no se han levantado impedimentos a la operación del capital, ni el Estado ha tenido dificultades en comprometer su presencia para satisfacer las necesidades del mercado interno y la demanda internacional de materias primas. El Gráfico 7 que aparece más adelante sintetiza esta dinámica.

El caso de Esmeraldas reafirma que las decisiones sobre territorios y, por tanto, sobre territorios fronterizos, no son nunca neutrales. Considerar a las fronteras como áreas económicas estratégicas, como zonas industriales o como economías de reproducción simple, no son solo formas distintas de considerar el territorio, sino ordenamientos que requieren de diferentes arreglos institucionales, administrativos y legales, con implicaciones sobre las fronteras y la forma en cómo éstas se gestionan, e impactos sobre las poblaciones ahí asentadas.

Mientras en la Colonia, el interés sobre Esmeraldas se circunscribió a su ubicación estratégica, durante la república, su territorio ha sido considerado en lo fundamental como el espacio para la expansión de la frontera de *commodities*, revelando una particular interacción entre la geografía nacional con procesos sociales, económicos y políticos que tienen raíces históricas. Esto explica que desde entonces hasta la actualidad, Esmeraldas siga combinando inequidad y discriminación, confirmando que la colonialidad del poder, del saber y del ser se asientan sobre el racismo. Las otras formas de vida, producción y organización que han estado presentes en Esmeraldas no son compatibles con la concepción de “Patria” y de la visión hegemónica. Por eso tienden a ser colonizadas a través de la utilización de diversos medios: el despojo violento y la consiguiente acumulación por desposesión, la imposición de narrativas hegemónicas en torno al territorio, la etnicidad y la nación; la implantación de una única visión del mundo en busca de la homogenización interna o el recurso al progreso como ideal.

Gráfico 7. Hitos de la presencia del Estado en Esmeraldas



El recuento histórico desarrollado hasta aquí revela que en lo sustantivo antes que un interés por integrar un territorio fronterizo y extender la “ciudadanía” a sus habitantes, la mirada del Estado ecuatoriano sobre Esmeraldas ha puesto el acento en su posición geoestratégica y, consiguientemente, en las posibilidades de conectividad que ofrece para ampliar el *space-of-flows* (Moore, 2000; 2003) de materiales y energía que demanda el funcionamiento de la economía global, así como en el aprovechamiento de potencialidades ambientales, forestales, de biodiversidad, de recursos genéticos e hídricos (*space-of-places*), haciendo caso omiso de otras formas de vida y organización socio-productiva existentes. Esto explica que Esmeraldas y su región norte, vecina a Colombia, siga soportando indicadores sociales más bajos que los promedios nacionales (el analfabetismo supera la media nacional, solo un tercio de la población dispone de un empleo adecuado, y el coeficiente de Gini es uno de los más altos del país), y que su población se vea empujada a abandonar su territorio ante la presión de actividades económicas que actúan como detonantes de un patrón de expulsión territorial que se mantiene desde la llegada de la palma aceitera al norte de Esmeraldas y que se amplifica, en la actualidad, con la irrupción de un nuevo frente extractivo, la minería aurífera, generador igualmente de violencia, contaminación y desterritorialización de comunidades locales.

El reasentamiento de pueblos indios y comunidades negras, su desplazamiento forzado a otras áreas, la pérdida de tierras y medios de vida, no solo constituyen violaciones a los derechos humanos, sino que son nuevas formas de discriminación y racismo que se han adaptado y transformado a la luz de los escenarios actuales. Lamentablemente, los desplazamientos de familias generados por la expansión de la frontera extractiva han sido sistemáticamente ignorados. Tales desplazamientos, en el marco de lo que la literatura sobre ecología política califica de refugiados ambientales, no son parte de las estadísticas oficiales ni representan un problema tipificado por las legislaciones nacionales (INREDH, 2008; Roa Ovalle, 2012; FECHE et al., 2017; OACDH, 2018). Representan lo que la literatura y los movimientos sociales vinculados a la justicia ambiental denominan racismo ambiental (Bullard, 1993), un fenómeno que afecta desproporcionadamente a pueblos que han sido históricamente sujetos de menosprecio de las sociedades dominantes y han soportado las presiones provenientes de actividades económicas introducidas.

En este contexto, el proceso de “vaciamiento” cultural y territorial, así como las afectaciones colectivas sobre poblaciones, no pueden explicarse únicamente como

consecuencia de la violencia originada en el conflicto colombiano o endosarse a las condiciones de inseguridad generadas por grupos y bandas delincuenciales, otro argumento al que con frecuencia se alude para justificar los problemas que soporta la frontera norte. Al justificar la realidad de la frontera norte como consecuencia de los problemas que vive Colombia, no solo que prima la concepción según la cual la presión que ejercen los estados adyacentes moldea la orientación y el contenido de las políticas fronterizas, sino que se relega a un lugar secundario la injusticia histórica ejercida sobre las fronteras o la precariedad social y económica de sus poblaciones, y se privilegia al territorio – a la imagen completamente territorializada de los Estados- en perjuicio de la acepción de fronteras como construcciones sociales y lugares de vida de poblaciones fronterizas.

Los impactos del conflicto colombiano están presentes y no pueden de ninguna manera soslayarse o subestimarse sobre todo luego de la firma de los acuerdos de paz que derivó en la construcción de un escenario de disputa en el que interactúan disidentes de las FARC, vinculados a bandas criminales (BACRIM) y grupos delincuenciales ecuatorianos por el control de espacios territoriales para mantener rutas de narcotráfico y procesamiento de droga, el comercio de químicos y materiales necesarios para procesar cocaína; la apropiación y el tráfico ilegal de tierra; la explotación sexual y el tráfico de mujeres (Uranga, 2011), niños y niñas, y el tráfico de armas (FECCH et al., 2017; OACDH, 2018). El enfrentamiento entre los diversos grupos armados por mantener las actividades ilícitas más rentables y por controlar a la población y a espacios del territorio ha presionado sobre el incremento de una economía ilegal en la frontera, el aumento de la violencia, la actividad criminal, el reclutamiento forzoso, la inseguridad y la expansión de las violaciones de los derechos humanos.

Para hacer frente a estos problemas ha sido posible justificar el despliegue de cada vez mayores controles y medidas de seguridad más severas hasta convertir a la frontera norte en general y a Esmeraldas en particular, en un espacio de creciente vigilancia y en un área abiertamente militarizada, a tono con un discurso hegemónico que aboga por el aumento del gasto en armamento, que presiona por la adopción de legislación antiterrorista y por el diseño de estrictas políticas de seguridad y defensa. En la actualidad, la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia es reconocida como la zona con mayor presencia militar en Sudamérica (Periodistas sin Cadenas, Liga contra el Silencio, OCCRP, Forbidden Stories, 2018), con 22 mil efectivos distribuidos a ambos lados de la frontera, junto con destacamentos, bases militares y el despliegue de tecnología militar.

Esta realidad, construida desde al menos el 2007, demuestra que aunque la retórica oficial haya dicho mantener una política distante de aquella generada en los países centrales, la realidad de manera obstinada se mantiene dentro del marco de políticas hegemónicas que a nivel global han convertido a las fronteras en espacios cada vez más fortificados y securitizados (Brown, 2015).

La mayor securitización de la frontera ha venido de la mano con la recurrente utilización de declaratorias de estados de excepción para hacer frente a una diversidad de situaciones: desde la atención humanitaria requerida luego del sismo que afectó a la costa ecuatoriana en el año 2016, hasta la intervención de fuerzas militares a inicios del 2018 luego del atentado en San Lorenzo contra un destacamento de policía, pasando por escenarios de desbordamiento social como lo acontecido con la minería ilegal en Esmeraldas en reiteradas ocasiones. La recurrencia en la declaratoria de estados de excepción no solo que ha normalizado su uso, sino que parecería ser una suerte de dispositivo para el disciplinamiento continuo de la población (Agamben, 2001; Santos, 2014).

Las políticas de securitización impuestas sobre Esmeraldas tienen, además, implicaciones a nivel discursivo y simbólico que configuran y reconfiguran de manera incesante la materialidad de la frontera y de la naturaleza en tanto construcciones sociales e históricas. La mayor militarización o el más alto número de instalaciones de control, por ejemplo, se ha traducido no solo en restricciones sobre la libre movilidad de la población, en la criminalización de las actividades cotidianas de la población y la masculinización del espacio fronterizo, sino que ha tenido consecuencias sobre la construcción social de la naturaleza al restringir la utilización del territorio por efectos de las nuevas barreras físicas o imaginarias que se han levantado.

Estas acciones, que afectan a la mayoría de la población, contrastan con la ausencia de control frente a la operación de redes en las que participan empresarios, líderes locales y funcionarios gubernamentales para usufructuar de la venta de permisos y cuotas de combustible, para la compra de tierras a través de intermediarios o para contratar grupos armados a quienes se encarga la vigilancia y control de las actividades económicas y la intimidación de la población local (Roa Ovalle, 2012). La mayor presencia de fuerzas de seguridad tampoco ha podido controlar la utilización de la fuerza de trabajo inmigrante proveniente de Colombia y Venezuela que es reclutada para la minería y la palma bajo el ofrecimiento de una pronta regulación de su situación migratoria (Moncayo, 2012). Si bien como lo reconocen varios autores (Samaddar, 1994)

la migración ilegal se ha transformado en la piedra angular de un modo de gestión política y económica que explota la diferencia entre lo legal y lo ilegal, es en las fronteras, debido a los constantes flujos de movilidad humana que ahí se suceden, donde esta realidad se percibe con mayor nitidez. De este modo, ha sido posible configurar una alianza que aunque no esté necesariamente estructurada, denota intereses asociados, complementarios y a veces contradictorios o antagónicos que confluyen en la consolidación y profundización de un modelo extractivo (Lapierre y Marín, 2018).

En medio de la severidad de los problemas que soporta Esmeraldas, una lectura integral de la situación fronteriza no puede evadir el hecho de que a los efectos del conflicto colombiano sobre la seguridad de la población de la región, deben sobreponerse las consecuencias de un régimen extractivo que ha colocado en la última escala de las prioridades al bienestar y seguridad de la población, incapaz de entender que existen otras racionalidades que exigen un lugar y una historicidad. En efecto, el modelo de crecimiento económico y desarrollo privilegiado por el Estado ecuatoriano para Esmeraldas y el consecuente proceso histórico de incorporación de este territorio al espacio político que la contiene refleja, parafraseando a Mbembe (2008), una mayor preeminencia a las cosas sobre las personas. Para operar este orden de prioridades, el Estado ha debido poner en marcha una economía de coerción que no solo genera el marco para el aprovechamiento de su riqueza natural, sino que exige al mismo tiempo la salida de las personas históricamente ahí asentadas, y la puesta en marcha de una estrategia de emasculación del Estado al que se aprecia como ausente, débil o inexistente, mientras el capital toma control del espacio y se aprovecha de procesos que toman lugar en la frontera como los flujos de población migrante o la presencia de bandas armadas que manejan diversas economías ilícitas y que resultan funcionales a la operación de actividades económicas formales. Estos serían los elementos que marcan la especificidad de los conflictos socio-ambientales suscitados en regiones de frontera y que definen las características que distinguen el acceso, control y uso de los bienes naturales ahí localizados. Su complejidad, sin embargo, se oculta como un espejismo tras la retórica oficial que defiende que solo gracias a la mayor militarización, resguardo y control de la frontera norte será posible detener los problemas existentes, de la misma manera que solo mediante la operación de proyectos extractivos localizados en áreas de frontera se combatirá el desempleo, la pobreza y la falta de servicios básicos, dos ilusiones que la realidad parece desmentir.

Esmeraldas se erige así como el producto de dos procesos de fronterización interrelacionados y aparentemente contradictorios: el fortalecimiento de las políticas de seguridad de las fronteras, por un lado, a tono con un discurso hegemónico, y, por otro lado, la ampliación de la frontera extractiva, en donde la implementación de la IIRSA desempeña un papel central, haciendo eco de las crecientes necesidades de recursos que demanda la economía global para su funcionamiento (*space-of-flows*) y la consecuente incorporación de nuevas áreas (*space-of-places*). En efecto, al mismo tiempo que la IIRSA impulsa la ampliación de la frontera extractiva, lo que implica una dinámica de desfronterización por la mayor libertad para la circulación de capitales y mercancías, y acarrea el aumento de la conflictividad y violencia asociada al extractivismo, refuerza también una dinámica de refterización y de seguridad alimentada, adicionalmente, por un discurso que a nivel mundial ha posicionado la idea de la militarización de las fronteras. Dos fuerzas -desfronterización y fronterización- que aunque en apariencia contrarias, no son sino dos caras de una misma política de aplicación y profundización de un modelo extractivo que actúa en perjuicio de las poblaciones asentadas en los antes confines del territorio. La conjugación de estas dos grandes estrategias regionales y globales, mayor securitización de las fronteras y crecientes flujos de mercancías y *commodities*, entrañan la consolidación de un nuevo ciclo extractivista que otorga centralidad a áreas tradicionalmente subordinadas como ciertas regiones fronterizas y que en su conjunto da cuenta de una nueva fase de reprimarización de las economías latinoamericanas (Svampa, 2013; Acosta, 2011).

La dificultad de conciliar dos agendas portadoras de lógicas distintas -la de comercio y la de seguridad-, no solo da cuenta de las complejidades de organizar coherentemente los territorios, de la forma contradictoria como el Estado se relaciona con estas áreas y de las crecientes dificultades de generar respuestas coherentes, sino del limitado papel de “un centro propiamente soberano de poder político”, utilizando la expresión de Mathew Coleman (2005: 189, citado por Brown, 2015: 138) para equilibrar y gestionar ambas agendas. Por irresoluble y compleja que se presente la tensión entre comercio y seguridad, la hegemonía del neoliberalismo y de la violencia resultante hacen imposible, al decir de Brown, “separar las dimensiones de seguridad y economía que estructuran la política internacional de fronteras” (Ibid.: 142). Los muros, tanto como la militarización de las fronteras, son respuesta a políticas de destrucción e ingobernabilidad, a las políticas que emanan de un orden cada vez más globalizado y a la profundización de un nuevo ciclo de acumulación por desposesión que pone en tensión

no solo temas que tienen que ver con la defensa de la soberanía y la integralidad del territorio del Estado-nación, sino que plantea un abierto desafío a la posibilidad de construir la plurinacionalidad como consecuencia la vigencia de un estado de permanente vulneración de los derechos que amenaza con fracturar profundamente la existencia de pueblos, culturas y comunidades que han vivido históricamente en estas áreas.

La combinación de integración económica y seguridad que ha sido privilegiada para el abordaje de aquellos segmentos fronterizos subalternizados, terminará subsumiendo a comunidades y pueblos no enteramente incrustados en la dinámica capitalista y a los bienes comunes que allí se encuentran, a los circuitos que dan vida al capital, desconociendo que su sobrevivencia dependerá en gran parte, como lo señala Díaz Polanco, de la garantía de acceso y usufructo a su territorio como base de sustentación material y espiritual y como fundamento de su organización socio-étnica, así como de la “ampliación de la territorialidad – en condiciones nuevas, incluso la actualización de antiguas territorialidades regionales, aunque no necesariamente los mismos territorios anteriores” (Díaz Polanco, 1997: 30). La doble dimensión adquirida por la frontera de Esmeraldas ha significado, por otro lado, omitir la discusión de otras territorialidades que podrían imaginarse en las que se posibilite el mantenimiento de distintas formas de vida, de producción y organización social, y la preservación de bienes comunes que no conocen fronteras. Abrir el cauce a esta discusión, no solo que iría a tono con las propuestas centrales de pueblos indígenas y otras minorías socio-culturales que demandaron el reconocimiento, como en el caso del Ecuador, de un Estado Plurinacional, sino que podría significar un alejamiento de las posturas hegemónicas respecto al modelaje de las fronteras permitiendo que en lugar de sitios militarizados para el flujo de mercancías y la restricción del paso de las personas, estos se conviertan en corredores de vida y paz, como lo imaginan las poblaciones históricamente ahí asentadas.

Al vaciar las fronteras de poblaciones, de historicidad y de procesos vivos de construcción de espacios compartidos más allá de las líneas limítrofes definidas por los Estados, se desaprovecharán las posibilidades de aprender procesos de convivencia transnacionales históricamente cimentados sobre la paz y la complementariedad social, cultural y productiva, para replicar un modelo de gestión de las fronteras concebido por sectores ligados a intereses militares, armamentistas e industriales encaminados a amurallar las fronteras nacionales. La colonialidad del poder se acentúa, así, en los márgenes del Estado y vuelve a marcar su arrogancia desconociendo que el germen de



alternativas frente a problemas mundiales complejos probablemente pueda surgir y recrearse desde y con lo local.

A partir del estudio del caso de Esmeraldas, es posible concluir que la incorporación de aquellos segmentos de las regiones fronterizas hasta ahora olvidados para priorizar la puesta en marcha de modelos extractivos conlleva a reeditar los rasgos de la matriz colonial con repercusiones en diversos ámbitos. En lo social y cultural se aprecia un aumento de la conflictividad social y deterioro de la calidad de vida de las poblaciones asentadas históricamente en dichas áreas, con impactos especialmente severos sobre los pueblos indios cuya continuidad cultural podría estar seriamente amenazada. En lo político, una creciente militarización de las fronteras, con consecuencias sobre la criminalización de las actividades cotidianas de la población y el incremento de los niveles de control de individuos y cuerpos, el aumento de restricciones sobre la movilidad humana y la imposición de un modelo de desarrollo promovido a espaldas de sus habitantes. En lo económico, la formación de enclaves de extracción de recursos y de estructuras económicas altamente especializadas, cuyos beneficios no se quedan en el área ni generan posibilidades de trabajo para la población local y que implican la desterritorialización de comunidades y pueblos históricamente asentados en aquellas regiones fronterizas. Las actividades extractivas han demostrado una alta dependencia tecnológica, el incremento de las importaciones, altos niveles de remisión de utilidades y transferencia de excedentes y un limitado margen para distribuir los ingresos (Machado-Aráoz, 2013). En lo ambiental, una creciente cosificación de la naturaleza, entendida únicamente como un recurso productivo más, desprendido de toda valoración simbólica y vital que contiene el territorio desde el punto de vista de pueblos indios y comunidades negras y con impactos que pueden tornar inviable la reproducción de la vida en ciertas áreas.

En suma el modelo de crecimiento económico concebido para Esmeraldas, escudado bajo el pretexto de promover el desarrollo, atender las necesidades de la población fronteriza y fortalecer la seguridad, pierde piso ante la confluencia de tres procesos que se alimentan unos de otros: la internacionalización y privatización de los territorios fronterizos, la construcción de un entorno cada vez más securitizado, violento y hostil para la vida y la reconfiguración de espacios a partir de una matriz racial-colonial que sigue tratando como inferiores a las poblaciones negras e indias que históricamente han ocupado este territorio. El re-conocimiento de la existencia de la frontera norte guarda bajo esta perspectiva similitud con lo acontecido a inicios de la república cuando su

territorio fue visto como objeto de codicia por sus bienes naturales, es decir, como área cuyo único valor descansaba en las posibilidades que ofrecía para satisfacer las necesidades del resto de la nación.

Para quienes habitan en estas regiones, las fronteras son parte de su vida cotidiana y constituyen una de sus principales estrategias de sobrevivencia. Valdría la pena aprender de estos pobladores, que en lugar de enaltecer las diferencias, han construido formas organizativas y relaciones comunitarias sustentadas en el valor concedido a los aspectos unificadores con los “otros”. Esto implicaría otorgar a lo local la importancia que amerita, revertir la centralidad asignada a las dinámicas globales, al comercio, la competencia o la integración económica en función de los requerimientos mundiales de la acumulación y re-significar que “es nuestra inevitable inmersión en el lugar –y no lo absoluto del espacio- la que tiene prioridad ontológica en la generación de la vida y de lo real” (Casey 1996: 18 citado por Escobar, 2005: 161).

Seguramente son las fronteras una de las nociones que con mayor nitidez confronta el andamiaje sobre el que se ha levantado la trinidad Estado-nación-territorio y son también las fronteras las que plantean el desafío para pensar conceptos más abarcadores que el de ciudadanía o para repensar nuevas organizaciones socio-territoriales que festejen y recreen la vida, “No amarrados como árboles, solo sueltos como pájaros”.<sup>197</sup>

---

<sup>197</sup> Fragmento del poema *Sinfonía Bárbara*, escrito por el poeta afroesmeraldeño Adalberto Ortiz.

## **Bibliografía**

---

## Bibliografía citada

- Acción Ecológica. (2017). "Audiencia del Chocó: no más explotación". Disponible en <http://www.accionecologica.org/component/content/article/2226-2017-08-23-16-38-08>, acceso el 23.06.18.
- ACNUR. (2016). "Tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2016". Disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2017/11152.pdf>, acceso el 15.12.2018.
- . (2009). *La población colombiana en necesidad de protección internacional residente en Ecuador*. Quito: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-Secretaría Técnica de Plan Ecuador.
- . (2009a). "Mapeo de Necesidades en Comunidades de Frontera". Xavier Creach (org.). Lago Agrio: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
- Acosta, Alberto. (2011). "Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición", en Miriam Lang y Dunia Mokrani (eds.), *Más allá del desarrollo*. Quito: Abya Yala. [83-118].
- Acosta, Alberto, et al. (2014). *La restauración conservadora del correísmo*. Quito: Arcoiris Producción Gráfica.
- Agamben, Giorgio. (2010) [2001]. *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Valencia: Pre-Textos.
- Agnew, John. (2008). "Borders on the mind: re-framing border thinking". *Ethics & Global Politics*. 1(4): [175-191].
- . (2005) [1998]. *Geopolítica. Una re-visión de la política mundial*. Madrid: Trama Editorial.
- Agnew, John y Ulrich Oslender. (2010). "Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones empíricas desde América Latina". *Tabula Rasa*. 13. [191-213].
- Aguilera Klink, Federico y Alcántara, Vicent. (comp.). (1996). *De la economía ambiental a la economía ecológica*. Barcelona: ICARIA, FUHEN.
- Albuquerque, José Lindomar. (2014). "Fronteiras: entre os caminhos da observação e os labirintos da interpretação", en *As Ciências Sociais nas fronteiras. Teorias e metodologías de pesquisa*. Cascavel: Gráfica JB. [61-80].
- Alimonda, Héctor. (2017). "En clave de sur: la Ecología Política Latinoamericana y el pensamiento crítico" en, Héctor Alimonda, Catalina Toro y Facundo Martín (eds.) *Ecología Política Latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica*. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [33-50].
- . (2011). "La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política latinoamericana" en, Héctor Alimonda (coord.) *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. [21-60].
- Almeida, Ileana. (2012). "El Estado plurinacional y la interculturalidad". *La Tendencia. Revista de Análisis Político*. (13): [120-123].

- Álvarez, Freddy, et al. (2013). *El correísmo al desnudo*. Quito: Arcoiris Producción Gráfica.
- Alvarez, Marcos César y Fernando Salla. “Estado-nação, fronteiras, margens. Redesenhando os espaços fronteiriços no Brasil contemporâneo”. *Civitas – Revista de Ciências Sociais*. (13)1. [9-26].
- Amoore, Louise. (2006). “Biometric Borders: Governing Mobilities in the War on Terror”. *Political Geography*. (25): [336-351].
- Anderson, Benedict. (1993) [1983]. *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Anderson, James y Liam O’Dowd. (1999). “Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance”. *Regional Studies. Journal of the Regional Studies Association*. 33(7). [593-604].
- Antón, John y Fernando García. (2015). “La presión sobre el derecho al territorio ancestral del pueblo afroecuatoriano. El caso de la Federación de Comunidades Negras del Alto San Lorenzo”. *Revista Colombiana de Sociología*. 38(1): [107-144].
- Arboleda, María Victoria. (2005). “El contexto histórico y contemporáneo de la crisis ambiental en Esmeraldas” en, Hanekamp, Erika y Javier Ponce (ed.), *Quién conspira contra el ambiente*. Quito: Ediciones Abya-Yala. [105-128].
- Arcentales, Javier. (2017). “¿Por qué la Ley de Movilidad Humana no es una buena noticia para la igualdad de derechos?”, *Atopía*. Disponible en [https://colectivoatopia.wordpress.com/2017/05/18/critica\\_ley\\_movilidad\\_humana/](https://colectivoatopia.wordpress.com/2017/05/18/critica_ley_movilidad_humana/), acceso el 22.12.18.
- Ayala, Enrique (ed.) (1996a) [1989]. *Nueva Historia del Ecuador. Época Republicana I*. Vol. 7. Quito: Corporación Editora Nacional.
- . (1996b) [1991]. *Nueva Historia del Ecuador. Época Republicana V*. Vol. II. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Ayerbe, Luis Fernando. (2002). *Estados Unidos e America Latina. A construção da hegemonia*. Sao Paulo: Edit. UNESP.
- Barahona Néjer, Alexander. (2013). “Acuerdo Binacional para el Desarrollo Integral del Pueblo Indígena Awá de Ecuador y Colombia”. *AXIOMA, Revista de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra*. 2(11). [12-16].
- Barros, Claudia y Perla Zusman. (2000). “Nuevas y viejas fronteras. ¿Nuevos y viejos encuentros y desencuentros?”. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Universidad de Barcelona. (69)50. [http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-50.htm#N\\_3\\_](http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-50.htm#N_3_), acceso el 20.08.17.
- Bartolomé, Mariano César. (2013). “Una visión de América Latina desde la perspectiva de la Agenda de Seguridad Internacional contemporánea”. *Relaciones Internacionales*. (23). [35-64].
- Barua, Prabal et al. (2017). “Garantizar los derechos de las personas desplazadas por el cambio climático en Bangladesh”. *Revista Migraciones Forzadas*. (54). [88-91].

- Bayón Jiménez, Manuel (2012). “Los monocultivos industriales de palma africana y sus impactos territoriales, sociales y ambientales”. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo.
- Bellamy Foster, John. (2007). “A ecologia da destruição”, *O Comoneiro*. (4). [http://www.ocomuneiro.com/nr04\\_01\\_JOHN\\_BELLAMY.html](http://www.ocomuneiro.com/nr04_01_JOHN_BELLAMY.html), acceso el 20.10.15.
- Benner, Chris y Manuel Pastor. (2015). “Where to go, what to ask: selecting and designing the case studies” en, *Equity, growth and community: What the Nation can Learn from America's Metro Areas*. University of California Press. <http://www.jstor.org/stable/10.1225/j.ctt1ffjnd4.6>, acceso el 18.03.18. [56-75]
- Bernecker, Walther L. (2004). Fronteras estatales, dinamismo continental. La relatividad de las fronteras en Iberoamérica. *Iberoamericana*. 4(16). [71-86].
- Biersteker, Thomas y Cynthia Weber (eds.). (1996). “The social construction of state sovereignty” en, Biersteker, Thomas y Cynthia Weber (eds.). *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge: Cambridge University Press. [1-21].
- Bonilla, Adrián y Alexei Páez. (2006). “Estados Unidos y la región andina: distancia y diversidad”. *Nueva Sociedad*. 206. [126-139].
- Bonilla, Omar. (2010). “The Manta-Manaos project: nature, capital and plunder”. Quito: Acción Ecológica. Disponible en: [http://www.ceecec.net/wp-content/uploads/2008/09/Manta\\_Manaos\\_Ecuador\\_VFINAL.pdf](http://www.ceecec.net/wp-content/uploads/2008/09/Manta_Manaos_Ecuador_VFINAL.pdf), acceso el 16.03.15.
- Bonilla, Omar; Maldonado, Paola; Silveria, Manuel; Bayón, Manuel. (2016). “Nudos territoriales críticos en Ecuador: Dinámicas, cambios y límites en la reconfiguración territorial del estado”. *GeoGraphos* [en línea]. Alicante: Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la Universidad de Alicante, (7)84. [66-103].
- Boron, Atilio. (2013). *América Latina en la Geopolítica del Imperialismo*. Argentina: Ediciones Luxemburg.
- Borrás, Susana. (2016). “La migración ambiental: entre el abandono, el refugio y la protección internacional”. *Migraciones forzadas. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*. (132). Madrid: FUHEM ecosocial, Icaria Editorial. [31-50].
- Bravo, Elizabeth. (2003). “La industria camaronera en el Ecuador”. Ponencia presentada en el seminario Globalización y Agricultura. Jornadas para la Soberanía Alimentaria. Quito: Universidad Politécnica Salesiana.
- Bréville, Benoît, Edouard Glissant, Olivier Razac, et al. (2013). *El Atlas. Conflictos de fronteras*. Madrid: Fundación Mondiplo, UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
- Brown, Wendy. (2015). *Estados amurallados, soberanía en declive*. España: Herder.
- Brunet-Jailly, Emmanuel. (2011). “Borders, Borderlands and Theory: An Introduction”. *Geopolitics*. (16): [1-6].
- Bryant, Raymond L. (ed). (2015). *The International Handbook of Political Ecology*. Gran Bretaña: Edward Elgar Publishing Limited.

- Bullard, Robert. (1993). *Confronting environmental racism: voices from the grassroots*. Boston: South End Press.
- Buzan, Barry, Ole Wæver y Jaap de Wilde. (1998). *Security. A new framework for Analysis*. Estados Unidos: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Cairo, Heriberto. (2001). "Territorialidad y fronteras del estado-nación: Las condiciones de la política en un mundo fragmentado". *Política y Sociedad*. (36): [29-38].
- Cairo, Heriberto y María Lois. (2014). "Geografía política de las disputas de fronteras: cambios y continuidades en los discursos geopolíticos en América Latina (1990-2013)". *Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía*. (23)2. [45-67].
- Campo, Esther del. (2006). *Gobernabilidad y descentralización político-administrativa en los países andinos. El caso de Bolivia, Ecuador y Perú en los años noventa*. Barcelona: CIDOB ediciones.
- Cardin, Eric Gustavo (2013). "Mecanismos de contrabando y tráfico en la Triple Frontera", en Carrión, Fernando y Víctor Llugsha G. (comp.), *Fronteras: rupturas y convergencias*. Quito: FLACSO-Sede Ecuador, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-CRDI). [31-42].
- . (2014). "Teoría das fronteiras e totalidade" en, *As Ciências Sociais nas fronteiras. Teorias e metodologías de pesquisa*. Cascavel: Gráfica JB. [43-59].
- Cardoso, Henrique y Enzo Faletto. (1977). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Cardy, Franklin. (1994). "Environment and forced migration". Nairobi: United Nations Environment Programme (UNEP).
- Carneiro da Cunha, Manuela. (2009). *Cultura com aspas e outros ensaios*. Sao Paulo: Cosac Naify.
- Carrasco, Eulalia. (2012). "Los Épera Siapidara en Ecuador: proceso de visibilización", *Antropología, cuadernos de investigación*. (11). [79-99]. Disponible en: <https://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/cuadernos-de-investigacion/cuadernos-de-investigacion-11/266-los-epera-siapidara-en-ecuador-proceso-de-visibilizacion>, acceso el 10.04.18.
- . (1983). *El pueblo Chachi. El Jeenqume Avanza*. Colección Ethnos. Quito: Abya Yala.
- Carrión, Fernando y Johanna Espín coord. (2011). *Relaciones fronterizas: encuentros y conflictos*. Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
- Carrión, Fernando y Víctor Llugsha G. (comp.). (2013). *Fronteras: rupturas y convergencias*. Quito: FLACSO-Sede Ecuador, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-CRDI).
- Carrión Sánchez, Claudia F. (2014). "Desafiando al Estado-nación: reclamos de autonomía del pueblo pasto". *Universitas Humanística*. 80. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH80.denr>. [133-157].
- Castells, Manuel. (2001). "El espacio de los flujos", en Ida Susser (ed.), *La sociología urbana de Manuel Castells*. Madrid: Alianza Editorial. [399-446].

- Castro-Gómez, Santiago. (2005). *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Castro-Gómez, Santiago y Ramón Grosfoguel (eds.). (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
- Cebrián Abellán, Francisco. (1999). *La organización del espacio en el Ecuador*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Ceceña, Ana Esther. (2013). “La dominación de espectro completo sobre América”. *Revista Patria. Análisis políticos de la defensa. Dossier Vigilancia Global*. (1). Quito: Ministerio de Defensa Nacional. [43-59].
- Ceceña, Ana Esther, Paula Aguilar y Carlos Motto. (2007). *Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)*. Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
- CODAE. (2008). *Propuesta del pueblo afroecuatoriano a la Asamblea Nacional Constituyente*. Quito: Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano.
- CODENPE. (2011). *Construyendo el Estado Plurinacional*. Quito: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, AECID.
- Comisión Científica Ecuatoriana. (2007). *El sistema de aspersiones aéreas del Plan Colombia y sus impactos sobre el ecosistema y la salud en la frontera ecuatoriana*. Quito: Manthra Editores.
- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (2017). “Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador”. Disponible en [doctore.ohchr.org/Selfservices/FilesHandler.ashx?enc](http://doctore.ohchr.org/Selfservices/FilesHandler.ashx?enc), acceso el 20.01.2018.
- Composto, Claudia y Mina Lorena Navarro (comp.). (2014). *Territorios en disputa. Despojo capitalista. Lucha en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina*. México D.F.: Bajo Tierra Ediciones.
- CONAIE. (2012). *Proyecto Político para la Construcción del Estado Plurinacional. Propuesta desde la visión de la CONAIE*. Quito: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
- . (1994). *Proyecto Político de la CONAIE*. Quito: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
- . (1991). “Anteproyecto de ley de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 1988” en, José Juncosa (comp.) *Documentos Indios. Declaraciones y Pronunciamientos*. Cayambe: Abya-Yala. [203-212].
- Conisbee, Connie y Andrew Simms. (2003). *Environmental Refugees. The Case for Recognition*. London: New Economics Foundation.
- CNSCA (2009). “Los territorios ancestrales afroecuatorianos”. Esmeraldas: Confederación Nacional de la Sociedad Civil Afroecuatoriana.



- Contreras, Carlos. (1994). "Guayaquil y su región en el primer boom cachetero (1750-1820) en, Maiguashca, Juan (ed.) *Historia y región en el Ecuador: 1830-1930. Volumen 30*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Cueva, Agustín. (2008 [1974]). "Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia" en, *Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana*. Buenos Aires: Siglo del Hombre Editores, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). [83-117].
- Chávez, Gardenia y Javier Arcentales Illescas. (2016). "Movilidad humana, irregularidad y 'tráfico ilícito de migrantes'". *Ecuador Debate*. (97). [67-83].
- Chuji, Mónica, Berraondo, Mikel y Pablo Dávalos. (2009). *Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Evaluación de una década 1998-2008*. Quito: Imprenta Nuestra Amazonía.
- Dalby, Simon. (2008). "Global Geopolitics" en, Kevin Cox, Murray Low y Jennifer Robinson (comp.): *The Handbook of Political Geography*. Gran Bretaña: SAGE Publications. [427-438].
- Dávalos, Pablo. (2005). "Movimientos indígenas en América Latina: el derecho a la palabra", en *Pueblos indígenas, Estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [17-33].
- . (2005a). "Plan Colombia, crisis institucional y movimientos sociales". Observatorio Social de América Latina, OSAL. Año IV. (18). [57-67].
- Deler, Jean Paul. (1987). *Ecuador del espacio al Estado nacional. Volumen 2*. Quito: Banco Central del Ecuador.
- Deler, Jean Paul, Nelson Gómez y Michel Portais. (1983). *El manejo del espacio en el Ecuador. Etapas claves. Tomo I*. Quito: Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica.
- Delgado, Gian Carlo. (2013). "¿Por qué es importante la ecología política?", *Nueva Sociedad*. (244). [47-60].
- . (2001). "El futuro de la Amazonía". *Questão Ambiental Latinoamericana*. [74A-87A].
- Díaz-Polanco, Héctor. (1997). *La rebelión zapatista y la autonomía*. Primera edición. México: Siglo XXI Editores.
- Dos Santos, Teotonio. (2015) [1978]. "Socialismo o fascismo. El nuevo carácter de la dependencia" en, Carmen Del Valle Rivera y Sergio Javier Jasso Villazul (comp.), *Obras reunidas de Teotonio Dos Santos (libro electrónico)*. México: Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: <http://www.iiec.unam.mx/>
- Doty, Roxane Lynn. (1996). "Sovereignty and the nation: constructing the boundaries of national identity" en Biersteker, Thomas y Cynthia Weber (eds.), *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge: Cambridge University Press. [121-147].
- Dumas, Juan y Volker Frank. (2008). "Análisis de paz, conflictividad y desarrollo. Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas y cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos". Quito: Fundación Futuro Latinoamericano.

- Dussel, Enrique. (2000). "Europa, modernidad y eurocentrismo" en, Lander, Edgardo (ed.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [24-33].
- Echeverría, Bolívar. (2010) [2006]. *Vuelta de siglo*. México: Biblioteca ERA.
- Eguiguren, Amparo. (2011). "Agenda para la construcción del Estado Plurinacional desde la perspectiva de los pueblos y nacionalidades indígenas". Informe de consultoría. Quito: SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo).
- Ehrenreich, Jeffrey D. (1997). "Awá" en José Juncosa (comp. y ed.), *Etnografías mínimas del Ecuador. Tsachila-Chachis-Cholo-Cofán-Awá-Coaiquer*. Quito: Abya Yala. [143-157].
- Escamilla Vera, Francisco. (1999). "Las fronteras conceptuales de un debate: el significado en norteamérica del término 'frontier'". *Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona*. 164. Disponible en <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-164.htm>, acceso el 23.03.18.
- Escobar, Arturo. (2018). *Otro posible es posible: caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
- . (2011). "Ecología política de la globalidad y la diferencia" en Héctor Alimonda (coord.), *La naturaleza colonizada. Ecología Política y minería en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones CICCUS. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. [61-92].
- . (2005). *Más allá del Tercer Mundo. Globalización y Diferencia*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Universidad del Cauca.
- . (1999). *El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. Bogotá: CEREC-Instituto Colombiano de Antropología.
- Espinosa, Roque. (2008). "Imaginarios y retórica en torno a las fronteras ecuatorianas". *KIPUS, Revista Andina de Letras*. (23). [61-83].
- ESPOL, et al. (2011). *Estado del País. Informe cero. Ecuador 1950-2010*. Quito: Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de Cuenca, Contrato Social por la Educación en el Ecuador, Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
- Falconí, Fander y Julio Oleas. (2004). *Antología. Economía Ecuatoriana*. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
- Falconí, Fándery María Cristina Vallejo. (2012) "Transiciones socioecológicas en la región andina". *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica* (18). [53-71].
- FECCH, et al. (Federación de Centros Chachis de Esmeraldas). (2017). "Informe alternativo a los informes país -Ecuador- 23º-24º combinados al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas Sesión 93º. Vulneración de los Derechos del Pueblo Afrodescendiente y Nacionalidades Indígenas en el Norte de la Provincia de Esmeraldas (Ecuador) por la descontrolada actividad palmicultora, minera y forestal; y la insuficiencia de las políticas del Estado ecuatoriano." Disponible en [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/EQU/INT\\_CERD\\_NGO\\_ECU\\_28317\\_S.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/EQU/INT_CERD_NGO_ECU_28317_S.pdf), acceso el 02.07.2018.

- Fernández Rodríguez, José Julio y Daniel Sansó-Rubert Pacual. (2010). “El recurso constitucional a las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la seguridad interior: el caso de Iberoamérica”. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. Año XLIII. (128). [737-760].
- Firpo Puerto, Marcelo. (2009). “Conflictos, (in)justicia ambiental y salud en Brasil”, *Revista de Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional*. 37. [78-83].
- Fiscalía General del Estado y FLACSO. (2015). “Mercados ilegales”. *Perfil Criminológico*. (21). Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). [1-16].
- Fischer-Kowalski, Marina y Helmut Haberl. (2000). “El metabolismo socioeconómico”. *Ecología Política. Ecosistemas humanos y biodiversidad. Cuadernos de Debate Internacional*. 19. [21-33].
- Fontaine, Guillaume ed. (2004). *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. Las apuestas*. Quito. FLACSO-Sede Ecuador (Facultad de Ciencias Sociales).
- Franzé, Javier. (2015). “La primacía de lo político: crítica de la hegemonía como administración” en, María Isabel Wences Simon (ed.), *Tomando en serio la Teoría Política entre las herramientas del zorro y el ingenio del erizo*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. [141-172].
- INREDH. (2008). *Fronteras en el Limbo. El Plan Colombia en el Ecuador*. Quito: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos.
- Galarza, Jaime. (1974). *El festín del petróleo*. Quito: Editorial Universitaria.
- García, Juan (ed.). (2012). *Al otro lado de la raya. Memoria del Encuentro Internacional de reflexión y participación*. Quito: Abya-Yala.
- García, Juan [ed.]. (s/f). *Territorios ancestrales, identidad y palma: una lectura desde las comunidades afroecuatorianas*. Quito: Fundación Altrópico.
- García, Juan y Catherine Walsh. (2017). *Pensar sembrando/sembrar pensando*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya Yala.
- . (2010). “Derechos, territorio ancestral y el pueblo afroesmeraldeño” en Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), *¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2009*. Quito: Abya Yala. [345-360].
- García Pérez, Juan. (2005). Conflictos territoriales y luchas fronterizas en América Latina durante los siglos XIX y XX. *Norba. Revista de Historia*. (18). [215-241].
- García Pinzón, Viviana. (2015). “Estado y frontera en el norte de Chile”. *Estudios Fronterizos, nueva época*. 16(31). [117-148].
- . (2014). “En los confines del Estado. Una mirada comparada a la seguridad en las zonas fronterizas de Sudamérica” en Zavaleta, José Alfredo (comp.), *El laberinto de la inseguridad ciudadana: bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes penitenciarios en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [227-256].
- Garzón Vergara, Juan Carlos. (2012). “La seguridad y las Fuerzas Armadas en América Latina y El Caribe. Nuevos desafíos para la construcción de una democracia” en Álvarez Velozo,

- David, Juan Carlos Garzón Vergara, Loreta Tellería Escobar y María Paz Fiumara, *El papel de las Fuerzas Armadas en América Latina: seguridad interna y democracia*. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [12-62].
- González, Miguel, Araceli Burguete Cal y Mayor, Pablo Ortiz (coord.). (2010). *La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina*. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), GTZ, IWGIA, CIESAS, UNICH.
- González Toro, Patricia. (2014). “Minería del oro y agua segura en territorios fronterizos, etnodiversos y de alta vulnerabilidad geopolítica”. Memoria para optar al título profesional de Antropóloga Social. Santiago: Universidad de Chile.
- Greenberg, James B. y Thomas K. Park. (1994). “Political Ecology”. *Journal of Political Ecology*. (1). [1-12].
- Grimson, Alejandro. (2005a). “Fronteras e identificaciones nacionales: diálogos desde el Cono Sur”. *Iberoamericana*. V(17). [91-99].
- . (2005b) “Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur” en Daniel Mato (coord.), *Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [127-142].
- . (2003). “Los procesos de fronterización: flujos, redes e historicidad”, en Clara Inés García (comp.), *Fronteras, territorios y metáforas*. Medellín: Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia y Hombre Nuevo. [15-33].
- Grosfoguel, Ramón. (2014). “La descolonización de la economía política y los estudios poscoloniales: transmodernidad, pensamiento descolonial y colonialidad global”, en Bonaventura de Souza Santos y María Paula Meneses (eds.), *Epistemologías del Sur (Perspectivas)*. Madrid: Ediciones Akal S.A. [373-406].
- Gudynas, Eduardo. (2009). “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en *Extractivismo, política y sociedad*. Quito: CAAP (Centro Andino de Acción Popular) y CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social). [187-225].
- . (2007). “El MAP entre la integración regional y las zonas de frontera en la nueva globalización”. *Revista MAPiensa*. (1). [1-9].
- Guerra Vilaboy, Sergio. (2001). *Historia Mínima de América Latina*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Guerrero, Andrés. (1980). *Los Oligarcas del Cacao. Ensayo sobre la acumulación originaria en el Ecuador: hacendados, cacaoteros, banqueros, exportadores y comerciantes en Guayaquil (1890-1910)*. Quito: El Conejo.
- Gutiérrez Aguilar, Raquel. (2017). *Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Hanekamp, Erika y Javier Ponce. (2005). *Quién conspira contra el ambiente*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Hardt, Michael y Antonio Negri. (2000). *Imperio*. Cambridge: Harvard University Press.

- Harvey, David. (2004). "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión". *Socialist Register*. (40). [99-129].
- . (2003). *El nuevo imperialismo*. Madrid: Ediciones Akal S.A.
- . (1996). *Justice, Nature and Geography of Difference*. Singapore: Blackwell Publishing.
- Hazlewood, Julianne. (2010). "Más allá de la crisis económica: CO<sub>2</sub>lonialismo y geografías de esperanza". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. (36). [81-95].
- Henderson, Peter. (2009). "La Constitución ecuatoriana de 1861: el debate". *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia*. (30). [47-67].
- Hildyard, Nicholas. (2003). "La extracción de combustibles fósiles como generadora de refugiados ambientales". *Ecología Política*. (37). [37-50].
- Hobsbawm, Eric. (2012) [1990]. *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Barcelona: Crítica.
- . (2010). "Nacionalismo y nacionalidad en América Latina" en, Pablo Sandoval (comp.), *Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Popayán: Samava Impresiones. [311-326].
- Holt-Giménez y Raj Patel. (2009). *¡Rebeliones alimentarias! La crisis y el hambre por la justicia*. S/l: FoodFirst Books.
- Isacson, Adam, Lisa Haugaard, Abigail Poe, et al. (2013). *Hora de escuchar: tendencias en asistencia de seguridad de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe*. Latin American Working Group Education Fund. Center for International Policy. WOLA (Washington Office on Latin America). Disponible en: [http://www.wola.org/wola\\_publications](http://www.wola.org/wola_publications), acceso el 03.09.2015.
- Ibarra, Hernán. (2010). "Movilización y organización campesina en la costa ecuatoriana (1950-1963)". *Ecuador Debate*. No. 80. [137-148].
- Ibañez, Federico. (2012). "Conflictos limítrofes latentes en América Latina". Disponible en: <https://www.infobae.com/2012/07/01/1052820-conflictos-limitrofes-latentes-america-latina/>, acceso el 14.03.16.
- IDMC-NRC. (2010). "Conflict beyond borders: humanitarian impact of the Colombian Conflict in Ecuador". International Displacement Monitoring Centre. Norwegian Refugee Council.
- Jaramillo, Grace, comp. (2009). *Construyendo puentes entre Ecuador y Colombia*. Quito: OEA-FLACSO-PNUD.
- Jaramillo, Marco. (1981). *Diagnóstico socio-económico de la provincia de Esmeraldas*. Colección Pendoneros. Serie Antropología Social. (39). Otavalo: Instituto Otavaleño de Antropología.
- Jarrín Hidalgo, Sofia. (2014). "Neo-extractivismo y conflictos socio-ambientales en el territorio de la comuna afroecuatoriana Río Santiago Cayapas". Tesis para la obtención de la licenciatura en antropología aplicada. Quito: Universidad Politécnica Salesiana.
- Johnson, Corey et al. (2011). "Interventions on rethinking 'the border' in border studies". *Political Geography*. (30). [61-69].

- Kauffer, Edith Françoise. (1997). "Refugiados y fronteras: las ambigüedades de una relación imprescindible". *Foro Internacional*. (XXXVII-4). [734-758].
- Kuus, Merje y John Agnew. (2008) "Theorizing the State Geographically: Sovereignty, Subjectivity, Territoriality" en, Kevin Cox, Murray Low y Jennifer Robinson (comp.), *The Handbook of Political Geography*. Gran Bretaña: SAGE Publications. [95-106].
- Lapierre Robles, Michel. (2012). "Mineras, palmicultoras y forestales. Efectos socio-ambientales en zonas etnodiversas. El caso del norte de la Provincia de Esmeraldas, Ecuador". *Anuario de Investigación y Desarrollo 2010-2012 del Centro de Investigación y Desarrollo (CID-PUCESE)*. Esmeraldas: CID-PUCESE. [7-21].
- Lapierre Robles, Michel y Aguasantas Macías Marín. (2018). *Extractivismo, (neo)colonialismo y crimen organizado en el norte de Esmeraldas*. Quito: Abya Yala Ediciones.
- Larrea, Carlos. (2006). *Hacia una historia ecológica del Ecuador. Propuestas para el debate*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional y EcoCiencia.
- Leff, Enrique. (2006). "La ecología política en América Latina. Un campo en construcción", en Héctor Alimonda, *Aportes para una ecología política latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [21-39].
- . (2004). *Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. México: Siglo XXI Editores.
- León, Evan. (2013). "Límites y Linderos: Una interpretación decolonial de los conflictos territoriales en la Región Norte de Esmeraldas durante los finales del siglo XIX". Tesis de maestría. Durham: Duke University.
- Lipietz, Alain. (2002). A ecología política, solução para a crise da instancia política?, en: Alimonda, Héctor (comp.), *Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía*. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [15-26].
- Lois, María. (2014). "Apuntes sobre los márgenes: fronteras, fronterizaciones, órdenes socioterritoriales" en Eric Gustavo Cardin y Silvio Antônio Colognese (org.), *As Ciências Sociais nas fronteiras. Teorias e metodologías de pesquisa*. Cascavel: Gráfica JB. [239-261].
- Lois, María y Heriberto Cairo. (2011). "Introducción. Desfronterización y refteronterización en la Península Ibérica". *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*. 2(1). [11-22].
- Lucero Robles, Gabriela. (2014). "Optimización de los procesos de extracción de grava aurífera y proceso de lavado del frente 'El Porvenir' en el Proyecto Río Santiago, Empresa Nacional Minera". Tesis para la obtención del título de Ingeniería de Minas. Quito: Universidad Central del Ecuador.
- Luxemburgo, Rosa. (1967) [1912]. *La acumulación del capital*. México: Editorial Grijalvo.
- Machado-Aráoz, Horacio. (2015) "Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-existencias decoloniales en nuestra América". *Revista Bajo el Volcán*, 23(15). [11-51].

- . (2013). “Extractivismo y ‘consenso social’: expropiación-consumo y fabricación de subjetividades (capitalistas) en contextos neocoloniales”. *Revista Cuestiones de Población y Sociedad*, 3(3). [29-40].
- . (2010). “Imperialismo ecológico y racismo ambiental. Una lectura eco-biopolítica sobre las industrias extractivas en el sur”. *Aportes científicos desde humanidades*. (8). [1897-1911].
- . (2010a). “Minería transnacional y neocolonialismo. Cuerpos y territorios en las disputas coloniales de nuestro tiempo” en, *Resistencias populares a la recolonización del continente*. Buenos Aires: Ediciones América Libre. [303-341].
- Maiguashca, Juan (ed.). (1994). *Historia y región en el Ecuador: 1830-1930*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Maldonado, Adolfo. (2000). “Los impactos de las fumigaciones en la frontera ecuatoriana”. *Revista de Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional*. 21. [61-71].
- Maldonado-Torres, Nelson. (2008). “La descolonización y el giro des-colonial”. *Tabula Rasa*. 9. [61-72].
- Marcillo, Fabrizio. “Crisis por la mancha blanca y su recuperación actual”. <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/8972/3/AnalisisWSSV2003.pdf>. Acceso el 27.04.2018.
- Marín Burgos, Victoria. (2014). *Power, Access and Justice in Commodity Frontiers. The political ecology of access to land and palm oil expansion in Colombia*. Tesis doctoral. Holanda: University of Twente, Enschede.
- Marsh, David y Gerry Stoker (eds.). (1997). *Teoría y métodos de la ciencia política*. Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Martín, Facundo y Robin Larsimont. (2016). “¿Es posible una ecología cosmo-política? Notas hacia la desregionalización de las ecologías políticas”. *Polis. Revista Latinoamericana*. (45). [1-12].
- Martínez, Luciano. (1976). “Auge y crisis del banano en la Provincia de Esmeraldas”. *Economía. Revista del Instituto de Investigaciones Económicas*. 65. Universidad Central del Ecuador. [37-61].
- Martínez-Alier, Joan. (2011). “Macroeconomía ecológica, metabolismo social y justicia ambiental”. *Revista Historia Actual*. 9(9). [148-168].
- . (2004). “Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad”. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*. 1. [21-30].
- . (2002). *The Environmentalism of the Poor. A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Martínez-Estrada, Alejandro. (2003). *Breve historia del Ecuador e Historia de Límites*. 6to. curso. Quito: Ediciones Maya.
- Marx, Karl. (1980) [1867]. *El Capital*. Tomo I. Vol. 3. México: Siglo XXI editores.

- Mbembe, Achille. (2016). *Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo*. Ulzama: Ned Ediciones.
- . (2008). “Al borde del mundo. Fronteras, territorialidad y soberanía” en Sandro Mezzadra (ed.), *Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales*. Madrid: Queimada Gráficas. [167-195].
- Metha, Lyla and Jaideep Gupte. (2003). “Whose Needs are Right? Refugees, Oustees and the Challenges of Rights-Based Approaches in Forced Migration”. Working Paper T4. Sussex: Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty.
- Mezzadra, Sandro. (2016). “Proliferación de fronteras y ‘derecho de fuga’”. *Migraciones forzadas. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*. (132). Madrid: FUHEM ecosocial, Icaria Editorial. [13-26].
- . (2005). *Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Mezzadra, Sandro y Brett Neilson. (2013). *Border as Method, or the Multiplication of Labor*. Durham: Duke University Press.
- . (2017). “On the multiple frontiers of extraction: escalating contemporary capitalism”. *Cultural Studies*. <http://dx.doi.org/10.1080/09502386.2017.1303425>. [2-20].
- Mignolo, Walter. (2007, [2005]). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- . (2003). *Historias locales, diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Ediciones Akal.
- Minda, Pablo. (2012). “La deforestación en el norte de Esmeraldas: los actores y sus prácticas”. Tesis de Maestría. Quito: Universidad Politécnica Salesiana.
- . (2004). “La deforestación en el norte de Esmeraldas (Eloy Alfaro y San Lorenzo). Disponible en <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/8468>, acceso el 15.07.2016
- Misión de Verificación. (2007). “Informe de verificación de la expansión de los monocultivos de palma africana en el norte de Esmeraldas”. Esmeraldas.
- Moncada, José. (2006). *Esmeraldas, una joya sin pulir*. Quito: Ediciones La Tierra.
- . (1978). “Las perspectivas de evolución del Ecuador hacia fines del presente siglo” en, Drekonja, G. et al., *Ecuador: hoy*. Bogotá: Siglo XXI. [91-133].
- Moncada, Martha. (2016). *Fronteras y seguridad en el nuevo regionalismo estratégico*. Ensayo acreedor al segundo premio del concurso internacional de investigación “Rui Mauro Marini”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- . (2015). “Naturaleza, culturas y territorios: lecturas paralelas entre la ecología política y el pensamiento poscolonial” en, María Paula Meneses, Iolanda Vasile (org.) *CESCONTEXTO. Desafios aos estudos Pós-Coloniais. As Epistemologías Sul-Sul* (5). [44-69].



- . (2013). “Palma africana en el norte de Esmeraldas. Un caso de (in)justicia ambiental e insustentabilidad” en, Gian Carlos Delgado Ramos (coord.), *Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socio-ambiental*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [97-122].
- . (2012). *Ecuador Río +20. Evaluación del país y posición nacional*. Quito: Ministerio Coordinador de Patrimonio.
- Moncada, Martha, et al. (2011). “Diagnóstico de la región amazónica. Sistema socio cultural en la Amazonía ecuatoriana”. Quito: ECORAE.
- Moncayo, María Isabel. (2012). *Diagnóstico sobre la trata de personas en el cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas*. Disponible en: [www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/51489.pdf](http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/51489.pdf), acceso el 12.06.2015.
- Moncayo, María Isabel, Lucy Santacruz y Carlos Ortega. (2010). “Desplazamiento forzado interno en Ecuador: el caso de la frontera norte. Informe final”. Quito: Secretaría Técnica de Plan Ecuador-FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
- Moore, Jason. (2003). “The Modern World-System. As Environment History? Ecology and the Rise of Capitalism”, *Theory and Society*. 32 (3). [307-377].
- . (2000). “Sugar and the Expansion of the Early Modern World-Economy: Commodity Frontiers, Ecological Transformation, and Industrialization”. *Review (Fernand Braudel Center)*. 23 (3). [409-433].
- Morán, Susana. (2017a). “La minería mata la vida en el norte de Esmeraldas”. *Plan V*. Disponible en: <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-mineria-que-mata-la-vida-el-norte-esmeraldas>, acceso el 07.10.17.
- . (2017b). “San Lorenzo o la vida en el fin del mundo”. *Plan V*. Disponible en: <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/san-lorenzo-o-la-vida-el-fin-del-mundo>, acceso el 07.10.17.
- . (2017c). “David y Goliat: la disputa entre una pequeña comunidad afro y Energy & Palm”. *Plan V*. Disponible en: <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/david-y-goliat-la-disputa-entre-una-pequena-comunidad-afro-y-energy-palma>, acceso el 07.10.17.
- Muradian, Roldan y Joan Martinez-Alier. (2001). “Trade and the environment: from a ‘Southern’ perspective”. *Ecological Economics*. 36(2). [281-297].
- Murphy, Alexander B. (1996). “The sovereign State systems as political-territorial ideal: historical and contemporary considerations” en, Biersteker, Thomas y Cynthia Weber (eds.), *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge: Cambridge University Press. [81-120].
- Nacionalidad A’i Cofán. (2012). “Encuentro binacional de la nacionalidad A’i asentada en Colombia y Ecuador”. Nariño: Fundación Pachamama.
- Navarro Floria, Pedro. (2011). “Territorios marginales: los desiertos inventados latinoamericanos. Representaciones controvertidas, fragmentadas y resignificadas” en, Dení Trejo Barajas, *Los desiertos en la historia de América. Una mirada multidisciplinaria*. México:

Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y Universidad Autónoma de Coahuila. [208-228].

Navarro T., Mina L. y César E. Pineda R. (2009). “Luchas socioambientales en América Latina y México. Nuevas subjetividades y radicalidades en movimiento”. *Bajo el Volcán*. 8 (14). [81-104].

Newman, David y Anssi Paasi. (1998). “Fences and neighbours in the postmodern world: boundary narratives in political geography”. *Progress in human geography*. 22(2). [186-207].

OACDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). (2018). “La situación de derechos humanos en la frontera norte ecuatoriana”. Quito: Naciones Unidas.

Ocampo, José Antonio, Bárbara Stallings, Inés Nustillo, Helvia Belloso, Roberto Frenkel. (2014). *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica*. Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Oetzel, Ralf. (2017). “La zona transfronteriza entre Ecuador y Colombia: los retos estratégicos”. Quito: ACNUR.

OIM. (2008). Migración y cambio climático. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones. Disponible en [http://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-31\\_sp.pdf](http://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-31_sp.pdf), acceso 10.11.2017.

Ortega, Carlos y Oscar Ospina (coord.). (2012). “*No se puede ser refugiado toda la vida...*”. *Refugiados urbanos: el caso de la población refugiada en Quito y Guayaquil*. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)-Sede Ecuador.

Ospina, Pablo. (2004). “Modelos productivos y lógicas de ocupación del espacio (Siglos XIX y XX)” en, *Una breve historia del espacio ecuatoriano*. Quito: Consorcio CAMAREN, Instituto de Estudios Ecuatorianos. [105-186].

———. (1996). “Imaginarios nacionalistas: Historia y significados nacionales en Ecuador, siglos XIX y XX”, *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia*. No. 9. [111-124].

Pacheco, Tania. (2012). “Desigualdad, injusticia ambiental y racismo: una lucha que trasciende el color de la piel”, *Polis*. 16. Disponible en <https://journals.openedition.org/polis/4754>, acceso el 30.10. 15.

Padilla, Isabel y Juan Montaña comp. (2018). *La palabra está suelta. Homenaje a Juan García Salazar*. Quito: Editorial Abya-Yala.

Palacio, Germán. 2007. “Cinco ejes analíticos para comprender la Amazonía actual”. *Foro Nacional Ambiental. Documento de Políticas Públicas*. (24): [2-16].

———. 2006. “Breve Guía de Introducción a la Ecología Política: orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad”. *Gestión y Ambiente*. 9(3). [143-156].

Painter, Joe. (2008). “Geographies of space and power” en, Kevin Cox, Murray Low y Jennifer Robinson (comp.), *The Handbook of Political Geography*. Gran Bretaña: SAGE Publications. [57-72].

- Parra-Romero, Adela. (2016). ¿Por qué pensar un giro decolonial en el análisis de la conflictividad socio-ambiental en América Latina?”. *Revista de Ecología Política. Cuadernos de Debate Internacional*. 21. [15-20].
- Penrose, Jan y Richard C. M. Mole. (2008). “Nation-States and National Identity” en, Kevin Cox, Murray Low y Jennifer Robinson (comp.), *The Handbook of Political Geography*. Gran Bretaña: SAGE Publications. [271-284].
- Pezzi, Juan Pablo, Gardenia Chávez y Pablo Minda. (1996). *Identidades en Construcción*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Ponce, Isabela. (2018). “El conflicto armado se suma a los problemas de los indígenas Awá y comunidades afro en la frontera”. Disponible en: <https://gk.city/2018/05/01/comunidades-en-frontera-ecuador-colombia/>, acceso el 06.11.2018.
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter. (2006). “A reinvenção dos territórios: a experiência latino-americana e caribenha” en Ana Esther Ceceña (coord.), *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*. Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [151-197].
- . (2004). *El desafío ambiental*. México: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- Potter, Lesley. (2011). “La industria del aceite de palma en el Ecuador: ¿un buen negocio para los pequeños agricultores”. *EUTOPIA*. 2. [39-54].
- PRAS-CID-PUCESE. (2011a). “Daños sociales y ambientales y descripción de la actividad minera ilegal en el norte de la provincia de Esmeraldas”. Esmeraldas: Programa de Reparación Ambiental y Social-Ministerio del Ambiente, Centro de Investigación y Desarrollo, Pontificia Universidad Católica-Sede Esmeraldas.
- . (2011b). “Indicadores ecológicos, económicos y sociales vinculados a la minería de oro en el norte de Esmeraldas”. Esmeraldas: Programa de Reparación Ambiental y Social-Ministerio del Ambiente, Centro de Investigación y Desarrollo, Pontificia Universidad Católica-Sede Esmeraldas.
- Prébish, Raúl. (1984) [1981]. *Capitalismo periférico, crisis y transformación*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Quijano, Aníbal. (2014a). “Colonialidad del poder y clasificación social” en Santos, Boaventura de Sousa y María Paula Meneses (eds.), *Epistemologías del Sur (Perspectivas)*. España: Ediciones Akal, S. A. [67-107].
- . (2014b) [1992]. “‘Raza’, ‘Etnia’ y ‘Nación’ en Mariátegui. Cuestiones abiertas” en, Aníbal Quijano, *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [757-776].
- . (2014c) [2000]. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en, Aníbal Quijano, *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [777-833].
- . (2014d) [1993]. “América Latina en la economía mundial” en, Aníbal Quijano, *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del*

- poder*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). [199-214].
- . (1992). “Colonialidad y modernidad/racionalidad”, *Perú Indígena*. 13 (29). [11-20].
- Quintero, Rafael y Erika Silva. (1991a). *Ecuador: una nación en ciernes. Tomo I*. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y Abya Yala.
- . (1991b). *Ecuador: una nación en ciernes. Tomo II*. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y Abya Yala.
- Ramírez, Socorro. (2007). *Una mirada al Ecuador*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
- . (2005). “Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF): avances y retrocesos”, *Aldea Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración*. 10(18). [7-19].
- Ramón V., Galo. (2004). “Estado, región y localidades en el Ecuador, 1808-2000” en, *Una breve historia del espacio ecuatoriano*. Quito: Consorcio CAMAREN, Instituto de Estudios Ecuatorianos. [105-186].
- Ramón V., Galo y Víctor Hugo Torres. (2004). *El desarrollo local en el Ecuador. Historia, actores y métodos*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- . (2004a). *Frontera Norte Ecuatoriana. Desafío de la gobernabilidad*. Quito: COMUNIDEC.
- Ratto, Silvia. (2001). “El debate sobre la frontera a partir de Turner. La New Western History, los borderlands y el estudio de las fronteras en Latinoamérica”. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*. Tercera serie (2). [105-126].
- Ratzel, Friedrich. (1982) [1898]. “El territorio, la sociedad y el Estado”, en Gómez Mendoza, Josefina, Julio Muñoz Jiménez y Nicolás Ortega Cantero, *El pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos*. Madrid: Alianza Editorial. [193-205].
- . (2011) [1896]. “Las leyes del crecimiento espacial de los Estados. Una contribución a la Geografía Política científica”. *Geopolítica(s)*. (1). [135-156].
- Real, Byron. (2007). “Estrategia de seguridad socioambiental para la frontera norte del Ecuador. Provincia de Sucumbíos”. Quito: Programa de Paz y Desarrollo en la Frontera Norte del Ecuador.
- Renard Jean-Pierre. (1992). “Populations et frontières: problématiques et méthodes”. *Espace, populations, sociétés*, (2). [167-184].
- Reuveny, Rafael y Ashley Peterson Allen. (2003). “Los refugiados ambientales y sus consecuencias en el futuro”. *Ecología Política*. (37). [21-35].
- Revelo, Luis. (2003). “Fronteras vivas en el Ecuador Meridional: las políticas y acciones desde el Estado 1979-1998”. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
- Riaño A., Pilar, Marta I. Villa M., et al. (2008). “Migración forzada de colombianos al Ecuador”, *Umbrales. Revista del Posgrado en Ciencias del Desarrollo*. (17). [335-352].

- Rincón, Martha (coord.). (2008). *Agrocombustibles “Llenando tanques, vaciando territorios”*. Bogotá: Editorial Bochica.
- Rivera, Freddy, J. C. Rivadeneira y Jorge Mora Altafuya. (1986). *Campesinado y organización en Esmeraldas*. Quito: Centro Andino de Acción Popular y Organización Campesina Muisne-Esmeraldas.
- Roa Ovalle, Iván Ernesto. (2012). “El desborde de la violencia: raza, capital y grupos armados en la expansión transnacional de la palma aceitera en Nariño y Esmeraldas”. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Quito: FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
- Robbins, Paul. (2012) [1967]. *Political Ecology. A critical introduction*. Malden: John Wiley & Sons Ltd.
- . (2008). “The State in Political Ecology: A postcard to political geography from the field” en, Kevin Cox, Murray Low y Jennifer Robinson (comp.), *The Handbook of Political Geography*. Gran Bretaña: SAGE Publications. [205-218].
- Rodríguez Mir, Javier. (2012). “Los sinuosos caminos del racismo: el racismo ambiental en Argentina”, *Revista de Antropología Experimental*. (12). [43-59].
- Romano, Silvina y Gian Carlo Delgado. (2012). “Seguridad, Estado y despojo en América Latina: el presente como historia” en, Luis Ernesto Ocampo Banda (comp.), *Violencia y miedo: una mirada desde lo social*. Buenos Aires: Universidad de Occidente y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. [21-42].
- Rossiter, David A. (2011). “Leave the lemons at home: towards a political ecology of border space”. *Geopolitics*. (16). [107-120].
- Rueda Novoa, Rocío. (2010). “De esclavizados a comuneros en la cuenca aurífera del Río Santiago-Río Cayapas, Esmeraldas. Etnicidad negra en construcción en Ecuador. Siglos XVIII-XIX”. Tesis doctoral. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- . (2001). “Esclavos y negros libres en Esmeraldas, siglos XVIII –XIX”, *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia*. (16). [3-33].
- Said, Edward. (2008 [1997]). *Orientalismo*. Barcelona: Debolsillo.
- Sander, Lauret. (2009). *La Frontera Norte Ecuatoriana ante la influencia del conflicto colombiano. Las sorprendentes dimensiones de la dinámica transfronteriza entre la provincia de Carchi y el departamento de Nariño*. Quito: Abya Yala.
- Santos, Boaventura de Souza. (2014). “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes”, en Boaventura de Souza Santos y María Paula Meneses (eds.), *Epistemologías del Sur (Perspectivas)*. Madrid: Ediciones Akal S.A. [21-66].
- . (2011). “Epistemologías del Sur”. *Utopía y praxis latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*. 16 (54). [17-39].
- . (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

- . (2001). “Entre Prospero y Caliban: colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade” en, Maria Irene Ramalho y António Souza Ribeiro (org.), *Entre ser e estar. Raízes, percursos e discursos da identidade*. Coimbra: Edições Afrontamento. [23-79].
- Sassen, Saskia. (2001). *¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización*. España: Ediciones Bellaterra.
- Saxe-Fernández, John. (2009). “América Latina: ¿Reserva estratégica de Estados Unidos?”. *Debates*. X (25). [19-25].
- Schavelzon, Salvador. (2015). *Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir. Dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes*. Quito: Abya-Yala. CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).
- Serje, Margarita. (2017). “Fronteras y periferias en la historia del capitalismo: el caso de América Latina”. *Revista de Geografía Norte Grande*. (66). [33-48].
- . (2011). *El revés de la Nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Serrano, Helga. (2013). *Caso Chevron-Texaco, cuando los pueblos toman la palabra*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Corporación Editora Nacional.
- Shiva, Vandana. (1995). “Globalism, biodiversity and the Third World” en, Edward Goldsmith, et al., *The future of progress. Reflections on Environment and Development*. Bristol: International Society for Ecology and Culture. [50-67].
- Suárez, Luis. (2014). “Estados Unidos vs. Nuestra América 20 años después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. PDF. La Habana.
- . (2003). *Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Svampa, Maristella. (2013). “‘Consenso de los commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”. *Revista Nueva Sociedad*. (244). [30-46].
- . (2011). “Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales: ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?” Quito: Fundación Rosa Luxemburgo. Documento en PDF.
- . (2006). “Protesta, movimientos sociales y dimensiones de la acción colectiva en América Latina”. Madrid: John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Documento en PDF.
- Taylor, Peter. (1997). “Territorial absolutism and its evasions”. *Geography Research Forum*. 16, [1-12].
- Terrack, P. J. y Eduardo Rebolledo. (2012). “Parcelas permanentes, inventarios cuantitativos y etnobotánica en la cuenca alta del río Cayapas”. *Anuario de Investigación y Desarrollo 2010-2012 del Centro de Investigación y Desarrollo (CID-PUCESE)*. Esmeraldas: CID-PUCESE. [21-29].
- Tobar Subía Contento, María Isabel. (2010). “Respuestas institucionales para el manejo de las fronteras: el caso de la frontera norte ecuatoriana”. Tesis de Maestría en Integración. Ibarra: Universidad Andina Simón Bolívar.

- Toledo, Víctor. (2000). *La paz en Chiapas. Ecología, luchas indígenas y modernidad alternativa*. México: Quinto Sol.
- Trincherro, Hugo; Campos Muñoz, Luis; Valverde, Sebastián. (2014). *Pueblos indígenas, Estados nacionales y fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina*. Tomo I. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Trujillo, Jorge. (2005). “Evaluación de impactos ambientales inducidos por la agroindustria de palma africana en el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas. Estudio de caso de las comunidades Awá de Guadalito y afroecuatorianas de La Chiquita, Carondelet y La Boca. Aspectos económicos, sociales y culturales. Conclusiones y recomendaciones”. Esmeraldas: Fundación Altrópico.
- . (1981). *Los oscuros designios de Dios y del Imperio. El ILV en el Ecuador*. Quito: Ediciones CIESE.
- Uranga, Pável. (2011). “La trata ante el espejo. Una aproximación a la explotación sexual en trabajo esclavo. Frontera Norte del Ecuador”. Informe. Quito: Cooperación Alemana al Desarrollo.
- Vásquez, Teófilo. (2008). “Las nuevas guerras y el conflicto armado en Colombia”. *Controversia*. 190. [281-310].
- Valdir, Gregory. (2014). “Fronteiras múltiplas: narrativas sobre os sertões do Paraná” en, *As Ciências Sociais nas fronteiras. Teorias e metodologías de pesquisa*. Cascavel: Gráfica JB. [183-214].
- Van Klaveren, Alberto (1983). “El Lugar de Estados Unidos en la Política Exterior Latinoamericana” en, *Teoría y Práctica de la política exterior Latinoamericana*. Bogotá: FESCOL. [119 – 141].
- Vélez Tangarife, Álvaro Alexander. (2016). “La frontera global. Análisis de los flujos de narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana”. Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Visvanathan, Shiv. (2007). “Interrogating the nation”. *Economic and political Weekly*. 38(23). [2295-2302].
- Wagner, Lucrecia Soledad. (2014). *Conflictos socioambientales. La megaminería en Mendoza 1884-2011*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Walsh, Catherine. (2009). *Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Ediciones Abya-Yala.
- Walter, Mariana y Marta Conde. (2017). “Extractivismo, debates sobre decrecimiento y otras formas de pensar el mundo”. *Voces en el Fénix* 8 (60): [44-53].
- Wallerstein, Immanuel. (2005). *Análisis de sistemas-mundo: una introducción*. México: Siglo XXI.
- Wilson, Japhy, Manuel Bayón y Henar Diez. (2015). “Posneoliberalismo y urbanización planetaria en la Amazonía ecuatoriana”. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales, Centro Nacional de Estrategia para el Derecho al Territorio.

Young, Robert. (2006). ¿Qué es la crítica poscolonial?. Documento en PDF

Zaffaroni, Eugenio. (2011). *La Pachamama y el humano*. Buenos Aires: Ediciones Colihue. Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

## **Normativa, informes y documentos institucionales**

ALBA-TCP. (2013). *Construyendo un mundo pluripolar. Cumbres 2004-2013*. Caracas: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.

Alianza País. 2015. “Manifiesto Ideológico de Alianza País”. Disponible en: <http://www.alianzapais.com.ec/2015/07/03/manifiesto-ideologico/>, acceso el 14.10.15.

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). *Constitución del Ecuador*. Montecristi.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2018). “Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo”. Registro Oficial N° 243. Quito.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2018a). “Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica”. Registro Oficial N° 245. Quito.

———. (2017). “Código Orgánico del Ambiente”. Registro Oficial Suplemento 983.

———. (2015). “Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería”. Registro Oficial 037.

———. (2014). “Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.” Registro Oficial N° 263. Año II.

———. (2010). “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”. Registro Oficial Suplemento 303.

———. (2009). “Ley de Seguridad Pública y del Estado”. Registro Oficial Suplemento 35.

Borja Consultores y GAD Rocafuerte (Borja Consultores y Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rocafuerte). (2015). “Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rocafuerte”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860028410001\\_Diagnostico\\_Rocafuerte\\_Final\\_Def\\_29-10-2015\\_19-04-14.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860028410001_Diagnostico_Rocafuerte_Final_Def_29-10-2015_19-04-14.pdf), acceso el 03.03.18.

CAN. (2001). “Decisión 501: Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina”. Valencia: Comunidad Andina de Naciones.

Cancillería del Ecuador y Cancillería de Colombia. (2009). “Estudio de Caracterización. Zona de Integración Fronteriza Colombo-Ecuatoriana”. (s.l.)

CDS. (2012). “Registro Suramericano de Gasto de Defensa. Avance Preliminar. Resumen Ejecutivo”. Quito: Consejo de Defensa Suramericano-Secretaría General de UNASUR. Disponible en: <http://www.unasursg.org>, acceso el 02.11.2014.

CELAC. (2014). “Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz”. La Habana: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Disponible en:



<http://www.granma.cu/file/sp/ii-cumbre-de-la-celac-la-habana-2014-10/cumbre-109.html>, acceso el 18.04.2015.

CEPESIU. (2016). “Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la Economía. Eloy Alfaro 2015-2020”. Quito: Centro de Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial, ABILIT Producciones.

CFN (Corporación Financiera Nacional). (2017). “Ficha Sectorial: Cultivo de Palmas de Aceite (Palma Africana)”. Quito: Corporación Financiera Nacional.

Chávez, Hugo. (2012). “Discurso del presidente Chávez transmitido por cadena nacional el 8 de diciembre de 2012, desde el Palacio de Miraflores”. <http://www.revolucionomuerte.org/index.php/discursos/discursos-comandante-hugo-chavez/10-lea-el-texto-integro-del-discurso-del-comandante-chavez-en-cadena-nacional-del-8-de-diciembre-de-2012>, acceso el 16.08.15

———. (2011). “Discurso del Presidente Chávez en la Universidad Nacional de La Plata el 31 de marzo de 2011”. <http://www.revolucionomuerte.org/index.php/discursos/discursos-comandante-hugo-chavez/164-discurso-integro-del-comandante-chavez-en-la-universidad-nacional-de-la-plata>, acceso el 16.08.15.

Correa, Rafael. (2007). “Discurso de Posesión de Rafael Correa Delgado como Presidente Constitucional de la República del Ecuador el 15 de enero de 2007”. <http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/Posesion-Presidente-2007.pdf>, acceso el 14.10.15.

CVHM (Corredor de Vida Chiles Mataje). (2011). “Pasa la Voz. Primer Boletín Informativo del Corredor de Vida Chile Mataje”. Carchi: Ecuador.

Declaración de Cartagena sobre Refugiados. (1984). “Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”. Colombia. <https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf>, acceso el 23.07.17.

DNP-SENPLADES. (2018). *Versión 2.0. Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Fundación Altrópico. (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016-2019. Parroquia de Alto Tambo”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860031630001\\_PDO\\_T%20Parroquial%20Alto%20Tambo%20%202016-2019%206\\_30-10-2015\\_14-22-00.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860031630001_PDO_T%20Parroquial%20Alto%20Tambo%20%202016-2019%206_30-10-2015_14-22-00.pdf), acceso el 23.02.18.

———. (2015a). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016-2019. Parroquia de Tululbí”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860029570001\\_PDO\\_T%20Parroquial%20Tululbi%202016-2019\\_30-10-2015\\_14-26-12.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860029570001_PDO_T%20Parroquial%20Tululbi%202016-2019_30-10-2015_14-26-12.pdf), acceso 28.02.18.

Fundación María Luisa Gómez de la Torre. Instituto de Desarrollo Local. (2011). “Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Montalvo del Cantón Rioverde de la Provincia de Esmeraldas”. Disponible en: <http://gadpmontalvo.gob.ec/esmeraldas/wp-content/uploads/2014/10/PDOT-MONTALVO.pdf>, acceso 04.03.18.

- GAD Anchayacu (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Anchayacu). (2015). “Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Anchayacu 2015-2019”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027520001\\_Actualización%20PDOT\\_ANCHAYACU\\_30-10-2015\\_09-49-04.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027520001_Actualización%20PDOT_ANCHAYACU_30-10-2015_09-49-04.pdf), acceso el 22.12.17.
- GAD Ancón de Sardinas (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Ancón de Sardinas). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Ancón de Sardinas. 2015”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860031550001\\_PDOT%20Ancón%20de%20Sardinas%202015\\_DIAGNÓSTICO\\_19-05-2015\\_12-59-39.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860031550001_PDOT%20Ancón%20de%20Sardinas%202015_DIAGNÓSTICO_19-05-2015_12-59-39.pdf), acceso el 27.02.18.
- GAD Atahualpa (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Atahualpa). (s.f). “Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de Atahualpa-Camarones 2015-2019”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860028090001\\_PDOT%20ATAHUALPA-2015-ENVIADO\\_15-08-2015\\_18-23-26.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860028090001_PDOT%20ATAHUALPA-2015-ENVIADO_15-08-2015_18-23-26.pdf), acceso el 21.12.17.
- GAD Calderón (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Calderón). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Calderón. 2015-2019”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860032790001\\_ACTUALIZACIÓN%20PDOT\\_CALDERON\\_30-10-2015\\_13-59-28.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860032790001_ACTUALIZACIÓN%20PDOT_CALDERON_30-10-2015_13-59-28.pdf), acceso el 27.02.18.
- GAD Chontaduro (Gobierno Autónomo Parroquial de Chontaduro). (2015). “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Chontaduro 2015-2025”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860030230001\\_DIAGNOSTICO%20CHONTADURO%202015\\_23-06-2015\\_09-4258.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860030230001_DIAGNOSTICO%20CHONTADURO%202015_23-06-2015_09-4258.pdf), acceso 01.03.18.
- GAD Chumundé (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chumundé). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Parroquia Chumundé 2015-2019”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860019500001\\_Actualización%20PDOT\\_CHUMUNDÉ\\_30-10-2015\\_12-53-52.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860019500001_Actualización%20PDOT_CHUMUNDÉ_30-10-2015_12-53-52.pdf), acceso 03.03.18.
- GAD Maldonado (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Maldonado). (2015). “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Maldonado 2015-2019”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860014970001\\_FINAL%20MALDONADO%202015\\_30-10-2015\\_18-04-57.PDF](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860014970001_FINAL%20MALDONADO%202015_30-10-2015_18-04-57.PDF), acceso el 02.01.18.
- GAD San Lorenzo (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Lorenzo del Pailón). (2013). “Actualización del PDOT aplicado al Cantón San Lorenzo”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860000670001PDOT%20SAN%20LORENZO\\_16-11-2014.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860000670001PDOT%20SAN%20LORENZO_16-11-2014.pdf), acceso el 23.02.18.
- GAD San Francisco de Ónzole (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Francisco de Ónzole). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Francisco de Ónzole. 2015-2019”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860017640001\\_Actualización%20PDOT\\_SAN\\_Francisco\\_de\\_Ónzole\\_30-10-2015\\_12-53-52.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860017640001_Actualización%20PDOT_SAN_Francisco_de_Ónzole_30-10-2015_12-53-52.pdf), acceso el 27.02.18.

lización%20PDOT\_SAN%20FRANCISCO%20DE%20ONZOL\_30-10-2015\_10-08-34.pdf/, acceso el 02.01.18.

GADSanto Domingo de Ónzole (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Santo Domingo de Ónzole). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 2015-2019”. ([http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027790001\\_Actualización%20PDOT\\_SANTO%20DOMINGO%20DE%20ONZOLE\\_30-10-2015\\_10-35-55.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027790001_Actualización%20PDOT_SANTO%20DOMINGO%20DE%20ONZOLE_30-10-2015_10-35-55.pdf)), acceso el 21.12.18.

GADTelembí (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Telembí). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Telembí - Cantón Eloy Alfaro. 2015-2019”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027950001\\_PDO\\_T%20GAD%20TELEMBI%202015-2019\\_30-10-2015\\_20-18-48.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027950001_PDO_T%20GAD%20TELEMBI%202015-2019_30-10-2015_20-18-48.pdf), acceso el 21.12.17.

GAPBorbón (Gobierno Autónomo Parroquial Borbón). (2015). “Actualización Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Parroquial Borbón. 2015-2019”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860019260001\\_ACTUALIZACION%20PDOT%20BORBON%202015%202019\\_01-11-2015\\_01-34-10.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860019260001_ACTUALIZACION%20PDOT%20BORBON%202015%202019_01-11-2015_01-34-10.pdf), acceso el 22.12.17.

GAPLagarto (Gobierno Parroquial de Lagarto) (s.f). “Diagnóstico”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860016080001\\_PDyOT%20-%20GAD%20PARROQUIA%20LAGARTO\\_14-10-2015\\_07-45-30.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860016080001_PDyOT%20-%20GAD%20PARROQUIA%20LAGARTO_14-10-2015_07-45-30.pdf), acceso 03.03.18.

GAPLuis Vargas Torres. (Gobierno Autónomo Parroquial Luis Vargas Torres). (s.f). “Actualización del diagnóstico del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Luis Vargas Torres. 2015” (s/f). Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860028250001\\_Diagnostico%20Luis%20Vargas%20Torres%20mayo%2015\\_15-05-2015\\_19-43-21.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860028250001_Diagnostico%20Luis%20Vargas%20Torres%20mayo%2015_15-05-2015_19-43-21.pdf), acceso el 20.12.17.

GAPMataje (Gobierno Autónomo Parroquial de Mataje). (s/f). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Mataje”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860029220001\\_DIAGNOSTICO%20PDOT%20Mataje%20%202015%20vpreliminar\\_24-06-2015\\_17-52-54.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860029220001_DIAGNOSTICO%20PDOT%20Mataje%20%202015%20vpreliminar_24-06-2015_17-52-54.pdf), acceso el 28.02.18.

GAPTambillo (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tambillo). (s/f). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Tambillo. 2015”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860031470001\\_PDOT%20Tambillo%202015\\_DIAGNOSTICO\\_19-05-2015\\_13-0419.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860031470001_PDOT%20Tambillo%202015_DIAGNOSTICO_19-05-2015_13-0419.pdf), acceso 24.02.18.

GAPTimbiré (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Timbiré). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Timbiré. 2015-2025.”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860015270001\\_PDO\\_T+FINAL+2015\\_12-08-2015\\_15-16-01.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860015270001_PDO_T+FINAL+2015_12-08-2015_15-16-01.pdf), acceso el 23.02.18.

- GAP Urbina (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Urbina). (2015). "Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Fase de Diagnóstico. Versión Preliminar". Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860030310001\\_DOCUMENTO%20PRELIMINAR%20DEL%20DIAGNOSTICO%20DE%20LA%20PARROQUIA%20URBINA\\_15-05-2015\\_12-40-42.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860030310001_DOCUMENTO%20PRELIMINAR%20DEL%20DIAGNOSTICO%20DE%20LA%20PARROQUIA%20URBINA_15-05-2015_12-40-42.pdf), acceso el 01.03.18.
- GADPEsmaldas (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas). (2015). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADP Esmeraldas 2015-2025*. Esmeraldas: Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y Programa de Articulación de Redes Territoriales (ART) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- . (2011). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADP Esmeraldas*. Esmeraldas: Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y Programa de Articulación de Redes Territoriales (ART) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Gobierno de la República del Ecuador. (2018). *Política de Defensa, Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte*. Quito: Instituto Geográfico Militar.
- IC Magazine. (2017). "La corte dicta la sentencia en el primer juicio de 'derechos de la naturaleza' del mundo". Disponible en <https://intercontinentalcry.org/es/la-corte-dicta-la-sentencia-en-el-primer-juicio-de-derechos-de-la-naturaleza-del-mundo22/>, acceso el 10.07.18.
- INEC. (2010). "Fascículo provincial. Esmeraldas". Disponible en: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/esmeraldas.pdf>, acceso el 28.03.18.
- INEC. (2019). "Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. ESPAC 2018". Disponible en: [http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_agropecuarias/espac/espac-2018/Presentacion%20de%20principales%20resultados.pdf](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac-2018/Presentacion%20de%20principales%20resultados.pdf) acceso el 07.07.19.
- . (2017). "Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. ESPAC 2016". Disponible en: [http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_agropecuarias/espac/espac-2016/Presentacion%20ESPAC%202016.pdf](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac-2016/Presentacion%20ESPAC%202016.pdf), acceso el 07.07.19.
- . (2015). "Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. ESPAC 2014". Disponible en: [http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_agropecuarias/espac/espac\\_2014-2015/2014/Presentacion%20de%20resultados%20ESPAC\\_2014.pdf](http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_agropecuarias/espac/espac_2014-2015/2014/Presentacion%20de%20resultados%20ESPAC_2014.pdf), acceso el 07.07.19.
- Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto. (2017). "Medidas cautelares para protección de comunidad étnica". Colombia.
- Kirchner, Cristina. (2007). "Discurso pronunciado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 2007". <http://www.casarsada.gob.ar/informacion/archivo/16462-blank-35472369>, acceso el 15.08.15.
- Maduro, Nicolás. (2013). "Discurso del Presidente Nicolás Maduro en la jura ante la Asamblea Nacional el 24 de abril de 2013".

<http://www.revolucionomuerte.org/index.php/discursos/discursos-de-nicolas-maduro/502-lea-el->, acceso el 16.10.15.

- MAE. (2016). *Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030*. Quito: Ministerio del Ambiente del Ecuador.
- . (2015). *Estrategia de Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador*. Quito: Ministerio de Ambiente de Ecuador.
- MAGAP. (2016). *La política agropecuaria ecuatoriana. Hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025. I Parte*. Quito: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
- MCDS. (2017). *Informe de Desarrollo Social 2007-2017*. Quito: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
- MCPEC (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad). (2011). “Agendas para la Transformación Productiva Territorial: Provincia del Carchi”. Quito: OCE-RIMISP.
- . (2011a). “Agendas para la Transformación Productiva Territorial: Provincia de Esmeraldas”. Quito: OCE-RIMISP.
- . (2011b). “Agendas para la Transformación Productiva Territorial: Provincia de Sucumbíos”. Quito: OCE-RIMISP.
- Ministerio de Defensa. (2013). “Documentos de nuestra defensa. Agenda Política de la Defensa 2013-2017”. *Revista Patria. Análisis políticos de la defensa. Dossier Vigilancia Global*. Vol. 1. Quito: Ministerio de Defensa Nacional. [154-163].
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (2004). “Estudio de caracterización de la Zona de Integración Fronteriza”. Quito.
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. (2008). *Política Nacional en Materia de Refugio*. Quito.
- Morales, Evo. (2014). “Discurso del Presidente Evo Morales el 23 de enero de 2014 en la Asamblea Legislativa Plurinacional”. <http://abpnoticias.org/index.php/menu-styles/patria-grande/bolivia/613-hemos-recuperado-la-patria-enfatizo-evo-morales-tras-cuatro-anos-de-estado-plurinacional>, acceso el 19.10.15.
- OEA. (2003). “Declaración sobre seguridad en las Américas. Conferencia Especial sobre Seguridad”. México: Organización de los Estados Americanos.
- Paesyan Cía. Ltda. Consultores. (2015a). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Colón Eloy de María”. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860023020001\\_PDO\\_T%20COLON%20ELOY%20DEL%20MARIA\\_30-10-2015\\_21-31-13.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860023020001_PDO_T%20COLON%20ELOY%20DEL%20MARIA_30-10-2015_21-31-13.pdf), acceso el 21.02.18.
- Paesyan Cía. Ltda. Consultores. (2015b). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Carondelet”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860025740001\\_DOCUMENTO%20FINAL%20PDOT%20CARONDELET\\_29-10-2015\\_19-44-22.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860025740001_DOCUMENTO%20FINAL%20PDOT%20CARONDELET_29-10-2015_19-44-22.pdf), acceso el 27.02.18.

- Paesyan Cía. Ltda. Consultores. (2015c) “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Rural 5 de Junio (Wimbí)”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860031390001\\_Documento%20Preliminar%20del%20Diagnostico%20Parroquia%205%20de%20Junio\\_15-05-2015\\_00-01-19.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860031390001_Documento%20Preliminar%20del%20Diagnostico%20Parroquia%205%20de%20Junio_15-05-2015_00-01-19.pdf), acceso el 23.02.18.
- Parroquia Rural Concepción. (s.f). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural Concepción”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdiagnostico/0860028920001\\_DIAGNOSTICO%20PD%20Y%20OT%20%20GAD%20CONCEPCION\\_14-05-2015\\_19-07-35.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/0860028920001_DIAGNOSTICO%20PD%20Y%20OT%20%20GAD%20CONCEPCION_14-05-2015_19-07-35.pdf), acceso 28.02.18.
- Parroquia Rural Pampanal de Bolívar. (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027600001\\_PDO\\_T%20%20PAMPANAL%20DE%20BOLIVAR\\_31-10-2015\\_00-26-15.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860027600001_PDO_T%20%20PAMPANAL%20DE%20BOLIVAR_31-10-2015_00-26-15.pdf), acceso el 20.02.18.
- Prefectura del Carchi. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Carchi. Actualización 2015-2019. Disponible en [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0460000130001\\_PDO\\_T%20CARCHI%202015%20-%202019%20ACTUALIZADO%20opt\\_14-08-2015\\_22-24-17.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0460000130001_PDO_T%20CARCHI%202015%20-%202019%20ACTUALIZADO%20opt_14-08-2015_22-24-17.pdf), acceso el 10.01.2019.
- Presidencia de la República. Unidad de Análisis Político. (2009). “Conflicto Ecuador-Colombia”. Quito.
- . (2008). “Informe sobre la situación de los cantones fronterizos en la provincia de Esmeraldas”. Guayaquil.
- República Bolivariana de Venezuela. (2004). *Ley Orgánica de Fronteras*. Caracas: Asamblea Nacional.
- Secretaría Técnica de Plan Ecuador. (2010). “Minería ilegal en la Comuna Río Santiago Cayapas, Esmeraldas”. Quito.
- . (2009). “La inversión pública y la cooperación en la Frontera Norte”. PPT. Quito.
- . (2008). “Plan Ecuador, Hacia la seguridad humana con paz y desarrollo”. <http://www.resdal.org/ultimos-documentos/plan-ecuador07.pdf>, acceso el 18.11.15.
- SENAGUA. (2010). “Informe técnico. Muestreo de la calidad del agua en la cuenca del río Cayapas, Provincia de Esmeraldas, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo”. Quito: Secretaría Nacional del Agua.
- SENPLADES. (2015). *Agenda zonal. Zona 1- Norte. Provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbios. 2013-2017*. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
- SENPLADES-DNP/PFP. (2014). *Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 2014-2022*. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-Departamento Nacional de Planeación/Plan Fronteras para la Prosperidad.

- SENPLADES, Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, SENAGUA y Banco del Estado. (2014). “Agua potable y alcantarillado para erradicar la pobreza en el Ecuador”, disponible en <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/FOLLETO-Agua-SENPLADES.pdf>, acceso el 01.12.2018.
- SENPLADES-GADMRioverde (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rioverde). (2015). “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rioverde 2015-2019”. Disponible en: [http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL\\_SNI/data\\_sigad\\_plus/sigadplusdocumentofinal/0860001560001\\_PDY\\_OT%20RIOVERDE%202015-2019\\_15-03-2015\\_18-01-07.pdf](http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/0860001560001_PDY_OT%20RIOVERDE%202015-2019_15-03-2015_18-01-07.pdf), acceso 01.03.18.
- SETECI. (2011). “Diagnóstico de la cooperación y resultados preliminares de la evaluación en frontera norte”. *Revista Cooperamos. Secretaría Técnica de Cooperación Internacional* (3). [19-23].
- UASB. 2017. “Datos sobre deforestación. Esmeraldas, Ecuador y el mundo”. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- UNASUR. (2014). *Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. Reglamento General de UNASUR*. Quito: Unión de Naciones Suramericanas.
- . (2012). “Declaración sobre Suramérica como zona de Paz”. Disponible en: <https://www.unasursg.org/images/descargas/ESTATUTOS%20CONSEJOS%20MINISTERIALES%20SECTORIALES/ESTATUTO%20CONSEJO%20DE%20DEFENSA.pdf>, acceso el 25.06.15.
- . (2008). “Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR”. Disponible en: <https://www.unasursg.org/images/descargas/ESTATUTOS%20CONSEJOS%20MINISTERIALES%20SECTORIALES/ESTATUTO%20CONSEJO%20DE%20DEFENSA.pdf>, acceso el 25.06.15.
- UNASUR-COSIPLAN. (2017). *Cartera de proyectos 2014*. Buenos Aires: Montevideo: Unión de Naciones Suramericanas-Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.
- . (2014). *Cartera de proyectos 2014*. Montevideo: Unión de Naciones Suramericanas-Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.
- . (2013). *Cartera de proyectos 2013*. Chile: Unión de Naciones Suramericanas-Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.
- UNICEF. (2018). “Cifras de planificación y estimación de la población necesitada en Ecuador”. Documento PP. Quito: Sistema de Naciones Unidas.
- UNODC. (2016). “Tendencias del cultivo de coca en el Ecuador”. Quito: United Nations Office on Drugs and Crime.

## Enlaces digitales

- Aceite de palma. <http://www.aceitedepalma.org/rspo>, acceso el 13.03.18.
- ACNUR. (2012). <http://www.acnur.org/>, acceso el 12.12.17.

AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador). “La Fruit Trading Co. y Esmeraldas”. Disponible en: <http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=19&art=127>, acceso el 18.11.16.

ANCUPA (Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana). <http://www.ancupa.com>, acceso el 02.07.17.

Banco Central del Ecuador. Estadísticas económicas. <https://www.bce.fin.ec>, acceso el 29.11.17.

Banco Mundial. Estadísticas. <https://datos.bancomundial.org/indicador>, acceso el 16.07.18.

CEPAL. CEPALSTAT. Bases de Datos. <http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=1910&idioma=e>, acceso el 08.08.18.

CI (Conservación Internacional). <http://conservation.org.ec/choco-ecuatoriano/>, acceso el 03.05.2018.

CODENPE (Consejo Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador). <http://www.codenpe.gob.ec>, acceso el 02.01.2016.

CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). <https://conaie.org>, acceso el 14.03.17.

COSIPLAN-UNASUR. Sistema de información de proyectos. <http://www.iirsa.org/proyectos/>, acceso el 01.04.2018.

EJAtlas. Environmental Justice Atlas. <https://ejatlas.org>, acceso el 06.07.16.

ENEMDU. Encuesta Nacional de empleo, desempleo y subempleo. [www.ecuadorencifras.gob.ec](http://www.ecuadorencifras.gob.ec), acceso el 07.04.18.

FEDAPAL (Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de Origen Nacional). <http://fedapal.org/>, acceso el 03.05.18.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). <http://www.fao.org/faostat/>, acceso el 21.04.16.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Tola. <http://latola.gob.ec/index.php/ct-menu-item-3/ct-menu-item-9>, acceso el 22.02.18.

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/>, acceso el 20.04.18.

INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada). “Información general de la República del Ecuador”. [https://www.inocar.mil.ec/docs/derrotero/derrotero\\_cap\\_I.pdf](https://www.inocar.mil.ec/docs/derrotero/derrotero_cap_I.pdf), acceso el 31.07.15.

INDUPALMA (Industrial Agraria La Palma). <http://www.indupalma.com>, acceso el 03.12.15.

Mancomunidad del Norte. <https://mancomunidadnorte.gob.ec>, acceso el 14.01.19.

MAE (Ministerio del Ambiente de Ecuador). <http://www.ambiente.gob.ec>, acceso el 20.16.15.



OEA (Organización de los Estados Americanos). <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec501s.asp>, acceso el 12.02.18.

OLEANA. <https://www.oleana.ec>, acceso el 11.10.2017.

SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). <http://www.planificacion.gob.ec/>, acceso el 20.05.15.

SRI (Servicio de Rentas Internas). <http://www.sri.gob.ec/web/guest/visores-tributarios>, acceso el 23.05.18.

## **Medios de comunicación**

Ecuadorinmediato. (2015). “Sector agrícola generará 244 mil empleos en 2015”. Disponible en: [http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news\\_user\\_view&id=2818779936](http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818779936), acceso el 19.04.15.

El Comercio. (2018). “1800 soldados vigilan cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas”. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/actualidad/soldados-sanlorenzo-eloyalfaro-esmeraldas-frontera.html>, acceso el 12.06.18.

———. (2016). “Los Épera fomentan el intercambio binacional”. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/tendencias/epera-nacionalidadesindigenas-ecuador-colombia-intercultural.html>, acceso el 10.04.18.

———. (2013) “La maquinaria ilegal sigue atrayendo oro”. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/maquinaria-ilegal-sigue-extrayendo-oro.html>, acceso el 13.05.15.

———. (2011). “Correa dice que Ecuador endureció requisitos para conceder estatus de refugiado”. Disponible en: <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/correa-dice-que-ecuador-endurecio.html>, acceso el 10.05.17.

———. (2010). “Los mineros del norte de Esmeraldas dejaron ingresar a las autoridades”. Disponible en: <http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/mineros-del-norte-esmeraldas-dejaron.html>, acceso el 14.11.16.

El Telégrafo. (2015). “Tulcán fue declarado como zona deprimida por disminución del comercio”. Disponible en: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/tulcan-fue-declarado-como-zona-deprimida-por-disminucion-del-comercio>, acceso el 12.11.16.

El Universo. (2008). Presidente Correa critica el Plan Colombia. Disponible en: <https://www.eluniverso.com/2008/10/23/0001/8/43EFAABA726D4C26BCA306936944FC75.html>, acceso el 15.04.16.

Gracia, Manuel. (2016). “Cientos de peces aparecen también en el río, en Viche”. Disponible en: <http://www.esmeraldasnews.com/noticias/item/783-cientos-de-peces-muertos-aparecen-tambien-en-el-rio-en-viche>, acceso el 05.07.16.

La Hora. (2011). “Crean la misión Luis Vargas Torres”. Disponible en: <https://lahora.com.ec/noticia/1101190558/crean20la20misic3b3n20e28098luis20vargas20torrese28280>, acceso el 15.12.14.

- La Nación. (2007). “Gobierno de Correa presentó Plan Ecuador”. Disponible en <https://www.nacion.com/el-mundo/gobierno-de-correa-presento-plan-ecuador/UON7G7JOOFH5FJTFP6CHZMEURA/story/>, acceso el 13.03.17
- Miller, Todd. 2013. “War on the border”. *New York Times*. [http://www.nytimes.com/2013/08/18/opinion/sunday/war-on-the-border.html?pagewanted=all&\\_r=1](http://www.nytimes.com/2013/08/18/opinion/sunday/war-on-the-border.html?pagewanted=all&_r=1), acceso el 16.07.16.
- Plan V. (2018). “El legado del correato en armamento y gasto militar”. Disponible en: <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/el-legado-del-correato-armamento-y-gasto-militar>, acceso el 13.11.18.
- . (2018a). “San Lorenzo: un carro bomba de madrugada recuerda la violencia constante”. Disponible en <http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/san-lorenzo-o-la-vida-el-fin-del-mundo>, acceso el 12.12.18.
- Periodistas sin Cadenas, Liga contra el Silencio, OCCRP, Forbidden Stories. (2018). “Frontera Cautiva”. *Plan V*. Disponible en: <http://www.planv.com.ec/fronteracautiva/index.html>, acceso el 05.01.19.

## **Anexos**

---

## **Anexo 1. Cuestionario para entrevista a profundidad**

¿Cuáles son, desde su opinión, los principales problemas que enfrenta la región fronteriza de Esmeraldas?

¿Cuáles considera usted serían las políticas más importantes que el Estado ecuatoriano ha aplicado en los últimos diez años para enfrentar los problemas que soporta la frontera norte y en especial el territorio fronterizo de Esmeraldas?

La Constitución del Ecuador del 2008 contempla un tratamiento preferencial a los cantones asentados en la franja fronteriza de 40 km próximos a los límites territoriales (Art. 249), la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones fronterizas y de refugiados (Art. 423, § 5) y el mantenimiento y desarrollo de relaciones de cooperación entre los pueblos divididos por fronteras internacionales (Art. 57, § 18). ¿En qué medida estos artículos han sido aplicados?, ¿en qué políticas se han concretado?

Desde hace aproximadamente 1995 en el norte de Esmeraldas, en áreas cercanas a los límites internacionales con Colombia se han consolidado los cultivos de palma africana. ¿Cuál es su opinión respecto al impulso de esta actividad en un territorio fronterizo?

A partir del 2007 aproximadamente y con más fuerza desde 2011, en el norte de Esmeraldas se ha desarrollado la minería de oro. ¿Cuáles son las consecuencias de este desarrollo sobre un territorio fronterizo?

¿Conoce usted la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, conocida como IIRSA? Si la respuesta es afirmativa, podría señalar, para el caso de Esmeraldas ¿cuáles serían según su opinión las oportunidades que traería consigo la IIRSA? y ¿cuáles podrían ser las amenazas?

¿Existen cuestionamientos entre la población del norte de Esmeraldas frente a los cultivos de palma africana o frente a la minería? ¿Quiénes cuestionan y cuáles son sus principales reivindicaciones?

¿Conoce usted de propuestas que planteen un manejo diferente del territorio fronterizo de Esmeraldas? ¿Considera que estas propuestas pueden aportar a solucionar los problemas que enfrenta la región fronteriza del norte de Esmeraldas?